



LOS VALORES DE LA FAMILIA

ENTRE EL NEOLIBERALISMO Y EL
NUEVO SOCIAL-CONSERVADURISMO

Melinda Cooper

traficantes de sueños

© 2017 Melinda Cooper

© 2020, de esta edición, Traficantes de Sueños.

Licencia Creative Commons: Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

Publicado en español por acuerdo con Casanovas & Lynch Literary Agency.

Edición original: *Family Values. Between Neoliberalism and the New Social Conservatism*,
Cambridge (EEUU), Zone Books, 2017.

Primera edición en castellano: Marzo de 2022.

Título: Los valores de la familia. Entre el neoliberalismo y el nuevo social-conservadurismo

Autora: Melinda Cooper

Traducción: Elena Fernández-Renau Chozas

Maquetación y diseño de cubierta: Traficantes de Sueños

Edición:

Traficantes de Sueños

C/ Duque de Alba, 13. 28012, Madrid.

Tlf: 915320928. [e-mail:editorial@traficantes.net]

Impresión:

Cofás artes gráficas

ISBN: 978-84-124538-4-3

Depósito legal: M-8189-2022

LOS VALORES DE LA FAMILIA

ENTRE EL NEOLIBERALISMO Y EL
NUEVO SOCIAL-CONSERVADURISMO

MELINDA COOPER

TRADUCCIÓN:
ELENA FERNÁNDEZ-RENAU CHOZAS

traficantes de sueños

ÍNDICE

1. Entre el neoliberalismo y el nuevo social-conservadurismo	11
2. La crisis moral de la inflación: neoliberalismo, neoconservadurismo y la desaparición del salario familiar	31
AFDC, asistencia social y salario familiar estadounidense	39
Moynihan, la izquierda y el salario familiar negro	42
Nixon y el salario familiar negro: el exorcismo del AFDC	48
El rechazo al salario familiar: el neoliberalismo y el neoconservadurismo entran a escena	51
El auge del neoconservadurismo: inflación, bienestar y crisis moral	54
Neoconservadurismo y neoliberalismo	61
Transiciones	69
3. La ética de la responsabilidad familiar: reinventar las leyes de pobres	73
La responsabilidad familiar y las leyes isabelinas de pobres	79
Promover la familia afroamericana: la reinención de las leyes de pobres después de la emancipación	84
La edad de oro: responsabilidad familiar y libre mercado	88
Crisis de la familia en la edad de oro	93
De la responsabilidad familiar privada a la responsabilidad pública de la familia	95
Reagan en California: recuperar las leyes de responsabilidad familiar	104
La federalización de las reformas de la asistencia social del gobernador Reagan	107
La reforma de la asistencia social de Clinton: entre el neoliberalismo y el nuevo social-conservadurismo	114
Los nuevos demócratas: entre el neoliberalismo y el comunitarismo	116
Volver a legitimar el derecho familiar	122
4. El retorno de la riqueza heredada: la inflación de activos y la familia económica	127
Clase, inflación y la erosión de la riqueza heredada	134
Financiarización: inflación del precio de los activos y el retorno de la riqueza heredada	141

Clinton, la vivienda en propiedad y la «democratización del crédito»	150
Vivienda en propiedad, normatividad y New Deal	154
Democratizar el crédito: más allá de la norma	160
Minorías contra el impuesto de transmisión de bienes:	
democratizar la revuelta del contribuyente	165
El matrimonio homosexual y el impuesto de transmisión de bienes	169
5. El precio de la promiscuidad: la Escuela de Chicago se enfrenta al sida	179
El neoliberalismo contra el seguro social	187
Desinstitucionalización: cómo el neoliberalismo absorbió	
a la Nueva Izquierda	193
Las políticas de autocuidado: el sida en la era Reagan	201
Familia, Iglesia y beneficencia	206
<i>Volenti non fit iniuria</i> : el sida y el riesgo no asegurable	213
Matrimonio entre personas del mismo sexo y la ética	
de la responsabilidad familiar	222
6. In loco parentis: capital humano, deuda estudiantil y la lógica de la inversión familiar	227
Vicisitudes de la teoría del capital humano	231
El movimiento estudiantil: protestas contra el capital humano	
e <i>in loco parentis</i>	239
Reagan y las protestas estudiantiles de Berkeley	244
Democratizar el crédito: restaurar la responsabilidad familiar	252
<i>In loco parentis redux</i>	264
7. Teología de lo social: el auge de la asistencia social basada en la fe	271
El auge de la asistencia social basada en la fe	279
La Gran Sociedad y sus descontentos: la prehistoria de la asistencia social	
basada en la fe	285
Estructuras de mediación: un programa para la asistencia social	
basada en la fe	297
La larga marcha por las instituciones	307
La nueva libertad religiosa: los litigios cristianos de interés público	314
Elección caritativa: del litigio a la legislación	320
Conclusión	325
Agradecimientos	329

I

ENTRE EL NEOLIBERALISMO Y EL NUEVO SOCIAL-CONSERVADURISMO

En el mundo occidental, la familia se ha visto radicalmente alterada, casi destruida para algunos, por los acontecimientos de las tres últimas décadas.

Gary Becker, *Tratado sobre la familia*.

LA HISTORIA DE LA FAMILIA es la de una crisis perpetua. Para los diferentes sesgos políticos, sin embargo, esta crisis se presenta de distintas formas, a veces incluso contradictorias. Para el social-conservadurismo de derecha e izquierda, heredero del neoconservadurismo de la década de los años setenta, los rasgos de la crisis familiar parecen haber cambiado muy poco en las últimas décadas. La familia estadounidense parece seguir sufriendo una epidemia generalizada de «ausencia de padre».¹ Mujeres jóvenes y empobrecidas, sobre todo afroamericanas y latinas, siguen reproduciéndose fuera del matrimonio, en la confianza de que el Estado de bienestar se ocupe de su descendencia. En los años noventa, la teoría social complicó algo su historia al señalar que la crisis de la familia afroamericana, casi mítica por su dilatación en el tiempo (diagnosticada con triste fama ya en 1965 por Daniel Patrick Moynihan), se había extendido también a la clase media blanca, alentando a generaciones de mujeres jóvenes a renunciar a la estabilidad del matrimonio en favor del narcisismo profesional.² Más recientemente incluso, esas corrientes de pensamiento han señalado que el matrimonio en sí mismo se había convertido en una marca de clase en la sociedad estadounidense, en un privilegio que parecía reservado para la clase media formada en la universidad y, quizás en sentido contrario, en

¹ En este y en los siguientes puntos, véase Judith Stacey, *In the Name of the Family: Rethinking Family Values in the Postmodern Age*, Boston (MA), Beacon Press, 1996.

² Daniel Patrick Moynihan, «The Moynihan Report: The Negro Family: The Case for National Action», en Lee Rainwater y William L. Yancey, *The Moynihan Report and the Politics of Controversy*, Cambridge (MA), MIT Press, 1967 [1965], p. 93. Sobre la supuesta crisis de la familia blanca de clase media, véase Barbara Dafoe Whitehead, «Dan Quayle Was Right», *Atlantic Monthly*, abril de 1993, donde escribe sobre la «izquierda» comunitaria; y Charles Murray, «The Coming White Underclass», *Wall Street Journal*, 29 de octubre de 1993, sobre la «derecha» conservadora libertaria.

una práctica que debería fomentarse como atajo para la movilidad social.³ A pesar de todas las variaciones y matices, este discurso ha cambiado muy poco desde que se planteó por primera vez en los años setenta. Si bien ha inspirado cuatro años de reforma de la asistencia social en un sentido punitivista, quienes lo promovieron siguen culpando al Estado de bienestar de la Gran Sociedad de lo que entienden como el continuo declive de la familia estadounidense.

El discurso neoliberal siempre ha tenido una relación más compleja con el relato de la crisis familiar. No resulta exagerado afirmar que el activismo político de la corriente neoliberal estadounidense en los años setenta se inspiró en la idea de transformar las estructuras familiares. Con gran acierto, Gary Becker, al que Michel Foucault señaló como el economista más destacado de la Escuela de Chicago, comprendió que la crisis del salario familiar fordista sería el acontecimiento clave de su tiempo, y que sus repercusiones se apreciarían en todos los ámbitos: en el cambio en las relaciones raciales, la recomposición del mercado de trabajo y en los cambiantes imperativos del bienestar social.⁴ Efectivamente, mientras duró, el salario familiar fordista no solo sirvió de mecanismo para la normalización de las relaciones de género y sexuales, sino que también se situó en el centro de la organización del trabajo, la raza y la clase de mediados de siglo: definió a los hombres afroestadounidenses, excluyéndoles del salario masculino proveedor de la familia, y a las mujeres afroestadounidenses, relegándolas al trabajo doméstico y agrícola de servicio en hogares blancos. La respuesta neoliberal a la crisis de la familia fordista se puede describir, en primera instancia, como adaptativa y acomodaticia. Evitando el moralismo manifiesto del social-conservadurismo, al neoliberalismo le interesaba englobar el trabajo recién liberado de las antiguas amas de casa dentro de un mercado más amplio de servicios domésticos y se propuso idear nuevos mecanismos para poner precio a, por ejemplo, la discriminación racial o el sexo no seguro. Pareciera que no existe forma de liberación social que la economía neoliberal no pueda incorporar en el nuevo mercado como servicio contractual o como crédito de alto riesgo.

Aun así, sería un error pensar que el neoliberalismo está menos comprometido con el valor de la familia que el social-conservadurismo. «Dado

³ Sobre la «brecha matrimonial» entre la población estadounidense blanca con ingresos más bajos, véase Charles A. Murray, *Coming Apart: The State of White America, 1960-2010*, Nueva York, Crown Forum, 2012. Para una perspectiva social-progresista, pero al mismo tiempo comunitaria sobre la brecha matrimonial, véase Andrew J. Cherlin, *Labor's Love Lost: The Rise and Fall of the Working Class Family in America*, Nueva York, Russell Sage Foundation, 2014.

⁴ Gary S. Becker, *Treatise on the Family*, Chicago (IL), University of Chicago Press, 1981, p. 1 [ed. cast. *Tratado sobre la familia*, trad. por Carlos Peraíta de Grado, Madrid, Alianza Editorial, 1987].

que la familia es el pilar de toda sociedad civil», apunta Gary Becker, tenemos motivos de peso para preocuparnos por los «inmensos cambios en la estabilidad y en la composición de las familias en las últimas décadas». ⁵ Al neoliberalismo le preocupa especialmente el enorme coste social derivado de la ruptura de la estable familia fordista: los costes en los que, por ejemplo, incurren las mujeres que optan por el divorcio de mutuo acuerdo, las mujeres que se reproducen fuera del matrimonio o las que mantienen relaciones sexuales sin protección y sin tener seguro privado; además del hecho de que estos costes recaen sobre el gobierno y el contribuyente, en lugar de sobre la familia privada. ⁶ Aunque están mucho más preparadas que el social-conservadurismo a la hora de adaptarse a los cambios en la naturaleza de las relaciones dentro de la familia, la economía neoliberal y la teoría jurídica anhelan una recuperación de la familia privada como fuente principal de seguridad económica y como alternativa integral al Estado de bienestar. Si durante las últimas décadas la reforma de la asistencia social estadounidense se ha centrado especialmente en la promoción del matrimonio y de la formación de una familia de manera responsable, ha sido gracias a la colaboración continua entre el neoliberalismo y el social-conservadurismo en este aspecto concreto.

En oposición al neoliberalismo y al social-conservadurismo, y a pesar del protagonismo de la familia en la política social contemporánea, cierta crítica desde la izquierda considera que el capitalismo neoliberal destruye por sí mismo la vida familiar. La idea de que las relaciones laborales, que introdujo la reforma neoliberal, han impedido de algún modo las obligaciones a largo plazo de amor y crianza es omnipresente en las teorías sociales de izquierdas que se interesan por los efectos de la modernidad tardía en las estructuras de la vida íntima. Cada cual a su manera, y con distintos grados de nostalgia, Anthony Giddens, Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, Elizabeth Beck-Gernsheim y Eva Illouz, señalan el carácter cada vez más efímero del amor en una era dominada por los contratos temporales y el empleo a voluntad. ⁷

⁵ Gary S. Becker y Guity Nashat Becker, *The Economics of Life: From Baseball to Affirmative Action to Immigration, How Real-World Issues Affect Our Everyday Life*, Nueva York, McGraw-Hill, 1996, p. 93.

⁶ *Ibidem*, pp. 95-102.

⁷ Antony Giddens, *The Transformation of Intimacy*, Cambridge Polity Press, 1992 [ed. cast. *La transformación de la intimidad: sexualidad, amor y erotismo en las sociedades modernas*, trad. por Benito Herrero Amaro, Madrid, Cátedra Teorema, 1998]; Ulrich Beck y Elizabeth Beck-Gernsheim, *The Normal Chaos of Love*, Cambridge, Polity Press, 2005 [ed. cast. *El normal caos del amor: las nuevas formas de relación amorosa*, trad. por Dorothee Schmitz, Barcelona, Paidós Ibérica, 2001]; Zygmunt Bauman, *Liquid Modernity*, Cambridge, Polity Press, 2000, pp. 89-90 [ed. cast. *Modernidad Líquida*, trad. por Mirta Rosenberg y Jaime Squirru, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 2003]; Eva Illouz, *Consuming the Romantic Utopia: Love and the Cultural Contradictions of Capitalism*, Berkeley (CA), University of California Press, 1997 [ed. cast. *El consumo de la utopía romántica*, trad. por

Sin embargo, el argumento más elaborado y que más se defiende a este respecto lo aporta el economista y político alemán Wolfgang Streeck, cuyo trabajo reciente reflexiona ampliamente sobre la que considera la relación causal entre los contratos de trabajo flexibles y la «familia flexible».⁸ A Streeck le preocupa el desmantelamiento de la relación laboral estándar de posguerra y sus consecuencias, la llamada familia fordista que consistía en un varón trabajador, una mujer y madre que se quedaba en casa y dos o más hijos o hijas. Tal y como él apunta, la seguridad económica de la época de posguerra se basaba en una estricta división sexual del trabajo que relegaba a las mujeres a las formas de trabajo peor pagadas y más precarias, indexaba el salario del trabajador fordista según el coste de mantener a una mujer y su descendencia. Streeck se pregunta cómo y por qué, en la década de 1970, esta arquitectura de seguridad económica se derrumbó tan rápido y por qué su declive generó tan poca oposición entre quienes tanto se beneficiaban de ella.

Al buscar una respuesta a esta pregunta, apunta que «la estructura familiar y social que la relación laboral estándar garantizaba en su día se había disuelto en un proceso de cambio realmente revolucionario. De hecho, parece que la familia flexible ha sustituido en gran medida a la familia fordista, del mismo modo que el trabajo flexible ha reemplazado al trabajo fordista, todo ello durante el mismo periodo y en todo el mundo occidental».⁹ Streeck defiende que la desestabilización del contrato matrimonial a largo plazo se dio poco tiempo antes, si bien suficiente, del desmantelamiento de la relación laboral fordista y que se puede interpretar como causante de esto último.¹⁰ La revolución en el derecho de familia y en las relaciones íntimas que se dio en la década de los 1970 —desde la introducción del divorcio amistoso hasta la creciente aceptación de la convivencia— destrozó la pura razón de ser del salario familiar fordista y llevó así a su progresiva desaparición en los años sucesivos. Si las mujeres dejaban de atarse a los hombres en relaciones a largo plazo de dependencia económica y si los hombres dejaban de estar obligados a cuidar de por vida a mujer e hijos, ¿quién quedaba entonces para defender esa gran institución fordista de la seguridad económica, el salario familiar?

María Victoria Rodil, Madrid, Katz, 2009]. El tono pasa de ser optimista en el trabajo de Giddens y los Becks a ser francamente nostálgico en el trabajo de Bauman e Illouz. [El llamado *at-will employment* (empleo a voluntad) es una figura recogida en el derecho laboral estadounidense, que permite que el empleador despidiera «a voluntad» al empleado por cualquier motivo y sin previo aviso siempre que el motivo no sea ilegal (por ejemplo, alegando la orientación sexual del trabajador). N. de la T.].

⁸ Wolfgang Streeck, «Flexible Employment, Flexible Families, and the Socialization of Reproduction» en Florian Coulmas y Ralph Lützel, *Imploding Populations in Japan and Germany: A Comparison*, Leiden, Brill, 2011, pp. 63-96.

⁹ *Ibidem*, p. 72.

¹⁰ *Ibidem*, p. 76.

En este punto, se hace patente el antifeminismo de Streeck. Al fin y al cabo, fue el feminismo quien primero cuestionó las formas legales e institucionales de la familia fordista al animar a las mujeres a buscar salarios independientes similares a los de los hombres y quien transformó el matrimonio en un contrato que puede resolverse a voluntad, para que dejara de ser una obligación no contractual a largo plazo. Con ello, las feministas (a las que imagina de clase media) les robaron a las mujeres (a las que imagina de clase trabajadora) la seguridad económica que aportaba casarse con un trabajador fordista.¹¹ Al debilitar la idea de que a los hombres se les debía pagar un salario lo suficientemente alto para mantener a mujer e hijos, el feminismo ayudó a que quienes gestionaban las empresas generalizaran el empleo precario y la flexibilidad en el lugar de trabajo, lo que terminó por comprometer la seguridad de cualquier persona contratada.

Sin adentrarse en el flagrante antifeminismo de Wolfgang Streeck, la obra de Luc Boltanski y Eve Chiapello, *El nuevo espíritu del capitalismo*, ofrece una crítica conceptual de la izquierda contracultural que lleva inevitablemente a las mismas conclusiones. Su revisión histórica de los movimientos sociales fordistas señala una incipiente fractura entre la izquierda productiva, centrada en construir y conservar la seguridad económica lograda por el consenso de posguerra, y lo que definen como la izquierda artística, a la que le interesa más criticar las normas y la seguridad predecible de la vida fordista.¹² Si la primera se puede equiparar en mayor o menor medida con el movimiento sindical y la antigua izquierda socialista, la segunda acogía a los nuevos integrantes de la izquierda: desde el feminismo y la liberación homosexual al movimiento estudiantil y la contracultura. Al distinguir así entre una buena política laboral (centrada en la seguridad económica y en la prevalencia de las relaciones sociales) y una mala política sexual (centrada en la liberación del mismo conjunto de relaciones sociales), Boltanski y Chiapello identifican el declive de la familia como el signo más visible de la inseguridad social del neoliberalismo. «Durante esos años de regresión social» escriben, la familia «se convirtió en una institución mucho más fluida y frágil, agravando la inseguridad laboral y la sensación general de incertidumbre [...] La búsqueda de la máxima flexibilidad en las empresas coincidió con una depreciación de la familia como factor de rigidez temporal y geográfica, por lo tanto [...] se recurrió a esquemas ideológicos similares para justificar la adaptabilidad en

¹¹ *Ibidem*, pp. 76-77. Para un agudo recordatorio de la continua precariedad económica de las mujeres bajo los regímenes de trabajo fordistas y posfordistas, véase Angela Mitropoulos, «Precari-us?» en *Mute: Precarious Reader*, Londres, Mute Publishing, 2005, pp. 12-19.

¹² Luc Boltanski y Eve Chiapello, *The New Spirit of Capitalism*, Nueva York, Verso, 2007, p. 190 [ed. cast. *El nuevo espíritu del capitalismo*, trad. por Alberto Riesco Sanz, Marisa Pérez Colina y Raúl Sánchez Cedillo, Madrid, Akal, 2002].

las relaciones laborales y la movilidad en la vida emocional».¹³ Igual que Streeck, Boltanski y Chiapello defienden que la izquierda artística sentó las bases para el asalto neoliberal a la seguridad económica y social al destruir su pilar más fundamental, la familia de posguerra. Implícitamente, su análisis postula la restauración de la familia fordista (o una versión revisada de la misma) como elemento necesario de la agenda renovada de la izquierda.

De algún modo resulta todavía más sorprendente encontrar esas reflexiones en el trabajo de Nancy Fraser, quien ha hecho tanto por destacar el papel del salario familiar en la configuración de la división sexual del trabajo característica del fordismo estadounidense. Aun así, el compromiso de Fraser con la distinción conceptual entre el reconocimiento social y la redistribución económica la sitúa en un aprieto similar al de Boltanski y Chiapello en lo que se refiere a la política sexual del capital.¹⁴ En su trabajo más reciente, Fraser acusa al feminismo de la segunda ola de haber colaborado con el neoliberalismo en sus esfuerzos por destruir el salario familiar. «¿Fue una mera coincidencia que el feminismo de la segunda ola y el neoliberalismo prosperaran a la par? ¿O hubo entre ellos algún tipo de afinidad perversa, subterránea y elegida?». ¹⁵ Fraser continúa respondiendo afirmativamente: «Nuestra crítica al salario familiar», escribe, «aporta ahora gran parte del romance que reviste al capitalismo flexible de un significado y un sentido moral más elevado». ¹⁶ Lo que ofrece como alternativa son políticas renovadas de seguridad económica que permitirían a las mujeres (y, a largo plazo, a los hombres) mantener las familias que se han roto por la flexibilidad que exige el mercado laboral neoliberal. Sin defender simplemente el regreso del fordismo que Streeck parece tener en mente, Fraser intenta imaginar un salario familiar mejorado que, en primer lugar, reconocería y pondría en valor el trabajo reproductivo de las mujeres y que quizás, en último término, desestabilizaría la división sexual del trabajo en sí misma. ¹⁷ No obstante, al identificar el mal específico del neoliberalismo como la destrucción del salario familiar fordista, su análisis conduce inevitablemente a la conclusión de que la resistencia exige la restauración de la familia, aunque de una forma más progresista e igualitaria.

¹³ *Ibidem*, p. xl.

¹⁴ Nancy Fraser, «From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a "Post-Socialist" Age», *New Left Review*, núm. 212, 1995, pp. 68-93 [ed. cast. *¿Reconocimiento o redistribución? Un debate entre marxismo y feminismo*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2017].

¹⁵ Nancy Fraser, *Fortunes of Feminism: From Women's Liberation to Identity Politics to Anti-Capitalism*, Nueva York, Verso, 2013, p. 218 [ed. cast.: *Fortunas del feminismo*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2015].

¹⁶ *Ibidem*, p. 220.

¹⁷ *Ibidem*, pp. 134-135.

Todas estas teorías están claramente en deuda con el trabajo de Karl Polanyi,¹⁸ cuya tesis del «doble movimiento» es omnipresente y casi indiscutible en las formulaciones contemporáneas de la crítica anticapitalista de la izquierda.¹⁹ En su emblemática obra de sociología histórica, *La gran transformación* (1944), Polanyi distingue el capitalismo de *laissez-faire* frente a todas las economías de intercambio anteriores, basándose en el hecho de que este se esfuerza por incluir lo que en su día era inalienable en el ámbito del intercambio de valor.²⁰ Polanyi plantea que el capitalismo moderno, que alcanza su forma más pura en la Inglaterra del siglo XIX, está habitado por un implacable impulso calculador que somete hasta los valores sociales fundacionales como el trabajo, la tierra o el dinero a las métricas del intercambio de bienes. Según las condiciones del capitalismo moderno, el trabajo humano en sí mismo pierde todo valor intrínseco y ve cómo su precio lo fija el mejor postor; el dinero está sujeto a la medida nominal de los tipos de interés y de cambio; y el precio de la tierra viene determinado por las fluctuaciones del valor especulativo. Así, las propiedades sociales esenciales que deberían funcionar, por derecho, como pilares y anclas de cualquier sistema estable de intercambio se ponen a circular en el mercado libre como «mercancías ficticias». Habiendo planteado la economía doméstica aristotélica del intercambio medido como punto de referencia ético, Polanyi solo puede afrontar estas innovaciones como desviaciones de la norma trascendental de justicia económica. Polanyi entiende el capitalismo moderno como la generalización de la «cremástica» de Aristóteles, un régimen económico en el que la lógica perversa del valor automultiplicable ha superado y subsumido la calculada reproducción de los valores sociales fundacionales.²¹ Sin embargo, como demócrata del siglo XX,

¹⁸ La deuda en ocasiones es explícita. Véase, por ejemplo, Wolfgang Streeck, *Re-forming Capitalism: Institutional Change in the German Political Economy*, Oxford, Oxford University Press, 2008, pp. 247-263 y 266-267; Nancy Fraser, «A Triple Movement: Parsing the Politics of Crisis after Polanyi?», *New Left Review*, núm. 81, 2013, pp. 119-132.

¹⁹ Sin embargo, véase Angela Mitropoulos y Martijn Konings para críticas de Karl Polanyi relacionadas con la que ofrezco aquí. Angela Mitropoulos, *Contract and Contagion: From Biopolitics to Oikonomia*, Nueva York, Minor Compositions, 2012, pp. 158-166; Martijn Konings, *The Emotional Logic of Capitalism: What Progressives Have Missed*, Stanford (CA), Stanford University Press, 2015, pp. 1-19. Ambas teorías se inclinan por una crítica marxiana al concebir el «doble movimiento» como algo totalmente interno y constitutivo de la dinámica del capital. Véase también Miranda Joseph, *Against the Romance of Community*, Minneapolis (MN), University of Minnesota Press, 2002, para un relato del neoliberalismo contemporáneo que atiende a la constitución del capitalismo y la comunidad; y Andrea Muehlebach, *The Moral Neoliberal: Welfare and Citizenship in Italy*, Chicago (IL), University of Chicago Press, 2012, que analiza la coexistencia de las filosofías de la asistencia social neoliberal y neoconservadora católica en la Italia contemporánea.

²⁰ Karl Polanyi, *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of our Time*, Boston, Beacon Press, 1944 [2001] [ed. cast. *La gran transformación, crítica del liberalismo económico*, trad. por Julia Varela y Fernando Álvarez-Uría, Barcelona, Virus, 2016].

²¹ La referencia a la economía del hogar aristotélica o la *oikonomia* está implícita en *The Great Transformation*, pero se debate en detalle en el trabajo filosófico de Polanyi «Aristotle

también se ocupa de defender que las fuerzas desintegradoras del libre mercado provocarán inevitablemente un «contramovimiento» empeñado en proteger el orden social (de hecho, el mismo libre mercado) de los excesos del capitalismo de *laissez-faire*.

De manera un tanto paradójica, Polanyi imagina el contramovimiento como algo externo a las dinámicas del capitalismo y, sin embargo, históricamente inevitable y como algo que efectivamente el propio libre mercado necesita. Al reflexionar sobre la historia del capitalismo industrial del siglo XIX, observa que la utopía del *laissez-faire* del mercado autorregulado no podrá sobrevivir a largo plazo sin la intervención de alguna forma externa de proteccionismo social. Al aplicarse como un ideal económico, el mercado autorregulado libera fuerzas destructoras que amenazan la propia existencia del sistema de mercado. Así, llevado al extremo, los excesos individualizadores del contractualismo liberal generarán en algún momento un contramovimiento social dispuesto a proteger a los trabajadores de los inclementes vientos del mercado. Aunque deba entenderse como algo externo al capitalismo de libre mercado, el contramovimiento es, no obstante y en último término, necesario para el funcionamiento constante del mercado en sí mismo, ya que su papel será proteger esas «mercancías ficticias» (dinero, tierra y trabajo) que el capital es incapaz de proteger por sus propios medios.

Lo que hace que la teoría de Polanyi del doble movimiento resulte tan atractiva para cierta izquierda es su tendencia a hacer confluír el propio capitalismo con la lógica del libre mercado y así reducir su expresión ideológica al liberalismo económico, entendido como una fuerza de desintegración social. Sin embargo, una vez aceptadas estas premisas, la resistencia solo se puede imaginar como conservadora. Si el capitalismo como formación ideológica es reducible a los principios del liberalismo económico y si la libertad de mercado tiende inexorablemente a desintegrar, desarticular y homogeneizar la existencia social, entonces cualquier contramovimiento viable debe proponerse restablecer el valor como forma de detener estas tendencias. Este imperativo no solo se aplica a las «mercancías ficticias» de la tierra, el trabajo y el dinero, las mismas que el movimiento del proteccionismo social quiere «desmercantilizar» y devolver a una posición de valor fundamental; sino que también es de aplicación a la vida social en términos más amplios que, en última

Discovers the Economy» en George Dalton, *Primitive, Archaic and Modern Economies: Essays of Karl Polanyi*, Nueva York, Anchor Books, 1968, pp. 78-115. Con sus referencias a la antropología de Henry Sumner Maine y Ferdinand Tönnies, los fundamentos conservadores del pensamiento de Polanyi se hacen explícitos aquí. Véase, de la autora «The Living and the Dead: Variations on de Anima», *Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities*, vol. 7, núm. 3, 2002, pp. 81-104, para un análisis de las referencias más ambivalentes de Marx a Aristóteles y la crítica de la cremástica.

instancia, exige ser estabilizada y reinsertada en la institución de la familia.²² Si el capitalismo se teoriza única y exclusivamente como destructor de solidaridades sociales anteriores, entonces el contramovimiento solo se puede imaginar como el esfuerzo por restaurar, o al menos reinventar, aquello que supuestamente fue destruido por el advenimiento del capitalismo industrial. No es casualidad que Polanyi muestre una inconfundible nostalgia por el viejo orden territorial de la Inglaterra feudal, en la que (se imagina) a la aristocracia y al campesinado compartiendo un mismo apego por la tierra, la familia y la comunidad.

El propio Polanyi era muy consciente de la potencial afinidad entre su teoría del contramovimiento y el social-conservadurismo de la derecha. De hecho, consideraba que los movimientos fascistas de la Europa de principios del siglo XX eran una manifestación especialmente destructiva del contramovimiento, algo que solo podía evitarse al implementar la alternativa de un Estado de bienestar socialmente protector y políticamente democrático.²³ Para Polanyi, la diferencia entre un contramovimiento socialdemócrata y el social-conservadurismo de la derecha era fundamental en sus consecuencias históricas, y aun así se trata de una diferencia de método y de grado, no de naturaleza. El perfil socialdemócrata de Polanyi comparte la nostalgia conservadora de la comunidad, la tierra y la familia, pero pretende transformar estas instituciones en conductos para formas de protección social basadas en el Estado. Mientras que el conservadurismo de Burke lucha por inculcar los valores familiares por la fuerza, el perfil socialdemócrata se esfuerza por promoverlos mediante la redistribución de la riqueza social. Se podría decir que Polanyi sustituye los valores familiares privados de la antigua tradición isabelina de las leyes de pobres [Poor Laws] por los valores familiares redistributivos de cierta clase de izquierda social-progresista. A este respecto, su filosofía del doble movimiento se puede entender como la expresión ideológica del Estado de bienestar de mediados del siglo XX, que combinaba a la perfección la socialdemocracia y el social-conservadurismo bajo el salario familiar fordista.

En cambio, este libro asume que lo que Polanyi denomina el «doble movimiento» se entiende mejor como algo totalmente interno a la dinámica del capital. Es decir, que el liberalismo económico y el conservadurismo político, incluso si este último comparte el lenguaje de la crítica anticapitalista, son expresiones igualmente constitutivas del capitalismo moderno. No hace falta remitirse a la lectura hegeliana de Marx para reconocer que este doble movimiento es fundamental en su descripción del «cálculo diferencial» del capital, lo que le sitúa en radical desacuerdo con

²² Polanyi, *The Great Transformation...*, p. 139.

²³ *Ibidem*, pp. 30-32, 245-256.

Polanyi en lo que se refiere a la crítica.²⁴ En los *Grundrisse*, Marx distingue con mayor lucidez dos tendencias contrapuestas en la lógica de la valoración capitalista: por un lado, la propensión a deshacerse de todos los límites externos a la generación especulativa de riqueza social; y por otro, el impulso de restablecer esos límites como condición interna de la realización del valor como riqueza privada.²⁵ En términos matemáticos más sugerentes y menos austeros, Marx reconocía que el mandato capitalista de la autovaloración «va más allá de las barreras y prejuicios nacionales, como el culto a la naturaleza, así como de la satisfacción tradicional, confinada, complaciente y enquistada de todas las necesidades presentes y de las reproducciones de viejas formas de vida»,²⁶ y al mismo tiempo apela a la reafirmación de esos límites como forma de canalizar y restringir la actual realización efectiva de la riqueza.

No obstante, aunque Marx reconocía que la restauración del valor fundamental podría lograrse mediante ciertos medios institucionales y

²⁴ Con su referencia a los límites y las curvas, los *Grundrisse* de Marx lidian evidentemente con el problema del cambio en el tiempo, tal como se ejemplifica en el lenguaje del cálculo diferencial. Su principal referencia filosófica es *Ciencia de la Lógica* de Hegel, que a su vez es una reflexión sobre el cálculo diferencial. Sin embargo, ciertas lecturas de Marx han sugerido que, aunque Marx habitaba el lenguaje de Hegel en los *Grundrisse*, al mismo tiempo luchaba por definir un tipo diferente de matemáticas de cambio o curvatura. Francine Markovits persigue este argumento desde una perspectiva filosófica y filológica, argumentando que Marx intentaba escapar de (y no simplemente invertir) la dialéctica hegeliana ya en su tesis doctoral sobre la filosofía epicúrea. Véase Francine Markovits, *Marx dans le jardin d'Epicure*, París, Éditions de Minuit, 1974. Daniel Bensaïd sugiere igualmente que Marx veía el proyecto de cálculo del capital en términos similares a los de la matemática fractal o la teoría de los sistemas complejos no lineales en física. Basando su argumento en una lectura atenta de las cartas de Marx a Engels, afirma que «Marx nunca renunció a la esperanza de encontrar una matemática no lineal "de curvas irregulares" que le permitiera descubrir el orden en el caos» (p. 50, traducción de la autora). Según Bensaïd, Marx solo se vio frenado en este empeño por las limitaciones de las matemáticas contemporáneas. Si entendemos que Marx trabaja con una comprensión epicúrea o fractal del cambio, esto implica que la diferencia, la curvatura o el cambio en el tiempo deben entenderse como ontológicamente primarios con respecto a la presencia y, por tanto, nunca reducibles al concepto hegeliano de negatividad. Cualquiera que sea el valor de estos argumentos con respecto de las verdaderas intenciones de Marx, me parece que esta es la forma más interesante y habilitante de leer a Marx hoy. Daniel Bensaïd, *La discordance des temps: Essais sur les crises, les classes, l'histoire*, París, Éditions de la Passion, 1995, p. 50.

²⁵ En los *Grundrisse*, Marx escribe que «como representante de la forma general de la riqueza (el dinero), el capital es el impulso interminable e ilimitado de ir más allá de su barrera limitadora. Todo límite [*Grenze*] es y tiene que ser una barrera [*Schranke*] para ello. De lo contrario, dejaría de ser capital: el dinero como autorreproductor. Si alguna vez percibiera un determinado límite no como una barrera, sino que se sintiera cómodo dentro de él como un límite, habría pasado él mismo del valor de cambio al valor de uso, de la forma general de la riqueza a un modo específico y sustancial de la misma». Y sin embargo, «la universalidad hacia la que se esfuerza irresistiblemente encuentra barreras en su propia naturaleza». Karl Marx, *Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy (Rough Draft)*, trad. por Martin Nicolaus, Londres, Penguin, 1993, pp. 334 y 410 [ed. cast. *Grundrisse*, trad. por Pedro Scarón, Madrid, Siglo XXI, 1972].

²⁶ Marx, *Grundrisse...*, p. 410.

jurídicos (desde el patrón oro a la propiedad privada de la tierra, pasando por leyes de vagancia que limitaran la movilidad del personal trabajador) su análisis no se extiende a la dimensión íntima y reproductiva de este proceso.²⁷ Según apunta Marx, en su esfuerzo por superar todas las barreras cuantitativas para la generación de riqueza, el capital transgrede todas las formas establecidas de reproducción, es decir, todas las limitaciones consuetudinarias o religiosas sobre la organización del género, todas las restricciones de movilidad social según el estatus y todas las limitaciones nacionales sobre la circulación del dinero.²⁸ ¿Pero no se ve también obligado a reafirmar las instituciones reproductivas de raza, familia y nación como forma de garantizar la distribución desigual de la riqueza y de los ingresos a lo largo del tiempo? ¿No está obligado, en última instancia, a restaurar la familia como forma jurídica elemental de acumulación de riqueza privada?

En este aspecto, el pensamiento de Marx debe radicalizarse.²⁹ La aseveración del fundamento nunca tiene un carácter meramente «económico», ya que, en última instancia, debe incorporar las condiciones «sociales y culturales» según las cuales el valor debe reproducirse y reapropiarse de forma privada: el parentesco, el linaje y la herencia. Si la historia del capital moderno parece socavar y desafiar los órdenes de género y sexualidad vigentes, también implica la reinención periódica de la familia como

²⁷ En los *Grundrisse*, Marx define el «límite interno» del capital en términos más abstractos como la necesidad de capturar la plusvalía en la forma de propiedad privada (pp. 415-416). Para Marx este límite debe entenderse como interno al capital, no externo y transcendente, porque no es un límite natural al crecimiento, sino un límite que se impone por la forma específicamente privatizada de la creación de riqueza bajo el capitalismo. En *El Capital*, Marx ofrece un relato mucho más detallado de los diversos límites que el capital impone a su propia autovaloración. Sobre el patrón oro y la propiedad de la tierra como barreras, véase Karl Marx, *Capital Volume 3*, Londres, Penguin, 1981, pp. 706-708 y 882-907 [ed. cast. *El Capital (obra completa)*, trad. por Vicente Romano García, Akal, Madrid, 2000]. Sobre la apropiación legal de la tierra y las leyes de vagos como barreras, véase Karl Marx, *Capital Volume 1*, Londres, Penguin, 1976, pp. 873-904.

²⁸ Marx, *Grundrisse...*, p. 410.

²⁹ La falta de voluntad de Marx para ampliar la crítica fundamental del valor a la cuestión de la política sexual está lejos de ser accidental. Aunque Marx y Engels abogan por la abolición de la herencia privada en *El manifiesto comunista*, en otros de sus escritos, Marx se muestra ambivalente ante tal proyecto. A pesar de su mordaz crítica a la familia burguesa, Marx y Engels siguieron comprometidos con el salario del hombre como institución fundacional de la política de la clase obrera. De hecho, la propia noción de una clase obrera unificada parece depender de la división sexual del trabajo. Esta división se asume simplemente en la obra de Marx, pero en realidad supuso la expulsión forzosa de las mujeres de las fábricas a principios del siglo XIX. Sobre la ambivalencia de Marx al respecto de la cuestión de la herencia véase Jacqueline Stevens, *Reproducing the State*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 1999, pp. 27-36. Sobre el apoyo de Marx al salario masculino proveedor de la familia, véase Melinda Cooper, «Reproduktion neu denken. Leihmutterschaft zwischen Vertrag und Familie», en Melinda Cooper, Catherine Waldby, Felicitas Reuschling y Susanne Schultz, *Sie nennen es Leben, wir nennen es Arbeit: Biotechnologie, Reproduktion und Familie im 21. Jahrhundert*, Berlín, Edition Assemblage, 2015, pp. 49-77.

instrumento para la distribución de la riqueza y de los ingresos. Así, según Reva Siegel, la historia jurídica de la familia moderna se puede entender como un proceso de «preservación a través de la transformación» (más que como una liberalización progresiva) en el que los desafíos a las jerarquías establecidas de género y de generación se vuelven a plasmar una y otra vez en estructuras jurídicas nuevas, más democráticas, pero no menos implacables.³⁰

Resulta de utilidad entender lo que Eric Hobsbawm denomina la «reinención de la tradición» como la expresión de este doble movimiento, siempre que no concedamos ninguna estabilidad previa a la tradición como tal y reconozcamos la propia historicidad del término como una invención del capitalismo industrial del siglo XIX.³¹ Al traducir estos puntos de vista a una reflexión general de la filosofía de la historia, Peter Osborne defiende que la particular temporalidad del capitalismo moderno se define por la oscilación de tendencias que resultan alternativamente autorrevolucionarias y restauradoras, especulativas y radicalmente nostálgicas. Para Osborne, estas dos orientaciones «pueden considerarse formas políticas temporalmente integrales de las sociedades capitalistas, articulaciones políticas alternativas de la propia forma social de la acumulación capitalista: esa "revolución constante de la producción, perturbación continua de todas las condiciones sociales, incertidumbre y agitación eternas" que Marx y Engels identificaron como el rasgo distintivo de la época actual hace casi 150 años».³² Una consecuencia de este análisis es el modo en que neutraliza la crítica de Polanyi. No podemos pretender contrarrestar la lógica del intercambio capitalista tratando solamente de reincorporar o de estabilizar sus signos volátiles, como sugiere Polanyi, ya que este proyecto es ya un componente necesario del doble movimiento del capital. La tensión entre las fuerzas adaptativas de la expansión del crédito y el impulso de apropiación de los fundamentos sociales es constitutiva del capital en sí mismo, aunque se realice en formas políticas muy diferentes en momentos históricos distintos.

En consecuencia, este libro toma el neoliberalismo y el nuevo social-conservadurismo como la expresión contemporánea del doble movimiento del capital. Al hacerlo, sigo la premisa de Wendy Brown, cuyo ensayo fundacional *American Nightmare* [La pesadilla estadounidense] defiende que el

³⁰ Reva B. Siegel, «"The Rule of Love": Wife-Beating as Prerogative and Privacy», *Yale Law Journal*, núm. 105, 1996, p. 2119.

³¹ Eric Hobsbawm, «Introduction - Inventing Traditions», en Eric Hobsbawm y Terence Ranger, *The Invention of Tradition*, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, pp. 1-14 [ed. cast. *La invención de la tradición*, trad. por Omar Rodríguez, Barcelona, Crítica, 2012]. Para una reflexión ampliada sobre la reinención de la tradición (como idea y como práctica) en la Inglaterra del siglo XIX, véase Stephen Prickett, *Modernity and the Reinvention of Tradition: Backing into the Future*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.

³² Peter Osborne, *The Politics of Time: Modernity and the Avant-Garde*, Londres, Verso, 1995, p. 164.

neoliberalismo y el neoconservadurismo deben pensarse en común, en sus convergencias, colisiones y simbiosis, si queremos entender la racionalidad política del poder en Estados Unidos a día de hoy.³³ Este pensamiento común, añadiría, es necesario si queremos evitar la trampa de apelar a un neoliberalismo de izquierdas contra las fuerzas regresivas del social-conservadurismo o a un social-conservadurismo de izquierdas contra los efectos desintegradores del libre mercado.

Con neoliberalismo, me refiero en concreto a las escuelas estadounidenses del nuevo liberalismo económico que surgieron en la Universidad de Chicago, la Universidad de Virginia, la Universidad George Mason, la Universidad Politécnica de Virginia, el Departamento de Economía de la UCLA y otras instituciones pioneras a principios y mediados del siglo XX. La historiografía del neoliberalismo estadounidense es muy amplia.³⁴ Aquí me centro en una fase distinta de la evolución de este nuevo liberalismo económico, aquella definida por las conmociones sociales y económicas de los años sesenta y setenta y por la respuesta intelectual que provocaron entre economistas del libre mercado de las escuelas de Chicago y Virginia. Durante este periodo, el neoliberalismo estadounidense perfeccionó y, en algunos casos, revisó en profundidad sus conceptos fundacionales; lo hizo como respuesta directa a la cambiante composición de género y de raza en la fuerza de trabajo, a los movimientos por los derechos civiles y sociales, y al auge del radicalismo estudiantil. Durante la década de los setenta, perfiles intelectuales neoliberales ilustres como Milton Friedman, Rose Friedman, George Stigler, Richard Epstein, Richard Posner, James M.

³³ Wendy Brown, «American Nightmare: Neoliberalism, Neoconservatism, and De-Democratization», *Political Theory*, vol. 34., núm. 6, 2006, pp. 690-714.

³⁴ Roger D. Congleton, «Buchanan and the Virginia School», en Geoffrey Brennan, Hartmut Kliemt y Robert D. Tollison, *Methods and Morals in Constitutional Economics: Essays in Honor of James M. Buchanan*, Nueva York, Springer, 2002, pp. 22-38; S. M. Amadae, *Rationalizing Capitalist Democracy: The Cold War Origins of Rational Choice Liberalism*, Chicago, Chicago University Press, 2003; Monica Prasad, *The Politics of Free Markets: The Rise of Neoliberal Economic Policies in Britain, France, Germany, and the United States*, Chicago, University of Chicago Press, 2006; Philip Mirowski y Dieter Plehwe, *The Road from Mont Pèlerin: The Making of the Neoliberal Thought Collective*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2009; Ross B. Emmett, *The Elgar Companion to the Chicago School of Economics*, Northampton (MA), Edward Elgar, 2010; Jamie Peck, *Constructions of Neoliberal Reason*, Oxford, Oxford University Press, 2010; Serge Audier, *Néo-libéralisme(s): Une archéologie intellectuelle*, París, Grasset, 2012; Angus Burgin, *The Great Persuasion: Reinventing Free Markets since the Depression*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2012; Pierre Dardot y Christian Laval, *The New Way of the World: On Neoliberal Society*, trad. por Gregory Elliott, Nueva York, Verso, 2013; Robert van Horn, Philip Mirowski, y Thomas A. Stapleford, *Building Chicago Economics: New Perspectives on the History of America's Most Powerful Economics Program*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013; Daniel Stedman Jones, *Masters of the Universe: Hayek, Friedman, and the Birth of Neoliberal Politics*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2014. Más allá de estas referencias esenciales existe una literatura crítica y filosófica mucho más amplia sobre el neoliberalismo que no me es posible citar en su totalidad.

Buchanan, Gordon Tullock, Richard Wagner y Gary Becker ayudaron a redefinir el consenso intelectual y popular sobre el gasto estatal deficitario, el papel del banco central, la inflación, los impuestos, las leyes de protección del consumidor, las tasas de matrícula y el bienestar. En ningún otro momento anterior ni posterior se han comprometido de forma tan directa quienes integraban las escuelas de Chicago y de Virginia en la formulación e implementación de las políticas gubernamentales. Una figura como la de Milton Friedman, por ejemplo, se implicó notablemente en decisiones políticas de las administraciones de Nixon, Carter y Reagan: en distintas ocasiones se le pudo ver colaborando con propuestas para incluir un ingreso básico garantizado, asesorando políticas del banco central sobre la inflación o pidiendo la introducción de tasas de matrícula en el sistema universitario de California. Si Milton Friedman llegó a ser un intelectual público más que un asesor político y si el propio neoliberalismo llegó a perder ese perfil claramente identificable del que disfrutaba en los años setenta, fue porque logró una amplísima aceptación entre quienes ostentaban responsabilidad política de cualquier tendencia y porque llegó a estar muy diseminado en la economía dominante.³⁵

Con el nuevo social-conservadurismo me refiero al espectro de movimientos conservadores que surgieron en los años sesenta o posteriormente, a menudo en respuesta al mismo conjunto de preocupaciones que llevaron al neoliberalismo a la acción. Bajo este término paraguas, incluyo el movimiento neoconservador como tal (que en sus inicios atendía casi exclusivamente a una preocupación por cuestiones sociales nacionales), la nueva derecha religiosa que incluía el conservadurismo católico y evangélico, el nuevo paternalismo de Lawrence Mead (principal arquitecto estadounidense de los programas de transición de las prestaciones sociales al trabajo) y el movimiento comunitario por el bienestar social. Aunque hay quien ha utilizado el término «neoconservadurismo» para referirse a esta amplia coalición de corrientes conservadoras, prefiero utilizar el término más genérico «nuevo social-conservadurismo» para abordar la especificidad de estos perfiles neoconservadores concretos dentro de esta coalición. El «nuevo» en «nuevo social-conservadurismo» sirve para distinguir estas corrientes del conservadurismo tradicionalista o burkeano del paleoconservadurismo estadounidense, cuyo antiestatismo, antisemitismo y aversión a la democracia racial impedía cualquier compromiso con la izquierda del New Deal.³⁶ De hecho, muchos de los perfiles de la nueva generación social-conservadora, si no la mayoría,

³⁵ El economista Melvin Reder plantea que si «la vitalidad de la tradición [de Chicago] está amenazada», es más bien el resultado de la «creciente aceptación de muchas de sus ideas clave que [de] la resistencia ante las mismas». Citado en Peck, *Constructions of Neoliberal Reason...*, p. 116.

³⁶ Russell Kirk, *The Conservative Mind: From Burke to Santayana*, Washington DC, Regnery Press, 1953.

habían recorrido parte de su trayectoria junto a la izquierda política y se oponían a la ampliación de la Gran Sociedad del New Deal, no al experimento del New Deal como tal. Quienes representaban estos movimientos provenían de contextos políticos diversos. Una pequeña parte había compartido su viaje con figuras de la derecha como Barry Goldwater o con William F. Buckley Jr., fundador de *National Review*, ambos personajes fundamentales en la alianza conservadora-libertaria de la Guerra Fría.³⁷ Otra parte había surgido de las corrientes más fundamentalistas, tradicionalmente quietistas dentro del protestantismo estadounidense.³⁸ La parte más numerosa procedía de la izquierda política. En su mayoría, la primera generación del neoconservadurismo había sido antes trotskista y demócrata en la Guerra Fría y seguía firmemente comprometida con el Estado de bienestar del New Deal y su orden sexual conservador.³⁹ Aunque sus integrantes más destacados, Irving Kristol y su hijo Bill Kristol especialmente, terminarían uniéndose al Partido Republicano, hubo quienes mantuvieron su compromiso con el Partido Demócrata. Los perfiles comunitaristas que les sucedieron en la escena política después de los años ochenta simpatizaban con las nuevas figuras demócratas de la Tercera Vía como Bill Clinton y siempre se esforzaron por salvar la brecha entre el conservadurismo religioso y secular, la izquierda partisana y la derecha.⁴⁰ Por su parte, el nuevo paternalista Lawrence Mead nunca se identificó con un partido concreto y, de hecho, logró su mayor éxito político durante la presidencia de Clinton, quien introdujo una amplia legislación sobre prestaciones sociales condicionadas en 1996.⁴¹ A lo largo de este periodo, solo el conservadurismo religioso blanco se ha seguido asociando mayoritariamente con la derecha política.

Durante la década de 1970, el neoliberalismo estadounidense y el nuevo social-conservadurismo maduraron y se unieron para dar respuesta a los mismos acontecimientos y a una percepción simultánea de crisis. Casi siempre se asume que la alianza neoliberal / neosocial-conservadora surgió frente al propio keynesianismo, como se ejemplificó en el Estado de bienestar del New Deal y se radicalizó con la Gran Sociedad de Johnson; sin embargo, eso sería malinterpretar la especificidad de su crítica. Sin ninguna duda, lo que provocó su reacción no fue el propio Estado de

³⁷ Sobre esta alianza, sus conexiones y sus diferencias con respecto de la emergente alianza neoconservadora-neoliberal, véase Robert B. Horwitz, *America's Right: Anti-Establishment Conservatism from Goldwater to the Tea Party*, Londres, Polity, 2013, pp. 23-62. Phyllis Schlafly, una figura católica líder en la nueva derecha religiosa, apoyó la campaña presidencial de Barry Goldwater en 1964. El propio Goldwater siguió siendo un libertario comprometido y criticó a la derecha religiosa después de las concesiones del Partido Republicano.

³⁸ *Ibidem*, pp. 63-111.

³⁹ *Ibidem*, pp. 112-156.

⁴⁰ Stacey, *In the Name of the Family*, pp. 54-55, 95.

⁴¹ R. Kent Weaver, *Ending Welfare as We Know It*, Washington DC, Brookings Institution Press, 2000, pp. 117-120.

bienestar del New Deal (aunque el neoliberalismo tenía una larga trayectoria de crítica en este frente), sino más bien la panoplia de movimientos de liberación que surgieron al margen y por encima del orden keynesiano de posguerra hacia finales de los años sesenta. En varias ocasiones entre la década de 1970 y 1980, el activismo contra la pobreza, la militancia pro Estado de bienestar, el feminismo, el activismo del SIDA y los profesionales de la abogacía por el interés público articularon novedosas políticas de redistribución que desvinculaban la protección frente al riesgo de la división sexual del trabajo, así como los seguros sociales de la normatividad sexual.⁴² Estos movimientos fueron históricamente singulares en la medida en que siguieron luchando por una mejor redistribución de la riqueza y de los ingresos al tiempo que rechazaban las limitaciones normativas del salario familiar fordista. Mientras que el neoliberalismo y el neoconservadurismo se mostraron sorprendentemente comprensivos con los esfuerzos por democratizar el Estado de bienestar del New Deal, sobre todo en lo relativo a la inclusión de hombres afroamericanos en el sistema del salario familiar, ambas corrientes opusieron resistencia cuando la propia familia fordista se puso en cuestión.

En resumen, la alianza neoliberal / neosocial-conservadora surgió cuando los movimientos de liberación de los años sesenta empezaron a desafiar la normatividad sexual del salario familiar como eje y pilar del capitalismo del bienestar. Lo que proponían en respuesta a esta «crisis» no era recuperar el salario familiar fordista (esta nostalgia concreta sería característica de la izquierda), sino más bien la reinención estratégica de una tradición mucho más antigua de las leyes de pobres relativas a la responsabilidad familiar privada, con la combinación de instrumentos de reforma de la asistencia social, cambios impositivos y política monetaria. Bajo su influencia, el bienestar dejó de ser un programa redistributivo para convertirse en un inmenso aparato federal para controlar las responsabilidades de la familia privada de la población pobre, mientras que el gasto deficitario se trasladó progresivamente del Estado a la familia privada. Mediante

⁴² No pretendo decir que esos esfuerzos terminaran en los años ochenta. En años más recientes, hemos visto un notable resurgir de prácticas políticas que se oponen a separar la cuestión de las políticas sexuales de la de justicia económica. Véase Dean Spade, *Normal Life: Administrative Violence, Critical Trans Politics and the Limits of Law*, Boston, South End Press, 2011. Véanse también las siguientes reflexiones teóricas sobre la articulación de las políticas sexuales y la economía política: Rosemary Hennessy, *Profit and Pleasure: Sexual Identities in Late Capitalism*, Londres, Routledge, 2000; Lisa Duggan, *The Twilight of Equality? Neoliberalism, Cultural Politics, and the Attack on Equality*, Boston, South End Press, 2004; Kevin Floyd, *The Reification of Desire: Toward a Queer Marxism*, Minnesota, University of Minnesota Press, 2009; Silvia Federici, *Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction and Feminist Struggle*, Nueva York, Autonomedia, 2013 [ed. cast.: *Revolución en punto cero*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2012]; Mitropoulos, *Contract and Contagion*, cit.; Nikita Dhawan, Antke Engel, Christoph F. E. Holzhey y Volker Woltersdorff, *Global Justice and Desire: Queering Economy*, Londres, Routledge, 2015.

políticas diseñadas para democratizar los mercados de crédito e inflar el valor de los activos, quienes impulsaron estas reformas intentaban revivir la tradición de la responsabilidad familiar privada con el concepto de deuda doméstica, sin dejar de acomodar y neutralizar los deseos políticos más ambiciosos de la década de 1960.

A pesar de su importancia en la retórica política de la revolución de Reagan y más allá, la mayoría de relatos de esta época consideran la política de los valores familiares como algo periférico a las batallas económicas estructurales que se libraban en torno a, por ejemplo, la política monetaria, el gasto deficitario del Estado o la redistribución de la riqueza mediante los impuestos.⁴³ Así, se dice que Ronald Reagan desplegó una retórica de valores familiares para tapar sus políticas macroeconómicas y seducir a la clase trabajadora con alianzas que terminarían por ir en su contra. Las guerras culturales neoconservadoras se entienden en retrospectiva como una distracción útil del verdadero negocio de recortar la financiación de la educación pública y de las humanidades, mientras que el comunitarismo de Clinton se entiende igualmente como una estrategia diseñada para suavizar las aristas de su política económica neoliberal y un instrumento útil para suturar la brecha histórica entre nuevos y viejos demócratas. Estos relatos, que suelen surgir de la izquierda, tienden a olvidar la ferviente defensa de los valores familiares como si fuesen minucias desperdigadas sobre la verdadera historia de la monumental redistribución de la riqueza y la guerra de clases.

La idea de que los procesos económicos pueden y deben separarse de los fenómenos meramente culturales de género, raza y sexualidad tiene un largo pedigrí intelectual, expresada de distintas formas en el vocabulario marxista de base y superestructura, la distinción vernácula entre identidad y políticas de clase y el posterior lenguaje de la escuela de Fráncfort de reconocimiento frente a redistribución (aunque quizá todas sean deudoras en última instancia de la oposición entre contrato y estatus promovida por la antropología del siglo XIX, con figuras como Henry Summer Maine).⁴⁴ Como punto de partida metodológico y político, estas distinciones siempre han sido sospechosas. El lenguaje antropológico del siglo XIX sobre el estatus y el contrato, por ejemplo, sirvió para ocultar y para generar cierto sentimentalismo alrededor del trabajo no remunerado de las mujeres en el

⁴³ Thomas Frank, *What's the Matter with Kansas? How Conservatives Won the Heart of America*, Nueva York, Henry Holt, 2004 [ed. cast.: *¿Qué pasa con Kansas? Cómo los ultraconservadores conquistaron el corazón de Estados Unidos*, Madrid, Acuarela Libros, 2008]; Paul Krugman, *The Conscience of a Liberal*, Nueva York, Norton, 2007, pp. 173-197.

⁴⁴ Para una crítica ya clásica de estas distinciones, véase Judith Butler, «Merely Cultural», *Social Text*, núm. 52/53, 1997, pp. 265-277, y, en respuesta, Nancy Fraser, «Heterosexism, Misrecognition, and Capitalism: A Response to Judith Butler», *Social Text*, núm. 52/53, 1997, pp. 279-289. Vuelvo a debatir sobre estos textos en el capítulo cuatro.

hogar en el momento histórico preciso en el que se definían las fronteras entre el mercado laboral y la familia privada. Así, las mujeres quedaron relegadas al espacio casi sagrado del parentesco y la relación de don en un momento en el que estaban siendo activamente excluidas del mercado laboral contractual por una alianza masculina de sindicalistas y protectionistas conservadores.⁴⁵ En general, las demandas de la izquierda por la desmercantilización de la vida social o por la protección de las relaciones de parentesco se prestan con demasiada facilidad al argumento del social-conservadurismo de que ciertas formas de trabajo (doméstico, feminizado) deberían seguir siendo no remuneradas.

La distinción entre reconocimiento y redistribución implica hoy un parecido trabajo de revisionismo, que oculta los entresijos históricos reales de la política económica y sexual, mientras protege a la familia de la crítica. Hay que prestar atención al ejemplo histórico del salario familiar fordista para ver que la redistribución y el reconocimiento no se pueden entender de forma aislada: como instrumento de redistribución, el salario fordista estándar vigilaba activamente las fronteras entre el trabajo de mujeres y hombres, de blancos y negros, y en su dimensión de seguridad social, era inseparable de la normatividad sexual imperante. Las políticas fordistas de clase eran en sí mismas una suerte de políticas de identidad, ya que establecían la masculinidad blanca y el matrimonio como punto de acceso a la plena protección social.

Hoy las políticas de distribución ya no se canalizan mediante el instrumento del salario familiar fordista y (como demostró Thomas Piketty) están mucho más influidas por el mecanismo de transmisión de riqueza de la herencia privada de lo que estaban en la época de posguerra.⁴⁶ No obstante, aquí de nuevo, la distinción entre el reconocimiento y la redistribución se demuestra inútil para comprender las verdaderas implicaciones de las políticas sexuales y económicas. Al fin y al cabo, ¿cómo vamos a separar la labor de distribución de la riqueza que supone la herencia de la legitimación jurídica y cultural de la familia? ¿En qué medida se puede abstraer la regulación de la sexualidad del instrumento legal de apropiación de la riqueza que adopta la forma de genealogía familiar?

Este libro parte del supuesto de que la historia de las formaciones económicas no puede valorarse al margen de las dinámicas de género, raza y sexualidad sin que se oscurezcan las políticas de distribución de riqueza e ingresos. Al repasar y cuestionar los relatos históricos establecidos sobre la

⁴⁵ G. R. Searle, *Morality and the Market in Victorian Britain*, Oxford, Clarendon Press, 1998, pp. 134-66.

⁴⁶ Thomas Piketty, *Capital in the Twenty-First Century*, Cambridge (MA), Harvard Belknap, 2014 [ed. cast. *El capital en el siglo XXI*, trad. por Eliane Cazenave-Tapie Isoard, Madrid, Fondo de cultura económica de España, 2014].

crisis de la estanflación de la década de 1970, pretendo demostrar que la cuestión de la familia fue fundamental para la formación tanto del orden capitalista poskeynesiano, como del capitalismo del Estado de bienestar; y por lo tanto no se puede ignorar sin tergiversar profundamente la historia política de la época. A diferencia de gran parte de la izquierda, las figuras fundamentales de la alianza neoliberal / neosocial-conservadora no dudaron en reconocer la familia como el locus de la crisis. Estas figuras tenían claro que los grandes problemas macroeconómicos de la época, desde la inflación a las deficiencias presupuestarias, pasando por los abultados presupuestos del Estado de bienestar, reflejaban un cambio preocupante en los pilares sexuales y raciales de la familia fordista. Ante esta valoración, solo vieron una solución posible: la reinención total de la familia estadounidense. Este libro se propone el proyecto de explorar cómo se concibió este proceso de reinención y cómo terminó por superar las ambiciones intelectuales de sus autores.

II

LA CRISIS MORAL DE LA INFLACIÓN: NEOLIBERALISMO, NEOCONSERVADURISMO Y LA DESAPARICIÓN DEL SALARIO FAMILIAR

Durante toda gran inflación, se da un sorprendente declive de la moralidad pública y privada.

Henry Hazlitt, *The Inflation Crisis and How to Resolve It*.

EN 1979, el recién nombrado presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, inició una nueva era en la vida política estadounidense con medidas decisivas sobre la inflación. Tras años de polarizado debate, Volcker puso en marcha el recurso tecnócrata del ajuste encubierto de los tipos de interés y la tapadera ideológica del monetarismo, con los que la economía estadounidense se hundió en el periodo de recesión más profundo desde la Gran Depresión, lo que puso fin a un largo proceso de vertiginoso aumento de la inflación. El que se conoció como el *shock* Volcker creó las condiciones para la revolución Reagan y redefinió profundamente la escena política estadounidense e internacional durante las décadas siguientes.

En este momento decisivo, neoliberalismo y neoconservadurismo (y sus derivados) surgen como filosofías sociales plenamente desarrolladas y se erigen como fuerzas dominantes del tablero político. Sin embargo, ya en la década precedente, el neoliberalismo y el neoconservadurismo plantean y matizan por primera vez su particular crítica del Estado de bienestar de la Gran Sociedad, en respuesta a los diversos problemas de inflación y al creciente desempleo. Si queremos comprender cómo nace un discurso de crisis y cómo el neoliberalismo y el neoconservadurismo aprovechan este discurso para redefinir los términos del poder político durante los años siguientes, es imprescindible que revisitemos los debates de este periodo y que cuestionemos el relato histórico establecido acerca de cómo se resolvieron.

Los factores económicos y políticos que contribuyeron a la inflación de la década de 1970 son de sobra conocidos, aunque no cualquiera se atrevería a calcular la relevancia exacta de cada una de sus causas.¹ La opinión

¹ Aquí me baso en los relatos de William Greider en *Secrets of the Temple: How the Federal Reserve Runs the Country*, Nueva York, Simon & Schuster, 1989; Iwan Morgan, *Deficit Government: Taxing and Spending in Modern America*, Chicago, Ivan R. Dee, 1995; Robert

generalizada es que el presidente Lyndon Johnson precipitó el inicio de la inflación a finales de los años sesenta al negarse a reducir el gasto militar, aun cuando puso en marcha un nuevo y ambicioso programa de inversión en salud, asistencia social y educación al amparo de la Gran Sociedad. Históricamente los periodos de inflación suelen darse tras un gasto militar excepcional durante tiempos de guerra: el presidente Johnson lanzó una desastrosa ofensiva en Vietnam al mismo tiempo que perseguía una política interior expansiva, una doble hazaña que podría haber logrado si además hubiese aumentado los ingresos fiscales.² La inflación también reflejó el cambio en el antiguo equilibrio de poderes entre los anteriores estados coloniales y los centros metropolitanos. La aventura militar estadounidense en Vietnam llegó en un momento en el que muchas excolonias lograban la independencia y podían exigir precios más altos por los bienes que exportaban, un cambio que acabó repercutiendo en el precio de todos los bienes de consumo, desde la alimentación hasta el petróleo. A mediados de los años setenta, Estados Unidos importaba un tercio del petróleo de fuentes extranjeras, mientras que en la década anterior esta cifra representaba un quinto.³ Esto hizo que el conjunto de la economía, tanto productiva como de consumo, sufriera las consecuencias de las crisis del petróleo de 1973 y 1979 con sus respectivos embargos por parte de la OPEP. Estos fueron los factores fundamentales que contribuyeron al fenómeno económico de la inflación de precios de consumo.

Lo que no está tan claro es cómo y por qué la inflación se convirtió en una crisis política. Hoy por hoy, la mayoría de los relatos (si no todos) sobre la situación económica de los años setenta suscriben la idea de que la inflación representó una crisis sin paliativos para todas las clases sociales; esta narrativa se ha consolidado hasta convertirse en ortodoxia como resultado de la era Reagan y representa en sí misma el triunfo de cierto tipo de análisis revisionista. El historiador Iwan Morgan sostiene que los años setenta «representaron el periodo más miserable de la economía de Estados Unidos desde la Gran Depresión de los años treinta», en el que se puso fin a la «constante mejora de los estándares de vida que había caracterizado la época de posguerra».⁴ A partir del trabajo del neoconservador Daniel Bell, la socióloga económica Greta Krippner atribuye las «amargas luchas distributivas» de los años setenta a las «cada vez mayores limitaciones para la

L. Hetzel, «Arthur Burns and Inflation», *Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly*, vol. 84, núm. 1, 1998, pp. 21-44; Allan H. Meltzer, *A History of the Federal Reserve, Volume 2, Book 2*, Chicago, University of Chicago Press, 2009; Iwan Morgan, «Monetary Metamorphosis: The Volcker Fed and Inflation», *The Journal of Policy History*, vol. 24, núm. 4, 2012, pp. 545-571.

² A este respecto véase Morgan, *Deficit Government*, pp. 108-115.

³ *Ibidem*, pp. 116-117.

⁴ *Ibidem*, p. 116.

prosperidad de la nación», sin preguntarse cómo ni adónde se redistribuía la riqueza ni cómo una marcada tendencia a la baja de la redistribución podría haber precipitado un discurso neoconservador en torno a los límites del crecimiento en primer lugar.⁵

Al observar, no obstante, estas tendencias económicas son varias las voces contemporáneas que reconocen que las consecuencias redistributivas de la inflación están lejos de ser transparentes. El economista Edward N. Wolff, quien realizó un estudio para investigar los efectos de la inflación en la riqueza de los hogares entre 1969 y 1974, llegó a afirmar que la inflación «actuaba como un impuesto progresivo, lo que producía una mayor igualdad en la distribución de la riqueza».⁶ En aquel momento, el sindicalismo tenía tanta fuerza que los salarios subían junto con los índices de precios de consumo, con la consecuencia de que la inflación beneficiaba activamente a quienes «dependían de los ingresos del salario, no de los intereses o dividendos de activos financieros».⁷ Joseph J. Minarik, economista de Brookings Institution, plantea que la clase media que poseía una vivienda se vio especialmente beneficiada, pero que incluso los grupos con ingresos más bajos no eran tan vulnerables al aumento de los precios como se solía suponer, ya que la mayoría de programas de la Seguridad Social se ajustaban al índice de precios de consumo.⁸ Además, la inflación tenía el curioso efecto de redistribuir la riqueza de acreedores a deudores, erosionando de forma constante el precio de la deuda. Mientras los salarios siguieran subiendo, tenía sentido que quien trabajara comprara a crédito; lo que dio lugar a la percepción popular de que la clase trabajadora invertía y especulaba, adquiriendo bienes de consumo que hasta hacía poco tiempo estaban fuera de su alcance.⁹

Sin embargo, para quienes calculaban su patrimonio neto a partir de los activos financieros, las consecuencias de la inflación fueron implacablemente negativas. Inversores institucionales y particulares, entre ellos el diez por ciento de los hogares más ricos, se esforzaron en vano por dar con un camino de inversión seguro con el que superar este periodo, al tiempo que la inflación reducía las tasas reales de rendimiento de sus activos financieros a

⁵ Greta R. Krippner, *Capitalizing on Crisis: The Political Origins of the Rise of Finance*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2011, p. 64.

⁶ Edward N. Wolff, «The Distributional Effects of the 1969-75 Inflation on the Holdings of Household Wealth in the United States», *Review of Income and Wealth*, vol. 25, núm. 2, 1979, p. 207.

⁷ Greider, *Secrets of the Temple...*, p. 41.

⁸ Joseph J. Minarik, «The Distributional Effects of Inflation and Their Implications», en *Stagflation: The Causes, Effects and Solutions*, Washington DC, Joint Economic Committee, U.S. Congress, 1980, pp. 225-277.

⁹ Greider, *Secrets of the Temple...*, pp. 16-17, 44, 104; Morgan, «Monetary Metamorphosis...», p. 554.

largo plazo.¹⁰ La incertidumbre sobrevolaba por igual el futuro de la inversión para la población rica y para la población pobre; pero mientras que la imprevisibilidad del futuro precio del dólar prometía pagos con intereses depreciados para deudores y trabajadores corrientes, aquello significaba exactamente lo contrario para los acreedores de la nación: una constante reducción del valor de los activos y la inutilidad de la inversión en sí misma. A finales de la década de 1970, esta situación provocó una profunda oposición antigubernamental entre perfiles neoliberales del libre mercado como Rose y Milton Friedman, quienes acusaban a la Reserva Federal de defraudar a los inversores mediante la manipulación de la oferta monetaria.¹¹

Para la clase inversora, la sensación de crisis se vio agravada por el hecho de que los sindicatos obreros de los años setenta eran capaces de resistir cualquier intento de bajada salarial como respuesta a la inflación. Quienes poseían negocios lamentaban el hecho de que los crecientes costes de producción no podían compensarse con el correspondiente aumento de la productividad laboral, en tanto se enfrentaban a una mano de obra cada vez más militante e intranquila. Del mismo modo, las corporaciones estadounidenses no tenían forma de recuperar las pérdidas aumentando los precios, ya que ahora afrontaban crecientes presiones competitivas por parte de Europa y Japón. La progresiva influencia política del trabajo organizado se reflejaba en el hecho de que los salarios seguían subiendo en un contexto de gran desempleo. Este fenómeno, conocido como estanflación, confundió las predicciones de la economía keynesiana de posguerra que, en forma de la llamada curva de Phillips, postulaban «una relación negativa estable entre el nivel de desempleo y la tasa de variación de los salarios».¹² Para la clase empresarial e inversora, la estanflación era una señal de que el consenso keynesiano entre el trabajo y el capital había superado el umbral de su utilidad política. Dicho de otra manera, lo que parecía una solución de consenso entre las partes a raíz de la Gran Depresión, ahora parecía empoderar a la clase trabajadora por encima de la clase inversora.

Hoy son varias las voces académicas que defienden que el shock Volcker de 1979 debería entenderse como una respuesta política concertada ante la creciente militancia de la clase trabajadora fordista. En su iluminador análisis sobre este periodo, los economistas políticos Leo Panitch, Sam

¹⁰ Greider, *Secrets of the Temple...*, pp. 40-42.

¹¹ Rose y Milton Friedman dijeron lo siguiente sobre el aumento del populismo antigubernamental en la década de 1970: «La primera reacción es el resentimiento, la segunda es intentar superar los obstáculos, por último, llega un declive del respeto a la ley en general. Esta última consecuencia es deplorable, pero inevitable». Milton Friedman y Rose Friedman, *Free to Choose: A Personal Statement*, Nueva York, Harcourt Brace Jovanovich, 1980, p. 289 [ed. cast. *Libertad de elegir*, trad. por Carlos Rocha Pujol, Madrid, Gota a Gota Ediciones, 2008].

¹² Milton Friedman, «Nobel Prize Lecture: Inflation and Unemployment», *Journal of Political Economy*, vol. 85, núm. 3, 1977, p. 454.

Gindin y Edward Dickens nos recuerdan que Arthur Burns, presidente de la Reserva Federal entre febrero de 1970 y febrero de 1978, atribuyó abiertamente el problema de la estanflación al poder arrogante del sindicalismo y al gasto en bienestar social que, bajo su punto de vista, servía para financiar las huelgas.¹³ Estos teóricos realizan la imprescindible tarea de recuperar la cuestión de las políticas de clase en la historiografía de la inflación. Sin embargo, tienen menos éxito al dar cuenta de la especial atención que se prestó a los ataques al bienestar social durante este periodo y del tono moralizante con el que se llevaron a cabo. Al haber adoptado una percepción unificada de la clase trabajadora, no logran explicarnos por qué los diagnósticos contemporáneos de la crisis se centran con tanta insistencia en un programa de bienestar concreto, Aid to Families with Dependent Children [AFDC, Ayuda a Familias con Niños Dependientes], ni por qué ese programa terminó por asociarse a la crisis generalizada de la familia estadounidense. Por lo tanto, tampoco pueden explicar cómo la problemática de la disfunción familiar se convirtió en un elemento tan central en la comprensión popular de la inflación, ni por qué la respuesta a la inflación de la era Reagan dispararía los valores familiares hasta la primera línea de la política estadounidense durante las décadas siguientes. Sin embargo, para quienes comentaban contemporáneamente, la apuesta es clara: la estanflación era un problema no solo porque sesgaba el consenso fordista a favor de la clase trabajadora, sino porque además amenazaba con socavar los pilares normativos del salario familiar fordista.

De hecho, a finales de la década de 1970, distintas voces de todo el espectro político estaban de acuerdo en que la inflación representaba una amenaza para el tejido moral de la sociedad estadounidense. En un guiño al trabajo de Friedrich Hayek, el presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, describió la inflación como una «cuestión moral».¹⁴ «Erosiona la confianza, en concreto, la confianza en el gobierno. Es responsabilidad del gobierno mantener el valor de la divisa que emite. Y si no logra hacerlo, socavará un pilar fundamental de la confianza en sí mismo».

¹³ A este respecto, véase Leo Panitch y Sam Gindin, *The Making of Global Capitalism: The Political Economy of American Empire*, Nueva York, Verso, 2012, pp. 164-72, y Edwin Dickens, «The Federal Reserve's Low Interest Rate Policy of 1970-72: Determinants and Constraints», *Review of Radical Political Economics*, vol. 28, núm. 33, 1996, pp. 115-125.

¹⁴ Entrevista con Paul Volcker, transcripción de *Commanding Heights*, PBS, disponible on line en http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/shared/minitext/int_paulvolcker.html (consultado por última vez el 1 de diciembre de 2015). William L. Silber atribuye la permanente desconfianza de Volcker en la inflación a la influencia de Friedrich Hayek, su «autor favorito cuando estudiaba en Princeton». William S. Silber, *Volcker: The Triumph of Persistence*, Nueva York, Bloomsbury Press, 2012, p. 33. Según Volcker, «las palabras de Hayek vincularon para siempre la inflación y la decepción en lo más profundo de mi cabeza. Y esa conexión, que socava la confianza en el gobierno, es el gran mal de la inflación» (ibídem). En Princeton, Volcker también estuvo muy influido por las opiniones antinflacionistas de su profesor de economía, Friedrich Lutz, cercano a las escuelas austriaca y ordoliberal del neoliberalismo.

Hubo quienes trazaron una línea de causalidad directa entre esta erosión en la confianza política y la ruptura de las estructuras familiares tradicionales. El monetarista Milton Friedman entendía la inflación como una peligrosa distorsión del dinero que socavaba su neutralidad intrínseca e imponía un impuesto fraudulento a la clase inversora. Para Friedman, la inflación era ante todo una consecuencia del excesivo crecimiento de la oferta monetaria y, sin embargo, la oferta monetaria también se entrelazaba con la política fiscal cuando el gobierno pagaba los generosos programas de bienestar social monetizando la deuda en lugar de subiendo los impuestos o solicitando préstamos.¹⁵ Así, la inflación no solo era un mal en sí misma, también había servido para financiar programas de bienestar «cuyo mayor mal [era] socavar el tejido de la sociedad», es decir, los incentivos naturales de la «familia» y el «mercado».¹⁶ Los economistas de la teoría de la elección pública de la Escuela de Virginia, James Buchanan y Richard Wagner, apreciaron una relación más directa incluso entre la inflación y la crisis moral. A diferencia del monetarista Friedman, los economistas de la Escuela de Virginia expusieron una teoría fiscal de la inflación que señalaba al déficit gubernamental como causa principal de la inestabilidad monetaria. En consecuencia, Buchanan y Wagner no dudaron en atribuir la inflación al declive de la «vieja religión fiscal» que años antes había comprometido a gobiernos y hogares a un presupuesto equilibrado y a una austeridad en el día a día.¹⁷ Defendían que al generar incertidumbre sobre el futuro valor del dinero, la inflación tenía el efecto de acortar el horizonte temporal y provocar un deseo de gratificación temeraria entre el público consumidor. Esto a su vez llevaba a una ruptura generalizada de la moralidad pública cuyos efectos fueron visibles en todos los aspectos, desde un aumento de las personas beneficiarias de las políticas de bienestar hasta la promiscuidad sexual. Planteaban:

No hace falta que nos convirtamos en hegelianos puros para albergar la noción general del *zeitgeist*, un «espíritu de la época». Ese espíritu parece funcionar en las décadas de 1960 y 1970 y se evidencia con lo que parece ser la erosión generalizada de las formas públicas y privadas, una actitud cada vez más liberalizada hacia la libertad sexual, un declive de la ética del trabajo puritana, un deterioro en la calidad de los productos, la explosión de las listas de beneficiarios de asistencia social, la corrupción generalizada tanto en el sector privado como en

¹⁵ Friedman y Friedman, *Free to Choose...*, p. 266. La «monetización de la deuda» se produce cuando la Reserva Federal posee bonos del Tesoro y devuelve al Tesoro el dinero ganado con estos bonos. Así, el Tesoro puede pedir dinero prestado sin devolverlo. Milton Friedman consideraba que este tipo de «impresión de dinero» era la causa principal de la inflación.

¹⁶ *Ibidem*, pp. 102-127.

¹⁷ James M. Buchanan y Richard E. Wagner, *Democracy in Deficit: The Political Legacy of Lord Keynes*, Nueva York, Academic Press, 1977, pp. 16-20.

el gubernamental y, por último, el aumento manifiesto en la alienación de los votantes del proceso político [...] Quién puede negar que la inflación [...] desempeña un papel importante en el refuerzo de algunas de las conductas de comportamiento observadas. La inflación destruye las expectativas y crea incertidumbre; aumenta la sensación de injusticia percibida y provoca alienación. Provoca respuestas conductuales que reflejan una reducción generalizada del horizonte temporal. «Disfruten, disfruten», el mantra de nuestro tiempo, se convierte en una respuesta racional en un escenario en el que el mañana es incierto y en el que los planes que hicimos ayer parecen fruto de la locura.¹⁸

Henry Hazlitt, estadounidense hayekiano, es incluso más tajante en su denuncia de los efectos morales de la inflación. «Durante toda gran inflación», escribe, «se da un sorprendente declive de la moralidad pública y privada».¹⁹

Todos estos teóricos pueden clasificarse como neoliberales de una u otra clase, defensores en distinto grado de la teoría de la competencia de precios de la Escuela económica de Chicago, de la teoría de la elección pública de la Escuela de Virginia o de una rama concreta de la economía austriaca derivada de Friedrich von Hayek y Ludwig von Mises.²⁰ Cada uno a su manera estaba relacionado con el resurgimiento y la reinención del liberalismo radical de libre mercado en el pensamiento político y económico estadounidense en la era de posguerra. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, el neoliberalismo planteaba una idea de la inflación que en ciertos aspectos fundamentales coincidía con la de las teorías políticas neoconservadoras, teorías que en otros aspectos se oponían a los preceptos fundamentales del liberalismo económico.

El sociólogo Daniel Bell, por ejemplo, quizás el analista neoconservador de la inflación más conocido, abordó la crisis moral y económica de los años setenta en términos muy similares a los de las ideas neoliberales de la Escuela de Virginia en particular. Su clásico de sociología, *Las contradicciones culturales del capitalismo*, acusaba al Estado de bienestar de debilitar el orden debido de las relaciones familiares y de expandir el consumo más allá de los límites prescritos por el buen criterio protestante.²¹ La inflación, en su opinión, estaba íntimamente conectada con esta ruptura de los

¹⁸ *Ibidem*, pp. 64-65.

¹⁹ Henry Hazlitt, *The Inflation Crisis and How to Resolve It*, Nueva York, Arlington House, 1978, p. 138.

²⁰ Para un análisis profundo sobre las diferentes corrientes que confluyeron en el «colectivo de pensamiento neoliberal», véase Philip Mirowski y Dieter Plehwe, *The Road from Mont Pèlerin: The Making of the Neoliberal Thought Collective*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2009.

²¹ Daniel Bell, *The Cultural Contradictions of Capitalism: Twentieth Anniversary Edition*, Nueva York, Basic Books, 1978 [1996], [ed. cast. *Las contradicciones culturales del capitalismo*, trad. por Néstor A. Míguez, Madrid, Alianza Editorial, 1977].

valores morales. Una y otra vez, el neoliberalismo y el neoconservadurismo se centraban en un programa de bienestar en particular, el Aid to Families with Dependent Children [AFDC, Ayuda a Familias con Niños Dependientes], un programa marginal de ayudas públicas que consumía una proporción mínima del gasto social federal. ¿Cómo llegó a asociarse la gran inflación de la década de 1970 con la ruptura de la familia y por qué la preocupación general se centraba de manera tan obsesiva en este programa de bienestar social?

Para responder a esta pregunta, debemos prestar atención a las sinuosas complejidades del debate político en torno al salario familiar fordista y al bienestar social a finales de los años sesenta y en la década de 1970. Como apunta la historiadora Marisa Chappell, el esfuerzo inicial por ampliar el salario familiar a la población afroamericana a principios de los años setenta dio lugar poco a poco a una oposición integral al salario familiar en sí mismo; una crítica que adquirió mayor resonancia a medida que la inflación se abría paso en la agenda política.²² De hecho, hasta la década de 1960 había existido un consenso bipartidista en torno a la premisa básica del bienestar social redistributivo. Hasta entonces, demócratas y republicanos estaban comprometidos por igual con las políticas redistributivas del salario familiar, aunque les dividiera la cuestión de si debía ampliarse o no a los hombres afroamericanos. Antiguos demócratas (y futuros neoconservadores) como Daniel Patrick Moynihan estaban convencidos de que el salario familiar debía incluir a los hombres afroamericanos, una idea que compartían con muchos perfiles liberales e izquierdistas del movimiento por los derechos al bienestar. Un economista del libre mercado como Milton Friedman prefería la solución radicalmente neutral de un ingreso básico garantizado, canalizado a través del sistema fiscal, aunque, de forma pragmática, también mantuvo su compromiso con un sistema mínimo de redistribución de los ingresos.

A finales de los años setenta, este consenso dio paso a una crítica profunda al Estado de bienestar en sí mismo. Las críticas desde la derecha y desde la izquierda acusaron entonces al AFDC, y por extensión al propio Estado de bienestar, de perjudicar radicalmente a la familia estadounidense y de contribuir al problema de la inflación. En respuesta a esta crisis, exigían una reforma de la asistencia social mucho mayor de la que ellos mismos habían podido imaginar hasta entonces. En ese momento reinaba un consenso en torno a la restricción de los programas de bienestar redistributivos del New Deal y de la Gran Sociedad, incluso aunque hubiera que reforzar la institución privada de la familia como alternativa al bienestar social. Las opiniones reformistas comenzaron a imaginar alternativas al Estado

²² Marisa Chappell, *The War on Welfare: Family, Poverty and Politics in Modern America*, Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 2010.

de bienestar del New Deal echando la vista atrás a tradiciones de ayuda pública mucho más antiguas, aquellas integradas en la costumbre de las leyes de pobres con sus nociones de responsabilidad familiar y personal. Es en este cambio en el que podemos identificar el auge simultáneo del neoliberalismo y del neoconservadurismo como filosofías políticas más maduras. Puede que el neoliberalismo y el neoconservadurismo sean diametralmente opuestos en muchas cuestiones, pero en lo que respecta a los valores familiares, revelan una sorprendente afinidad.

AFDC, asistencia social y salario familiar estadounidense

En muchos aspectos, la controversia en torno al AFDC se explica por la especial posición que tuvo en la historia del Estado de bienestar y del salario familiar en EEUU. A diferencia de muchos Estados de bienestar europeos y, de hecho, a diferencia de las políticas de bienestar de la Era Progresista estadounidense, el New Deal no supuso una política familiar abiertamente sexista, cosa que el católico Daniel Moynihan lamentaría.²³ Sin embargo, en el plano administrativo e institucional, el New Deal establecía una serie de distinciones de categorías abstractas que sutilmente servían para reforzar el privilegio del hombre blanco como sostén de la familia. Al clasificar a la ciudadanía según la categoría supuestamente neutral de su estado laboral, el New Deal creó un sistema de bienestar ampliamente dividido en torno a las líneas de género y de raza. Además, la panoplia de programas que supuso estaba a cargo de la jurisdicción de diferentes niveles de gobierno, en la que los programas federales administraban un sistema de beneficios mucho más impersonal, generoso y predecible que los estados, que tenían libertad para ejercer amplia autonomía en la distribución de la asistencia social. Además, la jerarquización de los beneficios de la asistencia social estaba inscrita en el propio diseño de los programas de bienestar: los programas de seguridad social dirigidos a quienes habían trabajado toda la vida y que se nutrían de contribuciones de trabajadores o empleadores disfrutaban de un estatus social mucho mayor que los programas de asistencia pública reservados a la población empobrecida no contribuyente.²⁴ La asistencia pública se presentaba bajo el sello de programas de alivio y dependía en gran medida de la opinión pública dominante en torno a si la población pobre era digna o no de recibirla. El ADC cayó en el lado equivocado de estas divisiones institucionales.

²³ Suzanne Mettler, *Dividing Citizens: Gender and Federalism in New Deal Public Policy*, Ithaca (NY), Cornell University Press, 1998. Daniel Patrick Moynihan, «A Family Policy for the Nation», en Lee Rainwater y William L. Yancey, *The Moynihan Report and the Politics of Controversy*, Cambridge (MA), MIT Press, 1967 [1966], pp. 387-388.

²⁴ Mettler, *Dividing Citizens...*, p. 54.

Aid to Dependent Children [ADC, Ayuda a la Infancia Dependiente], como se llamaba inicialmente el AFDC, fue uno de los programas creados por la Ley de Seguridad Social de 1935. A pesar de que se trataba de un programa de asistencia pública y de estar sujeto a un profundo escrutinio público, así como al criterio estatal, heredó su estructura original del antiguo programa Mothers' Pensions [Pensiones de Maternidad] y, por lo tanto, gozaba de cierto respeto.²⁵ Pensiones de Maternidad había representado el ideal del salario familiar en la Era Progresista, según el cual las mujeres blancas y sus descendientes debían verse respaldadas por el Estado en caso de que falleciera su marido. La Ley de Seguridad Social nacionalizó este programa y reprodujo muchos de sus ideales normativos. Sin embargo, a diferencia de los programas de seguridad social, muy regulados por el gobierno federal, el ADC permitía a los estados una libertad considerable para decretar y asignar fondos, lo que supuso que muchos estados financiaran escasamente el programa y fueran muy restrictivos en la asignación de beneficios.²⁶ Muchos estados replicaron los mandatos de la Era Progresista que favorecían a las viudas frente a las mujeres divorciadas o que nunca se habían casado, y la mayoría de estados sureños excluyó a las mujeres afroamericanas argumentando que era necesario que trabajaran fuera de casa. El predecible resultado fue que, al menos en los primeros años del programa, la mayoría de personas beneficiadas por el ADC eran blancas.²⁷

Sin embargo, en 1939 se modificó la Ley de Seguridad Social para permitir que las viudas, antes amparadas por el ADC, accedieran al Old Age Insurance [OAI, Seguro de Vejez] si habían estado casadas con hombres beneficiarios de este programa.²⁸ Esta decisión permitía a las mujeres beneficiarias acceder a una prestación de salario familiar mucho más respetable, basada en el vínculo de la mujer con un hombre trabajador independiente en un puesto de trabajo estándar de larga duración. No obstante, el ascenso de cierto tipo de mujer, fundamentalmente blanca y de clase media, a un programa de seguridad social más respetable también condujo a un mayor desprestigio del estatus del ADC. De forma predeterminada, el ADC quedaba entonces reservado para viudas de hombres más pobres y para madres no casadas, divorciadas o separadas. Poco a poco se asoció cada vez más a mujeres afroamericanas.

En los años de posguerra, la composición del ADC cambió drásticamente a medida que el número de mujeres afroamericanas inscritas superaba el de mujeres blancas, además del hecho de que más divorciadas y solteras se sumaron a las listas.²⁹ Estos cambios estaban ligados a la transformación de la

²⁵ *Ibidem*, pp. 143 y 213.

²⁶ *Ibidem*, p. 142. Gwendolyn Mink, *Welfare's End*, Ithaca (NY), Cornell University Press, 1998, p. 48.

²⁷ Mink, *Welfare's End...*, p. 46.

²⁸ Mettler, *Dividing Citizens...*, p. 167; Mink, *Welfare's End...*, p. 46.

²⁹ Mettler, *Dividing Citizens...*, p. 169; Mink, *Welfare's End...*, p. 48.

economía sureña de las plantaciones y a la composición racial de la mano de obra fordista: la mecanización de la agricultura en el sur obligó a gran parte de la población afroamericana a migrar a las ciudades del norte del cinturón del metal en las que ocupaban los puestos de las fábricas no sindicados y no asegurados.³⁰ Eran pocos los hombres afroamericanos que disfrutaban de los privilegios del salario familiar de la mano de obra industrial sindicada y, como población excedente de trabajadores baratos, los afroamericanos solían padecer niveles desproporcionados de desempleo incluso en los años de bonanza de la década de 1960. Sin embargo, en el norte la normativa estatal que regulaba la asignación de los beneficios del ADC solía ser menos restrictiva que la del sur. Así, en 1961 el 48 % de las mujeres afroamericanas percibía el ADC, muchas de ellas madres solteras; aunque, como apunta Premilla Nadesan, las cifras eran mucho más bajas de lo que cabría esperar atendiendo a las tasas de pobreza y de nacimientos fuera del matrimonio.³¹

El ADC siempre había sido un programa restrictivo, pero ante lo que la opinión pública consideraba una grave afrenta a los ideales de maternidad estadounidense blanca, muchos estados respondieron a las modificaciones de 1939 reforzando el esfuerzo por vigilar la moralidad de quienes se beneficiaban de esta asistencia social. A finales de la década de los cincuenta, incluso en los estados del norte, que hasta entonces habían sido más generosos, se reforzaron viejas leyes o se inventaron nuevas para limitar los pagos del ADC a madres que hasta entonces eran beneficiarias. Estas leyes supusieron una cierta negativa del ideal del salario familiar blanco que representaban las Mothers' Pensions, las numerosas exclusiones sirvieron para definir las fronteras de la reproducción subvencionada por el Estado. El criterio de «un hombre en casa» permitió que los estados negaran beneficios a las mujeres que vivían con un hombre o que mantenían una relación sexual con él, por considerarlo un sustituto apropiado de la función paternalista del Estado; las leyes de «hogares apropiados» permitían que trabajadores sociales denegaran ayudas a mujeres no casadas o inmorales; las leyes de «madres empleables», a las que se solía apelar en el sur, consideraban que las mujeres afroamericanas eran trabajadoras imprescindibles fuera del hogar y por lo tanto las excluían del ideal doméstico de maternidad blanca; además las leyes de residencia intentaban desalentar a la migración interestatal a la hora de solicitar ayudas.³²

A pesar de la aparente neutralidad de la legislación federal sobre bienestar, en la práctica, los programas de asistencia pública estaban sujetos a una retahíla de leyes administrativas estatales que vigilaban con

³⁰ Premilla Nadesan, *Welfare Warriors: The Welfare Rights Movement in the United States*, Londres, Routledge, 2005, pp. 7-8.

³¹ *Ibidem*, p. 7. Véase también, Mettler, *Dividing Citizens...*, p. 169.

³² Mettler, *Dividing Citizens...*, pp. 171-74. Nadesan, *Welfare Warriors...*, p. 6.

duroza las fronteras morales y raciales del salario familiar fordista. Estas normativas raciales y sexuales resultaron ser un pilar fundamental del orden social del fordismo estadounidense, determinando quién podría acogerse y quién quedaría fuera de los beneficios redistributivos del salario social. No obstante, en los años sesenta, algunas de las formas más atroces de «poder policial» representadas en las leyes administrativas estatales se vieron desafiadas a medida que las personas beneficiarias se organizaron y que profesionales de la abogacía por los derechos civiles trasladaron su activismo jurídico al ámbito del bienestar.³³ Durante este periodo, la Corte Suprema estadounidense se mostró favorable a demandantes que cuestionaban el derecho de los estados a desviarse de los términos generales de la legislación federal sobre bienestar. En una serie de casos de prueba iniciados por activistas por los derechos del bienestar y profesionales de la abogacía pro interés público, la Corte Suprema limitó la prerrogativa de los organismos estatales de juzgar la moralidad percibida de quienes recibían asistencia social. En un caso especialmente significativo, *King vs. Smith*, celebrado en 1968, la Corte Suprema de EEUU anuló por unanimidad la ley del estado de Alabama del «padre sustituto», que negaba ayudas a las mujeres que mantenían relaciones sexuales con un hombre.³⁴ La decisión enfureció a figuras republicanas conservadoras y demócratas sureñas, que defendían que las mujeres afroamericanas que recibían asistencia social se beneficiaban de un programa que no había sido diseñado para ellas. Sin embargo, también disgustó a un número sorprendente de voces liberales e izquierdistas que consideraban que el activismo por la asistencia social debía centrarse en la tarea de restaurar y promover la figura del hombre afroamericano como sostén de la familia, en lugar de subvencionar el estilo de vida no normativo de las mujeres solteras afroamericanas.

Moynihán, la izquierda y el salario familiar negro

En junio de 1965, el presidente Johnson pronunció un discurso memorable ante el alumnado a punto de graduarse de la Universidad de Howard, una institución tradicionalmente afroamericana con fuertes lazos con el movimiento por los derechos civiles. Al reflexionar sobre las reformas de la Gran Sociedad, Johnson reconocía que ni el liberalismo de las oportunidades

³³ Felicia Kornbluh, *The Battle for Welfare Rights*, Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 2007, pp. 67-68. Sobre el papel concreto del derecho administrativo estatal y los llamados poderes policiales del derecho estadounidense, véase William J. Novak, *The People's Welfare: Law and Regulation in Nineteenth-Century America*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1996. En el derecho constitucional estadounidense, el poder policial del estado, es decir, su facultad de regular todo, desde la higiene pública hasta las infraestructuras y la moralidad, siempre que no entre en conflicto con la ley federal, está autorizado por la Décima Enmienda.

³⁴ Kornbluh, *The Battle for Welfare Rights...*, pp. 67-68; Mink, *Welfare's End...*, p. 50.

ni el reconocimiento formal de los derechos civiles serían suficientes para superar el indeleble legado de la discriminación racial en Estados Unidos. Afirmó que el factor más importante tras la persistencia de la desventaja negra «era la descomposición de la estructura familiar negra».³⁵ En consecuencia, cualquier esfuerzo de ir más allá de la agenda de la Gran Sociedad exigiría tanto discriminación positiva como un programa exhaustivo con el que fortalecer la familia afroamericana.

El discurso de la Universidad de Howard lo habían redactado Richard N. Goodwin y Daniel Patrick Moynihan, asesores de la administración Johnson más temprana, y reflejaba el contenido de un informe, por entonces aún no publicado, que Moynihan había escrito recientemente. El informe, titulado *The Negro Family: The Case for National Action* [Familias negras: el caso de la acción nacional], resultó ser mucho más divisorio que el discurso de Johnson en el acto de graduación del alumnado afroamericano. En este estudio, Moynihan reflexiona sobre las tendencias de posguerra en la formación de familias blancas y negras, la cambiante composición de los roles de bienestar y el auge de las tasas de desempleo entre jóvenes negros varones (todos ellos temas habituales entre quienes leían la prensa popular); el estudio ofrece además un análisis histórico de amplio recorrido para explicar cada fenómeno. Para Moynihan, la situación contemporánea de la población afroamericana que vivía en los centros urbanos era inequívocamente patológica. Las altas tasas de criminalidad, la alienación juvenil y el desempleo eran muestras de que algo iba realmente mal; y, en última instancia, este malestar podía ser la causa de la desintegración de la familia negra. Moynihan se extendía en los detalles de esta aparente desintegración: las crecientes tasas de separación, divorcio, crianza de niños nacidos fuera del matrimonio y familias encabezadas por mujeres en las que estas asumían un papel dominante y de autoridad antinatural.

Como señalarían muchas voces críticas desde la izquierda, el Informe Moynihan ignoraba sutilmente los factores estructurales de la segregación urbana, la discriminación y la desventaja educativa que podrían implicar el racismo contemporáneo de la población blanca en la reproducción de la pobreza, refiriéndose en cambio al lejano crimen de la esclavitud como factor causal. Al destruir el orden apropiado de las relaciones de género de la familia afroamericana, la esclavitud había engendrado una estructura de parentesco patológica que se transmitía de generación en generación y que ahora «lograba perpetuarse sin ayuda del mundo blanco».³⁶ Aun

³⁵ Presidente Lyndon B. Johnson, «The Howard University Address», en Lee Rainwater y William L. Yancey, *The Moynihan Report and the Politics of Controversy*, Cambridge (MA), MIT Press, 1967, p. 130.

³⁶ Daniel Patrick Moynihan, «The Moynihan Report: The Negro Family: The Case for National Action», en *ibidem*, p. 93.

así, Moynihan reconocía que la política de bienestar social del New Deal también había desempeñado un papel fundamental exacerbando el declive de la familia negra. En concreto, señaló al AFDC como responsable de permitir que este proceso de declive se diera tan rápido y en tan amplia medida como había hecho en los años sesenta. «La continua expansión de este programa de bienestar», escribe, «puede tomarse como una medida de la continua desintegración de la estructura de la familia negra durante la última generación en Estados Unidos».³⁷

En 1965, Daniel Patrick Moynihan todavía no se consideraba a sí mismo neoconservador. A pesar de que Irving Kristol señala ese año como el del nacimiento del movimiento neoconservador,³⁸ por aquel entonces Moynihan sigue siendo un auténtico demócrata del New Deal, uno con inclinaciones definitivamente socialdemócratas. Ferviente defensor del programa de la Gran Sociedad de Johnson, Moynihan estaba a favor de ampliar el Estado de bienestar del New Deal más allá de su circunscripción original e incluir a los hombres afroamericanos en el salario familiar. Las ideas de Moynihan sobre el bienestar se basaban en una filosofía social-católica que durante años había considerado el Estado de bienestar como el conducto ideal para los valores familiares.³⁹ Sin embargo, le preocupaba que el individualismo abstracto que favorecía el liberalismo estadounidense hubiera socavado el «familiarismo» implícito en la visión del New Deal, permitiendo que un programa como el AFDC subvencionara formas de sexualidad francamente patológicas en cuanto se cambiaba de circunscripción.⁴⁰ Para solucionarlo, urgió a Johnson a adoptar una «política de familia nacional» similar a la Ley de Empleo de 1945 que incluyera a todas las razas en sus disposiciones.⁴¹

El Informe Moynihan se recibió con hostilidad entre la opinión liberal e izquierdista, que, en su lugar, perseguían el objetivo de una reforma progresista de la asistencia social. A mediados de los años sesenta, se generó una coalición de perfiles liberales de clase media y de izquierda radical para presionar por una ampliación mayor y de carácter más activa de la asistencia social que la que preveía Johnson con su más bien tibia reforma de la Gran Sociedad. Esta coalición incluía sindicatos obreros bien establecidos, asociaciones en defensa de la asistencia social, organizaciones benéficas religiosas, grupos por los derechos civiles,

³⁷ *Ibidem*, p. 60.

³⁸ Irving Kristol, «Preface» en *Reflections of a Neoconservative: Looking Back, Looking Ahead*, Nueva York, Basic Books, 1983, p. x.

³⁹ Sobre la relación entre la filosofía católica estadounidense y el New Deal, véase Kenneth J. Heineman, *A Catholic New Deal: Religion and Reform in Depression Pittsburgh*, University Park, Penn State University Press, 1999.

⁴⁰ Moynihan, «A Family Policy for the Nation...», pp. 387-388 y 391.

⁴¹ *Ibidem*, p. 393.

trabajadores sociales del espectro liberal y, más a la izquierda, grupos más radicales como el movimiento Black Nationalist [Nacionalismo negro], la incipiente National Welfare Rights Organization [Organización Nacional de Derechos del Bienestar] y activistas feministas. De manera independiente, este activismo había desarrollado un análisis de las injusticias raciales que respondía precisamente al malestar que había descrito Moynihan, pero cuyas causas situaba cuidadosamente fuera de la comunidad afroamericana, en la discriminación estructural constante. Muchas de estas personas respondieron con enfado al tono del Informe Moynihan, acusándolo de complacer las explicaciones psicoculturales vigentes de la opresión afroamericana. Esta reacción hostil es la que se suele recoger en los relatos contemporáneos del Informe Moynihan. De este modo y como recientemente ha expuesto en profundidad la historiadora Marisa Chappell, el anatema en torno al nombre de Moynihan ha eclipsado la considerable afinidad entre su ideología del salario familiar y las concepciones izquierdistas y liberales de la reforma de la asistencia social de aquel entonces.⁴² Puede que la coalición liberal e izquierdista por la reforma de la asistencia social se opusiera a las causas de la desventaja afroamericana que proponía Moynihan; sin embargo, compartían un acuerdo fundamental en torno al hecho de que dicha desventaja perjudicaba a la familia y, por lo tanto, cualquier solución a largo plazo para el racismo exigía un esfuerzo por restaurar la familia afroamericana y la posición del hombre dentro de ella. Este consenso caló en todo el espectro de participantes del movimiento por la reforma de la asistencia social, liberales e izquierdistas. Líderes reformistas por los derechos civiles como Martin Luther King simpatizaban con los hallazgos del informe y líderes negros musulmanes o nacionalistas negros estaban abiertamente de acuerdo con sus sugerencias sobre el matriarcado patológico y la castración masculina.⁴³ Pero incluso quienes pertenecían a la izquierda radical obrera se mostraban afines a los argumentos de Moynihan. Pocos años después de la publicación del Informe, surgía un nuevo activismo obrero en las plantas de automóviles de Detroit; trabajadores afroamericanos, tanto hombres como mujeres, adoptaban tácticas de huelga fuera del marco de negociación salarial de los sindicatos obreros del New Deal. En 1969, reunidos bajo el paraguas de la League of Revolutionary Black Workers [Liga de Trabajadores Negros Revolucionarios] estos sindicatos renegaron abiertamente de los métodos reformistas y asimilacionistas del activismo por los derechos civiles, así como de los sindicatos obreros del New Deal. Sin embargo, en ningún caso se opusieron a los argumentos

⁴² Marisa Chappell, *The War on Welfare...*, p. 37.

⁴³ *Ibidem*, p. 39. Peter Steinfels, *The Neoconservatives: The Origins of a Movement*, Nueva York, Simon & Schuster, 2013 [1979], p. 137.

del salario familiar esgrimidos por Moynihan; de hecho, incluso a pesar de que la primera huelga salvaje fuera impulsada por mujeres, los sindicatos revolucionarios consideraban que la restauración de la masculinidad afroamericana, mediante la ampliación del salario familiar del New Deal a los hombres negros, era el objetivo último de su activismo fuera de la legalidad.⁴⁴

Mientras tanto, el sociólogo Richard Cloward, quien ayudó a fundar la Organización Nacional de Derechos del Bienestar en 1966, se mostraba tan contundente como Moynihan en su condena del AFDC.⁴⁵ Resulta complicado acusar a Cloward de reformista del New Deal. Junto con Frances Piven, en 1966 escribió la famosa llamada a las armas *The Weight of the Poor: A Strategy to End Poverty* [El peso de los pobres. Una estrategia para acabar con la pobreza], artículo en el que defendía una estrategia de crisis para impulsar una revisión radical del sistema de bienestar estadounidense.⁴⁶ El artículo señalaba el hecho de que el número de personas pobres, que en ese momento recibían ayudas, era mucho menor del que debiera dados los múltiples obstáculos institucionales que impedían que parte de la ciudadanía con derecho a recibir las ayudas se reconociera como tal y pudiera reclamar lo que les correspondía. Piven y Cloward entendían esta discrepancia como un rasgo constitutivo del discurso del derecho: así, su activismo no se basaba tanto en una llamada a los derechos formales, como en una estrategia de sabotaje mediante la atención escrupulosa a la letra de la ley. Si todas las personas pobres con derecho a recibir asistencia social reclamaran en masa las ayudas, el sistema de bienestar colapsaría y el Estado se vería obligado a instaurar un ingreso mínimo garantizado en su lugar. Esta estrategia se sostenía en la idea de que si se tomaba al pie de la letra la igualdad formal que prometía la legislación sobre bienestar, se podría forzar un cambio más revolucionario en el Estado. A pesar de su radicalismo metodológico, lo que Cloward y Piven querían decir con un ingreso mínimo garantizado era, en realidad, un salario de sostén de la familia. Así, donde Moynihan sugería que las crecientes inscripciones en el AFDC eran un síntoma de la desintegración de las familias negras, Cloward y Piven fueron más allá e identificaron al AFDC como el *motivo* fundamental de la ruptura familiar. En uno de sus análisis publicado en *Nation* sobre los programas locales en los que formaban a madres beneficiarias de asistencia social para trabajar, se quejaban de que:

⁴⁴ David M. Lewis-Colman, *Race Against Liberalism: Black Workers and the UAW in Detroit*, Champaign, University of Illinois Press, 2008, pp. 97-105.

⁴⁵ Sobre el papel de Richard Cloward en la Organización Nacional de Derechos del Bienestar, véase Chappell, *The War on Welfare...*, p. 46; Nadesan, *Welfare Warriors...*, p. 143; Kornbluh, *The Battle for Welfare Rights...*, pp. 36-38.

⁴⁶ Richard A. Cloward y Frances Fox Piven, «The Weight of the Poor: A Strategy to End Poverty», *The Nation*, núm. 202, 2 de mayo de 1966, pp. 510 y 513-514.

Esa clase de medidas refuerzan el papel de la mujer como sostén de la familia en hogares en los que las mujeres ya son cabeza de familia. No obstante, los hombres que se quedan sin trabajo se emparejarán, como los demás hombres, pero no es tan probable que se casen. Nuestra sociedad ha preferido ocuparse de las familias resultantes encabezadas por mujeres cubriendo a las madres solteras y a la infancia dependiente con asistencia social, en lugar de poniendo a los hombres a trabajar, sustituyendo así a los hombres asalariados por máquinas de escribir cheques. De esta manera, hemos despojado al hombre de su masculinidad, a las mujeres de sus maridos y a los niños de sus padres. Para crear una familia monógama estable, tenemos que proporcionar a los hombres (especialmente a los hombres negros) la oportunidad de ser hombres y eso implica permitirles el desempeño profesional. A largo plazo, las mujeres abandonarán las listas de la asistencia social, no para trabajar sino para casarse.⁴⁷

Esta afirmación, publicada el mismo año que el Informe Moynihan, da fe de la considerable afinidad política entre Moynihan y las voces fundadoras de la Organización Nacional de Derechos del Bienestar. Por mucho que estas posiciones izquierdistas renegaran de los detalles del Informe Moynihan, había poco que distinguiera sustancialmente sus planteamientos. Sin duda, las políticas del salario familiar de activistas por el bienestar como Piven y Cloward no recogían el espectro de posiciones que existía dentro de la Organización Nacional de Derechos del Bienestar. De hecho, muchas de las madres activistas por el bienestar, las que más adelante asumirían posiciones más destacadas en la organización, articulaban un discurso mucho más complejo sobre la intersección de la raza, la sexualidad y el género y se oponían al salario familiar en sí mismo.⁴⁸ Sin embargo, fue el activismo del hombre como sostén de la familia ejercido por izquierdistas como Cloward y Piven el que logró una mayor audiencia entre los movimientos de la New Left [Nueva Izquierda] y del nacionalismo negro. La proximidad práctica, aunque se negara, entre el demócrata Moynihan y el activismo por el bienestar de la Nueva Izquierda no tardaría en hacerse aún más llamativa cuando ambos se manifestaran a favor de un sistema de salario familiar basado en un ingreso mínimo garantizado.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 35.

⁴⁸ A este respecto, véase Kornbluh, *The Battle for Welfare Rights...*, pp. 99-100, 168-169. Kornbluh es especialmente esclarecedor en cuanto a las posiciones políticas mantenidas por las activistas afroamericanas, como Beulah Sanders, que se oponían *tanto* a los requisitos de la prestación social condicionada (por considerar que las empujaría de nuevo al servicio doméstico) *como* al papel de ama de casa no remunerada que defendían los líderes de la Organización Nacional de Derechos del Bienestar.

Nixon y el salario familiar negro: el exorcismo del AFDC

En junio de 1969, la Organización Nacional de Derechos del Bienestar lanzó oficialmente una nueva campaña a favor de un ingreso anual garantizado de 5.500 dólares. Esta campaña se diseñó para acabar gradualmente con el AFDC, en tanto programa estigmatizado e independiente, y para garantizar un ingreso vital a todas las personas beneficiarias de asistencia social. En agosto de 1969, aconsejado por Moynihan, el presidente Nixon anunció un programa similar que sustituiría al AFDC de base estatal, por uno de carácter federal más seguro conocido como el Family Assistance Plan [Plan de Asistencia Familiar]. A diferencia del AFDC, este último se dirigía a las familias trabajadoras y prometía ampliar las garantías de ingreso mínimo a hombres, a familias con dos progenitores y a quienes desempeñaran trabajos mal remunerados.⁴⁹ Nixon, que adoptó el plan desoyendo el consejo de sus colegas más conservadores, concebía la reforma como una manera de ampliar el salario familiar a los hombres negros sin dejar de atender el resentimiento de los trabajadores mal pagados, en su mayoría blancos, que se sentían excluidos de los programas vigentes de asistencia pública.

En su amplia concepción, el Plan de Asistencia Familiar se inspiraba en los argumentos de Moynihan a favor del salario familiar negro. Al ampliar la asistencia social a los hombres y a los hogares con dos progenitores, la reforma propuesta se diseñó para acabar con lo que muchas opiniones consideraban elementos perversos y disuasorios para la formación de familias incluidos en el programa AFDC.⁵⁰ Su modelo práctico se basaba en la idea de un impuesto negativo sobre la renta, propuesto por primera vez por

⁴⁹ Para una historia general del Plan de Asistencia Familiar, véase Brian Steensland, *The Failed Welfare Revolution: America's Struggle Over Guaranteed Income Policy*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2008. Esta historia, sin embargo, trata poco el movimiento por los derechos del bienestar, y mucho menos las tensiones en su seno.

⁵⁰ Felicia Ann Kornbluh esclarece la política de género del Plan de Asistencia Familiar de la siguiente manera: «La administración Nixon planteó dos argumentos de género a favor del Plan de Asistencia Familiar. El primero era que el AFDC y, por extensión, todo el sistema de Estado del New Deal discriminaba a los hombres. Por lo tanto, su propósito era deshacer la "injusticia flagrante" en la asistencia pública, y "el tratamiento desigual de las familias encabezadas por hombres en comparación con las encabezadas por una mujer". La mayor innovación de la legislación fue la ampliación de la ayuda pública federal a los hombres y a las parejas trabajadoras. La población objetivo del Plan de Asistencia Familiar era aquella "trabajadora y pobre", definida por el secretario Finch como "familias pobres encabezadas por un hombre que trabaja a tiempo completo". El segundo argumento era que el AFDC rompía familias nucleares que de otro modo funcionarían... El Plan de Asistencia Familiar se diseñó para resarcir el daño permitiendo que los hombres con bajos ingresos permanecieran con sus esposas (o novias) e hijos sin poner en peligro el acceso de la familia a las ayudas. La administración Nixon llegó a confiar en que el Plan de Asistencia Familiar promoviera la convivencia o el matrimonio». Kornbluh, *The Battle for Welfare Rights...*, p. 148.

Milton Friedman en 1962.⁵¹ Friedman había concebido el impuesto negativo como una forma de canalizar la redistribución de ingresos mediante el sistema fiscal federal, acabando así con los elevados costes administrativos asociados a los programas de bienestar específicos. Quienes percibieran ingresos por debajo de cierto umbral, recibirían a cambio una parte de sus exenciones y deducciones fiscales no utilizadas, lo que garantizaría un ingreso mínimo anual. Al sustituir la asistencia social en especie por una prestación más líquida, dinero, Friedman pensó que el impuesto negativo sobre la renta animaría a la ciudadanía empobrecida a comportarse como agentes responsables en el mercado libre. También especificó que quienes percibieran bajos ingresos deberían seguir recibiendo subvenciones para evitar el peligro moral de promover el hecho de no trabajar. Con este sistema de redistribución, mínimo pero eficiente, el impuesto negativo sobre la renta sortearía el paternalismo incapacitante del Estado de bienestar y socavaría la enquistada base de poder de la burocracia del bienestar liberal.⁵²

El hecho de que la propuesta de Nixon de un salario familiar ampliado atrajera a una alianza tan amplia de defensores evidencia la atmósfera política tan distinta de la década de 1960; entre quienes se adherieron al presidente republicano y conservador moderado Richard Nixon se encuentran el neoliberal Milton Friedman, el demócrata Moynihan, perfiles liberales y de izquierdas del Movimiento Nacional por los Derechos del Bienestar y economistas liberales como John Kenneth Galbraith y James Tobin. Durante este periodo de crecimiento económico continuado, el expansionismo fiscal keynesiano era una ortodoxia que compartían la izquierda y la derecha. En una reflexión sobre la reforma de la asistencia social federal publicada en *National Catholic Weekly Review* en 1966, Moynihan señalaba que «Estados Unidos llega ahora al 53.º mes de expansión económica ininterrumpida, el periodo más largo y sólido de la historia en tiempos de paz. En este breve y fugaz periodo [...] hemos elevado el Producto Interior Bruto a cerca de 160 mil millones de dólares estadounidenses».⁵³ Concluía afirmando que era el momento perfecto para complementar el impulso fundacional de la reforma social del New Deal con una segunda generación de políticas basadas en la familia.

Este extraordinario consenso se mantuvo durante los primeros años de la administración Nixon, incluso cuando la inflación se volvió un problema visible. Esto no quiere decir que las voces defensoras del salario

⁵¹ Milton Friedman y Rose Friedman, *Capitalism and Freedom*, Chicago, University of Chicago Press, 1962, pp. 192-195.

⁵² Friedman y Friedman, *Free to Choose...*, pp. 120, 123.

⁵³ Moynihan, «A Family Policy for the Nation...», p. 386. Al recordar los primeros años de la administración Nixon, Moynihan señalaba que la cuestión del coste apenas entraba en los debates en torno al Plan de Asistencia Familiar. Daniel Patrick Moynihan, «How the Great Society "Destroyed the American Family"», *The Public Interest*, núm. 108, 1992, p. 60.

familiar negro de Nixon compartieran exactamente la misma visión sobre la reforma. Entre quienes defendían el plan, ya había incipientes diferencias de opinión, Friedman, por ejemplo, concebía una reforma más frugal de la redistribución del bienestar que la que defendían las opiniones liberales o de izquierdas (en correspondencia privada, reconoció que pensaba que el impuesto negativo sobre la renta era un paso práctico hacia la eliminación de todos los programas de bienestar social).⁵⁴ No obstante, con la excepción de unas pocas voces feministas disidentes del Movimiento Nacional por los Derechos del Bienestar, reinaba un consenso en torno a que la asistencia social tal como existía menoscababa la familia tradicional. También convenían en la necesidad de mantener cierta clase de sistema de bienestar redistributivo. En los años sesenta, hasta Friedman reconoce la necesidad de una redistribución del programa de ingreso mínimo para mejorar los inevitables fallos de mercado de la beneficencia privada.

En 1970, la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Demócrata, aprobaba las recomendaciones de Nixon con amplia mayoría. Sin embargo, más adelante, ese mismo año, el Plan de Asistencia Familiar fue rotundamente abatido por una coalición de republicanos y demócratas en el Senado; presagio a su vez de una remodelación a largo plazo de la izquierda y la derecha en el panorama político estadounidense. Pensado para adecuarse a todas las partes interesadas, la versión final del Plan de Asistencia Familiar terminó por decepcionar a todo el mundo. Activistas por los derechos del bienestar criticaban que el plan redujera los beneficios muy por debajo del umbral de la pobreza para la mayoría de personas beneficiarias, que eliminara el derecho a un juicio justo y que recuperara poderes arbitrarios de control.⁵⁵ Economistas de libre mercado como Friedman pensaban que el plan complicaba la burocracia para la asistencia social vigente, en lugar de facilitarla, y que no eliminaba los elementos disuasorios del trabajo de forma suficiente.⁵⁶

Sin embargo, lo que tumbó el plan no fueron tanto estas críticas concretas, como la decisión del propio Nixon de abandonar la política de consenso en torno al bienestar en un contexto de inflación creciente.⁵⁷ En

⁵⁴ Milton Friedman a Patrick Buchanan, 25 de octubre de 1973, caja 22, carpeta 11, Friedman Papers. Citado en Angus Burgin, *The Great Persuasion: Reinventing Free Markets since the Depression*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2012, p. 197. Burgin hace aquí el perspicaz comentario de que «Friedman fue un idealista radical que construyó sus propuestas de política pública con una profunda y perspicaz atención a la estrategia. Pocas figuras públicas en la historia moderna han combinado una filosofía social utópica con una atención tan estrecha al mantenimiento de objetivos prácticos».

⁵⁵ Chappell, *The War on Welfare...*, pp. 90-91.

⁵⁶ William Rugey, *Milton Friedman*, Londres, Bloomsbury Academic, 2011, pp. 120-121.

⁵⁷ El cambio de rumbo de Nixon sobre el salario de las familias negras presagiaba un giro más general a la derecha dentro de su administración. Véase Kornbluh, *The Battle for Welfare Rights...*, pp. 148-150.

su primer año de presidencia, Nixon se había rodeado de asesores políticos liberales como Moynihan y Robert Finch, quienes le convencieron de que una ampliación del salario familiar era la mejor forma de aplacar las tensiones raciales, lo que a la vez le permitiría arrebatar a la clase trabajadora blanca su habitual lealtad al Partido Demócrata. Durante su segundo año, la previsión económica había empeorado y Nixon estaba menos convencido de que esta estrategia fuese a funcionar. En su lugar, decidió a puerta cerrada abandonar cualquier intento de reformar el AFDC y al mismo tiempo supervisar algunas de las ampliaciones más generosas de la Seguridad Social en la historia del programa.⁵⁸ La Seguridad Social era (y es aún) uno de los programas de seguro social menos conflictivos del New Deal, precisamente porque se mantiene relativamente al margen de las cuestiones normativas de raza, género y formación de la familia que sí atraviesan programas como el AFDC. Cuando Nixon retiró de la agenda la reforma del AFDC, se disolvió el extraordinario consenso que se había producido en torno al proyecto de ampliar el salario familiar y se reorganizó en distintas posiciones políticas. Igual que la creciente economía de la década de 1960 había dado lugar a una elevadísima inflación en los años setenta, el AFDC se convirtió en la piedra de toque de debates cada vez más reñidos en torno a la mera viabilidad de la redistribución del bienestar. En este nuevo contexto económico, demócratas liberales como Moynihan y neo-liberales de libre mercado como Friedman, que un día habían coincidido en la necesidad del salario familiar, empezaron ahora a formular una nueva filosofía política diferenciada de valores familiares no redistributivos. Es en este momento de inflexión en el que podemos situar el surgimiento del neoconservadurismo y del neoliberalismo estadounidense como filosofías políticas maduras.

El rechazo al salario familiar: el neoliberalismo y el neoconservadurismo entran a escena

La trayectoria de Moynihan del perfil demócrata del New Deal, defensor de la Gran Sociedad, a enmarcarse en el nuevo social-conservadurismo es en cierto sentido un símbolo del nacimiento del neoconservadurismo en sí mismo. En el ambiente optimista de mediados y finales de los años sesenta, Moynihan quería unirse a las fuerzas conservadoras moderadas como Nixon, con la esperanza de construir un salario familiar más inclusivo. De hecho, la alianza entre demócratas del New Deal y conservadores moderados, en los primeros años de la administración Nixon, le parecía

⁵⁸ Jill Quadagno, *The Color of Welfare: How Racism Undermined the War on Poverty*, Oxford, Oxford University Press, 1994, p. 158.

el medio más eficiente para formular un programa de bienestar social que combinara los objetivos de la redistribución de los ingresos con el familismo. Solo tras la frustración del Plan de Asistencia Familiar, Moynihan se volvió un neoconservador reconocible.⁵⁹ A pesar de que el plan había tenido oposición tanto por parte de la izquierda como de la derecha y de haberse visto frustrado por el propio Nixon, Moynihan culpó directamente a la Nueva Izquierda contracultural. En concreto, exorcizó el radicalismo de las mujeres negras del movimiento por los derechos de bienestar, a las que percibía hostiles a las premisas morales del salario familiar fordista. Pionero en el uso del término «reinas de la asistencia social» (que no tardó en hacerse omnipresente) despreció a las «madres negras militantes» de la Organización Nacional de Derechos de Bienestar llamándolas «aristócratas entre los beneficiarios de asistencia social», al tiempo que las acusaba de sabotear un plan que habría beneficiado a las familias trabajadoras.⁶⁰ Al analizar este periodo en retrospectiva, desde el punto de vista de principios de los años noventa, el propio Moynihan reconoce que la Gran Sociedad había contribuido a la desintegración de la familia estadounidense, tal y como le criticaban desde la derecha: «Durante cierto tiempo, la Gran Sociedad otorgó, en sus políticas sociales, una gran influencia a los puntos de vista que rechazaban la idea de que la estructura familiar podía ser un problema social. Incluso cuando la política social pudo haber generado ciertas respuestas efectivas, esas políticas no se llevaron a cabo. En ese sentido, la actual crisis [de la familia] es de hecho la "nefasta cosecha de la Gran Sociedad"». ⁶¹

La derrota del salario familiar negro de Nixon, concluía, fue la sentencia de muerte de las políticas expansivas de la asistencia social en los años sesenta. Sin renunciar por completo al principio de redistribución de los ingresos, el neoconservadurismo concentró sus energías en revivir la función punitiva y pedagógica de la asistencia social. Con las políticas de austeridad del presidente Reagan, Moynihan abandonó su compromiso con el salario familiar fordista y, en su lugar, defendió reformas disciplinares del AFDC que promovieran la generación de trabajo y de familias entre quienes se beneficiaran de asistencia social.⁶²

⁵⁹ Para una lectura atenta de la trayectoria de Moynihan, véase Steinfelds, *The Neoconservatives...*, pp. 113-169. Steinfelds sitúa el giro neoconservador de Moynihan en su decisión de asesorar a Nixon. Yo lo sitúo más tarde, tras la derrota del Plan de Asistencia Familiar.

⁶⁰ Daniel Patrick Moynihan, *The Politics of a Guaranteed Income: The Nixon Administration and the Family Assistance Plan*, Nueva York, Random House, 1973, p. 14.

⁶¹ Moynihan, «How the Great Society "Destroyed the American Family" ...», p. 59.

⁶² Moynihan fue el artífice de la Ley de apoyo a la familia de 1988 bajo el mandato de Reagan, la primera gran reforma del AFDC, pero que resultó decepcionante para gran parte de la derecha. Sobre las políticas cambiantes de Moynihan, véase Chappell, *The War on Welfare...*, p. 229.

El cambio de posición de Milton Friedman no fue menos decisivo como punto de inflexión en el neoliberalismo estadounidense. A lo largo de los años sesenta, Friedman se había comportado como un pragmata dispuesto a ceder en la reforma de la asistencia social en aras de lograr algún tipo de cambio positivo. A finales de la década, su pragmatismo era mucho menos evidente. En 1970, testificó contra el Plan de Asistencia Familiar de Nixon en el Congreso, a pesar de haber asesorado sobre su puesta en marcha y de haber ideado el impuesto negativo sobre la renta en el que se basaba. Ahora defendía que el impuesto negativo solo podía funcionar si sustituía por completo al resto de programas de bienestar, es decir, la Seguridad Social y la asistencia pública, y siempre que no socavara los incentivos al trabajo. Friedman consideraba que la versión final del Plan de Asistencia Familiar de Nixon constituía un compromiso caótico.⁶³ Mientras tanto, Friedman estaba cada vez más desencantado con el propio Nixon, quien había sido elegido sobre una base de austeridad y políticas monetarias estrictas, pero que una vez en el cargo ignoraba el consejo de los monetaristas. Además de las rompedoras leyes de protección al consumo y al medioambiente que introdujo durante su mandato, Nixon también firmó algunas de las ampliaciones de la Seguridad Social más generosas de su historia. Lo más irritante de todo fue que Nixon ignoró por completo los consejos monetaristas de Friedman para hacer frente a la inflación y en su lugar optó por un pequeño experimento en el control de los precios y los salarios. Todo ello hizo que Friedman terminara por despreciarlo *a posteriori* como «el presidente más socialista de Estados Unidos en el siglo XX».⁶⁴

En 1980, la crítica de Friedman sobre el bienestar era mucho más vehemente de lo que había sido en los años sesenta. En *Libertad de elegir*, castigaba a los programas de bienestar por destruir el tejido moral de la sociedad de libre mercado: «Debilitan a la familia, reducen los incentivos al trabajo, al ahorro y a la innovación; reducen la acumulación de capital y limitan nuestra libertad».⁶⁵ Más de uno entre quienes han estudiado la trayectoria intelectual de Friedman señala que en los años setenta se volvió cada vez más libertario.⁶⁶ Este aparente cambio retrata en mucha mayor medida la transformación del sentir generalizado que cualquier vacilación por parte de Friedman; este siempre había matizado su apoyo al bienestar redistributivo y reconocido el pragmatismo de su postura. Durante los

⁶³ Milton Friedman y Rose D. Friedman, *Two Lucky People*, Chicago, University of Chicago Press, 1998, pp. 381-382.

⁶⁴ Milton Friedman, *Commanding Heights Interview*, 1980, disponible on line en http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/shared/minitext/int_milton-friedman.html#1 (consultado por última vez el 1 de diciembre de 2015).

⁶⁵ Friedman y Friedman, *Free to Choose...*, p. 127.

⁶⁶ Ruger, *Milton Friedman...*, pp. 96 y 122, y Lanny Ebenstein, «The Increasingly Libertarian Milton Friedman: An Ideological Profile», *Econ Journal Watch*, vol. 11, núm. 1, 2014, pp. 81-96.

años sesenta, Friedman llegó a admitir que «ahora todos somos keynesianos». ⁶⁷ A principios de los años setenta, el neoliberalismo de la Escuela de Chicago estaba en su mejor momento, deseoso de plantear una discusión sin concesiones con el bienestar redistributivo *per se*.

Fue en la década de 1970, tras la derrota del salario familiar de Nixon, cuando el neoliberalismo y el neoconservadurismo estadounidenses emergieron como filosofías políticas maduras con posiciones diferenciadas sobre la reforma de la asistencia social. Durante este periodo, los perfiles neoliberales de la Escuela de Chicago abandonaron su pragmática conformidad con el Estado de bienestar keynesiano y articularon una nueva postura sin concesiones a favor de los recortes en el gasto social. Por su parte el neoconservadurismo surgió como una reacción contra la Nueva Izquierda. Aunque nunca abandonó por completo sus raíces en el liberalismo del New Deal, ahora estaba preparado para promover los «valores familiares» sin tener que apelar a la necesidad de redistribuir los ingresos. Estas posturas no eran equivalentes en ningún caso: mientras que el neoliberalismo apelaba a una reducción continua de la asignación presupuestaria al bienestar, en un intento de debilitar cualquier posibilidad de que el salario social pudiera competir con el salario del libre mercado; el neoconservadurismo defendía un papel mayor del Estado en la regulación de la sexualidad. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, ambas corrientes convergían en la necesidad de restablecer la familia como el pilar del orden económico y social. Su alianza va a definir en gran medida la dirección de las políticas sociales durante las décadas sucesivas, que culminarán con la reforma radical del bienestar emprendida por Clinton en 1996.

El auge del neoconservadurismo: inflación, bienestar y crisis moral

Hoy por hoy se suele olvidar que a la primera oleada neoconservadora, compuesta por quienes crecieron durante la Guerra Fría, le preocupaban enormemente las cuestiones del bienestar social nacional, mucho más que la política exterior. ⁶⁸ Entre quienes formaban esta generación, algunos

⁶⁷ Milton Friedman citado en «The Economy: We Are All Keynesians Now», *Time Magazine*, vol. 86, núm. 27, 1965, p. 79. En una carta al editor, Friedman califica sus palabras: «Caballero: Usted me cita [31 de diciembre] como si dijera: "Ahora todos somos keynesianos". La cita es correcta, pero está sacada de contexto. Según recuerdo, el contexto era: "En cierto sentido, ahora todos somos keynesianos; en otro, todo el mundo ha dejado de serlo". La segunda mitad es al menos tan importante como la primera». Milton Friedman, «Letter to the Editor», *Time Magazine*, vol. 87, núm. 5, 1966, p. 13.

⁶⁸ El historiador Justin Vaïsse identifica tres fases distintas en el movimiento neoconservador. La primera, en la que me centro aquí, se ocupó casi exclusivamente del bienestar social y se definió en oposición a la Nueva Izquierda. Asocia la segunda fase con el surgimiento de los «demócratas de Scoop Jackson», que se oponían a la deriva hacia la izquierda dentro

habían participado en la izquierda trotskista antiestalinista de los años treinta; la mayoría terminaron por abrazar el liberalismo anticomunista y convertirse en demócratas del New Deal durante la Guerra Fría; y todos se opusieron fervientemente a las políticas contra la asistencia social de conservadores republicanos como Barry Goldwater, al que Milton Friedman había defendido anteriormente, sin ser ninguno de los dos republicanos. Muchas de estas figuras se acercaron en un momento u otro a *The Public Interest*, periódico fundado por Daniell Bell e Irving Kristol en 1965, también a *Commentary Magazine*, publicada por primera vez en 1945 y editada por Norman Podhoretz en los años sesenta. Cuando Bell y Kristol fundaron *The Public Interest*, hacía tiempo que habían renunciado al socialismo y ya en los años cincuenta se habían convertido en liberales del New Deal, críticos tanto con la izquierda comunista como con el macartismo. En su primer año de publicación, *The Public Interest* se presentaba como el espacio para el perfeccionamiento de la experiencia política social no partidista. En sus primeros números incluían artículos de autores pertenecientes a todo el espectro político, con colaboraciones de académicos tan diversos como Milton Friedman, James Tobin y Daniel Patrick Moynihan. Con pocas excepciones, estos colaboradores aceptaban las premisas del New Deal y (en mayor medida) de los programas de bienestar de la Gran Sociedad y básicamente se esforzaban por su mejor aplicación. El tono era de un optimismo tecnócrata prudente.

Sin embargo, a finales de los años sesenta, el tono se había vuelto definitivamente más pesimista; sus autores prestaban más atención a los peligros de las consecuencias involuntarias y a sus perversos incentivos que a la tarea de la puesta en marcha de políticas desde la neutralidad. Irving Kristol sitúa el nacimiento del neoconservadurismo como una tendencia coherente en 1965, el año en el que *The Public Interest* entra en circulación y en el que Moynihan publica su informe sobre las familias afroamericanas.⁶⁹ Sin duda, muchos de los nombres que más tarde se asociarían al neoconservadurismo aparecieron en los primeros números de *The Public Interest*. Sin embargo, Nathan Glazer es mucho más preciso al situar el punto de inflexión a finales de los años sesenta, cuando estos antiguos demócratas y

del Partido Demócrata, estaban asociados con los sindicatos establecidos y apoyaban las políticas del Estado de bienestar en el país y el anticomunismo en el extranjero. Si las dos primeras fases del neoconservadurismo surgieron del Partido Demócrata en oposición a la Nueva Izquierda, la tercera generación estaba inequívocamente asociada a la derecha republicana, no tenía ningún compromiso con el bienestar del New Deal y se definía por la idea de que Estados Unidos tenía un papel imperial único en el orden mundial internacional. Justin Vaïsse, *Neoconservatism: The Biography of a Movement*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2010, pp. 6-18. Es significativo que el primer estudio en forma de libro sobre el neoconservadurismo, publicado en 1979, se centre casi exclusivamente en la cuestión de la política social. Steinfels, *The Neoconservatives...*

⁶⁹ Kristol, «Preface», p. x.

liberales del New Deal se opusieron definitivamente a la Nueva Izquierda y empezaron a plantear una política de reacción coherente desde *dentro* de la izquierda. Señalando la evolución de *The Public Interest*, Glazer dibuja el sutil cambio de ánimos entre los liberales del New Deal a medida que pasaron del optimismo en los años sesenta a la amenaza de la acechante inflación a finales de la década, así como del consenso progresista en torno al bienestar —de demócratas y conservadores moderados— a un creciente sentimiento de rechazo de las ideas de la Nueva Izquierda. «A finales de la década de 1960», escribe:

No era el único que pensaba que algo había salido mal, que de algún modo habíamos sido demasiado optimistas. Mi punto de vista, seguramente poco original y surgido íntegramente de mi experiencia en política social, en ningún caso de leer a teóricos ni a filósofos sociales, era que parecíamos crear tantos problemas como resolvíamos, y el motivo era inherente a nuestra forma de pensar sobre los problemas sociales y la política social, propia de personas liberales, pero también conservadoras moderadas de entonces (recordemos que allí estaban Richard Nixon y Nelson Rockefeller).⁷⁰

Parece que al reflexionar sobre el destino del salario familiar negro de Nixon, Glazer se hizo eco de los sentimientos de muchos de sus colegas al concluir que los esfuerzos de reforma social de la izquierda habían hecho más por acabar con la familia que por salvarla. «En nuestras políticas sociales intentamos lidiar con la ruptura de las formas tradicionales de afrontar el estrés», por ejemplo la familia, señalaba, pero «en nuestro esfuerzo por lidiar con la ruptura de estas estructuras tradicionales, nuestras políticas sociales las debilitan aún más y empeoran las cosas en torno a ciertas cuestiones».⁷¹

A finales de los años sesenta, incluso los perfiles más progresistas entre los antiguos demócratas y adalides de la Gran Sociedad (una figura como la de Moynihan, por ejemplo) se alarmaban por la dirección en la que avanzaban las políticas izquierdistas del bienestar. Estos futuros neoconservadores habían defendido la ampliación del salario familiar a los hombres negros, pero se opusieron a una reforma redistributiva del bienestar como tal cuando se vieron superados por una nueva izquierda contracultural. En concreto, les alarmaban ciertos elementos en los márgenes de la Nueva Izquierda que cuestionaban cada premisa del salario familiar, es decir, la idea de que la redistribución de los ingresos tuviera que estar ligada al control normativo de la maternidad legítima y la moralidad sexual. Como hemos visto, esta crítica

⁷⁰ Nathan Glazer, *The Limits of Social Policy*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1988, pp. 1-2 [ed. cast. *Los límites de la política social*, trad. por Carmen López Alonso, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992].

⁷¹ *Ibidem*, p. 3.

era muy marginal, incluso entre las tendencias más contraculturales de la Nueva Izquierda e incluso dentro del propio movimiento por los derechos de bienestar. Aun así, el neoconservadurismo nació en reacción a esta izquierda contracultural y antinormativa, una izquierda que desafiaba los pilares sexuales del consenso fordista. Sobre el concepto de contracultura, Kristol apunta que «la liberación sexual siempre está entre las prioridades de la agenda contracultural [...] La liberación de la mujer, de igual manera, es otro rasgo sistemático de todos los movimientos contraculturales, la liberación de sus maridos, de sus hijos, la liberación de la familia. De hecho, el objeto real de estas distintas heterodoxias sexuales es desestabilizar la familia como institución central de la sociedad humana, la ciudadela de la ortodoxia».⁷²

¿Pero qué quería decir el neoconservadurismo con «contracultura»? El historiador de este espectro político, Justin Vaïsse, describe la contracultura de la Nueva Izquierda como un fenómeno fundamentalmente de la clase media blanca formada y «con tiempo y dinero que gastar».⁷³ Esta nueva clase de militancia, compuesta en su mayoría por estudiantes universitarios y manifestantes contra la guerra, reaccionó en contra del reformismo del movimiento por los derechos civiles y se definió en contra tanto del movimiento sindical obrero como de la población blanca de clase media-baja que representaba el núcleo del Partido Demócrata. Aun así, la caracterización que hace Vaïsse de la izquierda contracultural se basa en gran medida en la propia denuncia que hacía el neoconservadurismo de la «nueva clase» y entra en conflicto con otros relatos de las cambiantes relaciones de poder dentro de la izquierda a lo largo de los años sesenta. Lejos de limitarse a la clase media blanca y formada en la universidad, el antiautoritarismo de la contracultura llegó hasta las profundidades del movimiento obrero durante este periodo, haciendo que el presidente del sindicato United Automobile Workers [Trabajadores de la Automoción Unidos], Walter Reuther, se diera cuenta de que el sindicalismo oficial tendría que adaptarse a un nuevo perfil de trabajador.⁷⁴ La irrupción de la militancia salvaje fuera de la legalidad entre las filas del movimiento obrero resultó especialmente inquietante para el neoconservador Samuel Huntington. Como él mismo reconoce, el espíritu antirreformista de la «contracultura» se extendió mucho más allá de la clase media blanca y llegó al activismo obrero, a la liberación negra y al movimiento por los derechos de bienestar, donde se expresó en una recién fundada voluntad de cuestionar la autoridad de la familia como instrumento de disciplina social.⁷⁵ Puede que esto explique por

⁷² Irving Kristol, «Countercultures», en *Neoconservatism: The Autobiography of an Idea*, Nueva York, Free Press, 1995 [1994], pp. 141-142.

⁷³ Vaïsse, *Neoconservatism...*, pp. 42-43.

⁷⁴ Panitch y Gindin, *The Making of Global Capitalism...*, pp. 135-136.

⁷⁵ Samuel p. Huntington, «The United States» en Michel Crozier, Samuel p. Huntington, y Joji Watanuki, *The Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission*, Nueva York, New York University Press, 1975, pp. 59-118.

qué las denuncias neoconservadoras de la contracultura suelen comenzar con fulminantes declaraciones generales contra la clase estudiantil blanca, formada y privilegiada (la «nueva clase») y que con la misma intensidad concluyan con la figura del beneficiario de asistencia social negro. En cada uno de los textos, la crítica neoconservadora de la contracultura se convierte de algún modo en una crítica al AFDC, el programa de asistencia social que con acierto consideraban la pieza clave del orden social fordista, y en un virulento ataque a los y las activistas a quienes juzgan máximos responsables de desestabilizar este orden.

Las personas beneficiarias del AFDC a duras penas pueden considerarse los sujetos sociales más privilegiados y, sin embargo, el neoconservadurismo describe sistemáticamente a las madres receptoras de asistencia social como una clase no productiva y la más rentista, lumpenproletariado que ha adoptado las cualidades de la aristocracia ociosa gracias a su dependencia de los «ingresos no ganados» de las prestaciones de la asistencia social.⁷⁶ La retórica neoconservadora alimenta el resentimiento de los trabajadores más protegidos por el fordismo al invertir el orden de la actual jerarquía social entre la población pobre, presentándose como defensora de la clase trabajadora obrera contra las demandas de la clase no productiva rentista de las «reinas de la asistencia social», en un movimiento característico del populismo reaccionario tanto de la izquierda como de la derecha. Si en el imaginario popular la inflación se asociaba con el problema de la especulación suntuaria, ya que los consumidores de a pie habían aprendido que les interesaba comprar a crédito, la denuncia moral que acompañaba a esta observación recayó desproporcionadamente sobre los hombros de la población más pobre no trabajadora.⁷⁷

El neoconservadurismo perfeccionó su retórica de desorden social a lo largo de la década de 1970. Dado que el problema de los crecientes precios de consumo se instaló en la agenda política, el neoconservadurismo ofrecía

⁷⁶ Irving Kristol identificó a la Nueva Clase como élites trabajadoras en oficinas y puestos similares que normalmente se graduaban de la contracultura estudiantil para unirse a las filas de la muy poblada burocracia de la asistencia social, donde formaban una casta administrativa parasitaria que atendía las necesidades de la población pobre no trabajadora, igualmente parasitarias. Contrapuso esta élite trabajadora en oficinas y similares a la clase trabajadora en fábricas, cuyos intereses supuestamente despreciaba. Para un excelente debate sobre la comprensión neoconservadora de la Nueva Clase, véase Robert B. Horwitz, *America's Right: Anti-Establishment Conservatism from Goldwater to the Tea Party*, Cambridge, Polity Press, 2013, pp. 120-123. La comparación entre el lumpenproletariado y la clase rentista tiene una larga historia también en la izquierda. Las reflexiones de Marx sobre la cuestión de la población excedente, por ejemplo, oscilaban entre los registros de lo analítico y lo moralizante.

⁷⁷ De nuevo sobre este aspecto, véase Greider, *Secrets of the Temple...*, pp. 15-17, 44, 104. Greider comenta la percepción popular de que la inflación había permitido a las «chicas trabajadoras» comprar joyas de lujo, una interesante expresión de la idea de que las mujeres pobres se dedicaban al consumo especulativo. Greider, *Secrets of the Temple...*, pp. 15-16.

una teoría social integral sobre la inflación que la relacionaba, básicamente a fuerza de repetición, con la expansión de los programas de asistencia social, la ruptura de los valores tradicionales y la crisis de la familia. La contribución de Samuel Huntington en 1975 al Informe de la Comisión Trilateral fue una de las primeras en defender una relación causal entre el creciente déficit público, la inflación y el gasto en asistencia social que no tardaría en adquirir el aura de verdad incuestionable. Huntington percibió que en los años inmediatamente posteriores a la guerra se había dado un rápido incremento de la proporción del gasto gubernamental dedicado al ejército, pero este «giro hacia la defensa» se vio después superado por un «giro hacia el bienestar» que hizo que, después de la guerra de Vietnam, la sanidad, la educación y las transferencias de ingresos compitieran con el gasto militar y que poco después lo superaran.⁷⁸ Publicado de nuevo en un número especial de *The Public Interest*, el informe de Huntington defendía el argumento espurio, pero tremendamente influyente, de que la inflación se podía atribuir al déficit presupuestario,⁷⁹ si bien mediante un equilibrio imposible, la inflación parecía derivar solo del déficit acumulado por el gasto en bienestar social, no del derrochador gasto en defensa de la Guerra Fría. El argumento de Huntington, repetido implacablemente con todo detalle por sus colegas neoconservadores, resultaría decisivo para dar forma a las futuras respuestas del gobierno ante la inflación, no solo con la administración Reagan, sino también con los siguientes ejecutivos demócratas y republicanos.

El neoconservadurismo añadió algo nuevo al argumento neoliberal, descrito por Milton Friedman en su conferencia del Premio Nobel de 1973, de que la estanflación había trastornado el cálculo cuantitativo de la gestión keynesiana de la demanda (plasmada en la llamada curva Phillips).⁸⁰ Huntington insinuó que la crisis de la inflación no solo representaba un cambio cuantitativo en el gasto social del gobierno, sino también un cambio cualitativo en la naturaleza de las expectativas sociales, que desvirtuaba las fuentes de autoridad sobre las que descansaba el orden social keynesiano. «La esencia de la oleada democrática de los años sesenta», escribe, «supuso un reto generalizado para los sistemas existentes de autoridad, pública y privada. De una forma u otra, este reto se manifestó en la familia, la universidad, los negocios, las asociaciones públicas y privadas, la política, la burocracia gubernamental y los servicios militares».⁸¹

⁷⁸ Huntington, «The United States...», pp. 65-74.

⁷⁹ Para una crítica de la idea de la relación causal entre los déficits públicos y la inflación y una teoría de por qué los «presupuestos equilibrados» han llegado a ejercer una influencia emocional tan fuerte en la política estadounidense a finales del siglo XX, véase James D. Savage, *Balanced Budgets and American Politics*, Ithaca (NY), Cornell University Press, 1988. La idea de una relación causal entre el déficit público y la inflación fue rechazada incluso por Milton Friedman.

⁸⁰ Friedman, «Nobel Prize Lecture: Inflation and Unemployment...», pp. 451-472.

⁸¹ Huntington, «The United States...», pp. 74-75.

Fue Daniel Bell, conocido por ser el más progresista de los neoconservadores, quien desarrollaría plenamente este argumento en *Las contradicciones culturales del capitalismo*, publicado por primera vez en 1976.⁸² En él acusa a la revolución keynesiana de socavar, por el mero hecho de haber triunfado, los principios de la frugalidad protestante en los que se basaba originalmente el Estado fiscal moderno.⁸³ La novedad histórica de la ética protestante, según Weber, era combinar la crematística del mercado con una austera filosofía del deseo, aquella basada en la abstinencia, la recompensa postergada y la frugalidad. Si el capitalismo moderno más temprano promovía una acumulación ilimitada, imponía al mismo tiempo una restricción en el consumo. El Estado de bienestar, según Bell, había invertido su lógica al liberar el gasto en bienestar de todas las restricciones económicas y morales y, por lo tanto, liberar un impulso ilimitado de acumulación suntuaria en la esfera privada. Poco a poco, la lógica perversa de la crematística había pasado del mercado al lugar de trabajo y luego al hogar, generando deseos ilimitados que desafiaban el orden tradicional de las relaciones sexuales; por no hablar la viabilidad fiscal del Estado, que ahora se veía interpelado a subsidiar estas formas de vida no normativas.⁸⁴ Al señalar la incompatibilidad entre el gasto deficitario keynesiano y la liberación sexual, Daniel Bell expone lo que consideraba implícito en la economía estadounidense de las finanzas públicas (elocuentemente bautizada como la economía del «hogar público» por Richard Musgrave).⁸⁵ El cálculo del gasto deficitario de posguerra se basaba en el supuesto normativo del salario familiar y, por lo tanto, se veía limitado dentro de unas fronteras que eran al mismo tiempo sexuales y económicas. Si bien podríamos imaginar la ampliación del gasto en el Estado de bienestar para incluir a los hombres no blancos dentro de la categoría de sostén familiar, no podríamos cuestionar la premisa normativa de la familia en la que el hombre es el sostén familiar, sin anular por completo la aritmética del «hogar público» y generar así una inflación galopante.

El eje del argumento de Bell, que en último término atribuye la inflación a la ruptura del orden del hogar, ayuda a explicar por qué al neoconservadurismo le preocupara casi exclusivamente un programa de asistencia social que consumía tan poco del presupuesto general de bienestar social.

⁸² Bell, *Cultural Contradictions of Capitalism...*

⁸³ La idea central de este argumento se expone en el capítulo 6 de la obra de Bell *Cultural Contradictions of Capitalism*, «The Public Household: On "Fiscal Sociology" and the Liberal Society», *ibidem*, pp. 220-282. El argumento de Daniel Bell recoge las referencias a la sociología fiscal de Richard Musgrave y su teoría del «hogar público» (que exploraremos con más detalle en el capítulo 6), la teoría de la ética protestante de Max Weber y la distinción de Aristóteles entre la economía doméstica y la crematística.

⁸⁴ *Ibidem*, p. 75.

⁸⁵ La referencia es Richard A. Musgrave, *The Theory of Public Finance*, Nueva York, McGraw-Hill, 1959.

Puede que Huntington identificara el «giro hacia el bienestar» (con lo que se refería a la expansión de *todos* los programas sociales, desde la salud y la educación hasta los programas de la Seguridad Social y asistencia pública) como la fuente de la inflación, pero una y otra vez los ataques neoconservadores a la asistencia social se centraban en el AFDC en particular. Aquí, Nathan Glazer admite la aparente contradicción cuando reconoce que «la asistencia social [el AFDC] quedaba lejos de nuestros mayores programas sociales» y que «no [suponía] un gran drenaje de nuestros recursos financieros [...] comparada con otros grandes programas sociales».⁸⁶ No obstante, continúa su argumentación afirmando que «se consideró, y creo que con razón, que estaba más cerca del corazón de nuestros problemas sociales que otros programas mayores como la propia Seguridad Social, las ayudas a personas discapacitadas, Medicare o Medicaid».⁸⁷ Por lo tanto, la inflación no se puede atribuir legítimamente al aumento *cuantitativo* en las filas del AFDC, sino que bien podría asociarse al giro *cualitativo* de las expectativas morales que permitían a las personas beneficiarias del AFDC saltarse las normas de la familia fordista. Una vez determinado que la inflación era un problema de las expectativas afectivas más que de las leyes cuantitativas, el neoconservadurismo podía identificar con confianza al AFDC como síntoma y causa de la crisis de la inflación: de todas las iniciativas sociales del New Deal y la Gran Sociedad, el AFDC fue el único programa que contribuyó a la ruptura de la familia tradicional y por lo tanto *el programa que expresaba de manera más directa el malestar moral de la inflación*.

Neoconservadurismo y neoliberalismo

¿Cómo lograron el neoconservadurismo y el neoliberalismo formar una alianza en torno al bienestar social a pesar de sus aparentemente insalvables diferencias políticas y epistemológicas? Cuando en 1972 Irving Kristol fue invitado a presentar un artículo en la reunión por el vigésimo quinto aniversario de la Sociedad Mont Pèlerin reconoció con franqueza estas tensiones. El artículo lo había escrito a petición de Milton Friedman, el entonces presidente de la organización y quien albergaba la esperanza de recuperar parte del pluralismo pasado con la invitación de Kristol.⁸⁸ Sin embargo, a pesar de la apertura de Friedman, Kristol se mostraba escéptico

⁸⁶ Glazer, *The Limits of Social Policy...*, pp. 9-10.

⁸⁷ *Ibidem*, p. 9.

⁸⁸ Para una lectura iluminadora sobre su discurso y lo que revela sobre las tensiones entre el neoliberalismo y el neoconservadurismo, véase Burgin, *The Great Persuasion...*, pp. 186-213. Friedman fue elegido presidente de la Sociedad Mont Pèlerin en un momento en que esta había perdido gran parte de su pluralismo inicial y estaba dominada por economistas del libre mercado, los mismos que ahora abundan en las escuelas de Chicago y de Virginia.

ante cualquier alianza continuada entre la economía de libre mercado y el neoconservadurismo y acusaba abiertamente al neoliberalismo de seguir librando una batalla que ya había ganado.⁸⁹ Mientras la política contemplaba la incapacidad de la economía keynesiana ortodoxa de hacer frente a las condiciones económicas de los años setenta, las prescripciones de monetaristas como Friedman, que antes habían sido marginales, ahora se consideraban cada vez más respetables. Sin embargo, mientras tanto, el neoliberalismo ignoraba lo que para Kristol era el problema más acuciante de la izquierda contracultural, que él consideraba hostil a los propios valores de la «sociedad burguesa» de la que dependía el orden del libre mercado. A ojos de Kristol, el neoliberalismo era incapaz de contrarrestar la creciente marea de la contracultura porque compartía el amoralismo esencial de la Nueva Izquierda. El *ethos* neoliberal propuesto por un Friedman o un Becker (que en varias ocasiones se plantearían la posibilidad de los mercados de consumo de riñones, de bebés o de drogas) era en última instancia compatible con los deseos antinormativos de la Nueva Izquierda, porque no aceptaba ninguna noción *a priori* de virtud trascendente. Para neoconservadores como Kristol, en cambio, el orden del libre mercado propuesto por el neoliberalismo no podía existir sin el supuesto de cierto valor moral fundamental. En palabras de Kristol: «La idea de la virtud burguesa se ha eliminado de la concepción de Friedman de la sociedad burguesa y se ha sustituido por la idea de libertad individual».⁹⁰ El relato de Kristol del amoralismo del neoliberalismo podría contar con el respaldo de analistas de izquierda.⁹¹ Sin embargo, no hace justicia al matiz de la posición neoliberal, que no consiste tanto en eliminar la filosofía moral, sino en proponer una ética inherente de la virtud y un orden espontáneo de valores familiares que espera surjan automáticamente de los mecanismos del sistema del libre mercado. Igual que Kristol, muchas de las críticas al neoliberalismo no han reconocido que Friedman y sus colegas de la Escuela de Chicago plantean una familia tan autosuficiente como el individuo como manifestación básica del orden de libre mercado.

Gary Becker lo señala explícitamente cuando argumenta que el incentivo familiar altruista es tan importante para la constitución del libre

⁸⁹ Posteriormente, Kristol volvió a publicar su discurso en forma de ensayo. Véase Irving Kristol, «Capitalism, Socialism, and Nihilism», en *Neoconservatism: The Autobiography of an Idea*, Nueva York, Free Press, 1995 [1972/1973], pp. 92-105.

⁹⁰ *Ibidem*, p. 102.

⁹¹ Véase, por ejemplo, Margaret Jane Radin, *Contested Commodities*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1996, y Michael J. Sandel, *What Money Can't Buy: The Moral Limits of Markets*, Nueva York, Farrar, Straus and Giroux, 2012 [ed. cast. *Lo que el dinero no puede comprar*, trad. por Joaquín Chamorro Mielke, Barcelona, Debate, 2013]. Estas críticas de la izquierda al neoliberalismo son muy cercanas al comunitarismo de la Tercera Vía de Amitai Etzioni. Para una crítica más amplia del neoliberalismo de la Escuela de Chicago de Etzioni, véase Amitai Etzioni, *The Moral Dimension: Toward a New Economics*, Nueva York, Simon & Schuster, 1998.

mercado como el incentivo utilitario del intercambio por el interés propio.⁹² La naturaleza del altruismo familiar representa en cierto sentido una excepción interna al libre mercado, un orden inherente de obligaciones no contractuales y servicios inalienables sin los que el mundo del contrato dejaría de funcionar.⁹³ Esta premisa es tan constitutiva del liberalismo económico, tanto clásico como neoliberal, que rara vez se plantea como tal. Aun así, explica por qué, en palabras de Wendy Brown, los valores familiares privados constituyen el secreto del contractualismo liberal.⁹⁴

Por su parte Milton Friedman, asume la familia nuclear como un estado natural o espontáneo de lo social incorrupto, en gran parte en la misma medida en la que plantea un estado de equilibrio del dinero. En su estado libre o de equilibrio, el dinero parece tan neutral que no ejerce ningún poder sobre el funcionamiento del intercambio económico; el dinero no es nada más que un velo que permite el correcto desarrollo de las relaciones contractuales.⁹⁵ Pero en la misma medida en que la Reserva Federal puede intervenir para alterar la tasa natural de crecimiento de la oferta monetaria, dando lugar a consecuencias tan perversas como la inflación, el gasto excesivo del gobierno en asistencia social altera el estado de equilibrio de la familia y socava sus incentivos naturales hacia el altruismo y la dependencia mutua. Señalando el ejemplo de la Seguridad Social, la que Friedman quería ver privatizada por completo, apunta que las obligaciones naturales del parentesco que en su día hacían que los hijos cuidaran de sus padres en la edad adulta ahora se han visto sustituidas por un sistema impersonal de seguro social cuyo efecto a largo plazo es usurpar el lugar de la familia.

La diferencia entre la Seguridad Social y la organización anterior es que la primera es obligatoria e impersonal, el anterior sistema de organización era voluntario y personal. La responsabilidad moral es una cuestión individual, no social. Los niños ayudaban a sus padres por

⁹² Gary S. Becker, «Altruism in the Family», en *A Treatise on the Family, Enlarged Edition*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1993 [1981], pp. 277-306.

⁹³ Richard A. Epstein es quien más abiertamente y con más fuerza lo expresa cuando escribe que ciertas «constantes biológicas [...] se encuentran en la raíz del comportamiento familiar, y delimitan la zona de intercambio voluntario de la economía de la familia sin precio y sin nada a cambio». Todo sistema jurídico debe establecer una distinción entre los miembros de la familia y las personas ajenas que tratan con ella "a cierta distancia", utilizando la instructiva expresión jurídica». Richard Epstein, *Principles for a Free Society*, Nueva York, Basic Books, 1998, pp. 22-23.

⁹⁴ Wendy Brown, «Liberalism's Family Values», en *States of Injury: Power and Freedom in Late Modernity*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 1995, pp. 135-165. Brown intenta aquí conceptualizar la «persistente tensión legal y política entre el individuo y la familia en el liberalismo», una tensión que también encontramos en el neoliberalismo. En última instancia, argumenta, la tensión y su elisión solo pueden explicarse por la naturalización de la subordinación de las mujeres dentro del pensamiento económico clásico liberal y neoliberal.

⁹⁵ Véase a este respecto, Martijn Konings, «State of Speculation: Contingency, Measure, and the Politics of Plastic Value», *South Atlantic Quarterly*, vol. 114, núm. 2, 2015, p. 252.

amor o por deber. Ahora contribuyen a ayudar a los padres de otra persona porque es obligatorio y porque tienen miedo. Las transferencias anteriores reforzaban los vínculos de la familia; las transferencias obligatorias los debilitan.⁹⁶

En un verdadero orden de libre mercado, argumenta Friedman, la seguridad económica derivaría idealmente de la transmisión familiar de la propiedad y no de la redistribución a nivel estatal. La libertad de legar la riqueza a los propios hijos debería, por lo tanto, entenderse como un incentivo natural y espontáneo del orden del libre mercado y estar protegida de cualquier tipo de confiscación por parte del Estado en forma de impuesto de transmisión de bienes:

Esta es una sociedad familiar, no una sociedad individual [...] Y el mayor incentivo de todos, el incentivo que realmente ha motivado a la gente ha sido el incentivo de la creación de una familia. Lo sorprendente es que la gente no reconozca realmente hasta qué punto el sistema de libre mercado ha animado a la gente y le ha permitido trabajar duro y sacrificarse en beneficio de sus hijos —en lo que confieso, a menudo considero una forma irracional—. Una de las cosas que me resultan más curiosas de la observación es que casi todo el mundo valora lo que se beneficiarán sus hijos de un mayor consumo que el que han conocido sus padres.⁹⁷

Una intuición similar subyace e inspira toda la teoría de Becker de la inversión en capital humano, que se puede leer como una comparación histórica sistemática de los efectos de la inversión del Estado frente a la de la familia en el bienestar de la infancia. Becker comienza su *Treatise on the Family* [Tratado sobre la familia] apuntando que «en el mundo occidental, la familia se ha visto radicalmente alterada, algunos afirman que casi destruida, por los acontecimientos de las tres últimas décadas».⁹⁸ A continuación enumera una lista de males que padece la familia: desde el rápido aumento de las tasas de divorcio y las familias encabezadas por mujeres hasta el descenso de las tasas de nacimientos y la creciente participación de mujeres casadas en la población activa, lo que ha «reducido el contacto entre los niños y sus madres y ha contribuido al conflicto entre sexos en el empleo, así como en el matrimonio».

Estos cambios dramáticos en la estructura de la familia, defiende, tienen más que ver con la ampliación del Estado de bienestar en la época

⁹⁶ Friedman y Friedman, *Free to Choose...*, p. 106.

⁹⁷ Milton Friedman, *Milton Friedman Speaks: Lecture 1 — What is America?*, Nueva York, Harcourt Brace Jovanovich, 1978. Vídeo. 1:07:14-1:09:09. Disponible on line en http://www.freetochoose.tv/program.php?id=mfs_1&series=mfs (consultado por última vez el 1 de diciembre de 2015).

⁹⁸ Gary S. Becker, *A Treatise on the Family...*, p. 1.

de posguerra que con el feminismo *per se*, que se puede considerar una consecuencia, más que una fuerza instigadora de estas dinámicas. De forma predecible, Becker señala al AFDC (la «pensión alimenticia de las mujeres pobres») como uno de los principales culpables de la ruptura de la familia.⁹⁹ Sin embargo, como Friedman, también acusa a programas de seguro social más genéricos y a los servicios públicos como la educación estatal de debilitar los lazos de las obligaciones familiares. Para Becker, se puede entender que la familia en su estado de equilibrio desempeña una suerte de función de seguro natural que se altera cuando el Estado de bienestar socializa los seguros.¹⁰⁰ El hecho de que los padres «elijan» ayudar a las mujeres y a los hijos y de que las madres «elijan» realizar la mayoría de las tareas reproductivas no remuneradas de cuidados, aliviando así al Estado de todas esas responsabilidades, representa el estado de equilibrio de la familia en un orden de libre mercado, un estado de dependencia mutua y autosuficiencia que la reforma neoliberal del Estado de bienestar debe esforzarse por restaurar. Por lo tanto, si podemos extraer una lección política pragmática de la filosofía del neoliberalismo de la familia, es que dismantelar el bienestar representa el medio más eficiente de restaurar los lazos privados de las obligaciones familiares. En sus textos de principios de los ochenta, Becker acusa al Estado de bienestar de posguerra de destruir el altruismo natural de la familia, pero supone que el declive del bienestar iniciado por Reagan terminará por obligar a la población empobrecida a restaurar los lazos de parentesco como fuente de bienestar privado.¹⁰¹

Por lo tanto, no se trata de que el neoliberalismo rechazara por completo la idea de virtud, como Kristol intenta defender, sino más bien de que espera que surja espontáneamente una ética de la virtud más estricta de la acción inherente a las fuerzas del mercado. «Los sistemas económicos que subyacen al comportamiento privado y a los mercados competitivos son más eficientes que aquellos con un amplio control del gobierno», escribe Becker. «Sin embargo, los efectos de un sistema de libre mercado en la autosuficiencia, la iniciativa y otras virtudes podrían ser incluso más

⁹⁹ Becker, «The Evolution of the Family», en *A Treatise on the Family...*, p. 357.

¹⁰⁰ Sobre la familia como mecanismo natural de seguro, véase Becker, «Altruism in the Family...», pp. 281-282.

¹⁰¹ «Tanto el Estado de bienestar como la actividad económica han crecido mucho más lentamente en los países avanzados desde principios de los años setenta [...] Si el desarrollo económico sigue siendo más lento y la expansión del Estado de bienestar continúa moderándose, el análisis de este capítulo predice un descenso mucho menos pronunciado de la fertilidad y un aumento más lento del divorcio, de la participación laboral de las mujeres casadas, de la ilegitimidad y de los hogares encabezados por mujeres [...] De hecho, una ralentización suficiente del ritmo de desarrollo podría llegar a aumentar la fertilidad y también invertir las tendencias en otros aspectos del comportamiento familiar». Gary S. Becker, «The Evolution of the Family», en *A Treatise on the Family...*, p. 360.

importantes a largo plazo».¹⁰² Esto explica el motivo por el que quienes en el siglo XIX defendían el libre mercado «solían enfatizar el efecto del sistema en los valores más que en la eficiencia», y como era de esperar continúa citando a Tocqueville sobre la relación de refuerzo mutuo entre el interés propio y la virtud. Por lo tanto, si en cierto modo el neoliberalismo puede describirse como permisivo en lo que respecta a la familia, en el sentido de que considera que los recortes en el gasto social del gobierno restaurarían automáticamente la virtud natural de las obligaciones del parentesco, esto no hace que se preocupe menos por la necesidad de la familia en un orden de libre mercado. Significa simplemente que teoriza el valor fundamental en sí mismo como el efecto emergente de las fuerzas del mercado y no como su fundamento *a priori*.

En cambio para los neoconservadores, la familia ideal no es el resultado natural de las fuerzas del mercado, sino una institución que en cierto sentido se opone al mercado y que se sitúa fuera de él. El Estado debe proteger activamente sus valores fundamentales si quiere que esta sobreviva a la fuerza corrosiva del intercambio contractual. A este respecto, el neoconservadurismo parece mucho más cercano a la socialdemocracia de izquierdas, como la de Karl Polanyi, que al neoliberalismo. La mayoría de estas opiniones, después de todo, siguieron apoyando las funciones básicas del Estado de bienestar en una era en la que los argumentos neoliberales a favor de un gobierno con menos presencia estaban en alza. Incluso Irving Kristol, que entre los perfiles neoconservadores era el que más simpatizaba con las ideas del libre mercado de Ronald Reagan, insistía en que el neoconservadurismo «no siente ninguna hostilidad persistente hacia el Estado de bienestar, ni tampoco lo acepta con resignación como un mal necesario. En su lugar, no pretende dismantelar el Estado de bienestar en nombre de la economía del libre mercado, sino redefinirlo para ligarlo a las predisposiciones *conservadoras* de la población».¹⁰³

Para disgusto de la derecha libertaria y neoliberal, los neoconservadores como Kristol respaldaban convencidos la ampliación de la Seguridad Social (la pesadilla de Friedman) porque apoyaba a un grupo de lo más benigno, la tercera edad. Kristol hasta se manifestó a favor del seguro de salud universal.¹⁰⁴ No obstante, si los neoconservadores dedicaron gran parte de sus críticas al AFDC, fue porque este abandonaba la función punitiva y pedagógica de los primeros programas de pensiones de maternidad

¹⁰² Gary S. Becker y Guity Nashat Becker, *The Economics of Life: From Baseball to Affirmative Action to Immigration, How Real-World Issues Affect Our Everyday Life*, Nueva York, McGraw-Hill, 1996, p. 95.

¹⁰³ Irving Kristol, *Reflections of a Neoconservative: Looking Back, Looking Ahead*, Nueva York, Basic Books, 1983, p. vii.

¹⁰⁴ Irving Kristol, «Social Reform: Gains and Losses», en *Neoconservatism: The Autobiography of an Idea*, Nueva York, Free Press, 1995 [1973], pp. 200-204.

y, en cambio, había pasado a subvencionar la inmoralidad. Sin embargo, es importante destacar que nunca rechazaron el AFDC directamente, sino que solicitaban un nuevo tipo de programa de asistencia pública que promoviera activamente el matrimonio y la maternidad legítima entre la población pobre.

A primera vista, el neoconservadurismo y el neoliberalismo parecen defender posiciones diametralmente opuestas sobre el papel del Estado en la reforma de la asistencia social. Los neoconservadores no se hacen ilusiones con que la familia tradicional se recuperará por sí misma, sin la intromisión del gobierno; más bien, consideran que la función principal del Estado es la de sostener a la familia, la base de todo orden social, si hace falta mediante el uso de la fuerza. Quienes practican una política social-conservadora, como el nuevo paternalista Lawrence Mead, desarrollan así una elaborada y explícita metodología del poder que nos indica cómo deben imponerse las virtudes no contractuales del trabajo y la familia.¹⁰⁵ En palabras de Nathan Glazer, la tarea de la reforma neoconservadora del bienestar es «reinventar la tradición» inculcando activamente una cultura de abstinencia, monogamia y matrimonio entre las personas pobres.¹⁰⁶

El neoliberalismo en cambio concibe el paternalismo de la familia como una fuente espontánea de bienestar en el orden del libre mercado; un estado de equilibrio que puede verse perturbado por los incentivos perversos del bienestar redistributivo, pero que también se restablece mediante la disminución del paternalismo estatal. En su articulación madura, la agenda neoliberal para la reforma de la asistencia social exige la reducción continua de los gastos redistributivos, la eliminación total de los programas superfluos, la contratación de servicios sociales a proveedores privados, la sustitución de los servicios gubernamentales específicos por un sistema de «vales» que pueda utilizarse para simular los mercados privados y la «elección» del consumidor, y la devolución de la prestación de asistencia social del gobierno federal a los niveles estatal y local.¹⁰⁷ A largo plazo, los

¹⁰⁵ Lawrence M. Mead, *Beyond Entitlement: The Social Obligations of Citizenship*, Nueva York, Free Press, 1986. Aquí Mead argumenta que el contrato de trabajo libre depende en última instancia de la obligación del trabajo no libre, y esta es una obligación que el Estado debe imponer por la fuerza cuando sea necesario. «La solución ha de recaer sobre la autoridad pública. Aparentemente, el trabajo mal remunerado debe ser obligatorio, al igual que el reclutamiento ha sido a veces necesario para dotar de personal al ejército» (p. 84). Véase una colección de ensayos que analizan esta tesis con respecto a las políticas de trabajo y aquellas basadas en la familia en Lawrence M. Mead y Christopher Beem, *Welfare Reform and Political Theory*, Nueva York, Russell Sage Foundation, 2005.

¹⁰⁶ Según Glazer, la «creación y construcción de nuevas tradiciones, o de nuevas versiones de viejas tradiciones, debe tomarse más en serio como requisito de la propia política social». Glazer, *The Limits of Social Policy...*, p. 8.

¹⁰⁷ Sanford Schram, «Neoliberalizing the Welfare State: Marketizing Social Policy, Disciplining Clients», en Damien Cahill, Martijn Konings y Melinda Cooper, *Handbook of Neoliberalism*, Londres, Sage Publications, 2018.

neoliberales esperan que muchas de las funciones antes «usurpadas» por el Estado de bienestar vuelvan a la familia privada, que esperan retome automáticamente su papel «tradicional» en la prestación de cuidados. A medio plazo, sin embargo, reconocen sin problemas la realidad del fracaso familiar (homólogo al fracaso del mercado) y la necesidad de algún tipo de intervención restauradora por parte del Estado para corregir tales desórdenes. En estos casos, su primer impulso es apelar a los «incentivos» como la forma más eficiente de intervención.¹⁰⁸ Siguiendo el modelo de los mecanismos de señalización de precios del mercado, los incentivos como las multas, las sanciones y las recompensas están diseñados para corregir los «incentivos perversos» del desempleo voluntario y la disfunción familiar con el menor esfuerzo posible por parte del Estado. Así, Becker recomienda el uso de prestaciones vinculadas al rendimiento que incentiven a los padres para que envíen a sus hijos a la escuela, estén al día con la vacunación y dejen de consumir drogas.¹⁰⁹

Sin embargo, cuando incluso los incentivos más severos no funcionan, los liberales recurren en la práctica a formas mucho más abiertas de corrección del comportamiento favorecidas por el social-conservadurismo. Aunque rara vez reconoce o teoriza este imperativo, el neoliberalismo debe, en última instancia, delegar el poder en el social-conservadurismo para hacer realidad su visión de un orden de libre mercado que se equilibre naturalmente y de una familia espontáneamente autosuficiente. El neoliberalismo y el social-conservadurismo están, por lo tanto, unidos por una relación de trabajo que es a la vez necesaria y negada: como ideología de poder que solo reconoce su dependencia de los mecanismos de mercado y sus homólogos, el neoliberalismo solo puede realizar sus objetivos por delegación, es decir, externalizando la imposición de obligaciones no contractuales al social-conservadurismo. *In extremis*, el neoliberalismo debe recurrir a la metodología abierta y neoconservadora de la virtud trascendente impuesta por el Estado para realizar su sueño de una ética de la virtud inmanente al mercado.

¹⁰⁸ Pat O'Malley ofrece una reflexión sostenida sobre el papel del incentivo en el pensamiento neoliberal, con un enfoque particular en la escuela de derecho y economía. Pat O'Malley, *The Currency of Justice: Fines and Damages in Consumer Societies*, Nueva York, Routledge-Cavendish, 2009. Sin embargo, no indaga en los límites del incentivo como modo de control.

¹⁰⁹ Gary S. Becker, «Revamp Welfare to Put Children First (1992)», en Becker y Becker, *The Economics of Life*, pp. 100-102. El sistema de sanciones se ha convertido en una parte integral de la gobernanza de la asistencia social, que, llevado al límite, sirve para eliminar por completo a quienes se benefician de la asistencia social cuando no cumplen las condiciones mínimas de pago de la misma. Para un análisis del incentivo ligado al rendimiento en la política social, véase Jamie Peck y Nik Theodore, «Recombinant Workfare, Across the Americas: Transnationalizing "Fast" Social Policy», *Geoforum*, vol. 41, núm. 2, 2010, pp. 195-208.

Transiciones

La inflación de los años setenta supuso una profunda remodelación de la alineación política. En los años sesenta, tanto demócratas del New Deal como neoliberales de libre mercado asumían la ampliación del salario familiar para incluir a los hombres afroamericanos, con el apoyo activo de un presidente republicano. Demócratas y republicanos se autoproclamaron «todos keynesianos» mientras el bienestar redistributivo se imponía como punto de partida y horizonte de toda reforma social. Sin embargo, a mediados de la década de 1970, Nixon había renunciado en secreto al salario para las familias negras, al tiempo que la inflación surgía como una preocupación política abrumadora. En este nuevo contexto de expectativas disminuidas, antiguos demócratas del New Deal como Moynihan se volvieron reconocidos neoconservadores, mientras que neoliberales de libre mercado, como Milton Friedman, perdieron toda adhesión pragmática a los preceptos de la redistribución de la renta. Estos antiguos defensores del liberalismo del New Deal acusaban ahora al AFDC, y por extensión al propio Estado de bienestar, de socavar radicalmente la familia. Y en respuesta a lo que percibían como la incorregible perversión del Estado social de la Gran Sociedad, pedían ahora una reforma del bienestar mucho más drástica de lo que ellos mismos habían imaginado hasta ese momento. Se acordó entonces que los programas de bienestar del New Deal y de la Gran Sociedad tendrían que verse restringidos radicalmente, incluso aunque hubiera que reforzar la institución privada de la familia como alternativa al bienestar social. La responsabilidad familiar, una noción derivada de la tradición de las leyes de pobres de las ayudas públicas, se convirtió entonces en la consigna de los esfuerzos neoliberales y neoconservadores para reformar el Estado de bienestar.

Una figura dispuesta a beneficiarse de este cambio de configuración política fue Ronald Reagan, quien, como gobernador de California, había adoptado una postura activa contra el salario familiar de Nixon. En 1975, la Oficina del Gobernador de California, bajo la influencia de Reagan, publicó el documento *California's Blueprint for National Welfare Reform* [Proyecto de California para la reforma de la asistencia social], que articulaba una nueva agenda de derecha republicana para la política social en contraste con el liberalismo moderado de Nixon.¹¹⁰ El plan recomendaba la implantación de un programa integral de prestación social condicionada (*workfare*) y fue uno de los primeros documentos políticos en entrelazar la temática neoliberal de la autosuficiencia familiar con una agenda

¹¹⁰ Alice O'Connor, *Social Science for What? Philanthropy and the Social Question in a World Turned Rightside Up*, Nueva York, Russell Sage Foundation, 2007, pp. 104-115.

neoconservadora de reforma moral. Esta combinación de influencias cobraría sentido bajo el impulso del shock Volcker y resultaría decisiva para configurar el futuro de la reforma de la asistencia social en las décadas posteriores.

Con la esperanza de replicar su experimento estatal de reforma de la asistencia social a nivel federal, Reagan inició su presidencia anunciando su intención de recortar el gasto en todos los programas sociales. El plan presupuestario resultante, contenido en la Omnibus Budget Reconciliation Act [OBRA, Ley de reconciliación presupuestaria general] de 1981, «rebajó las listas de AFDC en 400.000 individuos, redujo las prestaciones a cientos de miles de personas y recortó los costes federales del AFDC en 1.000 millones de dólares, o el 12 % en el año fiscal de 1982»; sin embargo mantuvo prácticamente intactos programas mucho más costosos como la Seguridad Social, Medicare (para los ancianos) y las prestaciones para veteranos.¹¹¹ Como señaló Marisa Chappell, una perspectiva puramente económica de la política antinflacionista de Reagan no puede explicar la parte desproporcionada de los recortes presupuestarios infligidos al AFDC, un programa que consumía apenas el 1 % del presupuesto federal.¹¹² A ojos de neoliberales y neoconservadores, el AFDC había llegado a personificar el malestar moral específico de la inflación; no es de extrañar, pues, que fuera objeto de un ataque tan abrumador.

A lo largo de sus mandatos como presidente, Reagan intentó poner en práctica el proyecto de bienestar de California a nivel federal, pero por diversas razones nunca logró impulsar las reformas radicales que había previsto. Fue con el presidente Clinton, el nuevo demócrata que prometió «acabar con la asistencia social tal como la conocemos», cuando la alianza neoliberal-neoconservadora sobre la reforma de la asistencia social acabaría dando sus frutos. Los actores que dieron forma a la reforma de la asistencia social de Clinton no fueron necesariamente los mismos. Entre los neoconservadores, solo Moynihan seguiría desempeñando un papel directo en la política social. Su perspectiva social-conservadora sobre la reforma de la asistencia social encontraría una nueva expresión en el paternalismo de Lawrence Mead, el principal exponente de la prestación social condicionada y el comunitarismo del Institute for American Values [Instituto para los Valores Estadounidenses], exponentes de la promoción del matrimonio y la reforma del derecho de familia. Y aunque Milton Friedman siguió desempeñando un papel como intelectual público, su influencia política se canalizaba también mediante una densa red de grupos de reflexión política: desde lo libertario (el Cato Institute) hasta lo neoliberal y lo socialmente

¹¹¹ Chappell, *The War on Welfare...*, p. 202.

¹¹² *Ibidem*

conservador (el American Enterprise Institute, el Manhattan Institute, la Heritage Foundation). Bajo el mandato de Clinton, estas figuras ayudarían a dar forma a una nueva era de política social que situaba inequívocamente los valores familiares en el centro de la reforma de la asistencia social.

III

LA ÉTICA DE LA RESPONSABILIDAD FAMILIAR: REINVENTAR LAS LEYES DE POBRES

Si acertáramos al afirmar que las cosas están cambiando, que la opinión pública está alejándose de la defensa de un gran gobierno y de la doctrina de la responsabilidad social, entonces ese cambio... nos llevaría a restaurar la defensa de la responsabilidad individual al reforzar la familia y restablecer su papel tradicional.
Rose y Milton Friedman, *La tiranía del status quo*.

EN 1996, el presidente Bill Clinton llevó a cabo la revisión más dramática del sistema federal de bienestar desde el New Deal. La Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act —también conocida como PRWORA [Ley de reconciliación de responsabilidad personal y oportunidad de trabajo]— abolió Aid to Families with Dependent Children (AFDC, Ayuda a Familias con Niños Dependientes), programa creado originalmente como parte de la Ley de Seguridad Social de 1935, y lo sustituyó por un programa de asistencia temporal conocido como Temporary Assistance for Needy Families [TANF, Asistencia Temporal para Familias Necesitadas]. Cumpliendo su promesa de «acabar con la asistencia social tal y como la conocemos», la emblemática legislación de Clinton se esforzó al máximo por remplazar la asistencia social a mujeres pobres, hasta entonces de responsabilidad pública, por un sistema implementado por el Estado dirigido a estimular la responsabilidad privada de la familia; este recuperó activamente las relaciones de parentesco e incluso en ocasiones las creó de la nada. Los estados tenían entonces que aumentar sus esfuerzos de vigilancia, seguimiento y cumplimiento de las obligaciones de paternidad, de acuerdo con la presunción de que el padre biológico de un niño o niña, según las normas de bienestar, queda obligado a hacerse cargo de su manutención (importes que se deducirán de los pagos estatales en concepto de bienestar), con independencia de si la madre desea o no mantener una relación con él. Y en lo que debe entenderse como una difuminación de las fronteras entre el contrato sexual libre o forzado, se imponían sanciones a las madres que no cooperaban suficientemente a la

hora de ayudar a las entidades de bienestar a identificar al padre biológico de sus hijos. Al dedicar una parte sustancial del presupuesto federal de los programas de bienestar a la tarea de obtener la manutención de los hijos de sus progenitores varones, la reforma de la asistencia social sirvió para recordar a las mujeres que no era el Estado, sino un hombre particular, el responsable último de su seguridad económica. A no ser que una mujer pudiera asumir «responsabilidad personal» de su futuro económico, tendría que aceptar su condición de dependencia económica del padre ausente o del marido sustituto.

Reflejando un nuevo consenso bipartidista en torno al valor social de las relaciones monógamas, legalmente válidas, la reforma de la asistencia social de Clinton también creó una serie de iniciativas dirigidas a promover las obligaciones morales de la familia, incluida una asignación especial del presupuesto para financiar los programas de promoción del matrimonio y millones de dólares para aquellos estados capaces de demostrar que habían reducido de forma significativa los nacimientos ilegítimos sin que aumentaran las tasas de aborto. Estas iniciativas se expandieron ampliamente durante las administraciones de Bush y Obama, durante las cuales llegaron a elaborarse planes de matrimonios saludables y paternidad responsable, los cuales implicaban a distintos departamentos federales y consumían un porcentaje cada vez mayor del presupuesto federal de bienestar. La noción de que las obligaciones familiares privadas debían en última instancia sustituir las prestaciones de bienestar se complementaba así con la idea de que el Estado tenía que adoptar un papel de pedagogía activa para cultivar los valores familiares apropiados entre el conjunto de población, fuera o no beneficiaria de asistencia social.

Bajo la bandera de la responsabilidad familiar, la reforma de la asistencia social de Clinton selló una alianza institucional entre las perspectivas de la familia del neoliberalismo y del nuevo social-conservadurismo.¹ Sus preocupaciones eran diferentes: si la opinión neoliberal se mostraba

¹ Estoy en deuda con la lectura que hace Brenda Cossman de la PRWORA a este respecto. Véase su «Contesting Conservatism: Family Feuds and the Privatization of Dependency», *American University Journal of Gender, Social Policy and Law*, núm. 13, 2005, pp. 415-509. Cossman habla de la «naturaleza híbrida de la PRWORA, que trata de promover tanto una privatización fiscal conservadora [neoliberal] de los costes, antes públicos, de mantener a las familias, como una visión social-conservadora de la familia tradicional, reduciendo el número de nacimientos fuera del matrimonio y promoviendo este último» (p. 454). Cossman señala que tanto el neoliberalismo como el social-conservadurismo «estaban de acuerdo en el objetivo de promover la responsabilidad personal», pero para el neoliberalismo «la responsabilidad personal se planteaba principalmente en términos financieros, mientras que para el social-conservadurismo se planteaba también en términos morales». Lo que yo añadiría al argumento de Cossman es la propuesta de que el deslizamiento de la responsabilidad personal a la familiar dentro del discurso (neo)liberal es lo que permite al neoliberalismo forjar una alianza con el social-conservadurismo.

firme con que las obligaciones económicas de la familia debían hacerse cumplir incluso cuando los vínculos de parentesco legales y afectivos se hubieran roto, el social-conservadurismo se esforzaba por recuperar activamente a la familia como institución moral basada en el trabajo no remunerado del amor. Sin embargo, ambas posturas coincidían en que la familia privada (más que el Estado) haría las veces de fuente primaria de seguridad económica.

Al convertir la responsabilidad familiar en el principio rector de la legislación federal sobre bienestar, Clinton llevó a cabo un programa de reforma social que Ronald Reagan había iniciado ya en los años setenta. Como gobernador de California, Reagan había querido «reforzar la responsabilidad familiar» trasladando la carga legal de la asistencia pública a los padres, hijos adultos y familiares.² Como presidente, proclamó que «las familias íntegras y autosuficientes son el mejor seguro contra la pobreza jamás diseñado» e intentó, sin mucho éxito, traducir esta perspectiva a la legislación federal sobre bienestar.³ Sin embargo, a principios de los años setenta, el gobernador Reagan se mantuvo a la derecha de la corriente política predominante, lo que resultaba demasiado extremo para muchos de sus colegas republicanos mucho más moderados. Cuando Nixon esperaba ampliar la cobertura social del New Deal para incluir a los hombres negros en el ámbito del salario familiar fordista, Reagan estaba ocupado recuperando, o más bien reinventando, una tradición mucho más antigua de ayuda basada en la responsabilidad familiar privada.

Esta tradición floreció por última vez en la llamada edad de oro del capitalismo estadounidense, en la que tanto el liberalismo clásico como el conservadurismo moral la habían abrazado como la forma más apropiada para gestionar a la población pobre. Su origen se remonta mucho más atrás, hasta la tradición británica y estadounidense de las leyes de pobres, cuyas disposiciones no distinguían entre los lazos de parentesco emocionales o financieros y «prácticamente equiparaban las funciones morales y económicas de la familia».⁴ En la década de 1970, Ronald Reagan era prácticamente el único entre los republicanos que intentaba recuperar la desacreditada tradición de las leyes de pobres de responsabilidad familiar

² Gobernador de California (Ronald Reagan), *California's Blueprint for National Welfare Reform: Proposals for the Nation's Food Stamp and Aid to Families with Dependent Children Programs*, Sacramento (CA), Office of the Governor, 1974, p. 2.

³ Ronald Reagan, «Remarks at the Annual Meeting of the National Alliance of Business, September 14, 1987», *Public Papers of the Presidents of the United States: Ronald Reagan, 1987, Book 2*, Washington DC, Office of the Federal Register, 1989, p. 1032.

⁴ M. A. Crowther, «Family Responsibility and State Responsibility in Britain before the Welfare State», *The Historical Journal*, vol. 25, núm. 1, 1982, p. 135. Crowther se refiere específicamente a la Nueva Ley de Pobres inglesa de 1834, que inspiró el sistema de ayuda pública estadounidense tras la Guerra Civil.

como alternativa al Estado de bienestar del New Deal. En los años ochenta, estas ideas habían llegado hasta la corriente predominante del debate de la política social y eran ampliamente defendidas por grupos de reflexión como la Heritage Foundation.⁵ Sin embargo, al final le tocó al presidente Clinton, el nuevo demócrata, hacer realidad las quimeras reaccionarias que en su día los republicanos más moderados habían rechazado.

La tradición de «responsabilidad familiar» de la asistencia social estadounidense tiene su origen en las leyes isabelinas y en las primeras leyes de pobres coloniales; después fue reinventada en los tiempos de la posguerra civil, cuando emergió como una metodología elaborada e invasiva para controlar la vida de la población pobre. Cuando a mediados del siglo XIX, quienes llevaron a cabo la reforma social del New Deal quisieron importar los principios europeos de seguro social a Estados Unidos, tuvieron que superar esta tradición para imponer su propia visión del bienestar redistributivo, si bien siempre centrado en la familia.

Hoy por hoy, tanto el neoliberalismo como el nuevo social-conservadurismo se han descubierto invirtiendo esta trayectoria histórica para recuperar la tradición perdida de la responsabilidad familiar privada del cuidado de las personas dependientes.⁶ No es casual que la academia contemporánea, desde el libertarismo cristiano (Marvin Olasky) al neo-conservadurismo pleno (Gertrude Himmelfarb), identifiquen al Estados Unidos de finales del siglo XIX con la no reconocida edad de oro de la beneficencia natural, en la que el capitalismo del libre mercado convivía felizmente con las formas más austeras de social-conservadurismo.⁷ La

⁵ Stuart Butler y Anna Kondratas (ambos asociados a la Heritage Foundation) sitúan la «responsabilidad familiar» en el centro de su programa de reforma «conservadora» de la asistencia social y entrelazan a la perfección las preocupaciones neoliberales y social-conservadoras sobre el papel de la familia. Stuart Butler y Anna Kondratas, *Out of the Poverty Trap: A Conservative Strategy of Welfare Reform*, Nueva York, Free Press, 1987, pp. 148-159.

⁶ Esta iniciativa no es en absoluto exclusiva de Estados Unidos. El filósofo político Robert E. Goodin considera que el resurgimiento de las disposiciones sobre responsabilidad familiar es característico de la reforma neoliberal de la asistencia social en Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Robert E. Goodin, *Reasons for Welfare: The Political Theory of the Welfare State*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 1998, pp. 332-359. Véase Wendy Larnar, «Post-Welfare State Governance: Towards a Code of Social and Family Responsibility», *Social Politics*, vol. 7, núm. 2, 2000, pp. 244-265, para un análisis del intento muy deliberado del gobierno neozelandés de incorporar la ley de pobres a la política de bienestar social.

⁷ Véase Marvin Olasky, *The Tragedy of American Compassion*, Washington DC, Regnery Publishing, 1992, y Gertrude Himmelfarb, *The De-moralization of Society: From Victorian Virtues to Modern Society*, Nueva York, Vintage Books, 1994. El historiador Stephen Pimpare aborda las afinidades reales e imaginarias entre la política de bienestar estadounidense de la edad de oro y de finales del siglo XX en su *The New Victorians: Poverty, Politics and Propaganda in Two Gilded Ages*, Nueva York, New Press, 2004. «Las ideas influenciadas por la ley de pobres que propugnaban los líderes reformistas de la edad de oro y las políticas que ayudaron a promulgar servirían de modelo para Marvin Olasky, Newt Gingrich,

peculiar alianza del liberalismo económico y el conservadurismo moral que triunfó en la edad de oro es la que hoy les gustaría recuperar, a pesar de que en sus momentos más lúcidos reconocían que la historia se reinventa más que se repite.

En la práctica, quienes apostaban por reformar la asistencia social a finales del siglo XIX no podían limitarse a recuperar el sistema de la edad de oro de responsabilidad familiar basado en la beneficencia privada; en su lugar, se esforzaron por incorporar sus mandatos en las estructuras institucionales existentes del Estado de bienestar. Así, el efecto de la reforma de la asistencia social de Clinton de 1996 consistió en la enmienda de un programa de bienestar que en su día había sido redistributivo y reconvertirlo en un inmenso aparato federal para hacer cumplir las responsabilidades «privadas» de la familia y del trabajo. A lo que aquí asistimos no es tanto al perverso desmantelamiento del Estado de bienestar previsto por el libertarismo conservador de Charles Murray o Marvin Olasky, como a su revitalización como instrumento para imponer obligaciones familiares y laborales en la población pobre beneficiaria de asistencia social. Las disposiciones de responsabilidad familiar, controladas en su día por los tribunales y por quienes trabajaban en organizaciones benéficas, ahora formaban parte de la legislación federal sobre bienestar y contaban con toda la fuerza institucional de una estudiada infraestructura de asistencia social nacional.

El papel de la tradición de las leyes de pobres en la configuración de la reciente reforma de la asistencia social desvela algunos de los errores de interpretación de los relatos habituales sobre el neoliberalismo. La mayoría de ellos se centran en la noción fundamental de la responsabilidad personal en el neoliberalismo. Jacob Hacker, por ejemplo, denuncia el asalto neoliberal a las garantías de riesgo social como una «cruzada de la responsabilidad personal» y lamenta sus efectos destructivos en la inversión pública, la seguridad laboral y... la familia.⁸ Sin embargo, prestar atención exclusivamente al individualismo del libre mercado oculta la recurrente

Charles Murray y otros líderes del movimiento reformista más reciente; entre nuestros moralistas modernos contra la asistencia social, solo la historiadora Gertrude Himmelfarb encontró la ocasión de inspirarse explícitamente en la política inglesa. Es de estos victorianos estadounidenses de quienes hemos recibido nuestro pensamiento actual sobre la política de asistencia a la población pobre; es de esta experiencia de la edad de oro de la que nuestros nuevos victorianos han bebido, a menudo muy conscientemente» (p. 17). En la actualidad existe una abundante bibliografía que rastrea las afinidades históricas entre el liberalismo económico estadounidense de la edad de oro y la política económica neoliberal. Véase, por ejemplo, Larry M. Bartels, *Unequal Democracy: The Political Economy of the New Gilded Age*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2008. Sin embargo, son pocos los estudios críticos sobre la edad de oro que prestan atención a la confluencia de las ideas liberales clásicas y las social-conservadoras durante este periodo.

⁸ Jacob S. Hacker, *The Great Risk Shift: The New Economic Insecurity and the Decline of the American Dream*, Oxford, Oxford University Press, 2006.

omisión entre lo personal y lo familiar en el discurso neoliberal y, por lo tanto, hace incomprensible su compatibilidad histórica con diversas facetas del conservadurismo moral. Sí, el neoliberalismo interpela insistentemente al individuo a asumir la responsabilidad de su destino; pero incluso el mandato de *responsabilidad personal* se desliza inevitablemente hacia el de *responsabilidad familiar* cuando se trata de gestionar los inevitables problemas de dependencia económica (el cuidado de los hijos e hijas, personas discapacitadas, ancianas o no asalariadas). A este respecto, Wendy Brown habla de una «tensión legal y política persistente en el liberalismo entre el individuo y la familia», una tensión que se encuentra claramente en la tradición de las leyes de pobres, en las que la responsabilidad individual de ser autosuficiente mediante el trabajo asalariado, siempre ha implicado una responsabilidad mayor hacia las personas dependientes no asalariadas de la familia.⁹ En el trabajo de Milton y Rose Friedman, dicha transferencia se presenta de forma tan evidente que no requiere mayor aclaración. «Si acertáramos al afirmar que las cosas están cambiando, que la opinión pública está alejándose de la defensa de un gran gobierno y de la doctrina de la responsabilidad social», escriben, «entonces ese cambio [...] *tenderá a restaurar una creencia en la responsabilidad individual reforzando la familia y restableciendo su papel tradicional*».¹⁰ La restauración de la responsabilidad familiar se presenta aquí como la consecuencia natural de la renuncia por parte del Estado a ejercer el papel de proveedor de bienestar social, de una forma tan espontánea e inexplicable como la libertad del individuo en un entorno de mercado competitivo.

El social-conservadurismo suele ser mucho más consciente de la paradoja conceptual que aquí opera, así como de la fuerza coercitiva que debe desplegarse para subordinar al individuo libre a las obligaciones de la familia. «Puede que parezca una paradoja», apunta Gary Bauer, asesor sobre familia del presidente Reagan, «que la sociedad estadounidense, con su defensa de los derechos individuales, otorgue un valor tan grande a una estructura familiar fuerte». Después de todo, para algunos, «la naturaleza de la familia podría considerarse opuesta a la libertad: una limitación entre cónyuges vinculada por compromisos entre ambos, una carga para los progenitores obligados a cuidar de su descendencia y una restricción para los hijos que viven bajo la autoridad paterna». Pero Bauer, más que Milton y Rose Friedman, comprende que son precisamente esas obligaciones familiares las que sostienen la libertad del individuo liberal, que sin ellas sería impensable:

⁹ Wendy Brown, *States of Injury: Power and Freedom in Late Modernity*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 1995, pp. 149-150 [ed. cast.: *Estados del agravio. Poder y libertad en la Modernidad Tardía*, Madrid, Lengua de Trapo, 2019].

¹⁰ Milton y Rose Friedman, *Tyranny of the Status Quo*, Harmondsworth, UK, Penguin Books, 1985, p. 132 [ed. cast. *La tiranía del status quo*, trad. por Jose M^a Álvarez Flores, A. Gómez Pérez, Barcelona, Ariel, 1984]. Cursiva de la autora.

La experiencia de la historia [...] demuestra que la familia y la libertad son compañeras naturales, no enemigas. Los padres de nuestra Constitución vieron claramente que solo aquellas sociedades fuertes en ciertas virtudes civiles podrían sostener el experimento de la democracia representativa. La familia es el primer terreno de entrenamiento para la responsabilidad individual, para el sacrificio personal, para buscar un objetivo común por encima del interés propio [...] Por otro lado, solo en una sociedad que permita la libertad individual los integrantes de una familia podrán tener la iniciativa y la responsabilidad necesarias para una vida familiar fuerte.¹¹

Se puede ver aquí cómo el neoliberalismo y el neoconservadurismo logran finalmente reconciliar sus diferencias. Perfiles liberales como Friedman comienzan con la evidencia de la libertad individual, pero terminan defendiendo la necesidad de las obligaciones familiares al hacer frente al coste social de las personas dependientes no asalariadas. Los perfiles social-conservadores comienzan con la importancia fundacional de la familia y derivan la libertad del individuo a partir de ese punto. Sin embargo, ambos señalan la importancia de la responsabilidad familiar como fuente ideal de seguridad económica y fuerza de oposición efectiva a los poderes desmorlizantes del Estado de bienestar.

La responsabilidad familiar y las leyes isabelinas de pobres

Con fecha de 1601, la *Elizabethan Act for the Relief of the Poor* [ley isabelina de alivio de los pobres], conocida como la ley isabelina de pobres o la antigua ley de pobres, dio forma al primer sistema nacional de ayudas a las personas más pobres en Inglaterra y Gales. Formada por un compendio de nuevas y viejas disposiciones, la ley estaba diseñada para sustituir los mecanismos más antiguos de caridad basados en la Iglesia por un nuevo sistema de ayudas más completo, que administrarían las parroquias y que se financiaría mediante impuestos al territorio. Es justo considerar la ley de pobres como el primer intento serio de organizar una ayuda pública a escala nacional. Reconocía sin ambigüedades las vicisitudes del mercado de trabajo y la consecuente necesidad de algún tipo de estructura de apoyo permanente, pero también imponía estrictas condiciones para la distribución de las ayudas. Entre ellas, la primera que debía cumplirse era la de la responsabilidad familiar, la idea de que los familiares con cierto grado de parentesco estaban obligados a proporcionar todos los recursos que les

¹¹ Gary L. Bauer, *The Family: Preserving America's Future: A Report to the President from the White House Working Group on the Family*, Washington DC, Domestic Policy Council, 1986, p. 17.

fuera posible antes de que la parroquia distribuyera ningún fondo. Así, el texto de la ley original de 1601 estipulaba «que el padre y abuelo y la madre y abuela y los hijos e hijas de cualquier persona pobre, anciana, ciega, coja o impedida, o incapaz de trabajar por cualquier otro motivo, teniendo capacidad suficiente, aliviarán y mantendrán, por su exclusiva cuenta, a cada una de esas personas pobres».¹²

La ley isabelina de pobres introducía así nuevas reglas de obligación filial que exigían que los hijos adultos cuidaran de sus padres ancianos y empobrecidos, mientras que también incluía una disposición anterior sobre bastardía, promulgada en 1576, que hacía responsables a ambos progenitores de la manutención de los hijos o hijas ilegítimos y que planteaba cargos penales para actos sexuales ilícitos.¹³ Estas disposiciones estatutarias completaban la antigua obligación del derecho anglosajón (*common law*) que obligaba al marido a mantener a su mujer, a las que se solía recurrir en los casos que implicaban a los miembros más pobres de la parroquia.¹⁴ En cada caso, el objetivo declarado de estas normas era aliviar a la parroquia local de la carga del sustento público delegando la responsabilidad principal en la familia. Además, en ciertas circunstancias, las obligaciones familiares podían intercambiarse por obligaciones laborales, que también se recogían en la ley de pobres: si un parroquiano local no proporcionaba el sustento debido para un miembro indigente de su familia, se vería obligado a trabajar gratuitamente para reembolsar a las autoridades locales el coste de dicho sustento. Desde el principio, en la aplicación de la ley de pobres las obligaciones laborales y familiares fueron de la mano.

Cuando hubo que adaptar leyes y disposiciones del viejo mundo a las nuevas colonias estadounidenses, cada uno de los trece estados terminó replicando la ley de pobres en su integridad, conservando muchas de las disposiciones de responsabilidad familiar recogidas en la ley original.¹⁵ Todas las colonias establecieron sanciones penales para el sexo fuera del matrimonio, así como leyes civiles que exigían a los padres putativos mantener a su descendencia ilegítima. Parece que estas leyes se aplicaron con mayor rigurosidad a los trabajadores en régimen de servidumbre, de nuevo con la voluntad expresa de aliviar a las autoridades locales de la carga de su sustento. La historiadora Mary Ann Mason apunta que las leyes coloniales

¹²43 Eliz. 1, cap.2, § VI, 1601 (según modificaciones).

¹³ Daniel R. Mandelker, «Family Responsibility under the American Poor Laws I», *Michigan Law Review*, vol. 54, núm. 4, 1956, p. 500; Mary Ann Mason, *From Father's Property to Children's Rights: The History of Child Custody in the United States*, Nueva York, Columbia University Press, 1994, p. 25.

¹⁴ Edith Abbott, «Poor Law Provision for Family Responsibility», *Social Service Review*, vol. 12, núm. 4, 1938, p. 600.

¹⁵ Walter I. Trattner, *From Poor Law to Welfare State: A History of Social Welfare in America*, 6.ª ed., Nueva York, Simon & Schuster, 2007, p. 17.

de pobres «no eran solamente prescriptivas»: esas leyes se aplicaban ampliamente, los tribunales solían ordenar a los padres que depositaran fianzas ante las autoridades locales y sentenciaban a las madres no casadas a penas físicas como los latigazos.¹⁶ Por su parte, en Inglaterra, las deudas familiares se monetizaban rápidamente y pasaban a ser obligaciones laborales: a una mujer sirvienta que hubiera concebido un hijo fuera del matrimonio podía exigírsele que ampliara su periodo de servicio para compensar el coste de manutención, mientras que un padre putativo podría conmutar una sanción penal por un periodo de trabajos forzados.

Estas leyes sobrevivieron al fin del periodo colonial y sirvieron de telón de fondo regulador de las vidas de la población empobrecida en la época de la República y posteriormente. En varias coyunturas históricas, las disposiciones sobre responsabilidad familiar de la leyes de pobres se revisaron o ampliaron para dar respuesta a las cambiantes fronteras entre el trabajo y el hogar. A medida que la unidad familiar se separó del hogar productivo en el curso del siglo XIX y a medida que la familia se volvió más pequeña, la red de parentesco contenida en las leyes de responsabilidad familiar se amplió proporcionalmente para incluir a hermanas y hermanos, nietos y nietas y abuelos y abuelas.¹⁷ Del mismo modo, a medida que el divorcio se volvió más común en el siglo XIX, se introdujeron nuevas leyes de manutención infantil que recogían las responsabilidades de los progenitores separados, tanto en el derecho anglosajón como en nuevas disposiciones estatutarias inspiradas en la ley de pobres original.¹⁸ Cuando terminó la Guerra Civil, quienes habían sido esclavos fueron declarados trabajadores libres y también ellos quedaron bajo el amparo de las leyes de responsabilidad familiar recién inventadas. Como demuestra la historia, las leyes de pobres no solo se importaron intactas desde Inglaterra, sino que posteriormente se reinventaron muchas veces como medio para disciplinar nuevos tipos de libertad sexual y económica. Como tales, han servido para designar y controlar las fronteras del mercado de trabajo libre y de la intimidad consensuada, exigiendo el cumplimiento de los lazos familiares y laborales como deberes ineludibles cuando la población pobre no era capaz de cumplirlos por sus propios medios.

La reinención de las leyes de pobres desempeñó un papel especialmente significativo al dar forma al capitalismo industrial moderno y sus filosofías políticas características, primero en Inglaterra en la década de 1830 y posteriormente en los Estados Unidos de la Reconstrucción. Cuando la Royal

¹⁶ Mason, *From Father's Property to Children's Rights...*, p. 27.

¹⁷ Abbott, «Poor Law Provision for Family Responsibility...», p. 599.

¹⁸ Drew D. Hansen, «The American Invention of Child Support: Dependency and Punishment in Early American Child Support», *Yale Law Journal*, vol. 108, núm. 5, 1999, pp. 1123-1153.

Commission into the Operation of the Poor Laws [Real Comisión para el Funcionamiento de las Leyes de Pobres] de 1832 investigó el estado de las medidas de alivio a la pobreza en la Inglaterra industrial, se dio cuenta de que el objetivo original de estas leyes se había diluido inevitablemente por las sucesivas concesiones de las autoridades locales. Quienes integraban esta Comisión para las Leyes de Pobres quedaron especialmente sorprendidos por el hecho de que la generosidad de las medidas de alivio parecía estar menoscabando no solo la ética laboral sino además los lazos tradicionales de dependencia familiar:

Aún no se había informado de los peores resultados: en todos los estratos de la sociedad las principales fuentes de felicidad y virtud se encuentran en los afectos domésticos y esto es especialmente cierto entre quienes cuentan con tan pocos recursos como las clases trabajadoras. Ahora bien, la pobreza parece ser un motor para la desconexión de cada miembro de la familia de todos los demás; reduciéndolos al estado de animales domesticados, alimentados, alojados y cuidados por la parroquia, sin dependencia ni intereses mutuos.¹⁹

Las obligaciones laborales y familiares, concluía, deberían reintroducirse en su forma más estricta.²⁰ Dentro de la tradición liberal clásica, la responsabilidad personal y familiar se sostenían juntas en una relación metonímica de inclusión mutua. Al ser interpelado como trabajador libre e independiente, el sujeto liberal debería asumir la responsabilidad individual de su destino, de no ser así se vería abocado a las casas de trabajo o a algún otro régimen de trabajo forzado. Sin embargo, cuando se trataba del cuidado de personas dependientes no trabajadoras, la responsabilidad personal se integraba en una categoría superior de responsabilidad familiar y la idea del individuo independiente se incorporaba a la noción más amplia de la familia autosuficiente. Las tareas de sustento familiar se podían imponer casi con el mismo rigor que el trabajo forzado: ambas se entendían como obligaciones no contractuales que el Estado tenía derecho a hacer cumplir en aras de mantener el orden contractual del libre mercado.

La nueva ley de pobres se vio muy afectada por el pensamiento de Thomas Robert Malthus, cuya economía política cristiana reflejaba una peculiar combinación de preocupaciones liberales clásicas y moral-conservadoras.²¹ A medida que avanzaba el siglo y la nueva ley de pobres se definía

¹⁹ Comisariado de la Ley de Pobres, *Poor Law Commissioners' Report of 1834*, Londres, Darling and Son, 1905, pp. 95-96.

²⁰ Crowther, «Family Responsibility and State Responsibility in Britain before the Welfare State...», pp. 131-137.

²¹ En concreto, Malthus combinó los principios liberales clásicos con una forma de teología económica moldeada por el cristianismo evangélico. A este respecto, véase Michael C. Waterman, *Revolution, Economics and Religion: Christian Political Economy, 1798-1833*,

como filosofía integral de reforma social de la caridad, la ética de la responsabilidad familiar señaló con claridad este origen dual de las filosofías liberal clásica y conservadora en torno a lo social. Los nuevos reformistas de la «caridad científica» de finales del siglo XIX en Gran Bretaña y Estados Unidos se consideraban a sí mismos herederos de la Nueva Ley de Pobres y se esforzaron por transformar sus escasos dictámenes legislativos en una forma de regulación social omnipresente. Estos reformistas entendieron las obligaciones económicas y morales como elementos indisolubles de la ley: no bastaba con proteger las arcas públicas exigiendo la obligación económica de garantizar el sustento familiar, uno debería además intentar restaurar la familia en sí misma, de tal forma que coincidiera con la familia considerada «tradicional». Entendida como punto de unión entre las obligaciones económicas y morales del parentesco, la responsabilidad familiar era el grito de guerra tanto del liberalismo clásico, como del conservadurismo moral. Mientras que al liberalismo del libre mercado le preocupaba que se cumplieran las obligaciones económicas de la familia, incluso cuando los lazos morales y sociales de parentesco se habían roto, el conservadurismo estaba convencido de que había que apuntalar los pilares morales y legales de la familia antes de poder afrontar como es debido los costes económicos de la ruptura conyugal. Sin embargo, en muchos casos, una misma persona compartía en mayor o menor medida ambas filosofías.

Se pueden identificar dos momentos clave en la historia de las disposiciones de responsabilidad familiar de las leyes de pobres. En primer lugar, durante el periodo de posguerra civil, las leyes de responsabilidad familiar se ampliaron para incluir a la población afroamericana recién emancipada; posteriormente esas leyes se revisaron y se intensificaron en la edad de oro estadounidense, cuando sirvieron para regular las vidas de la población blanca estadounidense y de la clase trabajadora migrante. En ambos casos, la ética de la responsabilidad familiar aunó las perspectivas del liberalismo clásico y del conservadurismo moral alrededor de las obligaciones de la familia y, por lo tanto, facilitaba mucho la peculiar alianza entre la economía radical del libre mercado y el tradicionalismo moral que florecía en los Estados Unidos de finales del siglo XIX. Tras la Guerra Civil, las leyes de responsabilidad familiar servían para introducir a las personas anteriormente esclavizadas en los ritmos del mercado de trabajo libre, al tiempo que prescribían una ética de la vida doméstica propia del nuevo social-conservadurismo entre la población afroamericana. En los Estados Unidos de la edad de oro, esas leyes ayudaban a reducir al mínimo el gasto público

Cambridge, Cambridge University Press, 1991. Para un amplio debate sobre la influencia de Malthus en la Nueva Ley de Pobres, véase Joseph Persky, «Classical Family Values: Ending the Poor Laws as They Knew Them», *Journal of Economic Perspectives*, vol. 11, núm. 1, 1997, pp. 185-187. Persky apunta que «Las opiniones patriarcales de Malthus sobre la familia eran ampliamente compartidas por los liberales y los conservadores de su época» (p. 185).

en asistencia social, pero también se complementaban con campañas más ambiciosas para restaurar la «familia tradicional» entre la población en general. Fue necesario superar esta ética de responsabilidad familiar propia del liberalismo clásico y del conservadurismo antes de que el Estado de bienestar del New Deal pudiera tomar forma a principios del siglo XX.

Promover la familia afroamericana: la reinención de las leyes de pobres después de la emancipación

La creación en 1865 de la Freedmen's Bureau [Oficina de Hombres Emancipados], una institución diseñada para supervisar la transición de antiguos esclavos de un estado de sometimiento a la libertad, se considera el primer experimento de sustento federal que puso en marcha el Congreso. El historiador sobre bienestar Walter Trattner llega incluso a considerar la Oficina como «la primera agencia de asistencia social federal de la nación»: su puesta en marcha «representa un esfuerzo federal sin precedentes, ya que el gobierno asumió la responsabilidad de la manutención de los esclavos emancipados».²² Sin embargo, a pesar de su alcance, el experimento de la Oficina en el sustento federal nunca se concibió como nada más que un proyecto de transición; estaba diseñada para ser eliminada a los pocos años. Incluso cuando la Oficina ofrecía entonces apoyos temporales, ayudando a antiguos esclavos a establecerse y a buscar trabajo, también se esforzaba por transformar a la población afroamericana en ciudadanos independientes y trabajadores libres, debidamente formados en las artes de la libertad contractual y las obligaciones conyugales.

Como ha defendido Amy Dru Stanley, el liberalismo clásico planteaba una relación recíproca entre la libertad del trabajo contractual y las obligaciones no contractuales del matrimonio. El abolicionismo había denunciado esta práctica por despojar a los hombres negros tanto de su libertad de vender su fuerza de trabajo como de sus derechos legales sobre el trabajo de sus mujeres e hijos.²³ Este movimiento abolicionista consideraba la emancipación plena como el momento en el que los hombres negros pudieran disfrutar al mismo tiempo de la libertad contractual en el mercado de trabajo y de los derechos no contractuales con respecto de las personas que dependían de ellos. La auténtica emancipación no estaría garantizada hasta que a los antiguos esclavos y a los nuevos trabajadores libres se les concedieran los mismos derechos de matrimonio y paternidad que a los hombres blancos.

²² Trattner, *From Poor Law to Welfare State...*, p. 83.

²³ Amy Dru Stanley, *From Bondage to Contract: Wage Labor, Marriage, and the Market in the Age of Slave Emancipation*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, pp. 138-147.

Antes de la proclamación de la emancipación en 1863, los esclavos no tenían derecho a establecer contratos comerciales de trabajo y estaban excluidos del contrato civil del matrimonio. Permitir el matrimonio entre esclavos habría otorgado al esclavo varón derechos de propiedad sobre el trabajo de su mujer y de sus hijos y, por lo tanto, habría amenazado los derechos absolutos del amo blanco, quien se consideraba la cabeza del hogar y responsable de todos sus dependientes: hombres, mujeres, niñas y niños por igual, libres o no.²⁴ El efecto de la emancipación era restringir el poder absoluto del cabeza de familia blanco al limitar sus derechos de propiedad a su mujer y sus hijos inmediatos, no obstante el proceso también provocó una nueva relación de poder entre quienes antes estaban esclavizados: elevando a los hombres negros emancipados sobre las mujeres, dotándolos, como a los hombres blancos, de derechos y responsabilidades sobre sus mujeres legales.

Al mismo tiempo, la Oficina de Hombres Emancipados intentó transformar a los hombres negros anteriormente esclavizados en trabajadores libres asalariados, explicándoles también que la libertad en el mercado laboral iba acompañada del derecho a casarse y de la responsabilidad de mantener a una mujer y a los hijos. Para hacer comprender esta lección, el personal de la Oficina se dedicó a supervisar los contratos salariales y los matrimonios formales entre esclavos emancipados durante los primeros años de la Reconstrucción, asegurándose de que ambas cosas fueran «con arreglo a derecho».²⁵ En muchos casos, de hecho, los contratos civiles de trabajo y matrimonio eran lo mismo; dado que las mujeres no se consideraban trabajadoras libres como los hombres, el personal de la Oficina solía permitir que los hombres recurrieran al trabajo de su mujer e hijos como medio para garantizar el salario familiar.²⁶ Por todo el sur, el personal de la Oficina de Hombres Emancipados llevó a cabo una exigente campaña de promoción del matrimonio entre esclavos, muchos de los cuales se habían unido anteriormente en lazos informales, habían convivido o estaban implicados en múltiples relaciones. El personal de la Oficina tenía autorización para realizar ceremonias matrimoniales, para certificar o disolver uniones informales que hubieran comenzado antes de la emancipación, así como para supervisar a cónyuges que hubieran sido separados a la fuerza por el amo esclavista.²⁷ En todos los casos, se esforzaban por regularizar o

²⁴ Angela Onwuachi-Willig, «The Return of the Ring: Welfare Reform's Marriage Cure as the Revival of Post-Bellum Control», *California Law Review*, vol. 93, núm. 6, 2005, pp. 1654-1655.

²⁵ Priscilla Yamin, *American Marriage: A Political Institution*, Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 2012, p. 32.

²⁶ Donna L. Franklin, *Ensuring Inequality: The Structural Transformation of the African American Family*, Oxford, Oxford University Press, 1997, p. 31.

²⁷ Yamin, *American Marriage...*, p. 33.

disolver lo que entendían como las uniones ilegítimas, inmorales e informales que habían existido durante la esclavitud. Sin embargo, más allá de estos esfuerzos de formalización legal, la Oficina también ofrecía pedagogía para la vida doméstica, explicando a los hombres la idea de que debían convertirse en proveedores del salario de sostén de la familia y a las mujeres que pasarían a depender económicamente de los hombres libres.

La legislación estatal no tardó en asumir y ampliar los esfuerzos de promoción del matrimonio de la Oficina de Hombres Emancipados. Casi inmediatamente después de la emancipación, los estados del sur llevaron a cabo reformas legales para transformar los matrimonios informales surgidos bajo la esclavitud en uniones formales apropiadas.²⁸ Para ello se utilizaron diversos métodos. Algunos estados simplemente impusieron matrimonios legales de la nada, declarando que las parejas convivientes pasarían a considerarse a partir de entonces marido y mujer, con independencia de que quisieran casarse; otros establecieron un límite de nueve meses en los que los antiguos esclavos debían legitimar sus uniones informales o dejar de vivir juntos. En cuanto las leyes de matrimonio fueron aplicables a la población afroamericana se impusieron de forma despiadada: antiguos esclavos que seguían viviendo juntos sin formalizar sus uniones o quienes se encontraban en matrimonios forzados y pasaron a tener nuevas parejas sin divorciarse antes fueron perseguidos por las leyes de adulterio y fornicación. Hasta su disolución en 1872, la Oficina de Hombres Emancipados siguió trabajando de cerca con la legislación estatal para supervisar estas normas.²⁹

El interés de la Oficina por la promoción del matrimonio se veía motivado sobre todo por el miedo de que antiguos esclavos (en concreto mujeres y niños) se convirtieran en una gran carga pública si no se les atendía dentro de la unidad familiar legal. Lo que aquí prevaleció fue la preocupación del liberalismo clásico por el coste social de la dependencia y la voluntad de trasladar estos costes a la esfera privada.³⁰ La Oficina de Hombres Emancipados y la legislación sureña tenían motivos de peso para temer a las miles de mujeres sin marido y niños y niñas sin padre legal surgidas tras la ley de emancipación y que se convertirían en personas dependientes de las ayudas públicas si no se reinsertaban de inmediato en la estructura legal de una familia. Al crear obligaciones familiares donde no habían existido, la Oficina de Hombres Emancipados y la legislación sureña confiaban en redimir al Estado de cualquier responsabilidad con respecto de esta población recién emancipada de trabajadores libres y

²⁸ Katherine Franke, «Becoming a Citizen: Reconstruction Era Regulation of African American Marriages», *Yale Journal of Law and the Humanities*, núm. 11, 1999, pp. 277-278.

²⁹ *Ibidem*, pp. 282 y 289-290.

³⁰ *Ibidem*, pp. 302-303; Onwuachi-Willig, «The Return of the Ring...», pp. 1658-1661.

potenciales dependientes. Con la intención de subrayar el hecho de que el matrimonio sería el sustituto de las ayudas públicas, durante este periodo muchos estados aprobaron nuevas disposiciones que incluían a los hombres afroamericanos en las leyes de manutención del cónyuge y de los hijos; actualizando así con gran eficacia la tradición de las leyes de pobres de la responsabilidad familiar para incluir a los antiguos esclavos.³¹ Si los hombres no lograban o no querían cumplir estas obligaciones, ellos (y sus hijos) podrían ser sentenciados a trabajos forzados, a menudo en los estados en los que habían sido antes esclavos, mientras que las mujeres podrían ser obligadas a realizar trabajos forzados o a prestarse al servicio doméstico.

Así, para la mayoría de los esclavos la promesa del trabajo libre resultó efímera. Los distintos Black Codes [Códigos Negros] aprobados en legislaciones sureñas tras la Reconstrucción recogían una amplia gama de sanciones criminales, desde la vagancia hasta la crianza fuera del matrimonio o la falta de atención a los hijos.³² Dado que para los antiguos esclavos resultaba casi imposible alcanzar la autosuficiencia, la mayoría no tardaba en verse sometido de nuevo al trabajo forzado, al peonaje por deudas o a la servidumbre doméstica; lo que implicaba la redefinición de las fronteras del trabajo forzoso. Así, la población afroamericana se vio inducida sin contemplaciones a la tradición de las leyes de pobres de la responsabilidad familiar legalmente exigible en el mismo momento en que accedía al mundo de la libertad contractual. Aquí, como en la Inglaterra de la nueva ley de pobres de 1834, la radical puesta en marcha de los principios de libertad del liberalismo clásico se realizó de la mano de la brutal imposición de las obligaciones familiares y laborales.

Al mismo tiempo, esta imposición punitiva de las obligaciones familiares (en su mayoría dirigidas a hombres y maridos) también sirvió de base para nuevas demandas de autoridad patriarcal por parte de los hombres afroamericanos y de una ética de la domesticidad de la población afroamericana propia del nuevo social-conservadurismo. Al otorgar a los hombres negros el derecho de firmar contratos en nombre de sus mujeres e hijos y al asignar escalas salariales que perjudicaban a las mujeres, la Oficina de Hombres Emancipados no solo hizo que los hombres negros fueran responsables del sustento de sus familias, también les empoderó para afirmar

³¹ Franke, «Becoming a Citizen...», p. 303.

³² Sobre el trabajo forzoso, véase Alex Lichtenstein, *Twice the Work of Free Labor: The Political Economy of Convict Labor in the New South*, Nueva York, Verso Press, 1996. Sobre el trabajo doméstico como régimen de servidumbre, véase Cecilia Rio, «"A Treadmill Life": Class and African American Women's Paid Domestic Service in the Postbellum South, 1863-1920», *Rethinking Marxism*, vol. 20, núm. 1, 2008, pp. 91-106. Sin embargo, se debe recordar que muchas mujeres también fueron sometidas a trabajos forzados. Véase Talitha LeFouria, *Black Women and Convict Labor in the New South*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2015.

sus derechos por encima de los de mujeres y niños.³³ La ley de responsabilidad paterna se podía aplicar con sanciones criminales, pero también se podía celebrar como virtud moral y como mandato de la autoridad patriarcal dentro del hogar. El conservadurismo afroamericano abrazaría plenamente esta visión de la familia virtuosa en el último periodo del siglo XIX, incluso cuando muchas otras victorias políticas de la emancipación fueron revertidas.³⁴

La edad de oro: responsabilidad familiar y libre mercado

En muchos aspectos, la Oficina de Hombres Emancipados representó un episodio único en la historia de la ayuda pública estadounidense. No solo fue el primer intento del gobierno federal de organizar una asistencia a gran escala, sino que además fue especialmente implacable en su aplicación de las nuevas leyes de responsabilidad familiar. La Oficina de Hombres Emancipados fue un ensayo en todos los sentidos del término. Su principal objetivo estaba en inducir a los antiguos esclavos en los rigores del matrimonio legal y advertirles de las graves consecuencias que tendría cualquier intento de eludir las responsabilidades de manutención. No obstante, sus lecciones también se dirigían a la población más amplia. El experimento de la Oficina a la hora de crear un mercado de trabajo libre anticipó así, a pequeña escala, algunas de las reformas sociales y de austeridad económica que también se aplicarían a los trabajadores del hogar blancos y migrantes durante las últimas décadas del siglo XIX en la edad de oro del capitalismo estadounidense.

La ética del trabajo libre salió triunfante de la Guerra Civil, supuestamente reivindicada por la derrota del antiguo orden esclavista estadounidense. Inspirada de forma mucho más directa por el darwinismo social de William Graham Sumner y por la tradición romántica estadounidense de Ralph Waldo Emerson que por la economía política profesional, el credo del *laissez-faire* del liberalismo clásico logró un estatus popular de pleno consenso en Estado Unidos, algo que siempre había intentado alcanzar también en Inglaterra.³⁵ Tras la Guerra Civil, tanto los

³³ Franklin, *Ensuring Inequality...*, pp. 31-32; Eric Foner, *Forever Free: The Story of Emancipation and Reconstruction*, Nueva York, Knopf Doubleday, 2013, pp. 84-85. Donna Franklin señala que las denuncias de violencia doméstica se hicieron cada vez más comunes una vez que la Oficina comenzó a imponer la subordinación legal de las mujeres en los contratos matrimoniales y laborales (pp. 31-32).

³⁴ Martin A. Berger, *Man Made: Thomas Eakins and the Construction of Gilded Age Manhood*, Berkeley, University of California Press, 2000, p. 38.

³⁵ Samuel Mencher, *Poor Law to Poverty Program: Economic Security Policy in Britain and the United States*, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1967, pp. 241-266. Mencher señala que, a pesar de sus diferencias, «el romanticismo estadounidense y el darwinismo social coincidían en sus elogios a la autosuficiencia» (p. 245).

trabajadores como los empleadores estadounidenses competían por posicionarse como adalides del «trabajo libre» —a finales de siglo las empresas habían ganado sin ninguna duda la batalla discursiva—. Durante la edad de oro, los tribunales defendían lo que se ha dado en llamar jurisprudencia del libre mercado, interpretando la Declaración de Independencia de Estados Unidos y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución como defensas del monopolio corporativo e insistían en que jefes y empleados deberían ser libres de negociar sus condiciones de trabajo «a voluntad», sin restricciones de interferencias legislativas del Estado.³⁶ Y mientras los tribunales estaban ocupados imponiendo la libertad contractual en el lugar de trabajo, la legislación estatal supervisaba la correspondiente ampliación de las obligaciones familiares de las leyes de pobres en la esfera doméstica, con la voluntad última de desplazar la carga de la ayuda de la esfera pública a la privada.³⁷ Tal como había demostrado el experimento de la Reconstrucción con el trabajo libre, la libertad contractual que prometía la economía liberal clásica no se podía poner en marcha sin aplicar al mismo tiempo las estrictas obligaciones privadas y no contractuales de la familia. Puede que sea aquí donde podamos situar los orígenes históricos y políticos de la separación entre el individualismo y los valores familiares que Wendy Brown identifica como intrínsecos al liberalismo clásico.³⁸

En los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil, los rigores del contractualismo del libre mercado aún debían desplegarse por completo. Al tener que hacer frente a los múltiples retos de la industrialización, a la llegada de grandes cifras de migrantes económicos desde Europa y a una sucesión de crisis económicas, fueron muchas las grandes ciudades que ampliaron sus programas de ayuda hacia finales de la década de 1860. En poco tiempo, esta tendencia encontró la oposición organizada de industriales y reformistas sociales que temían que cualquier distorsión del precio «natural» del empleo pudiera privarles de una población activa dócil. Durante los años siguientes, sus campañas cosecharon tanto éxito que a principios de la década de 1890, muchas ciudades habían retirado por completo las disposiciones de ayudas «externas» [*outdoor relief*] y habían trasladado la carga a una panoplia de agencias privadas de beneficencia y organizaciones religiosas. «Entre 1874 y 1900», escribe el historiador Stephen Pimpare, «un cuarto de las cincuenta ciudades estadounidenses

³⁶ Leon Fink, *The Long Gilded Age: American Capitalism and the Lessons of a New World Order*, Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 2015, pp. 1-33.

³⁷ La historiadora Martha Branscombe señala que «durante el periodo posterior a la Guerra Civil... el principio de la ley de pobres de la responsabilidad de los familiares dentro de ciertos grados de parentesco, que se había desarrollado para complementar las responsabilidades del derecho anglosajón, fue impulsado con más vigor como medio para reprimir la pobreza». Martha Branscombe, *The Courts and the Poor Laws in New York State 1784-1929*, Chicago, University of Chicago Press, 1943, p. 249.

³⁸ Brown, *States of Injury...*, pp. 135-165.

más grandes (y muchas otras más pequeñas) abolieron la asistencia social ("ayuda externa", según la llamaban); un tercio redujo sus listas de beneficiarios y el gasto en ayudas; y un quinto ofrecía solo un cierto tipo de ayuda, como comida o carbón, pero dejó de ofrecer dinero. La mayoría impuso nuevas "pruebas de trabajo" como condición para recibir ayuda, con las que incluso lo que más se necesitaba se daba con moderación, si es que llegaba a darse». ³⁹ A medida que los estados se retiraban de la provisión de ayudas públicas, duplicaban sus esfuerzos para hacer cumplir las obligaciones familiares y laborales.

A pesar de sus pretensiones de *laissez-faire* espontáneo, en la práctica, el liberalismo económico siempre se ha apoyado en las leyes de pobres, que, a su vez, siempre se han basado en los poderes de supervisión de los estados de EEUU para regularlo todo, desde las relaciones domésticas, hasta la moralidad o la vagancia. El trabajo del historiador legal William Novak nos sirve para recordar que el llamado capitalismo de *laissez-faire* de finales del siglo XIX se apoyaba en los amplios poderes de supervisión estatal que regulaban y castigaban a la población pobre. ⁴⁰ Las leyes de responsabilidad familiar que interpelaban a progenitores no casados para hacerse cargo de hijos ilegítimos o a hijos adultos que debían pagar por el cuidado de padres indigentes se enmarcaban en los poderes de supervisión de los estados, que podían recurrir a cualquier método para hacer cumplir estas obligaciones en el rango que va desde las autoridades locales de ayuda hasta los tribunales y entidades de beneficencia privadas. A finales del siglo XIX, la revitalización de las leyes de pobres se vio secundada por una nueva y floreciente empresa de beneficencia privada, que complementaba el poder punitivo del Estado con una forma característica de control regulatorio que llegaba hasta los hogares de la población pobre urbana.

Entre las muchas organizaciones de beneficencia privadas que surgieron durante este periodo, las Charity Organization Societies (conocidas como COS [Sociedades de Organización de la Caridad]) fueron especialmente influyentes a la hora de definir el pensamiento colectivo sobre las relaciones apropiadas entre la libertad contractual y las obligaciones familiares. Los reformistas de la beneficencia de la edad de oro se propusieron convencer a los gobiernos estatales y a las entidades de caridad privadas de que solo se lograría un mercado de trabajo libre realmente competitivo, si se reducían al mínimo los efectos de distorsión y de desmoralización de las ayudas indiscriminadas. ⁴¹ Las COS reclamaban haber desarrollado

³⁹ Pimpare, *The New Victorians...*, p. 15.

⁴⁰ William J. Novak, *The People's Welfare: Law and Regulation in Nineteenth-Century America*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1996.

⁴¹ Sobre la historia de las Sociedades de Organización de Caridad, véase Pimpare, *The New Victorians...*, pp. 47-54 y 70-75. Las primeras COS estadounidenses de ámbito urbano se

un método de «caridad científica» capaz de distinguir entre la población pobre que merecía ayudas y la que no, y preferían equivocarse por el lado de la precaución que corromper a la población empobrecida con una benevolencia inmerecida. La ayuda pública solo debía prestarse como último recurso, después de haber agotado todos los demás recursos de la beneficencia; y por encima de todos ellos la caridad de la familia.

Igual que sus homólogos británicos, los reformistas estadounidenses de las COS consideraban que eran responsables de implementar las lecciones de la nueva ley de pobres inglesa de 1834, que a su vez entendían como una recuperación del espíritu de austeridad de las leyes isabelinas originales. La Real Comisión para las Leyes de Pobres de 1832 había condenado que se prestara ayuda a personas pobres que no padecían discapacidades físicas por tratarse de una violación de la ley natural, lo que promovía los matrimonios imprudentes y eximía a la población pobre de sus responsabilidades familiares.⁴² Las Sociedades de Organización de la Caridad inglesas y estadounidenses reiteraron esta crítica a la ayuda pública y defendieron que la beneficencia debía, por encima de todo, esforzarse por restablecer los mecanismos naturales de ayuda a la familia. En palabras del reformista inglés de las COS Charles Stewart Loch: «Los bonos sociales deben conservarse y utilizarse, las obligaciones familiares (cuidado de mayores, responsabilidad sobre los jóvenes, ayuda en momentos de problemas o enfermedad) debe cubrir las la familia en la medida de sus posibilidades».⁴³

Si la tradición de las leyes de pobres proporcionaba el marco legal con el que hacer cumplir las obligaciones privadas de la familia, al que recurrían los estados activamente cuando desplegaban sus amplios poderes de vigilancia sobre la vida familiar, las Sociedades de Organización de la Caridad iban aún más allá y aplicaban una elaborada metodología social para promover y controlar el ideal de la familia autosuficiente. Una de las mayores innovaciones de los reformistas de las COS de finales del siglo XIX fue la «visita amable», que solía consistir en una trabajadora social de clase media que acudía a los hogares de la población pobre para formarla en los hábitos apropiados de las diferencias de género y de las responsabilidades familiares. En un manual escrito para otros trabajadores de la caridad, la secretaria general de las COS en Baltimore, Mary Richmond, preparaba a quienes realizaban estas visitas amables en el arte de estimular la caridad entre los integrantes de la familia. La beneficencia solo sirve para «debilitar

fundaron en Búfalo, Nueva York, en 1877, siguiendo el modelo de su homónimo inglés; antes de que finalizara el siglo XIX, se establecerían varios cientos de delegaciones por todo Estados Unidos.

⁴² Crowther, «Family Responsibility and State Responsibility in Britain...», pp. 134-135.

⁴³ Charles Stewart Loch, *The Prevention and Relief of Distress*, Londres, P. S. King and Son, 1931 [1883], p. 31.

los lazos naturales», advertía, «a no ser que sea cierto que los familiares han hecho todo lo posible, o que se haya ejercido presión para que soporten, como mínimo, lo que puedan asumir».⁴⁴ Quienes realizaban estas visitas amables tenían instrucciones de buscar soporte entre familiares, amigos y vecinos como fuentes de apoyo antes de recurrir a la ayuda de la iglesia, la beneficencia privada o, como último recurso, la ayuda pública.

Las Sociedades de Organización de la Caridad estaban especialmente preocupadas por el problema de los «vagabundos casados», hombres legalmente casados pero separados o divorciados de sus esposas y que ya no se hacían cargo de sus familias.⁴⁵ Las tasas de divorcio y separación aumentaron significativamente en las últimas décadas del siglo XIX, enfrentando a los trabajadores sociales de la beneficencia a una creciente población de mujeres y niños sin medios de manutención adecuados. En respuesta a este problema, el personal de las COS realizó grandes esfuerzos para actualizar y administrar una serie de nuevas disposiciones de las leyes de pobres diseñadas para hacer cumplir las responsabilidades de los padres ausentes. A principios del siglo XIX, los tribunales estadounidenses habían inventado una nueva obligación en el derecho anglosajón sobre la manutención infantil por parte de los progenitores separados o divorciados: dicha obligación no existía en la tradición de las leyes de pobres, que hasta entonces solo se habían preocupado de los niños ilegítimos.⁴⁶ Mientras que la obligación de manutención infantil del derecho anglosajón bastaba para los progenitores de clase media (que contaban con los medios para iniciar acciones legales privadas en los tribunales y quienes no era probable que se convirtieran en una carga para la ayuda pública), los trabajadores de la beneficencia se esforzaron por crear una figura equivalente en el derecho estatutario que les permitiera intervenir con acciones administrativas rutinarias contra los hombres de clase trabajadora. Tras poner en marcha grupos de presión en la legislación estatal a lo largo de la década de 1870, los reformistas de las COS lograron convencer a doce estados de aprobar nuevas disposiciones penales antes de que terminara el siglo.⁴⁷ Según los términos de estas disposiciones, los padres podían entrar en prisión si no proporcionaban sustento a su descendencia; las penas de prisión también podían conmutarse por trabajo forzado.⁴⁸ Igual que en las leyes isabelinas originales, el deber legal de la responsabilidad familiar se entendía como

⁴⁴ Mary E. Richmond, *Friendly Visiting Among the Poor: A Handbook for Charity Workers*, Nueva York, Macmillan, 1899, p. 149.

⁴⁵ Elizabeth N. Agnew, *From Charity to Social Work: Mary E. Richmond and the Creation of an American Profession*, Champaign, University of Illinois Press, 2004, p. 100.

⁴⁶ Hansen, «The American Invention of Child Support», p. 1142.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 1147; Jocelyn Elise Crowley, *The Politics of Child Support in America*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 58-63.

⁴⁸ Hansen, «The American Invention of Child Support...», p. 1149.

monetizable en forma de trabajo: las deudas familiares podían pagarse con trabajo en régimen de servidumbre caso de que un padre no lograra ganar el dinero suficiente para satisfacer al tribunal.

Crisis de la familia en la edad de oro

Aunque a corto plazo los reformistas de las COS querían hacer cumplir las obligaciones económicas de la familia como alternativa a la ayuda pública, también tenían una visión más ambiciosa a largo plazo de la reforma social. Tras la Guerra Civil, los trabajadores de la caridad se sumaron al creciente coro de opinadores sociales, que aunaba desde protestantes evangélicos a radicales laboristas y científicos sociales, para denunciar la laxitud de las leyes de matrimonio y su efecto desintegrador en el orden social. Estas críticas temían que el tejido moral tradicional de la vida estadounidense fuera destruido por una tormenta perfecta de influencias perversas: la dispersión de los hogares a medida que la juventud migraba en masa a los núcleos industriales; el anonimato de la vida urbana, que permitía que la juventud se socializara sin la carga de la supervisión paterna; la mezcla interracial; y el auge del movimiento feminista que cuestionaba la autoridad masculina del hogar.⁴⁹ Al analizar los profundos cambios demográficos que tuvieron lugar en ese momento, el historiador social David Wagner menciona que «el periodo de la posguerra civil a partir de finales de la década de 1870 podría haber sido análogo a otros de la historia estadounidense más conocidos, como la década de 1920 y de 1960-1970, en los que se dio cierta clase de revolución sexual».⁵⁰ Esta revolución de la moral sexual parece haber desencadenado todo un discurso de crisis de la familia, al tiempo que intensificaba la preocupación por lo inapropiado de la legislación existente sobre relaciones domésticas.

Estas preocupaciones se generaron en el periodo de preguerra, pero hasta las últimas décadas del siglo XIX no surgieron como un movimiento plenamente constituido de demanda de una reforma legal y social. En 1841, el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Joseph Story, desafió la práctica del derecho anglosajón o del matrimonio contractual, entonces ampliamente aceptada, al apelar a una clara distinción entre el contrato civil de matrimonio y el contrato comercial de intercambio: aunque el matrimonio era un contrato «en la definición más común de la palabra» también era «algo más que un mero contrato. Más bien debería consi-

⁴⁹ Michael Grossberg, *Governing the Hearth: Law and Family in Nineteenth-Century America*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1988, pp. 9-12.

⁵⁰ David Wagner, *Ordinary People: In and Out of Poverty in the Gilded Age*, Boulder (CO), Paradigm Publishers, 2008, p. 122.

derarse una institución de la sociedad fundada en el consentimiento y el acuerdo entre las partes y, en este sentido, presenta algunas particularidades en su naturaleza, carácter, funcionamiento y duración de la obligación, distintas a las que corresponden a los contratos ordinarios». ⁵¹ Tras la Guerra Civil, la idea de que la esfera doméstica debería distinguirse del mercado y protegerse de él se volvió hegemónica. De acuerdo con la teoría moderna de la libertad contractual, por definición, cualquiera de las partes podía romper el contrato comercial a cambio de una compensación; el matrimonio, al contrario, se entendía como un tipo especial de contrato, uno que no se podía romper a voluntad. Así, aunque la subordinación [*coverture*] se viera menoscabada a favor de un entendimiento contractual del matrimonio, el contrato marital se definía según condiciones excepcionales, sujeto al consentimiento irrevocable, como con la violación en las leyes de matrimonio; al incumplimiento basado en la culpa, como en las leyes de divorcio; y al imperativo del trabajo inalienable, precursor de la expectativa de que las mujeres realizarían el trabajo del hogar gratuitamente. ⁵² Mediante unas condiciones tan excepcionales, el contrato sexual aseveraba lo que más tarde Durkheim describiría como los pilares no contractuales de lo contractual, «porque no todo en el contrato es contractual». ⁵³

De acuerdo con este punto de vista, las leyes que regían las relaciones íntimas se volvieron considerablemente más estrictas durante las últimas décadas del siglo. Durante este periodo, la mayoría de estados pasaron a restringir o a prohibir los matrimonios según el derecho anglosajón, aumentó la edad de consentimiento, se restablecieron los periodos de espera para el matrimonio, se prohibieron las uniones interraciales y se criminalizaron el aborto y los anticonceptivos. ⁵⁴ Así, se constituyó una visión social-conservadora de la familia como pilar del orden moral y bastión de

⁵¹ Citado en Grossberg, *Governing the Hearth...*, p. 21.

⁵² Es en este punto de inflexión histórico en la comprensión de las relaciones domésticas, alrededor de 1870, en el que Janet Halley sitúa los orígenes del derecho de familia moderno en contraposición al antiguo derecho de las relaciones domésticas. Véase Janet Halley, «What Is Family Law? A Genealogy (Part I)», *Yale Journal of Law and the Humanities*, vol. 23, núm. 1, 2011, pp. 1-109. En una época en la que el contrato a voluntad [at-will employment] se proponía como el marco jurídico ideal, si no empírico, para regir el intercambio de trabajo asalariado libre en el mundo mercantil, las relaciones dentro de la familia se definían cada vez más en oposición al mercado. No se trataba de que las relaciones domésticas se consideraran totalmente ajenas al derecho contractual. El matrimonio siguió definiéndose como un «contrato civil», como lo había sido en los apuntes de William Blackstone de finales del siglo XVIII. Pero a medida que la teoría de la voluntad del contrato individual se imponía sobre las teorías anteriores del contrato social o público, el matrimonio pasó a ser considerado como un tipo especial de transacción, que no podía romperse a voluntad.

⁵³ Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, Glencoe (IL), Free Press, 1933, p. 214 [ed. cast.: *La división del trabajo social*, Madrid, Akal, 1987].

⁵⁴ Grossberg, *Governing the Hearth...*, pp. 83-86; Stephanie Coontz, *The Way We Never Were: American Families and the Nostalgia Trap*, Nueva York, Basic Books, 2000, p. 131; Joanna L. Grossman y Lawrence M. Friedman, *Inside the Castle: Law and the Family in Twentieth Century America*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2011, pp. 9 y 85.

los valores tradicionales, no de mercado, surgida junto al individualismo del *laissez-faire* de la edad de oro, no como fuerza antagónica, sino como contrapartida necesaria.⁵⁵

En las fronteras entre el mercado laboral y la esfera doméstica, los reformistas de la beneficencia de la edad de oro definieron con claridad las preocupaciones del liberalismo clásico del *laissez-faire* con un conservadurismo moral centrado en la familia privada. Estos reformistas estaban convencidos de que la doctrina de la responsabilidad familiar respondía a las exigencias fiscales del libre mercado y del Estado liberal; pero también creían que las obligaciones económicas del parentesco no podían exigirse debidamente sin un esfuerzo exhaustivo por reconstruir la familia como el pilar principal del orden social. Para que pudiera surgir el orden progresista del New Deal de responsabilidad pública había que desafiar este régimen del liberalismo clásico y el conservadurismo de responsabilidad privada de la familia.

De la responsabilidad familiar privada a la responsabilidad pública de la familia

La cuestión de la responsabilidad personal, y por extensión familiar, era central en los debates de principios del siglo XX en torno a la introducción del concepto de bienestar social moderno. Las formas de seguro social integral que se habían puesto en marcha en Alemania de la mano de Otto von Bismarck ya en la década de 1880, así como en otros estados europeos durante las décadas posteriores, se aceptaron mucho más lentamente en Estados Unidos, donde tuvieron que enfrentarse al apego popular y de las élites a las nociones del trabajo libre y de la autosuficiencia de la familia.⁵⁶ Durante los inicios del siglo XX, quienes se oponían al bienestar social, entre quienes se encontraban muchos perfiles próximos al movimiento de la caridad científica, defendían que la socialización del riesgo destruiría la familia como institución moral, al anular la solidaridad económica entre los familiares. Incluso se criticó que se prestara ayuda pública a personas dependientes no contribuyentes como viudas y personas ancianas, por considerarlo una amenaza a los valores de la responsabilidad familiar y de la autosuficiencia.

⁵⁵ Véase Coontz (*The Way We Never Were...*, pp. 130-133) para un debate esclarecedor sobre la dependencia mutua entre el liberalismo clásico del *laissez-faire* y el social-conservadurismo. Señala, astutamente, que la «subyugación de las familias a la autoridad pública no surgió de una agenda socialista o colectivista, sino de un intento de construir definiciones individualistas de la responsabilidad privada» (p. 133).

⁵⁶ Para una historia intelectual inédita del Estado del bienestar europeo, centrada en Francia en particular, véase François Ewald, *Histoire de l'État Providence*, París, Grasset, 1996. Para un relato comparativo de los seguros sociales en la Alemania de Bismarck, otros estados europeos y Estados Unidos, véase John Fabian Witt, *The Accidental Republic: Crippled Workingmen, Destitute Widows, and the Remaking of American Law*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2004, pp. 71-102.

Una de las críticas estadounidenses al Estado de bienestar europeo advertía de que introducir un seguro social para la vejez, los accidentes de trabajo y la enfermedad laboral generaría «un mal mayor, moral y económico, ejercería una influencia enervante y desmoralizadora en el carácter, socavando el sentido de responsabilidad personal y autosuficiencia y debilitando los pilares de la iniciativa y la ambición individual».⁵⁷ De forma similar, se argumentaba que la ayuda pública a las madres solteras y a las personas ancianas «debilitaría los lazos de la solidaridad familiar. Arrebataría en parte la obligación filial del sustento de los progenitores mayores, que era uno de los lazos principales que mantenía a la familia unida [...] Que el Estado asumiera la obligación de ayudar a las personas mayores en sus hogares socavaría la responsabilidad filial, del mismo modo que la garantía de manutención pública de la infancia destruiría la responsabilidad parental».⁵⁸ Estos puntos de vista eran habituales en el movimiento sindical, que también creía profundamente en la idea de que los hombres trabajadores independientes debían poder ganar un salario de sostén de la familia sin la ayuda del Estado.⁵⁹

Los defensores progresistas del seguro social replicaban que las antiguas leyes de responsabilidad familiar destruían por sí mismas los lazos de parentesco.⁶⁰ Con demasiada frecuencia, argumentaban, el precio de mercado del trabajo y por lo tanto el salario que finalmente ganaban los hombres trabajadores era muy inferior a los niveles necesarios para sostener a una familia. Tanto defensores como detractores del seguro social entendían la familia como el pilar de la vida moral y económica, y solo disentían en sus puntos de vista sobre las relaciones apropiadas que debían establecerse entre la familia y el Estado. Las opiniones en contra se aferraban a la concepción de la familia autosuficiente de la edad de oro, que hacía del hombre trabajador independiente responsable de forma privada de mantener a las personas que de él dependían. Quienes defendían esto argumentaban que las condiciones modernas de la vida industrial necesitaban un esfuerzo gubernamental más continuado para hacer frente a los riesgos del salario masculino. Si los primeros entendían la seguridad económica como responsabilidad privada de la familia, los segundos querían transformar la familia en responsabilidad pública, más aún, en la función

⁵⁷ F. Spencer Baldwin, «Old Age Pension Schemes: A Criticism and a Program», *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 24, núm. 4, 1910, pp. 727-728. Spencer Baldwin fue presidente de la Comisión de Massachusetts para las pensiones de vejez.

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ Alice Kessler-Harris, *In Pursuit of Equity: Women, Men, and the Quest for Economic Citizenship in Twentieth-Century America*, Oxford, Oxford University Press, 2001, pp. 64-116.

⁶⁰ Isaac Max Rubinow, *Social Insurance: With Special Reference to American Conditions*, Nueva York, Holt, 1913, pp. 314-316; Abbott, «Poor Law Provision for Family Responsibility...», p. 610.

principal de la asistencia social estatal; defendían que al hacer frente a los riesgos inevitables del mercado de trabajo un sistema de bienestar social pleno garantizaría el salario masculino de sostén de la familia y que las esposas de los hombres de clase trabajadora no tuvieran que trabajar. Sin embargo, ninguna de las opiniones cuestionaba la centralidad de la familia en su visión de la vida económica, y mucho menos la dependencia de las mujeres dentro de esta institución.

Con la aprobación de la Ley de Seguridad Social en 1935, los defensores del seguro social obtuvieron una victoria decisiva. El New Deal introdujo extensas formas de seguro social contra accidentes laborales, desempleo y vejez y eliminó definitivamente a un tipo de trabajadores (los trabajadores estándar, hombres, blancos) del sistema de leyes de pobres de responsabilidad familiar. Durante los años siguientes y con la intención de capitalizar esta victoria, la administración federal de la Social Security Board [Junta de Seguridad Social] lanzó un poderoso asalto a las leyes de pobres estatales y se esforzó al máximo por limitar su uso.⁶¹ Aun así, muchos estados se resistieron a estas intrusiones y siguieron exigiendo el cumplimiento de la responsabilidad familiar en los programas de asistencia pública para la población no trabajadora y pobre no contribuyente. Sin ninguna duda, estas disposiciones se ejecutaron con más frecuencia después de la Segunda Guerra Mundial, a medida que los costes del bienestar social empezaron a aumentar.⁶²

La línea divisoria entre los programas de seguridad social federales y la asistencia pública controlada por los estados se volvió cada vez más significativa durante este periodo. En un momento en el que el gobierno asumía plenas responsabilidades sociales sobre los hombres trabajadores estándar y las personas que de ellos dependían, quienes solicitaban asistencia pública quedaban relegados a una tradición más antigua de obligaciones familiares privadas (si bien estas venían impuestas por el Estado). Como apunta cierta opinión académica contemporánea, «la inclusión de las disposiciones de responsabilidad familiar en la ley de asistencia general ha dado lugar a la suposición de que la responsabilidad familiar de las personas dependientes es lo primero y que la responsabilidad pública es secundaria y, por lo tanto, la asistencia pública no puede concederse hasta que se hayan

⁶¹ R. Alvin Louis Schorr, *Filial Responsibility in the Modern American Family*, U.S. 96. Department of Health, Education and Welfare, Division of Program Research, Washington DC, US Government Printing Office, 1960, p. 23; Shep Melnick, *Between the Lines: Interpreting Welfare Rights*, Washington DC, Brookings Institution Press, 1994, pp. 67-68. Tras haber luchado sin éxito para persuadir al Congreso de que revisara los programas estatales de asistencia social a través de la acción legislativa, los administradores federales acabaron confiando en los profesionales simpatizantes de las agencias estatales de asistencia social para restringir el uso de las antiguas disposiciones de la ley de pobres.

⁶² Schorr, *Filial Responsibility...*, p. 23; Melnick, *Between the Lines...*, pp. 69-70.

agotado todas las posibilidades de garantizar el apoyo en virtud de las leyes de responsabilidad familiar». ⁶³ Cuando las madres solteras o las personas ciegas, discapacitadas, enfermas mentales o indigentes reclamaban ayudas públicas, los departamentos de bienestar estatales estaban autorizados a investigar y exigir las obligaciones familiares antes de desembolsar ningún fondo público. Un hijo o hija adulto podía ser llevado ante los tribunales a fin de pagar los gastos de la residencia de ancianos de sus padres; los tíos y las tías podían ser declarados responsables de los costes de alojamiento y formación de un familiar ciego; y los progenitores podían ser obligados a contribuir al cuidado de un niño demente. En algunos estados, el departamento de asistencia social podía reclamar una compensación retroactiva por las prestaciones pagadas o tomar el patrimonio de un demandante fallecido para rembolsarlo a las arcas públicas. Aunque la conservación de estas leyes solía justificarse con argumentos fiscales, la mayoría de opiniones coinciden en que su efecto era ante todo punitivo y disciplinario. ⁶⁴ El coste de la acción administrativa implicaba que los estados apenas ahorran dinero al perseguir y extraer fondos de familiares que muchas veces ya eran pobres. En su lugar, las leyes servían en primer lugar para disuadir a los potenciales beneficiarios de reclamar asistencia social; y para reforzar la idea de que la población pobre que no merecía esas ayudas solo podía recurrir a la unidad familiar privada para su seguridad económica.

En la década de 1960, las leyes de responsabilidad familiar volvieron a ser atacadas, en esta ocasión por parte de las organizaciones que representaban a personas discapacitadas, ciegas y mayores. El caso de California resulta especialmente instructivo a este respecto, debido a la naturaleza profundamente progresista de las reformas que adoptó en ese momento y a su posterior retroceso durante el gobierno de Ronald Reagan. En 1961, la legislación del estado de California abolió por completo las cláusulas de responsabilidad familiar de sus programas de asistencia pública para las personas ciegas y discapacitadas, al tiempo que restringió su uso en programas para personas con problemas mentales, ancianas e indigentes. ⁶⁵ En una decisión histórica presentada en 1964 (*El Departamento de Salud Mental contra Kirchner*) la Corte Suprema de California prohibió que el Departamento de Salud Mental cobrara a los familiares de las personas enfermas por los costes de hospitalización estatal. En defensa de esta opinión, el tribunal argumentó que las disposiciones de las leyes de pobres implicaban una forma impositiva injusta y que no eran compatibles con

⁶³ Daniel R. Mandelker, «Family Responsibility under the American Poor Laws II», *Michigan Law Review*, vol. 54, núm. 5, 1956, p. 626.

⁶⁴ Abbott, «Poor Law Provision for Family Responsibility...», p. 617; Schorr, *Filial Responsibility in the Modern American Family...*, pp. 25-26.

⁶⁵ Jacobus tenBroek, «California's Dual System of Family Law: Its Origin, Development, and Present Status: Part III», *Stanford Law Review*, vol. 17, núm. 4, 1965, pp. 634-636.

los principios redistributivos de la Ley de Seguridad Social. La decisión fue muy significativa, no solo por situar a los beneficiarios «que no merecían» ayudas públicas al mismo nivel legal que los trabajadores «que sí las merecían», estos últimos cubiertos por el sistema federal mucho más respetable de seguros sociales; sino también porque desafiaba la propia constitucionalidad de las leyes de responsabilidad familiar (un reto que potencialmente podía ampliarse a *todos* los programas de asistencia pública).⁶⁶ En 1965, el Congreso parecía haber sentenciado las leyes de responsabilidad familiar cuando dictaminó que ningún estado tendría derecho a recuperar los costes recurriendo a ningún familiar en el contexto del nuevo programa de Medicaid. Reiterando los argumentos esgrimidos por la defensa progresista del seguro social durante las primeras décadas del siglo XX, quienes defendían esta decisión insistían en que la inclusión de dichas cláusulas en el nuevo programa de Medicaid «destruiría las relaciones familiares».⁶⁷

Durante este periodo de rápida liberalización, solo el muy denostado programa AFDC permaneció profundamente ligado a la tradición de las leyes de pobres. Después de la Segunda Guerra Mundial la legislación estatal, lejos de dejar atrás las disposiciones de responsabilidad familiar del AFDC, siguió reforzando la idea de que las mujeres empobrecidas deberían buscar el sustento en hombres particulares y no en el Estado. Como hemos visto, las normas del «padre sustituto» o del «hombre de la casa» se habían impuesto a las mujeres beneficiarias de asistencia social desde que se implantó el programa, sirviendo para crear relaciones de responsabilidad paternal y conyugal *de facto* sin que hubieran sido consentidas por las partes implicadas. Desde los años cincuenta en adelante, muchos estados, entre ellos el de California, ampliaron sus leyes de responsabilidad familiar para incluir a los «padres ausentes», exmaridos que se habían separado o divorciado de sus mujeres o padres biológicos de niños nacidos fuera del matrimonio.⁶⁸ Ahora más que nunca, a las mujeres se les recordaba que su bienestar económico dependía en primer lugar de su conexión legal con un hombre.

Aun así, el sino del AFDC cambió radicalmente alrededor de 1965, gracias en gran medida al auge de un nuevo tipo de abogacía por el

⁶⁶ *Ibidem*, pp. 638-639. Esta decisión enfadó al gobernador Reagan. En un discurso sobre el sistema de asistencia social de California pronunciado el 21 de marzo de 1968, se quejó de que «el poder legislativo ha derogado prácticamente la responsabilidad de los hijos e hijas de contribuir a la manutención de sus padres [...]. En esta situación anómala, seguimos permitiendo que estos familiares que han sido absueltos de la responsabilidad filial hereden los bienes de los beneficiarios». Citado en Amos Kiewe y Davis W. Houck, *A Shining City on a Hill: Ronald Reagan's Economic Rhetoric, 1951-1989*, Nueva York, Praeger, 1991, p. 47.

⁶⁷ Citado en Terrance A. Kline, «A Rational Role for Filial Responsibility Laws in Modern Society?», *Family Law Quarterly*, vol. 26, núm. 3, 1992, p. 199.

⁶⁸ Melnick, *Between the Lines...*, p. 96.

interés público que trabajaba en estrecha colaboración con el movimiento por los derechos del bienestar que entonces surgía. En 1965, la Office of Economic Opportunity [Oficina de Oportunidades Económicas] del presidente Johnson creó y financió cientos de oficinas de servicios legales por todo el país, con la voluntad expresa de proporcionar asistencia legal gratuita a la población pobre. Estas oficinas se convertirían en importantes agentes en la batalla jurídica por la reforma de la asistencia social; e iniciaron la mayoría de los casos relacionados con el AFDC que se llevaron a los tribunales en la década siguiente. Su característico litigio estratégico con «casos de prueba» para la reforma legal fue diseñado por un pequeño grupo de académicos con sede en el Columbia Center for Social Welfare Policy and Law [CSWPL, Centro de Política y Derecho del Bienestar Social de Columbia] que mantenían una estrecha colaboración con el activismo del movimiento por los derechos del bienestar y que no tardó en conocer al detalle los pormenores de la legislación sobre bienestar.⁶⁹ Al plantear sus argumentos contra las leyes de asistencia pública, estos abogados prestaban atención a los recientes cambios en el derecho de familia como modelo de las libertades que también podrían ampliarse a las personas beneficiarias de asistencia social.

Sin duda el derecho de familia experimentó un extraordinario proceso de liberalización durante este periodo: después de más de un siglo sin apenas cambios, las leyes que limitaban el divorcio, estigmatizaban las uniones no conyugales y discriminaban a los hijos ilegítimos se derogaron o se dejaron de aplicar durante aproximadamente una década.⁷⁰ Junto a la marginación de las normas más antiguas que regían las relaciones sexuales y se basaban en el estatus, surgió una nueva jurisprudencia que reconocía explícitamente la «libertad sexual» como un derecho protegido constitucionalmente. En dos resoluciones históricas, *Griswold contra el estado de Connecticut* (1965) y *Eisenstadt contra Baird* (1972), la Corte Suprema diseñó un nuevo «derecho a la privacidad» que limitaba el poder del Estado para supervisar las relaciones sexuales íntimas del hogar. Aun así, ninguna de estas innovaciones se amplió a las mujeres empobrecidas beneficiarias de asistencia social, que solían verse sometidas a lascivas investigaciones sobre su historial sexual y a un estricto control moral en virtud de la ley estatal. A medida que el derecho de familia se adentraba en una nueva era de relativa libertad sexual, la legislación sobre asistencia social, acertadamente apodada «derecho de familia de la población pobre» por el académico Jacobus

⁶⁹ *Ibidem*, pp. 73-76; Martha F. Davis, *Brutal Need: Lawyers and the Welfare Rights Movement, 1960-1973*, New Haven (CT), Yale University Press, 1993; Mark Neal Aaronson, «Representing the Poor: Legal Advocacy and Welfare Reform during Reagan's Gubernatorial Years», *Hastings Law Journal*, núm. 64, 2013, p. 992.

⁷⁰ Jana B. Singer, «The Privatization of Family Law», *Wisconsin Law Review*, 1992, pp. 1443-1568.

tenBroek,⁷¹ siguió reflejando el conservadurismo moral punitivo de la tradición de las leyes de pobres.

Difundiendo las voces más radicales del movimiento por los derechos del bienestar, los profesionales progresistas de la abogacía pro interés público cuestionaron que las personas beneficiarias de ayudas y vivienda pública aún tuvieran que verse sometidas a formas tan intrusivas de vigilancia moral. Si ahora la Corte Suprema reconocía el derecho constitucional a la privacidad sexual, ¿por qué no ampliar este derecho a las mujeres beneficiarias de asistencia social? Si las mujeres de clase media tenían libertad para disolver sus matrimonios a voluntad y cada vez mayor poder para ganar un salario propio en el mercado de trabajo, ¿por qué las mujeres pobres debían permanecer encarceladas en la frontera privada de la dependencia económica? Si el matrimonio ya no era relevante para determinar el estatus legal de los niños de clase media, ¿por qué los niños de las madres beneficiarias de asistencia social aún se consideraban ilegítimos y eran castigados por los pecados de sus progenitores?⁷² En resumen, la abogacía de la pobreza, basándose en la liberalización del derecho de familia, se enfrentaba a la continua exigencia de obligaciones familiares privadas en el ámbito de la asistencia social.

El entorno institucional y judicial de la década de 1960 era especialmente propicio para reformas sociales tan ambiciosas como estas. Quienes litigaban por el interés público y querían reformar la asistencia social se encontraron con un público especialmente receptivo en la Corte Suprema presidida por Warren de perfil progresista y en el Tribunal Superior de California, más liberal incluso. También contaban con numerosos simpatizantes entre los administradores federales del Department of Health, Education, and Welfare [HEW, Departamento de Salud, Educación y Bienestar], quienes a veces iniciaban sus propios casos de prueba contra la punitiva legislación sobre bienestar que imponía la ley estatal.⁷³ Su estrategia de casos de prueba convirtió las ayudas públicas estatales en una cuestión federal, obligando a la Corte Suprema a posicionarse al respecto de cuestiones sobre las que en el pasado no lo habría hecho. Tras haber ignorado al AFDC durante las primeras décadas de su existencia, la Corte Suprema de EEUU tuvo que posicionarse hasta en 18 casos relativos a este programa en los años 1968 y 1975, mientras los tribunales federales

⁷¹ Jacobus tenBroek, «California's Dual System of Family Law: Its Origin, Development, and Present Status: Part I», *Stanford Law Review*, vol. 16, núm. 2, 1964, pp. 257-284.

⁷² Estos argumentos son planteados con lucidez por el profesor de derecho de Yale Charles A. Reich en «Individual Rights and Social Welfare: The Emerging Legal Issues», *Yale Law Journal*, vol. 74, núm. 7, 1965, pp. 1245-1257, y «Social Welfare in the Public-Private State», *University of Pennsylvania Law Review*, vol. 114, núm. 4, 1966, pp. 487-493.

⁷³ Melnick, *Between the Lines...*, pp. 96 y 79.

inferiores emitían cientos de resoluciones relevantes durante ese mismo periodo.⁷⁴ La resolución de estas decisiones implicó tanto una federalización (y por consiguiente una liberalización) del control de la asistencia social, como cierta alineación de sus disposiciones con los cambios más recientes en el derecho de familia. En el caso *King contra Smith* de 1968, el presidente de la Corte Suprema Earl Warren dictaminó que la norma de Alabama sobre los padres sustitutos violaba los términos de la Ley de Seguridad Social y no era conforme al derecho de familia, que ya no condenaba las relaciones extramatrimoniales, ni reconocía ninguna distinción válida entre el estatus de niños legítimos o ilegítimos.⁷⁵ En otra resolución, el juez Brennan se opuso a la obligación de manutención infantil por considerarla una invasión de la privacidad.⁷⁶ Los tribunales federales inferiores fueron especialmente agresivos al anular las disposiciones de las leyes de pobres de los programas de asistencia social. A raíz de la decisión de *King contra Smith* (1968) de invalidar las leyes de padres sustitutos, los tribunales inferiores fueron aún más lejos e ilegalizaron todas las normas estatales que obligaban a las mujeres a recurrir a los «padres ausentes» como fuentes de sustento.⁷⁷ Como consecuencia de estas resoluciones, el número de solicitantes de ayudas públicas que se negaban a cooperar con los fiscales del distrito en cuestiones de manutención infantil aumentó considerablemente.⁷⁸

Puede que de forma aislada estas sentencias no hubieran sido más que meros cambios formales, una afirmación de derechos jurídicos sin mayor impacto en la vida diaria de las mujeres beneficiarias de asistencia social. Sin embargo, sumadas a la importante presencia de los grupos por los derechos del bienestar en las comunidades locales, las mujeres conocían cada vez mejor los pormenores de la legislación sobre bienestar y se atrevían a cuestionar el trato que recibían de los trabajadores sociales.⁷⁹ Al situar los beneficios del bienestar sobre una base más segura y al separarlos de las normas punitivas de comportamiento, las resoluciones del tribunal federal de esta época lograron liberar a las mujeres de los confines de la dependencia familiar privada. El mensaje general que lanzaban estas normas era que las mujeres pobres beneficiarias de asistencia social eran responsabilidad pública, igual que los hombres trabajadores estándar. Con independencia de su estado civil, su historial sexual o su raza, estas mujeres empobrecidas merecían un salario social igual que cualquier otro ciudadano. En

⁷⁴ *Ibidem*, p. 81.

⁷⁵ *Ibidem*, p. 84.

⁷⁶ *Ibidem*, p. 103.

⁷⁷ *Ibidem*, p. 96. Para un listado de las sentencias relevantes, véase Judith B. Stouder, «Child Support Enforcement and Establishment of Paternity as Tools of Welfare Reform», *Washington Law Review*, núm. 52, 1976, pp. 180-181.

⁷⁸ Gobernador de California, *California's Blueprint for National Welfare Reform...*, p. vii.

⁷⁹ Aaronson, «Representing the Poor...», p. 1002.

un momento en que cada vez más mujeres de clase media accedían a los empleos asalariados y lograban cierto grado de independencia económica de los hombres, las mujeres no casadas beneficiarias de asistencia social también parecían poder acceder a un salario social que ya no estaba condicionado por un «marido sustituto».

Durante un periodo demasiado breve, las normas revisadas del AFDC permitieron a mujeres divorciadas o solteras y a sus hijos vivir con independencia de un hombre mientras recibían un ingreso garantizado por el Estado, libre de exigencias morales. Los beneficios de las ayudas públicas, a pesar de ser escasos, funcionaban como un salario social para las mujeres no casadas, un planteamiento que no estaba previsto en la Ley de Seguridad Social y que muchos entendieron como una perversión de su propósito original. En un periodo en el que las oportunidades laborales y el acceso a la educación superior para las mujeres blancas y no blancas crecía como nunca antes, esto suponía un desarrollo profundamente liberador.⁸⁰ Quizás esto explique la extrema violencia del contraataque que en los años siguientes surgió de entre quienes se oponían a la asistencia social. Como señala Stephanie Coontz, no fue la *dependencia* de las mujeres del Estado lo que provocó la rabia del neoliberalismo y el neoconservadurismo (su supuesta dependencia, al fin y al cabo, no era nada comparada con la de los trabajadores hombres estándar); lo que llevó a toda una generación de reformistas sociales ante los tribunales contra el Estado de bienestar fue más bien darse cuenta de que la asistencia social hacía que las mujeres fuesen *independientes* de los hombres y las liberaba de las obligaciones de la familia privada.⁸¹

Al reflexionar sobre los profundos cambios del derecho de familia y de la legislación sobre bienestar que se sucedieron en la década de 1970, uno de los asesores más cercanos al presidente Reagan, el social-conservador Gary Bauer, se dio cuenta, echando la vista atrás, de que muy a su pesar «el mensaje subyacente de estos casos resuena aún hoy». «Vistas en conjunto», apuntaba, «estas y otras decisiones de la Corte Suprema [habían] deteriorado el potencial de las políticas públicas de hacer cumplir las obligaciones familiares, exigir responsabilidades familiares, proteger el derecho de familia o promover su identidad».⁸² La única respuesta lógica, en su opinión, era intentar recuperar las antiguas leyes de responsabilidad

⁸⁰ A medida que las mujeres blancas casadas se reincorporaban a la fuerza de trabajo remunerada en la década de 1960, y rechazaban el trabajo reproductivo no remunerado del hogar fordista, las mujeres afroamericanas abandonaban en masa el trabajo doméstico remunerado para realizar trabajos mejor remunerados de servicio o de oficina fuera del hogar. Véase Enobong Hannah Branch, *Opportunity Denied: Limiting Black Women to Devalued Work*, New Brunswick (NJ), Rutgers University Press, 2011, pp. 127-153.

⁸¹ Coontz, *The Way We Never Were...*, p. 59.

⁸² Bauer, *The Family: Preserving America's Future...*, p. 19.

familiar tanto a nivel estatal como federal. Parece que el propio Reagan llegó a la misma conclusión una década antes, durante su mandato como gobernador de California.

Reagan en California: recuperar las leyes de responsabilidad familiar

Si el movimiento por los derechos del bienestar tuvo especial éxito en California, fue también allí, durante el mandato de Ronald Reagan, donde sufrió el primer contraataque importante. Cuando Reagan fue elegido gobernador por primera vez en 1966, California contaba con uno de los programas de AFDC más generosos del país y el número de casos de los que se hacía cargo aumentaba con rapidez. Llegado el momento de su segunda campaña, Reagan, que ahora se encontraba entre los principales oponentes republicanos a la ampliación del salario familiar que quería Nixon, convirtió la revisión del programa estatal de asistencia social en su prioridad absoluta. En un momento en el que la Corte Suprema y el Congreso intentaban federalizar el AFDC y arrebatarlo al control estatal, Reagan defendió con vehemencia el derecho de los estados a mantener sus poderes de supervisión sobre la población pobre. Habiendo obtenido primero una exención del HEW, se propuso transformar California en el laboratorio de la reforma punitiva del bienestar que luego podría replicarse a escala nacional.⁸³

A mediados de su segunda campaña en 1970, Reagan organizó cuidadosamente un grupo especial de trabajo formado por abogados conservadores que revisarían los programas estatales de ayudas públicas e identificarían las prioridades de la reforma. Después de un sonado regreso al poder, no tardó en nombrar a uno de los integrantes de esta fuerza de trabajo nuevo director de bienestar social y en llevar a cabo una profunda revisión de todo el departamento. Reagan se anticipó a futuras campañas federales de la izquierda impidiéndole el acceso al poder burocrático, estaba especialmente interesado en purgar el departamento de lo que llamaba «bienestaristas profesionales», con lo que se refería al personal de la administración estatal con experiencia en trabajo social. En su lugar, estos puestos los cubrieron profesionales con experiencia fiscal o de gestión, con pocas probabilidades de sabotear los planes de austeridad en la asistencia social que tenía el gobernador. Anticipándose también a que sus intentos de recortar la asistencia social pudieran ser desafiados en los tribunales por cualquiera de las distintas oficinas de servicios jurídicos, Reagan también nombró un cuadro de juristas conservadores con el fin de adelantarse a

⁸³ Alice O'Connor, *Social Science for What? Philanthropy and the Social Question in a World Turned Rightside Up*, Nueva York, Russell Sage Foundation, 2007, pp. 107-108.

cualquier posible caso de prueba.⁸⁴ Así, habiéndose anticipado a cualquier posibilidad de oposición interna, en 1971 Reagan presentó la *Welfare Reform Act* [ley de reforma de la asistencia social] al Partido Demócrata que dominaba la legislatura y que, tras acordar algunas concesiones, fue aprobada en agosto de ese mismo año.

A principios de la década de 1970, Reagan se enfrentó al consenso político en lo que se refiere a políticas sociales. En retrospectiva, el esfuerzo de Nixon por ampliar el salario familiar a los hombres negros se puede entender como el punto álgido de una visión del bienestar social propia del New Deal que intentaba superar por completo la tradición de las leyes de pobres de la responsabilidad familiar privada. En el ambiente expansionista y optimista de finales de los años sesenta, opiniones republicanas moderadas y demócratas estaban de acuerdo en que el Estado debía asumir la responsabilidad pública de las familias de todos los hombres, negros y blancos (aunque muy pocas estaban dispuestas a cuestionar el papel dependiente de la mujer bajo este planteamiento). Existía también un amplio reconocimiento de que las injustas diferencias entre los seguros sociales y los programas de asistencia pública debían neutralizarse siempre que fuera posible. Sin embargo, el programa de reforma de la asistencia social de Reagan se había propuesto retomar y ampliar una tradición mucho más antigua de las leyes de pobres, con su correspondiente distinción entre la población pobre digna o no de recibir estas ayudas. En palabras de Alice O'Connor: «A excepción de las personas consideradas legítimamente discapacitadas, dependientes o de otro modo "merecedoras", las ayudas públicas se convertirían en una fuente de alivio de la pobreza estrictamente regulada, temporal, relativamente barata, controlada localmente y profundamente estigmatizada, cuando no directamente punitiva. El bienestar en el plan de Reagan volvió a la antigua tradición de las leyes de pobres de la que décadas de reforma, políticas sociales y, más recientemente, un gobierno liberal "permisivo" habían logrado alejarse».⁸⁵

En concreto, Reagan tenía intención de recuperar las disposiciones de responsabilidad familiar de las leyes de pobres que hacía poco tiempo habían sido suprimidas de los programas de asistencia pública como el AFDC. Tal y como expresó el equipo de trabajo organizado por Reagan para la reforma asistencial, una «cuestión importante de la reforma de la asistencia social era la necesidad de establecer y hacer cumplir el principio de que los integrantes de la familia eran responsables de mantener a sus

⁸⁴ Aaronson, «Representing the Poor...», pp. 1011-1012.

⁸⁵ O'Connor, *Social Science for What...*, p. 107. Mark Neal Aaronson plantea un argumento similar, al considerar que la reforma de la asistencia social estatal de Reagan «representó un retorno y una revitalización de los antiguos principios ingleses de ayuda pública del siglo XVII». Aaronson, «Representing the Poor...», p. 1028.

familiares. En su versión más simple, el argumento era que cada dólar que aportara el familiar de una persona beneficiaria de asistencia social era un dólar que se ahorra el contribuyente. Sin embargo, los objetivos de la reforma de la asistencia social iban más allá, definían la familia como la unidad básica de la sociedad, enfatizando la creciente dependencia de esta institución y eliminando aspectos del sistema de bienestar que constituían un incentivo para que la familia se rompiera». ⁸⁶ Con recomendaciones que se ampliaron a todos los programas de asistencia pública estatales, la reforma de la asistencia social de Reagan terminó reinstaurando las normas de responsabilidad familiar que afectaban a las relaciones entre hijos adultos y progenitores envejecidos; abuelos, abuelas, tíos, tías y niños y niñas empobrecidos; padres y madres menores no casadas; así como padrastros e hijos no adoptivos. ⁸⁷

Sin embargo, en un gesto que anticipaba la trayectoria que tomaría la reforma federal del bienestar durante las próximas décadas, a la reforma estatal de Reagan lo que más le preocupaba era la cuestión de hacer cumplir la responsabilidad de mantener a los hijos nacidos fuera del matrimonio a los padres ausentes. Bajo la sospecha de que las antiguas normas del «padre sustituto» tendrían menos posibilidades de prosperar en el contexto más permisivo de los años setenta, los reformistas conservadores del bienestar recurrieron a las obligaciones de los padres biológicos, pero ausentes, como la mejor forma de recuperar las leyes de responsabilidad familiar. Los autores del *Proyecto de California para la reforma de la Asistencia Social Nacional* apuntaron que «un objetivo fundamental de la ley de reforma de la asistencia social de 1971 era reforzar el papel de la familia en tanto que unidad básica de la sociedad. La creciente disolución familiar provoca que se recurra a la asistencia pública en lugar de al apoyo familiar. Los padres ausentes no suelen asumir su responsabilidad a la hora de mantener a sus hijos. Muchas madres del AFDC se niegan a revelar la identidad de los padres». ⁸⁸ El documento señalaba a las oficinas de servicios jurídicos de la «Guerra contra la pobreza», a los trabajadores sociales permisivos y a las madres activistas beneficiarias de asistencia social, como agentes en la sombra que promovían esta nueva clase recalcitrante de receptores de asistencia social. En un esfuerzo por obstruir esta coalición de fuerzas progresistas, la reforma de la asistencia social de Reagan de 1971 introdujo varias estructuras de recompensa para incentivar la recaudación de la manutención infantil por parte de los funcionarios de asistencia social del condado. Sin embargo, en último término, Reagan y sus asesores sabían que solo

⁸⁶ Ronald A. Zumbrun, Raymond M. Momboisse y John H. Findley, «Welfare Reform: California Meets the Challenge», *Pacific Law Journal*, núm. 4, 1973, p. 769.

⁸⁷ *Ibidem*.

⁸⁸ Gobernador de California, *California's Blueprint for National Welfare Reform...*, p. 55.

una reforma federal lograría revertir de forma permanente las tendencias liberalizadoras de las políticas de bienestar social y frustrar los constantes desafíos judiciales de los profesionales de la abogacía pro interés público.

El Congreso no tardaría en responder al desafío de Reagan. En 1974 aprobó la ley de manutención infantil, creando la Office of Child Support Enforcement [Oficina para el Cumplimiento de la Manutención Infantil] a nivel federal y exigiendo a los estados que establecieran sus propias oficinas de manutención infantil como parte de sus programas de AFDC.⁸⁹ Durante los años siguientes, sucesivas enmiendas intentarían reforzar este nuevo sistema federal de cumplimiento de la manutención infantil.⁹⁰ Sin embargo, parece que la manutención infantil siguió siendo opcional, desigual y azarosa. La ley de responsabilidad familiar se había federalizado por dictado del Congreso, pero aún estaba lejos de aplicarse de forma integral en la práctica. El sueño del gobernador Reagan de un sistema plenamente federal de responsabilidad familiar tendría que esperar a la elección del «nuevo demócrata», el presidente Clinton, para ejecutarse por completo.

La federalización de las reformas de la asistencia social del gobernador Reagan

En 1996, el presidente Bill Clinton, con el apoyo de la mayoría republicana del Congreso, aprobó una legislación que prometía «acabar con la asistencia social tal y como la conocemos». La Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act [PRWORA, ley de reconciliación de responsabilidad personal y oportunidad de trabajo] sustituyó el programa federal de bienestar AFDC por el Temporary Assistance to Needy Families [TANF, Asistencia Temporal para Familias Necesitadas] de carácter más punitivo y condicional.⁹¹ Según estos nuevos términos fundacionales, el gobierno federal dejaba de estar obligado a proporcionar subvenciones abiertas y de importe equivalente para financiar los programas estatales de asistencia social; en su lugar, proporcionaría una subvención fija limitada que en un momento dado podría resultar absolutamente insuficiente para cubrir los costes de las ayudas para todas las personas solicitantes que cumplieran los requisitos. A modo de devolución federal, la PRWORA supuestamente concedía mayores libertades a los estados para llevar a cabo experimentos

⁸⁹ Jyl J. Josephson, *Gender, Families and State: Child Support Policy in the United States*, Lanham (MD), Rowman & Littlefield, 1997, pp. 34-37. La enmienda de 1974 «tenía el objetivo de lograr o mantener la autosuficiencia económica para prevenir, reducir o eliminar la dependencia (P. L. 93-647, parte A, secc. 2001)» (citado en Josephson, p. 35).

⁹⁰ Para un análisis completo de estas leyes, véase Brenda Cossman, «Contesting Conservatism...», pp. 447-448.

⁹¹ Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996, H. R. 3734 104th Cong. (1995-1996).

políticos que antes solo eran posibles con una exención federal. Sin embargo, la realidad es que las subvenciones fijas para el bienestar incluían estrictas condiciones y solo concedían libertad limitada a los estados para imponer reglas más estrictas que las que exigía el gobierno federal.

La reforma de la asistencia social de Clinton es más conocida como la intervención legislativa que abolió el derecho federal a las prestaciones sociales, introdujo un límite temporal absoluto de cinco años para recibir asistencia social y exigió que las personas beneficiarias de asistencia social participaran en programas de trabajo obligatorios. La mayor parte de este tipo de trabajo forzado se realizaba en el sector servicios peor remunerado, un sector ya copado por la población afroamericana, latina y mujeres migrantes.⁹² La imposición de los requisitos para la prestación social condicionada estaba destinada a tener un efecto devastador no solo en las vidas de las personas beneficiarias de asistencia social (que debían financiar las necesidades de cuidado de sus hijos e hijas a la vez que trabajaban, o de forma más realista, recurrir al trabajo no remunerado de las mujeres de su familia), sino que también afectó a los trabajadores del sector servicios en general, ya que la prestación de trabajo gratuito o de bajo coste subvencionada por el Estado empeoraba inevitablemente las condiciones de todo el personal de servicios, sobre todo de quienes ocupaban los escalones inferiores del mercado laboral. Como nos recuerdan Collins y Mayer: «Los efectos de la reforma de la asistencia social no se pueden entender al margen de las fuerzas que constituían la demanda de trabajo en lo más bajo del mercado laboral».⁹³ Después del breve periodo de dos décadas en las que el salario relativo y las condiciones de trabajo de las mujeres afroamericanas parecían mejorar, el efecto de las prestaciones sociales condicionadas fue reinstaurar brutalmente las obligaciones históricamente racializadas de servidumbre doméstica, de un modo acorde con los mandatos de la economía de servicios posfordista.⁹⁴ Las mujeres afroamericanas y de otras minorías bien podrían haber escapado de las relaciones de dependencia que caracterizaron el trabajo doméstico en los hogares blancos hasta bien entrada la era fordista más tardía.⁹⁵ Sin embargo, la reforma de la asistencia social las sometió a nuevas formas de trabajo doméstico forzado *fuera del hogar* y al hacerlo colocó el trabajo del resto de profesionales mal remunerados del sector servicios bajo la sombra de la prestación social condicionada.

⁹² Jamie Peck, *Workfare States*, Nueva York, Guilford Press, 2001.

⁹³ Jane L. Collins y Victoria Mayer, *Both Hands Tied: Welfare Reform and the Race to the Bottom in the Low-Wage Labor Market*, Chicago, University of Chicago Press, 2010, p. 6.

⁹⁴ Sobre la reducción de la brecha salarial entre las mujeres blancas y negras, que se mantuvo hasta principios de la década de los noventa, véase Branch, *Opportunity Denied*.

⁹⁵ Evelyn Nakano Glenn, «From Servitude to Service Work: Historical Continuities in the Racial Division of Reproductive Labor», *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, vol. 18, núm. 1, 1992, p. 22.

El paralelismo entre las leyes de prestación social condicionada de Clinton y la historia laboral del periodo de la Reconstrucción resulta sorprendente. Igual que la emancipación formal dio paso rápidamente al alquiler de presos y a la servidumbre doméstica impuesta por la criminalización de quienes antes habían sido esclavos, las victorias formales del movimiento por los derechos civiles quedaron rápidamente matizadas por la legitimación de distintas formas de trabajo forzado justificadas de nuevo por la criminalización de las minorías empobrecidas. La doctrina liberal clásica del contractualismo laboral y el trabajo a voluntad nunca ha triunfado sin la imposición simultánea de un régimen de leyes de pobres de trabajo forzado, lo que a día de hoy se ejemplifica con la cada vez más frecuente feminización de las prestaciones sociales condicionadas y el trabajo penitenciario.⁹⁶

Sin embargo, esa misma simbiosis entre la libertad contractual y las obligaciones no contractuales se da también en el plano de las relaciones domésticas y no se reconoce con tanta frecuencia. De nuevo aquí, la reforma de la asistencia social de Clinton replica muy de cerca los esfuerzos asistenciales de la era de la Reconstrucción. Igual que las reformas legales que se pusieron en marcha para gestionar a los esclavos recién emancipados, la PRWORA se esfuerza por limitar los posibles costes sociales de la libertad sexual entre la población pobre surgida tras el movimiento por los derechos civiles adaptando y reinventando las disposiciones de responsabilidad familiar de las leyes de pobres.⁹⁷ E igual que la Oficina de Hombres Emancipados, se plantea la reforma de la asistencia social como un proyecto de prueba para la formación de familias, un proyecto dirigido especialmente a la población afroamericana, pero que a largo plazo aspira a ampliar sus lecciones a la población en general.

Después de las enmiendas parciales de décadas anteriores, la reforma de la asistencia social de Clinton revisó profundamente el sistema vigente de manutención infantil, transformándolo en el exhaustivo régimen de cumplimiento federal con el que Reagan había soñado a principios de los años setenta: se exigía que los estados armonizaran y reforzaran sus esfuerzos de identificación de la paternidad para todos los niños y niñas en el momento de su nacimiento, incluso si sus madres no eran beneficiarias de programas de asistencia social; se establecieron bases de datos integrales para perseguir a

⁹⁶ Para una lectura sobre la reforma de la asistencia social de Clinton que señale la procedencia histórica de la prestación social condicionada en la tradición de las leyes de pobres estadounidense, véase Gertrude Schaffner Goldberg y Sheila D. Collins, *Washington's New Poor Law: Welfare «Reform» and the Roads not Taken, 1935 to the Present*, Nueva York, Council on International and Public Affairs, 2001, y Desmond King, *In the Name of Liberalism: Illiberal Social Policy in the USA and Britain*, Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 259-286.

⁹⁷ Véase Onwuachi-Willig, «The Return of the Ring...», para un análisis completo de estos paralelismos.

padres delincuentes aunque cruzaran fronteras estatales; se eliminó el recurso de revisión judicial por requerir demasiado tiempo; y el complicado sistema de administración, fragmentado y aún discrecional, se sustituyó por un proceso de puesta en marcha uniforme y automático.⁹⁸ Ahora se exigía que cada estado demostrara que la identificación de paternidad aumentaba cada año hasta alcanzar un objetivo general del 90 %. Como en la anterior legislación, las personas solicitantes de asistencia social debían colaborar con las agencias estatales del bienestar en su esfuerzo por identificar y registrar a los padres biológicos, pero las nuevas normas también exigían que los estados sancionaran a aquellos solicitantes que no lo hicieran, bien reduciendo las ayudas, bien expulsándolos de las listas definitivamente.⁹⁹ Estas y otras pequeñas sanciones lograron un descenso dramático del número de personas beneficiarias en los primeros años de su puesta en marcha.

La PRWORA no era menos punitiva en relación con los padres delincuentes. Según sus términos, a los hombres que no pagaran la manutención infantil se les embargaría automáticamente el salario o un tribunal podría ordenarles que asumieran obligaciones propias de la prestación social condicionada, reproduciendo la práctica de la edad de oro de intercambiar las obligaciones familiares por las obligaciones laborales. En ciertos estados, a los padres delincuentes se les podía confiscar el pasaporte, el carné de conducir o su carné profesional; en otros, estaban sujetos a sanciones penales.¹⁰⁰ Si hasta entonces las órdenes de manutención infantil se supervisaban de forma discrecional y azarosa y pocas veces se hacían cumplir más allá de las fronteras estatales, ahora se habían vuelto prácticamente ineludibles.¹⁰¹

Con respecto de los padres, sin embargo, los efectos de la reforma de la asistencia social no siempre fueron simple e incuestionablemente punitivos, dado que también servían para devolver la autoridad del hombre en la familia. En lo que supuso una ruptura radical del derecho de familia estándar, la legislación sobre bienestar hace derivar la paternidad legal del mero hecho de la existencia de una relación biológica y exige las obligaciones resultantes únicamente sobre esa base. Aun así, aunque este juego legal impone obligaciones a los hombres, también les permite reclamar ciertos derechos excepcionales. Una vez designado padre legal, un hombre podía reclamar legítimamente visitas y derechos de custodia de sus hijos o hijas, incluso aunque no hubiera tenido relación con ellos hasta entonces.

⁹⁸ Laura W. Morgan, «Family Law at 2000: Private and Public Support of the Family: From Welfare State to Poor Law», *Family Law Quarterly*, vol. 33, núm. 3, 1999, pp. 710-712.

⁹⁹ Gwendolyn Mink, *Welfare's End*, Ithaca (NY), Cornell University Press, 1998, p. 73; Anna Marie Smith, *Welfare Reform and Sexual Regulation*, Nueva York, Cambridge University Press, 2007, p. 118.

¹⁰⁰ Mink, *Welfare's End...*, p. 74; Smith, *Welfare Reform and Sexual Regulation...*, p. 129.

¹⁰¹ Harry D. Krause, «Child Support Reassessed: Limits of Private Responsibility and the Public Interest», *Family Law Quarterly*, vol. 24, núm. 1, 1990, p. 4.

Este acceso automático al estatus de paternidad legal es característico de la legislación sobre el bienestar. El derecho de familia en general rechaza otorgar paternidad legal a los hombres por el simple hecho del parentesco biológico, insistiendo en que se debe establecer algún tipo de relación emocional más sólida y duradera antes de que un hombre pueda considerarse padre.¹⁰² Solo en la legislación sobre el bienestar puede un hombre reclamar derechos de custodia basándose exclusivamente en la biología; una situación anómala que sanciona claramente todo tipo de abusos.¹⁰³

El sistema moderno de manutención infantil sirve para demostrar que el Estado tiene la voluntad de ejecutar (o de crear, incluso) relaciones legales de obligación y dependencia familiar donde no habían existido por consentimiento mutuo.¹⁰⁴ Igual que la Oficina de Hombres Emancipados creaba matrimonios legales de la nada, sin molestarse por asegurar el consentimiento entre ambas partes, la nueva legislación sobre bienestar genera relaciones familiares como método para hacer cumplir las obligaciones legales de la dependencia y el apoyo mutuos. La integridad del proceso apenas beneficia a la persona solicitante: si la antigua legislación sobre bienestar exigía que los estados destinaran 50 dólares que se debían «hacer llegar» a los fondos de manutención infantil para la persona solicitante, esta disposición pasaba a ser opcional y los estados podían utilizar esos fondos con la única finalidad de cubrir sus gastos. Los costes administrativos dedicados a

¹⁰² Mink, *Welfare's End...*, pp. 74, 87-88, 91.

¹⁰³ De hecho, está bien documentado que las estrechas formas de dependencia familiar creadas por la PRWORA han hecho muy difícil que las mujeres que reciben asistencia social puedan escapar de situaciones de abuso doméstico. Véase Dána-Ain Davis, *Battered Black Women and Welfare Reform: Between a Rock and a Hard Place*, Albany, SUNY Press, 2006.

¹⁰⁴ El estudioso del derecho de familia Patrick Parkinson destaca la novedad de la situación, señala que «la paternidad económica creaba familias artificiales donde antes no las había. Estas familias no nacían de la intención y el consentimiento mutuos, más allá del consentimiento a las relaciones sexuales, sino que se formaban a instancias del Estado para garantizar que los niños tuvieran medios de subsistencia adecuados» (p. 215). Parkinson señala que la creciente implicación del Estado en la legislación y el cumplimiento de las relaciones legales de paternidad no consentidas ha servido para contrarrestar la creciente liberalización de la ley de divorcio. Durante un breve periodo en la década de 1970, el divorcio amistoso señalaba el fin de una relación matrimonial y a menudo el fin de la paternidad legal (normalmente entre el padre y sus hijos). En consecuencia, el gobierno federal se movilizó para reforzar los lazos parentales como medio para mantener las obligaciones legales de apoyo a la familia. Lo que para gran parte de la crítica social-conservadora es una implacable liberalización del derecho de familia es así simplemente una transferencia de la coerción estatal de la relación matrimonial a la parental. De nuevo en palabras de Parkinson, el «Estado no está menos implicado que hace un siglo en su esfuerzo por preservar las relaciones familiares mediante las leyes, pero el foco de su implicación ha cambiado. Mientras que en su día el Estado desempeñaba un papel a la hora de mantener la indisolubilidad del matrimonio prohibiendo o restringiendo estrictamente el divorcio, ahora ha abandonado ese papel. En su lugar, el rol que ahora adopta el Estado en la regulación de la vida familiar es el de mantener la indisolubilidad de la paternidad biológica, otorgando reconocimiento limitado a otras relaciones cuasi parentales» (p. 14). Patrick Parkinson, *Family Law and the Indissolubility of Parenthood*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011.

la identificación de padres y a la recaudación de manutención infantil son inmensos y consumen una parte nada despreciable del presupuesto federal dedicado a asistencia social.¹⁰⁵ A pesar de esto, el importe medio recaudado para cada solicitante es mínimo, algo que no sorprende, dado que «los padres ausentes» muchas veces también son pobres o desempleados.¹⁰⁶ ¿Por qué no desembolsar los fondos de asistencia social directamente a las mujeres empobrecidas? Estas leyes parecen estar motivadas tanto por la voluntad de castigar como por la preocupación por las cargas fiscales: al desviar el pago de los beneficios de bienestar mediante los padres designados, el Estado recuerda a las mujeres que no pueden aspirar a llegar a tener seguridad económica sin establecer una relación de dependencia personal con un hombre. Como apunta Laura Morgan, la reforma de la asistencia social de Clinton representa «la encarnación moderna de las leyes isabelinas de pobres», el intento más reciente y exhaustivo hasta la fecha de sustituir las responsabilidades privadas de la familia por la responsabilidad pública del Estado.¹⁰⁷ El aparato federal de bienestar creado por el New Deal y la Gran Sociedad se reinterpreta ahora como un aparato inmenso para hacer cumplir las obligaciones de la vida privada de las personas pobres beneficiarias de asistencia social.

Así fue como un presidente demócrata completó el experimento de la reforma radical del bienestar que había iniciado un republicano de derechas nada menos que en los años setenta. En palabras de Mark Neal Aaronson, «las características básicas de las disposiciones de hoy en día no son tan distintas en sus premisas y direcciones» a «la legislación de la reforma de la asistencia social de Reagan de hace 15 o 20 años», incluso «en algunos detalles son más duras con la población pobre». Igual que las reformas de Reagan, continúa, las reformas del bienestar de Clinton «reflejaron ampliamente los principios de concesión de ayudas que databan de las leyes isabelinas de pobres, otorgándoles además una vitalidad renovada»,¹⁰⁸ o en un referente más próximo, de la era de posguerra civil estadounidense y de la edad de oro.

¹⁰⁵ Sobre los elevados costes administrativos de hacer cumplir la manutención infantil, véase Robert I. Lerman y Elaine Sorensen, «Child Support: Interaction between Private and Public Transfers» en Robert A. Moffitt, *Means-Tested Transfer Programs in the United States*, Chicago, University of Chicago Press, 2007, pp. 609-611.

¹⁰⁶ Según Gwendolyn Mink, el importe medio anual recaudado para cada solicitante de asistencia social era de 1.889 dólares en 1989. Mink, *Welfare's End...*, p. 85.

¹⁰⁷ Morgan, «Family Law at 2000...», p. 706. Laura Morgan presenta el caso más ambicioso a favor de la idea de que la PRWORA está inspirada en la responsabilidad familiar de la tradición de las leyes de pobres.

¹⁰⁸ Mark Neal Aaronson, «Scapegoating the Poor: Welfare Reform All Over Again and the Undermining of Democratic Citizenship», *Hastings Women's Law Journal*, vol. 7, núm. 2, 1996, p. 225.

Desde entonces, los antiguos términos de combate entre el gobierno federal y los estados han cambiado por completo. Si las administraciones federales se esforzaron en su día por desterrar la tradición de las leyes de pobres de los programas de asistencia pública, confiando en que así mejorarían todos los programas de asistencia social, hasta alcanzar el reconocimiento que tenían los seguros sociales, ahora era el gobierno federal el que tomaba la iniciativa para restablecer las leyes de pobres. Mientras que a Reagan le hubiera hecho falta una exención federal para recuperar la tradición de las leyes de pobres en California, la reforma de la asistencia social de Clinton obligaba ahora a los estados a implementar normas de responsabilidad familiar, bajo amenaza de sanción. Así, la PRWORA terminó de poner patas arriba la relación tradicional entre el gobierno federal históricamente progresista y los estados recalcitrantes. Por primera vez en la historia social estadounidense, la antigua tradición de las leyes de pobres de la responsabilidad familiar estaba plenamente integrada en las políticas federales.

Al informar sobre el progreso de la reforma de la asistencia social en su columna mensual en *Businessweek*, Gary Becker comentó con entusiasmo las obligaciones familiares y de la prestación social condicionada que recogía la propuesta de Clinton; la única crítica que encontró fue su excesiva indulgencia.¹⁰⁹ Como explica Becker en un ensayo teórico clásico sobre las relaciones entre la familia y la asistencia social, la libertad de las relaciones contractuales del mercado no se puede sostener sin la existencia de las obligaciones no contractuales de la familia.¹¹⁰ Puede que el amor altruista resulte profundamente ineficiente en el mercado, pero es absolutamente imprescindible en la familia, en la que las divisiones biológicas del trabajo relacionado con la crianza implican que las madres se benefician de la dependencia personal de un hombre y los padres se benefician de asumir la responsabilidad personal por el bienestar de madres e hijos. El problema del bienestar social, desde esta perspectiva, es que socava los incentivos naturales del altruismo familiar y por lo tanto priva a la población pobre de su principal sistema de apoyo. Al mismo tiempo que celebran la libertad contractual en el mercado público del amor y el dinero, neoliberales como Becker afirman, con la misma insistencia, la necesidad de una obligación no contractual en la familia y no dudan en recurrir a los plenos poderes del Estado para hacerla cumplir. Después de todo, es ahí donde sitúan el *locus* de la seguridad económica y la alternativa ideal al Estado de bienestar social.

¹⁰⁹ Gary S. Becker, «The Best Reason to Get People off the Dole (1995)», en Gary S. Becker y Guity Nashat Becker, *The Economics of Life: From Baseball to Affirmative Action to Immigration, How Real-World Issues Affect Our Everyday Life*, Nueva York, McGraw-Hill, 1996, pp. 95-96.

¹¹⁰ Gary S. Becker, «Altruism in the Family», en *A Treatise on the Family, Enlarged Edition*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1993 [1981], pp. 277-306.

La reforma de la asistencia social de Clinton: entre el neoliberalismo y el nuevo social-conservadurismo

No obstante, resultaría engañoso asumir que la reforma de la asistencia social de Clinton se inspiró exclusivamente en una filosofía neoliberal del bienestar familiar privado. Como apunta Brenda Cossman, la PRWORA representaba un curioso «híbrido de conservadurismo social y fiscal»; o lo que yo llamo neoliberalismo y nuevo social-conservadurismo.¹¹¹ El preámbulo inicial de la PRWORA, nos ofrece esta extraordinaria definición de moralidad pública: «1) El matrimonio es el pilar de una sociedad de éxito; 2) el matrimonio es una institución fundamental de una sociedad de éxito que promueve los intereses de la infancia»; y «3) la promoción de la paternidad y la maternidad responsable es fundamental para la crianza y el bienestar de niños y niñas».¹¹² En el apartado de conclusiones, el texto de la ley continúa citando distintas estadísticas que señalan una correlación entre nacimientos fuera del matrimonio, crecientes tasas de pobreza infantil, los casos resultantes de mala salud, abuso infantil, criminalidad y drogadicción; aunque no se hace ningún intento de establecer una relación causal. A la luz de estas averiguaciones, la legislación señala algunos requisitos que deben cumplirse antes de que un estado reciba una subvención fija. Cada estado debe demostrar que ha tomado medidas para prevenir y reducir los embarazos fuera del matrimonio; debe establecer también objetivos numéricos para reducir las tasas de nacimiento de hijos ilegítimos, con una financiación de cien millones de dólares reservada para aquellos estados que logren reducir los nacimientos ilegítimos sin que aumenten las tasas de aborto.¹¹³

Más allá de estas medidas preventivas, la PRWORA también incluye fondos para promover activamente el matrimonio heterosexual y procreador entre la población en general, no beneficiaria de asistencia social: encarga a la Secretaría de Salud y Servicios Humanos desembolsar cincuenta millones de dólares al año en subvenciones fijas para formación sobre castidad

¹¹¹ Cossman, «Contesting Conservatism...», p. 442. Véase también Anna Marie Smith, que señala que la PRWORA «expresa un discurso notablemente híbrido: se apropia tanto del énfasis moralista de la derecha religiosa en los "valores familiares" patriarcales y heterosexistas como del énfasis neoconservador [neoliberal] en la reducción del papel del gobierno y la exposición del individuo empobrecido a los rigores correctivos del mercado». Anna Marie Smith, «The Politicization of Marriage in Contemporary American Public Policy: The Defense of Marriage Act and the Personal Responsibility Act», *Citizenship Studies*, vol. 5, núm. 3, 2001, p. 315. Defiendo que el éxito de la alianza social-conservadora / neoliberal de Clinton dependió de su capacidad de ampliar el atractivo del discurso social-conservador más allá de la derecha religiosa y republicana para incluir a los nuevos demócratas.

¹¹² Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996, H.R. 3734 104th Cong. (1995-1996), preámbulo.

¹¹³ Title IX, Section 905 (a)(1-2).

como única opción en los colegios públicos y aparta una asignación de presupuesto especial para financiar las iniciativas de promoción del matrimonio que lleven a cabo los estados. En palabras de Dorit Geva: «Ninguna legislación estadounidense sobre bienestar ha situado de forma tan decisiva la ética de las "familias fuertes", ni la importancia fundamental del matrimonio para prevenir la dependencia de la asistencia social».¹¹⁴

Con su tajante afirmación del valor social del matrimonio, la PRWORA invertía lo que parecía una abrumadora tendencia hacia la liberalización del derecho de familia. Desde los años sesenta la distinción entre los hijos e hijas legítimos e ilegítimos había quedado prácticamente anulada en el derecho de familia, cuestionada incluso en la legislación sobre bienestar. La reforma de la asistencia social de Clinton reafirmaba sin ninguna duda la importancia de la crianza legítima como objetivo de las políticas sociales. Y en caso de que los estados hubieran relajado sus esfuerzos por supervisar la moralidad, al menos en la esfera privada, el gobierno federal ahora les instaba abiertamente a hacerlo, bajo la amenaza de cortar la financiación. La que en su día parecía una lenta, pero irreversible tendencia hacia la liberalización del derecho de familia se vio abruptamente interrumpida, ya que el gobierno federal se propuso sin rodeos recuperar las obligaciones no contractuales del matrimonio y la familia.¹¹⁵

Por supuesto, estas imposiciones se aplicaban primero a las personas beneficiarias de la asistencia social, quienes solo habían disfrutado de un breve respiro de los poderes de supervisión del Estado. No obstante, como explica en detalle Tonya Brito, muchas de las medidas prácticas inventadas para lidiar con las madres no casadas beneficiarias de asistencia social se habían ampliado a las madres solteras en general; en un gesto diseñado para prevenir cualquier futura reclamación de beneficios de asistencia social.¹¹⁶ En un proceso al que Brito se refiere como la «welfarización del derecho de familia» la distinción entre niños legítimos e ilegítimos, obsoleta

¹¹⁴ Dorit Geva, «Not Just Maternalism: Marriage and Fatherhood in American Welfare Policy», *Social Politics: International Studies in Gender, State and Society*, vol. 18, núm. 1, 2011, p. 25.

¹¹⁵ La idea de que el derecho de familia ha experimentado un proceso de continua liberalización desde los años sesenta está bien asentada en la bibliografía sobre el derecho de familia. Véase en concreto Singer, «The Privatization of Family Law». Otros hablan de una «desjuridificación» o «desregulación» del derecho de familia. Véase Mary Ann Glendon, *The Transformation of Family Law: State, Law, and Family in the United States and Western Europe*, Chicago, University of Chicago Press, 1989, p. 293, y Milton C. Regan, *Family Law and the Pursuit of Intimacy*, Nueva York, New York University Press, 1993. Reflexionando sobre esta literatura, Nancy Cott señala que tanto la Ley de defensa del matrimonio como la PRWORA pueden leerse como un «reestablecimiento» o «rejuridificación» del derecho de familia. Véase Nancy F. Cott, *Public Vows: A History of Marriage and the Nation*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2000, pp. 200-227.

¹¹⁶ Tonya L. Brito, «The Welfarization of Family Law», *University of Kansas Law Review*, núm. 48. 2, 2000, pp. 229-283.

hacía tiempo, se recuperaba ahora en el derecho de familia general; un cambio que quizá se ejemplifique mejor con la reciente prominencia de argumentos de legitimidad en la jurisprudencia sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.¹¹⁷

Los nuevos demócratas: entre el neoliberalismo y el comunitarismo

Aquí, de nuevo, fue el presidente demócrata Bill Clinton quien logró poner en marcha por completo un proyecto alimentado inicialmente por republicanos de derechas. Como presidente, Ronald Reagan se había esforzado y había fracasado en su intento de forjar una alianza efectiva entre sus circunscripciones neoliberales y social-conservadoras. A pesar de las esperanzas iniciales de una alianza duradera, el apoyo social-conservador de Reagan estaba demasiado alineado con la derecha religiosa y el populismo blanco como para atraer más que a una pequeña minoría del electorado. En consecuencia, los esfuerzos presidenciales de Reagan para llevar a cabo la reforma de la asistencia social no resultaron tan espectaculares como sus logros mientras fue gobernador de California.¹¹⁸ En su lugar, fue Clinton quien logró formar una amplia alianza bipartidista e interracial entre opiniones neoliberales y neoconservadoras, habiendo roto en primer lugar las barreras para las políticas social-conservadoras dentro de su propio partido.

Aunque la reforma de la asistencia social de Clinton se suele interpretar como una adaptación de la plataforma de Newt Gingrich, Contract

¹¹⁷ Algunos académicos han examinado el recurso generalizado a las nociones de legitimidad en la jurisprudencia sobre matrimonio entre personas del mismo sexo. Como explica Nancy D. Polikoff (2012), las recientes decisiones legales en torno a la maternidad de las lesbianas han concedido derechos parentales sobre la base de una relación legal preexistente (unión civil o matrimonio) entre las dos madres, citando esta relación como prueba de la conexión «legítima» con el niño. Ninguna jurisprudencia similar ha ampliado la patria potestad a madres lesbianas no casadas o fuera de una unión civil, a pesar de que la noción de legitimidad se ha considerado nula durante mucho tiempo en casos similares relacionados con padres heterosexuales. Véase Nancy D. Polikoff, «The New Illegitimacy: Winning Backward in the Protection of the Children of Lesbian Couples», *Journal of Gender, Social Policy and the Law*, vol. 20, núm. 3, 2012, pp. 721-740. Las opiniones a favor de la igualdad matrimonial han reforzado posteriormente el argumento de la legitimidad a la jurisprudencia sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo en su totalidad, identificando la ilegitimidad de los niños nacidos de parejas homosexuales como uno de los perjuicios más perniciosos asociados a la prohibición federal del matrimonio homosexual. Melissa Murray, «What's so New about the New Illegitimacy?», *Journal of Gender, Social Policy and the Law*, vol. 20, núm. 3, 2012, pp. 387-436. Al hacerlo, han resucitado la pertinencia jurídica de la maternidad legítima tres décadas después de que la noción de ilegitimidad fuera oficialmente desacreditada por la jurisprudencia del derecho de familia. Lo han hecho precisamente en el momento histórico en que la legislación federal y estatal sobre el bienestar social ha tratado de recuperar las consecuencias punitivas de la maternidad ilegítima para las madres solteras pobres.

¹¹⁸ Sobre la Ley de apoyo a la familia de Reagan de 1988, véase Brenda Cossman, «Contesting Conservatism», pp. 466-468.

with America [Contrato con Estados Unidos], la plataforma con la que el Partido Republicano había hecho campaña para las elecciones al Congreso en 1994 y con la que lograron la victoria, su aprobación también refleja un movimiento tectónico en el propio Partido Demócrata, en tanto los nuevos demócratas lograron ejercer una enorme influencia en la formulación de los objetivos de las políticas sociales del partido. Los nuevos demócratas habían surgido como una facción política organizada en 1985, tras el apabullante éxito de los republicanos en la segunda campaña de Reagan.¹¹⁹ Esta nueva ola de demócratas, que se organizaban bajo el paraguas del Democratic Leadership Council [Consejo de Liderazgo Demócrata] y su grupo de reflexión, el Progressive Policy Institute [Instituto de Políticas Progresistas], se propuso recuperar su antigua base de votantes blancos y de clase trabajadora separándose activamente del legado de la Nueva Izquierda de los años sesenta y proponiendo en su lugar una posición centrista y moral-conservadora sobre el bienestar social.

Gracias en gran medida al Instituto de Políticas Progresistas, el Partido Demócrata terminó por abrazar el «nuevo paternalismo» de Lawrence Mead, sin duda el más influyente de los defensores de la reforma de la prestación social condicionada y de la manutención infantil punitiva en la reciente revisión de la asistencia social en EEUU.¹²⁰ Los nuevos demócratas también eran responsables de haber introducido en el debate político multitudinario al Instituto de Valores Estadounidenses y a su grupo de reflexión, el Council on Families in America [Consejo de Familias en Estados Unidos]. Estas organizaciones albergaban figuras de la talla de William Galston (asesor principal de políticas nacionales de Clinton hasta 1995), David Popenoe, Barbara Defoe Whitehead, Jean Bethke Elshstain o James Q. Wilson, cercanas al filósofo comunitarista Amitai Etzioni y comprometidas con el proyecto de cerrar la división política entre el progresismo por la justicia social y el conservadurismo religioso.¹²¹ Igual que

¹¹⁹ R. Kent Weaver, *Ending Welfare as We Know It*, Washington DC, Brookings Institution Press, 2000, p. 206. Para un análisis exhaustivo del *Democratic Leadership Council* [Consejo de Liderazgo Demócrata] y su influencia en la política de bienestar de Clinton, véase Brendon O'Connor, *A Political History of the American Welfare System: When Ideas Have Consequences*, Lanham (MD), Rowman & Littlefield, 2004, pp. 185-203. Para en cierto modo confundir más la terminología, los nuevos demócratas a menudo se refieren a sí mismos como «neoliberales», con lo que quieren decir nuevo progresismo liberal. Por motivos obvios, aquí no seguiré esta terminología.

¹²⁰ Weaver, *Ending Welfare as We Know It...*, p. 117; Steven M. Teles, *Whose Welfare? AFDC and Elite Politics*, Lawrence, University Press of Kansas, 1998, p. 148. Conocido como conservador del «gran gobierno», Lawrence Mead fue cortejado brevemente por los republicanos a finales de los años ochenta, antes de ser abandonado en favor de teóricos libertarios contra la asistencia social, como Charles Murray y Marvin Olasky.

¹²¹ Judith Stacey, *In the Name of the Family: Rethinking Family Values in the Postmodern Age*, Boston, Beacon Press, 1996, pp. 53-56. El Instituto de Valores Estadounidense se fundó en 1987, poco después de la creación del Consejo de Liderazgo Demócrata. La

sus colegas conservadores cristianos, los nuevos demócratas comunitaristas estaban obsesionados con el declive del matrimonio, las crecientes tasas de crianza ilegítima y la epidemia resultante de «familias sin padres», sin embargo, desplegaron métodos convencionales de ciencia social para reforzar sus conclusiones y evitaban cuidadosamente el uso de un lenguaje abiertamente antifeminista u homófobo (de hecho, recientemente algunos perfiles se han pasado a la causa del matrimonio homosexual). Con la intención de combatir el discurso de los valores familiares de la derecha religiosa, estos perfiles académicos internos preferían el lenguaje de la desintegración de la comunidad al del declive moral y presentaban la pérdida del matrimonio estable y monógamo como una cuestión de justicia social más que como un síntoma de decadencia cultural.

El Instituto de Valores Estadounidenses y sus filiales resultaron fundamentales para colocar la promoción del matrimonio y de la responsabilidad paterna en el centro de la reforma de la asistencia social estadounidense.¹²² Su retórica era lo bastante amplia e imparcial como para poder dirigirse a conservadores religiosos y seculares, a quienes sentían nostalgia por el salario familiar del New Deal, así como a defensores de los valores familiares, blancos y negros. A la derecha, el Instituto trabajó de cerca con la National Fatherhood Initiative [NFI, Iniciativa Nacional de Paternidad], una organización sin ánimo de lucro cofundada por los evangélicos Wade Horn y Don Eberly en 1994 y ahora centro de coordinación de programas de paternidad responsable por todo el país.¹²³ La Iniciativa Nacional de Paternidad se centra especialmente en la supuesta desintegración de la familia blanca, un proceso que consideran como una suerte de reproducción de la crisis familiar negra de los años setenta. El momento decisivo de esta institución es el discurso de Dan Quayle en 1992 en el que condenaba el retrato que hacía la televisión de la madre blanca soltera Murphy Brown y el consiguiente debate que provocó en la prensa liberal-progresista.¹²⁴

mayoría de sus integrantes se identifican como nuevos demócratas. Para un relato sobre la influencia comunitaria en el Consejo de Liderazgo Demócrata y Clinton en concreto, véase Amitai Etzioni, *My Brother's Keeper: A Memoir and a Message*, Lanham (MD), Rowman & Littlefield, 2003, pp. 259-68 [ed. cast. *El guardián de mi hermano*, Palabra, 2006].

¹²² Melanie Heath, *One Marriage Under God: The Campaign to Promote Marriage in America*, Nueva York, New York University Press, 2012, pp. 1-2.

¹²³ Anna Gavanas, *Fatherhood Politics in the United States: Masculinity, Sexuality, Race and Marriage*, Urbana, University of Illinois Press, 2004, pp. 23-24, 26, 41.

¹²⁴ Stacey, *In the Name of the Family...*, pp. 52-82. Gavanas, *Fatherhood Politics in the United States...*, p. 41. Tras el discurso de Dan Quayle, la historiadora social Barbara Dafoe Whitehead (entonces vicepresidenta del Instituto de Valores Estadounidenses) publicó un artículo en la revista liberal-progresista *Atlantic Monthly* en el que corroboraba los temores de Quayle y utilizaba estadísticas de las ciencias sociales para argumentar que la familia blanca estaba realmente en crisis. Véase Barbara Dafoe Whitehead, «Dan Quayle Was Right», *Atlantic Monthly*, abril de 1993. Charles Murray siguió con un artículo en el que afirmaba que la desintegración de la familia blanca había sustituido a la crisis de la familia

En el centro izquierda, el Instituto de Valores Estadounidenses también trabaja en estrecha colaboración con representantes de varias iniciativas del Programa Reforzar las Familias Frágiles de la Fundación Ford, centrado en los problemas que afrontan los padres afroamericanos y de otras minorías.¹²⁵ Defensores de familias frágiles como Ronald B. Mincy y Hillard Pouncy se consideran a sí mismos herederos de Moynihan.¹²⁶ Al contrario que a la NFI, a estos les preocupan fundamentalmente las dinámicas socioeconómicas que han reducido las «posibilidades de casarse» de los hombres de las minorías y que les impiden ejercer su papel como padres. Sin llegar a ser abiertamente antifeministas, estos académicos plantean el problema de la pobreza femenina e infantil como consecuencia de la ausencia de oportunidades económicas y sociales para los *hombres* de las minorías y, por lo tanto, se proponen una restauración de jerarquías de género apropiadas como un primer paso necesario en el proyecto de la justicia social.¹²⁷ Reclaman que el declive de la economía industrial y la expansión secular del sector servicios ha privilegiado a las mujeres de las minorías sobre los hombres, creando de nuevo las condiciones en las que los padres negros quedan excluidos de las familias matriarcales. En último término, como herederos de Moynihan, plantean que la solución ideal al problema de las familias sin padres sería la creación de empleo y de programas educativos a una escala desconocida desde la Gran Sociedad, pero al carecer de ninguna voluntad política real en esta dirección, concentran sus esfuerzos en hacer que los sistemas de manutención infantil sean menos punitivos hacia los hombres de las minorías.¹²⁸ En estrecha colaboración con las oficinas estatales de bienestar, establecen programas de «paternidad responsable» dentro del sistema de manutención infantil, permitiendo que los tribunales envíen a los padres delincuentes a clases de paternidad en lugar de aplicarles sanciones más severas. Gracias a la influencia de la coalición de las familias frágiles, las conexiones entre responsabilidad familiar, sanciones criminales y encarcelamientos se han transformado en los

negra como problema definitorio de la época. Véase Charles Murray, «The Coming White Underclass», *Wall Street Journal*, 29 de octubre de 1993.

¹²⁵ Mi relato sobre la diferencia entre la Iniciativa Nacional de Paternidad y el proyecto de familias frágiles se lo debo a Gavanoas, *Fatherhood Politics in the United States*, pp. 24 y 30-31.

¹²⁶ De hecho, pueden considerarse parte de una comunidad más amplia de académicos que se sitúan en el centro-izquierda, pero que simpatizan ampliamente con las conclusiones de Moynihan. Véase, por ejemplo, los artículos recopilados en «The Moynihan Report Revisited: Lessons and Reflections after Four Decades», *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, vol. 621, núm. 1, 2009.

¹²⁷ Para un resumen de esta bibliografía, véase Obie Clayton, Ronald B. Mincy y David Blankenhorn, *Black Fathers in Contemporary Society: Strengths, Weaknesses and Strategies for Change*, Nueva York, Russell Sage Foundation, 2003.

¹²⁸ Véanse los ensayos recogidos en Timothy M. Smeeding, Irwin Garfinkel y Ronald B. Mincy, «Young Disadvantaged Men: Fathers, Families, Poverty, and Policy», *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, vol. 635, núm. 1, 2011.

últimos años en una visión más rehabilitadora de la paternidad responsable, sin dejar de estar firmemente inscritas en el sistema penal de justicia.

Estas encarnaciones a «derecha» e «izquierda» de las políticas de los valores familiares terminaron de asentarse en las administraciones de Bush y Obama, cuando las agencias federales comenzaron a implementar plenamente la promesa social-conservadora de la reforma de la asistencia social de Clinton. Poco después de tomar posesión, George W. Bush nombró a Wade Horn, evangélico de derechas y expresidente de la Iniciativa Nacional de Paternidad, director de la Administration for Children and Families [Administración para Niños y Familias], la oficina que gestiona el TANF dentro del Department of Health and Human Services [HHS, Departamento de Salud y Servicios Humanos]. Bajo su dirección, el Departamento de Salud y Servicios Humanos creó la Healthy Marriage Initiative [Iniciativa por el Matrimonio Saludable], un programa diseñado para definir y financiar la promoción del matrimonio por todos los estados; logró convencer además a un Congreso controlado por republicanos de financiar la iniciativa durante cinco años a un coste de quinientos millones de dólares. Al mismo tiempo el HHS dedicó cien millones de dólares a los programas ya existentes (incluida la manutención infantil) que promocionaran el matrimonio, en consideración del nuevo sentir popular de que la asistencia social debía ir más allá del mero cumplimiento de obligaciones económicas y promover activamente la creación de familias tradicionales. Junto con este aumento de la financiación federal de la promoción del matrimonio, el Congreso autorizó también 250 millones de dólares para financiar la Iniciativa Nacional de Paternidad de Wade Horn.¹²⁹

Sin embargo, los programas de paternidad responsable alcanzan su máximo desarrollo con Obama. Durante los primeros años de su mandato, el presidente Obama duplicó la financiación a las iniciativas de paternidad, desplazando la promoción del matrimonio a un segundo puesto dentro de la agenda federal del bienestar.¹³⁰ El HHS pasó a colaborar estrechamente con el Departamento de Justicia y con la White House Office of Faith-Based and Neighborhood Partnerships [Oficina de la Casa Blanca de

¹²⁹ Jean Hardisty, *Pushed to the Altar: The Right Wing Roots of Marriage Promotion*, Somerville (MA), Political Research Associates/Women of Color Resource Center, 2008, pp. 5 y 8; Shirley Anne Warshaw, *The Co-Presidency of Bush and Cheney*, Stanford (CA), Stanford University Press, 2009, p. 95; Jessica Dixon Weaver, «The First Father: Perspectives on the President's Fatherhood Initiative», *Family Court Review*, vol. 50, núm. 2, 2012, p. 299; Sarah Olson, «Marriage Promotion, Reproductive Injustice, and the War against Poor Women of Color», *Dollars and Sense*, enero/febrero, 2005, disponible on line en <http://www.dollarsandsense.org/archives/2005/0105olson.html> (consultado por última vez el 1 de octubre de 2015).

¹³⁰ Weaver, «The First Father...», p. 299; Monica Potts, «Daddy Issues: Is Promoting Responsible Fatherhood Really the Best Way to Lift Families out of Poverty?» *The American Prospect*, abril de 2010, p. 23.

Asociaciones Religiosas y Vecinales] para diseñar programas especialmente adaptados a las experiencias de los hombres de ingresos bajos de las minorías. En consecuencia, los programas de paternidad quedaron plenamente integrados en el sistema legal, pudiéndose asignar como alternativa a penas de cárcel para criminales poco peligrosos o incluirse en programas de reinserción para exconvictos.

En tanto hecho biográfico y fenómeno considerado definitorio de la experiencia corriente de la población afroamericana, la ausencia paterna desempeñó un papel fundamental en la esencia política de Obama. Su agenda oficial de bienestar social está indudablemente definida por el discurso de la paternidad frágil de social-conservadores de «izquierdas» como Ronald Mincy y Hillard Pouncy, pero también da cuenta de la duradera influencia de Moynihan en la política social estadounidense. En su autobiografía política *La audacia de la esperanza*, Obama defiende a Moynihan de las acusaciones de racismo y alaba lo que considera el conservadurismo instintivo de las clases medias negras.¹³¹ «Deberíamos [...] reconocer que el conservadurismo, y Bill Clinton, tenían razón sobre la asistencia social tal como antes estaba estructurada», pero debemos darnos cuenta también de que el trabajo no basta para sacar a la gente de la pobreza, sino que además hace falta una profunda campaña de reinserción moral y cultural como la que ideó Moynihan.¹³² «Nuestra incapacidad como progresistas de aprovechar los fundamentos morales de la nación no es solo retórica [...] Nuestro miedo a "predicar" también puede llevarnos a ignorar el papel que desempeñan los valores y la cultura al abordar algunos de nuestros problemas sociales más urgentes».¹³³

Aun así, aunque Obama, como Moynihan, considera que la renovación de la paternidad es fundamental para resolver el problema de la injusticia racial y económica, el imaginario del bienestar social ha cambiado profundamente con los años desde la publicación del informe Moynihan. Después de todo, este último escribía en medio del auge de la expansión del Estado de bienestar y aún confiaba en ampliar el salario familiar a los hombres negros. Su social-conservadurismo era cercano a una visión socialdemócrata de la redistribución mediante el salario digno. A principios del siglo XXI, las promesas redistributivas de la era de posguerra se han disuelto por completo en un pasado lejano. Incluso al mencionar a Moynihan, a lo que Obama se

¹³¹ Barack Obama, *The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream*, Nueva York, Crown Publishers, 2006, p. 254 [ed. cast. *La audacia de la esperanza*, trad. por Claudia Casanova, Barcelona, Península, 2007]. Obama escribe que «en privado, alrededor de la mesa de la cocina, en las barberías y después de la iglesia, a menudo se puede escuchar a la población negra lamentar la erosión de la ética del trabajo, la inadecuada crianza de los hijos y el declive de las costumbres sociales con un fervor que enorgullecería a la *Heritage Foundation*».

¹³² *Ibidem*, p. 255.

¹³³ *Ibidem*, pp. 214-215.

refiere es a una alianza del social-conservadurismo y el neoliberalismo que es más bien una reminiscencia de las políticas de responsabilidad familiar de la edad de oro, aunque ahora se implementen por completo por medio de las estructuras administrativas del Estado.

Volver a legitimar el derecho familiar

De forma similar a sus predecesores de la edad de oro, los académicos del comunitarismo asociados al Institute for Family Values [Instituto de Valores Familiares] están profundamente implicados en el proyecto de la reforma del derecho de familia, lo consideran un pilar fundamental en su estrategia a largo plazo para rehabilitar los valores morales. El Council on Family Law [Consejo de Derecho de Familia], una organización afín, reúne perfiles académicos conservadores legales como Mary Ann Glendon, Milton C. Regan Jr., Margaret Brinig y Carl E. Schneider, que se proponen revertir la tendencia hacia la «privatización» del derecho de familia y defienden medidas como la restauración del divorcio basado en la culpa o la introducción de alternativas religiosas a las uniones civiles como el contrato conyugal (un experimento llevado a cabo con éxito limitado en el estado de Luisiana).¹³⁴

Estos académicos apuntan directamente al derecho neoliberal y a la escuela económica de Richard Posner, que consideran permite la disolución de la familia mediante la contractualización del derecho de familia.¹³⁵ Como muchos académicos del derecho, describen la historia reciente de la reforma del derecho de familia en términos de una tendencia diferenciada hacia la «privatización», es decir, la sustitución de las obligaciones sancionadas por el Estado por un sistema de ordenamiento privado y contractual, un proceso que consideran plenamente acorde con las intenciones de la teoría neoliberal legal. A la vista de esta tendencia, los académicos del comunitarismo legal defienden la necesidad de obligaciones exigidas por el

¹³⁴ Glendon, *The Transformation of Family Law...*; Milton C. Regan, «Post-modern Family Law: Toward a New Model of Status», en David Popenoe, Jean Bethke Elshstain y David Blankenhorn, *Promises to Keep: Decline and Renewal of Marriage in America*, Lanham (MD), Rowman & Littlefield, 1996, pp. 157-186; Carl E. Schneider, «The Law and the Stability of Marriage: The Family as a Social Institution», en *ibidem*, pp. 187-244; Margaret F. Brinig, *From Contract to Covenant: Beyond the Law and Economics of the Family*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2000.

¹³⁵ Véase, por ejemplo, la crítica comunitaria de Becker y Posner en Don S. Browning, «Egos without Selves: A Critique of the Family Theory of the Chicago School of Economics», en *Equality and the Family: A Fundamental, Practical Theology of Children, Mothers, and Fathers in Modern Societies*, Grand Rapids (MI), William B. Eerdmans, 2007, pp. 263-282. Las perspectivas comunitarias sobre el derecho y la economía se inspiran en la crítica clásica de Amitai Etzioni *The Moral Dimension: Toward a New Economics*, Nueva York, Simon & Schuster, 1998.

Estado en el matrimonio y la paternidad. Defienden que sin esta garantía la familia se ve privada de su papel fundacional, lo que provoca el problema del desorden sexual de las «familias sin padres».

Los académicos del derecho neoliberales se muestran aún hostiles a la premisa de las normas cívicas como principios reguladores de la vida íntima y se inclinan, en principio, por defender la generalización del ordenamiento privado y contractual como sustituto de los «contratos civiles» ejecutados por el Estado, como el matrimonio. Sin embargo, habremos entendido mal su argumento a favor de la contractualización si no reconocemos también las condiciones que lo limitan. Habiéndose declarado *a priori* partidarios del ordenamiento privado, los académicos neoliberales hacen una excepción fundamental en las relaciones íntimas responsables a la hora de generar un coste social o externalidades, por ejemplo, niños ilegítimos o ETS no cubiertas por los seguros (un problema que abordaremos en mayor profundidad en el capítulo cinco). Richard Posner y Gary Becker han expresado desde hace tiempo su distancia con respecto del divorcio amistoso; no por ninguna preocupación moral con el declive de la vida familiar (las crecientes tasas de divorcio de finales del siglo XX fueron el resultado inevitable de la creciente participación de las mujeres en la población activa, según insiste Becker), sino por los posibles costes sociales surgidos de mantener a las mujeres y a los niños dependientes.¹³⁶ Cuando las mujeres y los hombres no logran privatizar el coste de su comportamiento sexual y en su lugar trasladan estos costes al Estado, el pensamiento neoliberal hace una excepción para la imposición de obligaciones no contractuales. Así, en casos de disolución marital, las responsabilidades legales de la manutención conyugal e infantil deben ser prioritarias frente a los deseos de las partes implicadas. Y está más que justificado que el Estado haga cumplir estas responsabilidades.

Aquí queda claro hasta qué punto se ha entendido mal la filosofía neoliberal de la libertad sexual tanto en el discurso académico como popular. Se asume casi de forma universal, por ejemplo, que los académicos del derecho neoliberales deben simpatizar con la jurisprudencia de la privacidad que transformó la libertad sexual en un derecho constitucional (limitado) a finales de los años sesenta y setenta, y quizás hasta podrían ser responsables de la misma en último término. Así, cierta crítica de la izquierda al neoliberalismo lo considera inspirador de la ética individualista de la elección sexual que permitió casos históricos como la decisión de *Roe contra Wade* en 1973 y por extensión todos los demás casos que implicaban

¹³⁶ Richard A. Posner, *Sex and Reason*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1992, pp. 181-189, y Gary S. Becker, «Finding Fault with No-Fault Divorce (1992)», en Becker y Becker, *The Economics of Life...*, pp. 98-100.

el reconocimiento de la libertad sexual como derecho constitucional.¹³⁷ De hecho, la realidad es todo lo contrario. Un académico como Richard Posner se muestra inequívocamente hostil a la jurisprudencia de la libertad sexual, por la simple razón de que un derecho positivo de libertad sexual conduce con demasiada facilidad a la conclusión de que el Estado no solo debe permitir, sino proteger activamente las libertades en cuestión.¹³⁸ Podría decirse que fue precisamente ese planteamiento lo que condujo a la breve ampliación de la jurisprudencia sobre la privacidad de las personas beneficiarias de asistencia social en los años setenta, un escenario que el neoliberalismo siempre ha entendido como una forma de irresponsabilidad personal subvencionada por el Estado y que siempre ha criticado. En cambio, el neoliberalismo defiende la noción más limitada de que la libertad contractual privada (en oposición al derecho constitucional de la libertad) debería ampliarse a todos los ámbitos de la vida íntima, entendiendo que los costes asociados quedan plenamente incorporados por las partes contratantes. En su defecto, el neoliberalismo tiene la misma voluntad que el comunitarismo de invocar la necesidad de obligaciones no contractuales en el matrimonio y la paternidad y está más que preparado para apelar al Estado a que las haga cumplir. Así, a pesar de sus diferencias concretas, la academia jurídica del comunitarismo y el neoliberalismo comparten la aversión al discurso de los derechos sexuales. Ambas están convencidos de que debe imponerse cierto límite a la libertad sexual y difieren solo en la cuestión de si esos límites deberían ser excepcionales (neoliberalismo) o fundacionales (comunitarismo).

Sin duda esta convergencia explica por qué una de las académicas más conservadoras de la tradición comunitaria, Margaret Brinig, también reclama fidelidad al derecho y a las escuelas económicas,¹³⁹ y por qué uno de los académicos más libertarios de la Escuela de Chicago, Richard A. Epstein, es también el más radical en su compromiso con la naturaleza no negociable de las obligaciones familiares. Lo que Epstein reconoce quizás con más lucidez que ningún otro colega académico en derecho o economía es que la libertad contractual no puede darse sin las obligaciones no

¹³⁷ Este supuesto está muy extendido en la bibliografía crítica sobre el neoliberalismo. Véase, por ejemplo, Anne Alstott, «Neoliberalism in U.S. Family Law: Negative Liberty and Laissez-Faire Markets in the Minimal State», *Law and Contemporary Problems*, núm. 77. 4, 2014, pp. 25-42. Para una réplica detallada a esta postura con respecto de Richard Posner, véase Jean L. Cohen, *Regulating Intimacy: A New Legal Paradigm*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2004, pp. 77-124.

¹³⁸ En palabras de Posner, la «decisión de la Corte Suprema sobre la privacidad sexual no solo está mal razonada, sino que está mal informada». *Sex and Reason...*, p. 7. Para una crítica comparable de la jurisprudencia de la intimidad sexual desde el punto de vista comunitario, véase Mary Ann Glendon, *Rights Talk: The Impoverishment of Political Discourse*, Nueva York, Macmillan, 1991.

¹³⁹ Véase Brinig, *From Contract to Covenant...*, por su esfuerzo por reconciliar estas perspectivas.

contractuales aparentemente naturales de la familia. Las normas del bienestar social deberían por lo tanto «seguir el patrón básico de las obligaciones naturales tal como se percibe en las familias».¹⁴⁰ La tarea de la reforma neoliberal de la asistencia social es «transformar [esta] inclinación en una tarea» y así «obtener un "es" de un "debe"»; una precisa traducción de la filosofía de las leyes de pobres de la caridad natural dentro de la familia.

¹⁴⁰ Richard Epstein, *Principles for a Free Society*, Nueva York, Basic Books, 1998, p. 23. Así, una decisión histórica de la Corte Suprema de Illinois, *El pueblo vs. James W. Hill* (1896), defendió las disposiciones de la ley estatal de pobreza proclamando que el propósito de dichas leyes era «proteger al público de las pérdidas ocasionadas por la negligencia de un deber moral o natural impuesto a los individuos, y hacerlo transformando el deber moral imperfecto en una responsabilidad estatutaria y legal» (*El pueblo vs. James W. Hill*, 163 Ill. 186 [1896]).

IV

EL RETORNO DE LA RIQUEZA HEREDADA: LA INFLACIÓN DE ACTIVOS Y LA FAMILIA ECONÓMICA

Se puede interferir más rápidamente en la herencia de bienes que en la herencia de talento. Pero desde un punto de vista ético, ¿existe alguna diferencia entre las dos? Aun así, mucha gente se resiente por la herencia de bienes y no por la herencia de talento.

Milton y Rose Friedman, *Libertad de elegir*.

EN 1979, la profesora de derecho conservadora Mary Ann Glendon publicaba un influyente artículo, ligeramente alarmista, en el que reflexionaba sobre la desaparición de la familia como institución económica. Sugería que los recientes cambios en el derecho de familia y de propiedad señalaban la «cada vez menor importancia (aunque la siga teniendo en cierto modo) de la familia en la determinación y la transmisión de la riqueza, el rango y el estatus en la sociedad», un cambio que veía reflejado en el cada vez menor impacto de la herencia a la hora de definir la movilidad social.¹ Para respaldar su tesis, Glendon recurría con frecuencia al trabajo del profesor de derecho de Yale, Charles A. Reich, quien había formulado el reconocido argumento de que la generosidad del gobierno (en forma de seguros sociales, asistencia social y servicios públicos) ha ocupado cada vez más el terreno de la propiedad privada en la asignación de ingresos y de activos.² Con la creciente intervención gubernamental tras la Guerra Civil en cada vez más ámbitos de la vida privada, tanto la ciudadanía como las corporaciones han dependido en mayor medida de las transferencias estatales de ingresos y de riqueza. Al traducir esta tesis al idioma del derecho de familia, Glendon lamentaba la inevitable extinción de la riqueza privada de la familia como factor determinante de la clase social. Dado que la Seguridad Social y otras formas de asistencia pública distribuían los ingresos de las personas más ricas a las más pobres, la transmisión de la riqueza

¹ Mary Ann Glendon, «The New Family and the New Property», *Tulane Law Review*, vol. 53, núm. 3, 1979, p. 705.

² Charles A. Reich, «The New Property», *The Yale Law Journal*, vol. 73, núm. 5, 1964, pp. 733-787.

a través de la herencia inevitablemente pierde su relevancia dominante a la hora de definir el destino social.

Estudiosos contemporáneos del derecho de propiedad corroboraron la intuición de Glendon, descubrieron que a finales de los años setenta los métodos tradicionales de transmisión de riqueza familiar mediante la ley de testamentos, fideicomisos y herencias se usaban con relativa frecuencia entre el percentil superior de poseedores de riqueza, pero que tenían cada vez menos importancia entre la clase media, cuya seguridad económica dependía cada vez más de ingresos no heredables como los salarios y los seguros sociales.³ Este argumento también parecía quedar contrastado por estudios empíricos que demostraban que las desigualdades de ingresos y riqueza se habían reducido significativamente durante las tres décadas consecutivas a la II Guerra Mundial, con una considerable intensificación de esta tendencia redistributiva en los años setenta.⁴

Sin embargo, para Glendon lo que aquí estaba en juego era mucho más que un cambio en las formas de distribución de riqueza e ingresos. Glendon entendía que el declive de las herencias estaba ligado de una forma íntima y preocupante a la rápida liberalización del derecho de familia que había tenido lugar a finales de los años sesenta; una auténtica revolución jurídica que en muy poco tiempo había asistido a la introducción del divorcio amistoso, a la erosión de las distinciones legales entre hijos legítimos e ilegítimos y al reconocimiento parcial de las relaciones no conyugales. Como muchas otras opiniones conservadoras expresadas en los años setenta, una década de convulsas reformas tanto en el derecho de familia como en la legislación sobre bienestar, Glendon creía que la enorme ampliación del

³ Robert Lynn, «Estate Planning: Goodbye to Wills, Trusts and Future Interests», *Ohio State Law General*, vol. 39, núm. 4, 1978, pp. 717-735. Lynn escribe para un público más especializado, pero establece la misma conexión entre la ley de transmisión del patrimonio privado y la familia que Glendon. Señala que el «derecho convencional sobre la devoción de la riqueza privada (el derecho de propiedad, los fideicomisos, los testamentos, los intereses futuros y la administración de las herencias) presupone la adquisición de la propiedad (mediante trabajo, donaciones, herencia, robo o azar) y su acumulación, conservación, tributación y transmisión de generación en generación, casi exclusivamente dentro de la familia» (p. 717). Continúa señalando que los efectos combinados de la inflación y el bienestar social han socavado la importancia de estas formas tradicionales de transmisión de la riqueza familiar, de manera que «segmentos significativos de la población que antes utilizaban la ley de testamentos, fideicomisos e intereses futuros, es poco probable que la utilicen de manera apreciable en el futuro» (p. 730). Al igual que Glendon, concluye que «la transmisión de la riqueza por parte de la clase media se ha visto profundamente afectada por la naturaleza cambiante de la familia, por el deseo de evitar la sucesión y por el reparto de las cargas de la dependencia y la discapacidad... [permitido] por la desagradable fiscalidad y las controvertidas transferencias de ingresos» (p. 734).

⁴ Martin Feldstein, «Social Security and the Distribution of Wealth», *Journal of the American Statistical Association*, vol. 71, núm. 356, 1976, pp. 800-807. Es interesante, como mínimo, que Martin Feldstein haya elaborado este artículo, dado su posterior papel en la promoción de la privatización de la Seguridad Social.

bienestar social, que había tenido lugar tras el New Deal, era responsable de socavar el papel económico y moral de la familia privada. En esta y en otras publicaciones, insistía en que la cada vez menor importancia de la riqueza heredada daba muestra de la desintegración de la familia como tal.⁵

A primera vista, la afirmación de Glendon de que el bienestar social había contribuido al declive de la familia parece contradictoria. El New Deal estadounidense era inseparable de la normatividad sexual y racial del salario familiar. Sus distintos programas actuariales identificaban al trabajador industrial varón blanco como asalariado estándar y demográficamente normativo en torno al cual se calibraba estadísticamente toda la redistribución de ingresos. En palabras de Abraham Epstein, uno de los primeros arquitectos progresistas del New Deal, «el estándar estadounidense asume una familia normal de hombre, mujer y dos o tres hijos, en la que el padre es plenamente capaz de mantenerlos con sus ingresos. Este estándar no presupone ningún ingreso adicional por parte de la mujer o de los hijos pequeños [...] La mujer es cuidadora del hogar más que asalariada [...] Las necesidades de esta familia deben considerarse prioritarias».⁶ El efecto práctico del sistema de salario familiar del New Deal era la casi plena exclusión de mujeres y hombres afroamericanos de los programas de bienestar social; la inclusión relativa de las mujeres blancas ya fuera como dependientes de un hombre sustentador del hogar o como beneficiarias de la estigmatizada asistencia pública; y una rigurosa defensa de la heteronormatividad como requisito para formar parte de cualquiera de los programas estatales de asistencia social.

Sin embargo es cierto que a finales de los años sesenta, la relación entre el salario social y la normatividad familiar se estaba dislocando debido al perfil cambiante de la población activa y al auge de nuevos movimientos políticos que combinaban el activismo feminista y la lucha por los derechos civiles y el bienestar. Por ejemplo, en 1960 la Seguridad Social se había ampliado para cubrir a la casi totalidad de la población activa y ahora incluía a granjeros, personal doméstico, enfermeras y profesorado; ocupaciones en la agricultura y en los servicios cuya exclusión original de estos programas había penalizado duramente a las mujeres y a la población afroamericana.⁷ En 1966, Johnson tuvo éxito al aumentar significativamente los beneficios como parte de su esfuerzo por librar la

⁵ Más tarde se referiría a este proceso como la «desjuridificación» de la relación entre la familia y el Estado. Mary Ann Glendon, *The Transformation of Family Law: State, Law, and Family in the United States and Western Europe*, Chicago, University of Chicago Press, 1989, p. 293.

⁶ Abraham Epstein, *Insecurity: A Challenge to America — A Study of Social Insurance in the United States and Abroad*, Nueva York, H. Smith y R. Haas, 1933, p. 101.

⁷ Jill Quadagno, *The Color of Welfare: How Racism Undermined the War on Poverty*, Oxford, Oxford University Press, 1994, p. 158.

Guerra contra la Pobreza; y en el periodo de elevada inflación de principios de los años setenta, el presidente Nixon introdujo amplias reformas progresistas a la Seguridad Social al indexar las prestaciones a los precios de consumo.⁸ En concreto fue esta última reforma la que sostuvo a la clase trabajadora beneficiaria de asistencia social, en un periodo de creciente inflación en los precios. Así en los años setenta, el principal programa de seguro social del New Deal, la Seguridad Social, se había ampliado en términos cuantitativos para incluir tanto a las mujeres como a la población afroamericana, sujetos no normativos del fordismo, y para mantener el ritmo de aumento salarial.

Sin embargo, las reformas de este periodo no fueron solo de naturaleza cuantitativa. Como vimos en el capítulo 3, una serie de desafíos legales planteados en esta época erosionaron significativamente el poder de las agencias estatales de bienestar a la hora de vincular las prestaciones sociales a determinados tipos de familia y de supervisar la moralidad de las personas beneficiarias de estas ayudas. En los programas de asistencia pública desde el AFDC a la vivienda pública, la Corte Suprema revocó una vez tras otra la panoplia de normas escritas y no escritas que habían servido para exigir la normatividad sexual a lo largo de la era fordista. Ya no se podía discriminar a las mujeres divorciadas o solteras dejándolas fuera de las prestaciones de asistencia social. Las mujeres no casadas beneficiarias ya no tenían que abstenerse de mantener relaciones sexuales para poder recibir ayudas públicas. Ya no se podía expulsar a quienes residían en viviendas públicas por acusaciones de conducta inmoral. Y durante un periodo muy breve, las listas de vivienda pública estuvieron abiertas a parejas convivientes tanto heterosexuales como homosexuales.⁹

A la luz de reformas tan radicales del salario familiar, Glendon podía tener razón al señalar la conexión entre la tardía ampliación del bienestar fordista y el declive de las normas morales tradicionales. Cuando hablaba de la «cada vez menor importancia (aunque la siga teniendo en cierto modo) de la familia» parece que lo que tenía en mente no era la familia fordista clásica, cuya normatividad sexual estaba inscrita en la propia forma del salario masculino de sustento familiar, sino en el desafío a la

⁸ *Ibidem*, p. 159.

⁹ Al igual que los programas de vivienda en propiedad del gobierno federal, analizados más adelante, la política de vivienda pública privilegió a las parejas casadas con hijos y colocó a las personas solteras al final de las listas de espera. *Public Health and Welfare Act* § 1437b [3]. En 1977, el HUD decidió abrir las listas de viviendas públicas a las parejas no casadas que vivieran juntas y a las parejas homosexuales, siempre que estas últimas pudieran demostrar una «relación familiar estable». Esta revisión de la política federal de vivienda parece haber sido introducida por iniciativa personal de una administradora del programa de vivienda del HUD, Priscilla Banks. Véase «H.U.D. Will Accept Unmarried Couples for Public Housing», *New York Times*, 29 de mayo de 1977, p. 22. Sin embargo, la revisión duró muy poco y el Congreso la revocó apenas tres semanas después.

normatividad que representaban los movimientos sociales de finales del fordismo. En un contexto en el que las configuraciones tradicionales de la familia se veían cuestionadas y en el que la redistribución de los ingresos socavaba sin tregua la importancia de la riqueza privada, podría parecer plausible concluir que la familia como institución moral y medio para la transmisión de riqueza sufría un declive terminal. Publicado en 1979, el tono del argumento de Glendon es el de una predicción certera, aunque inquietante. Escribe como si estuviera identificando tendencias incipientes destinadas a revelarse con mayor plenitud a largo plazo.

Sin embargo, más de tres décadas después, el escenario que describía Glendon resulta casi irreconocible. Thomas Piketty es el teórico más prominente de entre quienes han observado que la riqueza privada y heredada ha resurgido como factor decisivo en la definición de la clase social, después de un periodo de relativo, pero importante declive, en la época de posguerra.¹⁰ Paradójicamente, quizás, en la era neoliberal ha surgido la presunción de la meritocracia, en la que la economía popular celebra las virtudes de la asunción de riesgos individuales, la acumulación de fortunas con deudas apalancadas y rendimientos extravagantes, derivados de la inversión en mano de obra cualificada o en capital humano. No obstante, los datos empíricos sobre la distribución de la riqueza sugieren que la herencia es casi tan decisiva a principios del siglo XXI como lo era en el siglo XIX.¹¹ Este fenómeno también implica inevitablemente la reafirmación de la familia privada como institución económica fundamental y portal para la legitimidad social. El hecho de que el matrimonio y la formación de la familia se hayan convertido en una preocupación principal en las políticas *queer*; la afirmación, axiomática entre la teoría política estadounidense, de que el matrimonio es ahora un marcador de clase y un medio para la movilidad social;¹² el hecho de que la recreación de la unidad de la familia se haya convertido en una ambición clave de las políticas de bienestar son tendencias que señalan el resurgir de la familia como vector fundamental de la distribución de la riqueza y del estatus.

¹⁰ Thomas Piketty, *Capital in the Twenty-First Century*, Cambridge (MA), Harvard Belknap, 2014 [ed. cast.: *El capital en el siglo XXI*, Ciudad de México, FCE, 2015].

¹¹ *Ibidem*, p. 22. Piketty propone una «curva en forma de U» que señala cómo la desigualdad de ingresos y de riqueza disminuye en la época de la posguerra hasta finales de los años setenta, cuando aumenta precipitadamente. Observa que «la desigualdad no se erradicó en las tres décadas posteriores a la II Guerra Mundial, sino que se contempló principalmente desde el ángulo optimista de las desigualdades salariales»; en otras palabras, la importancia de la desigualdad de la riqueza y, por tanto, de la herencia, se atenuó por el aumento de los ingresos (p. 409). Continúa señalando que los nacidos en la década de 1970 y en adelante han tenido una experiencia notablemente diferente del aumento de la riqueza y la desigualdad de ingresos y «ya han experimentado [...] el importante papel que la herencia volverá a desempeñar en sus vidas» (p. 381).

¹² June Carbone y Naomi Kahn, *Marriage Markets: How Inequality Is Remaking the American Family*, Oxford, Oxford University Press, 2014.

¿Cómo y por qué la riqueza familiar logró (o reclamó) una importancia tan sorprendente en un periodo tan breve? ¿Y cuál es la relación entre el neoliberalismo y la institución legal de la herencia? La explicación que ofrezco en este capítulo difiere de la de Piketty en la medida en que esta atribuye la reafirmación de la riqueza heredada a los procesos políticos (que podrían haberse desarrollado de otra manera) y no a leyes bioeconómicas que, a largo plazo, solo pueden interrumpirse o prevenirse.¹³ Cuando Glendon publicó su artículo, en 1979, Estados Unidos se encontraba en la cúspide de un cambio de régimen en cuestiones monetarias y fiscales que redefiniría profundamente la política económica de la familia. La llamada contrarrevolución monetarista orquestada por el recién nombrado presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, frenó las políticas fiscales expansionistas del Estado de posguerra keynesiano e hizo del objetivo de la inflación el cometido principal de la política del banco central. Durante los años siguientes, las nuevas políticas monetarias y fiscales que adoptaron el gobierno y la Reserva Federal servirían para restaurar el valor de los activos financieros a costa de los salarios y de la asistencia social, convirtiendo la revalorización

¹³ Resulta impresionante la destreza de Piketty para las trayectorias empíricas de la desigualdad económica. Su capacidad para analizar lo que impulsa estas trayectorias es mucho menos contundente. Cuando se le pide que explique *por qué* la tasa de rendimiento del capital ha superado tan precipitadamente a la del trabajo, Piketty se basa en leyes bioeconómicas que equiparan el crecimiento económico y el crecimiento demográfico y atribuyen el aumento de la desigualdad a una desaceleración de estas tasas de crecimiento. El envejecimiento de la población significa un bajo crecimiento; las altas tasas de natalidad suponen un elevado crecimiento económico y una reducción de la desigualdad. Como señalan Williams y Engelen, Piketty está mucho más cerca de la economía política clásica de Malthus, con sus leyes bioeconómicas de crecimiento de la población, que de Marx, cuya teoría de la población excedente refuta totalmente la lectura demográfica del capital. Véase Karel Williams y Ewald Engelen, «Just the Facts: On the Success of Piketty's *Capital*», *Environment and Planning A*, vol. 46, núm. 8, 2014, pp. 1771-1777. Al aceptar la existencia de leyes económicas, Piketty solo puede dar cuenta del cambio recurriendo a un concepto esencialmente accidental y anecdótico de la historia. Así, atribuye las tendencias redistributivas de la posguerra al «accidente» de la guerra y a sus efectos demográficos, olvidando por completo el impacto del proceso político (el New Deal) o de la lucha política (el movimiento sindical) sobre la productividad y los salarios. Cuando reconoce la variación histórica de la participación del trabajo en la renta nacional, la atribuye a contingencias externas como la guerra o la recesión que aparecen como otras tantas catástrofes naturales o «shocks» que interrumpen el progreso implacable de las leyes económicas. El movimiento obrero, el feminismo, las luchas de las minorías y las luchas anticoloniales que tan profundamente desestabilizaron el modelo fordista de crecimiento en los años setenta, se desvanecen en un segundo plano, más distante. Con mayor precisión, Piketty reconoce el papel de la reforma fiscal regresiva al exacerbar la creciente desigualdad de las últimas cuatro décadas. Por lo tanto, concede un papel central a la reforma fiscal progresiva, por encima del crecimiento de la población, en cualquier esfuerzo por invertir estas tendencias. Véase, a este respecto, los textos periodísticos recogidos en Thomas Piketty, *Why Save the Bankers? And Other Essays on Our Economic and Political Crisis*, trad. por Seth Ackerman, Boston, Houghton Mifflin Harcourt, 2015. Sin embargo, la historia de la fiscalidad por sí sola no puede explicar la constante revalorización de los activos financieros en el periodo posterior a los años ochenta. También debemos comprender el papel de la política de los bancos centrales al animar el aumento de los precios de los activos y de los rendimientos del capital durante este periodo.

de los activos en una característica previsible de la vida económica neoliberal. De forma más o menos abierta, este cambio de paradigma se vio motivado por la idea de que los intereses de la clase inversora, junto con las grandes fortunas familiares que habían amasado, se veían amenazados por el creciente presupuesto estatal para bienestar. Lo que aquí quiero sugerir es que la cuestión de la riqueza familiar, y su declive, fue central en la batalla política de la época, aunque a veces se exprese de la más ambigua de las maneras.

Ahora es habitual caracterizar al sujeto neoliberal como aquel obligado a representar las cualidades del inversor. Independientemente de que uno posea o no activos financieros, se argumenta que el neoliberalismo inscribe al sujeto en una cultura afectiva de inversión que define el «yo» como un valor o como «capital humano». En palabras de Gerald Davis, «los Estados Unidos del siglo XXI definen la inversión... [como] la metáfora dominante para comprender el lugar del individuo en la sociedad y como guía para abrirse camino en la nueva economía. George Bush se refirió a este sistema incipiente como una "sociedad de propietarios", pero sus integrantes eran antes bien inversores y especuladores que propietarios».¹⁴ A medida que el rendimiento financiero lograba tener prioridad frente a la inversión industrial a largo plazo, el neoliberalismo definía la recompensa física en términos de revalorización de los activos más que de los beneficios corporativos o de los salarios. Como plantea Michel Feher: «Nuestro propósito fundamental no es tanto sacar provecho de nuestro potencial acumulado, como valorarnos o revalorizarnos constantemente, o al menos evitar nuestra propia devaluación».¹⁵

Sin querer contradecir ni dejar de lado estos argumentos, mi propósito es destacar el papel igualmente importante de la herencia en la canalización de las políticas de inversión de la era neoliberal. Las intervenciones monetarias y fiscales llevadas a cabo por el Estado neoliberal de Ronald Reagan en adelante han restaurado el valor de los activos financieros rápidamente devaluados en los años setenta, pero al hacerlo también han restaurado el papel económico de la familia en la transmisión de riqueza. Como nos recuerda el sociólogo Yuval Elmelech, la distribución de activos financieros está mucho más relacionada con el contexto familiar que con los salarios: los activos son heredables de un modo que el estatus profesional y los salarios no lo son.¹⁶ Cuando el precio de los activos se revaloriza frente a unos

¹⁴ Gerald F. Davis, *Managed by the Markets: How Finance Re-shaped America*, Oxford, Oxford University Press, 2009, p. 193.

¹⁵ Michel Feher, «Self-appreciation; or, The Aspirations of Human Capital», *Public Culture*, vol. 21, núm. 1, 2009, p. 27.

¹⁶ Con respecto de la correlación entre la propiedad de activos financieros y las transferencias de riqueza familiar, Elmelech señala: «Las transferencias familiares en forma de regalos y herencias están fuerte y positivamente asociadas a la inversión en activos finan-

salarios y un bienestar estancados, resulta casi inevitable que la riqueza familiar asuma un papel fundamental a la hora de definir y restringir la movilidad social. Si existe una cultura de revalorización de activos, como defiende el economista político Jan Topotowski, será aquella que esté necesariamente ligada a la institución legal de la herencia.¹⁷

Clase, inflación y la erosión de la riqueza heredada

Mary Ann Glendon entendió que el declive de la familia estaba relacionado de forma compleja con la redistribución de la riqueza y de los ingresos que había permitido desarrollar el Estado de bienestar.¹⁸ Esta tendencia redistributiva estaba en marcha desde el New Deal y se había acelerado

cieros [...] la recepción de herencias y regalos mejora los activos financieros». Véase Yuval Elmelech, *Transmitting Inequality: Wealth and the American Family*, Nueva York, Rowman & Littlefield, 2008, p. 61. Elmelech continúa argumentando que la revalorización de los activos financieros sobre los salarios significa que la economía debe integrar una comprensión de la familia en su análisis de la clase: «Tanto el matrimonio como las transferencias intergeneracionales deben estudiarse como parte integral de la formación de la clase. Al contrario que las clases basadas en la producción, la unidad de análisis en la tipología basada en la clase incluye los hogares y a los individuos como miembros de los hogares» (p. 63). Por supuesto, la perspectiva de Elmelech no implica que los salarios y el estatus profesional de los padres no tenga un impacto en la reproducción de la clase, simplemente que esos activos son directamente heredables de una forma que el salario y la educación no lo son.

¹⁷ Jan Toporowski, *Why the World Economy Needs a Financial Crash and Other Critical Essays on Finance and Financial Economics*, Londres, Anthem Press, 2010, pp. 89-96. Angela Mitropoulos llega a argumentar que la heredabilidad de los activos está implícita en la teoría original del capital humano. Véase Angela Mitropoulos, *Contract and Contagion: From Biopolitics to Oikonomia*, Nueva York, Minor Compositions, 2012, p. 200.

¹⁸ Este capítulo distingue entre «riqueza» e «ingresos» de acuerdo con el uso comúnmente aceptado en la literatura económica. Edward N. Wolff, por ejemplo, explica que «la riqueza se refiere al valor neto de los activos (por ejemplo, propiedad de acciones, bonos, bienes inmobiliarios, etc.) menos la deuda debida en ese mismo momento, mientras que los ingresos hacen referencia al flujo de dólares (por ejemplo, salarios, intereses recibidos, etc.) durante un periodo determinado». Edward N. Wolff, «The Rich Get Increasingly Richer», Economic Policy Institute Briefing Paper, Washington DC, Economic Policy Institute, 1993, p. 2. El uso del término «ingresos» se complica por el hecho de que puede referirse a flujos de dinero tanto de salarios como de activos financieros (por ejemplo, dividendos, intereses y rentas). Las características de distribución y de clase de estos flujos de ingresos son muy distintas: por lo tanto distinguo cuidadosamente entre los dos en el texto. Los activos financieros también pueden generar la revalorización del precio o «ganancias de capital», que no se clasifican estrictamente como una forma de ingreso. Yuval Elmelech plantea una útil distinción entre activos «funcionales» y «financieros». Un activo «funcional» es aquel que genera ingresos no relevantes y cuyo valor no se revaloriza. Un activo «financiero» es aquel que genera ingresos en forma de ganancias de renta o de capital en forma de revalorización de precios. Una misma forma de propiedad, por ejemplo, una casa, puede clasificarse a veces como activo funcional o como financiero. Véase Elmelech, *Transmitting Inequality...*, p. 60. Thomas Piketty combina los dos tipos de «activos» bajo su definición general de riqueza. Véase Piketty, *Capital in the Twenty-First Century...*, p. 48. En el capítulo uno distinguo entre los dos tipos de activos; a no ser que lo especifique de otro modo, utilizo el término general de «activos» para referirme a los «activos financieros».

desde la II Guerra Mundial, en la medida en que los crecientes salarios, las prestaciones de seguro social y la inversión pública en educación habían erosionado progresivamente las desigualdades de ingresos entre ricos y pobres. Sin embargo existen motivos suficientes para explicar por qué perfiles conservadores como el de Glendon se obsesionaron con los peligros morales de la redistribución de la riqueza a finales de la década de 1970. La creciente inflación de esta década, denunciada como catástrofe universal para todas las clases sociales, había ampliado de forma significativa, aunque no espectacular, las tendencias redistributivas de la era de posguerra, reduciendo las desigualdades de riqueza y de salario como nunca antes en la historia estadounidense.

En un artículo que explora los efectos de la inflación en la redistribución, el economista de Brookings Institution, Joseph Minarik, propone que dado que, en su mayor parte, los salarios y la asistencia social seguían el ritmo del índice de precios de consumo, la población pobre y la clase media no perdían mucho con la inflación, en algunos casos incluso obtenían ganancias considerables.¹⁹ Quienes más se beneficiaban de la inflación eran las personas propietarias de hogares que habían pedido préstamos para adquirir sus viviendas. Con las cuotas hipotecarias y los tipos de interés fijos, la población propietaria endeudada veía cómo su deuda hipotecaria se depreciaba a medida que los precios, también los de la vivienda, ascendían; lo que significaba que la carga de la deuda parecía desaparecer con el tiempo.²⁰ Incluso quienes alquilaban no se sentían especialmente abrumados por la inflación ya que los salarios solían aumentar a medida que el alquiler también lo hacía. Sin embargo, Minarik también refuta la presunción generalizada de que los hogares con bajos ingresos, que obtenían la mayor parte de sus fondos de transferencias gubernamentales, fueran los más golpeados por la inflación. Observó que el efecto del crecimiento de los precios de consumo sobre las clases beneficiarias de asistencia social se compensaba por el hecho de que la mayoría de programas de bienestar se ajustaban a la inflación.²¹ Después de las reformas de Nixon, la Seguridad Social se indexó a la inflación anual, los programas de prestaciones en especie, como los cupones de alimentos se recalculaban cada seis meses y los que cubrían el precio de servicios existentes como la vivienda pública, Medicaid o Medicare estaban implícitamente indexados a la inflación.

En cambio, la inflación erosionó gravemente la riqueza del decil y el centil superior de los hogares, aquellos en los que la riqueza estaba invertida

¹⁹ Joseph J. Minarik, «The Distributional Effects of Inflation and Their Implications», en *Stagflation: The Causes, Effects and Solutions*, Washington DC, Joint Economic Committee, U.S. Congress, 1980, pp. 225-277.

²⁰ *Ibidem*, p. 228.

²¹ *Ibidem*, p. 226.

en activos financieros como acciones, bonos o propiedades inmobiliarias y cuyos ingresos derivaban fundamentalmente de intereses, dividendos o rentas. A lo largo de los años setenta, quienes poseían riquezas tuvieron dificultades para encontrar formas seguras de inversión que protegieran sus bienes de la devaluación a largo plazo. La inflación de los precios de consumo y del salario se tradujo en la devaluación de los activos financieros y por lo tanto supuso un importante desafío para las formas de acumulación de riqueza que la población más rica siempre había preferido. El valor real de las acciones corporativas se desplomó sin tregua desde los años sesenta, mientras que los titulares de bonos obtenían tipos de interés reales bajos, cuando no negativos.²² En tanto la inflación seguía subiendo, una nube de incertidumbre amenazó el futuro de las inversiones a largo plazo como los Bonos del Tesoro, al tiempo que quienes trasladaron sus inversiones a las Letras del Tesoro de más corto plazo, con la esperanza de encontrar una alternativa más segura, descubrieron que los beneficios resultaban en ocasiones negativos.

A finales de los años setenta, los titulares de bonos se rebelaron, exigiendo una prima de inflación para los tipos de interés que les protegiera de la devaluación del principal.²³ La opinión de los economistas del libre mercado insinuaba que la inflación era una forma de fraude estatal: un impuesto encubierto diseñado para extraer la riqueza de quienes invertían, a fin de transferirla a las clases más bajas. George Gilder, ideólogo de la era Reagan, apuntó los descubrimientos de Minarik y describió los años setenta como la «Gran Depresión» de las clases altas, denunció también a la Reserva Federal de Arthur Burn por llevar a cabo «una guerra contra los ricos».²⁴ La redistribución de la riqueza era algo bastante real: el economista Edward Wolff descubrió que la concentración de riqueza cayó en picado entre 1972 y 1976, debido en primer lugar a la devaluación de acciones y bonos propiedad de la población más rica.²⁵ Concluyó que la inflación había actuado como un «impuesto redistributivo» que intensificaba ampliamente la tendencia progresista de la era de posguerra.²⁶

No obstante, si la inflación se denunciaba como una extorsión a la riqueza privada, también se percibía de forma generalizada como un

²² *Ibidem*, p. 228.

²³ William Greider, *Secrets of the Temple: How the Federal Reserve Runs the Country*, Nueva York, Simon & Schuster, 1989, p. 40.

²⁴ George Gilder, *Wealth and Poverty*, Nueva York, Basic Books, 1981, pp. 19, 101 [ed. cast. *Riqueza y pobreza*, trad. por César Armando Gómez, Madrid, IEE, Instituto de Estudios Económicos, 1984].

²⁵ Wolff, «The Rich Get Increasingly Richer...», p. 9.

²⁶ Edward N. Wolff, «The Distributional Effects of the 1969-75 Inflation on the Holdings of Household Wealth in the United States», *Review of Income and Wealth*, vol. 25, núm. 2, 1979, p. 207.

ataque a las formas de transmisión de riqueza típicamente familiares que durante mucho tiempo habían sostenido la reproducción de la clase. Junto con la retórica siempre racializada de la crisis de la familia de las clases bajas surgida en los años setenta, se ofreció una imagen paralela del auge y caída de la gran familia patrimonial estadounidense. «¡Cuidado, fideicomisos!» entonaba alguna voz de la academia jurídica, que observaba además que si «los tiempos han sido duros para los inversores en general, han sido aún peores para los beneficiarios de fideicomisos» y para otros receptores de riqueza heredada.²⁷ Otra personalidad experta en derecho inmobiliario señalaba la creciente desgana de la población rica a la hora de legar su riqueza a las futuras generaciones en un contexto de devaluación general del precio de los activos: «Incluso un adquirente habilidoso o un acumulador de riqueza experimentado podía considerar que la propensión a conservar riqueza para su propia jubilación o para transmitirla a dependientes y sucesores se ve afectada por la incapacidad de sus inversiones de mantenerse al día con la inflación».²⁸ Sin embargo, es Gilder quien ofrece el retrato más extravagante del declive de la familia de clase alta. Su super-ventas sobre la era Reagan, *Riqueza y pobreza*, realizaba un *tour de force* retórico vinculando la corrupción de las familias estadounidenses adineradas con la contracultura amoral, y esta a su vez con la crisis percibida de los valores familiares entre la población pobre receptora de asistencia social:

El gran secreto de la burguesía estadounidense es la movilidad descendente [...] Las personas ricas que heredaban e intentaban administrar su riqueza durante las cinco últimas décadas solían ver cómo la mayor parte de ella terminaba por marchitarse. Mucha gente que vivía del capital veía como este disminuía rápidamente y que los ingresos que este generaba se reducían con la inflación y los impuestos. Muchos vieron a sus hijos acceder a profesiones y vivir moderadamente bien. Pero luego tuvieron que ver cómo a sus nietos les crecía el pelo hasta los hombros, cómo abandonaban las costosas escuelas financiadas por la riqueza familiar que ahora desaparecía, y cómo hacían sus pinitos en carreras de arte y carpintería, intercaladas con cheques de desempleo, antes de que encontraran una pequeña ranura en la burocracia gubernamental desde la que instruir a la población pobre sobre las formas de movilidad ascendente.²⁹

A comienzos de los años setenta, los temores de que las familias ricas estadounidenses pudieran verse amenazadas por la inflación se acentuaron por el esfuerzo simultáneo de quienes defendían una reforma fiscal progresiva

²⁷ Kenneth L. Hirsch, «Inflation and the Law of Trusts», *Real Property, Probate and Trust Journal*, vol. 18, núm. 4, 1983, p. 601.

²⁸ Lynn, «Estate Planning...», p. 729.

²⁹ Gilder, *Wealth and Poverty...*, p. 100.

para aumentar el gravamen en las grandes fortunas. Durante la campaña presidencial de 1972, el demócrata de izquierdas George McGovern propuso aumentar el impuesto de transmisión de bienes al 100 % para donaciones o herencias por encima del medio millón de dólares. En respuesta a esta amenaza específica y creíble, la economía neoliberal se lanzó por primera vez al debate de los impuestos de transmisión de bienes, desarrollando un elaborado relato de las relaciones mutuamente beneficiosas entre la inversión privada y las transmisiones familiares de riqueza.³⁰ Los neoliberales de la escuela de Virginia Gordon Tullock y Richard Wagner defendían que la posibilidad de transmitir la propia riqueza era un estímulo necesario para la inversión y por lo tanto advirtieron de los letales efectos del impuesto de transmisión de bienes para la empresa privada.³¹ Y en una extraña inversión del argumento de la meritocracia, Milton y Rose Friedman clasificaron la riqueza heredada como un «accidente del nacimiento», comparable al talento musical, que no debería gravarse en modo alguno.³² En otros lugares, como hemos visto, Milton Friedman había descrito el motor familiar en la transmisión de riqueza como una fuerza misteriosa que subyace y, en última instancia, promueve la libertad del mercado, un motor que consideraba «irracional» y «curioso», pero al que sin embargo se aferraba.³³

Estos argumentos son notables no solo porque priorizaban el papel económico de la familia en la economía del libre mercado, haciendo explícito lo que la mayoría no había dicho o mantenía bajo cuerda en sus marcos teóricos, sino también porque representaban una ruptura radical con los valores meritocráticos de los inicios del neoliberalismo de la escuela de Chicago. En definitiva, en los años cuarenta, el profesor de Milton Friedman, Henry Simons, defendía opiniones sobre la riqueza heredada que eran casi una prolongación de las de McGovern, llegando incluso a argumentar que la herencia y las donaciones *inter vivos* deberían gravarse progresivamente de la misma manera que los ingresos, para garantizar un sistema de libre mercado plenamente meritocrático.³⁴ En los años siguien-

³⁰ Para un debate detallado sobre George McGovern y la campaña neoliberal contra el impuesto de transmisión de bienes, véase Jens Beckert, *Inherited Wealth*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2008, pp. 193-200.

³¹ Gordon Tullock, «Inheritance Justified», *Journal of Law and Economics* 14, núm. 2, 1971, pp. 465-474; Richard E. Wagner, *Inheritance and the State*, Washington DC, American Enterprise Institute, 1977.

³² Milton Friedman y Rose Friedman, *Free to Choose: A Personal Statement*, Nueva York, Harcourt Brace Jovanovich, 1980, p. 136.

³³ Milton Friedman, *Milton Friedman Speaks: Lecture 1 — What is America?*, Nueva York, Harcourt Brace Jovanovich, 1978. Vídeo. 1:07:14-1:09:09. Disponible on line en http://www.freetochoose.tv/program.php?id=mfs_1&series=mfs (consultado por última vez el 1 de diciembre de 2015).

³⁴ Henry C. Simons, *Economic Policy for a Free Society*, Chicago, University of Chicago Press, 1948, pp. 165-248.

tes, el neoliberalismo de la escuela de Chicago radicalizó su crítica al Estado de bienestar del New Deal, describiendo a las personas beneficiarias de asistencia social como las auténticas «rentistas» y parásitos del sistema de libre mercado; llegados los años setenta se habían alineado definitivamente con los intereses de accionistas y titulares de bonos perseguidos por la inflación. La riqueza heredada se redefinía ahora como un estímulo necesario para las energías inversoras del libre mercado.

Aun así, si la revolución Reagan se hubiera presentado solo como un movimiento para proteger las grandes fortunas, sin duda no habría triunfado. Como apunta Kevin Phillips, la defensa a ultranza de los intereses de la clase alta ociosa pocas veces ha logrado movilizar las pasiones del populismo estadounidense: así pues, los ideólogos de la era Reagan, como George Gilder, «no pregonaban la riqueza heredada», sino la innovación, el emprendimiento y la asunción de riesgos, incluso mientras libraban una guerra encubierta contra el impuesto de transmisión de bienes y otros gravámenes de las fortunas privadas.³⁵ Esta mezcla de meritocracia retórica y patrimonialismo político también alimentó el populismo conservador de los años setenta y cambió radicalmente las alianzas de clase de los últimos años de la era fordista.

La revuelta fiscal de los años setenta tenía múltiples orígenes, surgida en sus primeros años de las preocupaciones por las políticas estatales y federales de redistribución de impuestos, tanto de la derecha como de la izquierda.³⁶ Sin embargo, cuando maduró y a medida que los intereses empresariales se sumaron al activismo local, el movimiento adquirió un tono nativista característico con un importante componente de raza. En el momento de su primer gran éxito en las urnas, la aprobación de la Proposición 13 de California en 1978, el movimiento se vinculaba casi exclusivamente con los propietarios blancos de las áreas suburbanas que se rebelaban contra las transferencias de ingresos a la población pobre. Lo que en último término permitió la revolución de Reagan fue este levantamiento popular contra el Estado de bienestar redistributivo, más que las maquinaciones de la clase inversora rica.

³⁵ Kevin Phillips, *The Politics of Rich and Poor*, Nueva York, HarperCollins, 1990, p. 67. Las distorsiones del argumento de Gilder en *Wealth and Poverty* resultan fascinantes. Aunque pretende celebrar la creatividad de los empresarios que asumen riesgos, Gilder insiste en que «la riqueza más catalizadora en Estados Unidos es la de los ingresos no procedentes del trabajo» y critica la injusticia de los impuestos de sucesiones (p. 60).

³⁶ Para una historia esclarecedora sobre estos múltiples orígenes, véase William Martin, *The Permanent Tax Revolt: How the Property Tax Transformed American Politics*, Stanford (CA), Stanford University Press, 2008. Inicialmente la «revuelta fiscal» fue abrazada por el activismo del movimiento por los derechos del bienestar, que aspiraba a deshacer los injustos beneficios fiscales que privilegiaban a la clase media blanca y a quienes dirigían negocios. Una muestra del sentido de las posibilidades políticas que reinaban en los años setenta es que el economista político marxista James O'Connor confiaba en que la «revuelta fiscal» vendría de la izquierda. Véase James O'Connor, *The Fiscal Crisis of the State*, Nueva York, St. Martin's Press, 1973 [ed. cast.: *La crisis fiscal del Estado*, Barcelona, Edicions 62, 2002].

El vigor de la revuelta fiscal fue asombroso, sobre todo porque su principal grupo demográfico, la población de clase media que poseía una vivienda, había salido ganando con la inflación. Sin embargo, aunque hubieran visto cómo se duplicaba o se triplicaba el valor de sus viviendas en el lapso de unos pocos años, muchos de estos propietarios-ocupantes consideraban que sus recientes ganancias eran precarias. La mayoría se habían visto empujados a tramos impositivos más altos como resultado de la inflación y de la reforma fiscal progresiva y ahora lamentaban que los crecientes impuestos sobre sus propiedades se desperdiciaran entre la población no trabajadora y no blanca. Sus temores iban desde los impuestos locales y estatales sobre la propiedad hasta el impuesto de transmisión de bienes, que denunciaban como un subterfugio que servía para socavar la familia en sí misma. Los programas de Johnson de la Gran Sociedad habían tenido éxito mientras las clases trabajadoras beneficiarias de asistencia social habían sentido que sus intereses estaban alineados de algún modo; a medida que crecía el desempleo y los programas de discriminación positiva seguían desplegándose, esta frágil coalición se quebró y quienes poseían viviendas empezaron a cambiar sus lealtades hacia las clases poseedoras de riqueza.³⁷ Es cierto que estas últimas tenían razones objetivas para temer la inflación. Sin embargo fue la clase media propietaria de vivienda, no la clase inversora ni quienes poseían bonos, la que tomó la iniciativa de defender la riqueza patrimonial de la misión redistributiva del Estado de bienestar.

Así, si el neoliberalismo y la defensa de la oferta solo podía expresar la defensa de la riqueza heredada de las formas más sutiles y retorcidas, la clase media propietaria de vivienda no tenía esas reservas y lanzó un ataque abierto al impuesto de transmisión de bienes; lo que supuso una victoria a largo plazo para la población superrica. Como afirmó uno de los portavoces de la revuelta fiscal: «El impuesto de transmisión de bienes se ha convertido en algo cada vez más traumático para la familia modesta [...] no queremos que un impuesto sobre el patrimonio sea un impuesto punitivo que destruya la capacidad de una familia media de conservar una pequeña granja o un negocio familiar. No queremos un impuesto de transmisión de bienes que destruya la continuidad de la unidad económica que poseen las personas de medios más modestos, a las que les gustaría trasladar esa herencia a su cónyuge o a su descendencia».³⁸ En un momento en el que

³⁷ John Ehrenberg y Mike Davis resultan reveladores al respecto de las políticas raciales de la revuelta fiscal. Véase John Ehrenberg, *Servants of Wealth: The Right's Assault on Economic Justice*, Lanham (MD), Rowman & Littlefield, 2006, pp. 8-9, y Mike Davis, *City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles*, Nueva York, Verso, 1990, pp. 180-186 [ed. cast. *Ciudad de cuarzo. Arqueología del futuro de Los Ángeles*, trad. por Rafael Reig, Madrid, Lengua de Trapo, 2003].

³⁸ Byron L. Dorgan, «The American Estate Tax: A Death Penalty», en Dean C. Tippy y Lee Webb, *State and Local Tax Revolt: New Directions for the 80's*, Washington DC, Transaction Publishers, 1980, p. 216.

el bienestar social redistributivo, la creciente inversión pública y las políticas de impuestos progresivos atenuaban la fuerza de la riqueza familiar privada, los contribuyentes blancos retrocedían con miedo, decantándose por la defensa de una tradición mucho más antigua de riqueza heredada invertida en el hogar.

Así, en los últimos años de la década de 1970 la clase media blanca efectivamente se redefinió a sí misma a imagen y semejanza de la clase inversora y patrimonial y quiso quedar exenta de formas de redistribución social que ahora se denunciaban abiertamente como subsidios de la disfunción familiar de la población pobre. Al articular una defensa de la familia privada como institución económica contra las funciones redistributivas del Estado de bienestar, el populismo conservador de los años setenta sentó las bases de las políticas fiscales y monetarias de la era Reagan y más allá. Como deja claro la esencia de la revuelta del contribuyente, la contrarrevolución liberal estaba íntimamente inspirada por una preocupación por la riqueza de la familia privada y su transmisión.

Financiarización: inflación del precio de los activos y el retorno de la riqueza heredada

A pesar de los aires de crisis acumulados, los años setenta fueron una década en la que las decisiones políticas se mantuvieron en suspenso, paralizadas por el bloqueo del antagonismo social y la aún poderosa influencia de la izquierda progresista. A lo largo de la década, el presidente de la Reserva Federal, Arthur Burns, siguió acomodando la inflación con tipos de interés bajos, a pesar de reconocer la amenaza que suponía para la clase inversora. Sin embargo, a finales de la década, a medida que los intereses de los titulares de bonos y de los propietarios de vivienda empezaron a converger, la Reserva Federal reunió el valor para intervenir de forma decisiva a favor de la clase inversora. Así, en 1978, cuando Paul Volcker sustituyó a Arthur Burns en la presidencia de la Reserva Federal, no tardó en aplicar la receta de Milton Friedman para lidiar con la inflación mediante la restricción de la oferta monetaria y el aumento de los tipos. El «monetarismo» de Volcker era más estratégico que sincero.³⁹ Sin embargo, tuvo el efecto deseado de provocar la recesión más profunda desde la Gran Depresión, copada por tasas de desempleo de dos cifras. Tras haber acabado con el poder de negociación del trabajo sindicado, el *shock* Volcker sentó las bases para una reestructuración a largo plazo del mercado laboral estadounidense. Los

³⁹ Greta R. Krippner, *Capitalizing on Crisis: The Political Origins of the Rise of Finance*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2011, pp. 114-120, y Martijn Konings, «State of Speculation: Contingency, Measure, and the Politics of Plastic Value», *South Atlantic Quarterly*, vol. 114, núm. 2, 2015, pp. 265-267.

fabricantes tenían ahora libertad para deslocalizar las unidades de producción, lo que provocó una bajada de salarios, mientras que los elevados tipos de interés que se habían mantenido mientras duró el mandato de Volcker inundaron el país de importaciones baratas, lo que acabó con los crecientes precios de consumo. En 1982, la Reserva Federal parecía haber vencido a la inflación de los precios de consumo y de los salarios; y lo que quizás era más importante, había demostrado a los titulares de bonos que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa que estuviera en su poder para proteger el valor de los activos financieros.

El *shock* Volcker anunciaba un cambio de paradigma en la política fiscal y monetaria estadounidense. A lo largo del periodo de posguerra, la Reserva Federal adoptó una política monetaria que sirvió para complacer las estrategias fiscales expansionistas de la gestión keynesiana de la demanda. Su cometido, como se describía en la Ley de empleo de 1946, era «promover el máximo de empleo, producción y poder adquisitivo». ⁴⁰ Dentro de este régimen de políticas, la inflación de salarios y precios se entendía como signo de crecimiento económico y como contrapartida positiva del pleno empleo; este planteamiento de sentido común se resumía en la llamada curva de Phillips. El *shock* Volcker dio la vuelta a esta fórmula convirtiendo el objetivo de la inflación en el propósito principal de la política monetaria: a partir de entonces el banco central demostraría su independencia de gobiernos potencialmente despilfarradores regulando firmemente la inflación de los precios al consumo y de los salarios, fueran cuales fueran los costes sociales. Aquello supuso un giro completo con respecto de los años setenta, cuando los titulares de bonos sufrían la devaluación de sus activos mientras la Reserva Federal se plegaba una y otra vez a los intereses de la población trabajadora sindicada y de los sectores de la asistencia social. Bajo el nuevo régimen monetario iniciado por Volcker, la Reserva Federal interpelaba directamente a las sensibilidades de los titulares de bonos y se esforzaba por conservar la confianza regulando activamente las elecciones políticas del Estado. Si el gobierno incurría en un gasto social «excesivo» se aumentarían los tipos de interés. Si imponía la austeridad fiscal a los salarios y a la asistencia social, el banco central se amoldaría con tipos de interés bajos. En resumen, si la Reserva Federal en su día había sacrificado el valor de los activos por la inflación salarial, ahora se dedicaba a reprimir los salarios y los precios de consumo al servicio de la revalorización del precio de los activos. ⁴¹ Las prioridades monetarias de finales de la era keynesiana se habían invertido por completo.

⁴⁰ Public Law 79-304, 79th Congress, S. 380. Section 2.

⁴¹ El cambio lo señala Greta Krippner cuando escribe que el resultado del *shock* Volcker fue «trasladar la inflación de la economía no financiera a la financiera, en la que no era visible (o no se contabilizaba) como tal». Krippner, *Capitalizing on Crisis...*, p. 103. Sin embargo, Krippner ofrece pocas perspectivas sobre la lucha política que impulsó el cambio

Las consecuencias macroeconómicas de este nuevo régimen monetario no tardaron en hacerse patentes. A mediados de los años ochenta, cuando Volcker por fin relajó los tipos de interés, los precios de los bonos y de las acciones comenzaron un vertiginoso ascenso.⁴² Durante los años siguientes, el precio de los bonos experimentaría una de las tendencias alcistas más largas de la historia, mientras que el Dow Jones se embarcaba en una explosión de quince años, seguido de la revalorización del precio de la vivienda de principios del siglo XXI. La combinación de estos boom en los precios de los activos generó un enorme crecimiento en las ganancias de capital y el pago de intereses. La constante revalorización de los activos financieros, a veces recogida en la literatura económica política como «financiarización», produjo un gran giro en la distribución de los ingresos nacionales. Epstein y Jayadev señalan que en muchos países el porcentaje de los ingresos nacionales que terminaba en manos de inversores financieros pasó de ser negativo o estático en los años setenta a ser «sustancialmente positivo» en los ochenta. En Reino Unido, la cuota ajustada era «-4,21 % en los años setenta y 7,3 % en los ochenta»; en Estados Unidos la cuota «era 3,99 % en los años setenta y 22,11 % en los ochenta, sin duda una gran cuota», al tiempo que se reducía proporcionalmente la cuota de ingreso nacional del trabajo.⁴³

Al haber llegado al poder en un momento en el que Volcker redefinía la política monetaria en la Reserva Federal, Reagan se puso a trabajar en el frente fiscal, aprovechando con destreza las pasiones del movimiento antimpuestos para abrirse camino con reformas que eran mucho más profundas (y regresivas) de lo que aquella inconsciente coalición de propietarios de

de la inflación salarial a la inflación de activos. Estas batallas son el foco del relato de E. Ray Canterbury sobre las políticas del banco central recogido en *Wall Street Capitalism: The Theory of the Bondholding Class*, River Edge (NJ), World Scientific, 2000. Se pueden encontrar convincentes relatos sobre la inflación del precio de los activos como objetivo central (y más recientemente como talón de Aquiles) de la política monetaria neoliberal en la obra de Thomas Palley, *From Financial Crisis to Stagnation: The Destruction of Shared Prosperity and the Role of Economics*, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, pp. 32-56, y Toporowski, *Why the World Economy Needs a Financial Crash...* La cuestión de si los bancos centrales deberían abordar también la inflación de los activos es una cuestión de debate político reciente. Véase Charles Goodhart, «What Weight Should Be Given to Asset Prices in the Measurement of Inflation?», *The Economic Journal*, vol. 111, núm. 472, 2001, pp. 335-356.

⁴² Canterbury, *Wall Street Capitalism...*, p. 28; William Greider, *Secrets of the Temple: How the Federal Reserve Runs the Country*, Nueva York, Simon & Schuster, 1989, pp. 695-705.

⁴³ Gerald A. Epstein y Arjun Jayadev, «The Rise of Rentier Incomes in OECD Countries: Financialization, Central Bank Policy and Labor Solidarity», en Gerald A. Epstein, *Financialization and the World Economy*, Cheltenham (RU), Edward Elgar, 2005, p. 54. Epstein y Jayadev definen los «ingresos rentistas» como «los beneficios obtenidos por las empresas dedicadas a actividades financieras más los ingresos por intereses percibidos por todas las unidades no financieras no residentes en el gobierno, es decir, el resto de la economía privada». Su definición no incluye las ganancias de capital (p. 50).

clase media podía imaginar. Bajo la influencia del neoliberalismo y de la defensa de la oferta, que defendía que los impuestos bajos a los ricos liberarían la inversión privada, Reagan inició una campaña republicana a largo plazo contra los impuestos progresivos que culminaría con el intento de George W. Bush de retirar el impuesto de transmisión de bienes en 2001. Con Reagan, el tramo superior del impuesto personal se redujo del 70 % al 28 % en siete años, cosechando impresionantes ganancias para entre el 1 y el 5 % de los asalariados. La ley de recuperación económica fiscal aprobada por el Congreso en 1981 aumentó el umbral de excepción del impuesto de transmisión de bienes reduciendo a menos del 1 % el número de patrimonios que debían declarar algún tipo de impuesto a finales de la década.⁴⁴ También amplió los recortes de impuestos a las ganancias de capital y a los ingresos no procedentes del trabajo surgidos de los activos financieros (ingresos, dividendos y rentas).⁴⁵ Estas reformas se calcularon en beneficio del percentil superior de los hogares y se ejecutaron en un momento en que el Congreso permitía que los impuestos de la Seguridad Social aumentaran, un movimiento que anuló el efecto de la reducción de los impuestos a los ingresos de la clase media.⁴⁶ Los hogares situados por debajo del decil superior sufrieron una carga desproporcionada de cotizaciones a la Seguridad Social y, por lo tanto, acabaron pagando tipos impositivos generales más altos, a pesar de los tan celebrados recortes de sus impuestos sobre la renta.⁴⁷ Si la Seguridad Social había desempeñado un papel redistributivo e igualador en los años setenta, cuando servía para atenuar los efectos de la riqueza heredada en las oportunidades de vida relativas, ahora parecía acentuar las distinciones de clase al aumentar las cargas sobre la población pobre.

La revolución de la era Reagan en la política fiscal y monetaria tuvo un efecto dramático en la desigualdad de la riqueza y del ingreso, revirtiendo por completo la tendencia redistributiva acelerada de los años setenta. En este punto los salarios medios entraron en un largo periodo de estancamiento, una tendencia que apenas se vio mermada por el auge económico de los años noventa. Una mirada más ajustada revela una situación todavía extrema en lo que respecta a la divergencia en los ingresos. A partir de la década de los ochenta, el salario real por hora de los hombres trabajadores del tramo inferior de la escala se redujeron, los de aquellos en el tramo central se estancaron y los del tramo superior aumentaron (de forma especialmente significativa entre el 1 % superior). Los salarios de las

⁴⁴ Beckert, *Inherited Wealth...*, pp. 201-204. La oposición de la clase media al impuesto de transmisión de bienes en los años setenta se puede considerar un prelude del vigoroso movimiento en contra del «impuesto a la muerte» que surgiría en los años noventa.

⁴⁵ Phillips, *The Politics of Rich and Poor...*, pp. 76-78.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 80.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 82.

mujeres se mantuvieron en un nivel inferior a los de los hombres de forma generalizada, en un patrón de distribución con un sesgo similar.⁴⁸ Incluso cuando la productividad y los beneficios corporativos aumentaron a finales de los noventa, lo que invitó a algunos economistas a celebrar la llegada de una nueva economía basada en la inversión en capital humano y en el trabajo de alto contenido en conocimiento, los salarios medios siguieron estancados.⁴⁹ Estas tendencias presentan un agudo contraste con la «Edad Dorada» del capitalismo estadounidense, entre 1947 y 1973, cuando los salarios (de los hombres blancos trabajadores) mantenían el ritmo del crecimiento de la productividad y la proporción entre salario y capital en la renta nacional siguió siendo estable.

Sin embargo, los efectos de la distribución de la riqueza fueron aún más duros. A medida que los precios de los activos iniciaron su vertiginoso ascenso en torno a 1982, la población superrica experimentó un asombroso aumento de la riqueza, al tiempo que la acumulación media de riqueza de las clases más bajas se reducía en términos reales; muchos hogares reportaron un patrimonio cero o negativo.⁵⁰ En 1983, la concentración de riqueza se había revertido a niveles de 1962, y a finales de la década había caído hasta niveles comparables a los de 1929.⁵¹ Desde entonces prácticamente no ha cambiado.⁵² El nuevo régimen monetario introducido por Volcker (y perfeccionado por Greenspan) favorecía de forma desproporcionada las formas de riqueza propias de los hogares más ricos: activos financieros como acciones, bonos, depósitos a plazo y fondos del mercado monetario, todas ellas sujetos a una sustancial revalorización durante este periodo.⁵³ Wolff atribuye gran parte de la concentración de riqueza de los años ochenta en

⁴⁸ Gary Burtless y Christopher Jencks, «American Inequality and its Consequences», en Henry J. Aaron, James M. Lindsay y Pietro S. Nivola, *Agenda for the Nation*, Washington DC, Brookings Institution Press, 2003, p. 70.

⁴⁹ Ian Dew-Becker y Robert J. Gordon, «Where Did the Productivity Growth Go?», *NBER Working Paper*, núm. 11842, Washington DC, National Bureau of Economic Research, 2005.

⁵⁰ Wolff, «The Rich Get Increasingly Richer», p. 10.

⁵¹ *Ibidem*, p. 9.

⁵² Edward N. Wolff, «Household Wealth Trends in the United States, 1983-2010», *Oxford Review of Economic Policy*, vol. 30, núm. 1, 2014, p. 25.

⁵³ Las voces especialistas en desigualdad de riqueza más importantes apuntan que los distintos tipos de activos se distribuyen de forma desigual entre los hogares y ciertas clases de activos se concentran en manos de la población rica. Edward N. Wolff señala que en 1989 «la población superrica (la mitad superior del uno por ciento poseedor de riqueza) era dueña del 29 % del total de acciones en circulación propiedad de hogares, del 41 % de los bonos, casi la mitad del valor de las empresas no constituidas, y de cerca de un tercio de los bienes inmobiliarios no residenciales. El 10 % superior de los hogares daba cuenta de más del 80 % de las acciones e inmuebles no residenciales, y de cerca del 90 % de los bonos, fideicomisos y patrimonio empresarial». Wolff, «The Rich Get Increasingly Richer...», p. 24. Estos patrones de distribución de activos han cambiado posteriormente como resultado de las políticas que promueven la participación popular, la propiedad de vivienda y otras formas de «asistencia social basada en activos» que se analizan más adelante en el capítulo. Sin embargo, la distribución de la riqueza a largo plazo no parece haberse visto afectada positivamente por estas intervenciones

adelante a la revalorización de las reservas patrimoniales existentes, es decir, a las ganancias de capital de los activos adquiridos en el pasado; observa que quienes obtenían sus ingresos del trabajo no podían aspirar a acumular niveles de patrimonio comparables a partir de unos salarios estancados o devaluados.⁵⁴ Mediante la promoción de la inflación de los precios de los activos a costa del aumento de los salarios, la nueva política monetaria de la Reserva Federal restituyó la importancia de la riqueza consolidada y devolvió la herencia a una posición decisiva en la conformación de la clase social.

El efecto general de la política monetaria neoliberal fue el de revertir la relación entre la inflación salarial y los activos que prevaleció en la era de posguerra. A lo largo de los años setenta, los salarios y la asistencia social mantuvieron el ritmo de la inflación de los precios de consumo mientras el valor de los activos caía en picado, lo que tendió a reducir (sin llegar a eliminar) la fuerza de la riqueza heredada a la hora de definir las desigualdades sociales. Sin embargo, después de 1982, los salarios y la asistencia social sufrieron a la hora de mantener el ritmo de los anémicos niveles de la inflación de los precios de consumo, mientras los patrimonios de los hogares más ricos no dejaban de crecer. En estas circunstancias, era inevitable que la transmisión de riqueza familiar (en la que incluyo tanto las transferencias en el momento de la muerte, como las llamadas *inter vivos*)⁵⁵ asumiera de nuevo un papel fundamental en la producción de las clases sociales. Lejos del declive terminal de la herencia, las últimas décadas han sido testigo del excepcional resurgir de las grandes fortunas familiares, un hecho que se confirma con el nuevo y floreciente negocio de los fideicomisos familiares, un instrumento legal favorecido tradicionalmente por los hogares más ricos.⁵⁶ Lo que resulta quizás más importante es que el peso relativo de la riqueza en oposición a los salarios a la hora de definir la movilidad social ha aumentado en todos los niveles de la escala social. A día de hoy se podría decir que las definiciones tradicionales de clase basadas en el trabajo deberían corregirse según el patrimonio y la riqueza, si queremos hacernos una idea precisa del valor neto de una persona. En palabras de Thomas Piketty, «la riqueza heredada llega a ser casi tan decisiva a principios del siglo XXI como lo era en la época del *Papá Goriot* de Balzac».⁵⁷

políticas. Yuval Elmelech ofrece una taxonomía iluminadora de las distinciones de clase basadas en distintos tipos de propiedad de activos. Elmelech, *Transmitting Inequality...*, pp. 62-66.

⁵⁴ Wolff, «The Rich Get Increasingly Richer...», p. 28.

⁵⁵ El especialista en derecho inmobiliario John H. Langbein apunta que las transferencias de riqueza *inter vivos* de progenitores vivos a sus hijos se volvieron cada vez más frecuentes en los años ochenta, reflejando la creciente necesidad de los adultos jóvenes de apoyo económico por parte de sus padres. John H. Langbein, «The Twentieth-Century Revolution in Family Wealth Transmission», *Michigan Law Review*, vol. 86, núm. 4, 1988, pp. 722-751.

⁵⁶ Brooke Harrington, «From Trustees to Wealth Managers», en Guido Erreygers y John Cunliffe, *Inherited Wealth: Justice and Equality*, Londres, Routledge, 2012, pp. 190-209.

⁵⁷ Piketty, *Capital in the Twenty-First Century...*, p. 22.

Además, el efecto se ha visto agravado por los recortes en la educación pública, la sanidad y otros servicios sociales que han trasladado sus costes progresivamente a la familia, obligando a los progenitores a endeudarse en nombre de sus hijos. La revalorización de los precios de la vivienda (un síntoma en sí mismo de la inflación de los activos) implica que el acceso a los hogares en propiedad suele depender de un préstamo o de una donación por parte de los progenitores; la privatización *de facto* de la educación y el aumento de las tasas académicas supone que un estudiante que quiera acceder a una formación universitaria depende ahora de forma más directa de la riqueza de sus padres que en cualquier otro momento del pasado reciente; al mismo tiempo la ausencia de riqueza familiar puede condenar a cualquier joven a una vida de deudas recurrentes. El cambio de gasto público a gasto privado deficitario como medio de financiación de las inversiones en «capital humano» como la sanidad y la educación se ha documentado bien en la literatura crítica sobre la financiarización neoliberal.⁵⁸ Sin embargo, se ha hablado menos del hecho de que el gasto privado deficitario, o el «keynesianismo privatizado» como a veces se le llama, de forma casi invariable toma la forma de inversión parental intergeneracional, en la que la familia se convierte en la principal fuente de bienestar económico para quienes han nacido en un mundo de bienes públicos cada vez más reducidos. Mediante la forma concreta de la creciente deuda doméstica el capitalismo neoliberal ha recuperado el mandato de las leyes de pobres de responsabilidad familiar.

Sin embargo, sería engañoso sugerir que este periodo ha estado completamente exento de intervenciones socialdemócratas. De hecho, la idea de que el «efecto riqueza» podría democratizarse mediante la inclusión de quienes ganan salarios medios y bajos en la lógica de la inflación de los activos financieros representa una de las principales innovaciones políticas de la era neoliberal, abrazada desde ambos lados del espectro político.⁵⁹ La idea se inspira en la tradición de la democracia de la propiedad, propuesta en distintas formas por Thomas Paine y John Rawls.⁶⁰ En la Gran

⁵⁸ Sobre la importancia de la deuda doméstica en las dinámicas de la financiarización neoliberal, véase Dick Bryan, Randy Martin y Michael Rafferty, «Financialization and Marx: Giving Labor and Capital a Financial Makeover», *Review of Radical Political Economics*, vol. 41, núm. 4, 2009, pp. 458-472. Sobre el «keynesianismo privatizado», véase Colin Crouch, *The Strange Non-Death of Neoliberalism*, Cambridge, Polity Press, 2011, pp. 97-124 [ed. cast. *La extraña no-muerte del neoliberalismo*, trad. por Blas Raventos, Capital Intelectual SA, Buenos Aires, 2012].

⁵⁹ «Limitadas en lo que podían obtener de su trabajo durante dos décadas, y dependientes del endeudamiento para el consumo, las familias de clase trabajadora se vieron arrastradas a la lógica de la inflación de activos no solo a través de las inversiones de sus fondos de pensiones, sino también a través del único activo importante que tenían en sus manos (o que podían aspirar razonablemente a tener): su casa familiar». Leo Panitch y Sam Gindin, *The Making of Global Capitalism*, Nueva York, Verso, 2012, p. 306.

⁶⁰ Podemos encontrar un resumen de esta tradición con especial atención a Rawls, en Martin O'Neill y Thad Williamson, *Property-Owning Democracy: Rawls and Beyond*, Nueva York, Wiley, 2012.

Bretaña de mediados del siglo XX fue asumida por los primeros integrantes de la Sociedad Mont-Pèlerin, así como por la derecha del Partido Laborista en tanto alternativa a la inversión estatal en activos públicos.⁶¹ Derecha e izquierda han propuesto variantes al respecto, a las que se han dado muchos nombres: desde el socialismo de fondo de pensiones de Drucker, al «capitalismo de las partes interesadas»; desde las teorías de la derecha sobre el «empoderamiento», a la asistencia social basada en activos de la Fundación Ford; y por último la sociedad de propietarios de George W. Bush.⁶²

De hecho la distribución de la propiedad de activos cambió significativamente después de la revolución de Reagan, en tanto se animó a los trabajadores a confiar sus ahorros de pensiones a las estrategias fiscales de los fondos de inversión colectiva. Las cuentas de pensiones individuales como las de 401(k)⁶³ explotaron a partir de 1982, el periodo de vertiginosa revalorización de los precios de las acciones que siguió al *shock* Volcker, cuando su promesa de crecientes rendimientos contrastaba con el lamentable estado del programa público de pensiones. El neoliberalismo y el libertarismo entendieron la migración de la Seguridad Social a las cuentas de inversión individual como la forma más efectiva de neutralizar la división entre trabajadores e inversores, adelantándose así a cualquier oposición de la reforma laboral neoliberal. Después de todo, ¿por qué iban los trabajadores-inversores a seguir manteniendo los servicios públicos y los impuestos progresivos sobre los ingresos si ellos también estaban interesados en la revalorización de los activos financieros?⁶⁴ Pero más allá de esto, los adalides de la privatización de la Seguridad Social vendieron de forma explícita estos instrumentos como vehículos de acumulación de riqueza

⁶¹ Véase Ben Jackson, «Property-Owning Democracy: A Short History», en *ibidem*, pp. 33-52.

⁶² Peter Drucker, *The Unseen Revolution: How Pension Fund Socialism Came to America*, Londres, Heinemann, 1976; Bruce Ackerman y Anne Alstott, *The Stakeholder Society*, New Haven (CT), Yale University Press, 1999; Michael Sherraden, *Assets and the Poor: A New American Welfare Policy*, Nueva York, M. E. Sharpe, 1991; Stuart M. Butler, *Agenda for Empowerment: Readings in American Government and the Policy Process*, Washington DC, Heritage Foundation, 1990. Sobre la sociedad de propietarios de Bush, véase Davis, *Managed by the Markets...*, pp. 208-222.

⁶³ Fondo en el que el empleador tiene la posibilidad de igualar las aportaciones que el empleado hace a la cuenta directamente de su nómina. [N. de la T.]

⁶⁴ En palabras de Peter Ferrara y Michael Tanner, dos destacados defensores de la privatización de la Seguridad Social, afincados en el libertario Cato Institute: «Un importante beneficio secundario de la privatización de la Seguridad Social es que permitiría que toda la población estadounidense, incluida la más pobre, pudiera participar en la economía del país siendo propietarios de una parte de dicha economía. En efecto, la privatización de la Seguridad Social actuará como un plan de opciones de compra de acciones para empleados a nivel nacional, permitiendo que incluso los trabajadores más pobres se conviertan en capitalistas. Mediante la privatización de la Seguridad Social, los trabajadores pasarán a ser accionistas. La división artificial y destructiva entre trabajo y capital se anulará». Peter J. Ferrara y Michael Tanner, *A New Deal for Social Security*, Washington DC, Cato Institute, 1998, p. 107.

familiar: defendían que a diferencia de las prestaciones de la Seguridad Social, la riqueza invertida en acciones era heredable y por lo tanto serviría para reforzar más que para socavar los lazos de la dependencia familiar.⁶⁵

Más recientemente, la clase política ha apelado a la propiedad de la vivienda para que desempeñe un papel similar en la generalización de la acumulación de la riqueza privada. En un periodo en el que los salarios se mantenían fundamentalmente estancados, la idea de que los hogares con bajos ingresos también podrían beneficiarse de las dinámicas de la revalorización del precio de los activos mediante un mayor acceso a las hipotecas ha sido fundamental para lograr cierto consenso social. Aproximadamente una década antes de que se adoptara en Estados Unidos, los teóricos de las políticas sociales en Gran Bretaña celebraban la genialidad de la administración Thatcher, cuya estrategia de impulsar a la clase trabajadora hacia la propiedad de un hogar privado parecía haber acabado con las arraigadas hostilidades de clase de épocas anteriores. El sociólogo británico-australiano Peter Saunders describió la propiedad del hogar como una forma de «acumulación familiar» que enseñaría a la clase trabajadora el valor de la riqueza heredada y la desterraría de los servicios públicos; quizás a largo plazo alteraría por completo sus lealtades políticas tradicionales.⁶⁶ Defendía que lo que se había logrado con Thatcher era una nueva forma de democracia de la propiedad impulsada por la revalorización de los activos y los legados familiares más que por los ahorros: «Esta generación no solo dejará mucho dinero a sus hijos, sino que muchos de ellos heredarán sumas sustanciales de sus padres. En este sentido, las ganancias de capital del mercado inmobiliario pasarán a ser cíclicas, cada generación a partir de ahora se beneficiará de sus padres y a su vez beneficiará a sus hijos».⁶⁷ En Estados

⁶⁵ Gokhale y Kotlikoff lamentan que la Seguridad Social haya privado a los trabajadores de bajos ingresos de los beneficios de la transmisión de la riqueza familiar e identifican su exclusión de la riqueza heredable como la causa misma de su desventaja. Jagadeesh Gokhale y Laurence J. Kotlikoff, «The Impact of Social Security and Other Factors on the Distribution of Wealth» en Martin Feldstein y Jeffrey B. Liebman, *The Distributional Aspects of Social Security and Social Security Reform*, Chicago, University of Chicago Press, 2002, p. 106. Ferrara y Tanner explican cómo la privatización de la Seguridad Social rehabilitaría al mismo tiempo la función económica de la familia: «Un sistema privado mantendría los fondos de pensiones dentro de la familia y bajo su control. Esto aumentaría en gran medida la capacidad de los miembros de la familia de ayudarse mutuamente, acercando a la familia entre sí como unidad económica [...] En cambio, con la Seguridad Social, el dinero sale de la familia y va a parar al gobierno. Esto contribuye a separar a la familia, ya que sus miembros buscan el apoyo y la ayuda del gobierno en lugar de hacerlo entre ellos. La ruptura familiar resultante es análoga a la disolución familiar que se produce cuando la asistencia social sustituye a la familia como fuente de apoyo». Ferrara y Tanner, *A New Deal for Social Security...*, p. 106. Concluyen con que la «privatización de la Seguridad Social sería una de las reformas más favorables para la familia que podrían llevarse a cabo» (p. 107).

⁶⁶ Peter Saunders, *A Nation of Home Owners*, Londres, Unwin Hyman, 1990. Sobre la «acumulación familiar», véase p. 163.

⁶⁷ *Ibidem*.

Unidos, los partidarios de la Tercera Vía de la «asistencia social basada en activos» con Clinton y los defensores republicanos de la «sociedad de propietarios» con George W. Bush promoverían ideas similares.

Sin embargo, el experimento estadounidense de la política de la vivienda en propiedad siempre estuvo marcado por el legado concreto de la revuelta fiscal. Si quienes se habían enfrentado a los impuestos en los años setenta querían abandonar la economía redistributiva del Estado de bienestar recurriendo a los recursos de la acumulación de riqueza familiar, este camino hacia la seguridad económica se propuso más tarde a las minorías estadounidenses como forma de compensar la constante reducción de ingresos. Después de que a las minorías estadounidenses, tanto sexuales como raciales, se les hubieran negado los privilegios de la riqueza heredada, ahora se les animaba a que abrazaran la familia económica como único camino hacia la inclusión social. La posterior reorganización de lealtades políticas se ha manifestado de formas a veces inesperadas en las recientes luchas en torno al «impuesto a la muerte» o a los de las herencias.

Clinton, la vivienda en propiedad y la «democratización del crédito»

La administración Clinton fue la primera que promovió activamente la idea de la vivienda en propiedad entre las minorías como respuesta estructural y a largo plazo para las crecientes desigualdades del Estados Unidos neoliberal. Esta elección política se vio influida por el trabajo de los reformistas sociales de la Tercera Vía, quienes en los años noventa habían propuesto la idea de «asistencia social basada en activos» como alternativa a las formas tradicionales de bienestar social. Uno de los exponentes más influyentes de la asistencia social basada en activos fue Michael Sherraden, académico con sede en la Universidad de Washington en San Luis, que defendía que los programas de bienestar tradicionales se centraban indebidamente en el problema de la redistribución de ingresos a costa de la propiedad de activos.⁶⁸ En un momento en el que el precio de los activos no dejaba

⁶⁸ El texto fundacional sobre la asistencia social basada en activos es *Assets and the Poor* de Sherraden. A lo largo de los años ochenta, la perspectiva de la asistencia social basada en activos se asociaba casi exclusivamente con la derecha republicana. Durante este periodo, el neoliberalismo y el libertarismo afiliado a grupos de reflexión de derechas como la *Heritage Foundation*, el *American Enterprise Institute* y el *Cato Institute* promovieron asiduamente la idea de que la población pobre debía «empoderarse» para participar en la acumulación de activos mediante la privatización de lo que antes eran servicios públicos. Sin embargo, a finales de la década de los ochenta, desde el centro izquierda surgieron nuevos argumentos a favor de la «asistencia social basada en activos», con Michael Sherraden como portavoz más destacado. Los exponentes de la «asistencia social basada en activos» reiteraron gran parte de la crítica de la derecha neoliberal a las transferencias de ingresos del gobierno. Sin embargo, nunca estuvieron a favor de dismantlar por completo las formas

de subir y en el que los salarios se mantenían estancados, dejaba de tener sentido distribuir asistencia social en forma de transferencias de ingresos. Según Sherraden, los programas de bienestar tradicionales como el AFDC, desempoderaban a la población pobre porque se centraban en el consumo de servicios, no en la generación de riqueza privada mediante la inversión en activos. Por lo tanto, las evaluaciones de recursos que habían limitado la propiedad de activos entre las personas beneficiarias de asistencia social deberían eliminarse y ser sustituidas por programas eficientes de democratización de los activos.

Durante los años noventa, tanto la Fundación Ford como el Consejo de Liderazgo Democrático (la organización que representaba a centristas o a nuevos demócratas de la Tercera Vía como Bill Clinton) abrazaron la asistencia social basada en activos.⁶⁹ Con Clinton, esta preferencia se convirtió en la National Homeownership Strategy [Estrategia nacional de la vivienda en propiedad], que consideraba la vivienda privada como el vector ideal de la inversión basada en activos y la alternativa general a los rendimientos decrecientes del Estado de bienestar.⁷⁰

Lanzada en 1995, la Estrategia nacional de la vivienda en propiedad de Clinton se inspiraba en muchos de los ideales que la reforma de la asistencia social llevaría a cabo el año siguiente. El recién nombrado director del Department of Housing and Urban Development [HUD, Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano] Henry Cisneros, señaló que Clinton tenía la intención de «acabar con la vivienda pública tal y como la conocemos», en gran medida de la misma manera que había anunciado que acabaría con la asistencia social.⁷¹ Ambas reformas políticas se basaban en la premisa de que la población pobre beneficiaria de asistencia social

tradicionales de bienestar y siempre consideraron que los enfoques basados en los activos eran un complemento, no un sustituto, de las transferencias de ingresos.

⁶⁹ La Fundación Ford adoptó la asistencia social basada en activos como modelo para su programa de pobreza nacional y mundial en 1996 y desde entonces se ha convertido en una de las principales fuerzas impulsoras de un nuevo paradigma de empoderamiento mundial que promueve la microfinanciación y la propiedad de activos como solución a la pobreza. Juntos, la Fundación Ford y el Centro para el Desarrollo Social de la Universidad de Washington en San Luis, dirigido por Michael Sherraden, sirven de sede para la difusión de la política de bienestar social basado en activos en Estados Unidos. Su influencia se ha extendido por todo el espectro político, desde Bill Clinton a George W. Bush. En Reino Unido, el Institute for Public Policy Research [o IPPR, Instituto de Investigación de Políticas Públicas] asociado con el Nuevo Laborismo, ha sido un importante canal para experimentos de políticas sociales en materia de asistencia social basada en activos. Sobre las relaciones entre la asistencia social basada en activos y el Consejo de Liderazgo Democrático, véase Andrew Karch, *Domestic Laboratories: Policy Diffusion among the American States*, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2007, p. 85.

⁷⁰ The White House, *The National Homeownership Strategy: Partners in the American Dream*, Department of Housing and Urban Development, 2 de mayo de 1995.

⁷¹ Henry G. Cisneros, *Renewing America's Communities from the Ground Up: The Plan to Complete the Transformation of HUD*, Washington DC, Diane Publishing, 1996, p. 11.

debía ser desterrada de las transferencias de ingresos, con todos sus efectos perversos y desmoralizantes, y en su lugar debía ser responsable de su propia seguridad económica. Ambas políticas asumían que la familia privada debía restaurarse como la institución legal y moral apropiada para lograr este objetivo. «¿Queremos restaurar los valores familiares en Estados Unidos, promover los hogares con dos progenitores, hacer que la gente se quede en casa?» preguntaba Clinton: «Facilitemos que la gente pueda ser dueña de su vivienda, disfrutar de las recompensas de la vida familiar y ver su trabajo gratificado».⁷² Sin embargo, a diferencia de la reforma de la asistencia social de Clinton, la Estrategia nacional de propiedad de la vivienda definía detalladamente una vía alternativa para extender el mandato de las leyes de pobres de responsabilidad familiar apoyándose en el crédito y en la revalorización de los activos, más que en las virtudes tradicionales del trabajo duro y los ahorros, para hacer que la ciudadanía llegara a ser independiente del Estado.

Con su promesa de reducir el déficit presupuestario federal a cero, Clinton siguió el ejemplo de Reagan y de George H. W. Bush reduciendo el desembolso federal en vivienda pública, limitando el control del alquiler e impulsando la *voucherización* [o uso de vales] para los alquileres subvencionados por el Estado.⁷³ Durante los primeros años de su administración, el gasto federal en servicios para la población sin techo se redujo incluso más de lo que lo había hecho con Reagan, con consecuencias devastadoras para la población pobre urbana. Sin embargo Clinton ofreció algo que los republicanos no habían ofrecido: una nueva estrategia integral de «empoderamiento» urbano que revitalizaba el muy denostado HUD y que cambiaba su foco de la vivienda pública a la propiedad del hogar privado. Los republicanos se habían pasado muchos años atacando al HUD, la agencia responsable de ampliar la vivienda pública de la Gran Sociedad de Johnson, y amenazaban con eliminarlo por completo. Clinton consiguió superar a los republicanos repoblando el HUD con defensores de la asistencia social basada en activos y encomendando una nueva tarea a este organismo: la de ampliar los beneficios de los propietarios de vivienda para incluir a quienes aún estaban expulsados del sueño americano.⁷⁴ Los datos sobre vivienda recopilados en los años ochenta demuestran que las tasas de propiedad de los hogares se habían estancado por primera vez en más de dos décadas y que se habían reducido entre los hogares de población

⁷² William J. Clinton, «Remarks on the National Homeownership Strategy», 5 de junio de 1995. Disponible on line en <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=51448> (consultado por última vez el 1 de octubre de 2015).

⁷³ Michael B. Katz, *The Price of Citizenship: Redefining the American Welfare State*, Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 2008, pp. 124-126.

⁷⁴ Sobre la reforma interna del HUD, véase Alyssa Katz, *Our Lot: How Real Estate Came to Own Us*, Nueva York, Bloomsbury, 2009, p. 32.

afroamericana y latina.⁷⁵ Con la esperanza de revertir estas tendencias, el HUD recurría ahora a la ayuda de Freddie Mac y de agentes hipotecarios privados para ampliar las posibilidades de crédito a «prestatarios no aptos», normalmente minorías, mujeres y población joven, que no solían contar con el historial de trabajo habitual ni con el perfil de crédito necesario de los prestatarios estándar.⁷⁶ Siguiendo instrucciones de Clinton, se animó a Fannie Mae y Freddie Mac a flexibilizar sus criterios de concesión, mientras que la ley de reinversión comunitaria de 1977, introducida originalmente para vigilar la exclusión social, fue dotada de mayores poderes de ejecución.

Así, Clinton prometió redimir a la población estadounidense más desaventajada, los que se habían quedado atrás en los duros años ochenta, incluyéndolos en la corriente de los precios de los activos que no dejaban de revalorizarse. Si al principio de su mandato Clinton se había mostrado escéptico sobre la idea de perseguir una política como esa, lo hacía más o menos obligado por el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, que le aseguró que cualquier intento de subir los salarios o de ampliar la inversión pública desataría los miedos de la inflación y aumentaría los tipos de interés a largo plazo (o la «prima por inflación») exigidos por los titulares de bonos.⁷⁷ En opinión de Greenspan, la mejor alternativa era reducir el gasto gubernamental, congelar los salarios y en su lugar dejar que los tipos de interés a largo plazo cayeran, un proceso que sin duda generaría una abundancia de crédito barato al consumo.⁷⁸ Siempre que el gobierno aprovechara este boom del crédito para impulsar a la población con ingresos más escasos a invertir en vivienda, se generaría un círculo virtuoso en el que el crédito barato haría subir los precios de la vivienda, lo que a su vez proporcionaría garantías de continua revalorización, con la posibilidad de nuevas ampliaciones del crédito. En lugar de regresar a las desacreditadas políticas de inversión social, que en cualquier caso la Reserva Federal se ocuparía de bloquear, Greenspan urgió a Clinton a generalizar el «efecto riqueza» de la revalorización de los activos relajando la regulación del crédito.⁷⁹ Mientras tanto, las virtudes de las finanzas

⁷⁵ Estos datos se presentan y se analizan en Department of Housing and Urban Development, *U.S. Housing Market Conditions*, Washington DC, US Government Printing Office, 1996.

⁷⁶ Mechele Dickerson, *Homeownership and America's Financial Underclass: Flawed Promises, Broken Promises, New Prescriptions*, Nueva York, Cambridge University Press, 2014, pp. 23, 183-184. Véase también Herman Schwartz, «Finance and the State in the Housing Bubble», en Manuel B. Aalbers, *Subprime Cities: The Political Economy of Mortgage Markets*, Oxford, Blackwell-Wiley, 2012, pp. 53-73.

⁷⁷ Bob Woodward, *The Agenda: Inside the Clinton White House*, Nueva York, Simon & Schuster, 1994, pp. 69-70 y pp. 228-229 [ed. cast. *La agenda de Clinton: la Casa Blanca por dentro*, Sudamericana, 1994].

⁷⁸ *Ibidem*, p. 70.

⁷⁹ Greenspan se refirió repetidamente al «efecto riqueza» de la revalorización de los activos en los mercados bursátil e inmobiliario. El «efecto riqueza» podía observarse cuando la

estructuradas, incluidas nuevas formas de titulización más sensibles al riesgo, permitirían a los agentes hipotecarios y a los inversores extraer el máximo rendimiento mientras los riesgos de impago y de liquidez de los préstamos a largo plazo quedaban perfectamente cubiertos.

Eugene Ludwig, auditor monetario de Clinton, aplaudió esta estrategia como la «democratización del crédito» y la describió como la conclusión final de un proceso democrático iniciado con el New Deal, si bien hasta ahora condicionado por sus restricciones normativas. «Gracias a la democratización del crédito», apuntaba, «quienes ayer estaban desabastecidos son los clientes principales de hoy en día». ⁸⁰ Las políticas federales de la expansión crediticia de posguerra que habían permitido que millones de estadounidenses blancos de clase media compraran vivienda, ahora por fin se ampliarían a los sujetos no normativos según el fordismo: minorías, mujeres y otros grupos de riesgo crediticio. Históricamente marginados de la acumulación de riqueza privada, ahora también estarían incluidos en la lógica de la acumulación de activos, aunque solo fuera de forma potencial y aspiracional mediante deudas eternas.

Vivienda en propiedad, normatividad y New Deal

Durante mucho tiempo, la promoción gubernamental del crédito al consumo ha desempeñado un papel fundamental en el Estado de bienestar público-privado estadounidense, situándose junto con los seguros sociales como uno de los mecanismos redistributivos fundamentales desarrollados bajo el New Deal. Desde mediados del siglo XX en adelante, la clase política federal ha hecho un uso estratégico de los mercados de crédito privados para completar el llamado sueño americano de la vivienda en propiedad de clase media, para ello han inventado distintos tipos de garantías administrativas y legales a fin de garantizar que el crédito estaría disponible para el prestatario debidamente cualificado. Estas iniciativas datan de la Gran Depresión, cuando el presidente Franklin D. Roosevelt creó una serie de nuevas instituciones federales diseñadas para proteger a los prestatarios del riesgo inminente de cierre de mercado. ⁸¹ La Federal Housing

mera expectativa de subida de los precios de los activos provocaba un aumento real del consumo y la inversión en el presente. Véase Alan Greenspan, *Issues for Monetary Policy*, 19 de diciembre, Washington DC, Federal Reserve Board, 2002.

⁸⁰ Eugene A. Ludwig, «The Democratization of Credit and the Future of Community Development», NR 96-21. Discurso ante la Conferencia de Desarrollo Comunitario, Arlington, Virginia, 23 de febrero de 1996.

⁸¹ Kenneth T. Jackson, *The Crabgrass Frontier: The Suburbanization of the United States*, Oxford, Oxford University Press, 1985, pp. 195-196; Martha Poon, «From New Deal Institutions to Capital Markets: Commercial Consumer Risk Scores and the Making of Subprime Mortgage Finance», *Accounting, Organizations and Society*, vol. 35, núm.

Administration [FHA, Administración Federal de la Vivienda], creada en 1934, animaba a los bancos a prestar a los perfiles cualificados con tipos de interés bajos asegurándolos contra el riesgo de impago, mientras que la Federal National Mortgage Association [FNMA, Asociación Federal Nacional de Hipotecas o Fannie Mae, creada en 1938] ayudaba a los bancos a aliviar el riesgo de liquidez a largo plazo comprando sus carteras de préstamos hipotecarios y vendiéndoselas a inversores. La Home Owners' Loan Corporation [HOLC, Corporación de Préstamos a Propietarios de Vivienda] creada en 1933 también desempeñó un papel igualmente importante a la hora de favorecer los mercados de crédito al consumo al inventar una forma nueva y más segura de contrato hipotecario: el préstamo a largo plazo, a tipo fijo y amortizado (conocido como la hipoteca vainilla), que sustituyó a las hipotecas a corto plazo de solo intereses que habían dominado el mercado hasta entonces. En conjunto, estas iniciativas permitieron a los bancos ampliar sus carteras hipotecarias y prestar a tipos de interés bajo sin incurrir en riesgos financieros relevantes.

La ampliación de estos programas de vivienda del New Deal después de la II Guerra Mundial condujo a un enorme aumento de las tasas de propiedad de vivienda: del 44 % de las familias encabezadas por un hombre en 1934, al 63 % en 1972.⁸² Al ampliar los seguros hipotecarios a los trabajadores industriales sindicados, las políticas federales de vivienda engordaron las filas de la clase media estadounidense y establecieron la vivienda en propiedad en las áreas suburbanas como el nuevo ideal de esta clase. No obstante, el crédito inmobiliario siempre estuvo sujeto a la normatividad sexual y racial del salario familiar fordista, que definía la idoneidad crediticia según el empleo y el estado civil, y por lo tanto terminó favoreciendo al hombre trabajador blanco por encima del resto de sujetos. La FHA impuso estrictos criterios de suscripción a los prestamistas, regulándolo todo, desde la estructura de pagos aceptable para las hipotecas a los modelos de vivienda, ubicación y perfil del prestamista, los bancos debían cumplir estas directrices si querían recibir garantías federales. Por último, era la FHA la que decidía quién merecía el crédito como para recibir una hipoteca a interés bajo. El efecto general de esta supervisión fue que en la era de posguerra, la financiación de hipotecas quedó restringida a los hombres blancos casados y los sujetos no normativos del fordismo fueron expulsados de las formas de acumulación de riqueza derivadas de la propiedad de una vivienda.

La propia estructura de las hipotecas «vainilla» a 30 años estaba cuidadosamente definida según la vida laboral del trabajador industrial sindicado,

5, 2009, pp. 654-674; Louis Hyman, *Debtor Nation: The History of America in Red Ink*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2011, pp. 49-72.

⁸² Jackson, *The Crabgrass Frontier...*, pp. 215-216.

haciendo casi imposible que trabajadores no estándar pudieran acceder a crédito inmobiliario incluso cuando no existía una abierta discriminación. El hecho de que los trabajadores fordistas sindicados también estuviesen cubiertos por generosas formas de seguro social (desde la sanidad basada en el trabajo a la cobertura por desempleo) les hacía doblemente atractivos para las aseguradoras federales: no solo estaban atados a contratos de trabajo a largo plazo, sino que además tenían salarios garantizados y por lo tanto tenían un riesgo muy bajo de impago. Los prestatarios que no podían demostrar una vinculación tan estable con el lugar de trabajo simplemente no podían acceder a una hipoteca a interés bajo asegurada por el Estado, lo que definitivamente excluía del mercado inmobiliario privado a la mayoría de la población afroamericana, así como a todas las mujeres.

En el caso de la población afroamericana, estas exclusiones basadas en el trabajo se agravaban por las preferencias residenciales de las autoridades inmobiliarias federales, que sistemáticamente favorecían las viviendas unifamiliares en las áreas suburbanas frente a los barrios del centro de la ciudad. A medida que las familias casadas comenzaron su largo éxodo de posguerra a la periferia, la población afroamericana quedó atrás en los centros urbanos cada vez más empobrecidos. El sistema de calificación de riesgo urbano de la HOLC penalizaba a quienes quisieran comprar en el centro de la ciudad, al asignar el color rojo de «no asegurable» a los guetos del interior de las ciudades (de donde proviene el término *redlining*), lo que en el proceso les hacía especialmente vulnerables a las artimañas de los propietarios en los barrios bajos.⁸³ Así, una serie de decisiones burocráticas aparentemente inocuas, desde la calificación del riesgo urbano hasta los modelos de vivienda asegurables, tuvieron un profundo efecto en la escena de posguerra: confinó a la población afroamericana a viviendas de alquileres elevados en los centros urbanos abandonados, mientras que la población estadounidense blanca acumulaba riqueza inmobiliaria asegurada por el Estado en la periferia.⁸⁴ Ira Katznelson se refiere con acierto a la política federal inmobiliaria de esta época como una suerte de «discriminación positiva para los blancos».⁸⁵ Otras voces hablan de un «Estado de bienestar oculto» que permitió a la población blanca acumular lo que

⁸³ Adam Gordon, «The Creation of Homeownership: How New Deal Changes in Banking Regulation Simultaneously Made Homeownership Accessible to Whites and Out of Reach for Blacks», *Yale Law Journal*, vol. 115, núm. 1, 2005, p. 207.

⁸⁴ Thomas M. Shapiro y Melvin L. Oliver han explorado en detalle los efectos a largo plazo de las políticas de posguerra en materia de vivienda sobre la desigualdad de riqueza entre la población blanca y negra. Véase Thomas M. Shapiro y Melvin L. Oliver, *Black Wealth, White Wealth: A New Perspective on Racial Inequality*, 2.ª ed., Nueva York, Routledge, 2006, y Thomas M. Shapiro, *The Hidden Costs of Being African American: How Wealth Perpetuates Inequality*, Oxford, Oxford University Press, 2004.

⁸⁵ Ira Katznelson, *When Affirmative Action Was White: An Untold History of Racial Inequality in Twentieth-Century America*, Nueva York, Norton, 2005.

parecía riqueza privada, pero que en realidad era una forma alternativa de bienestar (basado en activos) subvencionado de múltiples formas por garantías federales, seguros públicos y concesiones fiscales.⁸⁶

Además, las políticas inmobiliarias federales no solo tenían un sesgo racial, sino que estaban estrechamente vinculadas con la regulación normativa del género y la sexualidad. Recientemente, el historiador Clayton Howard ha explorado en cierto detalle hasta qué punto estos criterios fueron clave para el desarrollo del mercado inmobiliario de posguerra.⁸⁷ Bien entrada la década de 1960, las directrices de la FHA obligaban a los bancos a comprobar el «carácter» de un prestatario antes de emitir un préstamo y consideraban el estado civil como la prueba definitiva de solvencia. La edición de 1952 del manual de suscripción de la FHA aconsejaba a los prestamistas: «El deudor hipotecario que está casado y tiene una familia suele demostrar una mayor estabilidad que el soltero porque, entre otras cosas, tiene responsabilidades que le atan a sus obligaciones».⁸⁸ En otro punto del manual, se recomendaba a los bancos que no emitieran préstamos a personas que no tuvieran lazos de sangre, dado que «las probabilidades de disconformidad [...] entre miembros de la asociación es fuerte y afecta gravemente al deseo de conservar la propiedad de cualquiera de las partes».⁸⁹ En una época en la que no era fácil disolver el matrimonio y en la que el divorcio amistoso aún estaba algo lejos en el horizonte, el contrato marital entre un hombre trabajador y su mujer parecía ofrecer la misma fiabilidad que un contrato de trabajo a largo plazo. Un hombre blanco atado a las responsabilidades del trabajo y la familia se consideraba el más solvente de los prestatarios y el más asegurable de los riesgos; un hombre blanco soltero quizás disfrutara de una mayor independencia financiera, pero tenía menos posibilidades de respetar sus obligaciones a largo plazo; una mujer soltera trabajadora implicaba un riesgo crediticio incierto en el mejor de los casos; mientras que una mujer casada por lo general tenía prohibido recibir cualquier tipo de crédito de consumo a su nombre. La estandarización de los perfiles de riesgo de consumo colocó a los prestatarios en un continuo de riesgos más o menos asegurables en el que las mujeres, las personas homosexuales y la población no blanca se consideraban valores atípicos en la campana de Gauss del riesgo crediticio.

La predilección que se otorgaba al estado civil dentro de los criterios de préstamo de la FHA se complementaba con formas más abiertas de

⁸⁶ Christopher Howard, *The Welfare State Nobody Knows: Debunking Myths about U.S. Social Policy*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2007.

⁸⁷ Clayton Howard, «Building a 'Family-Friendly' Metropolis: Sexuality, the State, and Postwar Housing Policy», *Journal of Urban History*, vol. 39, núm. 5, 2013, pp. 933-955.

⁸⁸ Citado en Howard, «Building a 'Family-Friendly' Metropolis...», p. 938.

⁸⁹ *Ibidem*.

exclusión dirigidas a la población homosexual. Durante los años inmediatamente posteriores a la II Guerra Mundial, la homofobia política aumentó significativamente cuando muchos estados introdujeron nuevas penas para el sexo no heterosexual y aumentaron sus esfuerzos por controlar y castigar las prácticas homosexuales. Las directrices de la FHA reflejaban este nuevo contexto punitivo al obligar a los prestamistas a no conceder hipotecas a personas que hubieran sido condenadas por delitos relacionados con el sexo, incluido el «vagabundeo lascivo» o la baja militar; lo que automáticamente marginaba a muchos hombres homosexuales que por lo demás podrían ser considerados buenos candidatos.⁹⁰

Estas políticas impactaron muy rápidamente en el perfil demográfico de los distintos barrios, los datos censales registraron un claro aumento de las parejas casadas residentes en los códigos postales de las afueras y un auge correspondiente de residentes no casados o solteros en los centros urbanos. En palabras de Howard, las políticas de vivienda de posguerra erigieron «un armario social y espacial en torno a la heterosexualidad normativa»⁹¹ creando espacios periféricos en los que la homosexualidad solo se podía experimentar en secreto y, por la misma razón, espacios urbanos en los que la población blanca homosexual se congregaba alrededor de una demografía social cada vez más diferenciada junto a la población pobre no blanca. Howard habla a este respecto de las «jerarquías raciales y sexuales paralelas» que operaban en el mercado inmobiliario de posguerra:

Al promover la sexualidad normativa mediante la regulación de las hipotecas y al estimular la migración de las parejas casadas hacia las afueras, el Estado facilitaba el encuentro de diferentes grupos de personas en áreas definidas por el estado civil. Este proceso nunca funcionó con la rigidez de la segregación racial, dado que residentes gais siempre han vivido en las afueras y muchos residentes casados siguieron viviendo en los centros urbanos. Sin embargo, a mediados de los años sesenta, la periferia más reciente y las centros urbanos más antiguos presentaban una concentración sin precedentes de residentes divididos por su estado civil y por instituciones de reciente constitución, como bares o iglesias, que atendían a comunidades sexualmente diferenciadas.⁹²

Según la posición subjetiva de cada persona, las jerarquías del salario familiar fordista podían considerarse independientes o comunes; por un lado, generaban extrañas proximidades urbanas entre disidentes sexuales o raciales y, por otro, en el caso de las personas no blancas y no heterosexuales se entrelazaban en una misma identidad creando una acumulación de riesgos no asegurable.

⁹⁰ *Ibidem*, pp. 936 y 938.

⁹¹ *Ibidem*, p. 935.

⁹² *Ibidem*, p. 934.

Las restricciones normativas en el crédito al consumo e inmobiliario se mantuvieron hasta bien entrados los años sesenta, cuando empezaron a criticarse con más fuerza desde el feminismo, el movimiento por los derechos civiles y el activismo de la liberación gay.⁹³ Durante los años siguientes, el Congreso aprobó varias leyes que prohibían la discriminación en los mercados de crédito al consumo. La ley de vivienda justa de 1968, seguida de la ley de igualdad de oportunidades de crédito de 1974 ampliaron la legislación antidiscriminatoria a los mercados de la vivienda y del crédito al consumo respectivamente. A estas las siguió la Home Mortgage Disclosure Act [HMDA, ley de divulgación de hipotecas sobre viviendas] de 1975 y la Community Reinvestment Act [CRA, ley de reinversión comunitaria] de 1977, que prohibían explícitamente el *redlining* e introducían procedimientos sistemáticos para supervisar la distribución demográfica de los préstamos bancarios. La disposición B de la ley de igualdad de oportunidades de crédito de 1974 permitía a las mujeres casadas obtener pleno acceso al crédito al consumo en su nombre. Solo a los hombres gays, que también habían criticado su exclusión de la financiación hipotecaria, no se les otorgó ninguna protección formal ante el sesgo en el préstamo en este aspecto.

En cualquier caso, estas medidas formales solo conocieron cierto éxito a la hora de redefinir algunas de las exclusiones normativas del régimen crediticio fordista. Después de todo, ninguna ley antidiscriminatoria podía revertir el hecho de que la población afroamericana, latina y las mujeres de todas las etnias estaban sobrerrepresentadas entre las filas de los no asegurados y en los empleos más precarios; clasificados como «no aptos» en virtud de su distribución en el mercado de trabajo y no según ningún perjuicio personal por parte de los gerentes del banco.⁹⁴ En consecuencia, la distribución del crédito siguió atrapada en los límites normativos del salario familiar, mucho después de que se hubiera prohibido la discriminación formal.

Cuando por fin se democratizó el crédito, no fue gracias a las leyes antidiscriminación, sino gracias a la liberalización del crédito al consumo impulsada por el mercado que comenzó a mediados de los años noventa y se aceleró a partir de entonces.⁹⁵

⁹³ Para un relato comparativo de la campaña feminista y de la campaña por los derechos civiles para la democratización del acceso al crédito de consumo, véase Hyman, *Debtor Nation...*, pp. 173-219. Jaffe y Lautin señalan que en 1971 integrantes de la Gay Activists Alliance [Alianza de Activistas Gais] inundaron las oficinas de la Corporación Financiera del Hogar (HSBC) en Park Avenue para denunciar su discriminación de la clientela gay. Véase Stephen H. Jaffe y Jessica Lautin, *Capital of Capital: Money, Banking, and Power in New York City, 1784-2012*, Nueva York, Columbia University Press, 2014, p. 228.

⁹⁴ Hyman, *Debtor Nation...*, pp. 215-217.

⁹⁵ La siguiente sección es una adaptación del artículo de la autora «The Strategy of Default — Liquid Foundations in the House of Finance», *Polygraph: An International Journal of Culture and Politics*, núm. 23/24, 2013, pp. 79-96.

Democratizar el crédito: más allá de la norma

El mercado hipotecario estadounidense sufrió una serie de transformaciones drásticas y muy relevantes en las décadas precedentes a la crisis de las hipotecas *subprime*. A lo largo de los años setenta, las entidades patrocinadas por el gobierno Fannie Mae y Freddie Mac perfeccionaron un método nuevo y más sofisticado para ayudar a los bancos a descargar y vender sus carteras de préstamos. Dejaron de limitarse a adquirir estos préstamos y venderlos tal cual; ahora los reempaquetaban y los vendían a inversores como instrumentos financieros de riesgo combinados, conocidos como bonos de titulización hipotecaria (o MBS, *mortgage-backed securities*).⁹⁶ A finales de los años setenta, los prestamistas habían abandonado ampliamente el criterio basado en el estado civil con el que tomaban las decisiones de préstamo en el pasado y ahora seguían un criterio más amplio de estatus de trabajo aceptable. En una época en la que los contratos de trabajo a largo plazo eran cada vez más excepcionales y el matrimonio podía disolverse mediante un divorcio amistoso, dejaba de tener sentido basar las decisiones crediticias en estas consideraciones de forma aislada. Durante este periodo, los prestamistas de los bancos se sirvieron cada vez más de métricas más granuladas basadas en la evaluación de la solvencia de los prestatarios, tomando sus decisiones a partir de las cambiantes puntuaciones de crédito en lugar de las clasificaciones de matrimonio y trabajo. Aun así, en su mayoría, los préstamos asegurados por el gobierno mantenían la cautela, privilegiaban los productos estándar o las hipotecas vainilla y a los clientes con riesgo mínimo predeterminado; con el predecible resultado de que las decisiones hipotecarias solían marginar a las minorías. De nuevo aquí las decisiones de préstamo de los bancos seguían replicando las exclusiones normativas de una época posterior, mucho después de haber abandonado las formas de discriminación abierta.

Sin embargo, a mediados de los años noventa, los prestamistas privados accedieron al mercado en masa y, en un contexto de creciente demanda

⁹⁶ Sarah Quinn, «Lemon Socialism and Securitization», *Trajectories: Newsletter of the ASA Comparative and Historical Sociology Section*, vol. 20, núm. 2, 2009, pp. 3-6. Aunque Fannie Mae había proporcionado un mercado secundario para las hipotecas desde su creación en los años treinta, el mercado hipotecario moderno para los bonos de titulización hipotecaria se creó mucho después con la aprobación de la *Housing and Urban Development (HUD) Act* [Ley de desarrollo urbano e inmobiliario] de 1968. La Ley se aprobó con la intención de responder a una crisis crediticia a corto plazo en el mercado inmobiliario. Pero dado que el gobierno federal ya sufría un déficit debido a la Guerra de Vietnam, se consideraba urgente retirar Fannie Mae de los balances contables mientras se mantenía como una «entidad patrocinada por el gobierno» cuyas demandas estaban implícitamente respaldadas por la plena fe y crédito del gobierno estadounidense. La Ley HUD creó simultáneamente la empresa patrocinada por el gobierno Freddie Mac para que actuara como competidor privado de Fannie Mae y permitió que ambas crearan y vendieran bonos (valores) a partir de las hipotecas que suscribían.

de MBS por parte de la clase inversora, estuvieron cada vez más dispuestos a ampliar el crédito a quienes tenían perfiles más arriesgados como prestatarios. Martha Poon apunta que esta nueva generación de prestamistas no bancarios llevó a cabo «un alejamiento gradual de las prácticas tradicionales y excluyentes de control de crédito por escrutinio y avanzó hacia prácticas graduales de control del crédito por riesgo». ⁹⁷ Con el control por riesgo, «la toma de decisiones superiores dejaba de limitarse a aprobar o retirar prestamos, sino que se ampliaba a la utilización de grados estandarizados de calidad crediticia, a los que se accedía mediante puntuaciones para crear múltiples opciones de préstamo adaptadas a los distintos niveles de riesgo». ⁹⁸ La estandarización del crédito (mediante la adopción general de las puntuaciones comerciales FICO) creó así las condiciones para una desestandarización de las opciones de crédito, lo que permitía asignar una puntuación crediticia incluso a las opciones «menos aptas» de prestatarios y fijar un precio en consecuencia.

Estas técnicas adquirieron plenos efectos en el punto álgido del boom inmobiliario a principios de los años 2000, cuando agentes hipotecarios que habían saturado el mercado con prestatarios seguros ahora se inclinaban hacia riesgos crediticios no estándar. Si tradicionalmente los bancos habían evitado a la población pobre en activos, no asegurada y con empleos precarios, los agentes privados ahora se apresuraban a comercializar créditos a prestatarios *subprime* (de ingresos bajos) y Alt-A (con problemas de crédito), y lo hacían tranquilos sabiendo que podrían titularizar rápidamente los riesgos asociados y venderlos a otros inversores.

De esta manera, el sector hipotecario privado rompió las barreras normativas del régimen crediticio fordista. Como apunta Herman Schwartz, hasta bien entrados los años ochenta, las hipotecas vainilla favorecidas por empresas patrocinadas por el gobierno siguieron funcionando con cálculos actuariales de riesgo establecidos en los años del New Deal: «Los MBS vainilla son en muchos sentidos un producto clásico de tiempos del Estado de bienestar fordista o de Bretton Woods. Socializan los riesgos que conlleva la financiación de la vivienda, homogeneizan implícitamente los rendimientos para los inversores, favorecen a los deudores [...] y homogeneizan a los prestatarios según un modelo de clase media-familiar que compra viviendas unifamiliares». ⁹⁹ La nueva generación de agentes privados sustituyó estos modelos actuariales tradicionales de estandarización del riesgo por una estrategia mucho más especulativa de optimización del riesgo mediante la diversificación en algunos de los segmentos de mayor riesgo del mercado

⁹⁷ Poon, «From New Deal Institutions to Capital Markets...», p. 656.

⁹⁸ *Ibidem*, pp. 656-657.

⁹⁹ Herman Schwartz, *Subprime Nation: American Power, Global Capital, and the Housing Bubble*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2009, p. 185.

del crédito al consumo.¹⁰⁰ En la práctica, esos prestatarios de tan alto riesgo se encontraban de forma desproporcionada entre la población afroamericana y latina y las mujeres de todas las etnias; precisamente las poblaciones que con mayor probabilidad recurrían a la asistencia social.¹⁰¹ Por primera vez en la larga historia del crédito de consumo estadounidense, el mercado *subprime* permitía cifras sin precedentes de prestatarios marginales (mujeres, afroamericanos, latinos) y hogares no normativos (madres solteras en particular) a quienes permitía aspirar a la vivienda en propiedad, aunque a veces a precios desorbitados. Se preveía que un número considerable de estos prestatarios incurriría en impago, quizás después de reprogramar sus préstamos varias veces. Y aun así, mientras el precio de la vivienda siguiese revalorizándose, estas tasas de impago quedarían sobradamente compensadas por los rendimientos extraordinarios que se obtenían de las comisiones de refinanciación y de las cláusulas punitivas de los préstamos *subprime*.

En cierto sentido, así, la democratización del crédito parecía haber resuelto los eternos problemas de la exclusión por raza y género que durante años habían inundado el Estado de bienestar oculto estadounidense. Por un breve periodo, la ampliación del crédito del sector privado abrazó a sujetos no estándar que en su día habían estado absolutamente excluidos del consenso social del New Deal, lo que parecía confirmar la idea de que la financiarización daría paso a una forma superior de democracia social, una democracia social más allá de la norma. A la población pobre ya no le hacía falta recurrir a los denigrantes apoyos del bienestar social y las transferencias de ingresos para salir adelante, dado que ahora ellos también podían participar en formas de propiedad de activos que en su día estaban reservadas a los hombres blancos casados y sus familias. En última instancia, lo que Clinton ofrecía a las minorías era una vía de acceso a las formas de acumulación de riqueza privada consideradas durante años un privilegio de la clase media blanca. La línea divisoria entre el Estado de bienestar estadounidense oculto y visible, que se había visto tan exacerbada con las revueltas fiscales de los años setenta, ahora se podía cerrar, dado que todo el mundo estaba abocado a la lógica de la transmisión de la riqueza familiar. Sin duda, es en este sentido concreto en el que Clinton percibió una alianza secreta entre la asistencia social basada en activos y la promoción de los valores familiares.

Pero también aquí es donde podemos identificar una contradicción latente dentro de la estrategia de la Tercera Vía de la asistencia social basada

¹⁰⁰ Gary Dymksi, «Racial Exclusion and the Political Economy of the Subprime Crisis», *Historical Materialism*, vol. 17, núm. 2, 2009, pp. 160-161.

¹⁰¹ Gary Dymksi, Jesús Hernández y Lisa Mohanty, «Race, Gender, Power, and the US Subprime Mortgage and Foreclosure Crisis: A Meso Analysis», *Feminist Economics*, vol. 19, núm. 3, 2013, pp. 124-151.

en activos. Después de todo, ¿cómo es posible superar las desigualdades democratizando un instrumento jurídico que, por su propia naturaleza, está diseñado para privatizar la riqueza? ¿Se puede lograr la socialdemocracia mediante la generalización de la herencia? Probablemente, esta tensión es intrínseca a todas las formas de socialdemocracia y ha estado en el corazón de los debates sobre la herencia desde las grandes expropiaciones patrimoniales de la Revolución Francesa y posteriores.¹⁰² Por su propia naturaleza, la socialdemocracia solo puede resolver parcialmente la tensión entre la riqueza privada y el ideal político de igualdad; después de todo, si eliminara por completo la institución de la herencia, se volvería indistinguible del socialismo. Así en el mejor de los casos, puede ofrecer panaceas a los problemas de la mala distribución tratando de aumentar los ingresos ganados (salarios) en relación con los ingresos no procedentes del trabajo (riqueza) o introduciendo algún tipo de fiscalidad progresiva. Sin embargo, la tensión se vuelve extrema en la agenda política contemporánea de la asistencia social basada en activos dado que esta última se propone la imposible tarea de lograr la igualdad mediante la generalización de la riqueza heredada. Aquí encontramos la expresión perfecta de las tendencias compensatorias del capital, tal y como teorizó Marx: la coexistencia de un impulso democrático que parece superar las rigideces del estatus heredado con una tendencia igualmente contundente hacia la reinención y la generalización de la propia herencia. Así, la primogenitura y la vinculación se abolieron por primera vez en el siglo XVIII; a finales del siglo XIX se permitió que las mujeres casadas heredaran propiedad; y a principios del siglo XXI, las reglas de la herencia cambiaron para incluir a las parejas del mismo sexo y a su descendencia. En cada coyuntura, la forma establecida de herencia se disuelve solo para que otra resurja en su lugar, más democratizada, pero no menos implacable.

Sin duda no es una coincidencia, después de todo, que el experimento político más celebrado por la asistencia social basada en activos persiguiera explícitamente formar a la población pobre en ingresos en el arte de gestionar un fondo fiduciario. Puesto en marcha en forma de programa piloto en Estados Unidos, pero abrazado de forma más integral en Gran Bretaña con Tony Blair, el Child Trust Fund [Fondo Fiduciario para la Infancia] se diseñó para ampliar los beneficios de la acumulación familiar de activos a todos los niños y niñas.¹⁰³ En declaraciones públicas sobre el programa,

¹⁰² Jens Beckert, «Are We Still Modern? Inheritance Law and the Broken Promise of the Enlightenment» en Guido Erreygers y John Cunliffe, *Inherited Wealth, Justice and Equality*, Londres, Routledge, 2013, pp. 70-80.

¹⁰³ Lanzado en 2005, pero retroactivo hasta 2002, el Fondo Fiduciario para la Infancia dotaba a cada niño o niña recién nacido de una suma de 250 libras (500 libras para los hogares de ingresos más bajos), dinero que los progenitores podían invertir en varios fondos privados respaldados por el gobierno. Los progenitores podían completar el fondo fiduciario

Blair presentaba el Fondo Fiduciario para la Infancia como una iniciativa para democratizar la herencia en sí misma:

Superar las desigualdades de riqueza e ingresos que dejan a algunas personas atrás es uno de los mayores desafíos que afronta Gran Bretaña. No solo deberíamos aspirar a ser una democracia de propietarios, sino una democracia en la que la propiedad de riqueza esté abierta a todo el mundo [...] Estamos ampliando a todo el mundo lo que la población rica da por sentado. Nuestros bonos bebé otorgan a cada niño las ventajas que se obtienen de alcanzar la edad adulta respaldado por una red financiera, al tiempo que amplía el hábito del ahorro a todo el mundo.¹⁰⁴

De forma similar, Bruce Ackerman y Anne Alstott, pioneros en la propuesta de la sociedad de accionistas, aclamaron el Child Trust Fund como una forma de «herencia ciudadana» que de algún modo podría neutralizar las desigualdades asociadas tradicionalmente a la acumulación de riqueza privada:

Los adultos jóvenes reciben el dinero independientemente de si sus progenitores son accionistas o profesores, informáticos o trabajadores de la construcción. Todos ellos han ayudado a forjar Gran Bretaña, y todos tienen derecho a exigir la parte correspondiente de riqueza para sus hijos que ellos han ayudado a generar. La herencia privada funciona de forma muy diferente, los niños reciben el dinero sobre la base de la sangre, no del esfuerzo de la ciudadanía común [...] La herencia ciudadana no solo se basa en nociones básicas de justicia. Además proporciona unos fondos iniciales a cada británico cuando comience su edad adulta y realmente le hagan falta.¹⁰⁵

con hasta 1.200 libras cada año y recibían dos contribuciones del gobierno sucesivas antes de que quedara a disposición del niño o la niña cuando cumpliera 18 años. Parece ser que Michael Sherraden inspiró directamente la idea del Fondo Fiduciario para la Infancia, después de que el Institute for Public Policy Research [IPPR, Instituto de Investigación de Políticas Públicas] lo invitara a intervenir ante Tony Blair y el Partido Laborista británico en 2001. Véase Michael Sherraden, «Assets and Public Policy», en Michael Sherraden, *Inclusion in the American Dream: Assets, Poverty, and Public Policy*, Oxford, Oxford University Press, 2005, p. 16 n. 10.

¹⁰⁴ Tony Blair, «The Saving Grace of the Baby Bond: The Child Trust Fund Will Turn Hope into Realistic Ambition», *The Guardian*, 10 de abril de 2003. La promesa de Blair de que la sociedad británica no tardaría en convertirse en una democracia de herederos no era nueva en sí, sino que la habían promovido voces conservadoras defensoras de la vivienda en propiedad en los años ochenta y noventa. Chris Hamnett cita de Nigel Lawson, ministro de Hacienda, quien en 1988 declaró que «Gran Bretaña está a punto de convertirse en una nación de herederos. La herencia, que había sido patrimonio de unos pocos, ahora se convertirá en la realidad vital de muchos. Las gente heredará casas y posiblemente también acciones y participaciones». Chris Hamnett, *Winners and Losers: Home Ownership in Modern Britain*, Londres, UCL Press, 1999, p. 125.

¹⁰⁵ Bruce Ackerman y Anne Alstott, «Inherit the Windfall: Funding Baby Bonds with Tax on Private Inheritance Is Both Fair and Just», *The Guardian*, 11 de octubre de 2007. El

Según cierto análisis, a pesar de esas grandes ambiciones, el objetivo del Fondo Fiduciario para la Infancia nunca fue la redistribución integral de la riqueza, más bien tenía el propósito más modesto de impulsar una cultura de inversión, a lo que yo añadiría, una cultura de acumulación específicamente familiar, entre la población pobre en activos.¹⁰⁶ A falta de aplicar una reforma radical del sistema fiscal y una redistribución forzosa de la riqueza, estos proyectos tienen pocas posibilidades de lograr los objetivos democráticos a largo plazo que dicen perseguir. Aquí de nuevo podemos señalar la contradicción inherente al corazón de las políticas basadas en activos de la Tercera Vía. Quienes defienden la asistencia social basada en activos bien podrán proclamar su apoyo al sistema fiscal progresivo de riqueza heredada, pero en la práctica su defensa de la lógica de la riqueza familiar se pone en marcha para socavar cualquier inversión popular en dicho proyecto.¹⁰⁷ Esta contradicción es lo que ha hecho que la asistencia social basada en activos resulte tan fácil de recuperar por parte de la derecha.

Minorías contra el impuesto de transmisión de bienes: democratizar la revuelta del contribuyente

Como en tantas otras estrategias de la Tercera Vía, el proyecto de Clinton para la democratización de la propiedad de la vivienda era en cierto modo un arma de doble filo: después de todo, se podía prestar a la causa del populismo republicano con la misma facilidad, con su paranoia enardecidora y su oposición mucho más radical a los impuestos redistributivos. Esta fue precisamente la idea que persiguió George W. Bush, quien publicó su propio *Blueprint for the American Dream* [Proyecto para el sueño americano] inmediatamente después de su ascenso al poder en 2001, al tiempo que se disponía a comercializar la causa de la ampliación de la vivienda en propiedad entre el electorado demócrata tradicional.¹⁰⁸ Bush impulsó la liberalización del crédito mucho más que sus predecesores, aprobando una nueva legislación que impedía la intervención estatal para regular a los agentes hipotecarios privados, las mismas instituciones que emitían el

artículo critica que el Partido Laborista no combinara el Child Trust Fund con un impuesto de transmisión de bienes progresivo.

¹⁰⁶ Alan Finlayson, «"What Will Yours Grow Into": Governmentality, Governance, Social Science and the Child Trust Fund», *Policy and Politics*, vol. 39, núm. 4, 2011, pp. 547-548.

¹⁰⁷ El respaldo a los impuestos progresivos en la riqueza heredada parece ser uno de los puntos menos ambiguos de diferenciación entre quienes defendían la Tercera Vía de asistencia social basada en activos y quienes, desde la derecha, optaban por la sociedad de propietarios e iniciativas similares.

¹⁰⁸ Department of Housing and Urban Development, *Blueprint for the American Dream*, octubre, Washington DC, HUD, 2002. Disponible on line en <http://archives.hud.gov/initiatives/blueprint/blueprint.pdf> (consultado por última vez el 1 de octubre de 2015).

grueso de los préstamos *subprime* a prestatarios no aptos. Sin embargo, lo que resultó más afortunado fue el hecho de que la victoria de Bush coincidió con el final del boom de las punto.com y la transición de un periodo de inflación de activos a otro. Cuando los precios de las acciones se desplomaron a principios de siglo, Greenspan trató de evitar una recesión reduciendo los tipos de interés a mínimos históricos mientras que los inversores trasladaron fondos del Dow Jones al mercado inmobiliario residencial, con sus bonos de titulización hipotecaria de alto rendimiento y sus obligaciones de deuda cubiertas por garantías.¹⁰⁹ La progresiva y aún cautelosa liberalización del crédito que había iniciado Clinton ahora daba paso a una auténtica explosión de hipotecas exóticas y de tipo ajustable diseñadas para introducir tantos prestatarios de alto riesgo en el mercado del crédito de consumo como fuera posible. Y a medida que el crédito barato alimentaba más y más la adquisición de viviendas, los precios inmobiliarios entraron en una dramática espiral ascendente que parecía incluir a todo el mundo en su promesa aspiracional.

Durante su campaña electoral, el jefe de estrategia de Bush, Karl Rove, le señaló que la inclusión de las minorías en la lógica del patrimonio heredable, incluso en la forma condicionada y aspiracional de la deuda hipotecaria, convertiría al menos a parte del electorado demócrata tradicional en aliados del Partido Republicano.¹¹⁰ En ningún otro momento se confirmó más claramente esta intuición que en la campaña contra el impuesto de transmisión de bienes que, en el momento de la victoria de Bush en 2001, había logrado un sorprendente número de apoyos entre votantes de las minorías. Ya a principios de los años noventa, en un momento en el que Clinton defendía las virtudes de la asistencia social basada en activos, las voces republicanas de la reforma fiscal se dirigían a los propietarios de vivienda aspiracionales convertidos en nuevos reclutas en la campaña contra el «impuesto a la muerte». Quienes llevaron a cabo estas campañas centraron sus energías precisamente en aquellas minorías a las que ahora cortejaban los agentes hipotecarios privados: población afroamericana y latina, mujeres solteras, gays y lesbianas. Se enviaron delegaciones a la National Association of Women Business Owners [Asociación Nacional de Mujeres Empresarias Propietarias], a la National Black Chamber [Cámara de Comercio Nacional Negra], a la National Indian Business Association [Asociación Nacional de Empresas Indias], a la US Hispanic Chamber of Commerce [Cámara de Comercio Hispano-estadounidense], a la US Pan Asian American Chamber of Commerce [Cámara de Comercio Panasiática

¹⁰⁹ E. Ray Canterbury, *Alan Greenspan: The Oracle Behind the Curtain*, Singapur, World Scientific, 2006, pp. 126-128.

¹¹⁰ Edmund L. Andrews, *Busted: Life Inside the Great Mortgage Crunch*, Nueva York, Norton, 2009, pp. 36-37.

Estadounidense], a la Texas Conference of Black Mayors [Conferencia Texana de Alcaldes Negros] y a muchas más asociaciones de minorías, con la esperanza de convencerles de que la riqueza recién adquirida estaba en riesgo de expropiación por el llamado impuesto a la muerte. En 2001, como apuntan Michael Graetz e Ian Shapiro, «un verdadero arcoíris de grupos minoritarios exigieron activamente su retirada», convencidos de que su acceso reciente y condicionado a la riqueza familiar se veía amenazado por un impuesto que solo afectaba al 2 % de los hogares más ricos.¹¹¹ Probablemente fue esta extraordinaria ola de apoyo popular y bipartito lo que permitió a Bush sacar adelante su rechazo temporal al impuesto de transmisión de bienes.¹¹²

La «sociedad de propietarios» de Bush era casi idéntica en sus detalles a la «asistencia social basada en activos» de la era de Clinton, y aun así su retórica se centraba insistentemente en las virtudes de la herencia en lugar de en la redistribución, haciendo explícito lo que no se decía y se negaba en la estrategia de la Tercera Vía de Clinton. Así, la campaña contra el «impuesto a la muerte» pilló a la administración Clinton desprevenida en el momento en que aquella logró reclutar a varios integrantes del Congressional Black Caucus [Comité Negro del Congreso] para su causa. Cuando el congresista de Georgia Sanford Bishop defendió la retirada, utilizó argumentos muy similares a los de la población blanca que protestaba contra los impuestos en los años setenta: «El "impuesto a la muerte" representa todo lo que es injusto de la estructura impositiva estadounidense en tanto menoscaba el trabajo y los ahorros de toda una vida de muchos estadounidenses que solo quieren dejarles a sus hijos y a sus nietos los frutos de su esfuerzo y de la realización del sueño americano».¹¹³

A pesar de que los republicanos se habían opuesto al matrimonio entre personas del mismo sexo, sus aliados en el movimiento contra el impuesto lograron convencer a un número sorprendente de gays y lesbianas de que las familias que acababan de formar sufrían la carga doblemente injusta del impuesto de transmisión de bienes: en primer lugar, cuando el primero de los cónyuges falleciera y en segundo lugar, cuando fallecía el cónyuge superviviente. Dado que no estaban casados, gays y lesbianas no podían acceder a la «deducción conyugal» del impuesto de transmisión de bienes y por lo tanto sufrían la penalización del no reconocimiento de sus

¹¹¹ Michael J. Graetz e Ian Shapiro, *Death by a Thousand Cuts: The Fight over Taxing Inherited Wealth*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2005, p. 73.

¹¹² Con la aprobación de la Ley de reconciliación de crecimiento económico y alivio fiscal de 2001, Bush aumentó gradualmente el umbral de exención a 3,5 millones de dólares y eliminó el impuesto de transmisión de bienes en su integridad en el año 2010. Sin embargo, legislación posterior aprobada en 2010 y 2012 reintrodujo el impuesto con un umbral de exención mayor.

¹¹³ Citado en Graetz y Shapiro, *Death by a Thousand Cuts...*, p. 69.

relaciones. El argumento tuvo tanto éxito que en 2001 hasta un 61 % del electorado demócrata autodefinido como gay se declaró a favor de la retirada del impuesto de transmisión de bienes.¹¹⁴

El éxito de la campaña republicana contra el impuesto de transmisión de bienes hace pensar que el punto de inflexión vivió a finales de los años setenta, cuando la clase media blanca propietaria dejó de defender el Estado de bienestar, también había tenido lugar entre el electorado de las minorías. Integrantes de la Fundación Ford que, de acuerdo con sus principios, apoyaban los impuestos a la riqueza heredada y que habían defendido la asistencia social basada en activos calcularon muy mal el valor afectivo de la vivienda privada en propiedad en un contexto de declive del bienestar social. Como intuyó Karl Rove, el efecto a largo plazo de la asistencia social basada en activos no era tanto democratizar la riqueza, algo que hacía solo de forma temporal y de modo aspiracional con el creciente endeudamiento de los hogares, sino más bien reclutar la simpatía política de la población empobrecida hacia la riqueza heredada.

Que la democratización de la riqueza mediante el crédito a largo plazo era una hazaña imposible quedó más que confirmado con la crisis de las *subprime* de 2007, la cual provocó un claro declive de la riqueza estadounidense media. Los hogares encabezados por población afroamericana, latina o por mujeres en particular experimentaron durante este periodo pérdidas de riqueza dramáticas resultado de la caída de los precios de la vivienda, los préstamos inmobiliarios sumergidos y las ejecuciones hipotecarias; la crisis supuso un enorme paso atrás para quienes ya estaban entre los más empobrecidos en términos de patrimonio.¹¹⁵ Esta repentina y brutal negación de la promesa aspiracional del crédito —única respuesta política del neoliberalismo a la creciente desigualdad— ha reforzado las profundas divisiones sociales entre estadounidenses en la prolongada etapa poscrisis. Una vez que se acabó con el efecto mitigador de la ampliación del crédito, era inevitable que la verdadera polarización de los salarios y la riqueza estadounidense se restableciera en su forma más cruda. Quizás a largo plazo esta crisis permitirá una nueva alianza interracial e intergéneros entre la población pobre estadounidense. Sin embargo, de momento, parece haber revivido y radicalizado el nativismo perverso de la revuelta fiscal blanca personalizado en Donald Trump.

¹¹⁴ Luntz Research Companies Memorandum, «The Death Tax and Gay and Lesbian Americans», 24 de abril de 2001. Disponible on line en <http://www.center4studytax.com/pub.htm#gaysurvey>. Citado en Graetz y Shapiro, *Death by a Thousand Cuts...*, p. 73.

¹¹⁵ Edward N. Wolff, «Household Wealth Trends in the United States». E. Ray Canterbury identifica resultados similares ante el boom del mercado financiero de los años noventa. Véase Canterbury, *Wall Street Capitalism...*, pp. 9-10, 210-211.

El matrimonio homosexual y el impuesto de transmisión de bienes

La relación entre los mercados de crédito neoliberales, la raza y el género se ha visto sujeta a intenso análisis en los últimos años, estas mismas políticas han operado de distintas formas sobre quienes (también o exclusivamente) se definían por su sexualidad no normativa; en gran medida debido al hecho de que la población no heterosexual no pertenece a una clase, a una raza o a un género en concreto y habita todos los niveles de la escala de ingresos y riqueza. De hecho, la homofobia política de la era de posguerra resulta llamativa en la medida en que era la única forma de violencia estatal que podía desarticular seriamente los privilegios del ciudadano blanco. Durante este periodo, aparte de los antecedentes penales, a los hombres blancos solo se les podía negar el derecho al crédito y a la propiedad por un motivo: que fueran abiertamente homosexuales. Esta exclusión no solo se ejecutaba por medios legales (por ejemplo, la prohibición efectiva de alquilar a homosexuales reconocidos que se recogía en las directrices federales de vivienda), sino también y probablemente más a menudo por medio de la homofobia familiar. Sus consecuencias se hicieron aterradoramente reales en el momento álgido de la crisis del sida cuando los hombres gais fueron definidos como «riesgos no asegurables», privados de atención sanitaria, expulsados de los hogares que habían compartido con un amante o deshabilitados para recibir la propiedad de un cónyuge fallecido. No fue hasta 1997 cuando Judith Butler logró conceptualizar de forma plausible a gais y lesbianas como una clase económica definida por su simple exclusión del derecho hereditario y de las normas actuariales de riesgo asegurable.¹¹⁶

¹¹⁶ En un intercambio con Nancy Fraser, Butler defiende que la distribución y herencia de la propiedad yace inevitablemente en las estructuras sociales de parentesco, reproducción sexual e identidades normativas de género. A diferencia de Fraser, Butler concluye que no es útil separar las políticas de «redistribución» de las políticas de estatus o «reconocimiento». El argumento de Butler se centra en particular en aquellos casos en los que «se excluye rigurosamente a lesbianas y gais de las nociones de familia sancionadas por el Estado (que, de acuerdo con el derecho fiscal y de propiedad, es una unidad económica), se les da el alto en la frontera, se les considera inadmisibles para la ciudadanía [...], se les niega el derecho, como miembros del ejército, a manifestar sus deseos o la ley les desautoriza para tomar decisiones médicas de emergencia sobre sus parejas moribundas o a recibir propiedades de las mismas» (p. 273). Continúa preguntándose: «¿Es realmente posible decir que las personas homosexuales no constituyen una "clase" diferencial, teniendo en cuenta cómo la organización de la asistencia médica y farmacológica, basada en el beneficio, impone cargas diferenciales a quienes viven con VIH y sida? ¿Cómo vamos a entender la producción de la población con VIH como una clase de deudores permanentes? Las tasas de pobreza entre lesbianas, ¿no merecen ser tenidas en cuenta en relación con la heterosexualidad normativa de la economía?» (ibídem). El artículo resulta fascinante como esfuerzo por pensar la economía sexual y política conjuntamente. Sin embargo, la inclusión preventiva de la sexualidad no normativa dentro de la categoría de «clase» eclipsa el hecho de que el queerismo se da precisamente además de la clase, dado que se distribuye por todas ellas. Véase Judith Butler, «Merely Cultural», *Social Text*, núm. 52/53, 1997, pp. 265-277, y Nancy

Sin embargo, en retrospectiva, parece claro que la crisis del sida también supuso un punto decisivo en la relación histórica entre los hombres gays y el capital estadounidense. La invención de antirretrovirales y la consiguiente conversión del VIH en una enfermedad crónica, en lugar de una sentencia de muerte, coincidió con un nuevo momento expansionista en el mercado del crédito al consumo, en tanto la demanda por parte de la clase inversora de títulos respaldados por la deuda de los consumidores convenció a los prestamistas a comercializar agresivamente el crédito a los nuevos nichos de mercado no explotados hasta entonces. Al mismo tiempo que los agentes hipotecarios y otros prestamistas se desplazaron al «mercado inferior» para acceder a quienes hasta entonces no tenían cuenta bancaria para comercializar préstamos rápidos, hipotecas *subprime* y otras formas de crédito no habituales, esos mismos prestamistas también accedieron al «mercado superior» de un nicho de alto nivel compuesto por consumidores gays supuestamente adinerados, que suponían un riesgo, pero ofrecían lealtad.

Desde principios de los años noventa, los agentes de servicios financieros y los prestamistas al consumo se embarcaron en una extraordinaria hazaña para capturar el «mercado gay», ofreciendo desde tarjetas de crédito específicas hasta productos hipotecarios especializados y servicios jurídicos concretos en su esfuerzo por atraer a este escurridizo grupo demográfico hasta ahora invisible.¹¹⁷ Surgida al final de la grave crisis del sida de los años ochenta, esta exuberante introducción en el mundo del crédito al consumo parecía señalar la desaparición de una antigua homofobia más cruda, la que definían las normas del salario familiar y sus contundentes formas de exclusión. Los hombres gays, que en el punto más álgido de la crisis del sida se consideraban no asegurables, ahora presentaban un riesgo de crédito excepcionalmente bueno y se consideraban consumidores ideales de servicios financieros. Los hombres que se habían visto amenazados por los desahucios en los años ochenta, eran ahora cotizados agentes de la gentrificación. Otros, que habían visto cómo sus familiares anulaban sus testamentos, fueron cortejados por asesores jurídicos que les ofrecían poner en orden sus herencias. Después de haber sido rechazados tanto tiempo, los hombres blancos gays (retratados uniformemente como de elevados ingresos, propietarios y sin hijos) se convirtieron en el fetiche del nicho de mercado perfecto y se usaron para representar el «mercado gay»

Fraser, «Heterosexism, Misrecognition, and Capitalism: A Response to Judith Butler», *ibídem*, pp. 279-289.

¹¹⁷ Existen varios relatos interesantes sobre las interacciones entre las políticas *queer* y el consumismo durante este periodo. Sin embargo, estos relatos se mantienen en su mayoría en el marco del fetichismo de la mercancía y no analizan las dinámicas específicas del crédito de consumo titulizado. Alexandra Chasin, *Selling Out: The Gay and Lesbian Movement Goes to Market*, Nueva York, Macmillan, 2000; Eric O'Clarke, *Virtuous Vice: Homoeroticism and the Public Sphere*, Durham (NC), Duke University Press, 2000; Katherine Sender, *Business, Not Politics: The Making of the Gay Market*, Nueva York, Columbia University Press, 2004.

en sí mismo, una suposición que se basaba en datos demográficos muy concretos de las revistas de estilo de vida gay y que luego se desmintió.¹¹⁸

A pesar de la demografía del mercado, evidentemente las prácticas sexuales no normativas no son criterio suficiente para la constitución de una clase. Lo queer es más bien transversal a la clase, atraviesa todos los estratos de raza y género e incorpora personas de todo el espectro de ingresos y riqueza. Aun así, la ampliación del crédito en el mercado de estilos de vida no normativos tuvo el efecto de oscurecer estas diferencias y hacer que todos los gais y lesbianas parecieran igualmente ricos. Mientras el mercado del crédito al consumo intentaba poner precio a todas las posibilidades de riesgo y parecía que todo el mundo podría disfrutar de los beneficios del consumo inmediato, era posible creer que las diferencias de clase, raza y género ya no importaban. Tanto para agentes de crédito, como para analistas culturales, la rápida ampliación del crédito titulado parecía afirmar la intercambiabilidad de los marcadores de identidad y la perfecta liquidez de los perfiles de riesgo. La creación de un «mercado gay» tuvo un impacto tangible en los activismos que surgieron después de la crisis del sida de los años ochenta. A medida que los anunciantes, la banca de consumo y los agentes hipotecarios concurrían en el mercado gay como fuente potencial sin explotar, gran parte de la ola de activismo de la Coalition to Unleash Power [Coalición por la Liberación del Poder, ACT UP] de los años posteriores al sida se redefinió según la imagen que ofrecía la demografía del mercado. Con esta reiteración performativa de los espacios de consumo y la semiótica, la organización Queer Nation celebraba la liquidez de la identidad, en gran parte en la misma medida en que el mercado del crédito al consumo titulado afirmaba la liquidez de los diversos perfiles de riesgo y la rentabilidad del riesgo no estándar.¹¹⁹ En retrospectiva, de hecho, en los años noventa la propia teoría queer parece impregnarse del espíritu de los mercados de crédito titulados. Mientras que gran parte de este trabajo teórico, sin duda *El género en disputa* de Butler, pretendía entablar una polémica contra el esencialismo biológico residual del feminismo de la segunda ola, se interpretó erróneamente como una negación de las desigualdades reales y una celebración utópica de la mutabilidad voluntaria de las identidades.¹²⁰

¹¹⁸ M. V. Lee Badgett, «Beyond Biased Samples: Challenging the Myths of the Economic Status of Lesbians and Gay Men», en Amy Gluckman y Betsy Reed, *Homo Economics: Capitalism, Community, and Lesbian and Gay Life*, Nueva York, Routledge, 1997, pp. 65-71.

¹¹⁹ Para una lectura intensiva de Queer Nation, véase Lauren Berlant y Elizabeth Freeman, «Queer Nationality» en Michael Warner, *Fear of a Queer Planet: Queer Politics and Social Theory*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1993, pp. 193-229.

¹²⁰ Judith Butler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, Londres, Routledge, 1990 [ed. cast. *El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad*, trad. por María Antonia Muñoz García, Barcelona, Paidós Ibérica, 2007] y *Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex*, Londres, Routledge, 1993 [ed. cast. *Cuerpos que*

Esta utopía tenía paralelismos claros en la literatura sobre la financiación del consumo. Uno de los partidarios más célebres del boom del consumo financiero, el economista de Princeton Robert Shiller, sugirió que las nuevas técnicas de evaluación del riesgo de crédito, combinadas con la titulización, habían permitido tasar y por lo tanto asegurar cualquier riesgo de crédito, incluidos los más exóticos o no normativos.¹²¹ Los riesgos de prestatarios que en el pasado se habrían considerado demasiado peligrosos como para ser asegurados se podían ahora desviar indefinidamente a través de los medios alternativos de los derivados de crédito. Los riesgos no asegurables o, en términos estadísticos, no normalizables, se podían proteger en un proceso proliferante o fractalizante más que normativo, abriendo así oportunidades de crédito inéditas para el prestatario no tradicional. Era precisamente esa visión de la inclusión democrática más allá de la norma lo que celebraban Queer Nation y sus grupos de afinidad. Aunque el historial jurídico de Clinton con los derechos de los gais había sido ambiguo en el mejor de los casos, este impulsó un boom del crédito al consumo, que resultó más que dispuesto a reconocer el valor de los estilos de vida no normativos; él que había defendido la política del «No preguntes, no lo cuentes» y la aprobación de la ley de defensa del matrimonio. Como acertadamente insistía Queer Nation, sus políticas de consumo performativo no consistían en la asimilación, sino en las inversiones que permitía el crédito en múltiples posibilidades de estilo de vida más allá de la norma.¹²²

Muchos analistas han apuntado la extraña ambivalencia de las políticas de Queer Nation: el hecho de que se declarara incompatible con el ánimo de lucro a la vez que limitaba su activismo al espacio de consumo; el hecho de que celebrara la absoluta liquidez de los marcadores de identidad al mismo tiempo que privilegiaba implacablemente a los hombres blancos gais; y por encima de todo el hecho de que su espectacular actuación de lo no normativo diera paso tan rápidamente a los tipos más sobrios de la política de respetabilidad.¹²³ Sin embargo, no es casualidad que el reconocimiento legal de

importan: sobre los límites materiales y discursivos del sexo, trad. por Alcira Bixio, Buenos Aires, Paidós Ibérica, 2003]. En el prefacio de Butler en *Cuerpos que importan* expone su recelo con respecto de la lectura «voluntarista» de *El género en disputa* (p. viii-x).

¹²¹ Robert J. Shiller, *Macro Markets: Creating Institutions for Managing Society's Largest Economic Risks*, Oxford, Clarendon, 1993, y *The New Financial Order: Risk in the 21st Century*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2003.

¹²² «No se trata de lo mayoritario, de los márgenes de beneficio, del patriotismo, del patriarcado ni de sentirse incluido. No se trata de directores ejecutivos, privilegio y elitismo. Se trata de estar en los márgenes, de definirnos, se trata de follarse el género y de los secretos, de lo que hay debajo del cinturón y en lo más profundo del corazón, se trata de la noche». *Queers Read This: A Leaflet Distributed at Pride March in New York*, junio de 1990. Disponible on line en <http://www.qrd.org/qrd/misc/text/queers.read.this> (consultado por última vez el 10 de junio de 2015).

¹²³ Véase, por ejemplo, Rosemary Hennessy, *Profit and Pleasure: Sexual Identities in Late Capitalism*, Londres, Routledge, 2000, pp. 126-129; Peter Drucker, *Warped: Gay Normality and Queer Anti-Capitalism*, Leiden, Brill, 2015, pp. 300-304.

la familia se convirtiera en una preocupación explícita y abrumadora del activismo gay durante este periodo, o que un activismo performativo mantenido a flote por la dinámica de la expansión del crédito se transformara tan rápidamente en una política de matrimonio. La ampliación del crédito al consumo respondió a estilos de vida y mercados de riesgo más allá de la norma, lo que parecía desvanecer las crudas formas de invisibilidad que habían reinado en el pasado. Sin embargo, el proceso de acumulación de activos con el que estaba necesariamente aliado y las formas de garantías que inevitablemente exigía, ejercieron un estímulo igualmente poderoso a la hora de imponer la autodisciplina dentro del marco legal de la herencia.

La paradójica relación entre la garantía y el crédito ayuda a comprender la continua atracción gravitacional del referente dentro de la semiótica de la performatividad. Si esta relación se olvida en el momento de mayor euforia mercantil, cuando todos los prestatarios pueden acceder al mercado con una garantía mínima o nula, se reafirma violentamente en los periodos de deflación de la deuda cuando los acreedores «reclaman» sus deudas y exigen la materialización inmediata de los activos. En cuanto los precios de los activos empiezan a caer en picado, los acreedores empiezan a buscar algún tipo de «valor fundamental» con el que hacer balance de sus posiciones y reiniciar el proceso de acumulación: se reevalúan las tasaciones de las propiedades (normalmente a la baja), se liquidan los riesgos malos y se aclaran los derechos de propiedad.¹²⁴ Si la relación entre el valor principal de la garantía y la promesa aspiracional del crédito puede parecer tenue, incluso infinitamente elástica, en la agonía de la revalorización de los activos, resulta servilmente referencial cuando la burbuja se desinfla, atando el crédito de nuevo a los puntos de amarre de los «valores reales» y de los derechos de propiedad estables. Sin embargo, lo que está en juego no es tanto un retorno a los fundamentos subyacentes (como si el valor de los activos pudiera determinarse de forma fiable fuera del contexto de las expectativas de revalorización o devaluación), sino una reafirmación positiva de los fundamentos en términos nuevos y convenientemente purificados. Esta dinámica ayuda a explicar por qué los prestatarios que sobrevivieron a la crisis crediticia fueron quienes ya poseían una garantía segura en forma de activos inmobiliarios reales, y no quienes accedieron al mercado en una fase tardía, confiando en salarios imprevisibles para reclamar la riqueza virtual de una casa hipotecada; también aclara por qué el boom inmobiliario acabó exacerbando la mala distribución de la riqueza en lugar de reducirla.¹²⁵ Si al principio la expansión del crédito parecía

¹²⁴ Se puede encontrar una explicación clásica en el trabajo de Irving Fisher, «The Debt-Deflation Theory of Great Depressions», *Econometrica*, vol. 1, núm. 4, 1933, pp. 337-357.

¹²⁵ Como apunta Jan Toporowski, existe una diferencia real entre quienes asumen riesgos de inversión con activos ya asegurados como garantía y quienes únicamente poseen activos crediticios. El propietario endeudado depende de la continua revalorización de los activos

liberar a los prestatarios de la tiranía de la riqueza familiar, en última instancia acabó reforzándola, especialmente para quienes se encontraban en el extremo inferior de la escala de ingresos y riqueza.

No es de extrañar, por tanto, que la demanda de reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, junto con sus formas legales de transmisión de la propiedad, se defendiera en el preciso momento en que se daba la bienvenida a los maricas en el mercado del crédito al consumo. Después de todo, ¿cuánto tiempo se puede mantener un estilo de vida a crédito sin una acumulación de riqueza a largo plazo suficiente para proporcionar una garantía? ¿Y para qué sirve la acumulación de riqueza sin alguna garantía de que no será expropiada por extraños? Si Butler había argumentado, a raíz de la crisis del sida, que los hombres gays como «clase» se definían por su exclusión de la familia como forma legal de transmisión de la propiedad, estos mismos hombres ahora reclamaban alto y claro el reconocimiento de sus relaciones como unidades legítimas de reproducción y herencia. La cuestión de la reproducción legítima, y de la herencia de forma más generalizada, ha sido central en las campañas a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. La jurisprudencia a este respecto no solo ha revivido la vieja y desacreditada distinción entre hijos legítimos e ilegítimos (reiterando de hecho el resurgimiento de tales distinciones en la reciente reforma de la asistencia social),¹²⁶ sino que también ha colocado la cuestión de la transmisión de la propiedad en el centro de sus reclamaciones por el reconocimiento legal.

Como han señalado algunos juristas desde hace tiempo, la herencia (sobre todo cuando se promulga sin la validación de un testamento) sigue estando obstinadamente ligada a las nociones tradicionales de la familia y casi invariablemente privilegiará las formas de parentesco legalmente reconocidas por encima de las parejas de elección o de afecto.¹²⁷ Si los

para superar los límites de los ingresos y la cancelación de la deuda, y siempre es vulnerable a las depreciaciones repentinas del valor de los activos. En palabras de Toporowski, «las personas ricas en activos tienen la financiación y los ingresos cubiertos por activos, y un riesgo cubierto no es un riesgo, o un riesgo percibido de forma puramente subjetiva. Los mayores riesgos los asume la población pobre en activos porque su financiación y sus ingresos no están cubiertos por activos y un riesgo no cubierto es un riesgo real». Toporowski, *Why the World Economy Needs a Financial Crash...*, p. 96.

¹²⁶ Nancy D. Polikoff, «The New Illegitimacy: Winning Backward in the Protection of the Children of Lesbian Couples», *Journal of Gender, Social Policy and the Law*, vol. 20, núm. 3, 2012, pp. 721-740; y Melissa Murray, «What's so New about the New Illegitimacy?», *Journal of Gender, Social Policy and the Law*, vol. 20, núm. 3, 2012, pp. 387-436.

¹²⁷ El derecho de sucesiones se ha resistido obstinadamente a la reforma y, sobre todo en los casos de muerte intestada (sin testamento), recupera las nociones de relaciones familiares legítimas que se han anulado en otros ámbitos del derecho de familia. Véase Frances H. Foster, «The Family Paradigm of Inheritance Law», *North Carolina Law Review*, núm. 80, 2001, pp. 199-273; Ralph C. Brashier, *Inheritance Law and the Evolving Family*, Filadelfia, Temple University Press, 2004.

poseedores de riqueza queer han de asegurarse algún tipo de derecho jurídico para legar sus bienes, sus relaciones deben ser validadas como «similares a la familia» y dotadas del mismo grado de legitimidad que el matrimonio heterosexual. No es ni mucho menos una coincidencia que, cuando la *Defense of Marriage Act* [DOMA, ley de defensa del matrimonio] fue finalmente anulada, lo fuera en un caso relacionado con los efectos desiguales del impuesto de transmisión de bienes en las parejas de gays y lesbianas.¹²⁸ Como hemos visto, es probable que el impuesto sobre el patrimonio solo afecte a las parejas más ricas y no tenga ningún impacto en la gran mayoría de las relaciones homosexuales. Y, sin embargo, la ampliación del crédito al consumo ha generalizado tanto la inversión aspiracional en la riqueza heredada que la reforma del impuesto de transmisión de bienes es cada vez más popular entre una amplia franja de votantes gays y lesbianas, y en los últimos años se ha convertido en el centro de los esfuerzos de la Human Rights Campaign [Campaña por los Derechos Humanos] y otros grupos políticos dirigida a redefinir a los ciudadanos «no normativos» como grupos de riesgo crediticio legítimo y titulares de riqueza.¹²⁹ Aquí podemos ver cómo el reconocimiento legal de las relaciones no normativas exige la reinención literal de la tradición, es decir, la inclusión de las relaciones antes criminalizadas en el ámbito de la reproducción legítima.

Se mire por donde se mire, el terreno recorrido por la política queer en las últimas tres décadas ha sido extremo, pasando de la antinormatividad radical de ACT UP y Queer Nation a la legitimidad reproductiva de la campaña por el matrimonio entre personas del mismo sexo. Vivimos en una época en la que la propia normatividad ya no parece desempeñar el papel abrumadoramente excluyente y, por tanto, central que tuvo en la regulación de la sexualidad a mediados y finales del siglo XX, a pesar de su prominencia como concepto en los estudios queer contemporáneos. Las ciencias sociales ya no definen el hecho de la sexualidad no normativa

¹²⁸ El caso en cuestión es *Estados Unidos contra Windsor*, 570 U.S., 2013, (Docket No. 12-307). El caso lo plantea Edie Windsor, cuya pareja, Thea Spyer, había fallecido en 2007. Ante la muerte de Thea, el gobierno federal se negó a reconocer su matrimonio y aplicó unos impuestos a la herencia que Edie recibió de Thea como si no mantuvieran ningún vínculo, de acuerdo con la llamada deducción matrimonial, que solo es de aplicación para parejas casadas legalmente. En junio de 2013, la Corte Suprema dictaminó que la sección tercera de la *Defense of Marriage Act* [o DOMA, Ley de defensa del matrimonio] era inconstitucional y que el gobierno federal dejaba de tener derecho a discriminar a las parejas del mismo sexo casadas a efectos de decidir las prestaciones y protecciones federales.

¹²⁹ Lisa Bennett y Gary G. Gates, *The Cost of Marriage Inequality to Gay, Lesbian and Bisexual Seniors: A Human Rights Campaign Foundation Report*, Washington DC, Human Rights Campaign, 2004. Disponible on line en http://tpcprod.urban.org/UploadedPDF/410939_cost_of_marriage_inequality.pdf (consultado por última vez el 1 de diciembre de 2015); William D. Steinberger, *Federal Estate Tax Disadvantages for Same-Sex Couples*, Los Angeles, Williams Institute, UCLA, 2009. Disponible on line en <http://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/Steinberger-Federal-Estate-Tax-Nov-2009.pdf> (consultado por última vez el 1 de diciembre de 2015).

como delictivo o patológico; tampoco es probable que desencadene toda una serie de intervenciones médicas y psiquiátricas por parte del Estado de bienestar y sus instituciones aliadas (aunque estas antiguas formas de estigmatización social están siendo rápidamente sustituidas por nuevos tipos de exclusión moral de influencia religiosa).

Vivimos en una época en la que la afirmación pública de la condición de homosexual ya no excluye automáticamente a una persona del empleo, el crédito o la vivienda (lo que no quiere decir que la homofobia ya no exista, ni mucho menos). De hecho, en el espíritu de la periodización del poder de Foucault, podríamos clasificar este periodo como posnormativo, si tomamos la normatividad para referirnos a las formas precisas de exclusión estadística que acompañaron y dieron forma al salario familiar fordista, junto con su expresión epistemológica en las ciencias biológicas, psicológicas y sociales, en las que los diferentes tipos de sexualidad se definían de forma apabullante en términos de desviación patológica. En este sentido, tal vez, Foucault tenía razón al considerar que el advenimiento del neoliberalismo marcaba el paso hacia una formación posnormativa del poder, en la que encontramos «una optimización de los sistemas de diferencia» en lugar de su subordinación a la norma.¹³⁰

Pero también es una época en la que se exige cada vez más que las relaciones de cualquier tipo se justifiquen en el marco de la reproducción legítima. En muchos contextos sociales, aunque no en todos, es mucho más probable que se acepte la sexualidad no normativa, siempre que la transmisión de bienes biológicos y económicos que conlleva, es decir, los hijos y la riqueza, esté debidamente legitimada dentro de la forma del matrimonio. En otras palabras, la línea divisoria socialmente significativa parece haberse desplazado de la expresión normativa y no normativa de la sexualidad a la relación legítima o ilegítima, ya que el matrimonio legalmente validado se convierte rápidamente en un requisito previo para el reconocimiento de unos derechos sociales mínimos. Al mismo tiempo, las nuevas formas más virulentas de homofobia recurren cada vez más al lenguaje de la ley moral y divina (en lugar de a la normatividad científico-social) para impugnar la expresión pública del deseo no heterosexual, aspecto que retomaremos en el capítulo 7. Aquí de nuevo se plantea la cuestión de la legitimidad y sus fuentes, divinas o seculares, más que la distribución de las normas. Quizás entonces debamos cuestionarnos la continua prominencia del término

¹³⁰ Foucault observó que en la obra de Gary Becker, las desviaciones de la norma ya no se categorizan bajo la rúbrica de lo patológico, sino que aparecen como un horizonte de oportunidades de mercado en expansión que deben incluirse, en la medida de lo posible, dentro de los términos del contrato. Michel Foucault, *The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978-1979*, Frédéric Gros, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2008, pp. 259-260 [ed. cast. *Nacimiento de la biopolítica*, trad. por Horacio Pons, Akal, Madrid, 2009].

«normatividad» dentro del debate contemporáneo de las políticas sexuales. Después de todo, lo que está en juego en los debates en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo no es tanto la homonormatividad como la homolegitimidad, una demanda de inclusión que es al mismo tiempo radicalmente antinormativa e implacablemente tradicionalista,¹³¹ y, en el otro lado, no es tanto la heteronormatividad como una visión de la moralidad basada en el lenguaje teológico de la ley natural.

¹³¹ Lisa Duggan define la nueva homonormatividad como una política sexual neoliberal que «no impugna los supuestos e instituciones heteronormativos dominantes, sino que los mantiene y los sostiene, al tiempo que promete la posibilidad de una circunscripción gay desmovilizada y una cultura gay privatizada y despolitizada anclada en la domesticidad y el consumo». *The Twilight of Equality? Neoliberalism, Cultural Politics, and the Attack on Democracy*, Boston, Beacon Press, 2003, p. 50. La muy influyente definición de Duggan se basa en una distinción entre la política *queer*, por un lado, y una política gay y lesbiana «homonormativa», por otro. Sin embargo, me parece que el impulso hacia nuevas formas de legitimación no fue iniciado por la «vieja» política gay y lesbiana, donde encontramos una crítica mucho más fuerte del matrimonio y la familia, sino más bien por la «nueva» política queer antinormativa y antiasimiladora representada por grupos como Queer Nation, donde es mucho más probable encontrar la noción de que instituciones como el matrimonio o la diferencia de género pueden ser resignificadas performativamente. Aunque ciertamente no es comparable con el estridente conservadurismo de los republicanos homosexuales, se puede argumentar que la política de performatividad de Queer Nation ya encarnaba una forma de conservadurismo latente, es decir, su actuación de inclusión trabajaba activamente para liquidar la cuestión de la desigualdad económica en su relación con el género, la raza y la sexualidad.

V

EL PRECIO DE LA PROMISCUIDAD: LA ESCUELA DE CHICAGO SE ENFRENTA AL SIDA

Desde el punto de vista de la sociedad, una persona soltera es un accidente a punto de ocurrir. Es probable que las cargas contingentes recaigan inmediatamente y de forma aplastante sobre personas que ya hacen frente a sus propios problemas, sus familiares, sus amigos, sus vecinos [...] y después en ONG o en agencias de asistencia social [...] Por sí solo, el matrimonio es la primera línea de apoyo de la sociedad, y a menudo también la segunda y la tercera, para la persona con problemas. Un marido o una mujer es el trabajador social de referencia, el psiquiatra de referencia, el policía, el asesor, la aseguradora, la enfermera y el agente del teléfono de emergencias de referencia.

Jonathan Rauch, *Gay Marriage*

¿CUÁL ES EL PAPEL de la intervención pública ante la crisis sanitaria provocada en gran medida por decisiones privadas entre adultos conscientes? Esta es la cuestión que plantean Richard Posner y Tomas Philipson, dos exponentes fundamentales de la Escuela de Chicago de derecho y economía, en una obra sobre la epidemia de sida publicada en 1993.¹ Un ejemplo excelente del imperialismo de la economía estratégica de la Escuela de Chicago de derecho y economía es su metodología, que se propone aplicar los preceptos del comportamiento económico racional a todos los ámbitos de la vida social, incluido el derecho. Su éxito institucional, primero en Chicago, después en las escuelas de derecho de élite de Estados Unidos y luego en todo el currículum jurídico anglosajón le debe mucho al trabajo previo de Aaron Director, una figura clave en el desarrollo inicial de la economía de la Escuela de Chicago. Su impacto epistémico y judicial proviene de las contribuciones académicas de Ronald Coase, cuyo texto clásico de

¹ Tomas J. Philipson y Richard A. Posner, *Private Choices and Public Health: The AIDS Epidemic in an Economic Perspective*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1993. Richard A. Posner se considera uno de los fundadores del movimiento del derecho y la economía. Tomas Philipson fue alumno posdoctoral de Gary Becker en la Universidad de Chicago en los años noventa y más tarde se especializó en economía de la salud. Véase Johan Van Overtveldt, *The Chicago School: How the University of Chicago Assembled the Thinkers who Revolutionized Economics and Business*, Chicago, Agate, 2007, pp. 148-149.

1960 sobre el problema de los costes sociales sirvió para acabar con la aceptación generalizada del capitalismo del Estado de bienestar; y también de Richard Posner, integrante de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el séptimo distrito durante la era Reagan y prolífico escritor cuyos numerosos libros han hecho mucho por popularizar el derecho y la economía entre el público en general.²

El planteamiento económico y jurídico se basa en el supuesto de que todos los ámbitos de la vida social, incluida la sexualidad, se pueden analizar como un mercado en el que los «precios» no son solo indicadores económicos, sino también medidas de riesgo. «Dicho trabajo se basa en el punto de vista de que las personas no dejan de actuar racionalmente, no dejan de responder de repente a los incentivos, cuando salen del mercado y se van a casa, o en su caso (podríamos añadir) a un bar de solteros, a una sauna homosexual o a una "sala de inyección" en la que personas adictas se pinchan con jeringuillas que comparten con gente desconocida».³ Incluso «los mercados no mercados» se pueden analizar según este modelo, si tenemos en cuenta que todas las transacciones implican un cálculo del precio umbral (o riesgo) asociado a cualquier acto sexual dado. «En resumen, deberíamos proceder sobre el supuesto de que el mercado de los "intercambios" sexuales de riesgo (o de forma similar, en el que se comparten agujas hipodérmicas que no han sido desinfectadas) es, en sus rasgos más característicos, muy parecido a otros mercados que estudia la economía. La cuestión es solo dejar claro que nuestro análisis no se limita a la prostitución; nos referimos al "intercambio" en el sentido económico estándar de una actividad percibida como mutuamente beneficiosa para las personas que participan en ella».⁴ Debemos asumir, por ejemplo, que los individuos que tienen relaciones sexuales sin protección con plena conciencia de los riesgos del VIH lo hacen después de haber calculado racionalmente los costes y los beneficios implicados: «El precio umbral de mantener relaciones sexuales sin protección es el coste pecuniario y no pecuniario (siendo el segundo el dominante en este caso) de infectarse del virus del sida. Es otro tipo de accidente o, como una enfermedad causada por el tabaco, otro tipo de enfermedad evitable».⁵ En resumen, el sexo sin protección es una

² Para la historia institucional e intelectual del movimiento del derecho y la economía, véase Steven G. Medema, *The Hesitant Hand: Taming Self-Interest in the History of Economic Ideas*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2009, pp. 160-196. El artículo de Coase al que se hace referencia es Ronald H. Coase, «The Problem of Social Cost», *The Journal of Law and Economics*, vol. 3, núm. 1, 1960, pp. 1-44. Para una reflexión sobre el «imperialismo económico» de la Escuela de Chicago y su *modus operandi*, véase Edward Nik-Khah y Robert Van Horn, «Inland Empire: Economics Imperialism as an Imperative of Chicago Neoliberalism», *Journal of Economic Methodology*, vol. 19, núm. 3, 2012, pp. 258-282.

³ Philipson y Posner, *Private Choices and Public Health...*, p. 6.

⁴ *Ibidem*, p. 5.

⁵ *Ibidem*, p. 6.

elección de estilo de vida, pero una que responde perfectamente a las matemáticas de la expectativa racional.

Posner y Philipson comienzan preguntándose si la epidemia de sida es realmente la monumental catástrofe de salud pública que parece ser. Señalan que «la mayoría de la gente que escribe sobre el sida cree que es la crisis de salud pública del siglo XX y que requiere una intervención masiva de la sanidad pública en los frentes regulatorio y fiscal».⁶ En el momento que Posner y Philipson escriben, los primeros años de la década de los noventa, durante el mandato republicano de George H. W. Bush, muchos aún creían que Estados Unidos no había hecho lo suficiente para frenar la propagación del sida. El hecho de que la administración Reagan no respondiera a la epidemia con ninguna campaña de prevención integral fue un escándalo no solo para el progresismo, sino también para distintos perfiles conservadores de los círculos más cercanos a Reagan. En octubre de 1986, el cirujano general Everett Koop, un cristiano conservador contrario al aborto cuidadosamente seleccionado por la administración Reagan para el cargo, presentó un informe inesperadamente duro sobre el historial de salud pública de Reagan. Koop concluía su informe urgiendo al gobierno a financiar una campaña de prevención sexualmente explícita sobre el sida y a abandonar las intervenciones punitivas como las pruebas obligatorias y la aplicación de cuarentena. En junio de 1988, una comisión presidencial sobre el sida, presidida por el almirante social-conservador James D. Watkins publicó otro informe en el que apelaba al gobierno a aumentar sustancialmente los recursos que destinaba al sida, y señalaba la insuficiente financiación del sistema de salud en su conjunto como responsable del actual estado de crisis.⁷ Ambos informes no tardaron en quedar sepultados a instancias del conservadurismo cristiano y de quienes defendían la economía de la oferta dentro de la administración Reagan.

Como neoliberales, Posner y Philipson mantenían una compleja relación con los círculos políticos de Reagan. A diferencia de muchos de los asesores social-conservadores de Reagan, Posner y Philipson se oponían con vehemencia a cualquier recuperación de las tradiciones de salud pública y sus medidas paternalistas. En su opinión los juicios normativos sobre la desviación o la perversión sexual resultaban contraproducentes

⁶ *Ibidem*, p. viii.

⁷ C. Everett Koop, «Surgeon General's Report on Acquired Immune Deficiency Syndrome», 1986, disponible on line en <http://profiles.nlm.nih.gov/NN/B/B/V/N/> (consultado por última vez el 1 de mayo de 2015); Comisión presidencial sobre la epidemia del virus de la inmunodeficiencia humana (Presidential Commission on the Human Immunodeficiency Virus Epidemic), *Report of the Presidential Commission on the Human Immunodeficiency Virus Epidemic*, 24 de junio, Washington DC, US Government Printing Office, 1988, disponible on line en <http://eric.ed.gov/?id=ED299531> (consultado por última vez el 1 de mayo de 2015).

para el buen funcionamiento de los mercados: como pseudomercado repleto de precios umbral, el terreno de los intercambios sexuales funciona de forma más eficiente cuando se ve libre de regulaciones estatales de cuarentena o de pruebas obligatorias.⁸ Michel Foucault fue uno de los primeros en señalar la antinormatividad radical de los neoliberales de la Escuela de Chicago; en el mismo momento en que rechazaron las instituciones disciplinarias y reguladoras del Estado de bienestar del siglo XX, por considerarlas barreras excesivas para el buen funcionamiento de las lógicas de mercado, los teóricos neoliberales como Friedman, Becker y Posner se mostraban metodológicamente indiferentes a las categorías normativas de las ciencias sociales del siglo XX y sus disciplinas asociadas. Por lo tanto, de algún modo se encontraban alineados con la Nueva Izquierda.⁹

No obstante Posner y Philipson estaban completamente de acuerdo con Reagan en que los costes sociales y, por lo tanto, la urgencia de una respuesta de salud pública coordinada y a nivel federal ante la epidemia de sida se habían exagerado mucho. Teniendo en cuenta la limitada esperanza de vida de los pacientes de sida a principios de los noventa y la correspondiente reducción de trabajo para los programas de asistencia social como por ejemplo Medicaid, calculaban que la crisis del sida podría en realidad haber ahorrado dinero estatal en forma de pagos de la Seguridad Social a largo plazo. Las mayores cifras de defunciones por sida se daban entre personas jóvenes, pero pobres y relativamente improductivas (además de estar enfermas, muchas consumían drogas); por lo tanto el Estado habría perdido relativamente poco en lo que se refiere a años de vida productiva con estas muertes prematuras.¹⁰ Según Posner y Philipson, era probable que los costes de la enfermedad resultaran autolimitantes. «A pesar del inmenso sufrimiento que ha provocado el sida, los costes externos netos de la enfermedad (el objetivo del plano *económico* para la intervención pública) podría resultar relativamente modesto si se dejara que la enfermedad siguiera su curso sin intervención pública».¹¹

⁸ Philipson y Posner explican así su posición: «A diferencia de muchos conservadores, que son libertarios cuando se trata de mercados económicos (estrechamente definidos), pero que se vuelven intervencionistas cuando están en juego cuestiones de moralidad, nosotros no nos posicionamos en las cuestiones políticas y éticas que determinan en última instancia la elección de las políticas públicas. Varias de las propuestas que criticamos, como las pruebas obligatorias del virus del sida y la cuarentena de las personas que den positivo, provienen de los conservadores. Y nuestro análisis proporciona apoyo a políticas tan "liberales" como el reconocimiento del derecho al aborto y al matrimonio homosexual. Pero los liberales se van a sentir decepcionados por que no hayamos descubierto un argumento económico convincente para subvencionar públicamente la investigación y la educación sobre el sida en la medida en que se hace actualmente». Philipson y Posner, *Private Choices and Public Health...*, p. ix.

⁹ Michel Foucault, *The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978-1979*, Frédéric Gros, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2008, pp. 259-260 [ed. cast.: *El nacimiento de la biopolítica. Curso del Collège de France (1978-1979)*, Madrid, Akal, 2009].

¹⁰ Philipson y Posner, *Private Choices and Public Health...*, pp. ix, 14, 118, 124.

¹¹ *Ibidem*, p. 118.

Para Posner y Philipson era más importante el hecho de que el particular modo de transmisión del virus del VIH tendía a limitar por su propia naturaleza los costes sociales externos comúnmente asociados a las enfermedades contagiosas en la tradición de salud pública. «A diferencia de la mayoría de enfermedades contagiosas, el sida se propaga fundamentalmente por contacto íntimo voluntario entre seres humanos».¹² Aparte de los casos extremos de violación o transfusiones de sangre contaminada, el virus del VIH es el resultado del contacto sexual voluntario entre adultos que dan su consentimiento y, por lo tanto, representa el prototipo por excelencia de la transacción racional y de los riesgos libremente asumidos. Según Posner y Philipson, la economía de salud pública «ha tenido una tendencia a considerar las enfermedades contagiosas como caso de libro de texto de externalidades negativas»,¹³ es decir, un intercambio de patógenos que genera unos costes sociales más allá de las estrictas fronteras de la transacción consensuada y, por lo tanto, han tendido a defender la intervención estatal como respuesta necesaria. Los costes sociales de la tuberculosis, por ejemplo, no se pueden internalizar mediante el uso de contratos privados que limiten los efectos de estornudar en público a las partes que así lo consientan libremente. Tampoco las enfermedades que se transmiten por el agua, por medio de vías fluviales y tuberías, se pueden confinar dentro de los límites de un contrato. Posner y Philipson admitían incluso que para las externalidades clásicas de la salud pública por contagios involuntarios hacía falta algún tipo de respuesta colectiva, aunque fuera limitada.

Sobre estos mimbres defienden que el VIH es diferente, en el sentido de que se transmite con más frecuencia mediante actos voluntarios de sexo sin protección o mediante el intercambio de jeringuillas. Desde 1984 al menos, cuando el virus y su modo de transmisión se identificaron por primera vez, se puede asumir que la mayoría de quienes se han contagiado de sida lo han hecho como resultado de un cálculo libremente asumido entre costes y beneficios. Las personas infectadas por VIH han calculado sin duda «que el coste de reducir la enfermedad a cero mediante un cambio de comportamiento [es] mayor que el coste esperado de la enfermedad, incapacidad o muerte que acarrea el riesgo en sí».¹⁴ Puede que nos sorprenda el hecho de que algunos otorguen un precio tan bajo al riesgo de infección (que las mujeres afroamericanas o las personas que consumen drogas parezcan «pagar más barato que la media o que no aprecien tanto sus vidas»),¹⁵ pero en ningún caso deberíamos ser tan paternalistas como para limitar su libertad de asumir riesgos. Claramente, las personas que

¹² *Ibídem*, p. vii.

¹³ *Ibídem*, p. 13.

¹⁴ *Ibídem*.

¹⁵ *Ibídem*, p. 73.

han asumido esos riesgos han razonado que la recompensa inmediata del aumento del placer es mayor que los costes a largo plazo de la infección y han actuado en consecuencia. ¿Entonces por qué cabría esperar que el Estado asegure sus decisiones? ¿Por qué deberían redistribuirse entre la población los costes personales de intercambios privados entre adultos que consienten libremente? Para Posner y Philipson, los riesgos de la transmisión del VIH son completamente internos a los mercados del sexo sin protección o del consumo de drogas intravenosas y, por lo tanto, deberían afrontarlos de forma privada quienes incurran en dichas actividades. Mientras no suponga costes sociales significativos, la libertad de asumir riesgos sexuales nunca debería estar limitada o regulada por el paternalismo de Estado, pero tampoco debería reasegurarse por el Estado mediante atención sanitaria subvencionada, programas de educación pública o investigación con financiación federal. Todos el mundo es libre de asumir, o evitar, los riesgos del placer sexual y cada cual es individualmente responsable de los riesgos que haya elegido correr.

Sin embargo, al haber rechazado el paternalismo del antiguo modelo de salud pública, de algún modo resulta sorprendente cómo Posner y Philipson plantean un argumento específicamente utilitario contra la promiscuidad y a favor de la monogamia. Defienden que la respuesta de la salud pública ante la epidemia de sida no solo no está garantizada, sino que además es probable que genere «incentivos perversos». Mientras que las preferencias individuales siempre son «racionales» y nunca «perversas» en una perspectiva de derecho y economía, los incentivos en sí pueden a veces considerarse «perversos», en particular cuando se aproximan a aquellos del Estado de bienestar.¹⁶ El problema se plantea como un «peligro moral»: cuando el Estado subvenciona atención sanitaria a quienes han asumido voluntariamente los riesgos de infección, termina reduciendo el precio del comportamiento de alto riesgo y respaldando decisiones vitales irresponsables como la promiscuidad o la adicción. La ley de los grandes números prescribe que cualquier intervención de la sanidad pública que no condene la promiscuidad aumentará la probabilidad de relaciones sexuales de riesgo (condones rotos, por ejemplo) y por lo tanto conducirá a un aumento de la infección por VIH. «Cualquier aspecto que reduzca el coste del sexo aumentará la cantidad del mismo, y un aumento de la cantidad de actividad sexual aumentará la incidencia del sida,

¹⁶ Resulta interesante, pues, que mientras los estudiosos de derecho y economía rechazan las ideas normativas sobre la perversión cuando se trata del comportamiento individual, la noción de que los propios incentivos pueden ser perversos es omnipresente en su trabajo. *Ibidem*, pp. viii, 13, 148, 187, 199. Por lo tanto, no hay perversos, sino un Estado de bienestar perverso. Sobre la racionalidad esencial de las preferencias en la perspectiva del derecho y la economía, véase George J. Stigler y Gary S. Becker, «De Gustibus Non Est Disputandum», *American Economic Review*, núm. 67. 2, 1977, pp. 76-90. Agradezco a Miguel Vatter haber aclarado este punto.

dado que al menos parte de la actividad es de riesgo».¹⁷ Ahí es donde Posner y Philipson identifican un problema con las campañas de sexo seguro de financiación pública. Dado que la promoción del sexo seguro implícitamente consiente la promiscuidad, esto a su vez generará mayores tasas de seroprevalencia por la mera probabilidad estadística de infección accidental. Al menos en este aspecto, Posner y Philipson reconocen que el conservadurismo moral tiene razón, aunque insisten en que su propia aversión a la promiscuidad deriva íntegramente de una preocupación utilitarista por reducir el gasto estatal en asistencia médica.¹⁸ La respuesta regulatoria a las externalidades de salud pública resulta en último término contraproducente; en su intento de asegurar el riesgo social, ya sea mediante seguros sociales directos o mediante programas de prevención con financiación estatal, el Estado genera costes sociales mayores de los que existirían en condiciones competitivas de libre mercado. Dar cobertura a elecciones de vida irresponsables generará aún más elecciones de este tipo.

¿Cómo debería intervenir entonces el Estado, si es que debiera hacerlo, para hacer frente a esos perversos incentivos? ¿Qué debería hacer el gobierno para afrontar los indeseables efectos de su propia intervención? Aquí Posner y Philipson proponen una respuesta reguladora a las externalidades que resulta axiomática en la literatura neoliberal, pero que pocas veces se reconoce o se analiza como parte de su discurso económico sobre los fallos del mercado. Plantean que para afrontar los costes sociales del sexo de riesgo, el Estado haría bien en limitar su intervención a la *promoción del matrimonio*. Aunque se muestran escépticos sobre la utilidad de usar dinero de impuestos para subvencionar el sexo seguro y las campañas de prevención, más adelante Posner y Philipson se muestran entusiastas sobre las posibilidades del matrimonio como limitador de los costes económicos y sanitarios del VIH. Además son de los primeros en defender la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo como forma de reducir los exorbitantes costes de la promiscuidad en la comunidad gay.¹⁹ Aunque en el presente los costes sociales del sida se sostienen públicamente mediante Medicaid y otros servicios de salud, apuntan que el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo devolvería parte de estas externalidades a los hogares privados, obligando a quienes corrieran riesgos de forma individual a internalizar los costes de sus acciones, transformando así los riesgos públicos en responsabilidades privadas.

Posner y Philipson anticipan que el reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo ayudaría a internalizar los costes del sida en dos aspectos: tanto biomédico como económico. En primer

¹⁷ *Ibíd.*, p. 175.

¹⁸ *Ibíd.*

¹⁹ *Ibíd.*, p. 179.

lugar, al otorgar una prima a la monogamia, el matrimonio aumentaría los costes psicológicos del sexo promiscuo y, por lo tanto, reduciría la tasa media de infección. Pero también internalizaría los costes económicos al trasladar al menos parte de la carga de cuidados al cónyuge. En un texto anterior, Posner se refiere a «la función aseguradora del matrimonio» señalando el hecho de que se espera que el matrimonio sirva como forma de protección en aquellos contextos sociales «en los que el parentesco se ha reducido, pero el mercado y los seguros sociales aún no son habituales» (o, podríamos añadir, han disminuido significativamente). Esta «función aseguradora» del matrimonio, escribe, «surge del hecho de que la correlación de la salud de los cónyuges y otros factores del bienestar es menor que uno, por lo que dada una obligación mutua de apoyo y asistencia, el matrimonio sirve como forma de seguro de salud, de hambre y de vida».²⁰ Así en último término, Posner y Philipson identifican la institución legal del matrimonio como un sustituto del seguro social y el medio más eficiente de reducir los costes sociales de la sanidad. Así, la crítica neoliberal de la normatividad termina respaldando una forma alternativa de filosofía moral, que restaura la familia privada y sus obligaciones legales de cuidado hasta un papel fundamental en el orden del libre mercado.

Aquí encontramos un aspecto del neoliberalismo que elude los términos del ahora clásico análisis de Foucault. El neoliberalismo puede estar a favor de la despenalización de las drogas, la sodomía, las saunas y la prostitución y oponerse rotundamente a los poderes normativos de supervisión que regularon o prohibieron dichas prácticas en el Estado de bienestar de mediados del siglo XX. Aun así, su aparente indiferencia moral va acompañada de la condición de que los costes de dichos comportamientos se asuman íntegramente de forma privada. Al propio Posner le cuesta aclarar que el «libertarismo» no es lo mismo que «lo libertino» o «el amor libre» (curiosamente, refiriéndose a la última obra de Foucault sobre *El uso de los placeres* como el ejemplo perfecto de una ética no normativa, pero no libertaria).²¹ La antinormatividad del neoliberalismo de la Escuela de Chicago

²⁰ Richard A. Posner, *The Economics of Justice*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1981, p. 190. Gary Becker plantea un argumento similar al respecto de la función aseguradora de la familia en «Altruism in the Family», en *A Treatise on the Family, Enlarged Edition*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1993 [1981], pp. 281-282.

²¹ Richard A. Posner, *Sex and Reason*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1992, pp. 3, 182. En este libro, Posner dedica un tiempo considerable a reflexionar sobre las formas de regulación sexual que se justifican en un marco libertario. Por lo tanto, la «atención se centrará en qué regulaciones son apropiadas bajo un enfoque de *laissez-faire* del sexo, un enfoque que, al tratar el sexo como moralmente indiferente, limitaría la libertad sexual solo en la medida requerida por consideraciones económicas o utilitarias de otro tipo» (p. 181). Posner está especialmente interesado en la cuestión de si debe permitirse el divorcio amistoso y la maternidad fuera del matrimonio, y en qué condiciones, ya que se trata de formas de libertad sexual que, en última instancia, pueden costar al Estado una cantidad considerable de dinero en forma de pagos de asistencia social. Refiriéndose a la obra de

está supeditada a una filosofía moral de gestión prudencial del riesgo que no deja costes excesivos al Estado. Esta doble lealtad se expresa en la idea de que las relaciones sexuales no normativas deben canalizarse en última instancia en la forma legal del matrimonio.

El neoliberalismo contra el seguro social

Por muy idiosincrásicas que puedan parecer las visiones de Posner y Philipson a primera vista, guardan una estricta consonancia con la crítica más amplia al seguro social que desarrolló y perfeccionó el neoliberalismo de la Escuela de Chicago hasta finales de los años sesenta. En el debate público, ahora dominado por los supuestos de la razón neoliberal, resulta desconcertante recordar las formas tan distintas de sentido común que compartían los economistas ortodoxos de la generación anterior. Sin embargo, para muchas de las opiniones económicas más importantes de mediados del siglo XX la idea de que el seguro social representaba la forma más efectiva de abordar los riesgos sociales era indudable. En conjunto, economistas del bienestar neoclásicos como A. C. Pigou y neokeynesianos como Kenneth Arrow y Paul Samuelson ayudaron a popularizar la idea de que el Estado gestionaba mejor ciertos tipos de «externalidades», ya fueran positivas o negativas, mediante la regulación, la legislación de licencias de los estados o los impuestos.²² Estos representantes de la economía ortodoxa de pre y posguerra plantearon su defensa del Estado de bienestar en el lenguaje neoclásico de la utilidad social y la eficiencia, un compromiso que les permitía «justificar formalmente la legitimidad económica de la intervención gubernamental, sin dejar de ser fieles al icónico modelo neoclásico de libre mercado».²³ Ante el fallo del mercado, defendían que los bienes públicos como las ondas de radio, la infraestructura de transporte o la sanidad los distribuía mejor el Estado, mientras que los perjuicios sociales como la contaminación, los accidentes de tráfico o la enfermedad se abordaban de forma más eficiente mediante la regulación estatal o los impuestos. La solución más simple para los accidentes inevitables de la vida industrial era la colectivización y la redistribución de estos riesgos mediante el seguro social.

Foucault, *El uso de los placeres*, Posner apunta que «la alimentación se guía por consideraciones estéticas y prudenciales» y así «sería el sexo en una sociedad en la que fuera una cuestión moralmente indiferente» (p. 182). Véase Michel Foucault, *The History of Sexuality Vol. 2: The Use of Pleasure*, trad. por Robert Hurley, Londres, Penguin, 1992 [1984] [ed. cast. *El uso de los placeres*, trad. por Martí Soler, Siglo XXI, Buenos Aires, 2003].

²² Para un relato de la economía neoclásica del bienestar, centrado en A. C. Pigou, véase Medema, *The Hesitant Hand...*, pp. 54-76. Para una explicación de la transición de la economía de bienestar de A. C. Pigou a los argumentos neokeynesianos de posguerra de Kenneth Arrow y Paul Samuelson, véase Philip Mirowski, *Science-Mart: Privatizing American Science*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2011, p. 57.

²³ Mirowski, *Science-Mart...*, p. 57.

La economía neoclásica del bienestar tardó en abordar la cuestión específica del seguro de salud, pero cuando lo hizo, ofreció argumentos fundamentales para la ampliación de la sanidad colectiva en la época de posguerra (como Medicaid o Medicare). En 1963, la Fundación Ford encargó a Kenneth Arrow que proporcionara una perspectiva económica sobre el problema de la incertidumbre en el mercado médico. Después de repasar las peculiares características de los riesgos de la sanidad y observar el sistemático fracaso de los mercados comerciales a la hora de asegurarlos, Arrow concluyó que la «necesidad que tiene el bienestar de políticas de aseguramiento de todo tipo [era] sorprendente»; el gobierno estadounidense debería por lo tanto asumir un papel mucho más importante en asegurar los riesgos de sanidad de su ciudadanía.²⁴ Al redistribuir los costes de las enfermedades imprevisibles entre un amplio grupo de personas, argumentaba, la ley de los grandes números tendía a disminuir la carga individual media de la atención sanitaria, permitiendo incluso a la ciudadanía más pobre y enferma acceder a la atención que de otro modo habría dejado de recibir. Al hacerlo, el seguro social se convertía en una «ganancia social neta que [podría] tener una magnitud considerable».²⁵

Las teorías neoclásicas del fallo del mercado estaban bien establecidas, eran incluso hegemónicas en los años sesenta. El paradigma dominante en la economía estadounidense de posguerra, la llamada síntesis neoclásica que combinaba la microeconomía neoclásica con la teoría macroeconómica keynesiana proponía una poderosa defensa de la intervención gubernamental en caso de fallo de mercado. Pero es también en esta década cuando comienza a tomar forma una ofensiva organizada contra la economía del bienestar neoclásica. Lo que ahora denominamos neoliberalismo estadounidense surgió de la Escuela de Chicago de derecho y economía, de la Escuela de Virginia de la teoría de la libre elección, de sus distintas escuelas satélite por todo Estado Unidos y del hayekismo estadounidense más marginal a nivel institucional, todas estas corrientes, a pesar de sus diferencias, manifestaban una aversión compartida por el creciente alcance del seguro social del New Deal.²⁶ En gran medida como sus contrapartes

²⁴ Kenneth J. Arrow, «Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care», *The American Economic Review*, vol. 53, núm. 5, 1963, p. 961.

²⁵ *Ibidem*, p. 960.

²⁶ Para una historia institucional e intelectual de esta contraofensiva, véase Medema, *The Hesitant Hand...*, pp. 101-199. Para una historia intelectual de esta contraofensiva centrada en la escuela de Chicago de derecho y economía y que explora su relación con el derecho de daños y contratos del siglo XIX, véase Pat O'Malley, *The Currency of Justice: Fines and Damages in Consumer Societies*, Nueva York, Routledge-Cavendish, 2009. El artículo de Ronald Coase de 1960, «The Problem of Social Cost» [El problema del coste social], se considera el texto fundamental de esta contraofensiva; en este se invertía el argumento de Pigou de que el fracaso del mercado exigía la intervención del gobierno, proponiendo en cambio que el gobierno era el problema. El problema de las externalidades se podría

neokeynesianas, la economía neoliberal y la teoría jurídica hablaban el idioma de la economía neoclásica, pero lo combinaban con un retorno a los principios liberales clásicos de los mercados competitivos, la libertad de contrato y el derecho privado de daños; ideas que intentaban movilizar frente a la creciente influencia de la economía de bienestar y el derecho del interés público en la vida política estadounidense. Aunque adoptaran el mismo lenguaje formal que los neokeynesianos de posguerra, el neoliberalismo se propuso recuperar el análisis del riesgo dentro «del marco punitivo y contractual que caracterizaba el derecho [de daños] del siglo XIX», con sus correspondientes nociones de estricta responsabilidad personal, retribución y culpa.²⁷

En 1968, Mark Pauly, economista de la libre elección, publicó una breve respuesta a Kenneth Arrow que redefiniría la conversación en torno al seguro de salud durante las décadas siguientes.²⁸ Escrito con una aparente modestia, el artículo de Pauly revocaba simple y llanamente las conclusiones de Arrow apelando al ahora omnipresente concepto de «riesgo moral».²⁹ Pauly insistía en que como muchos otros productos de consumo, la demanda de atención sanitaria no es una constante que se pueda calcular

gestionar con mucha más eficiencia si se establecieran mercados libres y competitivos del «bien» o del «daño»: los agentes del mercado serían libres entonces para negociar su derecho a causar daño o a quedar libres del mismo y por lo tanto establecerían el precio de mercado más eficiente para las externalidades en cuestión. El teorema de Coase apunta muchas de las iniciativas políticas de mayor éxito de la era neoliberal, incluida la del comercio de los derechos de emisión de carbono. Varios textos han explorado los efectos institucionales y políticos de la contraofensiva neoliberal en las distintas áreas de la responsabilidad empresarial y la regulación de la seguridad, de la ley del empleo y no discriminación y de la sanidad. Véase Thomas O. McGarity, *Freedom to Harm: The Lasting Legacy of the Laissez Faire Revival*, New Haven (CT), Yale University Press, 2013; Ruth Colker, *American Law in the Age of Hypercapitalism: The Worker, The Family, and the State*, Nueva York, NYU Press, 1998; Kimberly J. Morgan y Andrea Louise Campbell, *The Delegated Welfare State: Medicare, Markets, and the Governance of Social Policy*, Oxford, Oxford University Press, 2011; y Timothy Stoltzfus Jost, *Health Care at Risk: A Critique of the Consumer-Driven Movement*, Durham (NC), Duke University Press, 2007. Las escuelas de Chicago y de Virginia comparten un contexto común en el texto de Coase «The Problem of Social Cost».

²⁷ O'Malley, *The Currency of Justice...*, p. 153.

²⁸ Mark V. Pauly, «The Economics of Moral Hazard: Comment», *The American Economic Review*, vol. 58, núm. 3, 1968, pp. 531-537. Para un análisis detallado del debate entre Pauly y Arrow y su influencia en la reforma de la sanidad en las décadas posteriores, véase Jacob S. Hacker, *The Great Risk Shift: The New Economic Insecurity and the Decline of the American Dream*, Oxford, Oxford University Press, 2006, pp. 48-49, y Jost, *Health Care at Risk...*, pp. 70-85.

²⁹ Tom Baker proporciona una evaluación, ahora clásica, del papel que desempeñó el «riesgo moral» en la bibliografía sobre derecho y economía. Tom Baker, «A Genealogy of Moral Hazard», *Texas Law Review*, vol. 75, núm. 2, 1996, pp. 237-292. La lección convencional que se extrae de la economía del riesgo moral, según Baker, «es que "menos es más": menos asistencia social significa más estadounidenses fuera de la pobreza, menos responsabilidad por los productos significa hogares más seguros; menos compensación a los trabajadores significa lugares de trabajo más seguros; menos seguros por incapacidad significa más personas sin incapacidad; y menos seguros médicos significa más personas saludables» (p. 238).

en referencia a la justicia social o a los principios de salud pública, sino una variable que responde indiscriminadamente a la fluctuación de la oferta. La salud pública distorsiona el verdadero precio de mercado, o el precio competitivo (es decir, el equilibrio) de la sanidad al trasladar los costes de las personas propensas al riesgo a quienes le tienen aversión. Cuando los costes de la asistencia sanitaria se redistribuyen entre un gran conjunto de riesgos, a cada individuo le interesa consumir la mayor cantidad posible de asistencia médica, con el paradójico resultado de que las primas de la asistencia sanitaria aumentan para todas las personas suscritas. Pauly concluye con que el seguro de salud pública genera un problema de riesgo moral que compromete sus propios objetivos de forma fatídica y provoca una pérdida de bienestar en lugar de un aumento del mismo.

Como señaló Posner en un influyente resumen del trabajo del teórico jurídico Guido Calabresi sobre el coste social de los accidentes, el problema del riesgo moral se extiende también a los efectos psicológicos del seguro social. En este trabajo Posner plantea que el seguro social protege al individuo de los verdaderos costes de su comportamiento y, por lo tanto, distorsiona los efectos psicológicos que, de no ser así, tendrían un efecto de refuerzo en un entorno de libre mercado competitivo.³⁰ La solución del liberalismo clásico para gestionar los costes de los accidentes, el derecho privado de daños y la litigación del derecho anglosajón podría parecer ineficaz según los estándares tecnocráticos del Estado de bienestar moderno, pero al menos tiene la virtud de inspirar la responsabilidad personal. De modo contrario, el seguro social desalienta activamente las virtudes liberales clásicas de la prudencia y el autocuidado subvencionando los costes del comportamiento de alto riesgo.

Teniendo en cuenta lo que consideraba como el abrumador problema del riesgo moral, Pauly concluía que el gobierno debería desempeñar un papel limitado al asegurar el riesgo y en su lugar delegar esta función a las aseguradoras privadas, quienes, por su parte, deberían poder poner precio de forma individualizada a cada cliente, en función de su perfil de riesgo. Lejos de sufrir un Estado de bienestar subdesarrollado, la población estadounidense estaba *asegurada en exceso*.³¹ Si llevamos este argumento a su conclusión lógica, Pauly sugería que el hecho de que comercialmente no

³⁰ Richard A. Posner, «Book Review: Guido Calabresi, *The Cost of Accidents: A Legal and Economic Analysis* (1970)», *University of Chicago Law Review*, núm. 37, 1970, pp. 636-648. Mark V. Pauly y Martin S. Feldstein plantean argumentos similares sobre el aspecto psicológico del «riesgo moral» en los siguientes artículos: Martin S. Feldstein, «The Welfare Loss of Excess Health Insurance», *The Journal of Political Economy*, vol. 18, núm. 2, 1973, p. 256; Mark V. Pauly, «Overinsurance and Public Provision of Insurance: The Roles of Moral Hazard and Adverse Selection», *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 88, núm. 1, 1974, p. 54.

³¹ Pauly, «Overinsurance and Public Provision of Insurance...»; Martin S. Feldstein, «The Welfare Loss of Excess Health Insurance», *The Journal of Political Economy*, vol. 18, núm. 2, 1973, pp. 251-280.

se aseguraran ciertos riesgos debe aceptarse como el juicio final e irrevocable del mercado: algunos riesgos son simplemente *inasegurables* y deberían dejarse en la categoría actuarial de «actos de Dios». ³² A medio plazo, sin embargo, recomendaba una serie de reformas prácticas para el mercado de los seguros. Por ejemplo, las aseguradoras deberían poder transferir los costes reales de la asunción de riesgos al consumidor: quienes se suscriban con alguna enfermedad previa deberían pagar primas mayores; deberían implementarse tasas de uso y copagos para ofrecer incentivos a los consumidores para que modifiquen su comportamiento; así mismo, los perfiles que se consideren de alto riesgo (los hombres gais lo serían más adelante) deberían pagar un precio acorde o quedar excluidos como no asegurables. ³³ Hacerlo de otro modo supondría cargar a quienes evitan correr riesgos con los costes de los comportamientos irresponsables de otras personas. En el caso de que hubiera que mantener los esquemas de bienestar y seguros públicos como Medicaid y Medicare, deberían diseñarse para que sirvieran solo como aseguradoras de último recurso para la atención sanitaria de emergencia y «riesgo catastrófico» (es decir, riesgos considerados no rentables y por lo tanto no asegurables por parte de intereses privados). ³⁴

El problema económico del «riesgo moral», insistía Pauly, «tiene poco que ver con la moralidad» como se suele pensar. Simplemente representa la expresión lógica del «comportamiento económico racional» frente a incentivos perversos: cuando las consecuencias de la asunción de riesgos están aseguradas por el Estado, está en el interés racional del consumidor asumir un comportamiento irresponsable. ³⁵ Aun así el argumento neoliberal contra el seguro social no se escapa tan fácilmente de la carga moralista, ya que inevitablemente nos devuelve a la lógica del derecho de daños del siglo XIX con sus categorías auxiliares de responsabilidad personal, culpa y abandono. ³⁶ De hecho, la teoría jurídica neoliberal retoma explícitamente la noción de que la libertad de contrato implica la asunción voluntaria de riesgos, un concepto fundacional del derecho de daños. *Volenti non fit injuria* [no se comete injusticia con quien actuó voluntariamente] es la traducción jurídica de la idea de que el riesgo, una vez consentido, debe asumirlo íntegramente la persona que en él haya incurrido, a no ser que se pueda demostrar el

³² Pauly, «The Economics of Moral Hazard: Comment...», p. 532.

³³ Mark V. Pauly, «The Welfare Economics of Community Rating», *The Journal of Risk and Insurance*, vol. 37, núm. 3, 1970, pp. 407-418.

³⁴ Mark V. Pauly, «Risk Variation and Fallback Insurers in Universal Coverage Insurance Plans», *Inquiry*, vol. 29, núm. 2, 1992, pp. 137-147.

³⁵ Pauly, «The Economics of Moral Hazard: Comment...», pp. 531, 535.

³⁶ Sobre la filosofía moral inherente en las nociones del derecho de daños del siglo XIX sobre responsabilidad y culpa, véase François Ewald, *Histoire de l'État Providence*, París, Grasset, 1996, pp. 150-151. Ewald señala que el cambio hacia el seguro social a finales del siglo XIX y principios del XX hizo que la cuestión de la culpa se tornara irrelevante y, por lo tanto, se percibiera ampliamente como un asalto a la ética de la responsabilidad personal.

fraude o la coacción en la ejecución del contrato.³⁷ De forma crucial, esta óptica interpreta el daño autoinfligido como equivalente al daño consentido y por lo tanto no alberga esperanza de reparación. Cada persona debe asumir el precio de sus propias decisiones: a no ser que se pueda demostrar el error o la negligencia explícita de la contraparte contractual, la «culpa» del comportamiento irresponsable es toda propia y por lo tanto merecida.

Posner y Philipson formulan su respuesta política contra la epidemia de sida en deferencia a este principio, una respuesta que define una clara distinción entre quienes estuvieron expuestos a los riesgos de la infección por VIH sin saberlo, antes de que se descubriera el virus, y quienes asumieron los riesgos con pleno conocimiento de su forma de transmisión. Aunque Posner y Philipson desean permitir la intervención estatal en nombre de las víctimas involuntarias, defienden que la mayoría de pacientes de sida deben asumir plena responsabilidad de sus propias decisiones. En cualquier caso, plantean que con cada año que pasa «se reduce la fracción de las víctimas de sida que se infectaron antes de que se supiera lo suficiente sobre la enfermedad como para poder evitar el riesgo mediante un cambio de comportamiento; la situación de esas víctimas es el argumento más claro para la investigación sobre el sida con financiación pública como forma de seguro social».³⁸ La exposición involuntaria justifica claramente la intervención gubernamental frente a los errores de mercado del ámbito sanitario privado, pero cuando el riesgo se asume con consentimiento, los costes son de quien los haya asumido. Las aseguradoras privadas están en su derecho de excluir a las personas infectadas por VIH de sus políticas de salud, dado que la exposición al VIH mediante el sexo consentido o el consumo de drogas es un riesgo voluntario cuyo coste debe asumirlo el individuo.³⁹ Desde el punto de vista de los mercados sanitarios competitivos, quienes se han sometido voluntariamente a los riesgos de la infección por VIH quedan fuera de los límites de lo asegurable.

³⁷ Joel Feinberg ofrece un relato filosófico sobre la doctrina de *volenti non fit injuria* en *The Moral Limits of the Criminal Law Volume 1: Harm to Others*, Oxford, Oxford University Press, 1987, pp. 115-117. Richard Posner formula el principio de *volenti* en los siguientes términos: «Mi argumento es que una persona que compra un boleto de lotería y lo pierde "acepta" la pérdida en la medida en que no se cuestiona que exista fraude o coacción; al menos renuncia a hacer cualquier objeción al resultado, asumiendo que no hubo fraude en la lotería. Muchas de las pérdidas involuntarias, y aparentemente no compensadas, experimentadas en el mercado o toleradas por las instituciones que sustituyen al mercado cuando este no puede funcionar eficazmente, se compensan plenamente *ex-ante* y por lo tanto se consienten en el sentido mencionado». Posner, *The Economics of Justice...*, p. 94. Relatos iluminadores sobre la recuperación de la doctrina *volenti* en la filosofía neoliberal y libertaria contemporánea son Robert E. Goodin, «Volenti Goes to Market», *The Journal of Ethics*, vol. 10, núm. 1-2, 2006, pp. 53-74, con respecto al trabajo del filósofo libertario Robert Nozick; Robin West, «Authority, Autonomy and Choice: The Role of Consent in the Moral and Political Visions of Franz Kafka and Richard Posner», *Harvard Law Review*, vol. 99, núm. 2, 1985, pp. 384-428; y O'Malley, *The Currency of Justice...*, pp. 116-125 y 152-153, con referencia específica a la historia de *volenti* en el derecho laboral del siglo XIX y su importancia para el movimiento de la Escuela de Chicago en derecho y economía.

³⁸ Philipson y Posner, *Private Choices and Public Health...*, p. 184.

³⁹ *Ibidem*, pp. 119-120.

Desinstitucionalización: cómo el neoliberalismo absorbió a la Nueva Izquierda

En 1981 se observó por primera vez que el sida provenía de un virus, aunque no se nombró ni se identificó de forma oficial, fue un momento de gran agitación en el sistema de salud estadounidense.⁴⁰ El presidente Reagan fue elegido en 1980, con promesas de controlar rápidamente los crecientes costes de la sanidad, de racionalizar las prestaciones y recortar drásticamente el presupuesto federal para el bienestar y los programas de seguridad social como Medicare y Medicaid. Desde la perspectiva de principios de los ochenta, debe de haber resultado difícil recordar que apenas una década antes, el presidente Nixon había estado a punto de poner en marcha un programa de salud nacional.⁴¹ La fuerza política del movimiento sindical era tan grande en aquel momento que Nixon mantuvo «un papel de retaguardia» al asumir y moderar los planes más radicales de sus oponentes por la izquierda, mientras que incluso quienes se oponían al seguro social como la American Medical Association [AMA, Asociación Médica Estadounidense] y las aseguradoras privadas estaban resignadas a la idea de que patrocinarían esas mismas propuestas.⁴²

Los años setenta fueron testigo de experimentos sanitarios paraestatales que iban desde el movimiento de las mujeres por la salud a las clínicas sanitarias gratuitas de las Black Panther, incluidas distintas iniciativas contraculturales que proporcionaban desde servicios de salud sexual hasta atención médica por consumo de drogas recreativas. Estos experimentos estaban próximos a la agenda de la Gran Sociedad de Johnson y, en algunos casos, habían salido directamente de ella; se trataba en sí mismo de un ejercicio de desinstitucionalización federal que buscaba aminorar las intrincadas estructuras de poder de los gobiernos municipales y estatales mediante la delegación del poder a las «comunidades locales». En 1965, la Office of Economic Opportunity [OEO, Oficina de Oportunidades Económicas], organismo responsable de administrar los programas de pobreza de la Gran Sociedad, comenzó a distribuir ayudas a hospitales,

⁴⁰ Daniel M. Fox fue uno de los primeros analistas y de los más perceptivos sobre la convergencia entre la epidemia de sida y la reforma sanitaria neoliberal. Véase Daniel M. Fox, «AIDS and the American Health Polity: The History and Prospects of a Crisis of Authority», *The Milbank Quarterly*, vol. 83, núm. 4, 2005 [1986], pp. 1-26.

⁴¹ Paul Starr, *The Social Transformation of American Medicine*, Nueva York, Basic Books, 1982, pp. 382, 394-397 [ed. cast. *La transformación social de la medicina en los Estados Unidos de América*, trad. por Agustín Bárcena, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 1991].

⁴² Tomo prestado el término del «papel de retaguardia» de Paul Starr, quien realiza un útil análisis de la relación de Nixon con la izquierda de esta manera: «En los primeros años, de 1969 a 1971, la administración Nixon adoptó un papel de retaguardia contra los programas sociales de la Gran Sociedad, pero el clima político era todavía mayoritariamente liberal». *Ibidem*, p. 394.

departamentos de salud y ONG para crear «centros de salud de barrio» en zonas de bajos ingresos por todo el país. Inspirados por las corrientes más progresistas de la tradición de salud pública estadounidense, estos centros de salud «representaban ideas que habían defendido los partidarios de la reforma de la sanidad desde principios del siglo XX, incluidos conceptos de sanidad universal, medicina social y participación comunitaria» y se esforzaban por prestar una atención sanitaria de gran calidad a las secciones más empobrecidas de la población.⁴³ Hasta ese momento, el gobierno federal nunca había invertido tanto dinero en la tradición progresista estadounidense de la medicina social. Sin embargo, a pesar de lo valiosos y habilitantes que eran estos programas, el movimiento sanitario de la Nueva Izquierda no tardó en superar las estrictas formas del liberalismo de la Gran Sociedad, lo que generó un sinnúmero de iniciativas que mantenían una relación mucho más antagónica con el Estado.

El movimiento de asistencia sanitaria de los Panteras Negras, por ejemplo, surgió de la crítica a la Guerra contra la Pobreza y su incapacidad de ofrecer nada más que una reforma simbólica, aunque muchos de quienes ayudaron a establecer las clínicas de los Panteras Negras habían participado activamente en los centros de salud vecinales de la Gran Sociedad y, de hecho, seguían participando.⁴⁴ Aprovechando los recursos profesionales y a veces materiales que ofrecía el sector sanitario institucional, los Panteras Negras se esforzaron por diferenciar sus esfuerzos de los centros de barrio de asistencia sanitaria creados por Johnson, para ello ubicaron sus clínicas fuera de los muros de los centros hospitalarios públicos universitarios, un espacio que asociaban con el racismo endémico, y combinaban la movilización política con la prestación de asistencia sanitaria. La relación entre estas clínicas y el Estado estaba sujeta a un intenso debate dentro y fuera del movimiento. La mayoría de clínicas de los Panteras Negras rechazaban solicitar financiación federal o estatal y, en su lugar, funcionaban mediante las destrezas compartidas de los profesionales sanitarios y las donaciones regulares de material sanitario desechado. Sin embargo, esto también limitaba el ámbito de sus servicios a una atención primaria y preventiva y les obligaba a derivar los casos más complejos al sector sanitario institucional (solo una clínica de los Panteras Negras con sede en Portland evitó esta suerte solicitando una combinación de financiación estatal, federal y privada).⁴⁵ Al mismo tiempo, a la administración federal le alarmaba un movimiento que parecía estar desviando recursos gubernamentales hacia

⁴³ Alice Sardell, *The U.S. Experiment in Social Medicine: The Community Health Center Program, 1965-1986*, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1998, p. 3.

⁴⁴ Alondra Nelson, *Body and Soul: The Black Panther Party and the Fight against Medical Discrimination*, Mineápolis, University of Minnesota Press, 2013, pp. 55-105.

⁴⁵ *Ibidem*, pp. 105-106.

iniciativas abiertamente militantes, también le sorprendía la capacidad de los Panteras Negras de ofrecer el tipo de servicios autogestionados que se proponía la Guerra contra la pobreza. Los Panteras Negras estaban muy vigilados por el FBI, incluso aunque la administración federal a veces intentaba persuadirles de que contrataran sus servicios sanitarios al Estado.⁴⁶

Aunque en ocasiones sus políticas eran diametralmente opuestas a las de los Panteras Negras, sobre todo en la cuestión del aborto,⁴⁷ el movimiento por la salud de las mujeres practicaba una ética similar de desobediencia política contra el Estado. El activismo feminista por la salud desafiaba el paternalismo de la profesión médica dominada por hombres y el poder desmesurado del sector sanitario a la hora de definir y limitar las experiencias sexuales y reproductivas de las mujeres.⁴⁸ Estas activistas plantearon un conflicto abierto con la autoridad de la AMA al defender los alumbramientos en el domicilio y las matronas laicas como alternativas a una experiencia del parto tan medicalizada. Se vieron obligadas a trabajar fuera de los límites de la ley al desafiar el poder del Estado de regular la sexualidad de las mujeres mediante las leyes contra el aborto. A finales de los años sesenta, las activistas implicadas en el Chicago Women's Liberation Union [Sindicato de Chicago por la Liberación de la Mujer] aprendieron a realizar abortos y supuestamente realizaban hasta cincuenta intervenciones a la semana en el momento de la sentencia de *Roe contra Wade* de 1973.⁴⁹

La red de clínicas de atención sanitaria gay establecidas en las grandes ciudades en los años setenta es menos conocida, pero no por ello resultó menos decisiva en la posterior historia del activismo del sida.⁵⁰ En Chicago, los estudiantes de medicina gays abrieron el centro de salud Howard Brown en 1974 y lo utilizaron como base desde la que enviaban un camión de pruebas de ETS por los bares y saunas. En Boston, donde el movimiento feminista estaba bien asentado, activistas lesbianas y gays tomaron el centro de salud comunitario de Fenway en 1975, donde impartían clases y prestaban servicio, incluida una clínica de enfermedades venéreas que recibía consultas una vez a la semana. Estas iniciativas fueron importantes no solo por su compromiso con el «autocuidado» fuera de las fronteras de la institución médica, sino también porque rechazaron valorar la salud sexual por

⁴⁶ *Ibidem*, p. 113.

⁴⁷ Sorprendentemente los Panteras Negras junto con los Black Muslims [Musulmanes Negros] y otros grupos nacionalistas, se oponían al aborto, que equiparaban con la eugenesia y el genocidio. Véase Donald T. Critchlow, *Intended Consequences: Birth Control, Abortion, and the Federal Government in Modern America*, Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 142-144.

⁴⁸ Sandra Morgen, *Into Our Own Hands: The Women's Health Movement in the United States, 1969-1980*, New Brunswick (NJ), Rutgers University Press, 2002.

⁴⁹ Starr, *The Social Transformation of American Medicine...*, p. 391.

⁵⁰ Jennifer Brier, *Infectious Ideas: U.S. Political Responses to the AIDS Crisis*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2009, pp. 16-17.

encima del deseo sexual. Las publicaciones producidas por estas tempranas iniciativas gays ofrecen algunos de los primeros planteamientos de la formación sobre «sexo seguro» en la que el objetivo es reducir el daño sin sacrificar el placer.

Considerados en su conjunto, estos frentes de liberación heterogéneos lideraron un movimiento general de insurrección contra las «instituciones totales» (Goffman) y los «poderes disciplinarios» (Foucault) de las ciencias sociales del siglo XX: los hospitales de salud mental, las prisiones, los hogares para personas discapacitadas, delincuentes y desviadas, instituciones responsables de definir y supervisar las nociones de diversidad sexual y racial.⁵¹ Con un impulso creciente, estos movimientos desafiaban el poder epistémico de las élites profesionales para patologizar la experiencia no normativa y apelaban a la desinstitucionalización radical de la atención sanitaria. Su crítica tuvo un impacto duradero en el panorama del bienestar social, obligando a los monopolios profesionales a retirar y replantear ciertas cuestiones y, en última instancia, a reinventarse a sí mismos. Si los grupos de interés de la Guerra Fría, como el movimiento homófilo, se habían propuesto simplemente neutralizar el estigma de la desviación, los nuevos movimientos de liberación desafiaban ahora la propia función legitimadora de la norma y su estatus dentro de las ciencias clínicas y sociales. Con este espíritu de crítica radical el movimiento de liberación gay lanzó una exitosa campaña para eliminar la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales de la Asociación Psiquiátrica Estadounidense a principios de los años setenta. Para estos activistas, la homosexualidad había dejado de ser una psicopatología o una desviación de la norma médica, simplemente era una práctica de la sexualidad diferente, una forma de vivir como cualquier otra.⁵²

⁵¹ Erving Goffman, *Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*, Chicago, Aldine, 1962 [ed. cast.: *Internados. Ensayo sobre la situación social de los enfermos mentales*, Buenos Aires, Amorrortu, 2008], y Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, trad. Alan Sheridan, Nueva York, Vintage Books, 1995 [1975] [ed. cast. *Vigilar y castigar*, trad. por Aurelio Garzón del Camino, Madrid, Biblioteca Nueva, 2012]. En el mundo angloparlante, las perspectivas teóricas sobre la historia de la «varianza» o de la «anormalidad» están muy sesgadas por el trabajo de Foucault centrado en Europa. Pero para una historia comparada de la construcción de la sexualidad normal y la raza en Estados Unidos, véase Julian B. Carter, *The Heart of Whiteness: Normal Sexuality and Race in America, 1880-1940*, Durham (NC), Duke University Press, 2007.

⁵² El movimiento de liberación gay surgió tras las revueltas de Stonewall, en Nueva York, y acciones similares contra el acoso policial en San Francisco. Tenía una cercana influencia de la militancia de la Nueva Izquierda y rechazaba las tácticas acomodadas de los derechos civiles del movimiento homófilo más temprano. A partir de 1970, el activismo por la liberación gay interrumpió las sesiones en las reuniones de la Asociación Médica Estadounidense, la Behavior Modification Conference [Conferencia de Modificación del Comportamiento] y la Asociación Psiquiátrica Estadounidense (APA), y finalmente persuadieron a la APA para que desclasificara la homosexualidad en 1973. A pesar del anterior conservadurismo de sus posturas, en torno a 1965 el movimiento homófilo también adoptó una posición radical en

Sin embargo, es importante señalar que la antinormatividad de estos movimientos nunca implicó un rechazo de los seguros sociales como tales. De hecho, y de forma muy directa, los nuevos movimientos de liberación se vieron posibilitados y reforzados por la democratización de los seguros sociales que se había dado a mediados de los años sesenta, cuando la Seguridad Social se amplió a los trabajadores no estándar del fordismo y la atención sanitaria pública llegó a las personas indigentes, discapacitadas y ancianas. El activismo sanitario de la Nueva Izquierda estaba comprometido con la ampliación de la financiación gubernamental de la atención sanitaria y el seguro médico universal, a pesar de que lucharan por dismantelar las formas disciplinarias en las que se prestaban estos servicios.⁵³ Si por un lado se propusieron desterrar la función taxonómica de la norma, entendida como medio estadístico para catalogar al sujeto humano estándar y sus desviaciones en términos morfológicos y psicopatológicos, al mismo tiempo se proponían ampliar el seguro social más allá de los límites del salario familiar, es decir, incorporar los riesgos no considerados normales en la lógica calculadora de las protecciones sociales. Quizás, en último término, un proyecto como este no era posible o viable dentro de los límites del Estado administrativo keynesiano y a largo plazo hubiera necesitado un replanteamiento total de las formas y prácticas de la protección de los riesgos sociales. Sin embargo, estaríamos tergiversando la especificidad histórica de estos movimientos si nos centráramos exclusivamente en su crítica antinstitucional y no reconociéramos sus esfuerzos por radicalizar el imaginario de la redistribución social.⁵⁴ Después de todo, la combinación de objetivos redistributivos y antinormativos fue lo que logró que estos movimientos resultaran tan amenazantes para el consenso del New Deal, siendo en último término catalizadores para la formación de la alianza neoliberal-social-conservadora.

En 1970, la fuerza política combinada de quienes defendían el seguro sanitario universal desde el sindicalismo y la Nueva Izquierda mantuvieron a Nixon en su sitio, forzándolo hacia la izquierda en casi todas las cuestiones

contra de la patologización de la homosexualidad. Véase Henry L. Minton, *Departing from Deviance: A History of Homosexual Rights and Emancipatory Science in America*, Chicago, University of Chicago Press, 2002, pp. 219-264.

⁵³ Véase Starr, *The Social Transformation of American Medicine ...*, p. 392.

⁵⁴ A este respecto, estos movimientos estaban en desacuerdo con el Foucault posterior, quien parece confundir la crítica de la normatividad sexual fordista con el rechazo del seguro social. Véase Michel Foucault «Social Security: Interview» en *Politics, Philosophy, Culture: Interviews and Other Writings, 1977-1984*, Lawrence D. Kritzman, Londres, Routledge, 1988, pp. 159-177. El sociólogo Daniel Zamora generó cierta controversia recientemente cuando utilizó este texto como muestra del giro tardío de Foucault hacia el neoliberalismo. Véase «Foucault, les exclus et le dépérissement néolibéral de l'État», en Daniel Zamora, *Critiquer Foucault: Les années 1980 et la tentation néolibérale*, Bruselas, Éditions Aden, 2014, pp. 87-113. Sin pretender resolver aquí este debate, me parece incuestionable que en este texto concreto Foucault despliega una crítica neoliberal bastante estándar del seguro social, repleta de la jerga familiar de los «efectos perversos».

de bienestar social. Nixon parecía dispuesto a introducir un programa de seguro médico universal muy esperado y necesitado. Sin embargo, durante su mandato, apenas unos años después, estas reformas parecían mucho menos seguras, cuando el escenario de inflación creciente puso en primer plano a los asesores conservadores de Nixon y su propia presidencia caía en el escándalo. El presidente Ford, que había llegado al poder proclamando su intención de impulsar el seguro médico universal, terminó por aplazar el proyecto indefinidamente ante las quejas de los empleadores por unos costes sanitarios inasumibles.⁵⁵ La renuncia de Ford demostró ser el golpe definitivo, borrando consigo el seguro médico universal de la agenda política de muchos años venideros.

En este nuevo contexto de austeridad, la crítica neoliberal al seguro social iba más allá de las paredes académicas; había encontrado un público receptivo entre la clase política y especialistas en salud pública. Así durante los años siguientes, la ética silenciada del riesgo moral, la culpa y la responsabilidad que daba forma a la crítica de la academia neoliberal al Estado de bienestar encontró una expresión aún más plena en una nueva retórica sobre salud pública centrada en las elecciones de vida irresponsables y en los crecientes costes sanitarios. En 1976, la Task Force on Health Promotion and Consumer Health Education [Grupo de Trabajo para la Promoción de la Salud y Formación en Salud del Consumidor], patrocinada por los muy respetables National Institutes of Health [Institutos Nacionales de Salud] y el American College of Preventive Medicine [Colegio Estadounidense de Medicina Preventiva], enfatizaba la «vital importancia del comportamiento y estilo de vida individual como factores fundamentales del insatisfactorio estado de salud de la nación y la creciente factura de la atención sanitaria».⁵⁶ En una intervención en el neoconservador *Public Interest*, el bioeticista Leon Kass llegaba a culpar de la inflación de los costes sanitarios a las involuntarias consecuencias de los seguros sin culpa. «Todas las propuestas del seguro médico nacional», señalaba, «abrazan el principio de exención de culpa sin cualificaciones. Por lo tanto, deciden ignorar, o al menos tratar de irrelevante, la importancia de la responsabilidad personal en el estado de salud de uno mismo. En consecuencia, pierden la ocasión de incorporar incentivos negativos y positivos en el plan de pago de seguros, con medidas como el rechazo o la reducción de beneficios por enfermedades respiratorias crónicas a personas que siguen fumando».⁵⁷ Al

⁵⁵ Starr, *The Social Transformation of American Medicine...*, p. 406; Robert Crawford, «You Are Dangerous to Your Health: The Ideology and Politics of Victim Blaming», *International Journal of Health Services*, vol. 7, núm. 4, 1977, pp. 665-666.

⁵⁶ Task Force on Health Promotion and Consumer Health Education, *Preventive Medicine USA: Task Force Reports*, Nueva York, Prodist, 1976, p. 88.

⁵⁷ Leon Kass, «Regarding the End of Medicine and the Pursuit of Health», *Public Interest*, núm. 40, verano de 1975, p. 41.

culpar de las elecciones vitales irresponsables a los seguros sociales, Kass, como otras voces neoconservadoras, suponía que la inflación sanitaria era en su mayor parte una aflicción moral que sería mejor superar reincorporando las nociones de culpa a la práctica cotidiana de la gestión de riesgos.

Resurgida de los márgenes de la ortodoxia económica y de salud pública de principios de los años setenta, la crítica neoliberal del seguro social había adquirido algo parecido al estatus de consenso común a finales de la década. La viabilidad de la agenda neoliberal de la reforma sanitaria puede atribuirse, al menos en parte, a su voluntad de dar cabida a la crítica de la izquierda de la asistencia sanitaria institucional, neutralizando al mismo tiempo los argumentos de la izquierda a favor de una redistribución social.⁵⁸ Así, el desafío de la Nueva Izquierda a la autoridad de la profesión médica se trasladó al ataque sin descanso de las opiniones reformistas neoliberales a los «poderes de monopolio» de la AMA y de profesionales sanitarios que ejercían de forma privada. La desinstitucionalización parecía ahora un método excelente para externalizar el cuidado al hogar y una lógica perfecta para sustituir el trabajo no remunerado del cuidador privado por el trabajador asalariado del sistema sanitario. Incluso la práctica de grupos de prepago, considerada en su día como un experimento ligeramente subversivo en la asistencia sanitaria cooperativa y amargamente cuestionada por la AMA, se adoptaba como un modelo organizativo capaz de racionalizar los costes de la asistencia sanitaria, bajo la forma de Health Maintenance Organization [HMO, Organización de Mantenimiento de la Salud] y se promovía como el medio más eficiente para introducir fuerzas competitivas en el mercado de la asistencia sanitaria. Las prácticas sanitarias cooperativas y antijerárquicas, en su día ideadas por la izquierda, las gestionaban empresas ahora con ánimo de lucro que las consideraban un método ideal para reducir el gasto.

El campo de la salud pública, en su día inseparable de la teoría de la medicina social, no era inmune a la influencia de la economía sanitaria neoliberal y, en los años setenta, comenzó a revisar muchos de sus supuestos fundacionales. Por aquel entonces, la epidemiología descubrió que en las sociedades más ricas las enfermedades infecciosas ya no eran las causas principales de enfermedad, sino otras no contagiosas que parecían estar ligadas a comportamientos evitables como la sobrealimentación, el tabaquismo o la falta de ejercicio. Además, parecía que muchas de las enfermedades infecciosas residuales que seguían afectando a la población más rica (en concreto, las ETS asintomáticas e indetectables) estaban relacionadas con el sexo sin protección. En gran parte, en la misma medida en que la crítica neoliberal a la salud pública se centraba en el ejemplo límite

⁵⁸ Starr, *The Social Transformation of American Medicine...*, pp. 393-396.

del daño autoinfligido, las políticas de salud pública comenzaron a orientarse al problema de «las elecciones vitales» y sus supuestos costes sociales. El presidente de la Fundación Rockefeller, en su día un agente filantrópico líder en la salud pública internacional, se quejaba de que «el coste de la pereza, la gula, la intemperancia alcohólica, la conducción temeraria, el frenesí sexual y el tabaquismo eran ahora responsabilidad nacional y no individual. Esto se justifica como libertad individual, pero la libertad de un hombre en la salud es el grillete en impuestos y primas de seguros de otro hombre». ⁵⁹ Incluso opiniones veteranas en la defensa del seguro médico universal comenzaron a preguntarse en voz alta si los crecientes costes de la sanidad podían atribuirse al «estilo de vida hedonista dominante» entre la población estadounidense más rica y si cabría esperar que los contribuyentes responsables costearan esas elecciones vitales. ⁶⁰ En Canadá (1974), Reino Unido (1976) y Estados Unidos (1979) las autoridades sanitarias solicitaron la ampliación de las intervenciones de salud pública más allá de la atención médica y quirúrgica tradicional para que abarcaran las medidas preventivas dedicadas al comportamiento personal y a los estilos de vida poco saludables. ⁶¹ Estas intervenciones debían dejar de centrarse en el riesgo estadístico —el riesgo que se podría abstraer de la voluntad, la culpa o la negligencia— y hacerlo en los daños autoinfligidos que pudieran atribuirse plenamente a la voluntad del individuo. Daniel Wikler, quien

⁵⁹ John H. Knowles, «The Responsibility of the Individual», *Daedalus*, vol. 106, núm. 1, 1977, p. 59.

⁶⁰ En palabras de teóricos de la salud pública, Anne y Herman Somers: «Dado que el comportamiento más individual está condicionado culturalmente, ¿es posible combatir las todopoderosas fuerzas de la cultura estadounidense, como la publicidad comercial y la prevalencia del estilo de vida hedonista? ¿Qué se puede hacer en concreto en una democracia sobre estos factores de riesgo tan profundamente arraigados? ¿Qué evidencia hay para justificar la fe en o el apoyo a un nuevo impulso en esta dirección?». Anne R. Somers y Herman M. Somers, «A Proposed Framework for Health and Health Care Policies», *Inquiry*, vol. 14, núm. 2, 1977, p. 130. En un artículo anterior, Anne Somers señala que «la mayoría de los problemas más graves del país en materia de salud, incluidos los accidentes automovilísticos, todas las formas de adicción a las drogas incluido el alcoholismo, las enfermedades venéreas, muchos cánceres, la mayoría de las enfermedades del corazón, así como la mayor parte de la mortalidad infantil, son atribuibles en primer término no a una escasez por parte de quien proporciona los servicios, sino a las condiciones de vida, la ignorancia o la irresponsabilidad del paciente» (p. 161). El problema, predecía, «se volverá aún más complejo cuanto más socialicemos los costes de la sanidad. Es probable que el contribuyente que no fuma se pregunte cada vez con más frecuencia por qué debería pagar impuestos para financiar la atención sanitaria de una persona que fuma y que sufre una muerte prolongada y costosa por cáncer de pulmón o enfisema» (p. 162). Anne R. Somers, «The Nation's Health: Issues for the Future», *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, vol. 399, núm. 1, 1972, pp. 160-174.

⁶¹ Mark Lalonde, *A New Perspective on the Health of Canadians: A Working Document*, Ottawa, Report of the Government of Canada, 1974; Department of Health and Social Services, *Prevention and Health: Everybody's Business*, Londres, HMSO, 1976; Surgeon General of the United States, *Healthy People: Report on Health Promotion and Disease Prevention*, Washington DC, US Government Printing Office, 1979.

criticaba este cambio en las prioridades de la sanidad pública, resume las consecuencias de esta nueva ética: «Si enfermamos o adquirimos una discapacidad como resultado de la negligencia en el cuidado de nosotros mismos, o por haber asumido riesgos innecesarios, lidiar con estas necesidades sanitarias debería entenderse como una responsabilidad personal y no social y, como tal, no debería considerarse igual que otras necesidades sanitarias inevitables».⁶²

La cuestión de si una persona ha asumido el riesgo voluntariamente y por lo tanto lo ha consentido se vuelve una cuestión decisiva bajo esta óptica. El seguro social, caso de llegar a ser económicamente sostenible, debería limitarse a cubrir los supuestos de enfermedad que ocurren con independencia de la voluntad de la persona asegurada, no cabría esperar que el sistema de salud pública redistribuyera los costes de los riesgos voluntarios. Sin abolir el seguro social en su totalidad, la crítica neoliberal de la salud pública carcome las aristas de la sanidad redistributiva introduciendo en el cálculo de los daños sociales la distinción entre la enfermedad que merece o no merece atención, la víctima inocente y quien se autoinflige un daño al correr un riesgo. Se presupone que la persona que se ha infligido daño a sí misma incurriendo en un estilo de vida imprudente ha asumido dicho riesgo a sabiendas y por definición no merece compensación.

Las políticas de autocuidado: el sida en la era Reagan

La epidemia de sida difícilmente podría haber surgido en un momento menos apropiado en la historia reciente de la salud pública. A principios de los años ochenta, los gobiernos municipales habían soportado más de una década de crecientes costes de servicios sociales y se encontraban en plena crisis fiscal provocada por el *shock* Volcker. Los despidos masivos que trajo consigo la recesión implicaron un vertiginoso crecimiento del número de personas sin seguro privado. La primera gran intervención presupuestaria de la administración Reagan, la Omnibus Budget Reconciliation Act [la OBRA, ley de reconciliación presupuestaria general] aprobada en 1981, aumentaba la ya significativa presión del sistema de salud pública al recortar la contribución federal para el Medicaid y al permitir que los estados pusiesen en marcha mayores restricciones por su cuenta.⁶³ El «Nuevo Federalismo» de Reagan apelaba al gobierno federal a reducir su papel en la financiación de los servicios sociales: en la práctica delegaba la

⁶² Daniel Wikler, «Personal and Social Responsibility for Health» en Sudhir Anand, Fabienne Peter y Amartya Sen, *Public Health, Ethics, and Equity*, Oxford, Clarendon, 2005, p. 109.

⁶³ Beatrix Hoffman, *Health Care for Some: Rights and Rationing in the United States since 1930*, Chicago, University of Chicago Press, 2012, p. 169.

responsabilidad de implementar los recortes presupuestarios a los niveles estatales y locales de gobierno, dándoles «libertad» a la hora de decidir dónde debía trazarse la línea. Según la OBRA, los estados y las ciudades que se habían visto más golpeados por la crisis presupuestaria, como la reciente bancarota de Nueva York, tenían la posibilidad de reducir drásticamente los reembolsos a Medicaid que pagaban a los hospitales. Esto tuvo un efecto inmediato en las salas de emergencia de los hospitales, que solían ser el primer recurso de la población más empobrecida. Durante años, los hospitales privados se habían negado a aceptar a población indigente, considerando que los pacientes del Medicaid eran una gran amenaza a sus beneficios y respondieron trasladándolos en masa a las ya abarrotadas salas de emergencia de los hospitales públicos. En un momento en el que la atención sanitaria de acceso gratuito era más necesaria que nunca, la llamada crisis de derivaciones a las salas de emergencias fue el síntoma más visible de la fuerte presión presupuestaria que sufría el sector de salud pública.

El proyecto neoliberal de reforma de los servicios sociales implicaba varios procesos de devolución política e institucional mutuamente reforzados entre sí. Mientras que el Nuevo Federalismo de Reagan trasladaba los poderes federales para la reducción presupuestaria a los niveles local y estatal de gobierno, el trasvase de los costes de los servicios sociales también se produjo en el plano de la institución sanitaria en sí misma, a medida que el movimiento por la gestión de la atención se propuso externalizar la labor de cuidados de los hospitales al sector doméstico no lucrativo. En 1983, la administración Reagan introdujo un nuevo sistema para reembolsar los costes de Medicaid y Medicare: este definía los límites de tiempo que un paciente podía estar hospitalizado.⁶⁴ En el pasado, el sistema de tasa por servicio había permitido a los profesionales sanitarios cargar tantos servicios como quisieran a los seguros públicos; el nuevo sistema ligaba las decisiones de gasto a los diagnósticos y definía un límite absoluto en los costes recuperables para cada enfermedad diagnosticada. Los hospitales perderían dinero si permitían que los pacientes superaran ese límite, pero obtendrían un beneficio si lograban dar antes de alta a los pacientes. En un contexto en el que los presupuestos de sanidad ya se veían constreñidos, esta decisión hizo que los hospitales dieran altas tan pronto como fuera posible, incluso cuando todavía necesitaban servicios de cuidados profesionales.

La atención hospitalaria se sustituyó, si acaso, por visitas sanitarias intermitentes a los hogares; así la carga de los cuidados pasó del costoso trabajo de profesionales contratados de forma indefinida a la fuerza de

⁶⁴ Jennifer A. Parks, *No Place Like Home? Feminist Ethics and Home Health Care*, Bloomington, Indiana University Press, 2003, pp. 9-14; Sandra R. Levitsky, *Caring for Our Own: Why There is No Political Demand for New American Welfare Rights*, Oxford, Oxford University Press, 2014, pp. 46-47.

trabajo feminizada de las trabajadoras sanitarias del hogar, normalmente contratadas por cuenta propia.⁶⁵ Pero en su mayoría, la atención sanitaria simplemente pasó de las instituciones a los hogares y de los profesionales sanitarios al trabajo no remunerado de los miembros de la familia, mayoritariamente hermanas, madres e hijas.⁶⁶ En el momento en que anunciaba la creación de la Home Care Week [Semana de la Asistencia en el Hogar], Regan señaló que «los informes sobre la muerte de la familia se habían exagerado mucho: el hogar debía ser el primer escenario para la atención y el tratamiento, porque implica sanación; en el hogar, los miembros de la familia pueden proporcionar cuidados y amor».⁶⁷

Junto con estos elogios a la atención en el hogar, Reagan entendió la recuperación del voluntariado como algo central en su agenda de reforma de la asistencia social. Si el Nuevo Federalismo apelaba a los gobiernos federales a devolver sus responsabilidades a los niveles estatal y municipal, Reagan se planteó también que el trabajo voluntario realizaría una transformación similar en el sector sin ánimo de lucro. Afirmaba que «lo que el federalismo es al sector público, lo son el voluntariado y la iniciativa privada al sector privado. El país está lleno de ideas y de creatividad, pero un gobierno que se rige por decretos no tiene forma de responder [...] El voluntariado es una parte esencial de nuestro plan para devolverle el gobierno al pueblo».⁶⁸ A medida que se recortaban los presupuestos de servicios sociales, el neoliberalismo y el neoconservadurismo pregonaban a bombo y platillo las virtudes del empoderamiento comunitario mediante el «autocuidado». En un informe patrocinado por el American Enterprise Institute [Instituto de Empresa Estadounidense] de 1981, teóricos de la sanidad pública y antiguos activistas de la Nueva Izquierda, Lowell S. Levin y Ellen L. Idler, identificaron el «autocuidado» como una alternativa ideal al Estado de bienestar.⁶⁹ Para estos mensajeros quizás involuntarios

⁶⁵ Eileen Boris y Jennifer Klein, *Caring for America: Home Health Workers in the Shadow of the Welfare State*, Oxford, Oxford University Press, 2012.

⁶⁶ Evelyn Nakano Glenn, *Forced to Care: Coercion and Caregiving in America*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2010, pp. 154-155.

⁶⁷ Ronald Reagan, «Proclamation 5812 — National Family Week, 1988, November 19», en *Public Papers of the Presidents: Ronald Reagan 1988-1989*, Washington DC, US Government Printing Office, 1990, pp. 1563-1564; Ronald Reagan, «Proclamation 5913 — National Home Care Week, 1988, November 19», en *ibídem*, p. 1564.

⁶⁸ Ronald Reagan, «Remarks at the Annual Meeting of the National Alliance of Business, October 5, 1981», en *Public Papers of the Presidents: Ronald Reagan 1981*, Washington DC, US Government Printing Office, 1982, pp. 883 y 886.

⁶⁹ Lowell S. Levin y Ellen L. Idler, *The Hidden Health Care System: Mediating Structures and Medicine*, Washington DC, Ballinger [American Enterprise Institute for Policy Research], 1981. Lowell S. Levin había sido un temprano adalid de los experimentos con la sanidad de la Nueva Izquierda. Véase Lowell S. Levin, Alfred Hyman Katz y Erik Holst, *Self-Care: Lay Initiatives in Health*, Londres, Croom Helm, 1977. Para un sutil análisis de la trayectoria del autocuidado, desde la contrapráctica de la Nueva Izquierda hasta la prescripción neoliberal, véase Christopher Ziguras, *Self-Care: Embodiment, Personal Autonomy and the Shaping of Health Consciousness*, Londres, Routledge, 2004.

de la Nueva Derecha, las cargas de los cuidados generadas por la desinstitucionalización de los pacientes de los hospitales públicos exigían una reinstitucionalización simultánea de la familia privada, la iglesia y la beneficencia como conductos naturales para el «autocuidado». En gran medida, sus planteamientos anticiparon el actual perfil del cambio político de las décadas venideras, en las que las leyes de obligación filial, la reforma de la asistencia social basada en la fe y la movilización selectiva del sector sin ánimo de lucro reinventarían la familia, la iglesia y la beneficencia como principales instituciones mediadoras de las políticas sociales.

Los efectos de la reforma sanitaria neoliberal se sintieron con fuerza en Nueva York, el epicentro de la epidemia de sida en EEUU durante los años ochenta. Como apuntan Charles Perrow y Mauro F. Guillén, «el sida llegó a una ciudad especialmente mal preparada para hacerle frente». ⁷⁰ La ciudad de Nueva York se había declarado oficialmente en quiebra durante la recesión de 1975, cuando los banqueros se negaron a adquirir sus bonos municipales y a refinanciar sus deudas. La ciudad se vio abocada en consecuencia a un prolongado régimen de austeridad, dirigido bajo la atenta mirada de su élite empresarial, que aspiraba a reestructurar la economía en torno a los servicios financieros y el mercado inmobiliario mientras expulsaba a la población pobre del centro de la ciudad, en una estrategia combinada de concesiones fiscales regresivas y recortes de los servicios sociales. Mucho antes del abismal cambio que supuso la revolución Reagan, Nueva York era el laboratorio de la reforma neoliberal: el régimen de crisis impuesto tras la bancarrota predefinió el impacto del *shock* Volcker a nivel nacional y sirvió como preludio para la ola de programas de ajuste estructural que se desplegarían por todo el mundo durante los años ochenta. ⁷¹

La sanidad fue el primer objetivo de los recortes presupuestarios del alcalde Ed Koch. Según un estudio, los hospitales de la ciudad cerraron hasta 1.800 camas en la primera mitad de los ochenta, en un momento en el que las infecciones por sida aumentaban a un ritmo alarmante. ⁷² Incluso a finales de la década, funcionarios estatales y de la ciudad se mostraron aparentemente ajenos a la gravedad de la situación. Todavía en 1989, el presidente George H. W. Bush proponía recortar fondos de los hospitales de la ciudad de Nueva York, mientras que el gobernador se negaba a utilizar los fondos asignados para la legislatura (de las 500 nuevas camas para sida que tantas veces se habían prometido apenas un tercio llegaron a estar disponibles antes de que terminase la década, y muchas de ellas no llegaron a usarse por la escasez de personal de enfermería cualificado). ⁷³

⁷⁰ Charles Perrow y Mauro F. Guillén, *The AIDS Disaster: The Failure of Organizations in New York and the Nation*, New Haven (CT), Yale University Press, 1990, p. 68.

⁷¹ Kim Moody, *From Welfare State to Real Estate: Regime Change in New York City, 1974 to the Present*, Nueva York, New Press, 2007, pp. 9-92.

⁷² Perrow y Guillén, *The AIDS Disaster...*, p. 71.

⁷³ *Ibidem*, pp. 71-72.

Como resultado de esta inercia institucional, durante los primeros cinco años de pandemia, las organizaciones de base de atención al sida se encontraron prácticamente solas a la hora de dar cualquier tipo de respuesta. En las ciudades más duramente golpeadas por el VIH (Nueva York, San Francisco, Washington y Los Ángeles), gais, lesbianas, mujeres trans y sus redes afines organizaron ingentes cantidades de trabajo no remunerado para hacer frente a las urgentes necesidades de asistencia sanitaria, vivienda y servicios sociales de las personas infectadas por VIH, al tiempo que iniciaron también las primeras campañas de prevención. En Nueva York, la Gay Men's Health Crisis [GMHC, Crisis Sanitaria de Hombres Gais] fue hasta 1985 la única organización que prestaba servicios sustanciales a las personas que vivían con sida; en ese año, Reagan por fin rompió el silencio y las organizaciones sin ánimo de lucro empezaron a recibir pequeñas ayudas estatales y federales. Creada por un pequeño grupo de activistas sin ningún apoyo externo en 1982 y administrada desde un par de habitaciones de una pensión, la organización logró reunir a finales de ese mismo año «una fuerza de personal voluntario de más de 3.000 personas y formar hasta a 50 nuevas incorporaciones cada mes».⁷⁴

Las primeras organizaciones de ayuda al sida sabían muy bien que se encontraban en un callejón sin salida.⁷⁵ La decisión de organizar servi-

⁷⁴ *Ibíd.*, p. 107.

⁷⁵ En su memoria política de la Gay Men's Health Crisis [GMHC, Crisis Sanitaria de los Hombres Gais], Philip Kayal es brutalmente honesto sobre la convergencia entre el activismo temprano del sida y el voluntariado de la era Reagan. GMHC, escribe, «estaba definido por dos hechos sociales innegables: el desinterés homófobo y el renacimiento de la ideología del voluntariado estadounidense del presidente Ronald Reagan» (p. 5). Aunque señala la marginación de los hombres gais de la vida política estadounidense a principios de los ochenta, la reflexión de Kayal sobre las futuras alianzas potenciales entre el activismo gay y el patriotismo estadounidense resulta notablemente premonitrice: «Ahora muchos consideran que el vínculo del voluntariado con el imaginario religioso del patriotismo y el nacionalismo forma parte de nuestra religión civil y que es fundamental para comprender el voluntariado gay/del sida. Irónicamente, que los gais tomen la iniciativa de servir a otros que lo necesitan refleja un valor enfatizado por todas las religiones estadounidenses y complementa el carácter protestante y capitalista del país. Los voluntarios gais se adhieren, aunque no lo sepan, a visiones conservadoras y republicanas al respecto de dónde recae la responsabilidad de resolución de los problemas, mientras que la creciente industria del sida exige más apoyo público» (p. 72). Véase Philip M. Kayal, *Bearing Witness: Gay Men's Health Crisis and the Politics of AIDS*, Boulder (CO), Westview Press, 1993. Cindy Patton es igualmente incisiva. Escribe: «Irónicamente, este planteamiento [el giro hacia las organizaciones voluntarias de base], combinado con el plan de Reagan de convertir prácticamente todos los servicios gubernamentales en servicios comunitarios bajo la guisa de caridad cristiana y el voluntariado [...] la percepción habitual de que la inacción del gobierno era el resultado de la homofobia consciente y directa, el hecho de que el gobierno no actuara porque eran los hombres gais los que más se identificaban con el sida oscureció las convergencias más amplias de los patrones de discriminación provocados por las estrategias de desinversión de Reagan. El argumento de la homofobia se centraba en patrones de financiación para el sector privado, en su mayor parte grupos comunitarios gais, y analizaba superficialmente la falta de financiación de los programas de drogas y pobreza asociados en parte al

cios sanitarios y de otro tipo entre la comunidad gay era una decisión política: las primeras organizaciones de ayuda al sida eran herederas del movimiento por el autocuidado de los años setenta y les costaba ceder el control al sector público sanitario, que percibían como punitivo y cargado de ideas normativas sobre la sexualidad. A principios de los años ochenta, la patologización de la desviación sexual estaba lejos de ser un recuerdo del pasado; la homosexualidad aún era ilegal en muchos estados, mientras que las principales voces que asesoraban a Reagan sobre el sida (conservadores culturales como William Bennet y Gary Bauer) amenazaban con recuperar antiguos métodos de salud pública como la cuarentena, el cierre de saunas y las pruebas obligatorias.⁷⁶ En un contexto, sin embargo, en el que Reagan pregona las virtudes del voluntariado como solución para los fallos del Estado social, el autocuidado también representaba una capitulación práctica a la política social neoliberal. Durante los primeros años de epidemia, el activismo del sida no tenía más posibilidades que cuidar de sí mismo, a riesgo de no hacer nada, y así terminaron por asumir responsabilidades que, de otro modo, podría haber asumido el Estado. La influencia política que las iniciativas sanitarias de la Nueva Izquierda lograron ejercer durante los años setenta, desde los márgenes y en un momento en el que los servicios de bienestar proliferaban, se vio gravemente mermada en un contexto en el que estas iniciativas se limitaron a sustituir la asistencia social estatal. Las consecuencias de la cada vez más ambiciosa agenda del bienestar de la Gran Sociedad y sus secuelas fueron las de ampliar la frontera de los servicios de cuidados prestados por el Estado más allá de los límites raciales y sexuales del salario familiar fordista. El contraefecto de los recortes presupuestarios neoliberales fue reducir este espacio, pero también, como si fuera un accidente, volver a limitar los cuidados a las líneas familiares de la diferencia racial, de género y sexual. Más allá del círculo privilegiado de la familia con seguro privado, la atención sanitaria no era fácil de obtener a no ser que uno cuidase de sí mismo. En ningún sitio como en los márgenes se apelaba con más fuerza a la responsabilidad personal.

Familia, Iglesia y beneficencia

La posición de Reagan sobre el voluntariado era intencionadamente ambigua, pretendía explotar y desactivar, a la vez, las energías de un sector sin ánimo de lucro que había sido un objetivo de financiación gubernamental en la agenda de la Gran Sociedad. Incluso cuando él mismo animaba

sida, programas que precisamente Reagan estaba dismantelando en el momento en que el sida empezó a exacerbar estos problemas que venían de tiempo atrás» (pp. 16-17). Cindy Patton, *Inventing AIDS*, Nueva York, Routledge, 1990.

⁷⁶ En este contexto, véase Patton, *Inventing AIDS...*, pp. 15-19.

a estas asociaciones a tomar el relevo de los fallidos servicios públicos, Reagan hacía todo lo posible por recortar su infraestructura, que había crecido mucho más que los programas de acción comunitaria de la Gran Sociedad. Dada su proximidad al movimiento por los derechos civiles y a la Nueva Izquierda, evidentemente estas no eran el tipo de iniciativas voluntarias que Reagan quería promover. Al reflexionar sobre el legado de los primeros años de Reagan en el gobierno, Lester Salamon sugiere que Reagan llegó a recortar al sector no lucrativo «el equivalente a 115 mil millones de dólares en términos reales» entre 1982 y 1985.⁷⁷ La Ley de reconciliación presupuestaria general de 1981 trajo consigo grandes recortes a los programas de subvenciones de los gobiernos estatales y locales, los primeros recortes de este tipo en casi un cuarto de siglo, y transformó una gran variedad de subvenciones categóricas (es decir, las subvenciones con presupuestos asignados a programas determinados) en subvenciones fijas que daban menos dinero a los estados e imponían más normas sobre cómo gastarlo.⁷⁸ Estas reformas destrozaron a las asociaciones más pequeñas y más militantes que se habían beneficiado de la holgada financiación durante la Gran Sociedad⁷⁹ y tuvieron un efecto especialmente devastador sobre los servicios de atención sanitaria para la población pobre. Durante el primer mandato de Reagan, se calcula que los recortes a las subvenciones sanitarias fijas supusieron de media entre un 20 y un 35 % a escala nacional; las subvenciones a los gobiernos estatales y locales cayeron en un 22 %; aquellas destinadas al alcoholismo, consumo de drogas y salud mental en un 34 %; y las de Medicaid en un 7 %.⁸⁰

Lo que estaba en juego era algo más que una deferencia por un gobierno limitado: Reagan fue derrochador en otros ámbitos del gasto federal y se mostró indiferente ante el creciente déficit presupuestario, despilfarrando miles de millones en gasto militar y concesiones fiscales, ante el desconcierto de sus asesores más cercanos.⁸¹ Más que un testamento del conservadurismo fiscal, los recortes de Reagan al sector no lucrativo vinieron motivados, en su mayor parte, por un ánimo político contra el

⁷⁷ Lester M. Salamon, «Non-Profit Organizations: The Lost Opportunity», en John L. Palmer e Isabel V. Sawhill, *The Reagan Record: An Assessment of America's Changing Domestic Priorities*, Washington DC, The Urban Institute, 1984, p. 272.

⁷⁸ George E. Peterson, «Federalism and the States: An Experiment in Decentralization» en *ibídem*, pp. 227-234.

⁷⁹ Según Lester Salamon, «fueron las agencias de la "Gran Sociedad" las que parecen haber sufrido más bajo la administración Reagan». Salamon, «Non-Profit Organizations», p. 280. Sandra Morgen también apunta que muchas clínicas de salud de mujeres cerraron tras el impacto de los recortes presupuestarios de Reagan. Morgen, *Into Our Own Hands...*, p. 184.

⁸⁰ American Federation of State County and Municipal Employees (AFSCME), *The State, the People and the Reagan Years*, Washington DC, AFSCME, 1984, p. 15.

⁸¹ El asesor presupuestario de Reagan, el conservador fiscal David Stockman, estaba especialmente alarmado por el exorbitante gasto de Reagan en defensa. David Stockman, *The Triumph of Politics*, Londres, Coronet, 1987, pp. 245-287.

legado de los programas de bienestar de la Gran Sociedad. A su llegada al poder, Reagan no tardó en cerrar la Community Service Administration [Administración de Servicios Comunitarios] (que había nacido como la Oficina de Oportunidades Económicas de la Gran Sociedad, el organismo responsable de financiar los programas de acción comunitaria) y en sustituirla por una nueva agencia del sector del voluntariado llamada ACTION. A continuación, nombró a un perfil «especialmente conservador» para dirigir la agencia, quien se esforzó especialmente en frenar los fondos dirigidos a las organizaciones activistas más a la izquierda.⁸² Según las nuevas normas dictadas por ACTION, las organizaciones no podían utilizar la financiación federal para llevar a cabo la mal definida actividad de «promoción política» y tendrían que separar los fondos que destinaran a ese fin si recibían del gobierno tan solo el 5 % de su presupuesto operativo. Esta premisa estaba dirigida obviamente contra los litigios de interés público surgidos en torno al activismo radical pro bienestar de los años sesenta y setenta; en concreto, los distintos desafíos de la Corte Suprema que habían socavado el poder de las agencias estatales de bienestar para controlar la moralidad.⁸³ Dicha premisa había sido diseñada para reprimir concretamente el tipo de activismo de políticas públicas que, contra todo pronóstico, llevarían a cabo las organizaciones de servicios para el sida durante los años ochenta.

Junto con esta prohibición general de la «promoción política», la administración Reagan estableció una serie de limitaciones específicas a los tipos de iniciativas no lucrativas que el gobierno estaba dispuesto a financiar. En 1988, el senador Jesse Helms convenció al Congreso para aprobar una enmienda diseñada para evitar que el gobierno federal financiara ningún recurso de formación o prevención del sida que «promoviera o animara, de forma directa o indirecta, actividades homosexuales».⁸⁴ La enmienda, que fue aprobada por abrumadora mayoría por el Senado y la Cámara de Representantes, afectaba al HHS, la mayor fuente de material de prevención de sida a nivel federal, estatal y local. Sin que el gobierno federal lo impulsara, el Center for Disease Control [CDC, Centro para el Control de Enfermedades] respondió a esta decisión adoptando sus propias recomendaciones que restringían la aparición de contenido sexualmente explícito en todas las publicaciones que financiaba.⁸⁵ De este modo, todos los

⁸² Salamon, «Non-Profit Organizations...», p. 274.

⁸³ Martha Davis, *Brutal Need: Lawyers and the Welfare Rights Movement, 1960-1973*, New Haven (CT), Yale University Press, 1993.

⁸⁴ Peter Lewis Allen, *The Wages of Sin: Sex and Disease, Past and Present*, Chicago, University of Chicago Press, 2000, pp. 134-136. Lisa Duggan y Nan D. Hunter consideran que la enmienda Helms forma parte de una estrategia más amplia para incorporar cláusulas «no homo promo» en los presupuestos de financiación pública para restringir el uso del dinero público. Véase Lisa Duggan y Nan D. Hunter, *Sex Wars: Sexual Dissent and Political Culture*, Londres, Routledge, 2006, pp. 129-133.

⁸⁵ Allen, *The Wages of Sin...*, p. 137.

materiales de prevención del CDC deberían incluir advertencias sobre los peligros de la promiscuidad y del consumo de drogas intravenosas y promover las virtudes de la castidad, además los mensajes sobre sexo seguro deberían darse de un modo que no representaran ni un ano, ni una vulva, ni un pene. Los gobiernos federales y estatales solían oponerse a financiar materiales con contenido sexual explícito, lo que obligaba a las organizaciones de apoyo al sida a crear cuentas separadas para todas las iniciativas de prevención que llevaran a cabo. Estas restricciones en la financiación de materiales de prevención del sida se introdujeron junto con la prohibición de utilizar dinero de la recaudación fiscal federal para financiar programas de intercambio de jeringuillas gratuitas, también patrocinado por Helms, así como una ley mordaza que impedía al personal sanitario profesional, que contara con financiación federal, proporcionar información y referencias relacionadas con el aborto.⁸⁶ En conjunto, estas normas definían cuidadosamente la naturaleza de los servicios no lucrativos que el gobierno estaba dispuesto a financiar y estrechaban progresivamente el espacio de maniobra en el que podían operar, en concreto en torno a cuestiones relativas a la sexualidad.

Las ambigüedades de la posición de Reagan ante el sector no lucrativo se vuelven legibles si las entendemos como parte de una maniobra más ambiciosa de remodelar la propia esencia del bienestar social. La enmienda de Helms, así como otras restricciones a la financiación federal estaban diseñadas para combatir el sesgo percibido como antifamiliar de los programas sociales de la Gran Sociedad y para canalizar el flujo de los contratos de servicios sociales en programas que promovieran la familia, la monogamia heterosexual y la castidad fuera del matrimonio. No fue casual que la imposición de distintas restricciones morales al sector sin ánimo de lucro se diera en un momento en el que la derecha religiosa reclamaba una mayor parte de los contratos de servicios sociales, mientras que perseguía activamente lograr la exención de leyes federales relacionadas con la libertad sexual (una cuestión que abordaré en más detalle en el capítulo 7). Por ejemplo, a finales de la década de 1980, los hospitales católicos de Nueva York solicitaron financiación gubernamental para atender a pacientes de sida, pero se opusieron abiertamente a cumplir las recomendaciones estatales de asesorar a los pacientes sobre prácticas de sexo seguro. Aunque estrictamente era ilegal, este rechazo del cumplimiento de las recomendaciones estatales no impidió que la iglesia recibiera financiación y que

⁸⁶ «A History of the Ban on Federal Funding for Syringe Exchange Programs», Smart Global Health Blog, The CSIS Global Health Policy Center, disponible on line en <http://www.smartglobalhealth.org/blog/entry/a-history-of-the-ban-on-federal-funding-for-syringe-exchange-programs/> (consultado por última vez el 2 de febrero de 2015); «Gag Rule» en Jeffrey D. Schultz y Laura A. Van Assendelft, *Encyclopedia of Women in American Politics*, Phoenix, AZ, Oryx Press, 1999, p. 90.

tácitamente el gobernador Mario Cuomo lo pasara por alto.⁸⁷ Estas demandas de excepcionalismo religioso se celebrarían después como expresiones de libertad religiosa y se institucionalizarían mediante la ley de Charitable Choice [Elección Caritativa] de Clinton en 1996, que eximía formalmente a las organizaciones religiosas de las leyes federales de no discriminación en el empleo. En retrospectiva parece evidente que la ampliación del espacio de libertad religiosa ha sido contemporánea al creciente número de restricciones establecidas a las políticas sexuales disidentes. La libertad religiosa de imponer la ley moral se afirma al mismo tiempo que se reduce la libertad sexual ante la ley moral: una implica la otra.

La proliferación de las zonas de exclusión moral diseñadas para canalizar los servicios no lucrativos hacia la promoción de la heterosexualidad monógama estaba en estricta consonancia con los esfuerzos de la administración Reagan para reinstitucionalizar la familia privada como lugar fundamental de cuidados. Como apunta Jennifer Parks, «el movimiento de desinstitucionalización, la glorificación de la atención doméstica o "comunitaria" como respuesta a la atención hospitalaria o de enfermería a domicilio, es un "regreso a casa" en varios sentidos de la expresión. Mientras que los pacientes, de hecho, vuelven antes a casa, la atención doméstica es también un retorno a una forma de cuidados que forma parte de nuestra historia social», un regreso a una economía de los servicios del hogar que siempre se ha estructurado rigurosamente a lo largo de las líneas de género y raza.⁸⁸ La puesta en valor de la atención doméstica es más que una pequeña reminiscencia de la tradición de las leyes de pobres estadounidenses a las que, como hemos visto, se recurría activamente para imponer la prestación de atención sanitaria por parte de los familiares a principios del siglo XX. No es casual que en el mismo momento en que Reagan impulsaba una legislación dirigida a reducir la duración de las estancias hospitalarias y devolver el trabajo de cuidados a los hogares, también permitiera que los estados recuperaran y aplicaran leyes de obligación filial con siglos de antigüedad como forma de recuperar los costes de Medicaid y Medicare.⁸⁹ Como vimos en el capítulo 3, los estatutos de responsabilidad familiar quedaron en relativo desuso tras la aprobación de la ley de Seguridad Social de 1935 y fueron explícitamente anulados por el estatuto de Medicaid de 1965, que prohibía el recurso a la ayuda familiar en lugar de la asistencia pública. Como gobernador de California y portavoz crítico de los programas de bienestar de la Gran Sociedad, Reagan se había

⁸⁷ Allen, *The Wages of Sin...*, pp. 144-145.

⁸⁸ Parks, *No Place Like Home...*, p. 11.

⁸⁹ La legislación en cuestión se aprobó en 1983. Véase State Medicaid Manual, HCFE Pub. 45-3. 3812, Transfer Binder párrafo 32 457, febrero de 1983. Para una lectura de esta legislación, véase Daniel Callahan, «What Do Children Owe Elderly Parents?» en Gail Henderson, *The Social Medicine Reader*, Durham (NC), Duke University Press, 1997, pp. 175-184.

manifestado fervientemente contra la derogación de estas leyes. Como presidente, convirtió la responsabilidad familiar en la consigna de la reforma de la asistencia social y animó a los estados a imponer estas leyes siempre que fuera posible. El ahorro que permitió la recuperación de las leyes de obligación filial de Reagan parecía ser simbólico en el mejor de los casos (resulta que extraer dinero de las familias indigentes de pacientes indigentes es más fácil de decir que de hacer), pero en cualquier caso la reinstitucionalización de la familia privada se produjo en gran medida por defecto, por el impacto negativo de la disminución de los servicios sociales y la reducción de las estancias hospitalarias, por no hablar de la inercia de los roles de género que, en plena crisis económica, parecían volver a encajar en su lugar sin ningún esfuerzo.

Estas eran las fronteras en las que el sector no lucrativo estaba obligado a trabajar durante los primeros años de la epidemia de sida. Si el traslado al sector no lucrativo había sido el principio rector de las prestaciones de servicios sociales de la era Reagan, dichas expresiones de empoderamiento iban a canalizarse en las formas institucionales revitalizadas de la familia, la iglesia y la beneficencia. La relación de las primeras organizaciones de apoyo al sida con esta agenda gubernamental fue, en el mejor de los casos, equívoca. Mientras que por un lado organizaciones como GMHC parecían haber interiorizado perfectamente el mandato del autocuidado, también habían transgredido los límites morales de la prestación de servicios impuestos por el Estado y en este aspecto se resistían a la asimilación. En un momento en que la coalición conservadora neoliberal-religiosa se esforzaba por reafirmar las responsabilidades privadas de la familia, el activismo del sida inventaba relaciones de cuidados más allá de los límites de la familia o del parentesco y promovía formas de «sexo seguro» que rechazaban la alternativa entre castidad o heterosexualidad monógama. Estas prácticas de autocuidado solían llevar al activismo al conflicto directo con la Iglesia y el Estado. A este respecto fue notable la acción de ACT UP *Stop the Church* [Frenar a la Iglesia], en la que los activistas simularon morir en los bancos de la Catedral de Nueva York para protestar contra las declaraciones públicas del cardenal O'Connor contra la homosexualidad y el aborto.⁹⁰ La acción fue polémica incluso entre las filas de ACT UP y a día de hoy resulta impensable.⁹¹ Sin embargo, solo resultó ofensiva en tanto se dirigía, de forma muy precisa, contra el nexo entre las formas de gobierno teológicas y neoliberales que iban a tomar forma en los años venideros.

⁹⁰ Para un relato sobre esta acción, véase Tamar W. Carroll, *Mobilizing New York: AIDS, Antipoverty, and Feminist Action*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2015, pp. 155-159, y Allen, *The Wages of Sin...*, pp. 142-144. Allen también arroja luz sobre la incipiente implicación de las iglesias católicas de Nueva York en la «asistencia social basada en la fe». Véase *ibídem*, pp. 144-145.

⁹¹ La controversia está reflejada en la película documental de Jim Hubbard, *United in Anger: A History of Act UP*, Nueva York, United in Anger Inc., 2012.

En su forma más incisiva, el activismo del sida de los años ochenta se preguntaba qué podían significar las connotaciones familiares del «hogar» para quienes rechazaban la heterosexualidad monógama reproductiva y además estaban amenazados por la falta de vivienda. Resultaba irónico que «la atención basada en el hogar» se promoviera como alternativa oficial al sistema público hospitalario en un momento en el que el precio de la vivienda era cada vez más inaccesible. La desinstitucionalización en sí misma era responsable en parte del grave aumento de la falta de vivienda que se registraba a principios de los años ochenta, ya que los pacientes que habían recibido atención sanitaria por parte del Estado eran ahora abandonados en la calle. A todo ello se añadía la presión de la inversión inmobiliaria subvencionada por el Estado y una estrategia de obsolescencia programada con respecto de la vivienda pública. De nuevo, las tensiones se sentían con fuerza en Nueva York, la ciudad que abrazó de forma más precoz y despiadada la inflación de activos como nuevo modelo de crecimiento económico. El problema de la falta de vivienda en Nueva York tenía «un origen muy prosaico», como apuntan Perrow y Guillén: «Quienes padecían de salud mental fueron abandonados en la calle [...] se recortaron los fondos de vivienda subvencionada para la población pobre, incluso mientras a las clases acomodadas se les ofrecían beneficios fiscales; en la ciudad de Nueva York los promotores de oficinas comerciales y apartamentos caros se beneficiaron de jugosas exenciones fiscales».⁹² En el capítulo 4 vimos cómo el foco de las políticas monetarias neoliberales de estímulo de la inflación de los activos se prestó a la reafirmación de la familia privada como vector de transmisión de riqueza. La gentrificación como estrategia urbana iba de la mano de la revalorización de la herencia, y esta confluencia de factores demostró ser doblemente marginalizante para quienes se resistían a adoptar la familia como institución sexual y a la vez se veían privados de riqueza familiar.

En los primeros años de la epidemia, la falta de vivienda era un problema muy real para los pacientes de sida de todas las clases, dado que muchos eran incapaces de pagar los alquileres después de perder el trabajo o eran desalojados de los alquileres a largo plazo por propietarios homófobos. Las organizaciones de ayuda al sida como GMHC afrontaron con éxito el problema de la falta de vivienda de la clase media durante los primeros años de la epidemia, crearon servicios de cuidado colectivos en hogares para pacientes moribundos, pero tardaron mucho más en abordar los problemas endémicos de la precariedad habitacional que afrontaba la población pobre infectada de VIH.⁹³ Esta tarea la asumiría el comité de vivienda de ACT UP, que consideraba el declive de la vivienda pública y los

⁹² Perrow y Guillén, *The AIDS Disaster...*, p. 166.

⁹³ Patton, *Inventing AIDS...*, p. 20.

servicios sociales en general como una cuestión fundamental del activismo del sida. En una de sus primeras acciones, el comité de vivienda ocupó el hall de la Torre Trump de Nueva York (un monumento del magnate de las inversiones Donald Trump) para señalar la contradicción entre el desarrollo inmobiliario por medio de subsidios fiscales y la falta de vivienda en la ciudad. Pero el comité no tardó en padecer las limitaciones de esas intervenciones teatrales esporádicas cuando se trataba de cuestiones relativas a las prestaciones sociales, y en el lapso de unos pocos años pasó de ser un grupo de acción directa a convertirse en un servicio de vivienda independiente para pacientes de sida empobrecidos.⁹⁴ En respuesta a la crisis de vivienda pública, con una iniciativa pequeña y sin duda inapropiada para la envergadura del problema, al establecer las conexiones entre la falta de vivienda, la homofobia familiar y la pobreza, el comité de vivienda se negó a reprivatizar la política de atención, y al hacerlo desafió la propia lógica de la atención domiciliaria.

***Volenti non fit iniuria*: el sida y el riesgo no asegurable**

Más allá de las cuestiones de la vivienda y de su ausencia, el cuerpo infectado por VIH casi parecía somatizar los riesgos particulares de la reforma sanitaria de los tiempos de Reagan, mientras que el ataque neoliberal a la economía del bienestar socavaba progresivamente las formas vigentes de seguro sanitario. El porcentaje de estadounidenses cubiertos por seguros de salud privados basados en el trabajo alcanzó su máximo en 1982, en la cumbre de la recesión Volcker y desde entonces se redujo progresivamente como resultado de la reestructuración a largo plazo de la población activa. A los empleadores, que en el pasado lo habían hecho todo por conservar una mano de obra permanente, ya no les convenían los beneficios económicos de ofrecer generosos seguros de salud en el nuevo entorno económico creado por la recesión, la reducción de plantillas en las empresas y la deslocalización en masa de la fabricación al extranjero. En respuesta a las nuevas presiones competitivas, los empleadores recurrieron a distintas estrategias para reducir los crecientes costes de la atención médica. Algunos trasladaron los costes a los empleados de más edad o a los jubilados, otros dejaron de cubrir a las personas dependientes o trataron de racionalizar los programas en vigor delegándolos a las Health Maintenance Organizations [HMO, Organizaciones de Mantenimiento de la Salud]. Algunos empleadores vetaron la contratación de quienes padecieran problemas médicos preexistentes, mientras que muchos otros simplemente se despojaron de los costes de la asistencia sanitaria contratando a trabajadores no asegurados

⁹⁴ Sobre el comité de vivienda de ACT UP, véase Brier, *Infectious Ideas...*, pp. 177-179.

con contratos a corto plazo.⁹⁵ El excepcionalismo histórico del sistema de salud estadounidense, es decir, su gran dependencia de un sistema de seguros privados basados en el trabajo y auspiciado públicamente, lo hizo especialmente vulnerable a la naturaleza cambiante del empleo en la era posfordista. A medida que el trabajo industrial a largo plazo se reducía constantemente a favor del empleo temporal a corto plazo, tanto en el sector profesional como en el sector servicios mal remunerado, el sistema estadounidense público-privado de seguro sanitario también se redujo de forma continua, lo que afectó a todos los niveles de la escala de ingresos.⁹⁶

Mientras tanto, las aseguradoras privadas que en el pasado habían intentado hacer las veces de sustitutas de la sanidad pública avaladas por el Estado empezaron a abandonar su compromiso con los principios del seguro social. Las grandes empresas fordistas que en su día suscribían los principios redistributivos de la asunción de riesgos y la igualdad de precios en un mismo territorio empezaron entonces a introducir primas específicas para distintos grupos de edad y profesiones, mientras que las empresas de seguros más pequeñas comenzaron a «seleccionar» empleados más jóvenes y con mejor salud ofreciéndoles primas más baratas.⁹⁷ El efecto inevitable de tal fragmentación del mercado fue socavar la propia lógica de los seguros sociales (que funcionan mejor en poblaciones grandes) y reducir el número de personas que podían permitirse un seguro. En los años ochenta, Dorothy Porter, historiadora de la salud pública, apunta que cada vez «menos estadounidenses estaban asegurados debido a los precios cada vez mayores. El número de personas no aseguradas aumentó hasta proporciones dramáticas. Además, a medida que, a finales de la década, aumentaba el desempleo entre quienes trabajaban en oficinas y puestos similares una porción cada vez mayor de estadounidenses experimentaron "episodios" en los que no estaban cubiertos por ningún seguro».⁹⁸

Sin embargo, más allá de los cambios estructurales del contrato de trabajo, las aseguradoras privadas también introducían nuevas excepciones en sus pólizas. Animadas por la crítica neoliberal del peligro moral y por un discurso sobre la salud pública cada vez más centrado en los efectos negativos de las elecciones vitales, las aseguradoras privadas comenzaron a reintroducir nociones de culpa en sus pólizas, reservando topes o exclusiones para accidentes que pudieran interpretarse como resultado de un daño autoinfligido. Esta nueva atención a las elecciones vitales estaba destinada

⁹⁵ Theda Skocpol, *Boomerang: Health Care Reform and the Turn against Government*, Nueva York, Norton, 1996, pp. 22-23.

⁹⁶ Hacker, *The Great Risk Shift...*, pp. 144-146.

⁹⁷ Skocpol, *Boomerang...*, pp. 22-23.

⁹⁸ Dorothy Porter, *Health, Civilization and the State: A History of Public Health from Ancient to Modern Times*, Londres, Routledge, 2005, p. 263.

a causar un gran impacto en las personas infectadas por VIH, dada la preponderante asociación entre la epidemia del sida y las decisiones vitales irresponsables. De hecho, aún en 1982 la ciencia todavía se preguntaba si las nuevas y extrañas afecciones inmunológicas que afectaban a los hombres gays jóvenes podían atribuirse al constante estrés vital causado por el baile, el popper y la sodomía,⁹⁹ e incluso después de que el virus se identificara oficialmente en 1984 su particular modo de transmisión mediante el sexo o el consumo de drogas seguía atrayendo un cierto tipo de oprobio moral. Teniendo esto en cuenta, apenas sorprende que a principios de los ochenta muchas aseguradoras privadas introdujeran «topes de sida» especiales en sus pólizas grupales, estableciendo límites absolutos para los costes recuperables por la atención del sida; por su parte, otras crearon exclusiones *volenti* que reservaban las coberturas solo a las víctimas inocentes de «infecciones involuntarias» mediante transfusión de sangre.¹⁰⁰ En una época en la que las voces expertas en salud pública entendían los riesgos de comportamiento como un daño autoinfligido, parecía que la infección de sida mediante el consumo de drogas o el contacto sexual representaba la elección vital definitiva, así como la confirmación definitiva de la máxima *volenti non fit injuria* [no se comete injusticia con quien actuó voluntariamente].

Cuando se manifestó plenamente la epidemia de sida, muchos trabajadores gays se vieron directamente excluidos de la cobertura de seguro médico o perdieron las coberturas disponibles cuando dejaron de poder trabajar. Estos hombres solo podían optar al Medicaid cuando ya habían agotado todos sus recursos en atención sanitaria de pago directo. El rechazo del mercado privado competitivo a asegurar los riesgos «voluntarios» de la infección por sida implicaba que el sistema de bienestar público se convertía en la aseguradora *de facto* y de último recurso de los pacientes de VIH/sida; un rechazo que teóricos juristas como Richard Posner y Tomas Philipson calificarían de error racional de mercado. En 1993, Medicaid, que cubría aproximadamente el 10 % de todo el gasto sanitario estadounidense, daba cuenta de hasta un 25 % de todos los costes relacionados con el sida; y el propio Medicaid estaba complementado por un programa de atención médica específico (la Ley CARE de Ryan White de 1990) diseñado para proporcionar un último recurso para las personas afectadas por

⁹⁹ Centers for Disease Control, «Epidemiologic Aspects of the Current Outbreak of Kaposi's Sarcoma and Opportunistic Infections», *New England Journal of Medicine*, vol. 306, núm. 4, 1982, pp. 248-252.

¹⁰⁰ Hoffman, *Health Care for Some...*, pp. 177-178; Peter Baldwin, *Disease and Democracy: The Industrialized World Faces AIDS*, Berkeley, University of California Press, 2005, p. 128; Deborah Stone, «AIDS and the Moral Economy of Insurance», *The American Prospect*, 4 de diciembre de 2000, disponible on line en <http://prospect.org/article/aids-and-moral-economy-insurance> (consultado por última vez el 20 de enero de 2015).

el sida que no tenían seguro.¹⁰¹ Cada vez más, las aseguradoras privadas consideraban que los pacientes de sida constituían riesgos inasegurables y cedían su coste al sector público, una división del trabajo que reservaba los riesgos más lucrativos a los seguros privados y que inevitablemente aumentaba la inflación de los costes sanitarios en el sector público.

En un momento en el que aumentaban las filas de personas no aseguradas en los centros de trabajo, el sistema de seguro social entraba en un periodo de crisis. Los recortes de Reagan a los servicios sociales en 1981 permitían a los estados estrechar sus criterios de admisibilidad para el Medicaid, lo que significaba que muchos más estadounidenses se quedaron sin ningún seguro, incrementando la insoportable presión en las ya saturadas salas de emergencia de los hospitales públicos. Los análisis de la televisión y los periódicos a principios de los noventa entretenían a sus audiencias con historias de hospitales privados que sin ninguna ceremonia abandonaban a pacientes no asegurados en el hospital público más cercano, de pacientes gravemente enfermos a los que se daba de alta de las salas de emergencia o que eran trasladados a través de las fronteras estatales. De nuevo, el particular impacto de esta crisis en los pacientes de sida se exacerbó por el hecho de que las personas infectadas por VIH que consumían drogas, que no eran heterosexuales o que trabajaban en la industria sexual habían pasado a representar a los enfermos que no merecían atención a ojos de la población en su conjunto. Tuvieran o no cobertura sanitaria, si se sospechaba que un paciente podía estar infectado de VIH, se le expulsaba sistemáticamente de las salas de emergencia y se le negaba la atención por parte de los profesionales de atención primaria.¹⁰²

Sin embargo, el impacto de la protección del riesgo institucional ante la creciente epidemia de sida fue mucho más allá de la cuestión de la cobertura sanitaria. La creciente fragmentación y las restricciones de los seguros de salud definieron el perfil de la epidemia en Estados Unidos, decidiendo por adelantado quién acudiría a los epidemiólogos del CDC y a quién no se tendría en cuenta. Para que el sida se reconociera como enfermedad identificable en primera instancia, fue necesario que un número suficiente de personas de un cierto perfil demográfico tuviera acceso a profesionales de la medicina de primer nivel y en contacto directo con las altas esferas de supervisión de la salud pública. En palabras de Cindy Patton: «Es un accidente histórico devastador que el VIH se identificara por primera vez entre hombres gays que recibían buenos cuidados; el sida, un diagnóstico de muerte prematura entre quienes antes estaban sanos, solo pudo identificarse en un grupo a punto de alcanzar el estatus social de "sanos"». ¹⁰³ El CDC recibió

¹⁰¹ Hoffman, *Health Care for Some...*, p. 177.

¹⁰² *Ibidem*.

¹⁰³ Patton, *Inventing AIDS...*, p. 128.

la primera notificación de la enfermedad a la que después se llamaría sida cuando un inmunólogo que trabajaba en el centro de investigación médica de UCLA trató a varios hombres blancos, jóvenes y gays que parecían sufrir una deficiencia inmune similar.¹⁰⁴ El inmunólogo conocía bien el funcionamiento de los canales oficiales de la supervisión de salud pública como para saber que tenía que ponerse en contacto con el departamento de salud local e informar a un colega que trabajaba en el CDC. La prueba más inmediata de algún denominador común que vinculase a los hombres era el hecho de que eran jóvenes, blancos, gays y hasta entonces estaban sanos. Pero estos hombres tenían algo más en común: sus seguros de salud eran lo suficientemente generosos como para cubrir consultas con especialistas de un centro médico de élite. Fue este detalle, por encima de los demás, lo que los hizo visibles ante el sistema público de salud oficial. En retrospectiva, queda claro que estos hombres, aunque sin duda estaban en riesgo, no representaban la epidemia de sida en su conjunto (que incluía a gran número de consumidores de drogas y a sus parejas); también estaban lejos de representar a la comunidad «gay» más afectada por el sida (que incluía a muchas personas no blancas, que no eran de clase media, no aseguradas o aseguradas por el sistema público, bisexuales y hombres y mujeres trans).

El efecto de esta diferencia de acceso a la atención médica asegurada de forma privada fue el de distorsionar el perfil epidemiológico de la crisis del VIH en el preciso momento en el que se hacía visible para la conciencia pública en los años ochenta. Los especialistas en salud pública D. C. Des Jarlais, S. R. Friedman y J. L. Sotheran han encontrado pruebas de que el VIH/sida estaba muy extendido entre quienes consumían drogas intravenosas durante los años setenta, mucho antes de que se detectaran los primeros casos entre hombres blancos gays.¹⁰⁵ Sus investigaciones indican que la seroprevalencia entre quienes consumían drogas inyectables rondaba aproximadamente el 20 % entre 1975 y 1977 y aumentó al 50 % entre 1978 y 1982. Esta epidemia «en la sombra» afectó desproporcionadamente a las personas negras e hispanas que consumían drogas, quienes tenían menos posibilidades de conseguir un empleo o la residencia permanente, de contar con ingresos suficientes y por lo tanto de acceder a material inyectable limpio. Sus muertes resultaron invisibles para los médicos privados que informaban de los casos de sida a los departamentos estatales de salud, porque en muy pocas ocasiones tenían acceso a atención médica continuada en primer lugar, porque ya sufrían de una alta tasa de infecciones no relacionadas con el VIH y porque muchas veces solo llegaban a las

¹⁰⁴ Cathy J. Cohen, *The Boundaries of Blackness: AIDS and the Breakdown of Black Politics*, Chicago, University of Chicago Press, 1999, p. 123.

¹⁰⁵ Jon C. Des Jarlais, Samuel R. Friedman y Jo L. Sotheran, «The First City: HIV among Intravenous Drug Users in New York City», en Elizabeth Fee y Daniel M. Fox, *AIDS: The Making of a Chronic Disease*, Berkeley, University of California Press, 1992, pp. 279-295.

salas de emergencia de los hospitales en las fases terminales de la enfermedad, cuando parecían estar sufriendo complicaciones por una neumonía. Como apunta Cathy Cohen, «esta población solía recibir atención en "las fábricas del Medicaid" o en las salas de emergencia de los hospitales universitarios que fueron tan importantes a la hora de identificar esta enfermedad entre los pacientes gais referidos y admitidos formalmente».¹⁰⁶

Para las mujeres que contrajeron VIH en los primeros años de la epidemia, de las que un número desproporcionado eran negras y latinas con pocos ingresos, el acceso a la atención médica era complicado por el hecho de que las infecciones oportunistas que acompañaban al sida en mujeres no estaban reconocidas por el CDC. Como primera institución de salud pública del país, el CDC construyó los datos epidemiológicos de la enfermedad y al hacerlo proporcionó a las aseguradoras públicas y privadas las clasificaciones necesarias para diseñar las coberturas. El sida era un síndrome que se podía manifestar con una serie de síntomas que diferían ampliamente según la clase, el género, el acceso a cuidados preventivos como vacunas, factores medioambientales y contacto con animales. Hasta 1992, el sida se definía oficialmente por la presencia de anticuerpos de VIH combinada con un número de enfermedades indicadoras que se habían observado originalmente en hombres jóvenes, blancos y gais. Esta definición restrictiva supuso que las cifras de mujeres infectadas por VIH estuvieron ampliamente infrarrepresentadas hasta bien entrados los años noventa: a muchas mujeres nunca se les hicieron pruebas en primera instancia porque no padecían las mismas infecciones oportunistas que los hombres.¹⁰⁷

Sin embargo, una mirada en retrospectiva al historial médico parece indicar que gran número de mujeres de pocos ingresos fallecieron de sida en los años setenta y ochenta, sin que provocara ninguna alarma entre el funcionariado de salud pública. Los informes registran picos injustificados de muertes por neumonía, tuberculosis, infecciones parasitarias raras, nefritis y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas entre mujeres de pocos ingresos en la ciudad de Nueva York, Newark, Hartford y Washington, precisamente las ciudades que se identificarían como epicentros de la pandemia, entre finales de los años setenta y los años ochenta.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Cohen, *The Boundaries of Blackness...*, p. 129.

¹⁰⁷ Por ejemplo, el sida en los hombres se suele manifestar bajo la forma del sarcoma de Kaposi, pero las mujeres con sida muy avanzado suelen sufrir inflamación pélvica, cáncer cervical o neumonía bacteriana. Risa Denenberg, «Unique Aspects of HIV Infection in Women», en ACT UP/New York Women y AIDS Book Group, *Women, AIDS, and Activism*, Boston, South End Press, 1990, pp. 31-44; Kimberly Christensen, «Vessels, Vectors, and Vulnerability: Women in the U.S. HIV/AIDS Epidemic», en Karen L. Baird, Dana-Ain Davis y Kimberly Christensen, *Beyond Reproduction: Women's Health, Activism and Public Policy*, Madison (NJ), Fairleigh Dickinson University Press, 2009, pp. 58-61; Brier, *Infectious Ideas*, pp. 172-173.

¹⁰⁸ Chris Norwood, «Alarming Rise in Deaths: Are Women Showing New 'AIDS' Symptoms?» *Ms.*, julio 1988, pp. 65-67. Para un análisis de estas revelaciones, véase Christensen, «Vessels, Vectors, and Vulnerability...», p. 56.

Es posible que estos casos no salieran a la luz en los años setenta por la misma razón que la «neumonía yonqui» no se reconocía como muestra de una enfermedad infecciosa emergente: las personas en cuestión tenían un acceso tan precario a la atención médica que la noticia de su muerte nunca se comunicaba a las autoridades de salud pública. Sin embargo en los años ochenta, estas mujeres seguían invisibilizadas ante la supervisión de salud pública, en tanto la propia definición del síndrome que daba el CDC las excluía de ser consideradas. El sesgo de género de la epidemiología del CDC tuvo efectos inmediatos, materiales y autorreforzantes: en muchos estados, el acceso a la atención sanitaria y a muchos otros beneficios dependía de un diagnóstico oficial de sida, por lo que las mujeres que estaban gravemente enfermas, pero que no se reconocían como VIH-positivas quedaban sistemáticamente excluidas de Medicaid, del Social Security Disability Insurance [Seguro de Discapacidad de la Seguridad Social] y de otros servicios de apoyo para personas con sida. Estas mujeres de bajos ingresos se definían doblemente como «riesgos inasegurables»: su marginación del sistema de salud que proporcionaba exclusivamente atención de emergencia de último recurso a personas con seguros escasos o no aseguradas implicaba que sus enfermedades apenas eran visibles para los epidemiólogos federales, y esta marginación a su vez se exacerbaba por la ilegibilidad de sus síntomas dentro de las clasificaciones oficiales de riesgo que publicaba el CDC.

En este contexto, era quizás inevitable que a finales de la década las políticas de seguros se convirtieran en uno de los focos principales del activismo del sida, cuando los primeros antirretrovirales estuvieron disponibles y aumentó la esperanza de vida. A finales de los años ochenta, ACT UP había formado subcomités en Nueva York y en San Francisco dedicados especialmente a acciones sobre los seguros a las que no tardaron en sumarse sus delegaciones por todo el país. ACT UP se suele caricaturizar como una organización compuesta por hombres blancos ricos, pero una integrante del subcomité de Nueva York señala que hasta un tercio de los hombres gais que participaban en las reuniones no contaba con ningún seguro, un hecho que ella atribuye al tipo de trabajos feminizados (peluquería, hostelería, trabajo temporal) en los que trabajaban muchos hombres gais.¹⁰⁹ En comparación con sus homólogos heterosexuales, incluso los hombres blancos de ingresos medios de ACT UP estaban en la vanguardia de los cambios en la relación laboral posfordista, sujeta a formas de inseguridad que en la clase media y durante mucho tiempo solo habían padecido las mujeres blancas, pero que se volverían endémicas entre los trabajadores de todas las clases en las décadas siguientes. El trabajo de estos comités

¹⁰⁹ Sarah Schulman, «Interview with Karin Timour», 5 de abril de 2003, transcripción, *ACT UP Oral History Project*, p. 14. Disponible on line en <http://www.actuporalhistory.org/interviews/images/timour.pdf> (consultado por última vez el 1 de octubre de 2014).

se centraba en primera instancia en las prácticas excluyentes de las aseguradoras privadas, pero pronto pasaron a una crítica mucho más amplia y ambiciosa de los problemas asociados con el Medicaid y las personas no aseguradas. En 1990, el subcomité de ACT UP en Nueva York logró su primera victoria importante cuando obligó a la National Air Traffic Controllers Association [Asociación Nacional de Controladores Aéreos] a retirar las cláusulas *volenti* que negaban la cobertura a quienes habían contraído VIH «voluntariamente» mediante relaciones sexuales o consumo de drogas.¹¹⁰ Siguieron adelante persiguiendo acciones similares contra otras aseguradoras privadas por todo el país. En San Francisco, el comité de la aseguradora Golden Gate presionó al estado para supervisar prácticas de exclusión territorial en el sector de seguros privado y para poner fin a las exclusiones por enfermedades concretas y a los topes de gasto.¹¹¹

Después de estas primeras intervenciones contra las aseguradoras privadas, los grupos de mujeres y de minorías dentro de ACT UP impulsaron a la organización para llevar sus medidas mucho más allá y centrarse en la exclusión sistemática de las mujeres infectadas por VIH de bajos ingresos de todos los tipos de seguro social. A finales de los años ochenta, activistas de ACT UP, de la American Civil Liberties Union [ACLU, Sindicato por las Libertades Civiles Estadounidenses], de la Women's Health Action Mobilization [WHAM, Movilización por la Acción por la Salud de las Mujeres] así como profesionales de la abogacía de la asistencia jurídica presionaron al CDC para que revisara su definición del sida y recogiera las enfermedades indicativas que afectaban a las mujeres.¹¹² El CDC se mostró reticente a introducir estos cambios, quejándose de que cualquier revisión en la línea de lo que proponía ACT UP multiplicaría los casos oficiales de pacientes de sida y aumentaría dramáticamente la carga de los servicios públicos. Después de varias negociaciones fallidas, activistas de ACT UP y WHAM llevaron a cabo una acción masiva contra el CDC a principios de los años noventa en la que bloquearon la entrada a su sede de Atlanta y desplegaron una pancarta desde el tejado en la que se podía leer «Las definiciones del sida del CDC matan a las mujeres».¹¹³ En octubre de ese año, Terry McGovern, una abogada de asistencia jurídica lesbiana que trabajaba con mujeres presas presentó una demanda contra el HHS, acusándolo de utilizar conscientemente las definiciones de sida del CDC para reducir las prestaciones que tenían que pagar.¹¹⁴ Coincidiendo con ello, activistas de ACT UP, incluidas muchas mujeres con sida y de bajos ingresos, protestaron frente a las oficinas del Departamento de Salud y Servicios Humanos

¹¹⁰ Schulman, «Interview with Karin Timour...», pp. 15-16.

¹¹¹ Hoffman, *Health Care for Some...*, p. 179.

¹¹² Christensen, «Vessels, Vectors, and Vulnerability...», pp. 64-65.

¹¹³ *Ibidem*, pp. 65-66.

¹¹⁴ Brier, *Infectious Ideas...*, p. 175.

que asignaba dichas prestaciones. En 1991, el CDC finalmente se comprometió, acordó incorporar algunas infecciones oportunistas específicas de mujeres, aunque no todas, a su definición oficial del sida. A pesar de que fue solo una victoria parcial, el cambio del CDC tuvo el efecto colateral más importante de convencer a la administración de la Seguridad Social de cambiar su definición del sida, una decisión que logró que las prestaciones por discapacidad y otros servicios de Medicaid por fin estuvieran disponibles para mujeres con infecciones sintomáticas por VIH, lo que convenció a muchos otros programas de servicios sociales de seguir esta premisa.¹¹⁵

A principios de los años noventa, ACT UP había pasado de las acciones puntuales contra las aseguradoras privadas diseñadas para conseguir beneficios para clases concretas de trabajadores, a articular una agenda más radical para la reforma del seguro de salud, una que recuperara el programa de reformas más amplio de principios de los años setenta. En 1991, ACT UP se sumó a una coalición de organizaciones progresistas que hacían campaña por el seguro de salud universal y de pagador único en Estados Unidos, una coalición que ayudó a llevar la atención sanitaria hasta la primera línea de la agenda del Partido Demócrata durante la campaña presidencial de 1992.¹¹⁶ En un folleto distribuido en una manifestación a favor del seguro médico universal en 1991, un integrante de ACT UP reflexionaba sobre la evolución política del grupo: «Hemos tenido que luchar una batalla tras otra para conseguir medidas inmediatas y provisionales con las que simplemente mantener a las personas con vida. En ocasiones nuestros objetivos parecían dispersos [...] No hemos dedicado el tiempo ni la energía necesarios a objetivos a largo plazo, ni tampoco a soluciones más amplias».¹¹⁷

Bajo la presión y la participación de las mujeres y de las minorías, ACT UP se vio obligado a mirar más allá de la cuestión de los seguros privados (una cuestión que tenía una importancia más inmediata para quienes, de otra manera, no tenían acceso a los privilegios de clase media del trabajo a tiempo completo con prestaciones), para centrarse en los fallos sistémicos del sistema público de seguros. Sin embargo, esta ampliación de los horizontes políticos hacia la incorporación de las dinámicas de desigualdad de género y de raza en el sistema de salud estadounidense no dejó de ser polémica dentro de ACT UP y, en último término, llevó a su desaparición.¹¹⁸ Para quienes vivieron la exclusión del sistema de salud como el resultado

¹¹⁵ Christensen, «Vessels, Vectors, and Vulnerability...», pp. 66-67.

¹¹⁶ Peter F. Cohen, *Love and Anger: Essays on AIDS, Activism and Policy*, Londres, Routledge, 2014, pp. 67-68.

¹¹⁷ *Ibidem*.

¹¹⁸ Para un enriquecedor debate sobre las divisiones políticas dentro de ACT UP, véase Brier, *Infectious Ideas...*, pp. 170-171, 179, 183.

de su sexualidad exclusivamente, el problema más inmediato era esa misma discriminación sexual y el acceso a los derechos que de otro modo les habrían correspondido. Otras personas experimentaron la exclusión directa del sistema de salud como una combinación mucho más compleja de factores relativos al sexo, la raza y la clase; y fue esa visión más amplia la que se registró en la campaña de ACT UP por el seguro médico universal.

Matrimonio entre personas del mismo sexo y la ética de la responsabilidad familiar

Siguiendo los pasos del movimiento por los derechos del bienestar de los años setenta, el activismo del sida de principios de los noventa articuló una política de bienestar radical que apelaba a la ampliación del seguro social al mismo tiempo que rechazaba la exclusión de la normatividad sexual. En cierto sentido, esta trayectoria se hizo necesaria por la peculiar historia del Estado de bienestar estadounidense. La agenda del New Deal, jamás ejecutada por completo, había dejado a Estados Unidos con un sistema de salud fragmentado: uno que reservaba beneficios laborales privilegiados a los trabajadores a tiempo completo, sindicados, normalmente hombres blancos y sus esposas; mientras que reservaba un sistema de seguros públicos inapropiado y más caro para las personas indigentes y discapacitadas. Los seguros médicos de calidad estaban supeditados a los puestos a tiempo completo en lugares de trabajo grandes y con presencia sindical o, en su defecto, al matrimonio con un hombre que disfrutara de dichas condiciones. Recuperando la agenda de la reforma radical de la sanidad que había florecido a principios de los años setenta, el activismo por la salud de ACT UP y de algunos grupos afines se propuso imaginar un sistema universal de seguro médico que dejara de estar ligado a las antiguas restricciones normativas del salario familiar, un sistema que separara la cobertura sanitaria del empleo y el estado civil. Este activismo trabajaba, no obstante, en un contexto histórico que era mucho más hostil a esos ambiciosos horizontes de cambio. Después de intentar sin éxito la aprobación de la reforma nacional del sistema sanitario en los primeros años de su mandato, Clinton pasó a «reformar la asistencia social tal y como la conocemos», una intervención que restringió drásticamente la asistencia pública a las madres solteras empobrecidas e hizo de la «promoción del matrimonio» y de la «responsabilidad familiar» la pieza central de políticas sociales para la población pobre. Los activistas del sida que protestaban por la sanidad universal tenían que trabajar en dos frentes simultáneamente: incluso cuando trataban de recuperar la agenda reformista de la izquierda de los años setenta, también tenían que enfrentarse a la ética cada vez más dominante de la responsabilidad personal y familiar asociada al neoliberalismo.

Después de la derrota de la reforma del sistema sanitario de Clinton y el consiguiente éxito de su promesa de «acabar con la asistencia social tal y como la conocemos», la campaña por el matrimonio entre personas del mismo sexo se puso al frente del activismo LGTB. La coalición por la salud más a la izquierda de principios de los años noventa se había propuesto desvincular los seguros de salud colectivos de sus referencias residuales al salario familiar. El movimiento LGTB ha avanzado posteriormente en la dirección opuesta: en lugar de desafiar las limitaciones intrínsecas del Estado de bienestar público-privado, ha peleado por la inclusión dentro de un sistema ya excluyente de seguros de salud privados basados en el trabajo. En un momento en el que el acceso a la cobertura de salud por medio del empleo garantizado, a tiempo completo —y por extensión el matrimonio— se ha convertido en un planteamiento cada vez más excepcional, el movimiento LGTB ha dedicado muchas de sus energías a intentar lograr este privilegio cada vez más excepcional. La noción de que el matrimonio entre personas del mismo sexo garantizaría el acceso a un seguro médico privado se ha convertido en un pilar fundamental del programa de reformas por la defensa por los derechos LGTB. Se han dado argumentos similares al respecto de la Seguridad Social, que en caso de muerte prematura ofrece prestaciones al cónyuge enviudado y a los hijos. En un momento de horizontes políticos cada vez más estrechos, quienes defendían el matrimonio entre personas del mismo sexo se dirigían a quienes aún defendían el salario familiar (prestaciones de seguro social basadas en el estado conyugal y familiar) para argumentar *que también se les debería incluir en este último vestigio de la normatividad fordista*. La apelación por el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo se convierte en una demanda de inclusión dentro de un sistema de salario familiar que en sí mismo está en declive terminal.

Pero más allá de esto, muchas de las voces del debate del matrimonio entre personas del mismo sexo adoptaban al mismo tiempo el argumento de que el reconocimiento legal de sus uniones permitiría que las parejas del mismo sexo, en último término, cuidaran de sí mismas y por lo tanto renunciaran a sus derechos sobre las prestaciones de bienestar en su conjunto. A este respecto, la campaña por el matrimonio entre personas del mismo sexo no implica tanto una demanda de inclusión en el sistema de salario familiar de seguro social, sino que consiste en la afirmación de la capacidad individual de vivir con independencia del Estado.¹¹⁹ Al permitir a las lesbianas

¹¹⁹ Hasta donde tengo conocimiento, el único teórico que ha analizado en profundidad este aspecto de la campaña por el matrimonio entre personas del mismo sexo es Jaye Cee Whitehead, en *The Nuptial Deal: Same-Sex Marriage and Neo-Liberal Governance*, Chicago, University of Chicago Press, 2012, pp. 35-50, 59-72. Según Whitehead, los principales actores de la campaña a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, como el Williams Institute, con sede en la UCLA, «apelan al interés del Estado en el matrimonio como modelo de cuidado que

y a los gays acceder a las obligaciones a largo plazo y legalmente exigibles de cuidados y apoyo mutuo, se sugiere que el reconocimiento del matrimonio homosexual inducirá a las parejas de personas del mismo sexo a sostener una ética neoliberal de responsabilidad familiar. La economista M. V. Lee Badgett, importante colaboradora en los debates jurídicos en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo, cita el trabajo del economista neoliberal Robert A. Pollak para reforzar el argumento de que el matrimonio ejerce una función de bienestar comparable al seguro social: «Robert Pollak [...] argumenta que las estructuras familiares sirven para otros fines económicos importantes al reducir lo que los economistas llaman los "costes transaccionales" implicados en la creación de todo tipo de acuerdos entre individuos. Las "relaciones personales preexistentes, duraderas y significativas" [...] que existen en las familias, otorgan a estas instituciones ciertas ventajas a la hora de cumplir las funciones de seguro social en caso de vejez, divorcio, complicaciones económicas o enfermedad, por ejemplo».¹²⁰ El argumento de Badgett a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo se basa en la idea de que las obligaciones legales del matrimonio deberían funcionar como una fuente primaria de bienestar y como primera línea de defensa contra los riesgos sociales de la mala salud, el envejecimiento y el desempleo; una idea omnipresente en la literatura neoliberal y, en última instancia, deudora de la tradición de las leyes de pobres de la responsabilidad familiar.

Las economías de escala en la producción doméstica aumentan los recursos disponibles para el aprovisionamiento dentro de una familia. En este contexto económico, parece probable que las formas concretas de organización familiar y las organizaciones legales correspondientes promuevan el beneficio de las economías de escala de forma más clara. Las promesas inherentes al matrimonio [...] incluyen una obligación de apoyo mutuo entre dos individuos, lo que otorga a ambos integrantes un mayor grado de seguridad en sus demandas sobre los recursos de su

reduce los gastos estatales y aumenta los ingresos, la misma lógica que llevó a los programas de promoción del matrimonio a la vanguardia de la reforma de la asistencia social. Este modelo de cuidado incorpora una ética de la autosuficiencia característica de las llamadas a la reducción de las estructuras de cuidados financiadas por el Estado. Muchas de las voces defensoras del matrimonio entre personas del mismo sexo no apelan directamente a los esfuerzos estatales de ahorro, sin embargo, parecen creer fervientemente en la misma ética de la autosuficiencia que tiende a ocultar el privilegio y a estigmatizar las estructuras universales de cuidados como "dependencia estatal"» (pp. 43-44). En la campaña por el matrimonio entre personas del mismo sexo, apunta, el matrimonio se concibe como «la forma definitiva de seguro» (p. 71). El análisis desarrollado en esta sección se lo agradezco al trabajo de Whitehead.

¹²⁰ M. V. Lee Badgett, *Money, Myths, and Change: The Economic Lives of Lesbians and Gay Men*, Chicago, University of Chicago Press, 2001, p. 143. La cita es de Robert A. Pollak, «A Transaction Cost Approach to Families and Households», *Journal of Economic Literature*, vol. 23, núm. 2, 1985, p. 585. Pollak es un exponente (a veces crítico) de la «nueva economía del hogar» de Gary Becker.

cónyuge. Al existir un compromiso explícito personal, así como una obligación legal, un cónyuge no puede oponerse a ayudar a cubrir las necesidades básicas del otro.¹²¹

El teórico jurídico William Eskridge identifica de forma similar la función del «seguro social» del matrimonio como uno de los primeros argumentos a su favor:

El tercer objetivo del matrimonio [es] el seguro social. Cada cónyuge promete casarse con el otro «en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad». Mientras sea en la riqueza y en la salud, ni la ley ni el matrimonio tienen mucho trabajo que hacer. El trabajo comienza cuando algo pasa en la pobreza o en la enfermedad. El matrimonio es un tipo de seguro contra las malas rachas; en la medida de lo posible, al cónyuge se le exige proporcionar apoyo económico y emocional cuando las cosas van mal. En caso de crisis física o mental (la pesadilla de quienes alcanzan la mediana edad), se confía en que el cónyuge que no se encuentre afectado será tanto quien cuide como quien tome las decisiones en su sustitución.¹²²

Los argumentos no se limitan al ámbito del debate teórico, sino que han sido omnipresentes en las campañas por el matrimonio entre personas del mismo sexo. Badgett, por ejemplo, ha testificado en varias decisiones de tribunales estatales en relación con la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sus testimonios se centran en las ventajas tanto sociales como fiscales que se plantearían para las parejas del mismo sexo como consecuencia del matrimonio y, con más énfasis, en el ahorro fiscal del que se beneficiará el Estado cuando a las parejas del mismo sexo se les permita cuidar de sí mismas. Por último, concluye, la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo ahorrará al Estado más dinero del que pierde en los crecientes pagos a la Seguridad Social.¹²³ El impacto del argumento neoliberal de la «responsabilidad familiar» a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo se aprecia claramente en la siguiente intervención del presidente de la Corte Suprema del estado de California Ronald M. George, interpelado al interés del Estado en excluir a las parejas del mismo sexo del matrimonio: «Las obligaciones legales de apoyo que son parte integral de las relaciones maritales y familiares alivian a la sociedad de la obligación de cuidar a individuos que podrían verse incapacitados o que de otro modo no son capaces de cuidar de sí mismos».¹²⁴

¹²¹ Badgett, *Money, Myths, and Change...*, p. 203.

¹²² William N. Eskridge Jr., *The Case for Same-Sex Marriage: From Sexual Liberty to Civilized Commitment*, Nueva York, Free Press, 1996, p. 68.

¹²³ Whitehead, *The Nuptial Deal...*, pp. 40-43.

¹²⁴ Marriage Cases, S1479999, 43 Cal. 4th 757 (76 Cal. Repr. 3rd 683 p. 3d. 384, 2008, p. 11. Citado en Whitehead, *The Nuptial Deal...*, p. 37.

La epidemia del sida juega un papel curioso, a la vez catastrófico y redentor, en las narrativas del progreso social que aquí se plantean. William Eskridge se limita a reiterar un sentimiento que se encuentra en el trabajo de muchos otros opinadores gays (el católico libertario Andrew Sullivan o el neoliberal comunitarista Jonathan Rauch, por ejemplo) cuando identifica el sida como el momento de epifanía que sacó a los hombres gays de los riesgos inasegurables de la promiscuidad y los llevó hasta la protección de riesgos privatizada de la monogamia: «La epidemia del sida que arrasó en los años ochenta no solo arruinó la libertad sexual de los años setenta, sino que, de manera más importante, ilustró el valor del compromiso interpersonal de las personas gays en general, y no solo en cuestión de seguridad. Para las personas con sida el valor de una pareja comprometida es incalculable [...] El recurso del seguro social del matrimonio nunca ha sido tan relevante como para las personas con sida».¹²⁵ Para Jonathan Rauch, el sida es lo que hizo a los hombres gays darse cuenta de que la «ausencia de estructuras familiares era literalmente mortífera»:¹²⁶ un riesgo no asegurable al que solo se podía hacer frente reclamando las protecciones económicas de salud pública de la monogamia matrimonial.

Así pues, una epidemia que impulsó las políticas de bienestar estrictamente antinormativas de ACT UP se reescribe aquí como un rito de paso traumático, pero necesario, al mundo de la responsabilidad familiar. Tras la revolución Reagan y sus intentos por recuperar la tradición de las leyes de pobres de sustento familiar, tras la reforma de la asistencia social de Clinton que situó la promoción del matrimonio en el corazón de la política social, quienes defendían el matrimonio entre personas del mismo sexo se esforzaron por incluir a las personas no heterosexuales en esa misma ética. En último caso, lo que resulta tan sorprendente de estas narrativas es su proximidad a la lógica neoliberal de Richard Posner y Tomas Philipson, para quienes legalizar el matrimonio homosexual representaba la forma definitiva de protección de riesgos privatizada y la solución perfecta ante el riesgo moral. Si el sida fue el precio que hubo que pagar por decisiones vitales irresponsables, el matrimonio entre personas del mismo sexo se presenta ahora como la ruta hacia la responsabilidad personal (y por lo tanto, familiar).

¹²⁵ Eskridge, *The Case for Same-Sex Marriage...*, p. 74.

¹²⁶ Jonathan Rauch, «Not Whether but How: Gay Marriage and the Revival of Burkean Conservatism», *Southern Texas Law Review*, vol. 50, núm. 1, 2008, p. 8.

VI

IN LOCO PARENTIS: CAPITAL HUMANO, DEUDA ESTUDIANTIL Y LA LÓGICA DE LA INVERSIÓN FAMILIAR

¿De dónde procede el capital humano? ¿Qué constituye una inversión exitosa en capital humano, ya sea a nivel individual o nacional? Hay que empezar por la familia.

Gary Becker, «Human Capital and Poverty»

A LA RESERVA FEDERAL normalmente no le han interesado las dinámicas íntimas de los hogares, pero desde que la deuda doméstica aumentara a niveles históricos sin precedentes, estas han pasado a desempeñar un papel crucial en la economía de Estados Unidos y del mundo, actuando a la vez como estímulo y como talón de Aquiles del mercado global de bonos de titulización de activos. Desde entonces los bancos centrales han adquirido un nuevo y casi obsesivo interés por la organización de la vida de la juventud adulta. Encuestas realizadas por la Reserva Federal de Nueva York y el Pew Center han revelado resultados llamativos, pero no del todo sorprendentes.¹ Desde aproximadamente el año 2000, cada vez más personas jóvenes no abandonan el hogar familiar hasta bien entrada la veintena, y las cifras han seguido creciendo en una tendencia sostenida y casi lineal. Con la Gran Recesión de 2007, la proporción de quienes con menos de 32 años volvieron a casa de sus padres o simplemente optaron por no irse aumentó de forma alarmante. No obstante, si bien muchos dieron por sentado que esa misma juventud se establecería por su cuenta cuando el mercado laboral se recuperara, la tendencia general parece haber sido impermeable al ciclo económico. Cada año que pasa, más jóvenes siguen en casa de sus padres, con independencia de las perspectivas laborales. La constante

¹ Richard Fry, *A Record 21.6 Million in 2012: A Rising Share of Young Adults Live in Their Parents' Home, August 1*, Washington DC, Pew Research Center, 2013, disponible on line en <http://www.pewsocialtrends.org/files/2013/07/SDT-millennials-living-with-parents-07-2013.pdf> (consultado por última vez el 30 de octubre de 2015); Zachary Bleemer, Meta Brown, Donghoon Lee y Wilbert van der Klaauw, *Debt, Jobs, or Housing: What's Keeping Millennials at Home? Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, 1 November*, Nueva York, Federal Reserve Bank of New York, 2014, disponible on line en https://www.newyorkfed.org/research/staff_reports/sr700.html (consultado por última vez el 30 de octubre de 2015).

que aquí resulta sorprendente, según la Reserva Federal de Nueva York, es la extraordinaria carga de deuda estudiantil que padece esta generación que no llega a la treintena. Entre 2004 y 2012, el saldo pendiente total de deuda estudiantil casi se triplicó, ascendiendo de 364 mil millones de dólares a los 966 mil millones en menos de una década, demostrando una sorprendente resistencia a los efectos deflacionarios de la crisis financiera.² Si bien durante y después de la Gran Recesión los saldos pendientes en todos los demás tipos de crédito al consumo, desde las tarjetas de crédito hasta los préstamos automovilísticos y las hipotecas, se redujeron, la deuda estudiantil por sí sola siguió aumentando a un ritmo sorprendente.³

Estas tendencias resultan preocupantes incluso desde el punto de vista de la Reserva Federal. Se puede considerar que la deuda estudiantil es un activo lucrativo que genera intereses en los mercados de valores internacionales; sin duda, la deuda estudiantil ha generado extraordinarios beneficios al gobierno federal en los últimos años,⁴ pero sus consecuencias sobre el consumo en el hogar provocan graves efectos secundarios para la economía en general. Hasta ahora, gran parte del impulso tras el boom del crédito al consumo partía de la expectativa de que cada generación se iría de casa aproximadamente al mismo ritmo y, al hacerlo, contratarían hipotecas y préstamos de crédito al consumo para adquirir bienes para el hogar. Al mantener a la gente en casa, la deuda estudiantil está provocando una depresión de toda la economía de consumo. Hay motivos para creer que, sin una acción política decisiva, el problema no se resolverá pronto.

Después de todo, la deuda estudiantil es única en muchos aspectos. No solo está excluida de las leyes habituales de protección del consumidor, que la harían exonerable en caso de quiebra, sino que además es probable que llegue a ser intergeneracional. Al tiempo que las tasas de matrícula se disparan y las opciones de préstamos más seguros no logran mantenerse, una parte mayor del alumnado se ve obligada a compartir la carga de su deuda con sus progenitores y otros miembros de la familia. El préstamo federal PLUS, que permite que los padres asuman préstamos en nombre de sus hijos, es una de las opciones con mayor crecimiento en el programa de préstamos federales y esta es requerida de forma desproporcionada por el alumnado de bajos ingresos que ya ha agotado cualquier otra vía de financiación. Los préstamos estudiantiles privados también se han expandido con rapidez y, de forma casi invariable, exigen a un progenitor como

² Meta Brown, Andrew Haughwout, Donghoon Lee, Joelle Scally y Wilbert van der Klaauw, «Measuring Student Debt and its Performance», en Brad Hershbein y Kevin M. Hollenbeck, *Student Loans and the Dynamics of Debt*, Kalamazoo (MI), W. E. Upjohn Institute for Employment Research, 2015, p. 39.

³ *Ibidem*, p. 40.

⁴ Andrew Ross, *Creditocracy and the Case for Debt Refusal*, Nueva York, OR Books, 2013, pp. 107-110.

cofirmante. A los padres más ricos les suele resultar más barato rehipotecar sus casas para pagar los costes universitarios de sus hijos que incurrir en préstamos estudiantiles como tales. La deuda estudiantil es así cada vez más una cuestión familiar que ata a varias generaciones en redes de obligaciones y de dependencia mutua literalmente imperdonables. Las tendencias demográficas reveladas por la Reserva Federal son solo una manifestación de la nueva atadura temporal basada en la deuda, que afirma radicalmente la función económica de la familia.

La situación no podría ser más distinta de aquella de los años sesenta, cuando la creciente inversión federal en educación superior hizo que la universidad fuese accesible por primera vez a gran número de mujeres, alumnos de bajos ingresos y minorías. La creación de un generoso sistema de subvenciones y préstamos, junto con un sistema de universidades públicas que ofrecían formación gratuita, hizo posible que una generación de estudiantes accediera a la universidad sin depender del apoyo familiar. Este también fue un periodo en el que los salarios crecientes y los servicios públicos permitieron a la juventud adulta alcanzar la independencia económica antes que nunca en la historia de EEUU hasta el momento.⁵

Neoliberales y neoconservadores, cuando analizaban los años sesenta, quedaron convencidos de que estas condiciones económicas nunca vistas eran responsables de los tipos de radicalismo concreto que surgían en los campus universitarios de todo el país. El neoconservador Samuel Huntington, al informar para la Comisión Trilateral de las condiciones sociales en Estados Unidos, denunció con triste fama «el auge democrático de los años sesenta» por su «desafío generalizado a los sistemas existentes de autoridad, pública y privada».⁶ De una forma u otra, observaba, «este desafío se manifiesta en la familia, en la universidad, en los negocios, en las asociaciones públicas y privadas, en la política, en la burocracia gubernamental y en los servicios militares. La gente había dejado de sentir la misma obligación de obedecer a quienes habían considerado sus superiores en edad, rango, estatus, experiencia, carácter o talento». Esto era especialmente visible en los campus universitarios. «La variable más importante» que define esta dinámica, aventuró, fue la democratización de la educación superior.⁷

⁵ De acuerdo con Richard Fry, 1960 fue el año en el que la juventud adulta, por debajo de los 25 años, logró mayor capacidad de vivir con independencia de su familia. Véase Richard Fry, «Record Share of Young Women are Living with Their Parents, Relatives», *Pew Research Center, FactTank News in Numbers*, disponible on line en <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/11/11/record-share-of-young-women-are-living-with-their-parents-relatives> (consultado por última vez el 30 de octubre de 2015).

⁶ Samuel P. Huntington, «The United States» en Michel Crozier, Samuel P. Huntington, y Joji Watanuki, *The Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission*, Nueva York, New York University Press, 1975, pp. 74-75.

⁷ *Ibidem*, p. 110.

Por su parte, economistas neoliberales como Milton Friedman y James M. Buchanan también sospechaban de cierto tipo de conexión causal entre la educación pública gratuita y la creciente militancia del movimiento estudiantil. Apoyándose en los planteamientos pragmáticos de la economía de la decisión racional, que entendía el comportamiento antisocial como una respuesta racional a las señales del mercado, querían demostrar cómo la creación de bienes públicos gratuitos como la educación podía actuar como un incentivo perverso hacia el anarquismo destructivo y, al contrario, poner precio a esos mismos bienes podría revertir las alarmantes tendencias.

La cuestión de la familia era central para los argumentos neoliberales contra la inversión pública en educación y clave para sus propuestas de un nuevo orden económico impulsado por la inversión privada y la deuda doméstica. Tanto la teoría de la Escuela de Chicago sobre el capital humano, como la economía de la elección pública de la Escuela de Virginia justificaron su oposición al gasto público deficitario acusándolo de instigar el antiautoritarismo del movimiento estudiantil. Aunque sus argumentos solían mezclarse con la retórica abiertamente moralizante de neoconservadores como Samuel Huntington, el neoliberalismo ofrecía una solución mucho más adaptativa y flexible a lo que percibían como una amenaza a la riqueza heredada y un declive de la responsabilidad familiar. El neoconservadurismo pasaría las décadas venideras oponiéndose a la discriminación positiva y librando una guerra cultural contra las nuevas disciplinas minoritarias de los estudios negros, étnicos y de la mujer. La economía neoliberal también estaba en contra de la discriminación positiva como distorsión de las virtudes de asignación del libre mercado. Sin embargo, a diferencia del neoconservadurismo, estaba más interesada en la constructiva tarea de desarrollar un modelo completamente nuevo de financiación de la educación, que sustituyera el gasto público deficitario por el gasto privado y al hacerlo reinstaurase las obligaciones de la familia. Milton Friedman y Gary Becker no pudieron prever la drástica ampliación de los mercados de crédito al consumo en las décadas posteriores, tampoco pudieron anticipar lo que se acercaría el mercado del préstamo estudiantil a estas políticas prescriptivas, pero sí comprendieron que los mercados de crédito privado podían llevar a cabo la inclusión democrática sin perturbar las estructuras económicas de la riqueza familiar. Para comprender plenamente lo novedoso de su postura, debemos regresar a la historia temprana de la teoría neoliberal del capital humano que, durante años, quedó eclipsada por su rival neokeynesiano más exitoso.

Vicisitudes de la teoría del capital humano

A día de hoy, la teoría del capital humano es casi un sinónimo del neoliberalismo de la Escuela de Chicago, en gran parte gracias a la publicación de los seminarios de Foucault en el Collège de France.⁸ Sin embargo, a finales de los años cincuenta y sesenta, el concepto de capital humano estaba mucho más asociado al nombre de Theodore Schultz, economista que trabajaba junto a Milton Friedman y Gary Becker en la Universidad de Chicago, pero a quien podemos describir de forma más precisa como neokeynesiano al estilo de Paul Samuelson, Robert Solow y Richard Musgrave.⁹ Fue Schultz quien primero popularizó la idea de que el gasto en servicios humanos como la educación debería considerarse una inversión más que un acto de consumo; y por lo tanto que la educación en sí debería considerarse una forma de capital o activo que devenga intereses. En concreto, Schultz creía que la inversión en educación ayudaría a explicar el hasta ahora sorprendente problema del cálculo del crecimiento económico nacional, el mismo que había identificado la figura fundacional de la economía de crecimiento neoclásica, Robert Solow. En dos artículos seminales, Solow plantea que solamente una pequeña parte del rápido crecimiento económico de Estados Unidos a principios del siglo XX podía atribuirse al aumento de la población activa o del capital físico; las fuentes de inversión que tradicionalmente se consideraban responsables del crecimiento del PIB.¹⁰ Solow concluía que la parte del crecimiento económico de la que no se daba cuenta en las inversiones en capital trabajo o capital físico podía describirse como «residual» y explicarse por la eficiencia con la que se utilizaban el capital trabajo y el capital físico. Conjeturó que lo «residual» era principalmente una función del progreso tecnológico, aunque su modelo no podía explicar de dónde procedía este progreso, ni cómo se podría mejorar.

⁸ Véase el debate de Foucault sobre la teoría del capital humano de Gary Becker en Michel Foucault, *The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978-1979*, Frédéric Gros, Londres, Palgrave Macmillan, 2008, pp. 215-237 [ed. cast.: *El nacimiento de la biopolítica*, Madrid, Akal, 2012].

⁹ Para un debate detallado sobre las distintas corrientes dentro de la teoría del capital humano y su diferente impacto en las políticas, véase Simon Marginson, *Human Capital Theory and Education Policy. Discussion Paper No. 3*, noviembre, Kensington, NSW, Public Sector Research Centre, University of New South Wales, 1989, y Simon Marginson, «Human Capital Theory» en *Education and Public Policy in Australia*, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, pp. 31-54.

¹⁰ Robert M. Solow, «Technical Change and the Aggregate Production Function», *The Review of Economics and Statistics*, núm. 39, 1957, pp. 312-320, y Robert M. Solow, «Technical Progress, Capital Formation, and Economic Growth», *The American Economic Review*, núm. 52, 1962, pp. 76-86.

Por su parte, Theodore Schultz pensó que tenía una explicación mucho más plausible para las discrepancias reveladas por Solow. Lo «residual» dio «un nombre a nuestra ignorancia, pero no [puede] disiparla».¹¹ No obstante, el problema podía resolverse si se tenía en cuenta el aumento constante de la inversión pública y privada en educación, que había tenido lugar a lo largo de este periodo, un aumento que no era el resultado de ninguna decisión política consciente, pero que, aun así, había tenido el provechoso efecto de mejorar significativamente el PIB. Por lo tanto, la inversión en capital humano era el factor de producción que faltaba en la economía del crecimiento.

Los planteamientos de Schultz le llevaron a una serie de conclusiones prácticas relativas al papel de la inversión pública en la educación. En primer lugar, razonó que si la inversión al azar en educación superior era responsable de tan significativa proporción del crecimiento económico nacional, entonces el gobierno federal haría bien en adoptar una política activa de inversión sostenida en el sector. En segundo lugar, argumentó que la inversión intencionadamente insuficiente en la educación de la clase trabajadora, de la población afroamericana y de las mujeres podría explicar la discriminación que estos grupos demográficos experimentaban en el mercado laboral.¹² La falta de inversión en educación no solo era una fuente de desigualdad económica, racial y de género, sino que también suponía una pérdida de recursos humanos que podrían haber aumentado sustancialmente el PIB si se hubiera recurrido a ellos. A diferencia de sus colegas Friedman y Becker, Schultz estaba convencido de que el gobierno federal tenía un papel fundamental que desempeñar en el ámbito de la educación superior. Cuando Friedman, al comentar uno de los borradores de Schultz, le hizo la pregunta crítica de si el rendimiento de la inversión en educación recaía principalmente en el individuo o en la colectividad, Schultz respondió que dicha inversión aumentaba los ingresos nacionales y que, por lo tanto, era de interés para la población en su conjunto. La provisión pública de educación gratuita, además, permitía que ricos y pobres accedieran a la universidad, con independencia de la riqueza familiar; y el correspondiente aumento salarial del alumnado pobre podía justificarse del mismo modo que el sistema fiscal progresivo.¹³

Como economista académico, Theodore Schultz ejercía una influencia atípica en las políticas de gobierno, gracias en gran medida a la entusiasta

¹¹ Theodore W. Schultz, «Investment in Human Capital», *The American Economic Review*, vol. 51, núm. 1, 1961, p. 6.

¹² Schultz, «Investment in Human Capital...», pp. 13-14; Theodore W. Schultz, «Woman's New Economic Commandments», *Bulletin of the Atomic Scientists*, vol. XXVIII, núm. 2, 1972, pp. 29-32.

¹³ Schultz, «Investment in Human Capital...», p. 15.

tarea de Walter Heller, economista de finanzas públicas que trabajaba como presidente del Council of Economic Advisers [Consejo de Asesores Económicos] con Kennedy y Johnson.¹⁴ Heller había sido fundamental a la hora de persuadir a Eisenhower de que una mayor inversión en educación superior era un arma necesaria en la lucha contra la Unión Soviética durante la Guerra Fría. En un informe consultivo sobre política fiscal entregado unas semanas después del lanzamiento del Sputnik II, Heller argumentó que solo un compromiso continuado con la educación pública podría generar la «cantidad de poder cerebral» necesaria para competir contra la Unión Soviética; apelando a las que luego serían ideas mayoritarias sobre el papel económico del Estado, identificó la proeza militar y la seguridad nacional como «externalidades positivas» que solo la inversión pública podía aspirar a proporcionar.¹⁵ Después de su nombramiento en el Consejo de Asesores Económicos en 1960 y tras haberse acercado al trabajo de Theodore Schultz, Heller modificó sus argumentos, hasta entonces centrados en la seguridad, y apoyó la educación superior, defendiendo una mayor inversión pública como medio de estímulo del crecimiento económico y de superación de las desigualdades.

Gracias al trabajo de Heller, la idea de que el gobierno federal debería desempeñar un papel mucho más directo y generoso en la financiación de la educación superior se convirtió en un punto principal de la economía pública financiera neokeynesiana. Richard Musgrave, fundador de las finanzas públicas modernas y estrecho colaborador de Heller, integró las ideas de Schultz en su teoría de la inversión pública para sostener que la «adecuada provisión de servicios educativos es de vital importancia para la seguridad y el bienestar de la nación».¹⁶ En el trabajo de Musgrave, los imperativos de seguridad nacional, competitividad económica e inclusión democrática convergen de forma aparentemente impecable para hacer de la inversión federal en educación una tarea urgente de las políticas públicas. Señalaba que «los acontecimientos de los últimos años»:

¹⁴ Para un análisis completo de la influencia de Walter Heller al traducir las ideas de Schultz en políticas gubernamentales, véase Jeff Biddle y Laura Holden, «Walter Heller and the Introduction of Human Capital Theory into Education Policy», estudio no publicado, noviembre de 2014, disponible on line en https://www.utexas.edu/cola/_files/ms37643/Holden-Biddle_for_Hamerama.pdf (consultado por última vez el 1 de octubre de 2015).

¹⁵ Walter W. Heller, «Economics and the Applied Theory of Public Expenditure», en Joint Economic Committee, *Federal Expenditure for Economic Growth and Stability: Papers Submitted by Panelists Appearing Before the Subcommittee on Economic Policy*, Washington, USGPO, 1957, pp. 98-107. El estudio se debate en Biddle y Holden, «Walter Heller and the Introduction of Human Capital Theory into Education Policy...», p. 34.

¹⁶ Richard A. Musgrave, «Higher Education and the Federal Budget», *Review of Economics and Statistics*, vol. 42, núm. 3, 1960, p. 96.

Han demostrado que el mantenimiento y el refuerzo de los estándares educativos resultan de vital importancia para el futuro del país. Estos servicios educativos son necesarios no solo como medio para obtener una vida más plena, sino como condición para la supervivencia nacional. Por un lado, la revolución de la tecnología armamentística de las últimas décadas ha convertido el avance científico y la formación en un elemento crucial, puede que el más crucial, de la defensa nacional. Por otro, nuestro liderazgo en el mundo occidental exige que nuestra economía siga creciendo a un ritmo adecuado para poder mantener nuestra posición de relativa fuerza económica en el mundo. La inversión en capital humano mediante la educación es una forma fundamental y directa de cumplir estos objetivos. Además, entre todas las políticas para estimular el crecimiento, la de promover la educación está más alineada con los objetivos sociales e ideales de nuestra sociedad.¹⁷

Así, en 1960, cierta combinación de la teoría del capital humano de Schultz y de la economía de las finanzas públicas de Musgrave se había convertido en la opinión preponderante entre los representantes del Congreso de Asesores Económicos; siendo precisamente esta institución la que podemos considerar responsable de inspirar el sorprendente compromiso del presidente Johnson con la educación pública. Durante su tiempo en el cargo, Johnson desarrolló la mayor ampliación de la educación superior de la historia de la nación, supervisando docenas de leyes diseñadas para aumentar el gasto federal y democratizar el acceso. La pieza central de los esfuerzos reformistas de Johnson, la *Higher Education Act* [HEA, ley de educación superior] de 1965, otorgaba autoridad al gobierno federal sobre prácticamente todos los aspectos del sistema de educación superior nacional, duplicaba el presupuesto federal para universidades e imponía una visión coherente de la inclusión democrática del sector en su conjunto.¹⁸ La HEA inyectó ayuda federal en las pobres universidades negras, supervisó la creación de programas de reclutamiento de estudiantes y de cursos puente para el alumnado desaventajado, incrementó el número de becas disponibles para estudiantes de bajos ingresos y creó un programa de préstamos estudiantiles garantizados subvencionados por el gobierno federal. En una última apuesta por garantizar los objetivos redistributivos de la ayuda federal, en 1972 el senador Claiborne Pell convenció al Congreso de aprobar un programa de becas para perfiles de ingresos bajos (rebautizadas como las becas Pell en 1980), que se administrarían directamente desde el gobierno federal en lugar de que las asignaran las universidades. Estas políticas lograron

¹⁷ *Ibidem*, pp. 99-100.

¹⁸ Christopher P. Loss, *Between Citizens and the State: The Politics of Higher Education in the Twentieth Century*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2007, pp. 168-178; Suzanne Mettler, *Degrees of Inequality: How the Politics of Higher Education Sabotaged the American Dream*, Nueva York, Basic Books, 2014, pp. 51-59.

dar la bienvenida a cifras sin precedentes de alumnado de bajos ingresos, negro, latino y femenino en las universidades y escuelas superiores, un cambio demográfico que no tardaría en reflejarse en las demandas políticas y pedagógicas del movimiento estudiantil. Como Schultz había previsto, la inversión federal constante en educación superior funcionaba en gran medida como un «impuesto de herencia».¹⁹ Al redistribuir los costes de la educación mediante la base imponible, Johnson permitió que estudiantes que no contaban con riqueza familiar accedieran a una institución que en su día había sido un conducto fundamental para la reproducción de la clase. Durante los años setenta, las becas Pell fueron lo suficientemente generosas como para cubrir las tasas de matriculación y los gastos vitales, liberando al alumnado de la necesidad de recurrir a la ayuda de sus progenitores.²⁰ Por un breve periodo, la ampliación de la inversión pública en educación sustituyó a la inversión familiar privada como medio de acceso a la educación.

Desde el principio, Schultz recibió críticas. En concreto, Milton Friedman y Gary Becker desarrollaron una perspectiva sobre el capital humano que destacaba el valor del rendimiento de la inversión privada en oposición a la pública y que dio lugar a recomendaciones políticas totalmente opuestas a las de Schultz. Ya en 1945, Milton Friedman y Simon Kuznets valoraron los costes y los beneficios de la educación superior intentando medir el rendimiento específico de los trabajadores que habían invertido en algún tipo de formación profesional.²¹ Su estudio reveló significativas diferencias salariales entre los trabajadores que habían ido a la universidad y los que no, que justificaban más que de sobra el «coste de oportunidad» en que incurrieran los estudiantes que no ganaban un salario durante sus años universitarios. Aunque el artículo excluía la cuestión de la educación de financiación pública, los autores señalaron dos cuestiones que desde entonces han sido cruciales en los debates en torno a la financiación del capital humano: «En primer lugar, ¿cuánta financiación pública es necesaria? En segundo lugar, ¿el rendimiento de la inversión pública debe recaer sobre el individuo en cuya formación se ha invertido?».²² Sin ofrecer una respuesta explícita a la primera pregunta, Friedman y Kuznets sugieren que, en un mundo ideal, las desigualdades educativas y salariales se podrían resolver por completo mediante los mercados privados de capital: con unos pocos cambios en el derecho de sociedades, se podría convencer al alumnado de que venda «acciones» de sí mismo y obligarle a

¹⁹ Schultz, «Investment in Human Capital...», p. 15.

²⁰ Mettler, *Degrees of Inequality...*, p. 53.

²¹ Milton Friedman y Simon Kuznets, *Income from Independent Professional Practice*, Nueva York, National Bureau of Economic Research, 1945. Mi lectura sobre Friedman y Kuznets es deudora de Simon Marginson. *Human Capital Theory and Higher Education Policy...*

²² Friedman y Kuznets, *Income from Independent Professional Practice...*, p. vi.

pagar una parte de sus futuros salarios como «dividendos» a su público de accionistas.²³ En este notable pasaje, Friedman y Kuznets ven al alumnado no tanto como inversores en su propio capital humano, que como empresas que venden una parte de su capital humano a inversores externos; una visión que hoy en gran medida se ha llevado a cabo, solo que en forma de deuda, en lugar de como una financiación basada en acciones; y sobre todo sin las protecciones corporativas habituales de responsabilidad limitada o leyes de quiebra.²⁴

En su libro de 1962, *Capitalismo y libertad*, Rose y Milton Friedman se posicionan a favor de la inversión privada en capital humano de forma incluso más fuerte. En este texto plantean que los rendimientos de la inversión en educación recaían por completo en el estudiante particular y que cualquier beneficio social ostensible no era más que la suma de ganancias salariales privadas.²⁵ El estudiante particular debería, por lo tanto, ser responsable de los costes de su educación. Los Friedman coincidían con Schultz en que había habido una inversión insuficiente en educación superior, pero a diferencia de este último, creían que este error se remediaría mejor mediante la liberalización del crédito. El hecho de que el alumnado de bajos ingresos no pudiera pagar un título universitario y, por lo tanto, quedara discriminado en el mercado laboral podía atribuirse a «las imperfecciones del mercado del capital», es decir, a la ausencia de un mercado líquido en los préstamos estudiantiles privados.²⁶ En el mejor de los casos, los Friedman reconocían que el Estado podía desempeñar un papel mínimo para remediar este estado de cosas proporcionando préstamos reembolsables a través del sistema fiscal y supeditados a los futuros ingresos.²⁷ Sin embargo, consideraban el mercado crediticio privado como la fuente más eficiente de financiación para los préstamos estudiantiles y

²³ *Ibidem*, p. 90.

²⁴ La mayor parte de los préstamos estudiantiles se financia ahora mediante deuda, en lugar de con financiación de capital (es decir, inversión en acciones). Sin embargo, existe al menos una empresa privada, Lumni, que utiliza la financiación de capital para financiar la inversión en la formación universitaria del alumnado. Véase <http://www.lumni.net/about/> (consultado por última vez el 1 de diciembre de 2015). El cofundador del fondo, Miguel Palacios, describe su teoría de la inversión basada en el capital humano en *Investing in Human Capital: A Capital Markets Approach to Student Funding*, Cambridge, Cambridge University Press, 2004. Palacios reconoce que está en deuda con el trabajo de Milton Friedman.

²⁵ Milton Friedman y Rose Friedman, *Capitalism and Freedom*, Chicago, University of Chicago Press, 1962, pp. 100-101 [ed. cast.: *Capitalismo y libertad*, Madrid, Síntesis, 2012].

²⁶ *Ibidem*, p. 107.

²⁷ *Ibidem*, pp. 102-105. La visión de Friedman de un programa de préstamos estudiantiles administrado por el gobierno federal y vinculado al sistema fiscal se formalizó como «préstamo contingente a los ingresos» y se aplicó en Australia en 1989. Aunque sus efectos son regresivos debido a la acumulación de intereses sobre los préstamos pendientes, a veces se presenta como una agradable alternativa al sistema de préstamos estudiantiles no contingentes que se ha desarrollado en Estados Unidos.

pensaban que los incentivos gubernamentales a los bancos eran la mejor manera de estimular este mercado.²⁸

Gary Becker, que siempre prestó especial atención a la dimensión micropolítica de las políticas públicas, desarrolló un elaborado argumento acerca de por qué la inversión familiar privada en la educación de los niños era más eficaz que la inversión pública. La educación pública gratuita, defendía, podía criticarse sobre la misma base que el impuesto progresivo sobre la renta que «inicialmente reduce la desigualdad al reducir la variabilidad de los ingresos después de impuestos», pero que termina incrementando el «nivel de equilibrio de la desigualdad [...] en tanto las familias reducen su inversión en sus descendientes».²⁹ El planteamiento era improbable y opuesto a la evidencia empírica, pero permitió a Becker identificar los mercados de crédito privado como alternativa lógica y (como él insistía) igualmente redistributiva.³⁰ En el mundo ideal de Becker, los estudiantes tendrían que volver a recurrir a sus familias como fuente de apoyo económico y, sin embargo, la antigua estratificación, antes implacable, de la riqueza familiar se vería simultáneamente aplazada y flexibilizada al ampliar las oportunidades de endeudamiento privado. La perspectiva micropolítica de Becker sobre la inversión en capital humano era un reflejo de las teorías más familiares del neoliberalismo de las escuelas de Chicago y de Virginia; defensoras de que el gasto público deficitario y la deuda nacional resultante tenían el desafortunado efecto de «desplazar» a los mercados de crédito privado y de desalentar la inversión privada. Pero aunque Milton Friedman y James M. Buchanan se referían fundamentalmente a la inversión empresarial, lo que Becker quería decir con inversión privada era

²⁸ De hecho, el primer programa federal de préstamos a estudiantes se creó por consejo de Milton Friedman y consistía en préstamos directos financiados por el Tesoro estadounidense. Estos préstamos estaban incluidos en la Ley de Defensa Nacional de la Educación de 1958. Cuando el Congreso decidió ampliar este programa en el marco de la Ley de Educación Superior de 1965, optó por la solución alternativa y preferida por Friedman de garantizar los préstamos de los bancos privados. Véase «History of Federal Student Loan Programs», 8 de julio de 2015, disponible on line en <http://atlas.newamerica.org/federal-student-loan-programs-history> (consultado por última vez el 1 de octubre de 2015).

²⁹ Gary S. Becker, «Inequality and Intergenerational Mobility», en *A Treatise on the Family, Enlarged Edition*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1993 [1981], p. 222. Además de esto, Becker compartía el escepticismo de Milton Friedman con respecto de la idea de que la educación gratuita generaba retorno social. Véase Gary S. Becker, *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*, Nueva York, Columbia University Press, 1964 [ed. cast. *El capital humano*, trad. por Marta Casares, Madrid, Alianza Editorial, 1984].

³⁰ En palabras de Becker un «sistema de impuestos progresivo no solo reduce la eficiencia al desalentar la inversión, sino que puede que también amplíe el nivel de equilibrio de la desigualdad con ingresos prescindibles. Por el contrario, las políticas que mejoran el acceso de las familias pobres al mercado de capitales para financiar sus inversiones en capital humano reducen la desigualdad al tiempo que aumentan la eficiencia», en Becker, «Inequality and Intergenerational Mobility...», p. 222.

la inversión familiar intergeneracional. Si el gobierno se limitaba a reducir su inversión en bienes públicos, conjeturaba Becker, la familia recuperaría el papel que le corresponde como inversora en la infancia.³¹ Además, la responsabilidad económica tradicional de la familia a la hora de garantizar el bienestar de sus integrantes se ampliaría en gran medida mediante el estímulo de los mercados de crédito apropiados. Con cierta ayuda gubernamental, la antigua tradición de las leyes de pobres de responsabilidad familiar se podría reinventar en forma de una deuda intergeneracional infinitamente elástica.

Aunque eran respetadas dentro de la literatura empírica, las teorías de Friedman y Becker sobre el capital humano tuvieron poca tracción política en los años sesenta, cuando Johnson aumentó la inversión federal en capital humano nacional y abrió las universidades públicas a una nueva generación de estudiantes desaventajados. A lo largo de los años sesenta, las ideas de Schultz recibieron cierta atención externa. En la conferencia de la OCDE de Washington en 1961, los países miembros emitieron un significativo apoyo a la teoría de Schultz sobre el capital humano.³² A lo largo de la década, las agencias de la ONU promovieron sus ideas como modelos de sólido crecimiento económico y animaron a los Estados poscoloniales a ponerlas en práctica. Sin embargo, en 1970 este consenso empezó ya a vacilar cuando los gobiernos comenzaron a sentir los efectos de la creciente inflación y la menor confianza económica. En la conferencia de la OCDE de París, los representantes expresaron una opinión más cautelosa sobre el lento retorno de la educación superior. En Estados Unidos varios economistas señalaron que el crecimiento salarial entre licenciados universitarios se había ralentizado, lo que parecía contradecir los datos de las predicciones de Schultz.³³ Junto con la creciente militancia del movimiento estudiantil, estas tendencias económicas entraron en conflicto con el antes estable consenso de que la educación gratuita era un bien social sin paliativos. Como apunta Simon Marginson, la educación pública en este periodo «se enfrentó a la confusión de una crisis de recursos y de legitimidad».³⁴

En una situación de recesión bien distinta de la de los años sesenta, resurgieron las ideas de Friedman y Becker que encontraron una creciente resonancia entre la clase política. La victoria electoral de Ronald Reagan en 1980 marcó el triunfo definitivo de la teoría del capital humano de la Escuela de Chicago, momento en el que las ideas neoliberales sobre la financiación de la educación superior se plasmaron por primera vez a escala federal y en que la deuda estudiantil se convirtió en un elemento

³¹ *Ibidem.*

³² Marginson, *Human Capital Theory and Higher Education Policy...*, pp. 16-17.

³³ Richard B. Freeman, *The Overeducated American*, Nueva York, Academic Press, 1976.

³⁴ Marginson, *Human Capital Theory and Higher Education Policy...*, p. 17.

fundamental de la experiencia universitaria. Sin embargo, mucho antes de ser presidente, Reagan ya había experimentado con estas ideas en el laboratorio político de California, cuando se enfrentó por primera vez con el movimiento estudiantil de Berkeley de los años sesenta.

El movimiento estudiantil: protestas contra el capital humano e *in loco parentis*

En el otoño de 1964, surgió en Berkeley, en la Universidad de California, un nuevo tipo de radicalismo cuya réplica reverberó por otros campus estatales durante los meses y años siguientes. La concentración de protestas estudiantiles en Berkeley fue significativa dado su reputado estatus como modelo de la nueva universidad basada en el conocimiento y como ejemplo de la inversión federal en capital humano de la era Johnson. A finales de los años cincuenta, la Universidad de California estaba limitada a la visión institucional de Clark Kerr, antiguo economista laboral y defensor de la teoría del capital humano de Schultz, que fue nombrado canciller de Berkeley en 1952 y presidente de todo el sistema de la Universidad de California (UC) en 1958.³⁵ Como presidente, Kerr fue conocido por apoyar el mítico *Master Plan for Higher Education in California* [Plan maestro para la educación superior en California] de 1960, que preservaba las instituciones de la UC como universidades de investigación de referencia estatal y recogía el principio de acceso gratuito a la universidad para residentes del estado, a quienes solo se les cobraría una mínima tasa administrativa.³⁶ Como economista laboral, Kerr se había especializado en la resolución de conflictos industriales mediante negociaciones colectivas; cuando fue nombrado rector de Berkeley en 1952 le interesaba sobre todo la importancia del conocimiento en el crecimiento económico moderno. Mientras ocupó su puesto en la Universidad de California, trabajó en una serie de grandes becas de la Fundación Ford que exploraban la transición de una economía de producción en masa a una economía del conocimiento, en la que los recursos humanos serían la fuerza motriz del crecimiento económico.³⁷ Como mediador consumado, Kerr predijo que cuando la universidad

³⁵ El debate más profundo de Kerr sobre la teoría del capital humano se puede encontrar en *Marshall, Marx and Modern Times: The Multidimensional Society*, Cambridge, Cambridge University Press, 1969, en el que cita a Theodore Schultz, pero se apoya más significativamente en el trabajo de Alfred Marshall. Me refiero a esta teoría del capital humano como más cercana a Schultz, para distinguirla de la teoría de la inversión privada en capital humano abanderada por Becker y Friedman.

³⁶ The Master Plan Survey Team, *A Master Plan for Higher Education in California, 1960-1975: Prepared for the Liaison Committee of the State Board of Education and the Regents of the University of California*, Sacramento, California State Department of Education, 1960.

³⁷ Paddy Riley, «Clark Kerr: From the Industrial to the Knowledge Economy», en Nelson Lichtenstein, *American Capitalism: Social Thought and Political Economy in the Twentieth Century*, Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 2011, p. 79.

sustituyera a la fábrica como lugar principal de acumulación posindustrial, las antinomias entre el capital y el trabajo se disolverían por sí mismas. En su valoración de la nueva generación de trabajadores intelectuales que representaba el alumnado de la Universidad de California, Kerr no veía motivos para temer ningún conflicto.³⁸

En 1963 Kerr publicó su declaración más icónica sobre la economía del conocimiento *The Uses of the University* [Los usos de la universidad], justo un año antes de que el movimiento por la libertad de expresión estallara en el campus de Berkeley. Escrito en un momento en el que las cifras de estudiantes se disparaban y el gobierno federal prometía aumentar significativamente su inversión en el sector, el proyecto de Kerr para la universidad pública de investigación destilaba ligeramente las lecciones de la teoría del capital humano de Schultz. «Se está apelando a la Universidad para que forme un número de alumnos inimaginable hasta ahora», apuntaba:

Hoy, más que nunca, la educación está inexorablemente ligada a la calidad de una nación. Se ha estimado que durante los últimos treinta años cerca de la mitad de nuestro crecimiento nacional se puede explicar por la mayor formación de nuestro pueblo y por la mejor tecnología, que es también en gran medida un producto del sistema educativo [...]. La base de esta transformación es el crecimiento de la «industria del conocimiento» que afecta ya a gobiernos y negocios y que atrae a un número creciente de personas cada vez más y mejor cualificadas. La producción, la distribución y el consumo de «conocimiento» en todas sus formas representa el 29 % del Producto Interior Bruto, según cálculos de Fritz Maclup; y la «producción de conocimiento» crece a un ritmo dos veces mayor que el resto de la economía. Nunca en la historia el conocimiento ha sido tan fundamental en el desarrollo de toda una sociedad. Lo que supusieron las vías férreas en la segunda mitad del siglo pasado o el automóvil en la primera mitad de este, podía representarlo la industria del conocimiento en la segunda mitad de este siglo; es decir, el elemento central del crecimiento de la nación. La universidad está en el centro del proceso del conocimiento.³⁹

Aunque Kerr estaba decidido a incluir a los estudiantes de bajos ingresos, a las minorías y a las mujeres en la nueva universidad basada en el

³⁸ En conversaciones con David Riesman y otros, Clar Kerr comentaba: «Puedo ver, tras años de arbitraje en el ámbito industrial, que a los empresarios les va a encantar esta generación, que no va a presentar muchas quejas, no habrá muchos problemas, va a hacer su trabajo, va a ser fácil de manejar. No habrá revueltas. No habrá revoluciones. No habrá muchas huelgas». Esta conversación se recoge en Margaret L. Habein, *Spotlight on the College Student: A Discussion by the Problems and Policies Committee of the American Council on Education led by David Riesman, Philip E. Jacob and Nevitt Sanford*, Washington DC, American Council on Education, 1959, pp. 40-41.

³⁹ Clark Kerr, *The Uses of the University, with a Postscript (1972)*, Nueva York, Harper and Row, 1972 [1963], pp. 86-88.

conocimiento, su progresismo social se aliaba con una visión nacionalista muy instrumental de la producción de conocimiento académico. No tenía la menor duda de que la emergente generación de trabajadores del conocimiento estaría principalmente al servicio de las industrias petroquímica, agroquímica y de defensa; tablero de juego de las guerras neocoloniales estadounidenses en el sudeste asiático. Al mantener la doble visión de la administración Johnson, la misma que había lanzado la Guerra contra la Pobreza a la vez que se embarcaba en la desastrosa Guerra de Vietnam, Kerr entendía que la inversión pública en capital humano servía a la doble finalidad de la justicia social y la seguridad nacional. Cuando al año siguiente estalló la revuelta estudiantil fue precisamente esta amalgama la que se vio atacada.

Refiriéndose directamente a *Uses of the University*, Mario Savio, figura destacada en el movimiento por la libertad de expresión de Berkeley, acusó a Kerr de convertir a los estudiantes en la «materia prima» de una nueva «fábrica de conocimiento», una línea de ensamblaje «en la que se liman todas las asperezas y se obtienen productos lisos y bien pulidos». ⁴⁰ Inmerso en el humanismo de la Escuela de Fráncfort, Savio apelaba a una «filosofía de la educación más tradicional» que dejara de estar «ligada a lo militar y a lo industrial» y que en su lugar buscase «la verdad». Sin embargo, más allá de estas románticas denuncias de la fábrica de conocimiento, la revuelta estudiantil generó la crítica más afilada de la teoría del capital humano de la era de Johnson. Las políticas de Johnson para una educación superior inclusiva habían producido, sin pretenderlo, una generación de estudiantes que comprendía perfectamente las conexiones entre las relaciones raciales en el país y el anticomunismo extranjero, y que rechazaba la cómoda relación entre la universidad de investigación pública y el imperialismo estadounidense. Los estudiantes que participaron en las *Freedom Rides* [Marchas de la Libertad] de 1964 devolvieron el movimiento por los derechos civiles al norte del país y no tardaron en organizar acciones contra negocios locales que discriminaban a las personas negras. Comenzando en Wisconsin, los estudiantes lanzaron campañas contra Dow Chemical, la productora de napalm, y algunas otras contratistas de defensa que solían reclutar en los campus estadounidenses, además dirigieron acciones contra el reclutamiento a estudiantes de instituto y de universidad para el servicio militar. ⁴¹ Los movimientos por los derechos civiles y contra la guerra estaban conectados de distintas formas: este último no solo servía como terreno de entrenamiento para una nueva generación de activistas, sino

⁴⁰ Citado en Parker Donham, «Savio Blasts Kerr's "Knowledge Factory"» *The Harvard Crimson*, 12 de diciembre de 1964.

⁴¹ Terry H. Anderson, *The Movement and the Sixties*, Oxford, Oxford University Press, 1996, p. 161.

que la escalada de la Guerra de Vietnam también reducía los fondos de los programas nacionales contra la pobreza y enviaba a un desproporcionado número de negros a la primera línea de batalla. En un momento en el que el antimperialismo del Tercer Mundo se inclinaba más hacia la izquierda que hacia la derecha y en el que la disidencia nacional se clasificaba casualmente como comunismo, las sinergias entre las relaciones raciales estadounidenses y la geopolítica imperialista parecían transparentes.

Sin embargo, las protestas estudiantiles durante este periodo también se centraron de forma nada despreciable en la micropolítica de género, raza y sexualidad que representaba la peculiar tradición de las normas de *in loco parentis* de los campus universitarios. La idea de que la administración universitaria estaba de algún modo dotada de poderes de custodia como los de un progenitor, y por lo tanto estaba autorizada a actuar *in loco parentis*, estaba muy arraigada en los campus estadounidenses; sin embargo, a principios del siglo XX se reavivó especialmente, cuando una sentencia judicial otorgó amplios poderes a la universidad para expulsar al alumnado sin seguir el proceso debido.⁴² A mediados del siglo XX, las normas de *in loco parentis* trasladaron la normatividad íntima de la familia fordista a un contexto institucional más amplio, llevando sus disciplinas mucho más allá de los confines del hogar familiar hasta el espacio social laminar de los campus universitarios, en los que a los estudiantes no se les consideraba ni niños ni adultos plenos. *In loco parentis* permitía a administradores y responsables de las residencias restringir la actividad política del alumnado, regular su comportamiento, forma de vestir, consumo de alcohol y controlar su sexualidad. La heteronormatividad controlada era la norma. En un esfuerzo por «proteger» a las mujeres, el contacto entre

⁴² En *Gott contra la Universidad Berea*, 1913, la Corte de Apelaciones de Kentucky sentenció que las autoridades universitarias «adoptan un papel *in loco parentis* en lo que se refiere al bienestar físico y moral y a la educación mental del alumnado, y no entendemos por qué, para ese fin, no pueden dictar ninguna norma o reglamento relativo al gobierno o mejora de su alumnado, que pudiera dictar un progenitor para los mismos fines». Citado en Britton White, «Student Rights: From In Loco Parentis to Sine Parentibus and Back Again? Understanding the Family Educational Rights and Privacy Act in Higher Education», *B. Y. U. Education and Law Journal*, núm. 2, 2007, p. 324. Existe una amplia bibliografía sobre las normas de *in loco parentis* y su papel catalizador en las revueltas estudiantiles de los años sesenta. Para un debate general, véase Anderson, *The Movement and the Sixties*, pp. 97-101 y 112-113; Loss, *Between Citizens and the State...*, pp. 182-187 y 203-211. Sobre las conexiones entre el feminismo, los derechos civiles e *in loco parentis* en el sur, véase Renee Nicole Lansley, «College Women or College Girls? Gender, Sexuality, and in loco parentis on Campus», tesis doctoral, Ohio State University, History, 2004, disponible on line en http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1101681526 (consultado por última vez el 1 de octubre de 2015). Sobre las conexiones entre la liberación gay e *in loco parentis*, véase «The Challenge to In Loco Parentis, Campus Masculinity, and Administrative Anxiety (1960-1970)», Oberlin College LGTB Community History Project, disponible on line en <http://www.oberlinlgbt.org/behind-the-masks/1960s/1960s-3> (consultado por última vez el 1 de octubre de 2015).

estudiantes hombres y mujeres en las residencias universitarias estaba muy regulado, y la mera sospecha de homosexualidad era motivo de expulsión. El peso de la vigilancia recaía sobre las alumnas en particular, que debían respetar toques de queda y normas de vestimenta mucho más estrictas que sus homólogos masculinos y a las que normalmente supervisaban tanto sus colegas como sus superiores. En el sur, los estudiantes negros llegaron a considerar las normas de *in loco parentis* como un medio de infantilización institucionalizada, una forma de imponer normas de respetabilidad y deferencia que les resultaban demasiado familiares como expresión de sumisión racial. Su desconfianza se vio reforzada cuando se recurrió a las normas de *in loco parentis* para anular el activismo por los derechos civiles en los campus sureños.

La lucha contra *in loco parentis* fue una experiencia formativa para la nueva izquierda estudiantil y los distintos movimientos de liberación que surgieron de ella. Estos movimientos sometían la normatividad racial y sexual de la familia fordista a una crítica implacable y exploraban las formas en las que sus jerarquías íntimas impregnaban el espacio institucional de la universidad. En su relato de la revolución epistemológica de los años sesenta, Roderick Ferguson señala que lo que en Europa tomó la forma de un desafío ampliamente intelectual a las normas disciplinarias (ejemplificado por el trabajo de Michael Foucault), en Norte América, adoptó la forma mucho más radical de la insurrección social integral.⁴³ La nueva izquierda estudiantil, después de todo, surgía de un cambio histórico en la demografía de la población universitaria; y este cambio se reflejaba a su vez en el auge de movimientos que no solo exigían la inclusión en las estructuras existentes, sino una redefinición completa de la propia institución. En los campus de todo el país, las estudiantes feministas lucharon por el fin inmediato de las normas de *in loco parentis*, por la discriminación positiva en las admisiones y la contratación, exigieron información sobre anticonceptivos y aborto en los centros de salud universitarios, centros de atención tras violaciones en los campus, la creación de nuevos programas de estudios de mujeres y la revisión del currículo.⁴⁴ Más allá de la discriminación positiva, los estudiantes negros, nativos estadounidenses y latinos exigieron una revisión a fondo tanto del currículo como de la práctica pedagógica para reflexionar mejor sobre la colusión histórica

⁴³ Roderick Ferguson, *The Reorder of Things: The University and its Pedagogy of Minority Differences*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2012, pp. 45-49. El libro de Ferguson ofrece un relato muy matizado de estos movimientos y del papel que han desempeñado en la remodelación del capital académico.

⁴⁴ Véase, por ejemplo, el relato del movimiento feminista y lésbico en Berkeley en Kate Adams, «Built out of Books: Lesbian Energy and Feminist Ideology in Alternative Publishing», en Sonya L. Jones, *Gay and Lesbian Literature since World War II: History and Memory*, Londres, Routledge, 2014, pp. 119-120.

entre el racismo y el capital en la historia estadounidense.⁴⁵ Sin pretender rebajar las tensiones entre estos distintos movimientos de liberación, ni mucho menos negar las perpetuaciones normativas y nacionalistas que se daban dentro de ellos, juntos señalaban un esfuerzo por repensar la estructura institucional completa de la universidad, desde su demografía hasta su currículo y estructuras administrativas, desde el punto de vista de los sujetos no normativos del fordismo.

Estos movimientos fueron al mismo tiempo el resultado de la democratización de la educación superior fordista y el producto radical de sus excesivos objetivos nacionalistas. En cierto sentido, resulta evidente que no habrían existido sin la enorme inyección de dinero público de Johnson en la educación superior y sin el esfuerzo de la administración liberal de perfiles como Kerr, presidente de la UC, por mantener un sistema universitario estatal gratuito. En su mayor parte, y con motivos suficientes, el radicalismo estudiantil de los años sesenta veía a estos reformistas como enemigos, benefactores del Estado militar-industrial de la Guerra Fría que puede que hubieran abierto la educación superior a las minorías estadounidenses, pero que lo habían hecho con la voluntad de ampliar el imperialismo estadounidense y el anticomunismo nacional. Clark Kerr en concreto había demostrado en numerosas ocasiones que estaba demasiado dispuesto a transigir con la actual organización del capitalismo estadounidense. Aunque resistió con valentía las presiones del *Un-American Activities Committee* [Comité de Actividades Antiamericanas] de la Cámara de Representantes para que censurara a los oradores del campus, Kerr siempre estuvo dispuesto a ofrecer concesiones a la otra parte, insistiendo, por ejemplo, en que los oradores de izquierdas fueran supervisados por los anticomunistas como muestra de imparcialidad.⁴⁶ En una época de creciente prosperidad, quizás era difícil imaginar que en pocos años la crítica estudiantil al capitalismo fordista sería flanqueada desde la derecha por una nueva clase de actores políticos decididos a acabar por completo con la financiación pública de la educación. Así, cuando Clark Kerr fue finalmente expulsado de la Universidad de California, fue con la bendición de Ronald Reagan y no con la de las protestas estudiantiles.

Reagan y las protestas estudiantiles de Berkeley

Más de una década antes de su primer presupuesto como presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan tuvo ocasión de ensayar su programa para

⁴⁵ Ferguson, *The Reorder of Things...*

⁴⁶ David Burner, *Making Peace with the 60s*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 1996, p. 137.

la educación superior cuando se encontró cara a cara con la emergente protesta del movimiento estudiantil de California. De hecho, muchas opiniones atribuyen la inesperada victoria de Reagan de 1966 en las elecciones a gobernador a su hábil manejo del movimiento estudiantil de Berkeley, logrando que en poco tiempo pasara de ser una anécdota en las encuestas a una cuestión principal, que alejó a la clase trabajadora blanca demócrata de sus lealtades tradicionales.⁴⁷ Conectando con las inquietudes blancas sobre los costes personales de la discriminación positiva, Reagan organizó toda la retórica de su campaña en oposición a los programas de la Gran Sociedad de Johnson, que en ese mismo momento se implantaban por todo el país. Reagan fue uno de los primeros candidatos en vincular el impuesto de propiedad californiano con el excesivo gasto gubernamental y, por extensión, con la inclusión racial, aun cuando sus políticas fiscales como gobernador en ningún caso fueron coherentes con ello. También fue el primero que relacionó con éxito el gasto en educación superior que, después de todo era inclusivo para la clase trabajadora blanca, con el peso mortífero del bienestar social, incendiando la ansiedad racial del electorado de clase trabajadora blanca para enfrentarlo a sus propios intereses económicos. Como alternativa a la Gran Sociedad de Johnson, a Reagan se le ocurrió la idea de la «sociedad creativa», un planteamiento precoz de la llamada economía creativa que exaltaba las virtudes de la colaboración público-privada, la investigación empresarial y la propiedad intelectual para la producción de valor económico.⁴⁸ Muy parecida a la posterior elaboración de Richard Florida de la misma idea, la sociedad creativa de Reagan aspiraba a utilizar plenamente los recursos humanos racial y culturalmente diversos de California y al mismo tiempo neutralizar sus demandas políticas más disruptivas.⁴⁹

⁴⁷ Christopher Newfield, *Unmaking the Public University: The Forty-Year Assault on the Middle Class*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2008 p. 52; Michelle Reeves, «"Obey the Rules or Get Out": Ronald Reagan's 1966 Gubernatorial Campaign and the "Trouble in Berkeley"», *Southern California Quarterly*, vol. 92, núm. 3, 2010, pp. 275-305; Gerard J. De Groot, «Ronald Reagan and the Student Unrest in California, 1966-1970», *Pacific Historical Review*, vol. 65, núm. 1, 1996, pp. 107-129. Aaron Bady y Mike Konczal van más allá y ven el ataque de Reagan al sistema de la Universidad de California como una advertencia: «Es importante recordar este capítulo de la historia de California porque, en retrospectiva, puede haber señalado el principio del fin de la educación pública superior en Estados Unidos tal y como la habíamos conocido». Aaron Bady y Mike Konczal, «From Master Plan to No Plan: The Slow Death of Public Higher Education», *Dissent*, otoño, 2012, disponible on line en <https://www.dissentmagazine.org/article/from-master-plan-to-no-plan-the-slow-death-of-public-higher-education> (consultado por última vez el 1 de octubre de 2015). Sin duda, los experimentos de Reagan a nivel estatal en materia de reforma del bienestar y la educación se incorporaron posteriormente a su programa presidencial y fueron ampliados por sus sucesores.

⁴⁸ Ronald Reagan, «The Creative Society», en *The Creative Society: Some Comments on Problems Facing America*, Nueva York, Devin-Adair Company, 1968, pp. 1-9, y «The Perils of Government-Sponsored Higher Education» en *ibídem*, pp. 109-117.

⁴⁹ Sobre el paralelismo entre la sociedad creativa de Reagan y el trabajo de Richard Florida, véase Toby Miller, «The Children of Reagan's Hippies», *R/evolutions*, vol. 1, núm. 1, 2013, pp. 70-83.

Ya en 1965, Reagan comenzó a recoger la indignación pública al denunciar que ni el gobernador demócrata, Pat Brown, ni Kerr hubieran usado la fuerza contra los radicales de Berkeley. Reagan mantuvo un contacto estrecho con agentes del FBI a lo largo de toda su campaña, y en más de una ocasión amenazó con poner en marcha una investigación formal contra la subversión de los campus.⁵⁰ Sin embargo, por lo menos en sus intervenciones, rebajó la retórica de la Guerra Fría —que sus asesores consideraban innecesariamente divisoria y capaz de alienar a los más veteranos— y en su lugar, se centró ante todo en la cuestión de *in loco parentis* y su supuesto declive.⁵¹ A lo largo de la campaña, los colaboradores de Reagan le atosigaron con memorandos que describían las numerosas tropelías de los estudiantes radicales, quienes supuestamente habían pasado de la libertad de expresión a la libertad sexual. Según estos informes, los estudiantes celebraban fiestas nudistas en las que el LSD resultaba fácilmente disponible y organizaban actos sexuales en público; se decía que la homosexualidad estaba abiertamente presente en las residencias del campus, incluso en las fraternidades; que las alumnas estaban distribuyendo panfletos sobre anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual y aborto... la lista era larga. Evitando cuidadosamente cualquier compromiso directo con las demandas políticas de los estudiantes, la retórica de la campaña de Reagan planteó las tensiones del campus a través de la lente del drama familiar, y optó por desempeñar el papel redentor del padre estricto.⁵² Si la ampliación del bienestar social de posguerra y la inversión pública habían permitido que un número sin precedentes de estudiantes accedieran a la universidad, sin costes de matrícula, Reagan lo interpretó como una forma de indulgencia paterna, comprensible quizás, pero en último término desastrosa en sus consecuencias psicológicas. Al dirigirse al alumnado del Eureka College, en Illinois, lamentaba el hecho de que los padres de su generación hubieran fallado a sus hijos por exceso de generosidad:

Somos el clásico ejemplo de haberos dado lo que nunca tuvimos [...] la televisión, la *Little League*, pero me temo que os hemos dejado sin responsabilidades o sin el derecho de ganáros la vida por vuestros propios medios.

⁵⁰ Seth Rosenfeld, *The FBI's War on Student Radicals and Reagan's Rise to Power*, Nueva York, Farrar, Straus and Giroux, 2012, pp. 291-488

⁵¹ Matthew Dallek, *The Right Moment: Ronald Reagan's First Victory and the Decisive Turning Point in American Politics*, Oxford, Oxford University Press, 2000, p. 191.

⁵² Este aspecto de la retórica de Reagan viene planteado de forma muy convincente por Jeffrey Dudas en «Subversives All! Ronald Reagan and the Paternal Roots of "Law and Order" at Home and Abroad», *Law, Culture and the Humanities*, vol. 8, núm. 1, 2012, pp. 119-152. Seth Rosenfeld informa de que a principios de los años sesenta Reagan había recurrido a agentes del FBI para investigar la vida sexual de su propia hija; los paralelismos entre su vida política y familiar eran bastante reales. Véase Rosenfeld, *The FBI's War on Student Radicals and Reagan's Rise to Power...*, pp. 148-149.

Demasiadas veces, a diferencia de nosotros que tuvimos que ganárnosla, hemos querido dársela. Nuestros motivos son loables, pero nuestro criterio era malo. «No» era casi una palabrota o había desaparecido de nuestro vocabulario.⁵³

En otra intervención, reflexionaba acerca de que esta era «una época no solo de permisividad, sino de riqueza», y continuaba preguntándose por la relación entre la creciente prosperidad y la criminalidad juvenil:

No puedo evitar pensar que a los bienes y a los privilegios otorgados sin cuidado o que no cuesta ganar se les tiene en baja estima [...]

¿Estamos haciendo lo suficiente por nuestros hijos al hacer demasiado por ellos? ¿No estarían mejor si se les enseñara a aceptar la responsabilidad y aprendieran que a largo plazo todos debemos ganarnos lo que tenemos, y que normalmente tenemos lo que nos hemos ganado?⁵⁴

A Reagan le preocupaba especialmente la actitud del profesorado de izquierdas al que acusaba de ceder ante el alumnado radical y no actuar *in loco parentis*:

El educador que niega que exista ningún valor absoluto se equivoca, que no ve ni blanco ni negro, ni correcto ni incorrecto, sino solo tonos de grises en un mundo en el que la disciplina de cualquier tipo se considera una interferencia intolerable con el derecho del individuo. Quien se rebela ante la idea pasada de moda del «*loco parentis*» y reclama que él está allí para impartir conocimiento, no para sustituir a unos padres ausentes. Sin embargo, no puede eludir la responsabilidad del desarrollo de la personalidad y la madurez del alumno [...] Estas instituciones se crearon, y se mantienen hasta la fecha, para garantizar que se perpetúa una estructura social, una nación, si lo desean.⁵⁵

En otro discurso, Reagan amenazó con reinstaurar las normas de *in loco parentis* imponiendo un código de conducta para el profesorado «que le obligaría a dar ejemplo de buen comportamiento y decencia para los jóvenes a su cargo».⁵⁶ Sin embargo, una vez elegido, resultó llamativo que Reagan anulara las formas tradicionales de regulación interna de la universidad y, en su lugar, recurriera con frecuencia a la policía, y en un momento dado a la Guardia Nacional, a la hora de disciplinar a los estudiantes.

Como gobernador, Reagan demostró un interés inusual por las cuestiones internas de la universidad. Su cargo implicaba su consideración

⁵³ Reagan, «The Generation Gap», en *The Creative Society...*, p. 63.

⁵⁴ Reagan, «Crime - 1968», en *ibidem*, pp. 25-26.

⁵⁵ Reagan, «What Is Academic Freedom», en *ibidem*, p. 120.

⁵⁶ Reagan, «The Morality Gap at Berkeley», en *ibidem*, p. 127.

como miembro *ex officio* de la Board of Regents [Junta de Rectores] de la Universidad de California. Mientras que anteriores gobernadores habían mantenido cierta distancia, respetando la larga tradición universitaria de autonomía interna, Reagan hizo pleno uso del cargo, asistiendo religiosamente a cada reunión y dando ruedas de prensa antes y después, en las que anunciaba sus intenciones a público y rectores al mismo tiempo.⁵⁷ El 21 de enero de 1967, Reagan fue testigo de una inesperada victoria en la primera reunión de la Junta de Rectores a la que acudía, en la que se votó 14 a 8 para destituir a Clark Kerr.⁵⁸ Más que ninguna otra figura en California, Kerr había representado la hegemonía de las teorías de Theodore Schultz a favor de la educación gratuita y la financiación pública. Con Kerr fuera de combate, Reagan tenía ahora libertad para impulsar las ideas competitivas de Milton Friedman y la Escuela de Chicago.

A los pocos días de la toma de posesión como gobernador, el asesor financiero de Reagan desveló un plan radical de reforma de la UC y del sistema universitario estatal. Habiendo heredado un déficit presupuestario de su predecesor, Reagan aprovechó la oportunidad para anunciar un recorte del 10 % del presupuesto anual de la UC y de las universidades estatales, para sacar adelante el muy polémico plan de incorporar las tasas de matrícula como forma de superar dicho déficit.⁵⁹ Las medidas se percibieron de forma generalizada como una suerte de castigo colectivo y, a corto plazo, lograron aunar con éxito a rectores, estudiantes y profesorado en contra del nuevo gobernador. El plan de Reagan de introducir tasas de matrícula fue finalmente tumbado por los rectores en agosto de 1967, aun cuando le permitieran recaudar los ingresos que quería aumentando las tasas administrativas vigentes.⁶⁰ En términos económicos, la diferencia entre el plan de Reagan y el compromiso final de los rectores fue mínima. Aun así, la idea de introducir tasas de matrícula se entendió como un devastador ataque simbólico a la tradición de la enseñanza universitaria gratuita. ¿Una vez que el principio de la matrícula

⁵⁷ De Groot, «Ronald Reagan and the Student Unrest in California...», pp. 118, 124.

⁵⁸ Lou Cannon, *Reagan*, Nueva York, G. p. Putnam's Sons, 1982, p. 149. Según Cannon, Reagan tenía planes a largo plazo para destituir a Kerr, pero se sorprendió gratamente cuando la Junta de Rectores se le adelantó en esta primera reunión.

⁵⁹ Ray Zeman, «Reagan Pledges to Squeeze, Cut and Trim State Spending: Reagan Pledges Strict Government Economy», *Los Angeles Times*, 6 de enero de 1967, pp. 1 y 20; Art Berman, «Tuition Storm: Educators Blast Reagan Plans UC Regents' Emergency», *Los Angeles Times*, 6 de enero de 1967, pp. 1 y 24. El presupuesto de la UC para el curso 1967-68 terminó reduciéndose en 20 millones de dólares.

⁶⁰ Gladwin Hill, «Reagan Defeated on Tuition Plans: Regents Vote, 14-7, to Bar Fees at the University», *New York Times*, 1 de septiembre de 1967, p. 13. Las tasas administrativas existentes eran mínimas y solo podían destinarse a gastos no relacionados con la enseñanza, como la administración, los servicios sanitarios y el asesoramiento.

se aceptara, cómo se podía mantener el compromiso con el ideal de la educación gratuita que representaba el *Plan maestro* de California? ¿Y qué límites se pondrían para los aumentos anuales?⁶¹

Sin duda, Milton Friedman apreció la importancia simbólica de la postura de Reagan sobre la matrícula. En su columna semanal para la revista *Newsweek*, Friedman felicitó a Reagan por validar sus ideas sobre la inversión en capital humano que en su día habían sido marginales. «La propuesta del gobernador Reagan hacía falta desde hace tiempo y es demasiado modesta», escribía, «no solo para el estado de California, sino también para el resto de estados».⁶² Dando la vuelta a la promesa de la educación pública, Friedman caricaturizaba a quienes daban forma a las protestas como rentistas de clase media que vivían de los impuestos de las personas pobres que trabajaban duro, quienes presumiblemente no mandaban a sus hijos a la universidad:

La educación «gratuita» es una antigua tradición en California, y es una tradición que hasta los rebeldes del campus están dispuestos a defender con uñas y dientes, después de todo, son sus carteras las que están en juego.

Desafortunadamente, los contribuyentes con bajos ingresos y los jóvenes que no están en la universidad son mucho menos efectivos que los alumnos y los profesores a la hora de plantear sus problemáticas al público. La matrícula «gratuita» resulta muy poco equitativa para ellos.⁶³

Los argumentos populistas de Friedman iban exactamente en contra de la evidencia, que demostraba que la matrícula gratuita, las becas Pell y los programas de tutoría habían permitido a un número creciente de alumnos de bajos ingresos, de mujeres y de miembros de minorías acceder a la universidad.⁶⁴ Sin embargo, su retórica, como la de Reagan, estaba en estrecha sintonía con las quejas de los contribuyentes blancos con ingresos bajos y medios, que desconfiaban del antipatriotismo de los radicales de los campus y lamentaban su alianza con el movimiento por los derechos civiles.

⁶¹ Al final, una vez que la Junta de Rectores concedió un aumento de las tasas administrativas (en contraposición a la matrícula), estas se incrementaron cada año hasta que al final de la década la idea de la educación universitaria gratuita solo existía como concepto. Véase Robert Lindsey, «California Weighs End of Free College Education», *New York Times*, 28 de diciembre de 1982.

⁶² Milton Friedman, «"Free" Education», *Newsweek*, 14 de febrero de 1967, p. 86.

⁶³ *Ibidem*. En otro lugar, Friedman arremetió contra los «radicales intolerantes que pretenden destruir todas las universidades». Milton Friedman, «Police on Campus», *Newsweek*, 14 de abril de 1969, p. 87.

⁶⁴ Patricia J. Gumpert, Maria Iannozzi, Susan Shaman y Robert Zemsky, *Trends in Higher State Education from Massification to Post Massification*, Stanford (CA), National Center for Postsecondary Improvement, 1997, pp. 5-6.

En la UCLA, el economista de la teoría de la libre elección pública James M. Buchanan (antiguo estudiante de Milton Friedman) era incluso más claro en su defensa de los planes de matrícula de Reagan. «¿Por qué la matrícula gratuita es tal becerro de oro?» se preguntaba: «¿Acaso la propuesta del gobernador Reagan de cobrar por la matrícula en California demuestra que está dispuesto a acabar con las instituciones de enseñanza superior? ¿Y por qué los académicos de las universidades estatales de California se han opuesto con tanta firmeza a los intentos de introducir una tasa de matrícula incluso nominal?». ⁶⁵ El Departamento de Economía de la UCLA era un baluarte del neoliberalismo de la Escuela de Chicago y un objetivo especial del movimiento estudiantil del campus. En 1968, se colocó una bomba, que nunca llegó a detonar, a las puertas de la oficina principal del departamento como protesta por la no contratación de profesores negros. ⁶⁶ Antes de regresar disgustado a la Universidad de Virginia, Buchanan junto con un colega de la London School of Economics [Escuela de Economía de Londres] publicó un estudio, de la longitud de un libro, que se proponía explicar las estructuras de incentivos que impulsaban el radicalismo estudiantil. En este desarrollaron una elaborada teoría de la relación entre el gasto público deficitario y el antiautoritarismo, argumentando que la matrícula gratuita desempeñaba un papel fundamental «en la creación de al menos parte del caos del que eran testigo las principales universidades». ⁶⁷ La economía del «terror» de los campus se podía explicar como respuesta racional a los perversos incentivos de la educación pública gratuita: «Rechazamos la visión que clasifica a estas personas como desviadas, psicópatas, cuyo comportamiento simplemente está más allá de la posibilidad de explicación racional, económica o de otro tipo [...] Aunque su pelo seguiría siendo significativamente más largo, el propio *hippie* llevaría

⁶⁵ James M. Buchanan y Nicos E. Devletoglou, *Academia in Anarchy: An Economic Diagnosis*, Nueva York, Basic Books, 1970, p. 23. Otras prominentes figuras neoliberales del Departamento de Economía de la UCLA también expresaron su apoyo a los planes de matrícula de Reagan en una carta al editor de *Los Angeles Times*. Véase Armen A. Alchian, Jack Hirshleifer y Roland McKearn, «The Tuition Proposal: "Good", Say 3 Professors», *Los Angeles Times*, 4 de enero de 1967, p. B4. Armen Alchian y sus colegas también publicaron un trabajo sobre las estructuras económicas de la violencia estudiantil. Armen A. Alchian, «The Economic and Social Impact of Free Tuition», *New Individualist Review*, vol. 5, núm. 1, 1968, pp. 42-58; Armen A. Alchian y William R. Allen, «What Price Zero Tuition?», *Michigan Quarterly Review*, vol. 7, núm. 4, 1968, pp. 269-272.

⁶⁶ Sobre la historia del Departamento de Economía de la UCLA, su conexión con la Escuela de Chicago y el ataque bomba fallido, véase William R. Allen, «A Life Among the Econ, Particularly at UCLA (William R. Allen Interviewed by Daniel B. Klein)», *Econ Journal Watch*, vol. 7, núm. 3, 2010, pp. 205-234. Milton Friedman cuenta una visita al Departamento de Economía de la UCLA en el invierno de 1967, en la que le presentaron a Reagan y debatió con los estudiantes sobre la cuestión de las tasas de matrícula propuestas por Reagan. Véase Milton Friedman y Rose D. Friedman, *Two Lucky People*, Chicago, University of Chicago Press, 1998, pp. 209-210.

⁶⁷ Buchanan y Devletoglou, *Academia in Anarchy...*, p. 27.

el pelo más corto si hubiera un impuesto sobre la longitud del pelo».⁶⁸ Al hacer gratuita la universidad, la inversión pública insensibilizaba a los estudiantes acerca del coste real de la educación y los llevaba a tratar la universidad con desprecio. Al liberar a los alumnos de la dependencia económica de sus padres, la matrícula gratuita les permitía cuestionar a la autoridad tradicional a todos los niveles; dentro de la familia, de la universidad y de la historia del conocimiento.⁶⁹ En resumen, eran los perversos incentivos de las estructuras de gasto público deficitario los que habían generado los anárquicos movimientos políticos de los años sesenta. Al contrario, un sistema de tasas de matrícula y préstamos universitarios haría que la educación dejara de ser una inversión pública para serlo privada y haría que el alumnado volviera a depender de sus familias.

A medida que se fue desarrollando a lo largo de los años setenta, la economía de la elección pública resultó fundamental para desafiar la hegemonía intelectual de las finanzas públicas de Musgrave.⁷⁰ Economistas de la Escuela de Virginia como Buchanan ayudaron a desacreditar las lecciones fundamentales de la economía keynesiana de que el gasto deficitario para la llamada inversión productiva era un motor necesario para el crecimiento económico y, en su lugar, popularizaron la idea de que el déficit presupuestario debía mantenerse al mínimo como principio, incluso cuando la disciplina fiscal parecía hostil para el crecimiento económico. Con la elección de Ronald Reagan como presidente en 1980, los presupuestos equilibrados y la disciplina fiscal se convirtieron en una constante de la retórica gubernamental; aun cuando se contradecía estrepitosamente con el exorbitante gasto en defensa de Reagan y la practicaban más los demócratas que los republicanos. Los primeros trabajos de Buchanan proporcionan una valiosa visión de la inversión en la teoría de la elección pública; sus argumentos contra el gasto público deficitario eran tanto políticos como económicos, motivados tanto por el aparente colapso de la familia como por una teoría general de la rectitud macroeconómica. Buchanan no veía ninguna línea que dividiera con claridad la economía pública del Estado de la economía íntima de la familia. Al liberar a una generación de niños de la disciplina de las obligaciones familiares y de la deuda filial, la ampliación de la inversión pública en educación superior

⁶⁸ *Ibidem*, p. 121.

⁶⁹ *Ibidem*, p. 77.

⁷⁰ Para un esclarecedor análisis de lo que estaba en juego en el cambio de las finanzas públicas a la economía de la elección pública, véase Wolfgang Streeck, *Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism*, Nueva York, Verso, 2014, pp. 70-75 [ed. cast.: *Comprando tiempo. La crisis pospuesta del capitalismo democrático*, Buenos Aires, Katz, 2016]. Sin embargo, Streeck no presta atención a las dimensiones familiares de este cambio. Para una interesante visión del conflicto entre las dos corrientes, desde el punto de vista de los profesionales, véase James M. Buchanan y Richard A. Musgrave, *Public Finance and Public Choice: Two Contrasting Visions of the State*, Cambridge (MA), MIT Press, 1999.

había servido para financiar una revuelta generalizada contra la autoridad. Solo al repensar toda la estructura del gasto público deficitario se podía aspirar a revertir esta tendencia.

Democratizar el crédito: restaurar la responsabilidad familiar

Después de su aplastante victoria en las elecciones presidenciales de 1980, Reagan no tardó en impulsar sus reformas educativas. Inspirado por una combinación de monetarismo y economía de la elección pública, Reagan sacó adelante un ambicioso plan presupuestario. No solo reduciría los impuestos federales sobre la renta y recortaría el gasto público, sino que además equilibraría el presupuesto. Como reconoció el asesor presupuestario de Reagan, David Stockman, el plan era intrínsecamente autodestructivo, dado que Reagan había excluido cuidadosamente el gasto en defensa de su lista de recortes propuestos.⁷¹ ¿Cómo pretendía Reagan equilibrar el presupuesto si al mismo tiempo estaba planeando recortes impositivos y un gran aumento del gasto militar? El aparente estancamiento se agravó con la reducción de ingresos fiscales provocada por el shock Volcker, lo que forzaba al gobierno a un mayor déficit, mientras que la disminución de la inflación magnificó en gran medida la carga de los tipos de interés en la deuda pública existente. En aparente contradicción con la retórica de su campaña, las políticas fiscales de Reagan terminaron por producir un ingente déficit presupuestario, mucho mayor y significativamente más costoso que los de las décadas anteriores.⁷² Pero si bien el plan presupuestario de Reagan contradecía la teoría de la economía de la elección pública, se mantenía fiel a su espíritu: la preocupación por el déficit presupuestario, después de todo, nunca fue neutral al respecto de en qué se gastaba el dinero público, al tiempo que se alimentaba de un contexto en el que el creciente gasto gubernamental en servicios públicos redistributivos se consideraba responsable de la insurrección de la izquierda. Durante los años setenta, el gasto deficitario en salud, educación y bienestar empezó a superar por primera vez el gasto en defensa;⁷³ Reagan se limitó a invertir la fórmula relanzando la Guerra Fría y poniendo en marcha radicales recortes en los presupuestos de salud, educación y bienestar.

⁷¹ David Stockman, *The Triumph of Politics*, Londres, Coronet, 1987, pp. 245-287.

⁷² Como muchos han señalado, el auge del «conservadurismo presupuestario equilibrado», ejemplificado de forma más elocuente por la economía de la elección pública, ha coincidido paradójicamente con un periodo de déficit presupuestario crónico y niveles de deuda pública nunca vistos, interrumpidos únicamente por un breve periodo de superávit con Clinton. Para una lectura política esclarecedora de esta aparente paradoja, véase Sidney Plotkin y William E. Scheuerman, *Private Interest, Public Spending: Balanced Budget Conservatism and the Fiscal Crisis*, Boston (MA), South End Press, 1994; Robert Heilbroner y Peter Bernstein, *The Debt and the Deficit: False Alarms/Real Possibilities*, Nueva York, Norton, 1989.

⁷³ Leo Panitch y Sam Gindin, *The Making of Global Capitalism: The Political Economy of American Empire*, Nueva York, Verso, 2012, p. 128.

Sobre la base de su experiencia en California, Reagan y sus asesores pelearon duro por colocar la gratuidad de la matrícula como una carga sobre el contribuyente, una forma de «incentivo perverso» similar al bienestar público. David Stockman acusó a las becas estudiantiles de ser «uno de esos derechos que creamos en los años setenta y que eran excesivos», al tiempo que sugería que «probablemente podríamos recortarlo mucho más». ⁷⁴ Terrel Bell, secretario de educación durante la primera administración Reagan, recibió instrucciones de «sacar a esas sanguijuelas de las espaldas de la población trabajadora decente». ⁷⁵ Su sucesor, el conservador cultural William Bennet, insistía en que el coste de la educación (como el del bienestar en general) debería ser en primer lugar una responsabilidad familiar. ⁷⁶ El objetivo era tanto recortar el déficit presupuestario como recuperar el respeto a la autoridad restaurando «el papel tradicional de los padres y los alumnos al financiar los costes universitarios». ⁷⁷

Como parte de este esfuerzo, el primer presupuesto de Reagan proponía una reducción del 20 % en el gasto de ayudas estudiantiles, lo que afectaba tanto a las becas como a los préstamos. ⁷⁸ El presupuesto imponía techos de gasto en las becas Pell, y este movimiento dejó inmediatamente fuera a muchos estudiantes que sobre el papel cumplían los requisitos para recibir ayudas. También pretendía reinstaurar la prueba de «dependencia estudiantil» para los préstamos a estudiantes, lo que implicaba que el alumnado legalmente adulto tendría que recurrir a la ayuda parental antes de poder optar a un crédito. Proponía también la incorporación de una onerosa «tasa original» que deberían pagar los alumnos por adelantado en el momento de pedir el préstamo. Estas reformas se aprobaron en el Congreso con una oposición sorprendente escasa y tuvieron consecuencias casi inmediatas: en 1985, el número de estudiantes de primer año que participaban en el programa de becas Pell se había reducido casi a la mitad, al mismo tiempo que el poder adquisitivo real de las becas comenzaba un largo y continuo declive. ⁷⁹

⁷⁴ «A Chat With Dave Stockman», *Columbia Daily Spectator*, núm. 146, octubre de 1981, pp. 1 y 3.

⁷⁵ Terrel H. Bell, *The Thirteenth Man: A Reagan Cabinet Memoir*, Nueva York, Free Press, 1988, p. 75.

⁷⁶ United States Congress, *Senate Committee on Labor and Human Resources, Nomination: Hearing Before the Committee on Labor and Human Resources, United States Senate, Ninety-ninth Congress, First Session, on William J. Bennett, of North Carolina, to be Secretary, Department of Education*, 28 de enero, Washington DC, US Government Printing Office, 1985, p. 162.

⁷⁷ William Bennett a Terry Branstad, White House Office of Records Management [Oficina de Gestión de Registros de la Casa Blanca], Ronald Reagan Library, 3 de julio de 1985. Citado en Devin Fergus, «Financial Fracking in the Land of the Free, 1980-2008», en Reid Cramer y Trina R. Williams Shanks, *The Assets Perspective: The Rise of Asset Building and Its Impact on Social Policy*, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2014, p. 78.

⁷⁸ Michael Mumper, *Removing College Price Barriers: What Government Has Done and Why It Hasn't Worked*, Albany, SUNY Press, 1996, p. 94; Mettler, *Degrees of Inequality...*, p. 66.

⁷⁹ Fergus, «Financial Fracking...», p. 77.

Aunque con cada audiencia anual sobre los presupuestos, Reagan proponía recortes más drásticos a la educación superior, ninguno cosechó tanto éxito como su ofensiva inicial. Aun así, como apunta Suzanne Mettler, la presidencia de Reagan fue un momento decisivo: marcó «el final de lo que había sido un esfuerzo de casi cuarenta años de políticas de educación superior para hacer que la asistencia a la universidad resultara asequible para el sector más amplio de la población estadounidense».⁸⁰ Después del primer presupuesto de Reagan, el cambio de agenda fue resultado del «bloqueo legislativo» y de la «deriva política» más que de ninguna iniciativa ideológica sistemática.⁸¹ A lo largo de los gobiernos de Reagan y de George H. W. Bush, las mayorías en el Congreso bloquearon cualquier intento de ampliar el presupuesto de las becas estudiantiles. Y si bien los demócratas se opusieron por lo general a la envergadura y la necesidad de los recortes propuestos, no pudieron evitar que, en términos reales, el valor de las becas federales se redujera. En cambio, demócratas y republicanos lograron alcanzar un compromiso en la ampliación regular del programa de préstamos universitarios, lo que solo les exigía levantar las restricciones de quién podía acceder al préstamo o aumentar los límites de los mismos.⁸²

El significado pleno de esta «deriva» se vuelve evidente si se observa la historia de los préstamos estudiantiles con garantías federales que en su día se consideraban secundarios respecto de las becas. Con la aprobación de la Ley de Educación Superior de 1965, el presidente Johnson estableció un generoso sistema de becas para el alumnado de bajos ingresos (que más tarde absorbería el sistema de becas Pell) y a la vez garantizó un programa de préstamos estudiantiles diseñado para ampliar en mayor medida el acceso a estudiantes de ingresos bajos y medios.⁸³ En lugar de establecer un sistema de préstamos federales, se consideraba más barato y eficiente ofrecer incentivos a la banca privada para emitir préstamos estudiantiles con tasas de interés por debajo del mercado. Por cada préstamo emitido, el gobierno federal no solo compensaba a los bancos por mantener los tipos de interés bajos, sino que además se comprometía a pagar todos los intereses debidos durante el periodo de matriculación del alumno y a cubrir plenamente al prestamista ante el riesgo de impago. En conjunto, estas iniciativas transformaron los préstamos estudiantiles en una empresa beneficiosa y prácticamente exenta de riesgos para la banca privada. Además, en 1972, el Congreso creó una entidad patrocinada por el gobierno conocida como la National Student Loan Marketing Association [Asociación Nacional de Préstamos Estudiantiles] o Sallie Mae, con el objetivo de

⁸⁰ Mettler, *Degrees of Inequality...*, p. 96.

⁸¹ Michael Mumper habla de «bloqueo legislativo y deriva programática» en *Removing College Price*, p. 96. Mettler habla de «deriva política» en *Degrees of Inequality...*, p. 67.

⁸² Mettler, *Degrees of Inequality...*, p. 67.

⁸³ Mumper, *Removing College Price Barriers...*, pp. 78-80.

asegurar aún más los riesgos de los prestamistas privados. Igual que Fannie Mae, equivalente en el mercado hipotecario federal y mucho más antigua, Sallie Mae proporcionaba a los prestamistas un mercado secundario adquiriendo sus carteras de préstamos estudiantiles. Los bancos que habían originado los préstamos ya no tenían que retenerlos en sus libros y, en su lugar, podían vender el riesgo de liquidez a inversores, liberándose así para conceder más préstamos a riesgo cero. Sin embargo, a pesar de estos generosos incentivos a los prestatarios privados, el programa de préstamos garantizados pretendía actuar como un mero suplemento del sistema de becas Pell, que se consideraba el elemento redistributivo más importante de la Ley de Educación Superior. Como explica Michael Mumper, la lógica de la HEA, especialmente después de su reautorización en 1972, «era trasladar una mayor proporción de los costes universitarios de los alumnos de bajos ingresos y sus familias al gobierno federal. Al mantener este espíritu, la ley pretendía aumentar la ayuda disponible para alumnos de bajos ingresos y reducir el volumen de estudiantes que recurrían a préstamos sustituyéndolo por un sistema de becas directas». ⁸⁴ Durante gran parte de los años setenta, el programa de préstamos estudiantiles mantuvo, de hecho, un papel secundario con respecto de las becas, consumía una pequeña proporción del presupuesto general de ayudas universitarias y conservaba un coste más o menos estable.

Sin embargo, con el primer presupuesto de Reagan, la prioridad de las becas frente a los préstamos estudiantiles se invirtió. Mientras demócratas y republicanos se enfrentaban sistemáticamente sobre los detalles del gasto en educación superior y ambos cedían ante el dogma de los presupuestos equilibrados, la capacidad de gasto de las becas estudiantiles disminuía constantemente en relación con las matrículas. Demócratas y republicanos no solían estar de acuerdo acerca de cómo debería organizarse el mercado estudiantil, llegando incluso a invertir sus respectivas posturas sobre las garantías federales para los prestamistas privados entre los años ochenta y noventa; ⁸⁵ sin embargo, encontraron un terreno común en torno a la idea de que el alumnado debería recurrir en primer lugar y de forma más significativa al crédito en lugar de a becas directas para financiar sus estudios. En 1989, el valor real de las becas Pell se había reducido de forma dramática y los préstamos habían sustituido a las becas como fuente principal de financiación federal para las ayudas estudiantiles. ⁸⁶

El auténtico punto de inflexión se dio en los años noventa, cuando los gobernadores estatales comenzaron a sufrir los efectos a largo plazo de la decisión federal en sus presupuestos. Hasta entonces, la mayoría de estados

⁸⁴ *Ibidem*, p. 84.

⁸⁵ Mettler, *Degrees of Inequality...*, p. 76.

⁸⁶ *Ibidem*, p. 53.

habían compensado el declive de la financiación federal aumentando sus contribuciones a las universidades públicas. Sin embargo, en los años noventa, los gobiernos estatales —muchos de los cuales habían aprobado techos de gasto tras las revueltas fiscales de los años setenta— se vieron obligados a priorizar cada vez más entre las distintas opciones de gasto público que competían entre sí. En su mayor parte, priorizaron Medicaid —cuyos costes Reagan había devuelto parcialmente a los estados—, la educación primaria y secundaria y los centros penitenciarios por encima de la educación superior.⁸⁷ Las universidades públicas como Berkeley, en las que antes la matrícula era gratuita, no tuvieron más remedio que aumentar las tasas y enviar al alumnado al floreciente mercado de los préstamos estudiantiles; aplicando de forma efectiva la fórmula ideal de financiación de Milton Friedman para la educación superior.

A lo largo de los años ochenta y noventa, el Congreso respondió a la crisis presupuestaria de la educación superior ampliando la disponibilidad de crédito. En varios momentos, se aumentaron los límites para los préstamos estudiantiles, se relajaron los criterios de admisión y se crearon soluciones de préstamo de alto riesgo completamente nuevas para los alumnos que habían agotado las demás opciones. Los alumnos que habían pedido préstamos hasta el límite máximo de la garantía federal, ahora podían solicitar préstamos federales no subvencionados con condiciones menos favorables.⁸⁸ Asimismo, se dirigía cada vez más a los alumnos a los préstamos PLUS, una opción creada por el presidente Carter en 1980 que permitía que los progenitores solicitaran préstamos federales en nombre de sus hijos, aunque con tipos de interés más altos de los que se reservaban para los préstamos estudiantiles estándar. El programa PLUS, que hasta ahora había sido el último recurso para los alumnos que habían agotado el resto de fuentes de financiación y no podían obtener un préstamo estudiantil privado, se amplió para incluir a estudiantes universitarios y profesionales en julio de 2006.⁸⁹ A finales de los años noventa, los alumnos también

⁸⁷ *Ibidem*, pp. 120-127.

⁸⁸ Hasta 1992, todos los préstamos federales para estudiantes estaban subvencionados, lo que significa que el gobierno pagaba los intereses del préstamo mientras el estudiante estaba matriculado. En 1992, el Congreso aprobó la creación de un programa de préstamos no subvencionados al que podía acceder un mayor número de estudiantes, pero que no cubría los costes de los intereses antes de la graduación. Richard Fossey y Mark Bateman, *Condemning Students to Debt: College Loans and Public Policy*, Nueva York, Teachers College Press, 1998, p. 11.

⁸⁹ Rachel Fishman, *The Parent Trap: Parent PLUS Loans and Intergenerational Borrowing. Policy Paper, January 08*, Washington DC, New America/Education Policy Program, 2014. Hasta hace poco, no había límites de préstamo fijos para el programa de préstamos PLUS y se hacían esfuerzos mínimos para comprobar el historial crediticio de los prestatarios. En 2011 se introdujeron cambios para hacer más estricta la comprobación del crédito, ya que se hizo evidente la cantidad de padres que se veían agobiados por cantidades intolerables de deuda estudiantil que no podían eliminarse ante una quiebra.

podían solicitar un préstamo a cualquier otro de los prestamistas privados que habían surgido para atender la demanda de los consumidores —entre ellos el recién privatizado programa Sallie Mae, que no tardó en dominar el mercado—. Estos nuevos prestamistas privados no recibían garantías federales ni subsidios, pero podían explotar el insaciable apetito inversor de bonos de titulización de activos —incluidos los bonos de titulización de préstamos estudiantiles o SLABS— para compensar sus riesgos y obtener beneficios extraordinarios.⁹⁰ Al emplear estructuras de préstamos variables y tipos de interés desorbitados para tasar los riesgos de impago de los prestatarios *subprime*, y apoyándose en la titulización para desprenderse del riesgo de liquidez a largo plazo, los prestamistas estudiantiles privados pudieron incluir a todos los estudiantes en sus carteras —siempre que cada uno pagara su precio—.⁹¹

Con cada ronda de debates sobre el programa de préstamos estudiantiles y cada reautorización de la HEA, los prestamistas obtenían mayores concesiones del Congreso. Cada vez que los prestamistas conquistaban un nuevo terreno, se restringían las protecciones a los prestatarios estudiantiles, convirtiendo la deuda estudiantil en la más traicionera forma de exposición de los hogares a finales de siglo. Tras su privatización en 1995, Sallie Mae convenció al Congreso de que aprobara el cobro de comisiones y penalizaciones exorbitadas para estudiantes morosos, lo que hacía mucho más rentable para los prestamistas dejar que los alumnos incurrieran en impagos, que ofrecerles alguna opción de refinanciación o aplazamiento.⁹²

⁹⁰ Durante sus primeros ocho años de existencia, Sallie Mae vendió títulos de deuda compuestos por préstamos estudiantiles en los mercados secundarios. Con la aprobación de las enmiendas de la HEA de 1980, se le permitió titular sus activos financieros, es decir, emitir valores sintéticos que mezclaban diferentes perfiles de prestatarios en tramos clasificados por riesgo. Véase Susanne Soederberg, «Student Loans, Debtfare and the Commodification of Debt: The Politics of Securitization and the Displacement of Risk», *Critical Sociology*, vol. 40, núm. 5, 2014, p. 696. Al igual que otros valores respaldados por activos, las ventas de SLABS no despegaron realmente hasta después de 1993, y se dispararon a finales de la década, ya que las políticas de la Reserva Federal de Greenspan estimularon el auge del crédito al consumo. Véase la gráfica que registra las ventas de SLABS en Chadwick Matlin, «Student Loan Bubble Babble», *The Great Debate Blog*, Reuters edición EEUU, 7 de marzo de 2013, disponible on line en <http://blogs.reuters.com/great-debate/2013/03/07/student-loan-bubble-babble/> (consultado por última vez el 10 de noviembre de 2015). Cuando Sallie Mae se privatizó en 1995, pasó a dominar el mercado de valores respaldados por préstamos estudiantiles, emitiendo valores respaldados tanto por préstamos privados como federales.

⁹¹ En 2012, un grupo de inversores presentó una demanda colectiva contra Sallie Mae, alegando que en el punto álgido del boom del crédito al consumo en 2006-2007, había relajado sus normas de préstamo para reforzar su cartera de préstamos *subprime* de alto interés. Aunque Sallie Mae ofreció un acuerdo a los inversores, no se ofreció ninguna compensación a los prestatarios *subprime*. Andrew Leonard, «Selling Out Students», *Salon*, 8 de junio de 2012, disponible on line en http://www.salon.com/2012/06/08/selling_out_students/ (consultado por última vez el 10 de noviembre de 2015).

⁹² Alan Michael Collinge, *The Student Loan Scam: The Most Oppressive Debt in US History—and How We Can Fight Back*, Boston (MA), Beacon Press, 2009, p. 14.

La trascendental reforma de la HEA de 1998, aprobada con el visto bueno final de los demócratas, eliminó todas las cláusulas de limitación que regulaban el cobro de deuda estudiantil y eximía a este tipo de deuda de las leyes estatales de usura. Estas enmiendas también acabaron con el periodo de amnistía vigente para los estudiantes prestatarios en quiebra.⁹³ Dejaba de contemplarse cualquier tipo de exención de los préstamos estudiantiles en caso de bancarrota. En 2005, la Ley de Prevención del Abuso en Caso de Quiebra y Protección del Consumidor amplió esta provisión también a los préstamos privados, haciendo que los préstamos estudiantiles fueran la única categoría de deuda en la historia de Estados Unidos que no se condonaría en caso de bancarrota. Así, a medida que se ampliaba el programa de préstamos estudiantiles, el riesgo se trasladaba cada vez más de los prestamistas al Estado y a los estudiantes.

Durante los años noventa, la ampliación del mercado de préstamos estudiantiles llegó a entenderse como parte de un programa político mayor, el de la democratización de las finanzas. Lo que había surgido como una solución *ad hoc* en los años de Reagan, resultado más que otra cosa del bloqueo legislativo, ahora se reformulaba como elemento deliberado de la política social. Para los principales asesores económicos de Clinton, el presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan y el secretario de la Tesorería Robert Rubin, la ampliación del crédito era la única forma creíble y sostenible de financiar la agenda política de la Tercera Vía de Clinton. Así, donde Reagan y George H. W. Bush habían practicado la austeridad en la economía de elección pública, adhiriéndose rápidamente a la idea de que el gasto gubernamental en bienes públicos como la educación debería mantenerse al mínimo fueran cuales fueran los costes; en los años noventa, Greenspan y Rubin desarrollaron un argumento sistemático sobre por qué la inversión pública limitada podría, de hecho, generar crecimiento y cómo se mitigarían sus inevitables costes sociales. Poco después de su elección, Greenspan y Rubin lograron convencer a Clinton de que la inversión pública debía reducirse todo lo posible para lograr tipos de interés bajos a largo plazo, que a su vez generarían una abundancia de crédito barato y promoverían el endeudamiento de los consumidores más sensibles a los intereses.⁹⁴

⁹³ El Congreso aprobó una ley que declaraba los préstamos estudiantiles no eximibles en caso de quiebra ya en 1976, pero preveía un periodo de amnistía de cinco años (posteriormente ampliado a siete). Véase Collinge, *The Student Loan Scam...*, pp. 14-15.

⁹⁴ Douglas W. Elmendorf, Jeffrey B. Liebman y David W. Wilcox, «Fiscal Policy and Social Security Policy during the 1990s», en Jeffrey Frankel y Peter Orszag, *American Economic Policy in the 1990s*, Cambridge (MA), MIT Press, 2002, pp. 61-119; Robert Rubin, «Comments: Fiscal Policy and Social Security Policy during the 1990s», en *ibídem*, pp. 130-135. Durante su campaña, Clinton prometió reducir el déficit presupuestario y aumentar la inversión pública en «capital humano». Rubin y Greenspan no tardaron en convencerle de que se concentrara en su estrategia de reducción del déficit.

Las sensibilidades de los tenedores de obligaciones desempeñaron un papel fundamental en la comprensión de la economía pública. Se decía que quienes invertían en bonos del Tesoro estadounidense sufrían algún tipo de trastorno de estrés postraumático heredado de los días de gran inflación de los años setenta. Los tenedores de obligaciones tenían miedo a que cualquier decisión de aumentar el nivel de inversión pública en educación, sanidad o infraestructuras —todas incluidas en las promesas de campaña de Clinton— inflaría los salarios y los precios y reduciría sus rendimientos en inversiones, como había pasado en los años setenta.⁹⁵ Más de una década después del shock Volcker, los tenedores de bonos todavía exigían una prima de inflación en forma de tipos de interés altos a largo plazo, una forma de protegerse ante el peligro siempre presente de que el Estado pudiera invertir en su propia ciudadanía.

No obstante, Greenspan creía que tenía una solución que satisfaría a todas las partes. Si se podía persuadir a los tenedores de bonos de que el gobierno no gastara en servicios públicos y no interviniera para aumentar los salarios, obtendría la confianza suficiente para dejar que los tipos de interés a largo plazo cayeran. Esto supondría un beneficio inmediato para los trabajadores porque generaría un boom de crédito al consumo que les compensaría por el encarecimiento de la educación, los elevados costes sanitarios y los salarios estancados.⁹⁶ En lugar de acceder a los servicios mediante salarios más altos e inversión pública, como habían hecho en los años sesenta, los trabajadores aceptarían sueldos precarios para acceder a un crédito abundante. En lugar de que el gobierno recurriera al déficit para gastar en servicios públicos, un escenario que no gustaba a los tenedores de deuda del gobierno estadounidense, el consumidor individual recurriría a la deuda para adquirir esos mismos servicios. Greenspan consideró que la expansión del crédito al consumo era tanto una consecuencia natural como una solución a la contención del gasto público. La austeridad fiscal y la abundancia de crédito iban de la mano, una no podía existir sin la otra. El *Comptroller of the Currency* [Interventor de la Moneda] de Clinton, Eugene A. Ludwig, no tardó en duplicar esta estrategia de «democratización del crédito» y predecir que neutralizaría las latentes desigualdades de la sociedad estadounidense.⁹⁷

Monica Prasad realizó un interesante trabajo sobre los resultados reales de este cambio de políticas; investigó datos comparativos sobre el gasto y la deuda en los hogares. Basándose en un sólido corpus bibliográfico con

⁹⁵ Bob Woodward, *The Agenda: Inside the Clinton White House*, Nueva York, Simon & Schuster, 1994, pp. 69-70; Bob Woodward, *Greenspan's Fed and the American Boom*, Nueva York, Simon & Schuster, 2000, p. 96.

⁹⁶ *Ibidem*.

⁹⁷ Eugene A. Ludwig, «The Democratization of Credit and the Future of Community Development», NR 96-21. Discurso ante la Conferencia de Desarrollo Comunitario, Arlington, Virginia, 23 de febrero de 1996.

el que se proponía teorizar sobre las relaciones históricas entre los Estados de bienestar y el crédito al consumo, Prasad descubrió que ambos conceptos se igualan, los países que aplicaron recortes más sistemáticos al gasto social después de los años ochenta son también aquellos en los que más aumentó el endeudamiento de los hogares.⁹⁸ En Estados Unidos, apuntaba que la deuda doméstica había adquirido de forma muy clara el papel sustituto de los bienes públicos; quienes obtenían unos ingresos medios utilizaban el crédito para financiar la formación universitaria y la salud, no bienes de lujo. En último término, Prasad entendía la democratización del crédito como «una forma alternativa de redistribución» que se distinguía del modelo de inversión pública keynesiano exclusivamente en su lógica temporal.⁹⁹ Deberíamos tener cuidado y evitar una interpretación demasiado teleológica sobre las virtudes del crédito frente al bienestar, advertía, porque «no es evidente cuál de estos métodos, redistribución para el futuro frente a la redistribución en el presente, tendría más sentido».¹⁰⁰ Además, la «lógica del Estado de bienestar, de que las inversiones públicas productivas generan crecimiento y por lo tanto cubren sus costes, no es tan diferente de la lógica del crédito» y procede de «los mismos planteamientos sobre crecimiento económico que el keynesiano federal».¹⁰¹ En ambos modelos, el gasto deficitario impulsa el crecimiento productivo, solo cambia el escenario, que pasa de lo público a lo privado y del Estado al hogar.¹⁰²

Sin embargo, Prasad subestima ampliamente las diferencias de distribución entre el gasto deficitario público y privado. De forma más evidente, el crédito, a diferencia de una beca, no es una transferencia de ingresos: no anula los costes personales de la educación universitaria, sino que simplemente los aplaza hasta una fecha posterior. Además, el crédito tiene un precio más caro para la población pobre, incluso cuando está subvencionado por el gobierno. Asumiendo la misma carga de deuda inicial, un alumno sin bienes ni ahorros tiene más probabilidades de tener que aplazar, refinanciar o incumplir un préstamo, acumulando una carga temporal

⁹⁸ Monica Prasad, *The Land of Too Much: American Abundance and the Paradox of Poverty*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2012, pp. 227-245. Estos resultados se mantienen incluso cuando los países han tenido niveles comparables de desregulación financiera.

⁹⁹ *Ibidem*, p. 239.

¹⁰⁰ *Ibidem*.

¹⁰¹ *Ibidem*.

¹⁰² Esta observación ha llevado a más opiniones a caracterizar este nuevo régimen financiero como una forma de «keynesianismo privatizado». Véase Colin Crouch, *The Strange Non-Death of Neoliberalism*, Cambridge, Polity Press, 2011, pp. 97-124. Crouch observa que «en lugar de que los gobiernos se endeudaran para estimular la economía, lo hicieron los individuos y las familias, incluso algunas bastante pobres» (p. 114). El relato de Crouch sobre este nuevo régimen financiero es esclarecedor y más atento a los efectos distributivos de lo que suele ser. Sin embargo, prefiero evitar el término «keynesianismo privatizado», ya que parece sugerir un simple desplazamiento de los métodos keynesianos y desalienta la investigación de las diferencias más destacadas.

mucho mayor de pagos de intereses que un alumno que puede pagar a tiempo. El precio que un alumno con bajos ingresos tiene que pagar para obtener un título universitario es mucho mayor que el de un alumno que parte de la riqueza familiar. Y al contrario de los supuestos de la teoría de Friedman del capital humano, la media salarial de las mujeres y las minorías entre el alumnado sigue estando por detrás de la de sus compañeros universitarios, incluso cuando se corrige la experiencia laboral.¹⁰³ Esto significa que estos grupos tendrán que apartar una mayor proporción de sus salarios mensuales para pagar su deuda estudiantil. En resumen, la generalización de los préstamos estudiantiles actúa como una suerte de *impuesto regresivo* colocando una carga proporcionalmente mayor a los estudiantes con menores ingresos mientras que, de puertas para afuera, se habla de los ideales de la inclusión democrática.

Sin embargo, más allá de todo esto, el modelo de deuda privada también sirve para restaurar el papel de la riqueza familiar al determinar el precio de la inclusión. A día de hoy, la deuda estudiantil es cada vez más un asunto familiar, que mantiene a progenitores, hijos y familiares inmersos en redes de obligaciones económicas durante décadas. Dado que no existe una fuente evidente de garantía para la deuda estudiantil, los préstamos privados o los federales no garantizados transforman la dependencia íntima de la familia en una suerte de garantía sustituta, comparable a las formas de garantías basadas en el parentesco que la antropología identifica en la microfinanciación.¹⁰⁴ A medida que cada vez más estudiantes optan por los préstamos Parent PLUS, los progenitores con ingresos bajos y sueldos precarios se ven sepultados por la deuda estudiantil no condonable hasta bien entrada la vejez.¹⁰⁵ La mayoría de los préstamos privados también adquieren la forma de deuda intergeneracional, dado que suelen exigir que un progenitor u otro familiar actúe como cofirmante. Igual que otros préstamos estudiantiles, estas deudas no son exonerables en caso de quiebra y se pueden embargar de los pagos de la Seguridad Social, una carga extraordinaria para progenitores ancianos que puede que no tengan otra fuente de ingresos. En muchos casos, hasta que un alumno no incurre en impago los familiares no saben que son completamente responsables

¹⁰³ Mumper, *Removing College Price Barriers...*, p. 132. Andrew Ross ofrece cifras actualizadas sobre el rendimiento esperado de la inversión que confirman estos resultados. Véase Ross, *Creditocracy and the Case for Debt Refusal...*, pp. 140-141.

¹⁰⁴ Caroline E. Schuster, *Social Collateral: Women and Microfinance in Paraguay's Smuggling Economy*, Berkeley, University of California Press, 2015.

¹⁰⁵ Marian Wang, Beckie Supiano y Andrea Fuller, «No Income? No Problem! How the Government is Saddling Parents with College Loans They Can't Afford», *Propublica*, 4 de octubre de 2012, disponible on line en <http://www.propublica.org/article/how-the-govt-is-saddling-parents-with-college-loans-they-cant-afford> (consultado por última vez el 10 de noviembre de 2015).

de la deuda.¹⁰⁶ Y solo cuando un estudiante fallece de forma prematura los progenitores descubren que la deuda es heredable.¹⁰⁷ En resumen, si la inversión pública en educación superior había actuado en su día como un «impuesto a la herencia» liberando a los estudiantes de su dependencia de la riqueza familiar, el modelo de deuda privada de financiación universitaria permite que todos los estudiantes asistan a la universidad y al mismo tiempo les devuelve a las obligaciones económicas de la familia.

No sirve de nada entonces que podamos reducir nuestras obligaciones con las altas finanzas valorizando las «deudas [...] con nuestras amistades, familiares o comunidad», como nos aconseja el movimiento Strike Debt, dado que el mercado global de deuda doméstica titulizada depende íntegramente de las obligaciones íntimas establecidas entre nosotros, en concreto en el plano de la familia.¹⁰⁸ El hecho de que no estemos dispuestos a abandonar esas obligaciones ejerce un papel de anclaje muy útil para el crédito titulizado, ya que garantiza que los consumidores deudores permanezcan por lo general atados a un contrato mucho más tiempo que los profesionales del mercado. Esta expectativa se hizo explícita tras la crisis de las *subprime*, cuando quienes habían invertido en bonos de titulización hipotecaria empezaron a temer que los propietarios de viviendas «burbuja» se vieran tentados a abandonar sus deudas con la misma ecuanimidad que mostraban los inversores profesionales. En el intenso debate que siguió, quedó claro que todo el edificio de las finanzas domésticas titulizadas se basaba en el supuesto de que los consumidores inversores cotidianos a largo plazo se comportarían de forma diferente a los inversores profesionales, incluso cuando se les animaba a verse como titulares de activos de pleno derecho. En el momento de la crisis, e incluso mientras los inversores profesionales procedían a liquidar todos sus compromisos a largo plazo, lo que se exigía al deudor personal era un apego no estratégico, y en última instancia sentimental, a un activo no líquido de valor decreciente (la vivienda). Mientras que los inversores profesionales siempre han demostrado una clara «preferencia por la liquidez» a favor de impagos estratégicos, el deudor personal está obligado a tratar la inversión contractual como si fuera una obligación familiar no contractual, de forma «permanente e indisoluble, como

¹⁰⁶ Tara Siegel Bernard, «The Many Pitfalls of Private Student Loans», *New York Times*, 4 de septiembre de 2015, disponible on line en http://www.nytimes.com/2015/09/05/your-money/student-loans/the-many-pitfalls-of-private-student-loans.html?_r=0 (consultado por última vez el 10 de noviembre de 2015).

¹⁰⁷ Los padres cuyo hijo o hija ha fallecido descubren que siguen siendo responsables de los costes de su educación. Blake Ellis, «Grieving Parents Hit with \$200,000 in Student Loans», *CNN Money*, 28 de julio de 2014, disponible en <http://money.cnn.com/2014/07/28/pf/parents-student-loans/> (consultado por última vez el 10 de noviembre de 2015).

¹⁰⁸ «Queremos una economía en la que nuestras deudas sean con nuestros amigos, familias y comunidades, y no con el 1 %». Disponible on line en <http://strikedebt.org/> (consultado por última vez el 13 de abril de 2016).

el matrimonio, excepto en caso de fallecimiento», una opción que Keynes consideró brevemente y de forma jocosa como solución a las crisis de liquidez de los mercados financieros.¹⁰⁹ El hecho de que la deuda estudiantil suele tomar la forma de deuda intergeneracional y familiar y que solo este tipo de deuda esté excluida de las protecciones al consumidor, como la quiebra, significa que esta lógica opera de forma aún más aguda aquí que en el mercado hipotecario.

Sin duda, la evolución de las ayudas financieras estudiantiles ha cumplido con creces el llamamiento de William Bennet a favor de una mayor «responsabilidad parental» en la financiación de la educación universitaria. La necesidad de responsabilidad familiar se aplica a todos los niveles de la escala de clase, pero se manifiesta de forma especialmente punitiva en el alumnado más pobre. Para los hogares más ricos, los costes de la educación universitaria se consideran ahora una inversión familiar rutinaria comparable al pago inicial de una primera vivienda. Estas familias pueden acceder a la opción más barata de pagar los costes de la formación universitaria por adelantado u optar por préstamos de bajo interés utilizando el patrimonio de la vivienda como garantía. Al contrario, los estudiantes con ingresos bajos, tienen que pedir mayores préstamos y a precios más altos para costear los mismos estudios. Un informe de Demos de 2015 reveló que el 84 % de los estudiantes universitarios que eran lo suficientemente pobres como para recibir becas Pell terminaban sus estudios endeudados, comparado con el 46 % que no recibía ninguna beca.¹¹⁰ Dado que la clase tiene un perfil racial distinto en Estados Unidos, estos datos se corresponden de cerca, aunque no de manera exacta, con las cifras que comparan al alumnado blanco con el afroamericano o el hispano. Así, un estudio de 2013 del Urban Institute señaló que existía el doble de posibilidades de que los alumnos afroamericanos o hispanos adquirieran deudas de préstamos estudiantiles que los estudiantes blancos. En general, un 16 % de blancos incurrió en deudas por préstamos estudiantiles, comparado con un 34 % de afroamericanos y un 28 % de hispanos.¹¹¹ Además, es más probable que el alumnado afroamericano recurra a un préstamo privado después de haber agotado la beca Pell y las opciones de préstamos federales, y que se les apliquen tipos de interés mayores en dichos préstamos.¹¹²

¹⁰⁹ John Maynard Keynes, *The General Theory of Employment, Interest and Money*, Londres, Macmillan, 1936, p. 160 [ed. cast.: *Teoría general del empleo, el interés y la dinero*, Madrid, FCE, 2006]. Véase de la autora, «The Strategy of Default — Liquid Foundations in the House of Finance», *Polygraph: An International Journal of Culture and Politics*, núm. 23/24, 2013, pp. 79-96, para un análisis más detallado de este debate.

¹¹⁰ Mark Huelsman, *The Debt Divide: The Racial and Class Bias Behind the «New Normal» of Student Borrowing*, Nueva York, Demos, 2015, p. 2.

¹¹¹ Caroline Ratcliffe y Signe-Mary McKernan, *Forever in Your Debt: Who Has Student Loan Debt, and Who's Worried?* Washington DC, The Urban Institute, 2013, p. 2.

¹¹² Consumer Financial Protection Bureau, *Private Student Loans*, Washington DC, Department of Education, 2012, p. 41; Mekela Panditharatne, «What Color Is Your

Con cada reelaboración de la Ley de Educación Superior de 1965, los sucesivos gobiernos después de Reagan han transformado profundamente la estructura de la financiación universitaria sin renunciar nunca formalmente a la promesa democrática de los años sesenta. Hoy en día las universidades proclaman bien alto su compromiso con la diversidad. Pero mientras tanto, la democratización mediante la inversión pública ha sido sustituida por la democratización mediante el crédito al consumo, trasladando con gran eficiencia los costes de la diversidad de vuelta al alumno particular y su familia. Lo bonito del crédito titulizado es que *a priori* no excluye a nadie. Al abstraerse de la estratificación de clases actualmente existente, es capaz de incorporar todas las diferencias de forma preventiva: se limita a tasarlas con tipos variables y a aplazar el reembolso hasta algún momento inimaginable en el futuro. En principio, todos tenemos acceso a la formación universitaria, sin importar lo que ganemos o ganen nuestros padres. Aun así, el crédito privado no solo oscurece los efectos de la clase, sino que además exalta las desigualdades obligando a quienes no tienen ingresos o garantías a pagar mayores tasas por el mismo servicio. Cuando los costes del crédito a largo plazo empiezan a materializarse y a acumularse, los alumnos se vuelven a enfrentar a las insuperables resistencias de la estratificación de clase, raza y género. Las divisiones de la riqueza familiar se reafirman con toda su fuerza histórica.

In loco parentis redux

Mientras el neoliberalismo de las escuelas de Chicago y de Virginia luchaba por responder al desafío del nuevo radicalismo estudiantil, el movimiento neoconservador mucho más reciente también se enfrentaba por primera vez a las protestas estudiantiles de los años sesenta. De hecho, 1965 se puede identificar como una posible fecha del nacimiento del neoconservadurismo, el año en el que los profesores Nathan Glazer y Seymour Martin Lipset, antiguos trotskistas, hicieron públicas sus reservas sobre el movimiento por la libertad de expresión de Berkeley y la contracultura de la Nueva Izquierda.¹¹³ Gran parte de los primeros escritos neoconservadores

Student Loan?», *Huffington Post*, 17 de enero de 2015, disponible on line en http://www.huffingtonpost.com/mekela-panditharatne/what-color-is-your-studen_b_6485452.html?ir=Australia (consultado por última vez el 10 de noviembre de 2015).

¹¹³ Justin Vaïsse, *Neoconservatism: The Biography of a Movement*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2010, p. 73. Glazer y Lipset publicaron colecciones de sus distintos escritos sobre las protestas estudiantiles. Véase Nathan Glazer, *Remembering the Answers: Essays on the American Student Revolt*, Nueva York, Basic Books, 1970, y Seymour Martin Lipset, *Rebellion in the University: A History of Student Activism in America*, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1972. Para un relato completo de la «guerra» neoconservadora y conservadora cultural contra la academia de izquierdas, véase Andrew Hartman, *A War for the Soul of America: A History of the Culture Wars*, Chicago, University of Chicago Press, 2015, pp. 38-69, 222-252.

se dirigían contra el auge de una supuesta nueva clase, forjada en los fermentos políticos e intelectuales de la universidad fordista más tardía. Vista en términos objetivos, esta nueva clase se parecía mucho a la nueva generación de trabajadores del conocimiento recién graduados, aclamada por perfiles como el de Clark Kerr como el futuro del Estados Unidos posindustrial. Sin embargo, el neoconservadurismo no tardó en darse cuenta de que esta generación sería mucho menos dócil que su predecesora y estaría mucho menos dispuesta a aceptar las jerarquías sociales de la sociedad fordista de lo que Kerr parecía esperar. Temían que esta nueva clase de trabajadores del conocimiento, habiéndose formado en el crisol de la Nueva Izquierda, se propusiera dinamitar los centros de poder de la vida política estadounidense, colándose en los tribunales, los colegios, las universidades y en la burocracia gubernamental con sus ideas incendiarias.

A lo largo de las décadas siguientes, el neoconservadurismo concentró sus energías en atacar la discriminación positiva, que se percibía como una amenaza a la tradición estadounidense de la meritocracia, y las nuevas disciplinas militantes de estudios de mujeres, estudios negros y estudios étnicos, que se denunciaron como una amenaza a la tradición humanista occidental y sus verdades universales. Estos ataques resultaron infatigables, y alcanzaron nuevas cotas de legitimidad política en los años ochenta, cuando el segundo secretario de educación de Reagan, William Bennet, publicó su informe sobre las Humanidades en la educación superior, *To Reclaim a Legacy* [Reclamar un legado].¹¹⁴ En este responsabilizaba al profesorado y a la administración universitaria de una «pérdida de fe colectiva» en la tradición occidental: en lugar de defender esta tradición de las embestidas del activismo estudiantil, las universidades habían permitido que las preocupaciones particulares de grupos minoritarios de interés profanaran y trivializaran el currículo.¹¹⁵

Aun cuando el neoconservadurismo y sus círculos afines lograron un considerable éxito a la hora de reducir la discriminación positiva en los años noventa, incluso Irving Kristol se vio forzado a reconocer que la izquierda había ganado las guerras culturales en el frente epistémico.¹¹⁶ A pesar de los grandes esfuerzos del conservadurismo cultural por expulsar a la academia de izquierdas de sus putativos baluartes en las Humanidades, algo había cambiado de forma irreversible en la estructura de las disciplinas que eludía la afilada fuerza de la nostalgia neoconservadora. En último término, el legado más duradero del movimiento estudiantil de los años sesenta fue la creación de las nuevas disciplinas minoritarias que tanto

¹¹⁴ William J. Bennett, *To Reclaim a Legacy: A Report on the Humanities in Higher Education*, Washington DC, National Endowment for the Humanities, 1984.

¹¹⁵ *Ibidem*, p. 19.

¹¹⁶ Para un relato sobre el avance de la discriminación positiva, véase Newfield, *Unmaking the Public University*, pp. 92-106. Sobre la admisión de la derrota por parte de Kristol, véase Irving Kristol, «Faith a la Carte», *Times Literary Supplement*, 26 de mayo de 2000, p. 14.

despreciaba William Bennett. Estas epistemologías minoritarias soportaron con valentía los frontales ataques del neoconservadurismo, aunque quizás solo lo hicieran porque, al tiempo, habían demostrado ser útiles a un nuevo tipo de capitalismo académico. Si «en su día las formas de poder disciplinaron la diferencia con los conceptos universalizadores de canonicidad, nacionalidad o economía», escribe Roderick Ferguson, «[ahora] surgían otros planteamientos de poder que disciplinarían la identidad nacional y el mercado a través de una consideración aparentemente alternativa de la diferencia y mediante una revisión del canon».¹¹⁷

A medida que estos experimentos epistemológicos se incorporaban al nuevo currículo universitario, las condiciones económicas que habían permitido que las minorías desafiaran a la institución se revisaron profundamente, sin que provocaran la cruda exclusión de tiempos anteriores, sino más bien formas de inclusión altamente condicionadas basadas en la deuda privada. Lo que Ferguson llama las «interdisciplinas» sobrevivieron, incluso prosperaron en algunos casos, con la condición de que no alteraran en modo alguno las premisas del acceso ampliado a la educación.¹¹⁸ El alumnado puede especializarse en estudios afroamericanos o étnicos, incluso cuando las estrategias de inversión pública que permitieron que las minorías de bajos ingresos accedieran a la universidad en primera instancia se vieran radicalmente anuladas. Otros alumnos pueden licenciarse en estudios *queer*, al tiempo que la acreditación institucional de esta formación depende profundamente de la riqueza parental y de los mecanismos familiares de obligación económica. En este contexto, no sorprende que cierta clase de políticas *queer* no encuentren ninguna contradicción entre sus demandas por la sexualidad antinormativa y el derecho a formas legalmente reconocidas de vida familiar. El planteamiento aparentemente paradójico del matrimonio y el *queerismo* refleja perfectamente el proceso mediante el cual el capital ha absorbido la crítica antinormativa de los movimientos de liberación de finales del fordismo al tiempo que canaliza sus energías bajo el imperativo neoliberal/neoconservador de la responsabilidad de la familia privada. Puede que el neoconservadurismo haya perdido las guerras culturales en un frente, cediendo a la larga la restauración de las epistemologías no normativas de la universidad fordista, pero en otro aspecto ha triunfado. William Bennett fue incapaz de reformar el currículo de las Humanidades, pero tuvo mucho más éxito en sus intentos de restaurar la responsabilidad parental como condición para el acceso a la universidad. Juntos, el neoliberalismo y el neoconservadurismo ganaron la batalla en ese frente en concreto. A la luz de estas tendencias, no debería sorprendernos descubrir que *in loco parentis* esté volviendo a los campus universitarios, solo que de una forma ligeramente distinta. Tras caer en desuso en la mayoría de instituciones a finales de los

¹¹⁷ Ferguson, *The Reorder of Things...*, p. 6.

¹¹⁸ *Ibidem*, pp. 19-40.

años sesenta, en los años ochenta ha surgido una nueva formulación de *in loco parentis*, irónicamente a instancias de la propia generación del *baby boom* que tanto había contribuido a su desaparición.¹¹⁹ Cada vez más, los padres de alumnos universitarios han empezado a interponer demandas privadas por daños y perjuicios contra las universidades por no cumplir sus funciones de protección de los alumnos ante peligros previsibles, como incidentes durante las novatadas o violaciones en los campus. Apoyándose en el lenguaje de la responsabilidad privada, los demandantes reclamaban que las universidades tomaran medidas preventivas para evitar los incidentes que ocurrían, crearan espacios seguros para los alumnos que habían pagado por ello y ofrecieran las advertencias apropiadas ante los posibles peligros que podrían afrontar los alumnos en el campus. Estas demandas situaban a los progenitores como inversores privados en el futuro capital de sus hijos, y a las universidades en una posición de fideicomiso de estas inversiones; responsables de los daños si sus alumnos se veían perjudicados de algún modo.

La ampliación de las normas de responsabilidad civil a las universidades marcó una profunda transformación de las normas de protección que habían reinado hasta los años sesenta. Durante gran parte del siglo XX, las reglas de *in loco parentis* otorgaban poderes integrales de custodia a las universidades, comparables a los de los progenitores; estaban, en consecuencia, prácticamente exentas de responsabilidad civil. Igual que la familia fordista disfrutaba de amplios derechos de inmunidad ante daños y perjuicios, aislando a los padres de la amenaza de las demandas de sus hijos, la universidad también estaba ampliamente protegida de los litigios. Hoy, sin embargo, la presunción de la inmunidad ante los daños se ha reducido de acuerdo con el cambio de comprensión de la relación de custodia entre padres e hijos, por un lado, y de la administración universitaria y los alumnos, por otro. Lo que en su día se entendía en términos legales como el derecho paternalista de disciplinar y proteger ahora se percibe más bien como una relación de inversión parental que debería estar sujeta a las mismas reglas de responsabilidad civil que aquellas que prevalecen en el mundo de los negocios.¹²⁰ Parece que, *in loco parentis* ahora hablara el idioma del perjuicio personal más que el del paternalismo institucional y las normas disciplinarias.

¹¹⁹ Sobre la recuperación de *in loco parentis*, véase James J. Szablewicz y Annette Gibbs, «Colleges' Increasing Exposure to Liability: The New *In Loco Parentis*», *Journal of Law and Education*, vol. 16, núm. 4, 1987, pp. 453-465.

¹²⁰ Algunos juristas rechazan el argumento de que el aumento de los litigios por daños y perjuicios contra colegios y universidades deba entenderse como una transformación del *in loco parentis*. Véase, por ejemplo, Peter F. Lake, «Rise of Duty and the Fall of *In Loco Parentis* and Other Protective Tort Doctrines in Higher Education Law», *Missouri Law Review*, vol. 64, núm. 1, 1999, pp. 1-28. Lake señala el hecho de que las normas *in loco parentis* tradicionalmente no permitían los litigios por responsabilidad civil para argumentar que la nueva concepción de la responsabilidad civil institucional no tiene nada que ver con esta tradición más antigua. Sin embargo, lo que esta crítica pasa por alto es el cambio paralelo en la comprensión de la relación padre-hijo, que sugiere que el aumento de los litigios por responsabilidad civil contra universidades debería entenderse como una transformación del *in loco parentis*.

El lenguaje político de las minorías del campus está en sorprendente sintonía con estos cambios en la comprensión legal de la responsabilidad institucional. Aunque en la mayoría de los casos no se traduce en un litigio real, un cierto tipo de política de izquierdas parece haber asimilado por completo el imaginario del perjuicio personal definido por el derecho de responsabilidad civil, traduciendo sus conceptos rectores en un elaborado vocabulario de espacios seguros, microagresiones y advertencias de contenido.¹²¹ La exigencia de estar suficientemente informado de los riesgos razonablemente previsibles, después de todo, es una traducción precisa de la innovación del derecho de responsabilidad civil del consentimiento informado, mientras que el espacio seguro cuidadosamente señalado es una forma muy familiar en la que en los últimos años las autoridades públicas y privadas han tratado de prevenir la amenaza de los litigios por daños. Más concretamente, se trata de una política que adopta y radicaliza el lenguaje de un tipo particular de acción de responsabilidad civil, los denominados agravios por ultraje, que ponen en primer plano la imposición intencionada de daños emocionales en lugar de físicos y apelan a medidas de trauma psicológico para establecer la gravedad de un acto determinado. Los agravios por ultraje, una innovación relativamente reciente en el derecho de daños, y que hasta ahora estaba restringida a los márgenes de los litigios civiles, son ahora cada vez más comunes como acciones independientes y parecen estar invadiendo también el territorio antes dominado por los derechos civiles.¹²² Los daños que antes se atribuían a los fenómenos de «discriminación social» o «violencia estructural», se perciben ahora más fácilmente como agravios privados integrados en palabras o imágenes ofensivas. El racismo en el campus, la misoginia y otros tipos de violencia colectiva se redefinen como fuentes de trauma psíquico que pueden depreciar el valor de una educación costosa, por lo que justifican acciones legales o, como mínimo, la pura indignación contra la institución que ha permitido que esto suceda.

Las políticas de ultraje en el campus han sido objeto de implacables caricaturas por la prensa de derechas. De hecho, los opinadores de derechas han sido los primeros en identificar la relación entre el auge de la

¹²¹ El estudio de Wendy Brown sobre los daños sigue siendo pertinente para comprender la política de identidad en la actualidad. Véase Wendy Brown, *States of Injury: Power and Freedom in Late Modernity*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 1995 [ed. cast.: *Estados del agravio. Poder y libertad en la modernidad tardía*, Madrid, Lengua de Trapo, 2019]. Para una perspectiva sobre las formas peculiares de lesión definidas por el derecho privado de daños y la cultura del litigio, véase Sarah S. Lochlann Jain, *Injury: The Politics of Product Design and Safety Law in the United States*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2006, y Martha Chamallas y Jennifer B. Wriggins, *The Measure of Injury: Race, Gender and Tort Law*, Nueva York, New York University Press, 2010.

¹²² Martha Chamallas, «Discrimination and Outrage: The Migration from Civil Rights to Tort Law», *William and Mary Law Review*, vol. 48, núm. 6, 2007, pp. 2115-2187.

cultura del litigio en la sociedad estadounidense en general y lo que perciben como una cultura de la queja entre el alumnado universitario de hoy en día. Defienden que ambos son signos del infantilismo endémico de la izquierda y de una ausencia de responsabilidad personal entre la juventud. Sin embargo, sería difícil negar que los campus universitarios siguen siendo lugares de intensas desigualdades sexuales y raciales, que se manifiestan habitualmente en actos de extrema violencia, y que estas desigualdades son el reverso de una política neoliberal de la diversidad en la que la inclusión sigue estando muy condicionada a la riqueza familiar. Como muchos han señalado, el aumento de los litigios por daños y perjuicios en el Estados Unidos neoliberal es una respuesta comprensible al retroceso de los seguros sociales y otras formas de protección social ante el riesgo; de hecho, representa una de las pocas formas de protección que uno está autorizado a exigir en ese entorno.¹²³ Con la desaparición de la discriminación positiva y la percepción del fracaso de la ley de derechos civiles para reparar la violencia sexual y racial, los litigios por daños y perjuicios son una vía legal que parece ofrecer al menos alguna esperanza de reparación. Posteriormente, su imaginario se ha generalizado (aunque no del todo) en la izquierda.

No obstante hay motivos para cuestionar su promesa política. Hasta la fecha, el impacto más visible del fenómeno de las advertencias de contenido ha sido el cierre de espacios de expresión pública potencialmente perjudiciales, de la misma manera que el aumento de las demandas judiciales por parte de ciudadanos insuficientemente asegurados ha obligado a las autoridades municipales a señalar los parques públicos o a restringir el acceso a otros espacios de hipotético perjuicio. Estas formas de censura preventiva son las que más perjudican a la izquierda, ya que la autoridad moral de la indignación tiene poco impacto en quienes están fuera de sus círculos. La legitimación casi exclusiva del trauma emocional como moneda de cambio de la política de las minorías tiende a fomentar en la izquierda una cultura del litigio interno, donde las voces de quienes desafían el consenso se perciben fácilmente como traumatizantes o abusivas y son rápidamente excomulgadas. Mientras tanto, se oscurece activamente el papel que desempeña la desigualdad económica en la distribución de la violencia de género y racial. Al fin y al cabo, la política de la indignación hace referencia a una lógica del litigio que no puede activarse en la práctica sin una riqueza personal considerable. Los litigios civiles permiten impugnar un menú aparentemente interminable de perjuicios, *excepto* los que se derivan de la extrema pobreza —así, la desigualdad de clase puede registrarse, si acaso, como «clasismo», como una amenaza a una cultura

¹²³ Thomas Frederick Burke, *Lawyers, Lawsuits, and Legal Rights: The Battle over Litigation in American Society*, Berkeley, University of California Press, 2002.

esencialmente de clase trabajadora—. En oposición a las denuncias de la derecha, la indignación emocional se inscribe plenamente en la lógica moral de la responsabilidad personal, limitándose a invertir sus términos para centrarse en la culpa del autor y no en la de la víctima. En este sentido, hace menos referencia a una cultura del agravio generalizada que a una hiperrestricción del espacio de disidencia.

VII

TEOLOGÍA DE LO SOCIAL: EL AUGE DE LA ASISTENCIA SOCIAL BASADA EN LA FE

Las leyes que violan la ley moral son nulas e inválidas y
deben desobedecerse a conciencia.

Richard John Neuhaus, «The End of Democracy?».

LA LIBERTAD RELIGIOSA florece en las prisiones estadounidenses. Tras la aprobación de la legislación sobre «elección caritativa» en 1996, más de una docena de estados han abierto secciones religiosas en centros penitenciarios, al tiempo que muchos otros creaban prisiones de «fe y carácter» dedicadas íntegramente a la formación religiosa. El primer programa estadounidense basado en la fe fue establecido en 1997 por el entonces gobernador, George W. Bush, cerca de Houston, Texas. Conocida como la InnerChange Freedom Initiative [IFI, Iniciativa por el Cambio Interno], era un programa gestionado por los Prison Fellowship Ministries [Ministerios de la Hermandad Penitenciaria] una organización sin ánimo de lucro creada en 1976 por el felón del Watergate Charles «Chuck» Colson, poco después de convertirse al cristianismo evangélico.¹

La unidad de prisiones del IFI fue solo una de las muchas colaboraciones Iglesia-Estado comisionadas por Bush durante sus años como gobernador de Texas; esta formaba parte de su estrategia de recortar el presupuesto estatal, al tiempo que dotaba de propósito moral a las políticas sociales ampliando la asistencia social basada en la fe a todo el sector de los servicios sociales.² Este tipo de colaboración asignaba la responsabilidad del alojamiento, la alimentación y la seguridad básica al Departamento de Justicia Penal de Texas, mientras que dejaba que el IFI diseñara, pusiera en marcha y financiara los programas de los reclusos, un reparto del trabajo calculado y dirigido a proteger al programa de la acusación de no respetar

¹ Kendrick Oliver, «Attica, Watergate, and the Origin of Evangelical Prison Ministry, 1969-1975», en Axel Schäfer, *American Evangelicals and the 1960s*, Madison, University of Wisconsin Press, 2013, pp. 121-138.

² Para un relato de la iniciativa de Bush basada en la fe en Texas, véase Texas Freedom Network, *The Texas Faith-Based Initiative at Five Years: Warning Signs as President Bush Expands Texas-Style Program at National Level*, Austin, Texas Freedom Network, 2002.

la separación Iglesia-Estado.³ El IFI se describe a sí mismo como un «programa de prisiones de 24 horas al día y 7 días a la semana [...] basado en la Biblia, centrado en Cristo y revolucionario».⁴ Se ofrece a los reclusos que les faltan hasta dos años para salir de prisión y se divide en tres fases. La primera fase, que dura doce meses, inicia al recluso en un curso intensivo sobre las Escrituras y la teología cristiana, combinado con clases de «habilidades vitales» centradas en la gestión de la ira, la preparación para el trabajo y la formación en paternidad responsable.⁵ En lo que equivale a una suerte de «política testimonial», tomando el término acuñado por Tanya Erzen, se espera que los participantes en esta fase manifiesten una profesión pública de fe en la que reconozcan sus pecados y acepten a Jesús como su salvador.⁶ En la segunda fase del programa, los reclusos deben realizar tareas de servicio comunitario para Habitat for Humanity —una organización benéfica que construye casas para personas de bajos ingresos— o para alguna otra organización sin ánimo de lucro basada en la fe. En este punto también se anima a los presos a que entren en contacto con las víctimas de sus crímenes y busquen su perdón, un proceso de «justicia reparativa» que resulta central en la visión de Chuck Colson de la reinserción cristiana. El asesoramiento del IFI acompaña al recluso en la vida después de su salida de la cárcel, asignándole un mentor cristiano que le ayuda con las tareas prácticas de encontrar un trabajo y una casa y con el objetivo a largo plazo de evitar el pecado.

La participación en el IFI es voluntaria, sin embargo acarrea una serie de privilegios.⁷ Los presos que participan en el programa tienen acceso a celdas privadas con su propia llave, su propio baño y derecho a recibir visitas familiares. Participar les garantiza una plaza en las asignaciones laborales una vez en libertad y las juntas de libertad condicional lo ven como algo favorable. También es uno de los pocos programas «educativos» que ahora se ofrecen en el sistema penitenciario estatal, el cual ha reducido drásticamente la financiación de todo tipo de formación profesional. Bill Clinton abolió brutalmente el sistema federal de becas Pell, que en su día había financiado el acceso de los reclusos a la educación superior como parte de

³ Esto no quiere decir que las prisiones basadas en la fe hayan escapado por completo al desafío constitucional. Véase Winnifred Fallers Sullivan, *Prison Religion: Faith-Based Reform and the Constitution*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2009.

⁴ Citado en Jonathan Burnside, «Preparing Evangelists: InnerChange Freedom Initiative (IFI)», en Jonathan Burnside, Nancy Loucks, Joanna R. Adler y Gerry Rose, *My Brother's Keeper: Faith-Based Units in Prison*, Portland (OR), Willan Publishing, 2005, p. 246.

⁵ La siguiente descripción de la programación del IFI se basa en materiales de Burnside, «Preparing Evangelists», y Tanya Erzen, «Testimonial Politics: The Christian Right's Faith-Based Approach to Marriage and Imprisonment», *American Quarterly*, vol. 59, núm. 3, 2007, pp. 991-1015.

⁶ Erzen, «Testimonial Politics...».

⁷ *Ibidem*, p. 1008.

sus reformas de bienestar de mediados de los años noventa; la mayoría de estados no tardaron en seguir la estela con recortes presupuestarios adicionales.⁸ Al disminuir la financiación de la educación superior, el gobierno federal y los estados han invertido de forma casi exclusiva en programas de prisiones centrados en el matrimonio saludable, la paternidad responsable y la religión.⁹ En palabras de Erzen, «esta forma de encarcelamiento espera que los hombres transiten de la prisión como sujetos redimidos en el plano religioso, no simplemente rehabilitados, familiarizándose con la identidad religiosa o reforzándola si ya la hubiera. Las cárceles basadas en la fe [...] redefinen el encarcelamiento como una cuestión moral de pecados individuales y redención personal lograda mediante el conocimiento religioso».¹⁰

Durante este mismo periodo, las organizaciones basadas en la fe también se han implicado intensamente en los llamados programas de desviación penitenciaria que canalizan a consumidores de drogas y a otros delincuentes de bajo riesgo hacia alternativas a la cárcel de tipo pedagógico y terapéutico.¹¹ Una de estas iniciativas, conocida como Proyecto ROSE [Reaching Out on Sexual Exploitation], que permite que las mujeres arrestadas con cargos de prostitución accedan a un programa de reinserción basado en la fe en lugar de pasar un tiempo en prisión.¹² El programa constituye una colaboración entre Catholic Charities Community Services [Servicios Comunitarios de Beneficencia Católica], la facultad de Trabajo Social de la Universidad del estado de Arizona y la policía de Phoenix.

⁸ Tanya Erzen, «In the Prison of New Beginnings», *Guernica Magazine*, 15 de octubre de 2014, disponible on line en <https://www.guernicamag.com/features/in-the-prison-of-new-beginnings> (consultado por última vez el 1 de mayo de 2015).

⁹ La financiación para la instrucción basada en la fe, la paternidad responsable y las clases de matrimonio saludable suelen combinarse, y las organizaciones religiosas son normalmente las encargadas de impartir estos programas.

¹⁰ Tanya Erzen, «Religious Literacy in the Faith-Based Prison», *MLA*, vol. 123, núm. 3, 2008, p. 660.

¹¹ Las organizaciones religiosas, como la evangélica *Teen Challenge*, son actores importantes en el sistema de remisión de la cárcel de los delincuentes por drogas. Para un análisis del tratamiento basado en la fe de abuso de sustancias, véase Christopher M. Meissner, «Prayer or Prison: The Unconstitutionality of Mandatory Faith-Based Substance Abuse Treatment», *Cleveland State Law Review*, núm. 54, 2006, pp. 671-712, y Timoteo Rodríguez, «"Bio-Pistis": Conversion of Heroin Addicts in Prisons, on Medicine, and with God» en Julie Adkins, Laurie Occhipinti y Tara Hefferan, *Not by Faith Alone: Social Services, Social Justice, and Faith-Based Organizations in the United States*, Lanham (MD), Lexington Books, 2012.

¹² Jordan Flaherty, «Arizona's Tenacious Laws against Sex Workers: US State's Initiative that Aimed to Improve Prostitutes' Lives has Brought "No Real Reform" as Harsh Penalties Persist», *Al Jazeera America*, 14 de noviembre de 2013, disponible on line en <http://www.swopphoenix.org/arizonas-tenacious-laws-against-sex-workers>; Sarah Hoye, «How a Controversial Arizona Program Tries to Keep Sex Workers out of Jail», *Al Jazeera America*, 14 de noviembre de 2013, disponible on line en <http://america.aljazeera.com/watch/shows/america-tonight/america-tonight-blog/2013/11/14/project-rose-prostitutes-jail.html>; SWOP Phoenix, «Support Monica Jones and De-fund Project ROSE», página web de *SWOP Phoenix*, 2015, disponible on line en <http://www.swopphoenix.org/monica/> (consultado por última vez el 1 de mayo de 2015).

Situado en el estado de Arizona, Phoenix tiene las penas más duras del país por prostitución y permite que los agentes policiales arresten a quienes «manifiesten» cualquier intento de prostituirse incluso sin intercambio de dinero —por ejemplo, por el hecho de caminar por la calle, por vestir de determinada manera o por interactuar con transeúntes—. Dos veces al año, cuando la policía de Phoenix lleva a cabo redadas masivas durante todo un fin de semana, se selecciona a quienes participan en el programa alternativo de Catholic Charities [Beneficencia Católica]. Las personas arrestadas son llevadas esposadas a unas instalaciones donadas por la iglesia local y —siempre que no tengan condenas anteriores ni órdenes de detención pendientes— se les ofrece la posibilidad de ir a prisión o de realizar un curso de seis meses con la Beneficencia Católica. Aparte de ofrecer servicios sanitarios, habitacionales y de otro tipo a las personas detenidas, el Proyecto ROSE las inscribe en un programa de educación moral diseñado para «ofrecer esperanza» y ayudarles a escapar de «esa vida».¹³ Los cargos penales se suspenden hasta que la persona detenida haya completado el curso.

Tras un largo periodo en desuso, el reciente auge de programas basados en la fe dentro del sistema penal estadounidense es testigo de un renovado interés por el valor económico y social de la reinserción. Las perspectivas rehabilitadoras del crimen surgieron en el periodo posterior al New Deal, síntoma del optimismo generalizado creado por los salarios en auge y la ampliación del Estado social. Durante este periodo, la preponderancia de las teorías socioeconómicas del crimen ayudó a sostener la idea de que la desviación era un resultado de la injusticia social y que al menos parte de los presos se podrían rehabilitar debidamente con una inversión sensata en trabajo social, asesoramiento y formación. Sin embargo, a mediados de los años setenta, la ansiedad de la clase media blanca ante el creciente coste del bienestar y cómo este se asociaba con la militancia negra generó una «revuelta fiscal permanente» contra las políticas expansionistas del Estado social de la Gran Sociedad.¹⁴

En este nuevo contexto divisorio, la retórica de «ley y orden» de Barry Goldwater, que en su día había sido marginal, volvió a ser parte del lenguaje político; la opinión pública pasó a estar repentinamente en contra de las inversiones en la reinserción en prisión. Influida por una combinación de teorías neoliberales de la elección racional sobre la delincuencia

¹³ En la página principal de los servicios comunitarios de la Beneficencia Católica: <https://www.catholiccharitiesaz.org/diversion/000018>. Véase también Ambria Hammel, «A Life Reclaimed: DIGNITY Program Transforms Women Who See themselves as "Throwaway"», *The Catholic Sun*, 20 de marzo de 2014, disponible on line en <http://www.catholicsun.org/2014/03/20/a-life-reclaimed-dignity-program-transforms-women-who-see-selves-as-throwaway/> (consultado por última vez el 1 de mayo de 2015).

¹⁴ Tomo prestado el término de Isaac William Martin, *The Permanent Tax Revolt: How the Property Tax Transformed American Politics*, Stanford (CA), Stanford University Press, 2008.

y por la reciente visión paternalista de las obligaciones civiles, la nueva criminología estaba a favor de formas de castigo disuasorias y retributivas, lo que provocó una nueva situación marcada por una altísima población carcelaria y tasas extraordinarias de encarcelamiento entre las clases sociales estadounidenses que antes eran beneficiarias de asistencia social.¹⁵ Las inversiones en formación para prisiones y otros programas se desplomaron durante este periodo, culminando con la decisión de Clinton de anular la asignación de becas Pell a reclusos.

Sin embargo, los enormes costes fiscales necesarios para el mantenimiento de las prisiones en los últimos años han convencido a los estados de reconsiderar el valor de una visión del crimen meramente retributiva. El evangelismo conservador ha encabezado el movimiento por la reforma de las prisiones apelando a un regreso a la reinserción. Chuck Colson, por ejemplo, se ha manifestado en contra de las inflexibles normas condenatorias que sentencian a quienes por primera vez delinquen por drogas a penas de cárcel o las que imponen penas de prisión de larga duración después de «tres asaltos». Junto con otras opiniones evangélicas, ha apelado a la ampliación del sistema de desviación de prisiones y a un sistema de tribunales de drogas que dirijan a los delincuentes de bajo riesgo a programas alternativos de reinserción.¹⁶ Sin embargo, cuando el evangelismo apela a un regreso a la reinserción, entiende algo muy distinto de la visión socioeconómica, psicoterapéutica y en último término —en el sentido de Foucault— normativa de la reforma que prevalecía en la era de posguerra. Como explican Chuck Colson y su compañero Pat Nolan, evangélico de prisiones:

En sus raíces, el crimen es un problema moral. Los criminales toman malas decisiones morales que resultan en daños a sus víctimas. Para romper el círculo del crimen, debemos abordar este comportamiento inmoral [...] La formación para el empleo y la educación por sí solas no harán que un recluso deje de ser un criminal para convertirlo en un ciudadano que cumpla la ley. Para algunos reclusos, esos programas simplemente les convierten en criminales más inteligentes y sofisticados. Lo que logra transformar a un preso en un ciudadano que cumple la ley es un cambio en el corazón. Desafortunadamente, muchos programas de prisiones ignoran el aspecto moral del crimen y evitan

¹⁵ Algunas historias políticas de este periodo se pueden leer Ruth Wilson Gilmore, *Golden Gulag: Prisons, Surplus, Crisis, and Opposition in Globalizing California*, Berkeley, University of California Press, 2007, y Loïc Wacquant, *Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity*, Durham (NC), Duke University Press, 2009 [ed. cast. *Castigar a los pobres; el gobierno neoliberal de la inseguridad social*, trad. por M. Margarita Polo, Barcelona, Gedisa, 2010]. Para un análisis teórico de la perspectiva neoliberal sobre el crimen y el castigo y la aparente contradicción de la creciente población carcelaria en tiempos neoliberales véase Bernard Harcourt, *The Illusion of Free Markets: Punishment and the Myth of Natural Order*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2011.

¹⁶ Erzen, «Testimonial Politics...».

cualquier debate sobre la fe y la moralidad. Al hacerlo, ignoran un factor importante que ha demostrado ser efectivo a la hora de modificar el comportamiento criminal: la fe.¹⁷

El actual resurgir de las unidades de prisión basadas en la fe recuerda a una tradición mucho más antigua de reinserción en prisión. El historiador David Garland escribe: «La influencia religiosa en la reforma de las prisiones y las políticas penales fue muy poderosa a lo largo del siglo XIX [...] El evangelismo estuvo a la vanguardia de los movimientos reformistas tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, ayudando a mejorar las condiciones de cautiverio, acompañando a los presos en el momento de su libertad y más adelante desarrollando alternativas al encarcelamiento como la libertad condicional, que comenzó como una forma de trabajo misionero financiado por sociedades de templanza basadas en la Iglesia».¹⁸ Como nos recuerda Garland, quienes defendían una reforma social evangélica contaron con pocos apoyos para impulsar la reinserción y las alternativas a la prisión durante los primeros años del siglo XIX, antes de que se vieran superados por partidarios de la reinserción socio-científica en las últimas décadas del siglo.

Alexis de Tocqueville y Gustave de Beaumont quedaron fascinados por el papel reformador que desempeñaba la religión en las cárceles estadounidenses. Su tratado de 1833 sobre el sistema penitenciario estadounidense incluye una descripción detallada de la prisión de Walnut Street de Filadelfia, en la que los reclusos debían cumplir una minuciosa disciplina de formación bíblica y limpieza espiritual. «En Filadelfia», señalaban, «la situación moral en la que se coloca a los convictos está eminentemente calculada para facilitar su regeneración»,¹⁹ unas palabras que señalan la indiferenciación histórica entre el renacimiento espiritual y la reinserción. Tocqueville y Beaumont quedaron particularmente impresionados por la forma en la que el respeto por la libertad religiosa, consagrado en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, lejos de debilitarla, consolidaba la fuerza persuasiva de la formación religiosa que se impartía en estas instalaciones.²⁰

¹⁷ Chuck Colson y Pat Nolan, «Prescription for Safer Communities», *Notre Dame Journal of Law, Ethics and Public Policy*, vol. 18, núm. 2, 2004, p. 392.

¹⁸ David Garland, *Punishment and Modern Society*, Chicago, University of Chicago Press, 1990, p. 204. Para más detalles sobre el trabajo en las prisiones de los evangélicos, véase Michael Ignatieff, *A Just Measure of Pain*, Londres, Macmillan, 1978, pp. 143-173.

¹⁹ Gustave de Beaumont y Alexis de Tocqueville, *On the Penitentiary System in the United States and Its Application in France*, Filadelfia, Carey, Lea and Blanchard, 1833, pp. 82-83 [ed. cast. *Del sistema penitenciario en Estados Unidos y su aplicación en Francia*, trad. por Juan Manuel Ros Cherta y Julián Sauquillo González, Madrid, Tecnos, 2005].

²⁰ «Estas escuelas son voluntarias. Aunque ningún convicto está obligado a participar en ellas, consideran un favor ser admitidos [...] La libre elección que recae sobre los presos

Tocqueville es un punto de referencia obligatorio para quienes hoy proponen la asistencia social basada en la fe. Sus ideas sobre la importancia de la asociación voluntaria y la libertad religiosa en el periodo de la temprana República se citan infinitas veces como prueba del genio estadounidense de la democracia descentralizada. Sin embargo, el planteamiento de Tocqueville sobre la prisión de Walnut Street nos recuerda que también identificó una relación inevitable entre la filosofía estadounidense de la libertad religiosa y la internalización de la ley moral. Lo que tanto admiraba a Tocqueville de los puritanos era su capacidad de combinar la libertad civil con un respeto omnipresente e ineludible a la autoridad divina. Esto, pensaba, era lo que impedía que la administración descentralizada de la República estadounidense se sumiera en el caos más profundo. Citando la diferenciación que hacía John Winthrop entre la libertad natural y civil, apuntaba que solo esta última podía «considerarse moral, en referencia al pacto entre Dios y el hombre en la ley moral» porque hacía que la libertad fuera contingente al respeto de la autoridad divina.²¹ Según planteaba, fue esta estrecha asociación entre la libertad civil y la ley moral lo que definió la singularidad de la democracia estadounidense ante el republicanismo sin dioses de la Francia revolucionaria.

A día de hoy, el trabajo de Tocqueville aborda un particular planteamiento de las batallas contemporáneas en torno a la esfera pública estadounidense, en la que la fuerza coactiva de la ley moral se justifica sistemáticamente en nombre de la libertad religiosa y en la que es más probable que el retorno de la religión fuerte apele a la libertad de expresión que a la censura absoluta —en un interesante contraste con el resurgir de las leyes de blasfemia en países mayoritariamente católicos, ortodoxos y musulmanes—. El propio concepto de libertad religiosa, según lo interpretaba Tocqueville, encapsula el «doble movimiento» de las tendencias liberal y conservadora dentro de un cierto tipo de republicanismo estadounidense, que plantea la libertad política íntimamente subordinada a la ley moral.

La proliferación de los programas religiosos en las prisiones estadounidenses es sintomática de una transformación mucho más amplia de los servicios sociales que ha visto cómo los proveedores religiosos se incluyen activamente en los contratos gubernamentales para proporcionar refugio a

de participar o no en ellas, hace que quienes acceden a participar voluntariamente, sean mucho más diligentes y dóciles [...] El pastor que administra este servicio, lo acompaña casi siempre con un sermón, en el que se abstiene de toda discusión dogmática, y trata solo de moral religiosa; de modo que la instrucción del pastor es tan adecuada para el católico como para el protestante, para el unitario como para el presbiteriano...» *ibidem*, p. 37.

²¹ Alexis de Tocqueville, *Democracy in America*, vol. 1, trad. Henry Reeve, Esq., 3.^a ed., Cambridge (MA), Sever and Francis, 1863, p. 53 [ed. cast. *La democracia en América*, trad. por Dolores Sánchez de Aleu, Madrid, Alianza Editorial, 2005]. Para un debate iluminador sobre la relación recíproca entre la libertad civil y la ley moral, véase Arthur Kaledin, *Tocqueville and His America: A Darker Horizon*, New Haven (CT), Yale University Press, 2011, pp. 265-266.

personas sin hogar, comedores sociales, hogares grupales, tratamientos de abuso de sustancias, programas de transición de las prestaciones sociales al trabajo, formación para matrimonios saludables y paternidad responsable, junto con otros muchos servicios para la población pobre. Sin embargo, a pesar de la importancia que ha tenido en las recientes transformaciones sociales, el auge de la asistencia social basada en la fe ha escapado en gran medida de la investigación de las principales teorías del Estado de bienestar estadounidense, acostumbradas sin duda a formas de gobierno más profesionalizadas y tecnocráticas que, desde la teoría social —en la que me incluyo—, hemos identificado como los cauces del poder moderno.²² El silencio selectivo de la teoría social contrasta con una locuaz y ahora voluminosa bibliografía sobre la teoría postsecular que se ha dedicado, aparentemente sin autorreflexión, a reproducir débilmente las demandas de la derecha religiosa, que ha reclamado alternativamente una mayor desprivatización de la religión, una nueva tolerancia para la expresión pública de la fe y un retroceso de la arrogancia del llamado liberalismo secular.²³ Esta literatura parece olvidar el hecho de que algunos de los principales teóricos del postsecularismo, como Peter Berger por ejemplo, han sido agentes fundamentales en el proyecto de la asistencia social basada en la fe.

Mientras tanto, algunas de las figuras más reconocidas de la filosofía política han conceptualizado el regreso de la religión como un acontecimiento mesiánico, casi revolucionario, que quizás anuncie el derrocamiento final del capitalismo.²⁴ En su lugar, yo entiendo esta literatura como expresiones del *statu quo* y teorizo el retorno de la religión como un proceso de transformación institucional totalmente interno al Estado neoliberal-neoconservador.

²² Por ejemplo, las potentes reseñas publicadas recientemente por Michael B. Katz y Joe Soss, Richard C. Fording y Sanford F. Schram apenas mencionan el proyecto de la asistencia social basada en la fe. Michael B. Katz, *The Undeserving Poor: America's Enduring Confrontation with Poverty*, 2.^a ed., Oxford, Oxford University Press, 2013; Joe Soss, Richard C. Fording y Sanford F. Schram, *Disciplining the Poor: Neoliberal Paternalism and the Persistent Power of Race*, Chicago, University of Chicago Press, 2011.

²³ Jürgen Habermas y Joseph Ratzinger, *The Dialectics of Secularization: On Reason and Religion*, San Francisco, Ignatius Press, 2007 [ed. cast. *Dialéctica de la secularización. Sobre la razón y la religión*, trad. por Isabel Blanco Volmer y Pablo Largo Domínguez, Madrid, Encuentro, 2006]; Jürgen Habermas, *What is Missing: Faith and Reason in a Post-Secular Age*, Londres, Polity, 2010; Craig Calhoun, «Secularism, Citizenship and the Public Sphere», en Craig Calhoun, Mark Juergensmeyer y Jonathan Vanantwerpen, *Rethinking Secularism*, Oxford, Oxford University Press, 2011, pp. 75-91.

²⁴ Giorgio Agamben, *The Time That Remains: A Commentary on the Letter to the Romans*, trad. Patricia Dailey, Stanford (CA), Stanford University Press, 2005 [ed. cast. *El tiempo que resta. Comentario a la Carta de los Romanos*, trad. por Antonio Piñero, Madrid, Trotta, 2006]; Alain Badiou, *Saint Paul: The Foundation of Universalism*, trad. por R. Brassier, Stanford (CA), Stanford University Press, 2003 [ed. cast. *San Pablo: la fundación del universalismo*, trad. por Danielle Reggiori, Barcelona, Anthropos, 1999]; Slavoj Žižek, «Paul and the Truth Event», en J. Milbank, S. Žižek, C. Davis y C. Pickstock, *Paul's New Moment: Continental Philosophy and the Future of Christian Theology*, Grand Rapids (MI), Brazos Press, 2010, pp. 74-99.

El auge de la asistencia social basada en la fe

La reciente profusión de los servicios sociales basados en la fe se remonta a la reforma de la asistencia social de Clinton de 1996, que contenía una discreta disposición (sección 104) que animaba al gobierno federal y estatal a contratar a asociaciones religiosas sin ánimo de lucro sin infringir sus derechos de expresión religiosa. Esta disposición, conocida como «elección caritativa», fue patrocinada por el exsenador republicano John Ashcroft y redactada por Carl Esbeck, abogado constitucional especializado en casos del «libertad religiosa». En gran medida, esta se libró del intenso debate público y dentro del Congreso que acompañó al resto de la reforma de la asistencia social de Clinton.²⁵ Aun así, planteaba profundos cambios en el derecho federal que afectaban a las relaciones entre la Iglesia y el Estado y representaba una significativa victoria legislativa de los litigantes cristianos de derechas que, durante más de una década, habían perseguido una agenda similar en los tribunales.

Al anular la normativa establecida en los años sesenta, la disposición de elección caritativa permitía a las organizaciones religiosas, incluidas las iglesias, establecer contratos directamente con agencias gubernamentales sin tener que crear una organización sin ánimo de lucro independiente y sin tener que sacrificar el carácter religioso de sus servicios. Las organizaciones que en su día podían considerarse como «totalmente sectarias»²⁶ ahora eran libres de expresar su misión religiosa al prestar servicios, de forma rayana al intento de convertir a sus clientes; por su parte las iglesias ya no debían retirar el «arte religioso, los iconos, las escrituras ni otros símbolos», ni tampoco «alterar [su] forma de gobierno interno» para recibir financiación federal.²⁷ Al apelar a la causa mayor de la «libertad religiosa», la disposición urgía al gobierno a dejar de «discriminar» a las organizaciones religiosas, al mismo tiempo que eximía a estas mismas organizaciones de la ley de Derechos Civiles de 1964 con respecto a sus prácticas laborales.²⁸ El cambio fue real, pero sutil. Desde su aprobación, en el Título VII de la ley de Derechos Civiles se había consagrado una exención similar al respecto del empleo, pero hasta la entrada en vigor de la elección caritativa, no se había aplicado a las organizaciones religiosas financiadas con dinero público.²⁹

²⁵ Amy Black, Douglas Koopman y David Ryden, *Of Little Faith: The Politics of George W. Bush's Faith-Based Initiatives*, Washington DC, Georgetown University Press, 2004, pp. 52-53.

²⁶ El término «totalmente sectario» [pervasively sectarian] fue popularizado por el caso *Lemon contra Kurtzman* de 1971, que estableció límites estrictos a la financiación gubernamental de tales organizaciones en el sector educativo. Véase Black, Koopman y Ryden, *Of Little Faith*, pp. 41-42.

²⁷ Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996, H.R. 3734 104th Cong. 2nd Session, P.L. 104-193 (1995-1996), Section 104 d. 2. A. and B.

²⁸ *Ibidem*, sección 104 c, d y f.

²⁹ Martha Minow, «Should Religious Groups Be Exempt from Civil Rights Laws?», *Boston College Law Review*, vol. 48, núm. 2, 2007, p. 789.

Al generalizar esta particular exención a los programas de asistencia social federales y estatales, la elección caritativa respaldaba implícitamente la idea de que las organizaciones religiosas eran las únicas que no debían verse afectadas por las leyes antidiscriminación, como habían reclamado litigantes cristianos desde hacía tiempo, una innovación cuyas plenas consecuencias solo empiezan a percibirse ahora.

Sin embargo, la relevancia de la reforma de la asistencia social de Clinton en 1996 en las relaciones Iglesia-Estado fue mucho más allá de la disposición de la elección caritativa. La ley de reforma de la asistencia social no solo multiplicó el número de contratos de servicios sociales abiertos a organizaciones basadas en la fe, sino que además creó programas completamente nuevos, exclusivamente destinados a las sensibilidades de las organizaciones religiosas conservadoras. De acuerdo con las normas de financiación del antiguo programa de asistencia social, el AFDC, solo se podía contratar la prestación de ciertos aspectos de la asistencia social a terceros proveedores; según los términos del nuevo programa de asistencia, el TANF que sustituía el AFDC, todos los aspectos de la prestación de estos servicios, desde la determinación de los criterios de admisión hasta el cuidado infantil, los servicios laborales y el asesoramiento podían ser externalizados. Mientras que los servicios administrativos y logísticos como la gestión de datos, la supervisión electrónica y el cumplimiento de la manutención infantil se contrataban a empresas privadas como Lockheed Martin, Maximus o IBM, las organizaciones basadas en la fe asumían un papel cada vez más importante en la prestación de servicios de «competencias no técnicas» dentro de la asistencia, entre ellos la preparación para el trabajo, los servicios ante el consumo de estupefacientes y toda una gama de nuevos programas de formación moral que hasta entonces no habían formado parte de las políticas de asistencia social.³⁰

Como vimos en el capítulo 3, la reforma de la asistencia social de Clinton creó presupuestos federales específicos para financiar programas de «matrimonio saludable» y asignó millones de dólares en financiación adicional a los estados que pudieran demostrar que habían reducido con éxito el número de nacimientos ilegítimos sin que aumentara el número de abortos.³¹ El Título V de la PRWORA señalaba la castidad hasta el matri-

³⁰ Sobre la externalización de la asistencia pública a contratistas privados, véase Mark Carl Rom, «From Welfare State to Opportunity, Inc: Public-Private Partnerships in Welfare Reform», en Pauline Vaillancourt Rosenau, *Public-Private Policy Partnerships*, Cambridge (MA), MIT Press, 2000, pp. 161-182. Sobre la externalización de las «competencias no técnicas» a las organizaciones basadas en la fe, véase Steven K. Green, «In 'Bad Faith': The Corruption of Charitable Choice», en Marci A. Hamilton y Mark J. Rozell, *Fundamentalism, Politics, and the Law*, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2011, p. 117.

³¹ Dorit Geva, «Not Just Maternalism: Marriage and Fatherhood in American Welfare Policy», *Social Politics: International Studies in Gender, State and Society*, vol. 18, núm. 1, 2011, pp. 39-40.

monio como una forma de educación sexual responsable, al tiempo que proporcionaba una generosa estructura de becas para financiar este tipo de programas.³² En el año 2000, Clinton se sirvió de sus poderes ejecutivos para crear la President's National Fatherhood Initiative [Iniciativa Nacional de Paternidad del Presidente], un programa diseñado para reinstaurar los derechos y responsabilidades de los progenitores en la familia.³³ Estas iniciativas estaban estrechamente alineadas con las políticas morales del conservadurismo religioso y, por lo tanto, dirigidas a atraer a estos grupos en el proceso de licitación de los contratos de asistencia social.

Gobiernos demócratas y republicanos han conservado, en una sorprendente continuidad, las políticas morales prescritas por la PRWORA.³⁴ George W. Bush mantuvo la financiación de los programas de promoción del matrimonio, la paternidad responsable y la educación en la castidad que había iniciado Clinton, asignando más del triple de financiación a estas iniciativas durante su segundo mandato.³⁵ A nivel federal, las distintas oficinas basadas en la fe alojadas en departamentos gubernamentales están estrechamente implicadas en la administración de los programas de matrimonios saludables y de paternidad responsable. Al contrario de lo que algunas voces habían predicho, estos programas no desaparecieron con Obama. En su lugar, Obama desplazó el foco de los programas de matrimonio saludable a los de paternidad responsable, duplicando la financiación de estos últimos y prestando especial atención a las familias

³² La PRWORA exigía a los estados que recibían fondos federales para la educación sexual que siguieran los ocho puntos del programa descrito en el Título V. Para hacerse una idea de la amplia política moral que implica la educación en la abstinencia (que excluye claramente las relaciones homosexuales del «estándar esperado de las relaciones sexuales» y prescribe la castidad como la mejor respuesta a las enfermedades de transmisión sexual como el VIH/sida), vale la pena citar el texto completo del Título V: «El término "educación en la castidad" constituye un programa educacional o motivacional que: A. tiene como único propósito enseñar los beneficios sociales, psicológicos y de salud que se alcanzan mediante la abstinencia de la actividad sexual; B. enseña la abstinencia de la actividad sexual fuera del matrimonio como el estándar esperado para los niños y niñas en cualquier edad escolar; C. enseña que la abstinencia de la actividad sexual es el único método certero para evitar un embarazo fuera del matrimonio, las enfermedades de transmisión sexual y todos los problemas asociados; D. enseña que una relación monógama mutuamente fiel en el contexto del matrimonio es el estándar esperado de la actividad sexual; E. enseña que la actividad sexual fuera del contexto del matrimonio suele acarrear efectos psicológicos y físicos dañinos; F. enseña que la crianza de los hijos o hijas fuera del matrimonio suele tener consecuencias negativas para el niño, para sus progenitores y para la sociedad; G. enseña a la población joven cómo rechazar las insinuaciones sexuales y cómo el consumo de alcohol y de drogas aumenta la vulnerabilidad ante estas insinuaciones; y H. enseña la importancia de alcanzar la autosuficiencia antes de incurrir en la actividad sexual». Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996, H. R. 3734 104th Cong. (1995-1996).

³³ Jessica Dixon Weaver, «The First Father: Perspectives on the President's Fatherhood Initiative», *Family Court Review*, vol. 50, núm. 2, 2012, p. 298.

³⁴ Jean V. Hardisty, *Pushed to the Altar: The Right Wing Roots of Marriage Promotion*, Somerville (MA), Political Research Associated and Women of Color Resource Center, 2008.

³⁵ Weaver, «The First Father...», p. 299.

negras.³⁶ Mientras que Bush se acercó a los evangélicos blancos con el nombramiento de Wade Horn en un puesto fundamental del HHS, Barak Obama hizo esfuerzos similares de acercamiento a las iglesias negras que puede que sean progresistas en lo que respecta a la justicia económica, pero son social-conservadoras cuando se trata de relaciones de género dentro de la familia.³⁷ Las organizaciones basadas en la fe han desempeñado un papel fundamental en la puesta en marcha a nivel práctico de estas políticas morales reguladas por el Estado.

Si la elección caritativa de Clinton representó una revolución formal en las relaciones Iglesia-Estado, Bush explotó al máximo sus posibilidades institucionales. Al no haber garantizado la autoridad legislativa para ampliar la elección caritativa durante sus primeras semanas en el cargo, Bush recurrió a sus poderes ejecutivos presidenciales para establecer la White House Office of Faith-Based and Community Initiatives [Oficina de la Casa Blanca de Iniciativas Basadas en la Fe y la Comunidad]. Después continuó creando oficinas satélite en el Departamento de Trabajo, en el HHS, en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, en el Departamento de Educación y en el Departamento de Justicia, cada una de ellas dotada de una dirección y un equipo cuidadosamente seleccionados.³⁸ Estas oficinas tenían instrucciones de facilitar la colaboración entre organizaciones basadas en la fe y el gobierno, simplificando los procedimientos de solicitud de becas, organizando actividades de divulgación y ofreciendo apoyo logístico. Lew Daly ha subestimado la prodigalidad de un movimiento como este.³⁹ Ya no hicieron falta más órdenes ejecutivas para establecer el proyecto de la asistencia social basada en la fe, una vez que la creación de las oficinas internas basadas en la fe dentro de los departamentos del gobierno que Bush llevó a cabo garantizaba que las organizaciones religiosas sin ánimo de lucro no solo accederían a las licitaciones para un abanico todavía mayor de contratos gubernamentales, sino que las favorecía abiertamente y las señalaba como socias predilectas para cierto tipo de contratos.

³⁶ Monica Potts, «Daddy Issues: Is Promoting Responsible Fatherhood Really the Best Way to Lift Families out of Poverty?», *The American Prospect*, abril de 2010, pp. 21-24; Weaver, «The First Father», p. 299. En gran medida es gracias a Obama que los programas de paternidad responsable se hayan vuelto tan omnipresentes en prisiones y en los programas tras la puesta en libertad.

³⁷ Sobre Bush y Wade Horn, véase Shirley Anne Warshaw, *The Co-Presidency of Bush and Cheney*, Stanford (CA), Stanford University Press, 2009, p. 95. Sobre la implicación de las iglesias negras en la asistencia social basada en la fe con Obama, véase David K. Ryden, «The Obama Administration, Faith-based Policy, and Religious Groups' Hiring Rights», en R. Drew Smith, *From Every Mountainside: Black Churches and the Broad Terrain of Civil Rights*, Albany, SUNY Press, 2013, pp. 167-188.

³⁸ Anne Farris, Richard P. Nathan y David J. Wright, *The Expanding Administrative Presidency: George W. Bush and the Faith-Based Initiative (The Roundtable on Religion and Social Welfare Policy)*, Nueva York, The Rockefeller Institute of Government and The Pew Charitable Trusts, 2004, p. ii.

³⁹ Lew Daly, *God and the Welfare State*, Cambridge (MA), Boston Review, 2006, p. 34.

A partir de este primer paso, Bush encargó a continuación a cada oficina satélite que desarrollara una profunda auditoría de los métodos de difusión, las prácticas de adquisición y las normativas internas de sus respectivos departamentos con el objetivo de identificar posibles obstáculos para la inclusión de proveedores de asistencia social basada en la fe.⁴⁰ A finales de 2001, la Casa Blanca publicó un informe desaprobatorio, *Unlevel Playing Field* [Terreno de juego desigual], en el que recogía sus hallazgos. El informe reclamaba haber descubierto una cultura de perversa discriminación «antirreligiosa» entre la burocracia federal y acusaba a las agencias del gobierno de adherirse a una interpretación demasiado celosa del derecho constitucional. El informe denunciaba que en un momento en el que la Corte Suprema y el Congreso optaban por una interpretación mucho más indulgente de la separación Iglesia-Estado, las agencias públicas iban «mucho más allá de las restricciones constitucionales» en sus esfuerzos por supervisar a los proveedores de asistencia social basada en la fe.

De hecho, estas agencias violaban los derechos civiles de los proveedores religiosos infringiendo su derecho a la expresión religiosa en el espacio público. «No es el Congreso, sino que son estas normas de la Agencia las que resultan represivas, restrictivas y reducen activamente los derechos civiles de estos grupos».⁴¹ El informe acusaba también a las agencias del gobierno de favorecer a las organizaciones benéficas «grandes y arraigadas», que en gran medida habían perdido su carácter religioso público, en detrimento de las organizaciones basadas en la fe de menor tamaño cuya religiosidad era mucho más visible. Urgía en conclusión a los administradores federales a tomar medidas de «discriminación positiva» para incluir activamente a estas organizaciones religiosas sin ánimo de lucro entre sus socios habituales. El informe describía a las organizaciones religiosas como víctimas de violaciones sistemáticas de los derechos civiles y merecedoras de discriminación positiva; un guiño a la labor de los litigantes cristianos que llevaban más de una década defendiendo argumentos similares en los tribunales.

En respuesta a estas directivas, cada departamento federal revisó debidamente su normativa interna para ayudar a fomentar las licitaciones de las organizaciones religiosas sin ánimo de lucro y emprendió importantes esfuerzos de divulgación para ayudar a las organizaciones religiosas a desenvolverse en la logística de los grandes contratos gubernamentales.⁴² La administración Bush fue especialmente insistente en su esfuerzo por

⁴⁰ Green, «In "Bad Faith"...», p. 111.

⁴¹ La Casa Blanca (presidente George W. Bush), *Unlevel Playing Field: Barriers to Participation by Faith-Based and Community Organizations in Federal Social Service Programs, January 29*, Washington DC, The White House, 2001.

⁴² Green, «In "Bad Faith"...», p. 112.

solicitar la participación de las congregaciones evangélicas más pequeñas y con menos experiencia, pero más conservadoras, en sus contratos basados en la fe, llegando incluso a excluir a las organizaciones benéficas establecidas desde hacía años, como la Catholic Charities USA, los Lutheran Social Services y los Jewish Family Services de sus eventos de relaciones públicas.⁴³ Aunque algunas de estas organizaciones benéficas más antiguas están bien versadas en las artes del moralismo público, lo que le interesaba a la administración Bush eran claramente las organizaciones «totalmente sectarias» y los militantes de la nueva derecha religiosa, no las que tenían una larga experiencia en el monótono trabajo de la gestión de casos a gran escala.

La iniciativa religiosa de Bush marcó un avance decisivo en «la larga marcha [de la derecha religiosa] por las instituciones». No solo amplió más aún el abanico de contratos federales y estatales abiertos a organizaciones religiosas, sino que además consolidó una elaborada infraestructura diseñada para afianzar su posición en los servicios sociales. «No ha habido nada igual en la historia de la Casa Blanca o en la política del bienestar social estadounidense», observa el propio Lew Daly, analista simpatizante de la asistencia social basada en la fe. «En conjunto, los cambios estructurales y administrativos llevados a cabo por la iniciativa religiosa, junto con los esfuerzos a nivel estatal y las movilizaciones en busca de subvenciones, representan un esfuerzo político masivo por reconstruir la red de seguridad social en torno a los proveedores religiosos y sus métodos».⁴⁴

La disposición de la elección caritativa de 1996, seguida de las iniciativas religiosas de George W. Bush y Obama, han facilitado una drástica ampliación del número de organizaciones religiosas dedicadas a la prestación de servicios sociales, que van desde albergues para personas sin hogar, programas de reinserción carcelaria y pospenitenciaria, hasta servicios de reinserción para consumidores de drogas, formación para la inserción laboral, ayuda en caso de catástrofes y educación sexual (abstinencia), pasando por programas de matrimonio y paternidad responsable.⁴⁵ Tras la reforma

⁴³ *Ibidem*, p. 116; Farris, Nathan y Wright, *The Expanding Administrative Presidency...*, pp. 14, 17; Bob Wineburg, *Faith-Based Inefficiency: The Follies of Bush's Initiatives*, Westport (CT), Praeger, 2007, p. 57. Wineburg señala lo llamativo de que Catholic Charities USA, Lutheran Social Services y Jewish Family Services no fueran invitados al lanzamiento de la Faith-Based Initiative [Iniciativa Basada en la Fe] a principios de 2001. Junto con Salvation Army, estas son algunas de las organizaciones de beneficencia religiosa más grandes de Estados Unidos y algunas de las mayores receptoras de fondos gubernamentales. Salvation Army, a pesar de su reputación de sectarismo, fue invitada al evento.

⁴⁴ Daly, *God and the Welfare State...*, p. 42.

⁴⁵ John P. Bartkowski y Helen A. Regis, *Charitable Choices: Religion, Race and Poverty in the Post-Welfare Era*, Nueva York, New York University Press, 2003; Judith Goode, «Faith-Based Organizations in Philadelphia: Neoliberal Ideology and the Decline of Political Activism», *Urban Anthropology*, vol. 35, núm. 2-3, 2006, pp. 203-236; Jason Hackworth, *Faith-Based: The Politics of Religious Neoliberalism in the United States*, Athens, University of Georgia Press, 2012; Vincanne Adams, *Markets of Sorrow, Labors of Faith*, Durham (NC), Duke University Press, 2013.

de la asistencia social, las obligaciones morales y económicas del trabajo y la familia se han reformulado en el lenguaje religioso de la fe, la conversión y la redención.

La Gran Sociedad y sus descontentos: la prehistoria de la asistencia social basada en la fe

La retórica en torno a la asistencia social basada en la fe podría llevarnos a asumir que la presencia de organizaciones religiosas en la administración gubernamental de la asistencia social ha sido reciente y se ha producido a regañadientes. Sin embargo, como han señalado muchos historiadores, la práctica de externalizar los servicios sociales a las organizaciones religiosas no fue una innovación de la presidencia Clinton; se puso en marcha por primera vez, aunque de forma más restrictiva, como parte de la Guerra contra la Pobreza de Johnson en los años sesenta.⁴⁶ En aquel momento, esta iniciativa representó un alejamiento significativo de la práctica habitual de la asistencia social. Bajo el modelo centralizado de prestación de asistencia social establecido por el New Deal, todos los programas sociales importantes eran administrados internamente por medio de agencias federales o estatales, dejando muy poco espacio para alianzas entre gobierno y organizaciones benéficas. El presidente Johnson rompió definitivamente con esta tradición de centralismo burocrático permitiendo que las agencias públicas subvencionaran cierto tipo de instituciones sin ánimo de lucro (hospitales, colegios y universidades) y que externalizaran algunos elementos clave de los programas de asistencia social a contratistas sin ánimo de lucro. En concreto, las enmiendas a la Ley de Seguridad Social en 1967 modificaron significativamente la relación entre el gobierno y el sector sin ánimo de lucro, animando a los estados a establecer contratos de servicio con agencias de voluntariado. Las organizaciones religiosas fueron algunas de las mayores beneficiarias de este cambio en la estructura de la prestación de asistencia social. No solo participaron con entusiasmo en los programas urbanos contra la escasez creados por la Guerra contra la Pobreza, sino que sus hospitales, escuelas y universidades confesionales también recibieron enormes inyecciones de financiación a partir de la creación de Medicaid y Medicare y de los crecientes presupuestos de educación superior.⁴⁷ Como

⁴⁶ Andrew J. Morris, *The Limits of Voluntarism: Charity and Welfare from the New Deal to the Great Society*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, p. 222; Axel Schäfer, *Piety and Public Funding: Evangelicals and the State in Modern America*, Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 2012, pp. 1-18.

⁴⁷ Schäfer, *Piety and Public Funding*; Frank Adloff, «Religion and Social-Political Action: The Catholic Church, Catholic Charities, and the American Welfare State», *International Review of Sociology/Revue Internationale de Sociologie*, vol. 16, núm. 1, 2006, pp. 16-17.

apunta el historiador Axel Schäfer, estas formas descentralizadas de colaboración Iglesia-Estado apelaban tanto a la fe católica, que mantenía una larga tradición de prestación subsidiaria de asistencia social desde el siglo XIX, como a la fe protestante, que durante gran parte del siglo XX había predicado una estricta separación Iglesia-Estado —en gran medida dirigida contra el catolicismo—, pero que ahora empezaba a percibir los beneficios de la ampliación institucional. Durante este periodo, incluso las confesiones más conservadoras y aisladas del protestantismo (fundamentalistas, evangélicos y baptistas sureños) se beneficiaron de este nuevo entorno de colaboración para construir sus redes de colegios confesionales y otro tipo de instituciones.⁴⁸

Entre las distintas confesiones que participaron en los programas de asistencia social, las principales iglesias protestantes —entre ellas la Iglesia Congregacional, la Iglesia Episcopal, la Iglesia Evangélica Luterana, la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Metodista Unida, la Convención Baptista Estadounidense y los Discípulos de Cristo— fueron las más dispuestas a acomodarse a los términos de la colaboración Iglesia-Estado, en gran medida porque estaban muy implicadas en la ampliación del Estado de bienestar de aquel momento. Unidas bajo la denominación de National Council of Churches of Christ [Consejo Nacional de Iglesias de Cristo], estas confesiones fueron pioneras en apoyar el salario familiar negro de Nixon, al tiempo que defendieron opiniones sobre los anticonceptivos y el aborto que en décadas posteriores resultarían sorprendentemente liberales.⁴⁹ También favorecieron una estricta separación ideológica entre la Iglesia y el Estado, llegando incluso a apoyar decisiones de la Corte Suprema que prohibían rezar y leer la Biblia en los colegios públicos.⁵⁰ Al contrario, el evangelismo y el catolicismo conservadores siempre se mantuvieron ambivalentes sobre los compromisos que se veían obligados a asumir como proveedores de asistencia social pública y, a medida que avanzaba la década, se sintieron cada vez más incómodos con la dirección que adoptaba la legislación federal en cuestiones que afectaban a la familia, la sexualidad y la religión. Además, a medida que el evangelismo adquiría

⁴⁸ Schäfer, *Piety and Public Funding...*, pp. 13-14.

⁴⁹ Las principales iglesias apoyaban al movimiento por los derechos del bienestar siempre que se construyera en defensa de la familia. Su apoyo no se ampliaba a aquellos activistas dentro del movimiento por los derechos del bienestar que cuestionaban la propia lógica del salario masculino de sostén familiar. Véase Guida West, *The National Welfare Rights Movement: The Social Protest of Poor Women*, Nueva York, Praeger, 1981, pp. 147-171; Brian Steensland, «The Hydra and the Swords: Social Welfare and Mainline Advocacy, 1964-2000», en Robert Wuthnow y John H. Evans, *The Quiet Hand of God: Faith-Based Activism and the Public Role of Mainline Protestantism*, Berkeley, University of California Press, 2002, p. 218.

⁵⁰ Derek H. Davis, «From Engagement to Retrenchment: An Examination of First Amendment Activism by America's Mainline Churches, 1980-2000», en Wuthnow y Evans, *The Quiet Hand of God...*, pp. 317-342.

más confianza en su papel en los servicios sociales, era cada vez más consciente de la diferencia entre su particular visión de la teología pública y el testimonio social de las principales iglesias.

El contexto de cambio jurídico era muy real. Surgidas en los años cincuenta, las campañas por los derechos y las libertades civiles habían recurrido a los tribunales como forma de traducir el cambio político a una forma legal. Al encontrarse con un público receptivo en la Corte Suprema, presidido por Earl Warren (1953-1969), la abogacía progresista aprendió a eludir el dominio conservador del Congreso impulsando casos de litigio de lo más experimentales y haciéndose cada vez más experta en establecer precedentes en aspectos críticos del derecho constitucional. Durante este periodo, organizaciones como la National Association for the Advancement of Colored People [NAACP, Asociación Nacional por el Avance de Personas de Color] y American Civil Liberties Union [ACLU, Sindicato por las Libertades Civiles Estadounidenses] junto con asesores jurídicos apoyados por la National Legal Services Corporation [Corporación de Servicios Legales], lograron victorias fundamentales en materia de derechos civiles, procedimientos penales y libertad religiosa, planteando desafíos estratégicos al derecho constitucional dirigidos a anular los «poderes policiales» del Estado al respecto de la segregación racial y la regulación de la sexualidad.⁵¹

El Legal and Educational Defense Fund [Fondo de Defensa Legal y Educativa] de NAACP fue uno de los primeros organismos en perfeccionar la estrategia de la litigación de interés público. En lo que supuso un punto de inflexión en la legislación por los derechos civiles, el caso *Brown contra la Junta Educativa* (1954), la Corte Suprema dictaminó que la segregación en los colegios públicos violaba la cláusula de Protección Igualitaria de la Decimocuarta Enmienda y por lo tanto era inconstitucional; esta decisión indignó a parte del evangelismo sureño, así como al fundamentalismo (aunque en ningún caso a su totalidad).⁵² El Fondo de Defensa Legal y Educativa siguió ganando casos estratégicos, «casos de prueba», desafiando la segregación en espacios públicos como parques, hospitales de financiación pública e incluso restaurantes. Los litigantes civiles de NAACP también fueron responsables de popularizar el uso de argumentos sobre la «libertad de expresión» y la «libertad de asociación» para defender el activismo de los derechos civiles; argumentos que no tardarían en ampliarse para incluir también la «expresión sexual».⁵³

⁵¹ Steven Michael Teles, *The Rise of the Conservative Legal Movement: The Battle for Control of the Law*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2008, pp. 22-60.

⁵² Mark V. Tushnet, *Making Civil Rights Law: Thurgood Marshall and the Supreme Court, 1930-1961*, Oxford, Oxford University Press, 1996. El evangelismo sureño y el fundamentalismo estaban divididos en torno al resultado de *Brown contra la Junta Educativa*; organizaciones importantes como la Convención de Baptistas del Sur apoyaron la decisión. A este respecto, véase Rick Perlstein, *Before the Storm: Barry Goldwater and the Unmaking of the American Consensus*, Nueva York, Nation Books, 2009, p. 125.

⁵³ Maimon Schwarzschild, «Civil Rights Laws and Freedom of Speech», en Paul Finkelman, *Encyclopedia of American Civil Liberties*, Londres, Routledge, 2013, pp. 302-305.

Apoyándose en las victorias de los litigios por los derechos civiles e introduciendo sus propias innovaciones clave, la ACLU fue fundamental en la redefinición del discurso legal en torno a la sexualidad de finales del siglo XX. En una serie de casos de prueba llevados ante los tribunales en los años sesenta y setenta, la ACLU quiso establecer la noción, hasta entonces sin precedentes, de que la expresión sexual era una libertad civil fundamental y, por lo tanto, merecía protección constitucional bajo la cláusula de libertad de expresión de la Primera Enmienda. Fue la ACLU quien primero aprovechó la idea de que la privacidad doméstica —un concepto establecido tiempo atrás en el derecho de familia estatal— podría reinterpretarse para proteger el derecho a la libertad sexual en el dormitorio.⁵⁴ Después de haberse puesto a prueba en una serie de demandas a lo largo de los años cincuenta, el argumento dio finalmente sus frutos en el histórico caso *Griswold contra el estado de Connecticut* (1965), en el que se anuló una ley estatal que criminalizaba la venta de anticonceptivos, o de forma aún más notoria en el caso de *Eisenstadt contra Baird* (1972) que prescribió los poderes policiales del Estado que limitaban la venta de anticonceptivos a parejas casadas.⁵⁵ Al presentar su opinión sobre el caso *Griswold contra el estado de Connecticut*, el juez William O. Douglas argumentó que aunque «el derecho a la privacidad» no se encontraba en el texto de la Constitución, estaba implícito en las «emanaciones» de la Declaración de Derechos. La «relación íntima entre un hombre y una mujer», afirmaba Douglas, era «un recinto sagrado».⁵⁶ La idea de permitir que la policía entrara ahí era «repulsiva para la noción de privacidad que rodea la relación marital». El tribunal fue un paso más allá en el caso *Eisenstadt contra Baird* cuando amplió el derecho a la privacidad de la pareja marital al individuo, estuviera casado o no. Como explica el académico jurídico Jean L. Cohen «lo novedoso en esa jurisprudencia no fue solo la aplicación del concepto de privacidad a las relaciones maritales o a la familia construida como una entidad. Sino que la innovación radica en el intento del tribunal de articular motivos constitucionales para proteger directamente la privacidad personal y la autonomía de decisión de los individuos en relación con sus cuestiones personales "íntimas", ya surjan del entorno familiar o fuera de él».⁵⁷

La litigación estratégica desarrollada por los abogados del derecho de bienestar fue incluso más ambiciosa que la de sus predecesores. A partir de la jurisprudencia de ACLU sobre privacidad, y combinándola con

⁵⁴ Leigh Ann Wheeler, *How Sex Became a Civil Liberty*, Oxford, Oxford University Press, 2013.

⁵⁵ Sobre la relación de las sentencias de la Corte Suprema sobre la privacidad sexual y los poderes de supervisión tradicionales del Estado, véase Joanna L. Grossman y Lawrence M. Friedman, *Inside the Castle: Law and the Family in Twentieth Century America*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2011, pp. 109-141.

⁵⁶ Citado en Grossman y Friedman, *Inside the Castle...*, p. 113.

⁵⁷ Jean L. Cohen, *Regulating Intimacy: A New Legal Paradigm*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2004, p. 6.

los argumentos de NAACP sobre el proceso debido y la protección igualitaria, los abogados asociados a la Organización Nacional de Derechos del Bienestar trataron de anular los poderes policiales del Estado sobre los usuarios de la asistencia pública, situando la administración de la asistencia social dentro de los límites de la constitución federal.⁵⁸ A finales de los años sesenta, el Columbia Center for Social Welfare Policy [Centro de Política y Derechos de Bienestar Social de Columbia], en colaboración con una filial de ACLU obtuvo una victoria decisiva cuando acusó al estado de Alabama de violar el derecho a la privacidad, al proceso debido y a la protección igualitaria en su aplicación de las normas de padre sustituto. En su resolución del caso *King contra Smith* (1968), la Corte Suprema declaró que las normas de padre sustituto violaban la Ley de Seguridad Social y por lo tanto eran inconstitucionales.⁵⁹ Tras este, una serie de casos similares prohibieron a las agencias estatales de asistencia social supervisar el comportamiento sexual de las mujeres pobres, ampliando la jurisprudencia de la libertad sexual más allá del derecho de familia en sí para incluir la legislación sobre bienestar.⁶⁰ Más allá de las nociones tradicionales de intimidad doméstica consagradas en el derecho de familia estatal, la nueva jurisprudencia amplió la presunción de libertad sexual de la población rica a la pobre, de las parejas casadas a las no casadas y de la unidad familiar al individuo y, por tanto, a las mujeres, una revolución legal acumulativa que fue devastadora para el conservadurismo moral, especialmente a la luz de las restricciones que se imponían simultáneamente a la expresión pública de la religión.⁶¹

De nuevo, la litigación estratégica de la ACLU demostró ser transformadora. En dos casos clave, *Engel contra Vitale* (1962) y *Abington School District contra Schempp* (1963), los abogados de ACLU convencieron a la

⁵⁸ Martha Davis, *Brutal Need: Lawyers and the Welfare Rights Movement, 1960-1973*, New Haven (CT), Yale University Press, 1993.

⁵⁹ Premilla Nadesan, *Welfare Warriors: The Welfare Rights Movement in the United States*, Londres, Routledge, 2005, pp. 59-60.

⁶⁰ Gwendolyn Mink, *Welfare's End*, Ithaca (NY), Cornell University Press, 1998, pp. 50-61.

⁶¹ En su informe al presidente sobre el estado de la familia estadounidense, Gary Bauer, uno de los muchos asesores religiosos conservadores del presidente Reagan, transmite con intensidad el sentido del horror engrandado por esta revolución legal en el derecho de familia y del bienestar. «No era predecible, de hecho, fue una sorpresa chocante [...] que la Corte Suprema [...] emitiera una serie de sentencias que despojaron abruptamente a la familia de sus protecciones legales y que plantearan la cuestión de si la más fundamental de las instituciones estadounidenses conserva algún respaldo constitucional [...] En *King contra Smith*, *Organización por los derechos del bienestar de Nueva Jersey contra Cabill* y *El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) contra Moreno*, el tribunal acaba con los intentos de imponer el orden moral de la familia como base de la asistencia pública [...] El tribunal ha anulado los intentos del Estado de proteger la vida de los niños en el útero, de proteger el interés paterno por la vida del niño antes de su nacimiento y de respetar la autoridad de los padres sobre los hijos menores en las decisiones sobre el aborto». Gary L. Bauer, *The Family: Preserving America's Future—A Report to the President from the White House Working Group on the Family*, Washington DC, Domestic Policy Council, 1986, p. 11.

Corte Suprema de que la oración y la lectura de la Biblia obligatorias en los colegios públicos era incoherente con la cláusula sobre la religión de la Primera Enmienda que prohibía la imposición religiosa por parte del Estado. Estos casos cambiaron profundamente el equilibrio de la interpretación constitucional a favor de la separación estricta y siguieron definiendo las relaciones institucionales entre la Iglesia y el Estado durante las dos décadas siguientes. Según las disposiciones de la ley de oportunidades económicas de 1964, las organizaciones religiosas sin ánimo de lucro eran libres de prestar servicios de asistencia social financiados públicamente que estuvieran en línea con su misión religiosa, pero teóricamente no podían expresar directamente su carácter religioso mediante la exhibición de escrituras o iconografía en instalaciones financiadas con dinero público. Para cumplir estas normas, las congregaciones religiosas y las iglesias se veían obligadas a formar una organización sin ánimo de lucro independiente si querían prestar servicios sociales gubernamentales y no podían licitar a los contratos de asistencia social directamente. En el caso histórico de *Lemon contra Kurtzman*, presentado en 1971, la Corte Suprema declaró que las organizaciones «totalmente sectarias» no podrían recibir financiación gubernamental. Esta sentencia se considera el punto álgido del separacionismo legal.⁶²

La medida en que estas directrices se llevaron realmente a la práctica es cuestionable. La sentencia *Lemon* afectó indudablemente a la financiación de colegios públicos y privados, pero nunca se amplió de forma explícita a las numerosas universidades, hospitales y otros servicios de asistencia social financiados en el marco de la Guerra contra la Pobreza. Además, algunos historiadores han argumentado que incluso los proveedores religiosos más conservadores tenían rienda suelta para expresar su carácter «fundamentalmente sectario» durante este periodo, dado que las estrictas normas que regían las relaciones Iglesia-Estado pocas veces se supervisaban en la práctica.⁶³ Sin embargo, en un contexto en el que las iglesias protestantes modernizadas contaban con una amplia influencia cultural, las evangélicas y católicas consideraban que las sentencias de *Engel contra Vitale* y *Abington* eran alarmantes presagios del declive teológico. El hecho de que las principales iglesias apoyaran públicamente dichas sentencias contribuyó a su sensación de injusto aislamiento.⁶⁴

En los relatos retrospectivos de la historia moral estadounidense, quienes representan a la derecha religiosa suelen identificar al tribunal progresista de Warren como el agente de la decadencia espiritual estadounidense, haciéndolo responsable de errores como la liberalización de las leyes de obscenidad, la destrucción de la familia o la brutal expulsión de

⁶² Black, Koopman y Ryden, *Of Little Faith...*, p. 41.

⁶³ Schäfer, *Piety and Public Funding...*, pp. 6, 18, 145-147.

⁶⁴ Davis, «From Engagement to Retrenchment...», p. 328.

la religión de la vida pública.⁶⁵ Pero fue la sentencia de 1973 de *Roe contra Wade*, dictada por la Corte Suprema bajo la presidencia del conservador Burger, lo que resultó decisivo para precipitar el nacimiento de la derecha religiosa moderna. En *Roe contra Wade*, el tribunal de Burger, basándose en anteriores innovaciones de los tribunales de derecho constitucional, que además radicalizó, argumentó que el «derecho a la privacidad» debería ser lo suficientemente amplio para «recoger la libertad de una mujer sobre si concluir o no un embarazo».⁶⁶

En años posteriores, teorías feministas y *queer* denunciaron la naturaleza profundamente restrictiva de esta jurisprudencia sobre la privacidad, señalando el hecho de que favorecía una comprensión de la libertad sexual neutral respecto al género e ignoraba los efectos incapacitantes de la desigualdad sexual en la expresión sexual de las mujeres; que se planteaba en tensión con las leyes que intentan limitar la violencia doméstica y ciertas formas de abuso de la libertad sexual en el hogar; que confinaba la libertad sexual a la esfera privada y que por lo tanto legitimaba la criminalización añadida del sexo (no heterosexual o comercial) en público; y que quizás siempre estuvo destinada a proteger la libertad sexual y reproductiva de las personas heterosexuales exclusivamente.⁶⁷ Son críticas convincentes. No obstante, y a pesar de todas sus limitaciones, la revolución sexual de los tribunales que ocurrió entre los años sesenta y setenta tuvo indudablemente un papel galvanizante en la formación de la derecha religiosa.

La sentencia *Roe contra Wade* constituye en concreto el momento decisivo del surgimiento de la derecha religiosa, que empujó a la acción a testigos silenciosos y animó una coalición de fuerzas que solo unos años antes habría resultado impensable. Esta ampliación de las libertades sexuales al incluir la capacidad de una mujer de controlar su propio cuerpo era impensable para la opinión católica, que apenas acababa de salir de una década de debate sobre la moralidad del «control artificial de la natalidad»; pero también demostró ser una medida demasiado ambiciosa para evangélicos y fundamentalistas y, en pocos años, provocó una profunda reorganización de las alianzas confesionales en torno a la noción del «derecho a la vida».

⁶⁵ Jerry Falwell, *Listen, America!*, Nueva York, Doubleday, 1980, p. 222.

⁶⁶ Citado en Wheeler, *How Sex Became a Civil Liberty...*, p. 138.

⁶⁷ Catherine MacKinnon, «Privacy v. Equality: Beyond *Roe v. Wade*», en *Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1983; Martha Albertson Fineman, «Intimacy Outside of the Natural Family: The Limits of Privacy», *Connecticut Law Review*, núm. 23, 1991, pp. 955-972; Craig Willse y Dean Spade, «Freedom in a Regulatory State? Lawrence, Marriage and Biopolitics», *Widener Law Review*, núm. 11, 2005, pp. 309-329; Marc Stein, *Sexual Injustice: Supreme Court Decisions from Griswold to Roe*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2010.

La National Conference of Catholic Bishops [Conferencia Nacional de Obispos Católicos], a pesar de sentir cierto recelo, se había mantenido en silencio ante las clínicas de «planificación familiar» que Johnson había financiado desde el gobierno federal, pero ya no estaba dispuesta a transigir en la cuestión del aborto.⁶⁸ Tras aquella sentencia, los obispos realizaron un llamamiento a la desobediencia civil y no tardaron en obtener una exención oficial que eximía al personal sanitario de fe católica de realizar abortos o esterilizaciones, incluso en hospitales de financiación pública.⁶⁹ Esta fue la primera de una serie de exenciones de «cláusulas de conciencia» que el conservadurismo religioso conseguiría durante los años venideros.

La sentencia *Roe contra Wade* no fue menos significativa para el protestantismo estadounidense: No solo sacó a la luz profundas e irreparables diferencias entre el evangelismo y el protestantismo por un lado y las principales iglesias por otro, sino que además generó una nueva e inesperada alianza entre evangélicos y católicos. Esta unión no tenía precedentes pues el protestantismo estadounidense había mantenido tradicionalmente ideas relativamente liberales con respecto del aborto —liberal, según los estándares actuales— y se mantenía impasible ante la doctrina de la ley natural católica que atribuía santidad a «la vida en sí». Hasta los años sesenta, incluso las iglesias conservadoras protestantes estuvieron a favor de legalizar el aborto por motivos «no terapéuticos» dentro del primer trimestre de gestación.⁷⁰ Mientras el aborto se asociara con las políticas familiares, nacionalistas e incluso eugenésicas de la «planificación familiar» federal y mientras se realizara por motivos «no terapéuticos» dentro del contexto del matrimonio, el protestantismo de todas las confesiones estaba encantado de expresar su apoyo a la liberalización de las leyes del aborto. Después de todo, era más probable que las medidas de control de la población afectaran más a católicos migrantes y afroamericanos que a los protestantes blancos.

Sin embargo, a finales de los años sesenta, el aborto significaba algo muy distinto. En los años previos a la sentencia *Roe contra Wade*, el feminismo había redefinido el aborto como una cuestión relativa a la liberación

⁶⁸ Donald T. Critchlow, *Intended Consequences: Birth Control, Abortion, and the Federal Government in Modern America*, Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 118-119.

⁶⁹ Las llamadas Enmiendas de la Iglesia (42 U.S.C § 300a-7), que eximen a los hospitales religiosos de realizar abortos, se incluyeron inmediatamente después de la sentencia *Roe contra Wade*, en la Ley de Servicios de Salud Pública. A finales de la década, casi todos los estados habían aprobado una legislación similar que permitía al personal sanitario oponerse a tratamientos que estuvieran en contra de su conciencia religiosa. Karina Eileraas, «"Freedom of Conscience" Legislation», en Mary Zeiss Stange, Carol K. Oyster y Jane E. Sloan, *Encyclopedia of Women in Today's World Volume 1*, Londres, Sage, 2011, p. 588.

⁷⁰ Daniel K. Williams, «Sex and the Evangelicals: Gender Issues, the Sexual Revolution, and Abortion in the 1960s» en Axel Schäfer, *American Evangelicals and the 1960s*, Madison, University of Wisconsin Press, 2013, pp. 111-112.

sexual de la mujer —de sus padres, sus maridos y de la profesión sanitaria dominada por hombres—, desafiando la inevitable asociación entre la sexualidad femenina y la maternidad. Junto con las feministas, la revista *Playboy* y ACLU apoyaban abiertamente la despenalización del aborto. En el margen de una década, la liberalización de las leyes del aborto había pasado a representar todo lo que el evangelismo más temía y, en consecuencia, había tomado una postura cada vez más intransigente contra el aborto en cualquier fase del embarazo, llegando a adoptar la doctrina católica del «derecho a la vida» como propia.⁷¹ De esta alianza entre el evangelismo y el catolicismo surge la derecha religiosa.

Lo que puso en evidencia la sentencia *Roe contra Wade* fue la creciente brecha entre las iglesias evangélicas y las principales iglesias protestantes. En los años siguientes, los credos evangélico y fundamentalista matizaron su postura contra el aborto y encontraron nuevas razones para alinearse con el catolicismo, mientras que las principales confesiones seguían afirmando y, en ciertos casos, radicalizando sus opiniones a favor del aborto legal. Lo que resultó más conflictivo para los evangélicos fue el hecho de que las principales iglesias solían basar su apoyo al aborto en la doctrina constitucional de la «libertad religiosa», argumentando efectivamente que la libertad personal de conciencia con respecto de la religión implica «privacidad» con respecto de la sexualidad. Un año después de la sentencia *Roe contra Wade*, una asociación liderada por metodistas formó la Religious Coalition for Abortion Rights [Coalición Religiosa por el Derecho al Aborto], un grupo ecuménico que justificaba su apoyo del derecho al aborto apelando a las «garantías constitucionales de privacidad y libertad religiosa». Aunque las iglesias principales siguieron poniendo condiciones para apoyar el aborto legal, la Iglesia Unida de Cristo, integrante de la Coalición Religiosa por el Derecho al Aborto, recomendaba la «derogación de todas las prohibiciones legales de los abortos que realicen profesionales sanitarios».⁷² Para el evangelismo, esta postura era intolerable. Apenas habían perdonado que el Consejo Nacional de Iglesias, con importante presencia, apoyara la decisión de la Corte Suprema de prohibir rezar y leer la Biblia en colegios públicos, pero el alcance de esta doctrina ya privatizada de la libertad religiosa que abarcaba el derecho privado al placer sexual representaba un acto de profanación absoluta.

Estas escisiones interconfesionales se dieron en un momento en el que el evangelismo, tanto a la «derecha» como a la «izquierda» del espectro,⁷³

⁷¹ *Ibidem*, pp. 112-113.

⁷² Davis, «From Engagement to Retrenchment...», p. 334.

⁷³ Aquí utilizo los términos «izquierda» y «derecha» con precaución, ya que no transmiten un sentido matizado de las afiliaciones políticas reales. El evangelismo de izquierdas, con figuras como Ronald Sider y Jim Wallis, está a favor de políticas sociales históricamente

era cada vez más consciente del poder que tenía para interferir en el proceso electoral formal. La elección de Jimmy Carter en 1976, abiertamente devoto evangélico, junto con el auge de la contracultural «generación de Jesús» en los campus universitarios, confirmó la creciente sospecha de que el estatus hasta entonces incontestable de las principales iglesias empezaba a estar amenazado. El evangelismo entendía ahora su poder para colocar y deponer líderes políticos, algo que no pasó desapercibido para sus compañeros protestantes. En su estudio de 1972 *Why Conservative Churches Are Growing* [Por qué crecen las iglesias conservadoras], el ministro metodista Dean Kelley advertía a las iglesias liberales de que era probable que su hegemonía cultural se redujera ante la marea creciente de sectores en su día marginales.⁷⁴ Como hicieron otras voces críticas del Consejo Nacional de Iglesias, Kelley se preguntaba en voz alta si la diluida religiosidad de las iglesias modernizadas era responsable del actual estado de cosas.

A principios de los años setenta, no estaba claro si el futuro del movimiento evangélico pertenecía a la «izquierda» o a la «derecha». En cualquier caso, era la «izquierda» de la justicia social la que era más visible para el público en general y la más activa en incitar al evangelismo a la acción social.⁷⁵ Sin embargo, los evangelistas de todas las convicciones estaban desilusionados con el hecho de que Carter solo defendiera los valores morales de forma retórica. A medida que la alianza entre el neoconservadurismo y el neoliberalismo se hizo más fuerte a lo largo de la década, fue la derecha evangélica la que acabó por recoger los beneficios. A finales de la década, el estrategia político de la Nueva Derecha, Paul Weyruch, se acercó al ministro fundamentalista Jerry Falwell, bajo el cálculo de que una alianza ecuménica de conservadurismo religioso bajo el liderazgo de Falwell podría verse beneficiada del impulso de la campaña electoral de Reagan. La creación de Moral Majority [Mayoría Moral] marcó el inicio de una duradera alianza entre el conservadurismo religioso y el neoliberalismo del libre mercado (formando en común la llamada Nueva Derecha), así como entre la Nueva Derecha y

progresistas, como la redistribución del bienestar y el ecologismo, mientras que el evangelismo de derechas defiende las virtudes del libre mercado y la empresa individual. Sin embargo, tanto el evangelismo de izquierda como de derecha está comprometido con una política moral conservadora. En general, se oponen al aborto y a la homosexualidad, aunque la izquierda evangélica intenta promover una política de vida más amplia que incluiría la oposición a la pena de muerte, el control de armas y el ecologismo junto con la oposición al aborto. La política moral compartida es una de las razones por las que la influencia de la izquierda evangélica pudo quedar eclipsada tan rápidamente por la derecha en la década de 1970; en tanto la derecha religiosa dedicó la mayoría de su tiempo a expresar su apoyo a los valores morales, la izquierda se vio superada y tuvo poco margen de maniobra para impugnar su política económica.

⁷⁴ Dean M. Kelley, *Why Conservative Churches Are Growing: A Study in Sociology of Religion*, Nueva York, Harper & Row, 1972.

⁷⁵ Stephen P. Miller, *The Age of Evangelicalism: America's Born-Again Years*, Oxford, Oxford University Press, 2014, pp. 34-40.

el Partido Republicano. No todo el conservadurismo religioso estaba comprometido con el capitalismo del libre mercado —sin duda no lo estaban la mayoría de los católicos—, ni tampoco todo el neoliberalismo era religioso ni [social]conservador, pero su alianza lograría dominar la reforma de la política social durante las próximas décadas. Lo que les unía era una hostilidad compartida contra la nueva jurisprudencia de la privacidad, que entendían como generadora de un derecho constitucional positivo de libertad sexual.⁷⁶ El neoliberalismo y el conservadurismo religioso se oponían a esta jurisprudencia por motivos diferentes: el neoliberalismo porque parecía justificar la subvención estatal de decisiones vitales irresponsables entre la población pobre, y el conservadurismo religioso porque parecía minar los pilares morales fundamentales de la familia. Sin embargo, mientras que las críticas de la izquierda siempre han lamentado (y con razón) la restricción de la libertad sexual al ámbito privado, el neoliberalismo y el conservadurismo religioso nunca han estado convencidos de que se fuera a quedar ahí. Al contrario, temían que el derecho a la privacidad sexual tuviera dramáticos efectos transformadores en la vida *pública* de la nación, y como tal había que oponerse a él a cualquier precio.

La elección de Ronald Reagan anunció el declive a largo plazo de las principales iglesias tanto en términos numéricos como de influencia política. Durante las décadas posteriores, el evangelismo y el catolicismo tradicional se adentrarían en una campaña concertada para arrebatarse el discurso de la «libertad religiosa» a las iglesias principales y redefinirlo en términos mucho más contundentes, como el derecho de la religión desprivatizada a imponer la ley moral en el ámbito público. El Consejo Nacional de Iglesias había sido un defensor crucial de la separación Iglesia-Estado en los años de posguerra, pero apenas ha participado en las recientes deliberaciones legislativas y judiciales en torno a la libertad religiosa, cediendo el terreno a efectos prácticos a la derecha religiosa.⁷⁷ Aunque las organizaciones religiosas tradicionales siguen siendo agentes principales en la prestación de asistencia social, su influencia en la forma efectiva de la política social se ha reducido significativamente desde la elección de Reagan.⁷⁸ A medida que republicanos y nuevos demócratas se aferraban a la retórica de la crisis presupuestaria y de la urgente reforma de la asistencia social, y mientras las congregaciones tradicionales comenzaban a expresar opiniones políticas a la derecha de sus líderes, el Consejo Nacional de Iglesias se encontró a la defensiva. Al contrario, la voz de la derecha evangélica resonaba acompasado con el giro cada vez más punitivo y pedagógico de la reforma de la asistencia social.

⁷⁶ Como indiqué en el capítulo tres, existe la idea errónea de que el derecho a la intimidad sexual se basa en el pensamiento jurídico neoliberal, cuando en realidad los juristas neoliberales siempre se han opuesto rotundamente a esta innovación.

⁷⁷ Davis, «From Engagement to Retrenchment...», p. 317.

⁷⁸ Steensland, «The Hydra and the Swords...», pp. 214-222.

Ya en 1965, el editor del periódico evangélico más importante, *Christianity Today*, Carl F. H. Henry, urgía a sus lectores a explotar su creciente presencia en el terreno del bienestar social para contrarrestar la influencia modernizadora de las iglesias principales. Escrito en un momento en el que el Consejo Nacional de Iglesias aún era la voz religiosa dominante en las políticas sociales, Henry apelaba al evangelismo a abandonar su aversión tradicional por la política y a reclamar su auténtica vocación como guardianes de la ley moral. La llamada a las armas de Henry presagiaba argumentos que se volverían omnipresentes y cada vez más estridentes en las décadas siguientes. Denunciaba que el protestantismo liberal había diluido la misión histórica de la teología cristiana al intentar alcanzar el Reino de Dios en la tierra por medios sociológicos. La «moderna disolución de la teología cristiana histórica» en los principales círculos protestantes «era en gran medida responsable de comprometer el mensaje y los poderes del cristianismo institucional». ⁷⁹ Al excluir «las facetas redentoras sobrenaturales de la fe cristiana» de su trabajo de bienestar social, las organizaciones religiosas principales han «modificado el contenido debido de la ética cristiana» y han logrado influencia social al precio de la integridad teológica. ⁸⁰ Ante esta abdicación histórica, recaía en el evangelismo la tarea de revivir la «teología de las Escrituras» en el bienestar social. Más allá de la redistribución material de la riqueza, la auténtica asistencia social residía en la experiencia marcadamente «sobrenatural» de la redención (asociada en el imaginario colectivo con la experiencia de volver a nacer). El trabajo de redención solo podía lograrse restaurando la familia en su debido lugar dentro de un orden moral cristiano. «La preocupación social cristiana evangélica se dirige en primer lugar a la familia como unidad básica de la sociedad. La pasión social por "un único mundo" que al mismo tiempo no se indigna ante el divorcio, la infidelidad o la vagancia en el hogar no parece sincera. Dado que el liberalismo no ve la sociedad como un macrocosmos de la familia, es en vano construir una nueva sociedad». ⁸¹

En los años siguientes a la elección de Ronald Reagan, el evangelismo se esforzó por definir los términos de la colaboración Iglesia-Estado, empujando por ampliar su presencia en el terreno del bienestar social, al mismo tiempo que rechazaba la interpretación de la libertad religiosa privada que las iglesias principales habían abrazado. Incluso cuando criticaban los pecados del Estado de bienestar de la Gran Sociedad, el evangelismo intentaba imaginar —y finalmente lo consiguió— una forma de asistencia social que fuese fiel a los preceptos fundamentales de la moralidad cristiana. En su

⁷⁹ Carl F. H. Henry, «Evangelicals in the Social Struggle», *Christianity Today*, núm. 10, 8 de octubre de 1965, p. 4.

⁸⁰ *Ibidem*.

⁸¹ *Ibidem*, p. 9.

éxito de ventas *Listen, America!* Jerry Falwell citaba en numerosas ocasiones a Milton Friedman y apelaba al cristianismo conservador a organizar un frente común contra los «proyectos de asistencia social de la izquierda», pero incluso admitía que la asistencia social «no siempre estaba mal» y que le hacía falta una reforma, no eliminarla por completo.⁸² El estratega jefe de la Mayoría Moral, el experto político Paul Weyrich, ofrece una perspectiva más fiable de la agenda de política social de la derecha religiosa. Un estudio publicado por el Institute for Cultural Conservatism de Weyrich [Instituto para el Conservadurismo Cultural] en 1987 explica cuidadosamente la postura del conservadurismo religioso sobre el bienestar social: «el conservadurismo cultural» no se opone enfáticamente a la asistencia social como tal, pero sí intenta poner en marcha una forma de «asistencia social cultural» diseñada para inculcar valores morales tradicionales entre la población pobre estadounidense.⁸³ Para lograrlo, el Estado tendría que incorporar a las iglesias y a sus organizaciones afiliadas a las estructuras de la asistencia social, preferiblemente sin entrar en su integridad teológica. «En lugar de liderar la batalla contra la asistencia social, el conservadurismo libraría la batalla por conseguirla».⁸⁴

Estructuras de mediación: un programa para la asistencia social basada en la fe

En 1977, el sociólogo Peter Berger y el teólogo Richard John Neuhaus colaboraron en un pequeño libro, *To Empower People* [Para empoderar a la gente], que desempeñaría un papel central en el proyecto de la reforma de la asistencia social-conservadora.⁸⁵ Publicado por Enterprise Institute como el primero de una serie de estudios sobre las «estructuras de mediación», el texto recita muchas de las quejas neoconservadoras familiares contra la ampliación de la asistencia social de la Gran Sociedad, pero se distingue de ellas al otorgar un papel central a la religión en cualquier futura reforma del Estado de bienestar. Al reflexionar sobre los éxitos y los fracasos de la Guerra contra la Pobreza, Berger y Neuhaus alaban a Johnson por devolver a las iglesias a la senda del Estado de bienestar mientras culpan a las agencias federales de eliminar la autoridad moral única de la religión. El experimento de descentralización de Johnson, si bien loable, se había puesto en marcha en el peor momento posible, un momento histórico en

⁸² Falwell, *Listen, America!...*, pp. 18, 258.

⁸³ Institute for Cultural Conservatism, *Cultural Conservatism: A National Agenda*, Lanham (MD), Free Congress Research and Education Foundation, 1987, pp. 83-84.

⁸⁴ *Ibidem*, p. 85.

⁸⁵ Peter L. Berger y Richard John Neuhaus, «To Empower People: From State to Civil Society», en Michael Novak, *To Empower People*, Washington DC, American Enterprise Institute Press, [1977] 1996, pp. 157-214.

el que la Corte Suprema y las agencias de asistencia social federal fueron invadidas por las élites progresistas que pretendían regular, desde arriba, todos los aspectos de la prestación de asistencia social. La orientación progresista de la legislación federal sobre bienestar arrebató al Estado de bienestar su función de legitimación general, la de conservar las virtudes cívicas, y socavaba terriblemente las estructuras naturales morales de la Iglesia, la comunidad y la familia. «Sin procesos de mediación institucionalmente fiables, el orden político se separa de los valores y las realidades de la vida individual». Privado de su base moral, el orden político queda "deslegitimado".⁸⁶

Las entidades de beneficencia religiosa dominantes, según Berger y Neuhaus, no fueron menos culpables. Estas instituciones habían perdido cualquier credibilidad que antes tuvieran al no lograr rebatir los dictámenes cada vez más hostiles de la Corte Suprema y ceder ante los mandatos secularizantes del Estado. «La pérdida de la identidad religiosa y cultural se ve favorecida [...] por la dinámica de profesionalización de las instituciones religiosas y por el hecho de que las iglesias no apoyen a sus organismos ni insistan en que las políticas públicas respeten su identidad».⁸⁷ Grandes organizaciones de beneficencia religiosa como los Lutheran Social Services corrían el riesgo de convertirse en «pseudoagencias gubernamentales debido a los poderes de financiación, certificación y similares».⁸⁸ Así, aunque las asociaciones religiosas hubieran asumido una presencia pública mucho mayor en el ámbito de los servicios de asistencia pública, la religión como tal se había reprivatizado progresivamente y había sido eliminada del terreno público. En concreto, Berger y Neuhaus denuncian a las principales confesiones protestantes por su complicidad en este proceso: al pregonar una doctrina de «libertad religiosa» que niega la mera posibilidad de religiosidad pública, las iglesias principales veían comprometida su capacidad de aportar algo de valor en el terreno de los servicios sociales. «El liberalismo estadounidense es prácticamente impecable en su compromiso con la libertad religiosa de los individuos», señalaban, pero «la libertad a defender siempre es la de la religión privada».⁸⁹

En un libro publicado años después, *The Naked Public Square* [La plaza pública desnuda], Neuhaus formularía esta crítica en unos términos incluso más estridentes. La deslegitimación de la autoridad religiosa, afirmaba ahora, no era fundamentalmente culpa de la élite liberal burocrática ni de la Nueva Izquierda antiautoritaria, sino de las propias iglesias principales. «Las iglesias no pueden mantenerse al margen de la creciente crisis

⁸⁶ *Ibidem*, p. 159.

⁸⁷ *Ibidem*, pp. 187-188.

⁸⁸ *Ibidem*, p. 187.

⁸⁹ *Ibidem*, p. 161.

de legitimidad de nuestra vida pública. Son en gran medida responsables de ella». ⁹⁰ Al aceptar los dictámenes de la Corte Suprema que prohibían el rezo en las escuelas públicas e ilegalizaban el sectarismo en los servicios de asistencia social, afirmando la nueva jurisprudencia en torno a la sexualidad que culminó en la sentencia *Roe contra Wade*, las principales iglesias habían garantizado su propia irrelevancia política. «El programa público de muchas iglesias principales», comentaba Neuhaus con ironía, «es difícilmente distinguible del programa del Sindicato por las Libertades Civiles para la eliminación de la influencia religiosa de la vida estadounidense». ⁹¹ Así, mientras que los derechos privados para la libertad sexual se exhibían contra las prerrogativas de la familia y de la fe, la religión en sí misma se veía privada de sus propias libertades institucionales. ⁹² Enfrentados a lo que entendían como una crisis general de legitimidad, Berger y Neuhaus apelaban a una interpretación radicalmente nueva del derecho constitucional. «El muro de separación entre la Iglesia y el Estado (la frase es de Jefferson, no de la Constitución) es un mito que hace falta repensar desde hace mucho», anunciaban. ⁹³ Aunque se declaraban «profundamente comprometidos con las cláusulas religiosas de la Primera Enmienda» insistían en que la prohibición de establecer una religión de Estado no debería entenderse como una «exigencia de separación absoluta». Más bien, la libertad religiosa debería interpretarse como lo que permita el «libre ejercicio» de *todas las confesiones* en el espacio público.

La sólida influencia de la propuesta de Berger y Neuhaus para la reforma de la asistencia social puede quizás atribuirse al hecho de que haya mediado con tanta pericia entre las visiones neoliberal y neoconservadora de lo social. Como muchos defensores neoliberales de la devolución de la asistencia social, Berger y Neuhaus no estaban preparados para abandonar el experimento de Johnson de la descentralización política, sino que argumentaban en su lugar que no se había desarrollado lo suficiente. En esencia, a lo que apelaban era a un federalismo más radical y a una devolución más integral de los poderes del gobierno federal a los estados y de los estados a la sociedad civil. Sin embargo, al mismo tiempo, Berger y Neuhaus eran inflexibles en cuanto a que «la devolución de las responsabilidades del gobierno» no debería ser «equivalente a dismantelar el Estado de bienestar». ⁹⁴ A este respecto, su posición convergía con la del neoconservadurismo, que se mantenía unido a los principios fundamentales del Estado de bienestar del New Deal incluso cuando denunciaba los

⁹⁰ Richard John Neuhaus, *The Naked Public Square: Religion and Democracy in America*, 2.^a ed., Grand Rapids (MI), Eerdmans, 1986 [1984], p. 142.

⁹¹ *Ibidem*, p. 137.

⁹² Berger y Neuhaus, «To Empower People...», p. 161.

⁹³ *Ibidem*, p. 188.

⁹⁴ *Ibidem*, p. 163.

terribles fallos morales de la Gran Sociedad de Johnson: «Retóricas partisanas aparte, pocas personas se plantean seriamente desmantelar el Estado de bienestar. El debate serio es cómo y en qué medida debería ampliarse». ⁹⁵ Aun así, ofrecían un planteamiento institucional mucho más creativo para el problema de la reforma de la asistencia social de lo que se le había ocurrido al neoconservadurismo.

La contribución específica de Berger y Neuhaus a este debate se encuentra en el concepto de «estructuras de mediación». Argumentaban que la reforma de la asistencia social habría tenido más posibilidades de éxito si se hubiera canalizado mediante las «estructuras de mediación» de la sociedad civil, definidas como «aquellas instituciones situadas entre el individuo en su vida privada y las grandes instituciones de la vida pública». ⁹⁶ Más que dictar la forma administrativa de la prestación de la asistencia social desde arriba, el gobierno federal haría mejor delegando sus servicios a las instituciones seminaturales preexistentes como el «vecindario, la familia, la Iglesia y las asociaciones de voluntariado». Y en lugar de dictar leyes desde arriba, leyes que demasiadas veces tenían consecuencias involuntarias y negativas, el gobierno debería autorizar que estas instituciones, en concreto las instituciones religiosas, dictaran sus propias formas de legitimidad. De esta manera, la autoridad moral no se perdería sino que se transmitiría hacia abajo y se reinvertiría en las «estructuras de mediación» de la Iglesia, la comunidad y la familia. En lugar de diluir el propósito moral de la asistencia social, la descentralización lo reforzaría delegando la autoridad en las entidades con más experiencia en hacer cumplir la ley moral.

Estaba claro desde el principio que esta agenda reformista necesitaría de una ambiciosa campaña de reforma administrativa y legal. Berger y Neuhaus fueron los primeros en comprender la importancia del derecho constitucional para el proyecto de poner en marcha la asistencia social basada en la fe; y Neuhaus fue el primer teólogo que tradujo la religiosidad pública de la nueva derecha cristiana a una nueva doctrina integral de libertad religiosa, que no tardó en volverse hegemónica en la jurisprudencia reciente sobre la relación Iglesia-Estado. Ya en *The Naked Public Square* (1984), Neuhaus apelaba a las organizaciones religiosas a rechazar la prohibición contra la expresión religiosa enunciada por las recientes sentencias de la Corte Suprema, urgiéndoles en su lugar a abrazar abiertamente la «elección sectaria». ⁹⁷ La visión de Neuhaus de la libertad religiosa era radical, incluso insurreccional: en último término, entendía la religión como participante en un orden de verdad destinado a superar y a anular las leyes del Estado siempre que este último entrara en conflicto con la ley moral.

⁹⁵ *Ibíd.*, p. 157.

⁹⁶ *Ibíd.*, p. 158.

⁹⁷ Neuhaus, *The Naked Public Square...*, p. 118.

«Nociones muy básicas de libertad religiosa», anunciaba, «dependen de una comprensión de la religión como *portadora de la verdad trascendente a la que la nación debe rendir cuentas*».⁹⁸ La libertad religiosa, desde este punto de vista, otorga el derecho de hacer valer la ley moral absoluta por encima de la ley federal.

En aspectos fundamentales, las trayectorias de Berger y Neuhaus son testigo de las vicisitudes históricas del protestantismo estadounidense en su cambiante relación con el Estado. Antiguos luteranos activamente implicados en el movimiento por los derechos civiles de los años sesenta, tanto Neuhaus como Berger habían dado la espalda a la Nueva Izquierda contracultural en los años setenta para abrazar una variante teológica del neoconservadurismo y el neoliberalismo antiimpuestos de la revolución Reagan. Neuhaus comenzó su carrera como pastor luterano en una iglesia mayoritariamente negra situada en la barriada Bedford-Stuyvesant en Nueva York. Junto con muchos de los compañeros del alto clero, Neuhaus fue un participante activo e incluso militante en los movimientos por los derechos civiles y contra la guerra. Junto con el rabino Abraham Joshua Heschel y el padre Daniel Berrigan, cofundó la asociación Clergy and Laymen Concerned about Vietnam [CALCAV, Clero y Laicos Preocupados por Vietnam] en 1965, grupo interconfesional comprometido con la protesta visionaria y con la objeción de conciencia, que más tarde contó con Martin Luther King entre sus integrantes.⁹⁹ Berger, hombre laico luterano y que se definía a sí mismo como conservador, también participó en la organización. Sin embargo, a finales de los años sesenta, Neuhaus y Berger se encontraban cada vez más incómodos con la dirección a la que se dirigía la izquierda. El movimiento por los derechos civiles perdía terreno rápidamente para cederlo al Black Power militante, el movimiento contra la guerra dejaba paso a la Nueva Izquierda contracultural y la Nueva Izquierda en sí misma se fragmentaba en distintas tendencias emancipatorias centradas en la sexualidad y el feminismo. En su momento de mayor militancia, Neuhaus había defendido la tradición religiosa de la objeción de conciencia como una respuesta éticamente justificada al abuso del poder del Estado, pero nunca se había cuestionado la legitimidad de la nación en sí misma, mucho menos de la familia. Los nuevos movimientos sociales se dedicaban precisamente a eso: el antipatriotismo del Black Power y los movimientos contra la guerra, el antiautoritarismo de la nueva generación de estudiantes activistas y, por encima de todo, la crítica a la familia, que era un elemento tan central del movimiento por la liberación de las

⁹⁸ *Ibidem*, p. 142. Cursiva de la autora.

⁹⁹ Damon Linker, *The Theocons: Secular America Under Siege*, Nueva York, Anchor Books, 2007, pp. 18-19; Randy Boyagada, *Richard John Neuhaus: A Life in the Public Square*, Nueva York, Random House, 2015, pp. 131-134.

mujeres y de la población homosexual, convencieron a Berger y a Neuhaus de que ya no tenían nada en común con la izquierda.

Inevitablemente, al rechazar estas nuevas expresiones izquierdistas, Berger y Neuhaus pasaron a cuestionar el activismo social de las iglesias principales en las que ellos mismos habían estado tan implicados. Como muchas otras personas que gravitaban hacia la nueva derecha religiosa en esta época, la salida de Neuhaus del Consejo Nacional de Iglesias principales fue impulsada por la sentencia de *Roe contra Wade* de 1973 y por un creciente sentimiento de que el reconocimiento del «derecho a la privacidad» de la Corte Suprema autorizaba la liberación de las mujeres de la familia. En una reflexión temprana sobre la liberalización de las leyes del aborto a nivel estatal, Neuhaus planteó una analogía entre los derechos del no nacido y los derechos civiles que durante tanto tiempo se habían negado a la población afroamericana; una amalgama de estados fetal y cívico de victimismo que pronto se convertiría en sentido común en la derecha religiosa.¹⁰⁰ A mediados de los años setenta, Neuhaus se retiró oficialmente del CALCAV y comenzó a distanciarse públicamente de las iglesias principales, cuyo progresismo social, aunque moderado, consideraba cómplice de algún modo del declive político y teológico de la izquierda en general. En 1975, Neuhaus y Berger crearon conjuntamente un grupo de líderes eclesiásticos destacados para redactar el *Hartford Appeal for Theological Affirmation* [Llamamiento de Hartford para la afirmación teológica], un manifiesto antimodernista que denunciaba con dureza el activismo del evangelio social de las iglesias principales.¹⁰¹ En este punto, Neuhaus empezó a considerarse observador crítico de la emergente Derecha Cristiana: aunque rechazaba su populismo, también intentó, a través de sus escritos y su trabajo institucional, canalizar su fervor escatológico y profético de una forma más respetable y políticamente aceptable.¹⁰²

A finales de los años setenta, Neuhaus se había posicionado entre la nueva derecha cristiana y el movimiento neoconservador, por un lado, y entre católicos y evangélicos conservadores, por otro.¹⁰³ En 1981, junto con el neoconservador católico Michael Novak y el socialdemócrata anticomunista Penn Kemble, cofundó el Institute on Religion and

¹⁰⁰ Boyagada, *Richard John Neuhaus...*, pp. 160-163.

¹⁰¹ Peter Berger y Richard John Neuhaus, *Against the World for the World: The Hartford Appeal and the Future of American Religion*, Nueva York, Seabury Press, 1976; Linker, *The Thecons...*, p. 48; Boyagada, *Richard John Neuhaus...*, pp. 179-185.

¹⁰² Robert B. Horwitz ofrece este comentario tan perspicaz sobre la relación de Neuhaus con la derecha religiosa: «*The Naked Public Square* básicamente plantea, de forma más moderada y aceptablemente erudita, los argumentos que ofrecen los nuevos incondicionales de la derecha cristiana Jerry Flawell y Tim LaHaye. El particular talento de Neuhaus estaba en un extremismo aparentemente razonable y tranquilo». Robert B. Horwitz, *America's Right: Anti-Establishment Conservatism from Goldwater to the Tea Party*, Londres, Polity, 2013, p. 126.

¹⁰³ Horwitz, *America's Right...*, p. 125.

Democracy [Instituto sobre Religión y Democracia]. Abrazando la causa de la «libertad religiosa», el instituto se propuso reducir la influencia del Consejo Nacional de Iglesias en el país y enfrentarse al mismo tiempo a la alianza entre la teología de liberación católica y el comunismo en América Central.¹⁰⁴ Neuhaus fundó más adelante el Institute on Religion and Public Life [Instituto sobre Religión y Vida Pública], dedicado a la causa de la «libertad religiosa» en las políticas nacionales, y su periódico asociado *First Things*, que publicaba el trabajo de neoconservadores, evangélicos conservadores y católicos.

Tras abandonar la Iglesia luterana y habiéndose convertido al catolicismo en 1990, Neuhaus resultó fundamental para consolidar la alianza entre el evangelismo y el catolicismo. Junto con su amigo Charles Colson, el director del programa de Ministerios de la Hermandad Penitenciaria, ayudó a redactar el compromiso ecuménico, «Evangélicos y católicos unidos (1994)», que definía los términos de una agenda política y legal común para restaurar la ley moral.¹⁰⁵ El documento fue fundamental para unir a católicos y evangélicos en torno a las causas gemelas de la «libertad religiosa» (un concepto respaldado por el Segundo Concilio Vaticano, pero con profundas raíces en el imaginario protestante estadounidense) y del «derecho a la vida» (antes exclusivo del catolicismo, pero ahora defendido apasionadamente por los evangélicos).¹⁰⁶ La religión, anunciaba, es «fundamental en nuestro orden legal», pero «los estadounidenses [estaban] alejándose de las verdades constitutivas de este experimento de libertad ordenada, a menudo desafiándolas explícitamente». La restauración de este orden constitucional originario exigiría una virtuosa campaña para defender la «libertad religiosa» en todos los aspectos de la vida estadounidense. El documento continuaba explicando cuidadosamente la relación mutuamente exclusiva entre la «libertad religiosa» y la «tolerancia moral»: mientras que la tradición estadounidense protestante se define por su tolerancia con las fes disidentes, la libertad religiosa en sí exige una *intolerancia* radical ante lo no normativo, es decir, la expresión inmoral de la sexualidad. «Se deben realizar todos los esfuerzos posibles para cultivar la moralidad de la honestidad, la observancia de la ley, el trabajo, los cuidados, la castidad, el respeto mutuo entre los sexos y la preparación para el matrimonio, la paternidad y la familia», proclaman los autores; «rechazamos la demanda de que en todas estas áreas o en cualquiera de ellas, la "tolerancia" exija la promoción del equivalente moral entre lo normativo y el desvío de la norma».

¹⁰⁴ Boyagada, *Richard John Neuhaus...*, pp. 223-226.

¹⁰⁵ «Evangelicals and Catholics Together: The Christian Mission in the Third Millennium», *First Things*, mayo 1994.

¹⁰⁶ Entre los firmantes del compromiso se encontraban estudiosos del derecho natural como Robert P. George y Mary Ann Glendon, que se convertirían en poderosas voces católicas a favor de la libertad religiosa.

Aquí encontramos un lúcido planteamiento de la nueva política de la libertad religiosa y un claro reconocimiento de su propósito prohibitivo. En último término, es un respeto compartido por la ley moral, así como un deseo compartido por prohibir cierta expresión de la sexualidad, lo que permite que evangélicos y católicos pongan de lado sus diferencias de doctrina y se embarquen en una campaña militante por defender el lugar de la religión en el ámbito público. El lenguaje normativo de la desviación y la patología acuñado por las ciencias médicas y sociales de los siglos XIX y XX se mezcla aquí con un vocabulario más antiguo de ley religiosa y se considera profano. Efectivamente, el evangelismo se acerca al catolicismo en su voluntad de abrazar una teología tomista-aristotélica de la ley natural que redefine la desviación sexual y de género como un crimen contra el orden divino de la naturaleza.¹⁰⁷ Promovida por el Vaticano con Juan Pablo II y utilizada como arma arrojadiza e instrumento de casuística jurídica por la llamada nueva academia de la ley natural, la filosofía tomista de la naturaleza se presenta como el medio más prometedor de rebatir las demandas antinormativas de la «teoría de género» en el terreno público.¹⁰⁸ Sin llevar el debate al terreno de la normatividad, sino apelando a un orden superior de la ley natural y divina que no tolera pecado. La libertad religiosa, según la define la derecha religiosa, no es intolerante con la inmoralidad sexual de forma accidental o marginal. En su lugar, como intuyó Tocqueville, se define por su absoluto deseo de anular dichas prácticas y se considera autorizada por la ley divina para hacerlo.¹⁰⁹

Peter Berger, por su parte, pertenece a una generación de sociólogos de posguerra que aceptaban la tesis de Weber sobre la secularización como algo cercano al hecho histórico. Sin embargo, Berger también era

¹⁰⁷ Debido a su compromiso con la experiencia no mediada de la gracia, evangélicos y protestantes a menudo han sido bastante reacios a abrazar la filosofía escolástica de la ley natural. Sin embargo, este escepticismo ha disminuido notablemente en los últimos años, tal vez debido a la mayor disposición de los evangélicos a presentar reclamaciones legales. Véase Jesse Covington, Bryan T. McGraw y Micah Watson, *Natural Law and Evangelical Political Thought*, Lanham (MD), Lexington Books, 2012.

¹⁰⁸ Sobre la movilización política de la teoría del derecho natural por parte del Vaticano, véase Mary Anne Case, «After Gender the Destruction of Man? The Vatican's Nightmare Vision of the "Gender Agenda" for Law», *Pace Law Review*, vol. 31, núm. 3, 2011, pp. 802-817. Sobre los filósofos de la nueva ley natural y su influencia en el derecho constitucional, véase Nicholas C. Bamforth y David A. J. Richards, *Patriarchal Religion, Sexuality and Gender: A Critique of New Natural Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.

¹⁰⁹ La teoría postsecular que pretende crear un compromiso armonioso entre una ética sexual antinormativa y las reivindicaciones de la fe pública comprende mal la nueva política de libertad religiosa y no está preparada para abordar sus ambiciones legislativas y prohibitivas. Jackobsen y Pellegrini llevan a cabo un valiente intento de hacer precisamente esto al proponer una noción alternativa de «libertad religiosa» que se despoja de toda referencia a la «ley moral». Sin embargo, la fusión entre la «libertad religiosa» y la «ley moral» es la innovación definitoria de la nueva derecha religiosa y no puede ser simplemente eliminada. Janet R. Jakobsen y Ann Pellegrini, *Love the Sin: Sexual Regulation and the Limits of Tolerance*, Nueva York, New York University Press, 2003.

particularmente crítico con la influencia desmoralizante de la secularización en la sociedad estadounidense y, en privado, nostálgico de un tiempo en el que la religión desempeñaba un papel mucho más público y prescriptivo en la vida social.¹¹⁰ Al intervenir en 1971 en la Consultation on Church Union [Consulta para la Unión de la Iglesia], una coalición de confesiones liberales protestantes formada varios años antes con el objetivo de crear una única Iglesia ecuménica, Berger se refirió públicamente a sus primeros trabajos, sugiriendo que tanto él como sus compañeros sociólogos podrían haberse equivocado al proyectar la secularización de la sociedad moderna con demasiada confianza en el futuro a largo plazo.¹¹¹ Según sugería Berger, en lugar de una continuación de las tendencias históricas, lo que se hacía cada vez más evidente era «un hambre de respuestas religiosas entre personas de muy diversas clases, un hambre cada vez más extendida y más profunda», apuntando a la «posible gran inversión del proceso de secularización».¹¹² Cualquiera que fuera el resultado de estas tendencias, Berger dudaba que las iglesias principales, con sus características actuales, fueran capaces de responder al nuevo deseo de religión pública. Era más probable que las beneficiarias de este cambio fueran las iglesias evangélicas, que nunca habían confundido su misión con la del Estado secular. «Si va a haber un renacimiento de la religión, sus protagonistas *no* serán las personas que han caído en la tentación de ser "relevantes para el hombre moderno" [...] Los años de fe no los marca el diálogo, sino la *proclamación*».¹¹³ Berger pasaría el resto de su carrera intelectual revisando su trabajo anterior sobre el pluralismo secular y estudiando las implicaciones políticas del evangelismo resurgente. Como director del Institute of Culture, Religion and World Affairs [CURA, Instituto de Cultura, Religión y Asuntos del Mundo] en la Universidad de Boston, Berger trabajó en una versión revisada de la ética protestante de Weber.¹¹⁴ Al señalar el resurgir internacional del protestantismo evangélico y pentecostal, Berger argumentaba que las variedades renacidas de cristianismo estaban en especial sintonía con las condiciones de la reforma neoliberal tanto en Estados Unidos como en el Sur global. La ética protestante estaba de nuevo en marcha, insistía Berger, pero a diferencia del calvinismo moderno temprano que inspiraba los análisis de Weber, el resurgir evangélico no implicaba la progresiva secularización del

¹¹⁰ Steve Bruce, «The Curious Case of Unnecessary Recantation: Berger and Secularization», en Linda Woodhead, Paul Heelas y David Martin, *Peter Berger and the Study of Religion*, Londres, Routledge, 2001, pp. 87-100; Miller, *The Age of Evangelicalism...*, pp. 14-15.

¹¹¹ Peter L. Berger, «A Call for Authority in the Christian Community», *Christian Century*, octubre, núm. 27, 1971, pp. 1257-1263.

¹¹² *Ibidem*, p. 1261.

¹¹³ *Ibidem*, p. 1262.

¹¹⁴ Bernice Martin, «Interpretations of Latin American Protestantism: 1960s to the Present» en Calvin Smith, *Pentecostal Power: Expressions, Impact and Faith of Latin American Pentecostalism*, Leiden, Brill, 2011, pp. 116-117.

mundo; en su lugar, estaba destinado a desempeñar su papel en el escenario histórico como agente de la profunda desecularización.

Escrita en un momento en el que la derecha religiosa apenas comenzaba a surgir, la obra de Berger y Neuhaus, *To Empower People*, ejerció una influencia extraordinaria en el debate político social a lo largo de las décadas siguientes. Su intervención se puede interpretar como precedente de la elección caritativa, no solo por ser citado una y otra vez por parte de los arquitectos de la asistencia social basada en la fe, sino también por su concepto de «estructuras de mediación», que prefiguró con lucidez el modelo de delegación de la prestación de servicios y de autoritarismo moral externalizado que inspiró la reforma de la asistencia social de Clinton. Puede que el cristiano libertario Marvin Olasky llegara a un público popular más amplio, pero sus recetas para un sistema de caridad eclesiástica plenamente privado eran poco realistas y resultaron mucho menos premonitoras de la futura reforma de la asistencia social.¹¹⁵ Las propuestas de Berger y Neuhaus tenían la ventaja de resultar interesantes tanto a neoliberales como a socialconservadores. Stuart Butler, estrategia neoliberal y compañero de la Heritage Foundation, entendía las «estructuras de mediación» como una forma de lograr distintos objetivos pragmáticos: la delegación de la asistencia social a organizaciones religiosas sin ánimo de lucro reduciría el poder de las agencias de asistencia social federales supuestamente liberales; acabaría con la financiación a la izquierda al desviar los contratos gubernamentales de las asociaciones de izquierda sin ánimo de lucro a aquellas conservadoras; combinada con el uso de cupones, reconciliaría a la Iglesia con el libre mercado; y por último ayudaría a reducir el gasto en asistencia social al contratar a organizaciones religiosas que ya recibían parte de sus donativos de manos privadas y que pueden movilizar grandes ejércitos de trabajo no remunerado.¹¹⁶ El concepto de «estructuras de mediación» resultaba igualmente atractivo al conservadurismo religioso, del tipo de Gary Bauer y Paul Weyrich; estos entendían las estructuras de mediación como una forma de transformar, no de acabar con la financiación del Estado de bienestar, al tiempo que lo dotaban de valores morales tradicionales.¹¹⁷ Si ambas partes se veían obligadas a hacer concesiones al actual proceso de puesta en marcha de las políticas públicas, la idea de «estructuras de mediación» parecía ofrecer el compromiso perfecto.

¹¹⁵ Marvin Olasky, *The Tragedy of American Compassion*, Washington DC, Regnery, 1994.

¹¹⁶ Stuart M. Butler, *Privatizing Federal Spending: A Strategy to Eliminate the Deficit*, Nueva York, Universe Books, 1985, pp. 113-114; Stuart M. Butler y Anna Kondratas, *Out of the Poverty Trap: A Conservative Strategy for Welfare Reform*, Nueva York, Free Press, 1987, pp. 102-136.

¹¹⁷ Bauer, *The Family...*, p. 5; Institute for Cultural Conservatism, *Cultural Conservatism...*, pp. 81-84.

La larga marcha por las instituciones

Las organizaciones religiosas siguieron forjando su presencia en el sector de los servicios sociales a lo largo de los años ochenta, pero en un contexto muy distinto al de la década anterior. Mientras que las organizaciones religiosas sin ánimo de lucro habían estado activamente incluidas en un Estado de bienestar en constante crecimiento bajo la Guerra contra la Pobreza de Johnson, ahora tenían la esperanza de *sustituir* a los servicios públicos en proceso de erosión o hambrientos de financiación debido a las políticas neoliberales de la administración Reagan. Las políticas de austeridad relativas a la devolución de la asistencia social sustituían ahora al proyecto de Johnson de descentralización de la asistencia social como la razón de ser del crecimiento del sector no lucrativo. En la mayoría de casos, los recortes presupuestarios llevados a cabo por Reagan y sus sucesores no erradicaron los servicios para la población pobre en su conjunto, sino que se limitaron a transferirlos a terceros proveedores más baratos. En concreto, las asociaciones religiosas sin ánimo de lucro se consideraban las socias ideales del Estado por su capacidad de recurrir a trabajo voluntario no remunerado y por su acceso a fuentes alternativas de financiación.¹¹⁸ Por este motivo, las organizaciones religiosas crecieron mucho a raíz del desmantelamiento selectivo del Estado de bienestar, quedando plenamente integradas en el tejido de los contratos gubernamentales de servicio social en un momento en el que las antiguas instituciones de asistencia social pública estaban siendo desmontadas.

El movimiento de desinstitucionalización benefició a las organizaciones religiosas sin ánimo de lucro de forma muy directa. Cuando en los años sesenta el activismo por la salud pública de la izquierda apeló a la desinstitucionalización de las personas con enfermedades mentales y discapacitadas, en su mayor parte no tuvo en cuenta el problema de construir y de mantener servicios alternativos a largo plazo. Se asumía que los pacientes con enfermedades mentales terminarían en la «comunidad», pero pocos habían pensado realmente en detalle las complejidades de cuidar de personas enfermas una vez que abandonan el entorno institucional de los asilos. En su lugar, las asociaciones benéficas conservadoras de confesión religiosa fueron de las primeras en responder a las necesidades evidentes y urgentes de quienes quedaban liberados de las instituciones estatales. Cuando en 1975 los tribunales ordenaron al estado de Nueva York cerrar el desacreditado colegio estatal de Willowbrook, un hogar para niños con

¹¹⁸ Gran parte de la mano de obra no profesional que gestiona estas instituciones la prestan internamente antiguos huéspedes cuya reinserción apenas los prepara para nada más, o «voluntarios» designados por algún tribunal que cumplen órdenes de servicio comunitario en organizaciones religiosas.

discapacidad intelectual, no se supo qué hacer con los antiguos pacientes que no tenían familiares con los que pudieran regresar y que tampoco podían hacerse cargo de sí mismos. Tras contactar en vano con las agencias de acogida protestantes ya establecidas, el estado terminó por delegar la creación de hogares grupales en las organizaciones benéficas católicas y judías ortodoxas que entendían que el cuidado de personas discapacitadas era una consecuencia lógica de sus políticas contra el aborto.¹¹⁹ Sin más opciones a la vista, el estado estaba preparado para pasar por alto la naturaleza «totalmente sectaria» de estos hogares. La experiencia se replicó así por todo el país. A este respecto, el historiador Peter Dobkin Hall apunta: «Nueva York fue pionera en la creación de atención y tratamiento de base comunitaria para las personas dependientes y discapacitadas. Su sistema de hogares grupales sin ánimo de lucro, muchos de ellos basados en la fe, apoyados por una combinación variable de financiación federal, estatal y local, en muchos casos combinada con fuentes tradicionales de ingresos privados (becas de financiación y donativos particulares y empresariales) se volvería un paradigma para la reorganización de los servicios sociales en todo el país».¹²⁰ Lo que parecía la desinstitucionalización del asilo disciplinario, desde otro punto de vista podía entenderse como la *reinstitucionalización de la religión*, un proceso en el que las organizaciones benéficas religiosas recuperaban su papel principal en la gestión de la pobreza, pero en esta ocasión plenamente integradas en las redes contractuales y en los cálculos presupuestarios del Estado.

Durante ese mismo periodo, las organizaciones religiosas sin ánimo de lucro respondieron a las crecientes cifras de personas sin hogar ampliando o retomando sus funciones tradicionales como la gestión de albergues y comedores sociales. Durante el primer año de su gobierno, cuando Estados Unidos se adentraba en la peor recesión desde la Gran Depresión, Reagan convenció al Congreso de congelar el gasto social para la población pobre. La Ley de Reconciliación Presupuestaria General de 1981 anuló los aumentos presupuestarios de Medicaid, el subsidio por desempleo y la asistencia habitacional, con significativos recortes a los cupones de alimentos y a los servicios de nutrición infantil. Los recortes presupuestarios, aplicados en un momento en el que los niveles de desempleo en las ciudades industriales, antes tan prósperas, alcanzaban cifras de dos dígitos, sumados a la desinstitucionalización que había dejado sin hogar a muchas personas con enfermedad mental, generaron un visible flujo de más personas sin hogar.

¹¹⁹ Sheila M. Rothman y David J. Rothman, *The Willowbrook Wars: Bringing the Mentally Disabled into the Community*, Nueva York, Harper & Row, 1984, pp. 159-171, 191-195; Peter Dobkin Hall, «Historical Perspectives on Religion, Government and Social Welfare in America», en Andrew Walsh, *Can Charitable Choice Work?*, Hartford (CT), Trinity College Center for the Study of Religion in Public Life, 2001, pp. 100-106.

¹²⁰ Hall, «Historical Perspectives on Religion...», p. 103.

Las organizaciones benéficas tradicionales, incluidas muchas organizaciones religiosas, fueron algunas de las primeras en responder a la crisis, a menudo a instancias de las autoridades locales que trabajaban con subvenciones fijas y muy reducidas del gobierno federal. En consecuencia, y en el margen de unos pocos años, los albergues para personas sin hogar, los bancos de alimentos y los comedores sociales basados en la fe proliferaron por todo el país.¹²¹ Las antiguas misiones evangélicas de rescate que habían existido en casi todos los centros urbanos desde finales del siglo XIX se vieron desbordadas por la demanda, mientras que a su alrededor surgían nuevas misiones. Las organizaciones benéficas ya establecidas como Salvation Army o Catholic Charities multiplicaron sus contratos de albergues de emergencia con las autoridades estatales y municipales. Las iglesias, conventos y sinagogas pusieron sus bancos y sótanos a disposición de las personas sin hogar como refugio para pasar la noche durante el invierno.

Cuando el gobierno federal por fin pasó a la acción, después de muchos años de prevaricación, asignó a las organizaciones benéficas religiosas un papel activo en la administración y prestación de servicios. En 1983, el Congreso autorizó que la Federal Emergency Management Agency [FEMA, Agencia Federal de Gestión de Emergencias] administrara un programa de emergencia de alimentación y asilo. La ley creaba al mismo tiempo una Junta Nacional compuesta por seis agencias benéficas, incluidas United Way of America, la Cruz Roja estadounidense, Salvation Army, Catholic Charities USA, el Council of Jewish Federations [Consejo de Federaciones Judías] y el National Council of Churches [Consejo Nacional de Iglesias], a las que se encomendó la tarea de distribuir fondos a los proveedores de servicios locales.¹²² Cuando el programa se volvió a autorizar en virtud de la ley de asistencia a personas sin hogar de McKinney de 1987, Reagan reiteró su «intención de que las organizaciones benéficas, incluidas las religiosas, siguieran desempeñando un papel fundamental en la prestación de servicios que se contemplaban en esta legislación».¹²³ La institucionalización gradual de este sistema de respuesta de emergencia tuvo el efecto simultáneo, aunque fue menos percibido, de consolidar el papel de las organizaciones benéficas religiosas en la prestación de servicios sociales.

Colaboraciones de este estilo se replicaron a nivel estatal y municipal. En la ciudad de Nueva York, el alcalde Ed Koch apeló a las organizaciones benéficas religiosas a complementar el sobrecargado sistema de albergues

¹²¹ Janet Poppendieck, *Sweet Charity? Emergency Food and the End of Entitlement*, Nueva York, Penguin Books, 1998, pp. 81-106; Teresa Gowan, *Hobos, Hustlers, and Backsliders: Homeless in San Francisco*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2010, pp. 47-48.

¹²² Poppendieck, *Sweet Charity...*, p. 103.

¹²³ Ronald Reagan, «Statement on Signing the Stewart B. McKinney Homeless Assistance Act», 22 de julio de 1987. Disponible on line en <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=34591> (consultado por última vez el 1 de mayo de 2015).

de la ciudad a principios de los años ochenta. El resultado fue Partnership for the Homeless [Asociación por las Personas sin Hogar], una organización paraguas que pasó de incluir tres organizaciones benéficas religiosas en el momento de su creación en 1982, a incluir a 120 instituciones en 2001, con una capacidad registrada de más de mil camas, la mayoría situadas en los sótanos de iglesias y sinagogas.¹²⁴ La llamada de Koch a las organizaciones benéficas religiosas fue una respuesta calculada a las intervenciones del poderoso movimiento de reforma urbana que defendía soluciones a largo plazo para la pobreza urbana que no dependieran de la beneficencia y que recientemente había logrado notables victorias en los tribunales. En 1979, Robert Hayes, un abogado que más tarde fundaría Coalition for the Homeless [Coalición por las Personas sin Hogar], presentó una demanda contra la administración Koch citando las insuficiencias de su sistema de albergues para personas sin hogar. En su sentencia al respecto, *Callahan contra Carey* (1981), la Corte Suprema de Justicia Estatal concluyó que el derecho a un «refugio apropiado» estaba inscrito en la Constitución del estado de Nueva York y obligó a Koch a proporcionar 750 camas más a personas sin hogar.¹²⁵ A este caso le siguieron infinitas sentencias judiciales para mejorar el sistema de albergues. En lugar de entrar en los presupuestos municipales para ampliar el sistema vigente de albergues o de invertir en vivienda pública, Koch recurrió a las organizaciones benéficas religiosas, una respuesta que se repetiría por todo el país.¹²⁶

Las encuestas nacionales realizadas para el Urban Institute en 1995 y 1999 revelaron que las organizaciones benéficas religiosas gestionaban la mayoría de comedores sociales y más de un tercio de los albergues para personas sin hogar, aunque algunas voces critican que estas cifras subestiman la relevancia de la contribución religiosa.¹²⁷ Estas organizaciones benéficas

¹²⁴ Robert S. Ogilvie, *Voluntarism, Community Life, and the American Ethic*, Bloomington, Indiana University Press, 2004, p. 2.

¹²⁵ Jonathon M. Soffer, *Ed Koch and the Rebuilding of New York City*, Nueva York, Columbia University Press, 2013, p. 281.

¹²⁶ Ogilvie, *Voluntarism, Community Life, and the American Ethic...*

¹²⁷ Laudan Y. Aron y Patrick T. Sharkey, *The 1996 National Survey of Homeless Assistance Providers and Clients: A Comparison of Faith-Based and Secular Non-Profit Programs*, Washington DC, Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation, US Department of Health and Human Services, 2002. Disponible on line en <http://aspe.hhs.gov/hsp/homelessness/nshapc02/index.htm> (consultado por última vez el 1 de mayo de 2015). Según Aron y Sharkey, el 60 % de los comedores sociales y las despensas son gestionadas por organizaciones religiosas sin ánimo de lucro, así como el 25 % de los albergues para personas sin hogar, con notables diferencias según la región. Janet Poppendieck cita una cifra del 70 % para las organizaciones benéficas religiosas que participan en la gestión de comedores sociales, aunque añade que la cifra está probablemente subestimada en tanto excluye las actividades de influencia religiosa que no están afiliadas a una iglesia en particular. Poppendieck, *Sweet Charity...*, p. 188. Un informe de seguimiento sobre los refugios para personas sin hogar, publicado por el Urban Institute en 1999, reveló que el número de refugios religiosos para personas sin hogar había aumentado del 25 % en 1996 al 34 %

recibían distintos tipos de ayudas locales, estatales y federales, según su relación doctrinal e histórica con el Estado. Las grandes asociaciones benéficas religiosas como Salvation Army, Catholic Charities USA y Lutheran Social Services han aceptado ayudas federales desde los años sesenta al menos y siguen estando entre las mayores contratistas del Estado, a pesar de que sus fuentes privadas de financiación suelen igualar o superar lo que reciben del gobierno.¹²⁸ Muchas otras organizaciones benéficas religiosas reciben distintos tipos de ayudas del gobierno, incluidas ayudas económicas directas o —en el caso de la mayoría de comedores sociales— excedentes de productos básicos donados por el Departamento de Agricultura.¹²⁹ Las misiones evangélicas de rescate siguen siendo las organizaciones benéficas religiosas más independientes, y en su mayoría se oponen a recibir ayudas gubernamentales, excepto en la forma de exenciones fiscales.¹³⁰ La presencia de organizaciones basadas en la fe varía en función de la historia de la asistencia social urbana y regional. Una ciudad como Nueva York, que tiene el mayor sistema de albergues municipales del país, sigue dependiendo en gran medida de las miles de camas de emergencia que ofrecen las organizaciones benéficas religiosas. En el Sur y el Medio Oeste, y en muchas ciudades medianas y pequeñas por todo el país, las organizaciones basadas en la fe suelen ser las únicas proveedoras de albergues de emergencia.¹³¹ Incluso en una ciudad como Nueva York, los albergues basados en la fe son mayoritarios en el servicio a ciertos grupos de clientes como los jóvenes.¹³²

en 1999. Véase Martha R. Burt, Laudan Y. Aron, Toby Douglas, Jesse Valente, Edgar Lee y Britta Iwen, *Homelessness: Programs and the People They Serve. Summary Report. Findings of the National Survey of Homeless Assistance Providers and Clients*, Washington DC, The Urban Institute, 1999, p. 60.

¹²⁸ Por ejemplo, en 1993 Salvation Army obtuvo casi la mitad de su presupuesto de 68 millones de dólares de contratos gubernamentales, pero también recibió más donaciones privadas que cualquier otra organización benéfica de Estados Unidos. Rebecca Anne Allahyari, *Visions of Charity: Volunteer Workers and Moral Community*, Berkeley, University of California Press, 2000, p. 216.

¹²⁹ Poppendieck, *Sweet Charity...*, pp. 102, 121.

¹³⁰ Hackworth, *Faith Based...*, pp. 88-113.

¹³¹ Julie Adkins, «Bricks without Straw: Faith-Based Responses to Homelessness in the Hostile City», en Julie Adkins, Laurie Occhipinti y Tara Hefferan, *Not by Faith Alone: Social Services, Social Justice, and Faith-Based Organizations in the United States*, Lanham (MD), Lexington Books, 2012, pp. 91-106; Mary L. Mapes, *A Public Charity: Religion and Social Welfare in Indianapolis, 1929-2002*, Bloomington, Indiana University Press, 2004; Mary Cooper, «The Role of Religious and Nonprofit Organizations in Combating Homelessness», en R. D. Bingham, Roy E. Green y Sammis B. White, *The Homeless in Contemporary Society*, Newbury Park (CA), Sage, 1987; Michael Robertson, «Piety and Poverty: The Religious Response to the Homeless in Albuquerque, New Mexico», en Anna Lou Dehavenon, *There's No Place Like Home: Anthropological Perspectives on Housing and Homelessness in the United States*, Westport (CT), Bergin and Garvey, 1996, pp. 105-119.

¹³² Kristina Gibson informa de que, en 2006, 270 de las 300 camas de albergue de emergencia para jóvenes sin hogar en la ciudad de Nueva York las proporcionaba la tristemente célebre Covenant House, una organización benéfica religiosa conocida por su hostilidad hacia los clientes queer y transgénero. Kristina E. Gibson, *Street Kids: Homeless Youth*,

El resurgir del factor religioso en el bienestar social choca con el análisis del poder que hemos heredado de teóricos de lo social tan destacados como Michel Foucault o Erving Goffman. Una profesional que investigaba el estado de los albergues religiosos para personas sin hogar después de la desinstitucionalización identificó un nuevo tipo de institución tan totalizadora como el infame asilo de Goffman. Este gran albergue urbano para personas sin hogar, gestionado por una orden religiosa católica, «le recordaba a la autora al contexto masivo y regimentado de las instituciones que erróneamente creía extinguidas después de la aclamada "desinstitucionalización" de Estados Unidos».¹³³ Aunque el albergue no entraba en la instrucción religiosa directa, sus invitados semipermanentes estaban sujetos a un estricto régimen de toques de queda así como a pequeñas sanciones, que servían para recordarles constantemente la naturaleza condicional de la caridad que se les ofrecía. Otro estudio habla de la «hiperinstitucionalización» de los residentes a largo plazo de una misión evangélica de rescate, cuya exposición a la continua exhortación religiosa y el limitado contacto con el mundo exterior los prepara para poco más que el trabajo misionero en el albergue una vez que pueden salir. Las misiones evangélicas practicaban formas abiertas de proselitismo, manteniendo a sus clientes en un pacto tácito en el que el alimento y el cobijo se intercambian por evangelismo.¹³⁴ Los servicios evangélicos se repiten antes del desayuno, la comida y la cena como condición para recibir cuidados, y los clientes que no expresan una atención devota, o al menos pasiva, pueden ser bruscamente expulsados de las instalaciones. En algún punto intermedio entre estos dos extremos se sitúa Salvation Army, una institución evangélica respaldada por el Estado que también es una de las contratistas religiosas más antiguas y más grandes del país. Inspirada en la ética evangélica del siglo XIX, rehúye del Evangelio de la riqueza en favor del ahorro y el trabajo duro, Salvation Army forma a sus usuarios sin hogar en un régimen militarista de autodisciplina que implícitamente atribuye el fracaso social al pecado individual.¹³⁵

Sin desplazar por completo las disciplinas normativas de las ciencias sociales y humanas, los servicios sociales basados en la fe despliegan un vocabulario normativo muy distinto. Estos servicios no pretenden normalizar o rehabilitar tanto como redimir. Hablan el lenguaje del pecado en

Outreach, and Policing New York's Streets, Nueva York, New York University Press, 2011, pp. 68-69, citando a James Bolas, *State of the City's Homeless Youth Report, 2006*. *New York City Association of Homeless and Street-Involved Youth Organizations*, Nueva York, Empire State Coalition of Youth and Family Services, 2006.

¹³³ Sharon M. Keigher, «Rediscovering the Asylum», *Journal of Sociology and Social Welfare*, vol. 177, núm. 1, 1992, p. 177.

¹³⁴ Mark Mulder, «Faith-Based Homeless Shelters and "Hyper-Institutionalization": A Case Study», *Michigan Sociological Review*, núm. 18, otoño 2004, pp. 143-149; Poppendieck, *Sweet Charity...*, pp. 188-193; Gowan, *Hobos, Hustlers, and Backsliders...*, pp. 47-48.

¹³⁵ Allahyari, *Visions of Charity...*

lugar de aquel del desvío o de la perversión. Si indudablemente se apoyan en las prácticas de la confesión, es en el sentido abiertamente cristiano del testimonio religioso. A la teoría más experta en las taxonomías históricas de Foucault le cuesta reconocer que el poder contemporáneo puede hablar el idioma de la ley moral, el pecado y la redención tanto o más que el de la normatividad. La tendencia historiográfica de Foucault suele reducir la influencia de la religión en la formación del Estado social moderno, tratándolo como un residuo de formas modernas de poder o, en su último trabajo, un horizonte de práctica ética de algún modo impermeable a las maquinaciones coercitivas del Estado o del capital.¹³⁶ Aun así, las prácticas cristianas de redención nunca fueron ajenas a la tradición de las leyes de pobres de alivio de la escasez, que en sus planteamientos en el siglo XIX se inspiraban tanto en el liberalismo económico clásico como en la teoría evangélica.¹³⁷ La asistencia social basada en la fe traduce la ética neoliberal de la responsabilidad familiar al idioma conservador religioso del pecado individual, la inmortalidad y la redención. Si no tienes un hogar, será porque has fallado ante Dios. Si estás en la cárcel o desempleado es porque te has negado a asumir tus responsabilidades personales como padre o porque has elegido el camino del pecado. Una vez que se han aceptado estas premisas, la reinserción se puede lograr solo mediante un proceso de regeneración espiritual o renacimiento, y esto a su vez exige una formación intensiva en la práctica de la vida familiar responsable. Puede decirse que la asistencia social basada en la fe practica una forma de poder que no es tanto normalizadora o rehabilitadora como íntimamente legislativa y *ortopédica*, exigiendo a sus clientes que expresen su deferencia ante la ley moral incluso aunque no sientan un verdadero cambio espiritual. Como apuntaron Tocqueville y Beaumont sobre las prisiones religiosas estadounidenses de principios del siglo XIX, la formación evangélica no siempre

¹³⁶ Tanto en *Vigilar y castigar* como en *Historia de la sexualidad, vol. 1*, Foucault rastrea el proceso por el que las concepciones clásicas del delito sexual y político fueron desplazadas por las concepciones modernas, normativas y disciplinarias de la desviación a partir de finales del siglo XVIII. En ambos casos, se entiende que una comprensión legalista, soberana y religiosa del delito deja paso a un conjunto de conocimientos y prácticas seculares, normalizadores y estadísticos. Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, trad. por Alan Sheridan, Nueva York, Vintage Books, 1995 [1975] [ed. cast.: *Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión*, Madrid, Siglo XXI, 1979] y Michel Foucault, *The History of Sexuality Volume 1: An Introduction*, trad. Robert Hurley, Nueva York, Pantheon Books, 1978 [1976] [ed. cast.: *Historia de la sexualidad, vol. 1. La voluntad de saber*, Madrid, Siglo XXI, 1977]. En las últimas conferencias de Foucault en el *Collège de France*, encontramos un intento de repensar las primeras prácticas cristianas de ascetismo en términos de un horizonte ético positivo que reside más allá de la normatividad. Véase Michel Foucault, *On the Government of the Living: Lectures at the Collège de France, 1979-1980*, trad. Graham Burchell, Nueva York, Picador, 2016 [ed. cast.: *El gobierno de los vivos*, Madrid, Akal, 2016].

¹³⁷ Malthus, que tuvo una enorme influencia en la Nueva Ley de Pobres de 1834, combinó los principios liberales clásicos con una forma de teología económica moldeada por el cristianismo evangélico. A este respecto, véase Michael C. Waterman, *Revolution, Economics and Religion: Christian Political Economy, 1798-1833*, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.

lograba instalar un auténtico respeto por la ley moral entre los reclusos, sin embargo, casi siempre lograba la adquisición de hábitos morales; y este efecto ortopédico fue casi tan útil como el ejercicio de poder.¹³⁸

Aunque inicialmente se concibió como una respuesta temporal a la pobreza, el sistema de albergues y alimentos de emergencia se ha ido estabilizando progresivamente y ahora funciona como una suerte de para-Estado de bienestar complementando la permanente escasez presupuestaria de las autoridades locales. Los programas federales que se implementaron como medidas de emergencia a principios de los años ochenta fueron de nuevo autorizados multitud de veces posteriormente, transformándose en soluciones permanentes del panorama de los servicios sociales. En cierto sentido y de forma crucial, apunta la socióloga Janet Poppendieck, los ambiciosos programas antipobreza planteados por la Gran Sociedad han sido sustituidos por un sistema de asistencia doméstica humanitaria diseñado para gestionar, en lugar de erradicar, los problemas de sinhogarismo y hambre. «La noción de emergencia permanente sin duda no es atractiva», escribe, «pero una mirada en detalle a los estilos de vida disponibles para muchas personas pobres revela lo que podría definirse como un estado de emergencia crónica: atención médica por el servicio de emergencias porque no tienen seguro, una cama en el albergue de emergencia porque no tienen una residencia permanente, alimentación regular por parte del proveedor de comida de emergencia».¹³⁹ Esta lenta sedimentación de las estructuras de asistencia de emergencia ha reforzado sustancialmente el papel social de las organizaciones benéficas, que ahora se ven incluidas con regularidad en los cálculos fiscales como colchón ante previsibles recortes presupuestarios. Las organizaciones benéficas religiosas que en su día eran periféricas a las estructuras de asistencia social del New Deal se han vuelto así elementos indispensables de los programas antipobreza federales y estatales. A lo que aquí asistimos no es a un regreso a la caridad privada como existía antes del New Deal, sino más bien a la puesta en marcha de una forma de beneficencia estructural: estructural en el sentido de que cuenta con la ayuda y plena complicidad del Estado y benéfica en el sentido de que mantiene el carácter discrecional, imprevisible y *ad hoc* de la filantropía privada.

La nueva libertad religiosa: los litigios cristianos de interés público

A medida que las organizaciones religiosas conservadoras incrementaban su presencia en el ámbito del bienestar social, la derecha cristiana adoptaba simultáneamente una nueva estrategia de litigios estratégicos en cuestiones

¹³⁸ «Tal vez, al salir de prisión no sea un hombre honesto; pero ha adquirido hábitos honestos». Beaumont y Tocqueville, *On the Penitentiary System in the United States...*, p. 58.

¹³⁹ Poppendieck, *Sweet Charity...*, p. 141.

relativas a las relaciones Iglesia-Estado con el propósito de ampliar las libertades institucionales. Los años noventa fueron testigo de una proliferación de despachos de abogados cristianos conservadores decididos a redefinir las relaciones Iglesia-Estado mediante el uso de los litigios de interés público. Estos despachos incluían el American Center for Law and Justice [Centro Estadounidense para el Derecho y la Justicia], fundado por Pat Robertson en 1990, el Center for Law and Religious Freedom [Centro de Derecho y Libertad Religiosa] de la Christian Legal Society, el Rutherford Institute, el Alliance Defense Fund [Fondo de Defensa de la Alianza], ahora rebautizado como Alliance Defending Freedom [Alianza para la Defensa de la Libertad], el Liberty Counsel [Consejo de la Libertad] y el Fondo Becket de afiliación católica.¹⁴⁰ Conjuntamente, estas organizaciones utilizaron los tribunales para forjar una nueva jurisprudencia de «libertad religiosa» capaz de desafiar con éxito la doctrina constitucional predominante en las relaciones Iglesia-Estado y de erosionar progresivamente la prohibición establecida contra la financiación pública de proveedores de asistencia social «totalmente sectarios». El giro hacia el litigio estratégico ha supuesto un cambio inesperado en la dirección de la derecha cristiana, que tradicionalmente había evitado la judicatura a favor del terreno electoral y legislativo y que durante años había denunciado la desproporcionada influencia de la izquierda en la Corte Suprema.

Cuando Jerry Falwell fundó Mayoría Moral en 1978, quiso trasladar la idea de que el evangelismo era un bloque electoral mayoritario cuyo poder había sido usurpado por un pequeño grupo de élites liberales escondidas en la burocracia federal y la Corte Suprema. El conservadurismo cristiano celebró la elección de Ronald Reagan como signo de una victoria inminente, con plena confianza en que sus representantes en el Congreso sacarían adelante una agenda legislativa integral para restaurar la religión en los colegios públicos y derrocar la sentencia *Roe contra Wade*. Durante este periodo, la derecha cristiana centró sus energías, casi exclusivamente, en las ramas legislativa y ejecutiva del gobierno, emprendiendo elaboradas campañas para movilizar a distintos bloques de votantes, así como a integrantes de grupos de presión del Congreso.¹⁴¹ El tono era triunfalista:

¹⁴⁰ Steven P. Brown, *Trumping Religion: The New Christian Right, the Free Speech Clause, and the Courts*, Tuscaloosa, University of Alabama Press, 2002; Hans J. Hacker, *The Culture of Conservative Christian Litigation*, Lanham (MD), Rowman & Littlefield, 2005; Rogers M. Smith, «An Almost-Christian Nation? Constitutional Consequences and the Rise of the Religious Right», en Steve Brint y Jean Reith Schroedel, *Evangelicals and Democracy in America Volume 1*, Nueva York, Russell Sage Foundation, 2009, pp. 329-356; Jay Michaelson, *Redefining Religious Liberty: The Covert Campaign against Civil Rights*, Somerville (MA), Political Research Associates, 2013.

¹⁴¹ Hacker, *The Culture of Conservative Christian Litigation...*, pp. 6-9. Véase también Elizabeth A. Castelli, «Persecution Complexes: Identity Politics and the "War on Christians"», *Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies*, vol. 18, núm. 3, 2007, pp. 152-180.

el cristianismo era la mayoría que rescataba a Estados Unidos de la ruina teológica y social en manos de la Corte Suprema. En sus primeros años, Mayoría Moral logró cierto éxito: no solo impulsó la enmienda Hyde para limitar la financiación pública del aborto a través de Medicaid, sino que también logró paralizar la acción federal ante la epidemia de sida durante gran parte de los años ochenta. Pero aquello estaba lejos de la contrarrevolución legislativa que el conservadurismo cristiano había soñado y las victorias se volvieron mucho más lentas a finales de la década.

En los años noventa, la derecha cristiana se vio obligada a adoptar un planteamiento más gradualista y menos triunfalista ante el cambio político. La influencia de Falwell no tardó en verse eclipsada por nuevos grupos como Christian Coalition [Coalición Cristiana], creada como organización sin ánimo de lucro poco después del intento fallido de Pat Robertson a la presidencia en 1989. Las nuevas voces de la derecha cristiana se presentaban en términos muy distintos, como representantes de una minoría perseguida en lugar de como una mayoría que reclamaba su lugar legítimo en los asientos de poder.¹⁴² Adoptando conscientemente el lenguaje del movimiento por los derechos civiles, el director ejecutivo de Coalición Cristiana, Ralph Reed, vinculó la difícil situación del cristianismo de finales del siglo XX con la de la población afroamericana de mediados de siglo: el cristianismo sufría una discriminación sistemática en la vida pública, se le negaba la protección igualitaria de la ley y se había visto privado de libertades civiles como la libertad de expresión religiosa; su condición colectiva era comparable a la de los no nacidos, la minoría definitiva, a quienes se les ha arrebatado su derecho civil más fundamental, el derecho a la vida. Estos movimientos retóricos no solo lograron situar al cristianismo como víctima de una discriminación sistemática, sino que también sirvieron al objetivo estratégico de neutralizar la historia demasiado reciente del racismo entre el evangelismo blanco sureño. Bajo la dirección de Ralph Reed, Coalición Cristiana realizó un esfuerzo conjunto por llevar a la población afroamericana al ámbito del movimiento provida, al mismo tiempo que urgía al evangelismo blanco a reconocer y buscar la redención por su complicidad en la segregación racial del sur de Estados Unidos.¹⁴³ El esfuerzo de Reed por construir una coalición interconfesional e interracial en torno a los «derechos civiles» del cristianismo anunciaba una nueva era en las estrategias de la derecha religiosa. Desde entonces, el conservadurismo católico

¹⁴² David John Marley, «Riding in the Back of the Bus: The Christian Right's Adoption of Civil Rights Movement Rhetoric», en Renée Christine Romano y Leigh Raiford, *The Civil Rights Movement in American Memory*, Athens, University of Georgia Press, 2006, p. 348.

¹⁴³ Nancy D. Wadsworth, *Ambivalent Miracles: Evangelicals and the Politics of Racial Healing*, Charlottesville, University of Virginia Press, 2014, pp. 81-116; Ralph Reed, *Active Faith: How Christians Are Changing the Soul of American Politics*, Nueva York, Free Press, 1996, pp. 55-69.

y evangélico se propondría reducir sus diferencias raciales y doctrinales para lograr un bloque unido contra la inmoralidad sexual; y a medida que las diferencias raciales se fueron silenciando, el cristianismo blanco asumió el lenguaje de los derechos civiles como forma de promover la idea de que el cristianismo se había visto sometido a una condición universal de minorización estratégicos.

Sin embargo, más allá de estas estrategias de coaliciones y relaciones públicas, la adopción de la retórica de los derechos civiles señalaba un profundo cambio en los métodos legales y políticos. Bajo la influencia de Coalición Cristiana, la derecha religiosa abandonó su atención exclusiva a las instituciones mayoritarias y en su lugar se dirigió a los litigios estratégicos de casos de prueba en los tribunales, un método que durante años había sido preferido por el liberalismo y la izquierda progresista. En su libro publicado en 1993, *The Turning Tide* [La marea cambiante], Pat Robertson apeló al cristianismo a tomar las armas que había utilizado el movimiento por los derechos civiles en los años sesenta: la desobediencia civil y los litigios de interés público.¹⁴⁴ El conservadurismo cristiano había denunciado desde hacía tiempo la influencia de grupos como la ACLU y NAACP en la Corte Suprema, responsabilizándolos de la creciente secularización de la vida estadounidense en los años sesenta. Sin abandonar estas quejas, la nueva derecha cristiana adoptó desde entonces la casi totalidad de los métodos legales de la izquierda, recurriendo al *amicus curiae* y a los precedentes judiciales para asfaltar el camino de la futura reforma legislativa. Como apunta Stephen Brown, desde los años noventa, los despachos litigantes asociados con la derecha cristiana «siguen un patrón en sus esfuerzos dentro y fuera de los tribunales en el que las estrategias de la ACLU, la NAACP y el American Jewish Congress [Congreso de Judíos Estadounidense] fueron pioneras», logrando redefinir con éxito los precedentes establecidos por la izquierda liberal para establecer una jurisprudencia «secular» de libertad religiosa.¹⁴⁵ En su mayor parte, estos despachos han tratado de ampliar la asimilación judicial de la religión sin hacer referencia directa a las cláusulas religiosas de la Primera Enmienda, a través de la redefinición de los argumentos en torno a la discriminación y la libertad de expresión que en su día monopolizaron sus enemigos. En un extraño giro de la historia, la cláusula de Protección Igualitaria de la Decimocuarta Enmienda que en su día ayudó a acabar con la segregación (para disgusto de los fundamentalistas del sur) se invocaba ahora para defender el derecho a la libertad religiosa,

¹⁴⁴ Pat Robertson, *The Turning Tide: The Fall of Liberalism and the Return of Common Sense*, Dallas, Word Publishing, 1993, p. 125. Citado en Marley, «Riding in the Back of the Bus», p. 351. En 1990, Robertson fundó su propio bufete de litigios cristianos, el American Center for Law and Justice [Centro Estadounidense para la Ley y la Justicia], con el objetivo expreso de hacer frente al Sindicato por las Libertades Civiles Estadounidenses en cuestiones relativas a la relación Iglesia-Estado y la libertad religiosa.

¹⁴⁵ Brown, *Trumping Religion...*, p. 132.

entendida como el derecho de los cristianos a no ser discriminados. Algo aún más raro fue que se recurriera al derecho a la libertad de expresión, establecido por los casos históricos de ACLU sobre obscenidad en los años sesenta para defender el derecho de expresión pública de la religión.¹⁴⁶ Los litigantes cristianos no solo habían tomado las herramientas de sus enemigos, sino que también las habían vuelto contra ellos, haciendo que la libertad religiosa anulara la jurisprudencia de las leyes de libertad sexual y de no discriminación religiosa para anular las protecciones basadas en el género de la época anterior.

Los despachos jurídicos cristianos ya no se conformaban con mantener posiciones defensivas. En las últimas décadas, sus victorias en los tribunales erosionaron la doctrina separacionista de la libertad religiosa que prevaleció en el periodo de posguerra. En concreto, los litigantes cristianos pelearon y obtuvieron mayores poderes de exención para proveedores de servicios religiosos apoyándose en el precedente de la legislación de la cláusula de conciencia, concedida en primer lugar a los hospitales católicos tras la sentencia de *Roe contra Wade* de 1973.¹⁴⁷ En un contexto diferente, tanto instituciones religiosas como creyentes particulares han sido autorizados a recurrir a «cláusulas de conciencia» que les permitían oponerse a realizar abortos, esterilizaciones, administrar anticonceptivos o negar servicio a homosexuales. Los despachos cristianos establecieron precedentes eximiendo a organizaciones religiosas de las leyes de discriminación en el empleo, las leyes laborales, las leyes de sanidad en el espacio de trabajo y las leyes de discriminación sexual. Estas exenciones estaban claramente orientadas hacia cuestiones de libertad sexual; como apunta Martha Minow, las organizaciones religiosas no están enfáticamente exentas de las leyes de derechos civiles que prohíben la discriminación racial, pero han recibido notables exenciones con respecto de la discriminación basada en la orientación de género y sexual.¹⁴⁸ Redefinida por la nueva derecha cristiana, la «libertad religiosa» ha llegado a admitir expresiones públicas de «conciencia moral», permitiendo que proveedores basados en la fe de servicios financiados por el gobierno quedaran exentos de las leyes federales cuando estas ofendían su sensibilidad religiosa. Las zonas de exclusión moral establecidas por estas exenciones estaban destinadas a volverse aún más perversas y claustrofóbicas a medida que los proveedores religiosos conservadores adquirían mayor protagonismo en la prestación de servicios sociales.

¹⁴⁶ *Ibidem*, pp. 139-140.

¹⁴⁷ Karina Eileraas, «"Freedom of Conscience" Legislation»; Martha S. Swartz, «"Conscience Clauses" or "Unconscionable Clauses": Personal Beliefs Versus Professional Responsibilities», *Yale Journal of Health Policy, Law, and Ethics*, vol. 6, núm. 2, 2006, pp. 269-350; Claire Marshall, «The Spread of Conscience Clause Legislation», *Human Rights Magazine*, vol. 39, núm. 2, 2013.

¹⁴⁸ Minow, «Should Religious Groups be Exempt from Civil Rights Laws?...», p. 782.

El caso de los servicios de aborto es particularmente alarmante. En las últimas décadas, hospitales de todo tipo han experimentado un gran número de fusiones debido a las reformas en la gestión de la atención sanitaria. Los hospitales católicos han soportado estos cambios mucho mejor que otros hospitales religiosos o sin ánimo de lucro y durante los últimos años han firmado un número sin precedentes de fusiones. Según un estudio publicado en 2013, los hospitales de patrocinio católico aportaban una de cada nueve camas de todo el país en el año 2011, con ratios mucho mayores en ciertos estados, incluidos Washington, Wisconsin e Iowa.¹⁴⁹ Desde que se publicó este informe las principales redes de salud católica han desarrollado una política de expansión agresiva y ahora es posible que sean responsables del mayor porcentaje de camas hospitalarias del país. Todos los hospitales católicos de Estados Unidos, incluidos la mayoría de hospitales que se han fusionado con ellos, se rigen por las Directivas Éticas y Religiosas emitidas por la US Conference of Catholic Bishops [Conferencia Estadounidense de Obispos Católicos], una serie de pautas que prohíben el aborto voluntario, la esterilización y los anticonceptivos. Estas pautas se usan a veces para prohibir los anticonceptivos de emergencia a mujeres víctimas de violación y pueden limitar los cuidados disponibles para mujeres que hayan sufrido abortos naturales o embarazos ectópicos. Dados los importantes niveles de financiación pública que se asignan a estos hospitales en forma de reembolsos de Medicaid y Medicare, dichas prácticas deben entenderse como tácitamente respaldadas por el gobierno.

Un desarrollo igualmente alarmante es el creciente número de albergues para personas sin hogar gestionados por organizaciones religiosas conservadoras. Los albergues basados en la fe que reciben financiación federal no están obligados a no discriminar a usuarios de género no binario, y aun así estas mismas organizaciones han obtenido mayores derechos de libertad de expresión religiosa en los últimos años. Esta situación es especialmente preocupante en la medida en que usuarios gays, bisexuales o de género no conforme suponen un gran porcentaje de los jóvenes sin hogar.¹⁵⁰ Los efectos prohibitivos y exclusivos de la libertad religiosa se vuelven aquí especialmente evidentes. Mientras que el Estado contrata un número cada vez mayor de servicios sociales esenciales con proveedores

¹⁴⁹ Lois Uttley y Sheila Reynertson, *Miscarriage of Medicine: The Growth of Catholic Hospitals and the Threat to Reproductive Health Care*, Nueva York, ACLU and MergerWatch, 2013.

¹⁵⁰ Gibson, *Street Kids...*, pp. 68-69; Nicholas Ray, *Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Youth: An Epidemic of Homelessness*, Washington DC, National Gay and Lesbian Task Force Policy Institute and National Coalition for the Homeless, 2006; David Wagner, «Issue Brief on Gay and Transgender Youth Homelessness», *Center for American Progress*, 10 de agosto de 2010, disponible on line en <https://www.americanprogress.org/issues/lgbt/report/2010/08/10/8224/nowhere-to-go> (consultado por última vez el 1 de mayo de 2015). Wagner apunta que la financiación federal «se está otorgando a los albergues sin ningún requisito para que no discriminen a personas homosexuales ni jóvenes transgénero sin hogar».

«totalmente sectarios», estos mismos grupos están empoderados no solo para estigmatizar y normalizar ciertas prácticas y expresiones de sexualidad del espacio social, sino también para prohibirlas.

Elección caritativa: del litigio a la legislación

A principios de los años noventa, el lento y creciente trabajo de los litigios de los casos de prueba, en los que durante una década pelearon sin descanso una serie de despachos de abogados, había creado un entorno capaz de producir espectaculares intervenciones legislativas. Después de litigar con éxito en una serie de casos de prueba históricos a favor de la asimilación, el Christian Legal Society's Center for Law and Religious Freedom [CLRF, Centro de Libertad Jurídica y Religiosa de la Sociedad Jurídica Cristiana] impulsó una coalición de cerca de 60 organizaciones de todo el espectro político (incluidos grupos tan diversos como la ACLU y la National Association of Evangelicals [Asociación Nacional de Evangélicos]) para apoyar una legislación integralmente nueva sobre la libertad religiosa.¹⁵¹ La Religious Freedom and Restoration Act o RFRA [ley de libertad y restauración religiosa] recibió apoyo unánime del Congreso y fue aprobada por el presidente Clinton en 1993. En respuesta a un caso de prueba reciente que había limitado la cláusula de libre ejercicio, la RFRA reinstauraba una estricta interpretación de la libertad religiosa y definía un derecho estatutario a las exenciones religiosas de todas las leyes federales y estatales, en virtud de la prueba de interés imperioso.¹⁵² Según sus defensores, la ley estaba diseñada simplemente para restaurar el *statu quo* legal. En la práctica, la Corte Suprema la ha interpretado como una total revolución en la jurisprudencia sobre la Primera Enmienda, una exención religiosa del derecho federal que nunca se había otorgado en el pasado.¹⁵³ Tras el muy sonado caso de Hobby Lobby, la mayoría de opiniones se centraron en el hecho de que la RFRA había legitimado la ampliación a las empresas de las exenciones religiosas de iglesias y organizaciones sin ánimo de lucro

¹⁵¹ Smith, «An Almost-Christian Nation...», p. 343.

¹⁵² El caso en cuestión fue el de *La División de Empleo contra Smith* (1990), en el que la Corte Suprema confirmó una ley federal que prohibía el uso del peyote en ceremonias religiosas. En este caso, el tribunal decidió que el gobierno tenía derecho a limitar ciertas prácticas religiosas manteniendo las leyes aplicables a la población en general.

¹⁵³ Micah Schwartzman, Richard Schragger y Nelson Tebbe, «The New Law of Religion: Hobby Lobby Rewrites Religious-Freedom Law in Ways that Ignore Everything That Came Before», *Slate*, julio, 2014, disponible on line en http://www.slate.com/articles/news_and_politics/jurisprudence/2014/07/after_hobby_lobby_there_is_only_rfra_and_that_s_all_you_need.html (consultado por última vez el 1 de mayo de 2015). La Corte Suprema anuló la RFRA en la sentencia de *La ciudad de Boerne contra Flores* en 1997. Sin embargo, sigue siendo de aplicación para el gobierno federal y muchos estados han aprobado la RFRA que se aplica a niveles de gobierno estatal y local.

basadas en la fe, pero resulta igualmente interesante el hecho de que aquí la religión autorizase una exención sobre reglas que afectaban a seguros de salud patrocinados por el gobierno (en este caso, la ley de atención sanitaria a bajo precio). La reciente interpretación de la RFRA señala un emergente consenso en torno a que la ley moral prevalece sobre la ley federal cuando se trata de la prestación de servicios, no solo directamente relacionados con el bienestar social, sino también con el seguro social.¹⁵⁴ Por lo tanto la RFRA se puede entender como un paso legislativo crítico hacia la implementación de la asistencia social basada en la fe, incluso si muchos de sus defensores no lo percibieron como tal en aquel momento.

No es casual que la misma organización que encabezó la RFRA, el Christian Legal Society's Center for Law and Religious Freedom [CLRF, Centro de Libertad Jurídica y Religiosa de la Sociedad Jurídica Cristiana], también desempeñara un papel fundamental en la legislación de la elección caritativa, ganando por primera vez una serie de casos de prueba en la Corte Suprema. Durante los años ochenta, los abogados asociados al CLRF lograron convencer a una Corte Suprema cada vez más conservadora de abandonar la doctrina dominante de estricta separación Iglesia-Estado a favor de una filosofía de la «neutralidad positiva» que exigía protección igualitaria a las organizaciones seculares y religiosas.¹⁵⁵ Esta tendencia se aceleró bajo la presidencia de Rehnquist en la Corte Suprema (1986-2005), que en la sentencia *Bowen contra Kendrick* de 1988 aprobó legislación federal que permitía a las organizaciones religiosas proporcionar servicios de embarazo financiados por el gobierno y educación sexual en virtud de los términos de la ley de vida familiar adolescente de 1981. El resultado de *Bowen contra Kendrick* fue especialmente motivador para quienes defendían la asistencia social basada en la fe, en tanto fue uno de los primeros casos en llevar la cuestión constitucional de la separación Iglesia-Estado fuera del contexto de la educación al sector de los servicios sociales en su conjunto.¹⁵⁶ Lo que resultó aún más importante era que el caso señaló una nueva voluntad de respaldar la formación de la moralidad cristiana dentro de los programas federales de asistencia social. En *Bowen contra Kendrick* el «tribunal permite a las organizaciones religiosas proporcionar servicios financiados por el gobierno en un ámbito que implica cuestiones de relevancia religiosa fundamental. Eran programas que, presumiblemente, podían desdibujar fácilmente las líneas entre las dimensiones religiosa,

¹⁵⁴ Tomo la expresión de Katherine Franke, citada en Nina Martin, «To Say "My Religious Law Trumps Your Secular Law" Is a Radical Idea», *Salon*, 19 de marzo de 2014, disponible on line en http://www.salon.com/2014/03/19/to_say_my_religious_law_trumps_your_secular_law_is_a_radical_idea_partner/ (consultado por última vez el 1 de julio de 2015).

¹⁵⁵ Daly, *God and the Welfare State*, pp. 28-29, 68; Black, Koopman y Ryden, *Of Little Faith*, pp. 43-44.

¹⁵⁶ Black, Koopman y Ryden, *Of Little Faith...*, pp. 44-45, 225-226.

moral y secular del embarazo adolescente y la actividad sexual».¹⁵⁷ Tras *Bowen contra Kendrick*, parecía que la Corte Suprema estaba dispuesta a aprobar la financiación de organizaciones «totalmente sectarias» para la prestación de servicios de asistencia social.

Apoyándose en el precedente de *Bowen contra Kendrick* y animado por el éxito de la legislación RFRA, el CLRF tomó la valiente decisión de proponer una nueva serie de disposiciones religiosas como parte de la reforma de la asistencia social de Clinton. El profesor de derecho de la Universidad de Missouri Carl Esbeck, asociado durante años al Centro de Derecho y Libertad Religiosa y patrocinado por el entonces senador John Ashcroft elaboró la legislación de la elección caritativa.¹⁵⁸ La disposición transformaba profundamente el papel de la religión dentro de la asistencia pública, otorgando a las organizaciones basadas en la fe libertades institucionales mucho mayores de las que habían recibido bajo los términos de la Guerra contra la Pobreza de Johnson. De hecho, la elección caritativa respondía punto por punto a la lista de demandas aclamadas por el conservadurismo religioso desde los años setenta. Obligaba a los contratistas del gobierno a cesar en su supuesta discriminación contra organizaciones religiosas y a incluir proveedores basados en la fe en todas las licitaciones, mientras que al mismo tiempo eximía a las propias organizaciones religiosas de las leyes contra la discriminación en sus contrataciones. Anuló las regulaciones administrativas establecidas por la Oficina de Oportunidades Económicas de Johnson permitiendo que las iglesias mostraran iconos, escrituras y otros signos de filiación religiosa y suprimió la distinción entre las instituciones «totalmente sectarias» y las seculares.

Lo más importante quizás fue que la legislación de la elección caritativa formaba parte de un proyecto de reforma integral que en sí mismo se centraba en la promoción de los valores morales en la familia, llevando por primera vez en muchos años la política de asistencia social federal a una estrecha conversación con las organizaciones religiosas más conservadoras. En los años setenta, el conservadurismo religioso se había sentido ultrajado cuando la Corte Suprema y el gobierno federal anularon los poderes policiales tradicionales de los estados para regular la moralidad de quienes recibían asistencia social; con la aprobación de la PRWORA, el gobierno federal se atribuía a sí mismo estos poderes de supervisión e instruía ahora a los estados a hacer de la educación moral un objetivo central de sus programas de asistencia social.¹⁵⁹ Los programas de promoción del matrimonio,

¹⁵⁷ *Ibíd.*, p. 45.

¹⁵⁸ *Ibíd.*, p. 47; Smith, «An Almost-Christian Nation...», p. 348.

¹⁵⁹ Curiosamente, el conservadurismo religioso cuenta con un amplio historial de intentos de federalizar los poderes de supervisión estatales que controlan la moralidad. Véase Gaines M. Foster, *Moral Reconstruction: Christian Lobbyists and the Federal Legislation of Morality, 1865-1920*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2002.

la educación en la castidad y la paternidad responsable y basada en la fe son ahora elementos integrales de las políticas federales de asistencia social. Como apuntaba el opinador conservador Leslie Lenkowsky sobre la puesta en marcha de la elección caritativa de Bush: «Lo distintivo del plan del presidente no es su confianza en los representantes para prestar los servicios sociales del gobierno federal, esto, como han observado no pocos conservadores preocupados, fue una innovación clave de la Gran Sociedad. Lo que es distintivo, en cambio, es su tono descaradamente moral. Ese tono es un retorno a una época en la que las organizaciones benéficas de la nación se preocupaban no solo por las circunstancias materiales de las personas a las que ayudaban, sino también por su carácter y su comportamiento».¹⁶⁰ Con la aprobación de la elección caritativa, los proveedores de servicios religiosos iban a desempeñar un papel fundamental en la traducción de los imperativos coercitivos de la reforma de la asistencia social en un programa integral de reeducación moral y subjetiva. Sin embargo, aquello no suponía tanto un retroceso a una época anterior de caridad privada como una aplicación selectiva de la ley moral por parte del Estado.

¹⁶⁰ Leslie Lenkowsky, «Funding the Faithful: Why Bush Is Right», *Commentary*, vol. 111, núm. 6, 2001, p. 24.

CONCLUSIÓN

EN UN DESTACADO ENSAYO publicado en 1960, *Why I Am Not a Conservative* [Por qué no soy conservador], Friedrich Hayek ofrece una sólida reflexión sobre la compleja relación histórica entre el liberalismo clásico y la moderna tradición conservadora. En este se opone a la acusación de «conservadurismo» que se suele equiparar con la herencia moderna del liberalismo económico clásico.¹ Si conservadurismo y neoliberalismo van de la mano en su aversión al socialismo, reconoce, sus orientaciones son aun así radicalmente divergentes, dado que solo el conservadurismo se define exclusivamente por su deseo de detener el cambio. Al contrario, el liberalismo económico «nunca ha sido una doctrina que mirara hacia el pasado».² Por su naturaleza, se orienta hacia lo nuevo: «Nunca ha habido un momento en el que los ideales liberales se desarrollaran por completo y en el que el liberalismo no mirara hacia adelante para una ulterior mejora de las instituciones».³ Esta orientación hacia el futuro se puede describir como especulativa en el sentido de que apela a la distribución previa de las probabilidades históricas y por lo tanto no pretende hacer ninguna predicción: si «uno de los rasgos fundamentales de la actitud conservadora es el miedo al cambio, una tímida desconfianza hacia lo nuevo [...] la postura liberal se basa en el coraje y en la preparación para dejar que el cambio suceda incluso si no podemos predecir a dónde nos llevará».⁴

Hayek insiste en que la orientación hacia lo nuevo está tan integrada que el neoliberalismo está preparado para confiar el futuro a «fuerzas sociales no controladas», incluso cuando estas fuerzas emanen de una dirección que no le guste. «Sin preferir lo nuevo simplemente por ser nuevo, el liberalismo es consciente de que forma parte de la esencia del logro humano, producir algo nuevo; y está preparado para incorporar nuevos

¹ Friedrich von Hayek, «Why I Am Not a Conservative», en *The Constitution of Liberty*, Londres, Routledge, 1960, pp. 343-355 [ed. cast. *Los fundamentos de la libertad*, trad. por José Vicente Torrente, Madrid, Unión Editorial, 2006].

² *Ibidem*, p. 345.

³ *Ibidem*.

⁴ *Ibidem*.

conocimientos, con independencia de si le gustan sus efectos inmediatos o no». ⁵ Resulta útil describir la filosofía política de Hayek del neoliberalismo como preventiva, en el sentido de que su primer instinto es adaptarse al futuro, ya sea en forma de nuevo conocimiento o de nuevas realidades sociales. Aun así Hayek también es claro al respecto de que la voluntad de adaptarse del neoliberalismo existe junto a una deferencia inquebrantable hacia la selección histórica: las convenciones sociales de la religión, la familia y la riqueza heredada que surgen por casualidad, pero que después son validadas por el peso de las normas sociales. ⁶ Si el neoliberalismo está preparado para incorporar las nuevas «fuerzas sociales no controladas», lo hará solo para canalizarlas en las formas de riqueza privada y herencia familiar que se reinventan constantemente. ⁷

Así, Hayek combina una orientación especulativa hacia el futuro con un inquebrantable respeto por las tradiciones que periódicamente se validan o, según sus palabras, se seleccionan en el proceso de evolución social espontánea. De hecho, toda su filosofía se podría leer como una expresión no crítica del doble movimiento capitalista: situado entre la orientación autorrevolucionaria de la temporalidad basada en el crédito y el imperativo de conservar la tradición mediante la distribución privada de la riqueza.

Esta orientación preventiva se asocia con menor frecuencia con el neoconservadurismo. Pero Irving Kristol fue muy claro a este respecto. Si hay algo que distingue el neoconservadurismo del paleoconservadurismo o del tradicionalismo estadounidense es su voluntad de adaptarse y responder al cambio: «Lo que es "neo" (nuevo) sobre este conservadurismo es que definitivamente carece de nostalgia. También reivindica el futuro, y es esta reivindicación, más que cualquier otra cosa, la que lleva a sus críticos de izquierda a lo que parece un frenesí de denuncia». ⁸ Si el paleoconservadurismo y el tradicionalismo se mantuvieron firmes en su oposición al New Deal y sus consecuencias, el neoconservadurismo está dispuesto

⁵ *Ibidem*, pp. 346 y 349.

⁶ *Ibidem*, p. 345. Sobre la necesidad de la tradición y la moralidad de forma más general, véase F. A. Hayek, *The Fatal Conceit: The Errors of Socialism*, Chicago, University of Chicago Press, 1988 [ed. cast. *La fatal arrogancia; los errores del socialismo*, trad. por Luis Reig Albiol, Madrid, Unión Editorial, 2010]. Es en esta obra donde Hayek esboza más claramente su teoría evolutiva de la tradición moral.

⁷ Al igual que los liberales de las escuelas de Chicago y Virginia, la posición de Hayek sobre la riqueza heredada cambió drásticamente con el tiempo. Hayek expresa un apoyo limitado a los impuestos sobre la herencia en *Individualism and Economic Order*, publicado en 1949. Aunque ya en 1960 no consideraba incompatibles el libre mercado y la riqueza no procedente del trabajo. Véase Friedrich Hayek, *Individualism and Economic Order*, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1949, p. 118, y *The Constitution of Liberty...*, pp. 78-80. En este último texto, Hayek presenta la familia y la riqueza heredada como una convención social históricamente válida.

⁸ Irving Kristol, *Reflections of a Neoconservative: Looking Back, Looking Ahead*, Nueva York, Basic Books, 1983, p. xii.

a confrontar y hasta cierto punto incorporar los cambios que traían los movimientos democráticos de la era de posguerra. Como hijos de la misma ampliación democrática (la mayoría de ellos hijos e hijas de migrantes judíos), el neoconservadurismo se mantuvo comprometido con el Estado de bienestar del New Deal, el movimiento por los derechos civiles e incluso algunas de las intervenciones llevadas a cabo con la Gran Sociedad de Johnson. Igual que opusieron resistencia a los movimientos de liberación de la Nueva Izquierda y sus derivados, también quisieron neutralizar sus demandas durante la reorientación (y no el rechazo) del Estado de bienestar del New Deal.

Así, en contraste con el conservadurismo tradicionalista, tanto el neoliberalismo como el neoconservadurismo se pueden definir por su orientación preventiva hacia el futuro político. Unidos en su confrontación con los movimientos de liberación de los años sesenta, el neoliberalismo y el neoconservadurismo intentaron contener la promesa antinormativa y redistributiva de estos movimientos capturándolos dentro del horizonte de la reinención de la tradición. Echando la vista atrás, intentaron revivir la antigua tradición de las leyes de pobres de la responsabilidad familiar privada; mirando hacia el futuro, intentaron reinventar esta tradición con el legado administrativo del propio Estado de bienestar, democratizando su alcance mediante la ampliación selectiva de los mercados de crédito al consumo. De una forma un tanto paradójica, la responsabilidad de la familia privada se convertiría en el principio rector de la política social, ampliando sus fronteras para incluir a sujetos no normativos que en su día estuvieron radicalmente excluidos del salario familiar fordista.

El neoconservador Nathan Glazer escribió que la «creación y construcción de nuevas tradiciones, o de nuevas versiones de tradiciones antiguas, debe tomarse más en serio, como una exigencia de la propia política social».⁹ La tradición que tenía en mente era una que ya había experimentado muchas reinenciones a lo largo de la historia estadounidense. En distintos momentos, la tradición colonial de las leyes de pobres de responsabilidad familiar se adaptó para lidiar con la emancipación de los esclavos, las crecientes tasas de divorcio, la disolución de la familia entre la población blanca pobre que vivía en las ciudades y las madres no casadas que solicitaban asistencia social. El neoconservadurismo y sus afines intentaron recuperar la tradición de las leyes de pobres adaptándola una vez más a lo que entendían como los excesos del Estado de bienestar fordista más tardío. A diferencia del paleoconservadurismo y del tradicionalismo conservador, estaba dispuesto a trabajar con el legado institucional del Estado

⁹ Nathan Glazer, *The Limits of Social Policy*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1988, p. 8.

de bienestar de posguerra para lograr este objetivo, intentando no tanto destruir el Estado de bienestar como tal, como redefinirlo como impulsor de los valores familiares tradicionales. «En la política social y económica», apuntaba Irving Kristol, el neoconservadurismo «no siente ninguna hostilidad persistente hacia el Estado de bienestar, ni tampoco lo acepta con resignación como un mal necesario. En su lugar, no pretende dismantelar el Estado de bienestar en nombre de la economía del libre mercado, sino redefinirlo para ligarlo a las predisposiciones conservadoras de la población».¹⁰

El neoliberalismo, por su parte, se puede definir como «neo» en el sencillo sentido de que surge después del Estado de bienestar del siglo XX y que por lo tanto se enfrenta a la tarea de o bien superar sus estructuras o bien adaptarlas a nuevos fines. Mientras que perfiles académicos concretos han apelado repetidas veces a la reducción extrema del Estado de bienestar o a la privatización de los programas de seguridad social más generosos (la Seguridad Social, por ejemplo), en la práctica sus reformas políticas han seguido la tendencia a redefinir, más que a dismantelar, el legado institucional del Estado de bienestar del siglo XX. Lo que aquí resulta más sorprendente es la forma en que los partidarios neoliberales de la reforma social han adoptado las innovaciones institucionales de la Gran Sociedad de Johnson, que pretendía descentralizar, devolver y externalizar la prestación de servicios sociales y al mismo tiempo reforzar la autoridad federal sobre la dirección general de los programas de asistencia social. La mayor diferencia es que mientras la descentralización de la era de Johnson estaba diseñada para imponer reglas más progresistas a los estados con la voluntad de borrar los últimos vestigios de la tradición de las leyes de pobres de la práctica estatal de la asistencia social, la legislación neoliberal de la asistencia social ha hecho exactamente lo contrario. De hecho, por primera vez en la historia estadounidense ha federalizado la tradición de las leyes de pobres, imponiéndosela a los estados como único modelo viable para la prestación de asistencia social. Al mismo tiempo, la puesta en marcha de estas leyes en el plano micropolítico se ha transmitido hacia abajo y se ha delegado en una multiplicidad de actores privados, no lucrativos y basados en la fe que ahora asumen la tarea de hacer cumplir las responsabilidades personales y familiares al servicio del Estado. El neoliberalismo y el neoconservadurismo son capaces de resolver sus diferencias al apelar a las llamadas estructuras de mediación, organizaciones no estatales que desarrollan el trabajo de la privatización *de facto* mientras también hacen cumplir las virtudes morales prescritas por la legislación federal sobre el bienestar.

¹⁰ Kristol, *Reflections of a Neoconservative...*, p. vii.

Sin embargo, a diferencia del neoconservadurismo, la academia neoliberal reconoce que si hubiera que recuperar de forma significativa la tradición de las leyes de pobres, tendría que ser distinta e incorporar la antinormatividad de los movimientos de liberación del fordismo tardío. El imperativo de la responsabilidad de la familia privada no podía recuperarse con éxito si no se reconciliaba de algún modo con la revolución cultural y social de los años sesenta. Milton Friedman y Gary Becker no tardaron en comprender intuitivamente que un proyecto como ese podría lograrse mediante una enorme expansión del crédito al consumo, aunque los detalles de esta solución política se ejecutaran en la práctica solo en el tumultuoso caldero económico de las décadas siguientes. Después del shock Volcker de 1979, los gobiernos demócratas y republicanos, de Reagan a Clinton, descubrieron que las persistentes reivindicaciones de la revolución social del fordismo tardío se podían neutralizar con eficacia con la democratización del crédito al consumo y estimulando la inflación de los activos. Si la inflación salarial y de la asistencia social de los años setenta parecían desconectar a la población de la familia privada y promover la proliferación de estilos de vida no normativos, la revalorización de los activos, con sus lazos con la vivienda en propiedad, se entendió como un medio para disciplinar estas demandas dentro de la lógica de la herencia. Y si la revolución de la familia del fordismo tardío no se podía revertir, se domesticaría, y se haría rentable, traduciendo las opciones no normativas de estilo de vida al idioma del crédito democratizado. La curiosa lógica temporal del crédito, su capacidad de materializar el futuro en el presente, se aprovechó aquí como medio para recuperar el deseo no normativo en la forma inherentemente regresiva de la deuda familiar privada.

Agradecimientos

Estoy muy agradecida a las muchas personas que han hecho posible este libro. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Michel Feher y a Wendy Brown por comisionar con tanta valentía un libro que aún era solo una idea y por confiar en que de algún modo acabaría por producirse. Su fe en este proyecto, junto con el apoyo editorial experto de Meighan Gale, han hecho que sea una experiencia inusualmente agradable. El libro no habría sido posible sin las continuas conversaciones que han tenido lugar en el contexto del grupo de Estudios Sociales Financieros de la Universidad de Sídney. Varios de los capítulos que aquí se desarrollan se presentaron en primer lugar en estos talleres y se beneficiaron de la retroalimentación constructiva y cercana de muchos perfiles académicos que en ellos participaron. Estoy especialmente agradecida a Dick Bryan y a Martijn Konings por su crítica incisiva y generosos comentarios. También debo mucho a

quienes participaron en el segundo taller *Roads from Mont-Pèlerin*, que tuvo lugar en el *Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung* en marzo de 2016. Sus presentaciones individuales y su crítica a mi trabajo supusieron un impulso muy necesario para la última fase de revisiones y lograron un manuscrito mucho más sólido. En concreto, estoy en deuda con Philip Mirowski y Dieter Plehwe, por su generosa invitación y con Eddie Nik-Khah, por su valiosísima ayuda con los datos de historia económica. Lucette Cysique fue testigo de cómo este libro tomaba forma desde el principio hasta el final, siempre con las preguntas más reveladoras en el momento preciso. De distintas formas Catherine Waldby, Miguel Vatter, Nadine Ehlers, Anne Pollock, Melissa McAdams y Ari Larissa Heinrich han sido interlocutores importantes a lo largo de la escritura de esta obra. Me gustaría dar las gracias a Rachel Rowe y Regrette Etcetera por sus reflexiones sobre la inflación inmobiliaria, la asistencia social y la familia en Sídney y por darme fuerzas en las fases finales del proceso de escritura. Por último, quiero dar las gracias al alumnado de mis clases de Sociología Económica y Teoría Social Contemporánea, quienes abordaron muchas de las ideas que aquí se presentan y han sido una fuente constante de inspiración intelectual.

